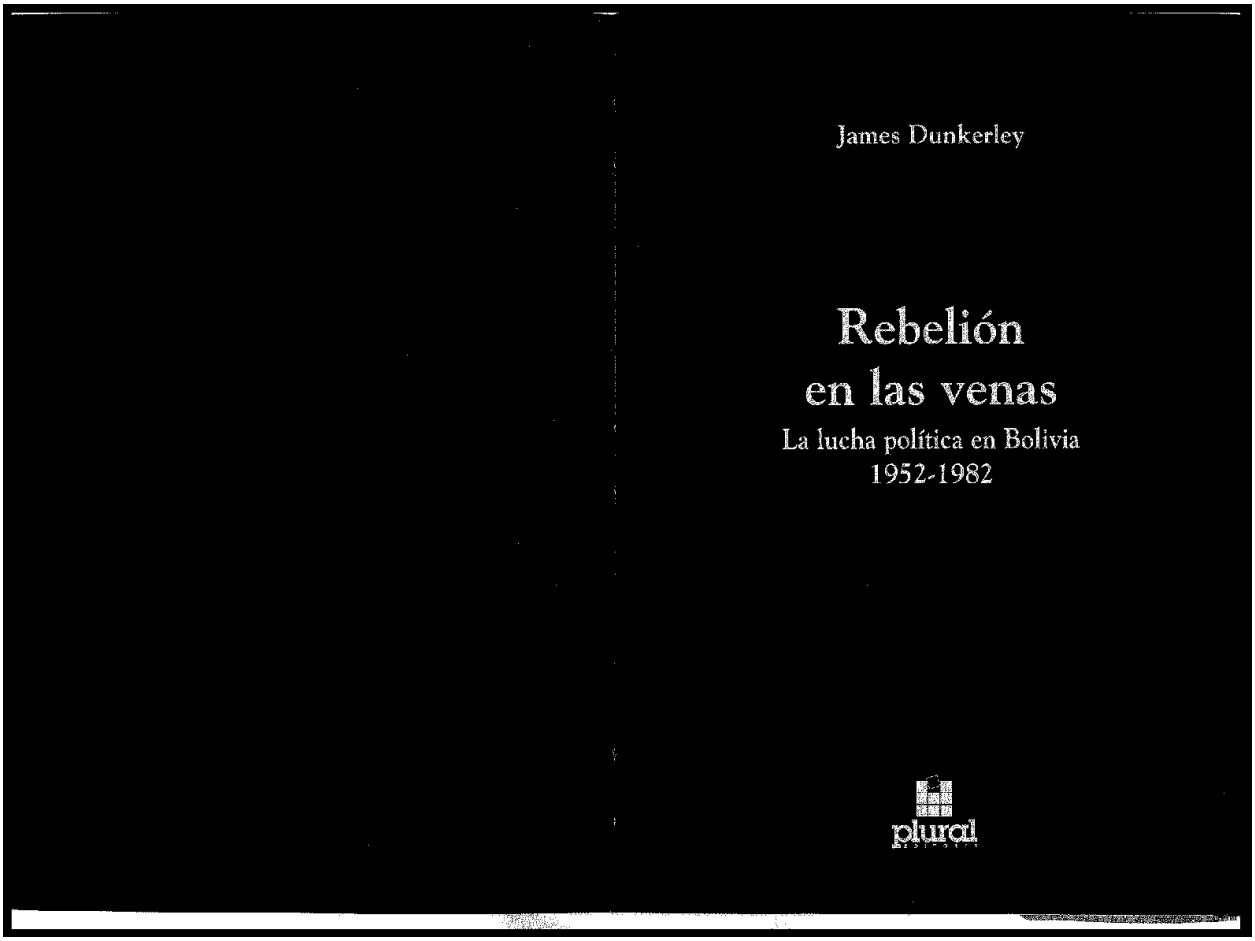


5/3579 - 208 cop.

(Sem. Santos)

1/208

Título en inglés: *Rebellion in the Veins*.
Traducción al castellano: Rose Marie Vargas Jastram.
Fotografía portada: Lucio Flores

Primera edición en castellano: Editorial Quipus, 1987.
Segunda edición: agosto de 2003.

© James Dunkerley, 1987.
© Plural editores, 2003.
ISBN: 99905-75-19-3
D.L.: 4-1-1083-03

Producción:
Plural editores
Rosendo Gutiérrez 595 esq. Ecuador
Teléfono 2411018 / Casilla 5097 / La Paz, Bolivia
Email: plural@entelnet.bo

Impreso en Bolivia

Para Ana María

Ñoqayllapi Tukukuchum kinsantin
mándoj rigornin: wajcha kaywan,
sapan kaywan, Rúnaj wasinpi kausaywan.

Índice

Mapa de Bolivia 9

Mapa de la campaña guerrillera del Che Guevara 10

Siglas de instituciones 11

Prólogo a la primera edición boliviana 13

Prólogo 17

1. Antecedentes de la revuelta 23
   El gobierno de la Rosca 28
   Desintegración en el campo 42
   Surgimiento de una política de masas 50

2. La Revolución Nacional 65
   Establecimiento de un nuevo orden 66
   Nacionalización de las minas 82
   Reforma agraria 95
   Consolidación del partido 105

3. La revolución en repliegue (1956-1964) 113
   Estabilización y resistencia 115
   Represión y desarrollo bajo Paz 134

4. La larga noche 155
Orden restaurado 157
Ñancahuazú 170

5. Crisis de hegemonía (1969-1971) 197
Ovando cambia el curso 200
Torres y la Asamblea Popular 220

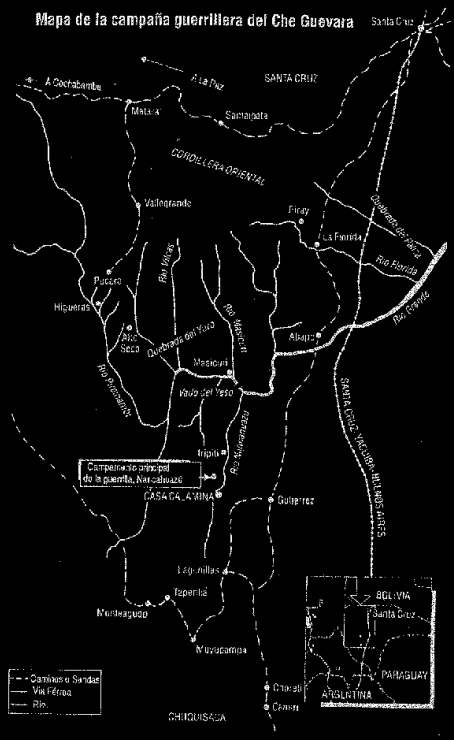
6. El banzerato (1971-1978) 247
Orden, paz, trabajo 249
Administrando el auge 267
La "Nueva Bolivia" en repliegue 279

7. En pos de la democracia (1978-1980) 299
Negociando una salida 301
Elecciones versus golpe 323

8. La dictadura de la delincuencia 345
Gobierno de reconstrucción nacional 349
Coca y cocaína 364
Atrincheramiento versus retirada 384

Epílogo 405

Mapa de la campaña guerrillera del Che Guevara



Siglas de instituciones

ADN	Acción Democrática Nacionalista
ALIN	Alianza de la Izquierda Nacional
ANMM	Asociación Nacional de Mineros Medianos
APDHB	Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
APIN	Alianza Popular de Integración Nacional
BAMIN	Banco Minero
CBF	Corporación Boliviana de Fomento
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CEPB	Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
CNSS	Caja Nacional de Seguridad Social
CNTCB	Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia
COB	Central Obrera Boliviana
COBUR	Central Obrera Boliviana de Unidad Revolucionaria
COD	Central Obrera Departamental
COFADENA	Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional
COMIBOL	Corporación Minera de Bolivia
CONADE	Comité Nacional de Defensa de la Democracia
CONAL	Comisión Nacional de Asesoramiento y Legislación
CONRUB	Comisión Nacional de Reestructuración de la Universidad Boliviana
CSUTCB	Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
CUB	Confederación Universitaria Boliviana
DEA	Drugs Enforcement Administration
DIE	Dirección de Inteligencia del Estado
DIC	Departamento de Investigación Criminal
DIN	Departamento de Investigación Nacional
DOP	Departamento de Orden Político
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EMG	Estado Mayor General
ENAF	Empresa Nacional de Fundiciones
FAB	Fuerza Aérea Boliviana
FARO	Frente de Acción Revolucionaria Obrera
FDRNA	Frente Democrático Revolucionario Nueva Alternativa
FPN	Frente Popular Nacionalista
FRA	Frente Revolucionario Antiimperialista
FRI	Frente Revolucionario de Izquierda
FSB	Falange Socialista Boliviana
FSTMB	Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
FUL	Federación Universitaria Local
FURMOD	Fuerzas Unidas para la Represión y el Mantenimiento del Orden y el Desarrollo
GAC	Grupo Aéreo de Caza
GRO	Grupo Revolucionario Octubre
ISAL	Iglesia y Sociedad en América Latina
LAB	Lloyd Aéreo Boliviano
MACA	Ministerio de Asuntos Campesinos

MIR	Movimiento de la Izquierda Revolucionaria
MITKA	Movimiento Indio Tupac Katari
MLN	Movimiento de Liberación Nacional
MNR	Movimiento Nacionalista Revolucionario
MPLN	Movimiento Popular de Liberación Nacional
MRTK	Movimiento Revolucionario Tupac Katari
OST	Organización Socialista de los Trabajadores
PCB	Partido Comunista de Bolivia
PCML	Partido Comunista Marxista Leninista
PDC	Partido Demócrata Cristiano
PDCR	Partido Demócrata Cristiano Revolucionario
PIB	Partido Indio de Bolivia
PIR	Partido de la Izquierda Revolucionaria
POR	Partido Obrero Revolucionario
PRA	Partido Revolucionario Auténtico
PRIN	Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional
PRTB	Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia
PS	Partido Socialista
PSC	Partido Socialista Cristiano
PS-1	Partido Socialista Uno
RADEPA	Razón de Patria
SES	Servicio Especial de Seguridad
TAM	Transporte Aéreo Militar
UCAPO	Unión de Campesinos Pobres
UDP	Unidad Democrática y Popular
UMBO	Unión de Mujeres de Bolivia
UMSA	Universidad Mayor de San Andrés
UMSS	Universidad Mayor de San Simón
UNP	Unión Nacionalista del Pueblo
VO	Vanguardia Obrera
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Prólogo a la primera edición boliviana

Como el lector podrá observar sin gran esfuerzo, el presente libro fue escrito con un propósito muy limitado en la mente: brindar al público de habla inglesa una relación narrativa de la historia política de Bolivia a partir de 1952. Evidentemente, lo menos que precisan los bolivianos es que un británico les recuerde que el nivel de conocimiento de su patria que se tiene fuera de las fronteras es muy bajo; es por esto que espero que si algunos pasajes de este texto resultan innecesarios, simplistas o irrisorios, se me conceda alguna indulgencia, sabiendo a qué público estuvo originalmente dirigido. También debe considerarse que el trabajo fue escrito en 1982-83 y publicado en Londres un año después. Este hecho ciertamente influyó en la extensión del período cubierto, en el enfoque y en el tono de las últimas páginas. Legítimamente puede objetarse, cuatro años más tarde, que la significación política de octubre de 1982 –cuando la UDP asumió el poder– ha quedado considerablemente disminuida y que los sucesos posteriores, desde el colapso del mercado internacional del estaño hasta la victoria de Víctor Paz (y Hugo Banzer), han iniciado un ciclo completamente nuevo en la vida del país. La crisis económica y el triunfo político de la derecha son, en efecto, fenómenos de trascendental importancia, aunque este último quizás no haya sido tan imprevisible ni tan sin precedentes como lo sugieren algunos profetas del destino o los ansiosos heraldos del nuevo orden; muchas de sus causas van a encontrarse en el sencillo relato que sigue. Aunque es grande la tentación de "correr con la historia", no he hecho nada por actualizar esta crónica, dado que ésta sería una tarea de por sí interminable que rara vez podría lograrse satisfactoriamente a través de su-

cesivas revisiones o enmiendas. Los acontecimientos de los últimos años han sido verdaderamente graves y en el caso de la economía bien puede presagiarse una nueva era, pero bajo ninguna circunstancia ellos pueden anular la validez del período que les precedió.

Queda todavía por verse si el MNR y la ADN serían capaces de instituir una nueva era –la de un orden conservador a partir del modelo colombiano–, si el proletariado minero será definitivamente desmantelado y sus tradiciones diluidas en una combinación de "agropoder" y economía de subsistencia, si las fuerzas del radicalismo serán sometidas a una derrota prolongada e histórica y si el no menos persistente impulso de los militares de tomar el poder político se subordinará realmente a los dictados de la Constitución por muchos años o si esto perdurará apenas por un lapso de meses. Actualmente circulan argumentos a favor de todos estos cambios en gran parte del espectro político. Empero, aunque las circunstancias vigentes determinen que tales afirmaciones no deben tratarse con ligereza, la memoria histórica requiere asimismo que se las someta a un escrutinio muy minucioso y serio.

Desde la semejanza entre la actual política del gobierno frente a Comibol y el Plan Triangular dirigido por Paz y Bedregal a principios de la década de 1960 hasta el temor de muchos campesinos de que la reforma tributaria resulte en una expropiación de tierras similar a la realizada por Melgarejo, tanto los ecos de la historia reciente como los de la más distante tienen demasiada resonancia como para ignorarlos. Obviamente, no puede haber imagen más desesperanzadora de lo relevante que resulta el espectro del pasado como aquella que presenta el espectáculo de Luis García Meza haciendo escarnio, en nombre de la justicia, de la institución que se supone pilar de los valores civilizados, mientras que varios de sus otrora colaboradores sustentan cargos ministeriales en una administración nominalmente empeñada en la consolidación de la democracia. Este comentario no debe interpretarse como un mero vituperio, pues el pasado de quienes están en el gobierno afecta inexorablemente su disposición actual. En este caso, podría ayudarnos a comprender por qué el régimen constitucional se enfureció tanto ante la perspectiva de que sus ciudadanos, haciendo total uso de sus derechos, recurran a una consulta popular, la cual es eminentemente consistente con un proceso democrático y absolutamente coherente con una larga tradición que se remonta al cabildo abierto de vecinos y moradores.

En éste y muchos otros casos –incluyendo el que un partido que se declara "nacionalista" introduzca de manera abiertamente inconstitucional tropas de un poder extranjero al territorio nacional– parecería que las propias autoridades

hubiesen adoptado una visión excepcionalmente parcial del pasado y sus lecciones. Bien se podría comprobar que ésta es una actitud errada –no siempre es una creencia arraigada– pues, si bien con frecuencia se escucha decir que el "pueblo no tiene memoria", por el contrario, posee un agudo sentido de su experiencia, como podrá apreciarse en las páginas siguientes. Como ya lo han expresado muchos críticos, en esas páginas hay muy poca teoría explícita y no se trata de una interposición sociológica amplia del curso de la historia nacional en la época moderna. Esto no se debe a que yo no considere válida esta empresa, sino simplemente a que trabajar a un nivel de tal generalidad no fue mi objetivo y a que sostengo la creencia de la minoría respecto a que la teoría no necesariamente tiene que adoptar un discurso puramente abstracto. Lo que aquí se afirma puede leerse entre líneas y en el lenguaje coriáceo; ésto, ciertamente, es una cualidad anglosajona, pero no indelectiblemente equivalente a empirismo. En todo caso, tal enfoque está en consonancia con las modestas ambiciones de un texto que no sólo ha sido escrito en el entendimiento de que la comprensión de la vida política boliviana, a partir de 1952, precisa de una variedad de planteamientos analíticos, así como de renovadas discusiones y debates, sino también con la creencia de que los intelectuales extranjeros tienen la obligación moral de devolver los resultados de su trabajo a quienes corresponde, aun a riesgo de causar serios desengaños.

Londres, 6 de agosto de 1986

Prólogo

Bolivia es un país con renombre. No hace mucho lo fue por el Che Guevara, cuya muerte se atribuye muchas veces a la población boliviana en su conjunto. Más recientemente lo ha sido por la cocaína. Pero en general lo es por sus desórdenes políticos. Los lectores de la prensa seria deben recordar que también se trata de un país que ha sufrido un gran número de golpes de Estado militares. Sin embargo, Guevara era un intruso, un argentino que llegó de Cuba para pelear una revolución internacional. El hecho de que no hubiera entendido a Bolivia fue una de las importantes razones para determinar que muriera allí. En años recientes, la producción de cocaína, efectivamente, ha prosperado en el oriente del país; pero mientras que un gran número de campesinos agricultores participa en el cultivo de la hoja de coca, de la que se obtiene la droga, un pequeño número de traficantes de cocaína se ha convertido en una casta cosmopolita que en ningún sentido es representativa de la nación entera y sólo puede influir en el gobierno por un corto tiempo.

El problema de la inestabilidad política de Bolivia es más profundo. Aun dentro de América Latina se trata la política de este país con cierta indulgencia, como una cacofónica lucha provincial entre pomposos oficiales y trabajadores indígenas ariscos encerrados en cierta teleología indígena que niega al Estado andino incluso un mínimo de orden y ha privado a la nación de considerables oportunidades de progreso material. Detrás de tales imágenes se puede percibir rastros de racismo y de un determinismo geopolítico más bien rudo: a un país situado lejos de la costa marítima, en la desolada fortaleza de los Andes, y abrumadoramente poblado por indios no le corresponden gobiernos

estables y pacíficos. Quizás es por esta razón que alguien describió al Ecuador –que posee similar población pero más orden– como "Bolivia con valium". Los periódicos sacaron a relucir las matemáticas del desorden (de quinta mano e incorrectamente), pero no plantearon la cuestión de que si el desorden es tan prevaleciente, ¿no será éste el orden mismo? ¿Acaso no puede haber un sistema en el caos? ¿No debería entendérselo más como continuidad y menos como interrupción?

Tales preguntas no se formulan porque, de cara a los hechos, Bolivia no es un país muy importante. Aunque su deuda es elevada, también lo es la de cada uno de los Estados latinoamericanos, y los 3,8 mil millones de dólares que Bolivia debe a los bancos no llega ni a compararse con los 90 mil millones de la deuda del Brasil que amenaza con hundir el sistema financiero internacional en el caos. Bolivia no se ha ganado el reconocimiento internacional en virtud de proezas futbolísticas. Ganó el campeonato sudamericano por primera y única vez a principios de la década de 1960, lo cual provocó festejos de tal magnitud que hubo un lapso en el funcionamiento tanto de la sociedad civil como del Estado, pero incluso el hincha más ferviente admitiría, si se lo presiona un poco, que esto se debió en parte al hecho de que los equipos extranjeros tuvieron que jugar durante noventa minutos a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Los clubes de La Paz, Oruro y Potosí rara vez pierden en su cancha encuentros internacionales; de ahí que, alarmantemente pálido, Zico resumiera así la situación después de que Brasil perdió estrepitosamente en 1982: "Es suicida jugar fútbol en Bolivia". Tampoco el país tiene reclamos territoriales de destacar contra Estados metropolitanos: su principal disputa es con Chile, que en 1880 tomó posesión de las tierras costeras de Bolivia, cerrándole así todo acceso al mar y aparentemente también al resto del mundo.

No es necesaria ninguna teoría intrincada de conspiración que comprometa a menos mortales que no sean ciudadanos de la república para sostener el punto de vista de que la historia ha consentido la marginación de Bolivia. Tiahuanaku se creó entre el año 200 y 500 D.C. como el centro religioso más importante para un gran sector de la población andina que levantó la "civilización analfabeta" más avanzada en la historia del mundo. Su dominio se prolongó hasta el año 1000. Apenas parcialmente subyugada por el imperio inca, el área que ahora corresponde a Bolivia fue la fuente de incomparables riquezas para el imperio español por un período de 250 años. Potosí se transformó en la ciudad más grande y próspera de las Américas, el centro de una vasta empresa productiva donde no sólo estaba involucrada la "mita" sino también

sistemas de empleo sumamente sofisticados, trabajos complejos de ingeniería y relaciones industriales no menos cargadas o difíciles de manejar que aquellas de los centros contemporáneos del capitalismo monopolista. Cuando este sistema estaba al borde del colapso en 1800, la población de Bolivia era mayor que la de cualquier otra región de Sudamérica, con excepción de Brasil, y más de cinco veces mayor que la de Argentina. Aún en 1850, cuando se vislumbraba la primera fase de la inmigración europea, Bolivia tenía el doble de habitantes que la Argentina y su población de 2,1 millones sobrepasaba fácilmente a aquella de 1,4 millones de Chile.

La era de los imperios anglosajones cambió todo esto. Bolivia pasó a ser el principal productor de estaño en el mundo, pero de manera tal que ni impulsó un desarrollo interno ni sacó al país de su aislamiento. Se mantuvo como una nación atrasada, una sociedad inextricablemente ligada a las exigencias de forjar una existencia en la más difícil de las condiciones físicas y hondamente sumergida aún en una cultura autóctona ancestral. Han habido por supuesto importantes cambios, y la marca de la intrusión extranjera es fácil de hallar. La clase media urbana está, al igual que sus contrapartes del hemisferio, mejor vestida que la europea, consume una sana ración de cerveza destilada por migrantes alemanes y está muy familiarizada con la tarifa de cambio del dólar norteamericano. Si se la caracteriza por su distinción, más allá de su pequeña dimensión y relativa pobreza, quizás se podía decir que es inusualmente cortés, de buenos modales. Esta provinciana peculiaridad está equiparada con otras anomalías secundarias que son marcadamente menos indígenas. El sello de la presencia británica en las décadas iniciales del siglo ha sido dejado en las minas, a través del empleo continuado de palabras como "*winch*", "*block caving*" y "*sink and float*", todas las cuales forman parte del vocabulario de un proletariado que no por mera coincidencia está entre los más militantes del mundo. Lo mismo ocurre con los equipos más desfachados de la liga futbolística como The Strongest y Blooming, así como con Always Ready, que fue relegado a los últimos lugares en la temporada futbolística de 1981. Una fuente esencial de financiamiento para el emergente departamento amazónico del Beni se conoce, por razones que no son enteramente locales, como el BIG Beni (Banco Industrial y Ganadero del Beni). Hay, evidentemente, el estigma más familiar del imperialismo en anuncios adornados de Coca Cola, los grandes y ofensivos edificios de bancos norteamericanos y un número extraordinario de vehículos japoneses. Bolivia es, por lo tanto, un país agitado; pero su agitación ha sido notablemente desigual como resultado de una historia singular, pero para muchos desconocida.

La Revolución Nacional de 1952 sigue siendo, entre las revoluciones políticas que se han producido después de la segunda guerra mundial, una de las menos estudiadas. Existen dos textos en lengua inglesa que la consideran casi algo más que una simple referencia de pasada; incluso en castellano, la bibliografía existente sobre ella no se puede comparar con aquella sobre las revoluciones de México, Cuba, Nicaragua o incluso El Salvador. Al igual que muchas otras luchas de liberación nacional libradas después de la guerra, no logró alcanzar sus objetivos; sin embargo, por un breve período se constituyó en un acontecimiento que alcanzó las posibilidades de la anterior revolución, la mexicana, y que atrajo la atención de las Américas, si no de todo el mundo. Hoy en día sigue teniendo un interés muy especial para los simpatizantes del trotskismo, quienes identifican en Bolivia a uno de los contingentes más fuertes de su movimiento. Pero por lo demás, el conocimiento de 1952 y sus consecuencias es exclusivo de un puñado de académicos que resultan marginados no tanto por su capacidad intelectual como porque eligieron utilizarla en esta área de estudio. La revolución ocurrió hace bastante tiempo –dos generaciones bolivianas– pero todavía es el acontecimiento fundamental de la historia política del país. En un momento en que América Latina es nuevamente escenario de conflictos políticos decisivos en cierto sentido comparables a la experiencia boliviana, los eventos de 1952 y su legado deberían recuperarse tanto para propósitos políticos como históricos.

En un esfuerzo por proporcionar algún fundamento para tal recuperación, he adoptado un enfoque directamente cronológico y narrativo. Estoy consciente de que esto ha restringido, y no en pequeña medida, la manera en que he retratado una tierra y una sociedad especialmente ajenas, donde, por ejemplo, un "valle" no siempre es una hondonada en el paisaje sino una quebrada apenas accesible entre empinados picos, una tierra donde una cuarta parte de los vehículos son camiones, únicamente la quinta parte de los caminos está pavimentada y la comunicación es cualitativamente peor que, por ejemplo, en Chile o Argentina. No es difícil darse cuenta de que esos factores tienen importantes efectos políticos y deben ser incorporados en nuestra manera de ver la confusión pública. De manera similar, no me he extendido en las diferencias sutiles pero decisivas entre la unidad familiar de Bolivia y aquella de Europa o Norteamérica, tampoco he explicado en detalle la importancia especial del "Nivel 411" en la mina de Siglo XX o intentado desenmarañar las connotaciones específicas del "Lechingrado" o "árbol de Lechín"* donde Ale-

* En la ciudad de La Paz, el "Lechingrado" era un café que tenía un árbol enfrente; sitios que eran frecuentados por el líder de la COB Juan Lechín. (N. del E.)

jandro Orfila, secretario general de la OEA, tuvo que ir para encontrarse con el legendario líder de la COB. Pero, quizás lo más importante de todo sea que el presente trabajo desiste de una exposición amplia de la vida en el campo y de aquellos aspectos de la organización del pueblo indígena de Bolivia, que normalente se consideran el área de los antropólogos. La existencia, si no el carácter mismo de tales aspectos, debería emerger de un texto que tiene el simple propósito de brindar una visión panorámica de una historia política que es lo bastante compleja como para precisar de consideraciones en cada una de sus etapas. Una descripción cronológica obviamente acarrea multitud de problemas y no es uno de los menores el de imponer un orden rectilíneo a fenómenos que necesitan ser deconstruidos y analizados tanto en relación con sus características sincrónicas como con su evolución histórica. Con todo, la necesidad de saber "qué sucedió" permanece en varios niveles y si esta versión suena incómodamente cercana a la trayectoria por la que va y viene el tren de carga de la historia de los Whig,* es de esperar que por lo menos brinde algunos elementos básicos para la construcción de un debate más rico y completo

Aunque frecuentemente sin compartir más ingenuas expectativas de las posibilidades y consecuencias de aprovechar los resultados de la investigación histórica para un estudio polémico de política contemporánea, un gran número de personas ha contribuido de manera más o menos directa a este libro. La mayoría ha colaborado impulsando la preparación de una separata, un estudio más académico de 1952, cuyos resultados han sido aprovechados para sentar las bases del presente texto. Mi deuda principal es con Laurence Whitehead, quien además de motivar fructíferas discusiones sobre Bolivia durante muchos años, me facilitó generosamente material original, así como sus propios trabajos, muy variados e incisivos, dejando de lado el principio fundamental de la práctica académica. Éstos han sido saqueados extensivamente aunque se señala claramente en cada caso la fuente –así lo creo–. También me han servido de ayuda, frente a condiciones a menudo angustiosas, el entusiasmo, el humor y la eficiencia constantes del personal de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. A su director, el distinguido historiador Alberto Crespo Rodas y a sus colaboradores Luis Verástegui y Jenny Peñaranda mi sincero agradecimiento. El texto también se ha beneficiado muchísimo de conversaciones con dos políticos que han desempeñado un papel importante

* Término con que se designa a las corrientes más liberales de Inglaterra desde hace varios siglos. (N. de la T.)

en la historia de su país: Guillermo Lora (POR) y José Luis Roca (PIC). Por razones de espacio no fue posible incluir los resultados de un modesto proyecto de historia oral sobre 1952 que fue acometido entre 1981 y 1982, financiado por el Social Science Research Council (Nueva York), la Fundación Nuffield y la Academia Británica. Sin embargo, muchos de los testimonios grabados ejercieron una fuerte influencia en partes del texto. Me gustaría expresar mi especial gratitud a Daniel Saravia, Víctor López, Filemón Escóbar, Sinforoso Cabrera, coronel Arsenio González y Alfonsina Paredes, por su participación en dicha investigación. Un agradecimiento muy especial a Zelma Aguilar y Penélope Woolcock, en gran parte responsables del éxito del proyecto en el cual impusieron su propio sello. También agradezco a Wilbert Van Miert, que me envió recortes de prensa cuando estaba fuera del país y a Rolando Morales Anaya, que me mantuvo al tanto de las complejidades de la economía contemporánea. Alberto y Chela Aguilar estuvieron, como siempre, dispuestos a brindarme su afecto, apoyo doméstico y también protección ocasional contra las consecuencias de mi excéntrico comportamiento. En mi otro hogar, Bill Schwarz expresó su juicio acerca de la aceptabilidad de todas las anécdotas, sufrió mis monólogos a la deriva hasta bastante después de medianoche y examinando hábilmente pasajes poco claros les dio nueva forma. Gracias a él, este libro en ningún sentido dio lugar a la depresión, opresión o represión del ámbito hogareño. Finalmente, en el curso del trabajo me ha servido de apoyo el independiente amor de Dylan y Penny, cuyo afecto los llevó a leer un borrador. La lista es larga, pero a ninguno de los que la integran se les puede atribuir los errores o necedades que el acucioso lector pudiera descubrir, pues ésos son sólo míos.

1. Antecedentes de la revuelta

En el atardecer del martes 8 de abril de 1952, un jefe del Ejército, algo corpulento, abandonaba la entrada del Palacio Quemado y se abría paso por las calles adoquinadas de La Paz hacia las oficinas de la Dirección General de Policía. Cualquier espectador que, desafiando el frío otoñal, hubiese estado observando el ir y venir de los dignatarios de Estado desde una banca de la plaza probablemente no se habría sorprendido mucho. Aunque La Paz no tenía televisión entonces y el contenido fotográfico de sus periódicos era mínimo, el general Antonio Seleme Vargas era conocido por los paceños como un ministro de la junta del general Hugo Ballivián, más activo y voluble de lo usual. Seleme era el responsable de las constantes acusaciones que el régimen lanzaba en contra del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), incriminando a este partido de urdir la rebelión y de "establecer alianzas con los comunistas". Bajo la dirección de Seleme, Donaro Millán, el jefe de Policía, había enviado a sus hombres a registrar las colas de pan en busca de literatura subversiva y los había comprometido en frecuentes batidas policiales contra sindicalistas e izquierdistas. Apenas unas semanas antes, los carabineros del ministro habían disuelto enormes manifestaciones populares en demanda de abastecimiento de pan, carne y azúcar que, con una inflación que sobrepasaba el 65 por ciento, eran objeto de severa especulación y rara vez se encontraban en los mercados de La Paz.

El que tan importante y ocupado miembro del gabinete visitara el palacio al concluir una jornada de trabajo resultaba algo rutinario, el que lo abandonara sin escolta posiblemente hubiera llamado la atención de cualquier como-

ceder del protocolo militar. Pero aquella tarde habían pocos observadores y ningún signo alarmante o de crisis dentro de la actividad política. La ciudad se estaba recuperando de los daños causados por las intensas y tardías lluvias de verano y ya se preparaba para la Semana Santa. A pesar del incremento en el precio de las entradas de cine, se observaba las largas colas de costumbre, particularmente en el cine Princesa, que atraía una gran concurrencia presentando la película *Amor o pecado*, con la actuación estelar de Noel Coward, Celia Johnson y Margaret Leighton. La atención de la prensa se había desviado de los rumores de otro golpe hacia un acalorado intercambio de opiniones en torno al precio del estaño boliviano entre los productores y un senador tejano de nombre Lyndon B. Johnson. La situación económica era cada vez más precaria y la junta finalmente había prometido nuevas elecciones para el final del año; sin embargo, había escasa evidencia ya sea de un colapso total del régimen o de un repunte del activismo movimientista.

Seleme, persona ostensiblemente nerviosa, sabía que las cosas se presentaban de manera muy difícil. Oficial de artillería bien poco distinguido, con treinta años de servicio, durante los cuales peleó una guerra internacional, otra civil y se mantuvo en comisión a pesar de catorce cambios de gobierno, el cochabambino de origen árabe y 48 años de edad debía estar consciente de que se estaba aventurando en la semana más decisiva de su vida pública. Aunque –para gran sorpresa del edecán del presidente– la reunión con Ballivián había terminado en calurosos abrazos y recíprocos juramentos de lealtad y admiración, también confirmó la destitución de Seleme del gabinete. En realidad, lo más asombroso de todo fue que el exministro abandonó el Palacio Quemado solo y no detenido a pesar de que el presidente y gran parte de sus colegas estaban convencidos de que Seleme andaba preparando un golpe. El día anterior, esta acusación había sido hecha en una reunión de gabinete por el joven ministro de Trabajo, coronel Sergio Sánchez, cuyas ambiciones conocía Seleme como las suyas propias y cuyo apodo de "Peroncito" revelaba una inclinación por gestos populistas que difícilmente encajaban dentro de la política decididamente autoritaria del régimen. Sánchez no se equivocaba y el momento de su denuncia fue sumamente preciso. Un día antes, Seleme había jurado lealtad al partido en casa de un militante movimientista, Raúl Canedo Reyes; este hecho fue conservado para la posteridad a través de una grabadora discretamente escondida. Mientras el general sostenía su última discusión con el presidente, el comité revolucionario del MNR se reunía en la casa de Canedo bajo la jefatura de Hernán Siles Zuazo para ultimar los detalles de una sublevación que estaría militarmente comandada por Seleme y que lo elevaría a la

presidencia hasta las nuevas elecciones que tendrían lugar en octubre de ese mismo año.

La destitución de Seleme significaba que los planes para el alzamiento deberían adelantarse, dado que el apoyo de sus dos mil policías era crucial para la toma de la capital. Evidentemente, a ello se debía la prisa con que el general se abrió paso hacia la Dirección General de Policía, donde informó a Milián y al coronel César Aliaga de sus planes. Éstos provocaron la consternación del primero, quien se vio obligado a liberar a un grupo de movimientistas que sus hombres habían apresado en una de sus batidas; pero alivió al segundo, a quien el MNR había reclutado por su cuenta como garantía justificada frente a las tendencias veleidosas de su comandante. Seguidamente, Seleme se dirigió a ver a Siles con la intención de persuadirlo de involucrar a la Falange Socialista Boliviana (FSB) en la sublevación. En los hechos, de las conversaciones de último momento con la FSB sólo se logró acrimonia y que los planes para el golpe llegaran a oídos del comandante del Ejército, general Humberto Torres Ortiz, quien no tardó en salir de su domicilio para reunir una fuerza entre las principales guarniciones apostadas en el altiplano. Ballivián, por su parte, prefirió no dormir en el palacio esa noche; lo cual impidió a Seleme negociar una dimisión anticipada o convencer a sus colegas de cambiar de bando, jugada en la que había puesto grandes esperanzas, ya que el propio Torres Ortiz sostuvo charlas con el MNR y no se esperaba su alianza con Ballivián. De cualquier modo, este estado de cosas también favoreció la ocupación relativamente fácil del centro de la ciudad a partir de la medianoche, realizada por los carabineros y las unidades armadas del MNR. A las seis de la mañana del 9 de abril, radio Illimani, la emisora estatal, salió al aire anunciando que la revolución había triunfado.

El MNR tenía experiencia en acciones como ésa y había preparado bien el terreno colocando a oficiales en posiciones claves, especialmente en la Policía. Entre quienes prometieron su apoyo estaba el capitán Israel Téllez, comandante del arsenal de Orkojahuira; pero cuando Téllez logró finalmente engatusar a un renuente suboficial para obtener la llave de la bóveda de seguridad, los rebeldes encontraron que sólo había ochenta armas y un número limitado de municiones. Con el servicio militar obligatorio, en la capital no faltaron hombres que supieran disparar un arma; además existían numerosas provisiones privadas de rifles y armas de fuego, como resultado de una serie de pequeños enfrentamientos con el ejército en años recientes. Con todo, el no haber asegurado de antemano una provisión de armamento pesado constituía un claro fracaso. Para Seleme fue decisivo cuando recibió la confirmación de

que Torres Ortiz no estaba dispuesto a entrar en negociaciones, que había instalado su cuartel general en la base aérea de El Alto, al borde mismo del cráter donde se cobija la ciudad de La Paz, y que contaba con el apoyo de nueve regimientos, con un total de ocho mil hombres, para poner en práctica el viejo plan de contingencia de acorralar la ciudad y aislar una insurrección. A las tres de la tarde, los rebeldes estaban en peligro de ser atacados por el regimiento Lanza, que iniciaba su marcha desde el cuartel general de Miraflores, y por un grupo de cadetes que avanzaba desde el Colegio Militar hacia el barrio de Sopocachi. Una hora después, Torres Ortiz se sentía tan seguro, que con aviones del ejército lanzaba panfletos demandando la rendición incondicional antes de las seis de la tarde, pese a que un reducido grupo de fabriles había podido contener a los cadetes, mientras los carabineros seguían impidiendo el avance del regimiento Lanza. Sin embargo, todo esto no pudo sacar de su cada vez más hondo pesimismo a Seleme, quien después de discutir con sus camaradas insurgentes anunció por radio Illimani, a las 7 p.m., que entregaba el liderazgo de la rebelión a los civiles. Acto seguido, el general se escabullía con Millán a la seguridad que les brindaba la embajada chilena.

Seleme tenía razón al pensar que a partir de ese momento la revuelta daría lugar a un enfrentamiento directo con los militares y que los rebeldes contaban con demasiado pocas municiones para lograr algo más que un triunfo aparente, pero abandonó su propia causa demasiado pronto. Durante los dos días siguientes, la feroz batalla dentro y en los alrededores de La Paz transformó el tradicional golpe de Estado en una insurrección popular.[1] Horas después del mediodía del viernes 11 de abril, las fuerzas armadas estaban derrotadas y se vieron obligadas a huir o a plegarse a la causa revolucionaria. Cuando el general Torres Ortiz se reunió en Laja con el nuevo líder de la insurrección, Hernán Siles, ya no eran los disidentes carabineros quienes controlaban la ciudad sino unidades fabriles, militantes movimientistas, pobladores y mineros, apresuradamente organizados y ahora fuertemente armados que planteaban demandas para el total desmantelamiento del aparato militar, nacionalización y control obrero de las minas, una revolución agraria y la formación de milicias populares.

1 En Luis Peñaloza: *Historia del Movimiento Nacionalista Revolucionario, 1941-1952*, La Paz, 1963, p. 263 y ss.; Hugo Roberts B.: *La revolución del 9 de abril*, La Paz, 1971; Gral. Antonio Seleme Vargas: *Mi actuación en la junta militar de gobierno con el pronunciamiento revolucionario del 9 de abril de 1952*, La Paz, 1969, y en la edición aniversario de *La Nación* (La Paz), 9 de abril de 1962, se ofrecen descripciones detalladas de los acontecimientos de abril de 1952.

Apenas horas después de la caída de la junta de Ballivián, estaba claro que el viejo orden había sido subvertido, que el régimen movimientista que lo suplía dependería enormemente del apoyo armado de los trabajadores y que las expectativas de estos iban mucho más allá de lo previsto en el programa reformista y tan poco claro del partido. Por otra parte, con la Guerra Fría, la cruzada McCarthy, la escalada de las campañas en contra de los regímenes de Arbenz en Guatemala y Mossadegh en Irán, además de la guerra de Corea, era lógico que la revolución de abril llamara tanto la atención en el resto del hemisferio y provocara la alarma de Washington ante la posibilidad de una "ocupación comunista" en un Estado situado en el corazón de América del Sur y en los límites de otros cinco países que incluían a la Argentina de Perón.

No es difícil deducir por qué pudo haberse producido el evento. Bolivia estaba sufriendo un atraso notorio. Su producto interno bruto (PIB) era de escasamente 118,6 dólares per cápita, que lo hacía el país más pobre del hemisferio, con la única excepción de Haití.[2] Más del 72 por ciento de la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura, la misma que en 1950 ocupaba menos del dos por ciento del total de la superficie, con una producción anual de sólo 117 millones de dólares, que aún significaban el 33 por ciento del PIB. Apenas el cuatro por ciento de todos los obreros estaba empleado en la industria manufacturera y ésta contribuía con menos del nueve por ciento al PIB. Por su parte, la minería empleaba al 3,2 por ciento de la población activa y producía el 25 por ciento del PIB. Un país del tamaño de Francia, Italia y Alemania Occidental juntas tenía una población de 2,7 millones de habitantes, de los cuales solamente el 22 por ciento vivía en asentamientos de más de dos mil personas. La sede de gobierno tenía apenas 267 mil habitantes, aventajando bastante a la segunda más grande, Cochabamba, que contaba con ochenta mil. Sólo el 31 por ciento de la población boliviana no era analfabeto y únicamente un ocho por ciento había completado su educación secundaria. En 1950 había 3.700 estudiantes inscritos en las cinco universidades del país, las cuales emitieron un total de 132 títulos ese año. Bolivia tenía menos escuelas que Paraguay, su presupuesto total era apenas superior al de la provincia argentina de Santa Fe. Cerca de tres niños de cada diez morían durante su primer año de vida y la expectativa de vida después de cumplido el primer año era muy inferior a los cincuenta. Había 706 médicos en la república, menos de la mitad del número de abogados a nivel nacional.

2 James W. Wilkie: *The Bolivian Revolution and US Aid since 1952*, Los Ángeles, 1969, p. 29.

Estos índices de subdesarrollo estructural se emparejaban con aquellos del reciente comportamiento económico y acentuaban la extrema debilidad del sistema, de cuya defensa se acusaba a la junta. El índice del costo de vida ascendió a 5.041 por ciento en 1951 con relación a 1931, mientras que el tipo de cambio del boliviano bajó de 30,14 por dólar vigente en 1938 a 176,11. Más del 18 por ciento de las importaciones de un país mayormente agrícola eran alimentos; en tanto que el tonelaje y valor de las exportaciones de estaño –pilar de la economía– fueron los más bajos en más de una década, lo cual no permitía al gobierno gastar más de treinta dólares por persona en su presupuesto.[3]

El gobierno de la Rosca

Por elocuentes que sean estas estadísticas, con ellas no se explica la naturaleza tan peculiar de la crisis económica boliviana o cómo ésta culminó en la insurrección de abril. En realidad, el factor esencial no fue tanto el marcado retraso del país, como la forma en que estaba estructurado por un desarrollo combinado y desigual; fenómeno común a los países capitalistas atrasados, donde un sector capitalista relativamente avanzado y orientado a la exportación coexiste y se interrelaciona con una organización agrícola eminentemente provincial, arcaica y estática. Los desequilibrios y tensiones provocados por esta estructura fueron acrecentados y directamente politizados porque el control estratégicamente vital de la industria del estaño estaba en manos de una pequeñísima oligarquía cuya influencia en los asuntos fiscales del Estado y su poder político eran tan enormes que justificaban absolutamente el apelativo de Superestado minero que se le dio. En la década de 1940, la omnipotencia de este grupo se vio seriamente amenazada, en parte por los riesgos que conlleva el atenerse a la exportación de un solo producto en un mercado internacional generalmente adverso y en parte por las presiones internas, las cuales, a su vez, derivaban de una radicalización del proletariado minero y de un movimiento político más amplio que fusionó elementos nacionalistas, democráticos y reformistas en un extenso movimiento antioligárquico. La fuerza y popularidad de este movimiento pueden explicarse, en cierto sentido, porque las

3 Asdrúbal Averanga Mollinedo: *Aspectos generales de la población boliviana*, La Paz, 1956; Herbert S. Klein: *Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952*. Cambridge, 1969, pp. 392-393; CEPAL: *El desarrollo económico de Bolivia*, México, 1958.

desigualdades de riqueza y poder creadas por el régimen de los propietarios de minas fueron tan grandes que lo condenaban irremisiblemente a sufrir tarde o temprano una ofensiva inevitable. Pero la forma en que ésta finalmente ocurrió resultó más compleja de lo que podía permitir un simple análisis populista y maquiavélico.

El poder de las compañías estañíferas era incuestionable; tres empresas familiares controlaban el ochenta por ciento de una industria que, a la vez, tenía a su cargo el ochenta por ciento de las exportaciones nacionales y proporcionaba al Estado una base impositiva segura y un ingreso garantizado de divisas. Antes de 1941, estas compañías produjeron hasta una cuarta parte del estaño mundial y nunca menos del quince por ciento. Durante la guerra, su cuota aumentó al 49 por ciento. En 1945, los "tres grandes" produjeron 35 mil toneladas finas de mineral, cuando ninguna otra empresa en Bolivia producía más de cuatrocientas toneladas.[4] La Rosca, como se conoce más popularmente a este grupo, había consolidado una presencia en el mercado internacional tal que evocaba el auge de la plata en la colonia, cuando las minas de Potosí, bombeando colosales cantidades de metal a los mercados europeos del siglo XVII, fomentaron una espiral inflacionaria y de una villa provincial desolada levantaron una ciudad de más de 160 mil habitantes, uno de los centros comerciales más grandes y activos de las Américas y que, a principios del siglo XIX, proveería casi la mitad de los valores monetarios globales.[5] En 1950, la población de Potosí apenas alcanzaba a cuarenta mil habitantes; su antiguo esplendor se reconocía únicamente por la extraordinaria cantidad de iglesias coloniales y por el cerro cacarañado, exhausto y vigilante a espaldas de la ciudad. Cercana a Potosí, Sucre, con su natural encanto, fue la ciudad jardín que

4 Sobre estudios generales de la industria estañífera ver Walter Gómez: *La minería en el desarrollo económico de Bolivia 1900-1970*, La Paz, 1978; Sergio Almaraz: *El poder y la caída*, La Paz, 1966; Juan Albarracín Millán: *El poder minero*, La Paz, 1972, y Eduardo Arze Cuadros: *La economía de Bolivia*, La Paz, 1979.

5 Laurence Whitehead: "Desarrollo hacia afuera - El caso de Bolivia", Oxford, 1975. Para cifras detalladas sobre producción ver Peter J. Bakewell: "Registered Silver Production in Potosí, 1550-1735", en *Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas*, N° 12, 1975; Adolf Soetbeer: *Edelmetallproduktion und Wertverhältnis zwischen Gold und Silber seit der Entdeckung Amerikas bis zur Gegenwart*, Gotha, 1879; Pierre Vilar: *A History of Gold and Money, 1450-1920*, Londres, 1976. Herbert S. Klein brinda un estudio sucinto del periodo colonial de Bolivia en: The *Evolution of a Multi-Ethnic Society*, Nueva York, 1982. Sobre relatos detallados de Potosí, ver Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela: *Historia de la Villa Imperial de Potosí*, Lewis Hanke y Gunnar Mendoza ed., 3 vol., Providence, R.I., 1965, y Luis Capoche: *Relación general de la Villa Imperial de Potosí*, Madrid, 1959.

dio administración legal y eclesiástica a la colonia y que, a pesar de su arruso, sigue manteniéndose como la capital legítima de Bolivia.

En muchos sentidos, el estaño se erigió sobre la infraestructura de la plata, extendiendo la dependencia de Bolivia respecto de la minería hasta el siglo XX. El estaño no reemplazó a la industria colonial de la plata sino a una "segunda fase" de ésta, que se desarrolló en la última mitad del siglo XIX, durante la cual se construyeron los primeros ferrocarriles del país, se desplazó a los caudillos militares del gobierno y se establecieron nexos con capitales anglochilenos que hubieron de impulsar a una élite agrominera del sur, la cual aunque si tuvo poder político directo fue similar en muchos aspectos a la oligarquía estañífera que la sucedió. La hegemonía de los propietarios de minas de plata no duró mucho; recién durante la década de 1870 lograron que se aprobara una política sólida de libre comercialización y sólo después de la guerra del Pacífico (1879-83), en que Bolivia perdió su salida al mar a favor de Chile, se aseguraron un poder político indisputable. Para entonces el prolongado y costoso proceso de rehabilitación de los abarrotados y largamente olvidados pozos de mineral heredados con la independencia (1825) llegaba a su punto máximo de producción; la mina Huanchaca era la segunda más grande del mundo, después de Broken Hill, con una producción anual máxima de 130 mil kilos valorados en seis millones de bolivianos. Empero, en una sola década, la preferencia general de las principales economías por el patrón oro planteó serias dudas acerca del futuro de esta industria.[6] Su declinación fue rápida e irreversible: en 1895 el ingreso por exportación de plata era incluso 17 veces mayor que del estaño, en 1902 apenas diez por ciento mayor y en 1908 el 66 por ciento del ingreso por exportaciones correspondía al estaño, mientras que sólo un 17 por ciento al rubro de la plata.

Únicamente una de las principales compañías de la plata sobrevivió intacta al impacto; aquella de la familia Aramayo, que hizo de diversificar la producción una práctica desde una fase relativamente temprana. La expansión del nuevo mineral, activada por el rearme masivo en los Estados metropolitanos de Europa, y la introducción de alimentos enlatados tanto allí como en Estados Unidos, impulsó el surgimiento de una flamante generación de capitalistas, quienes al principio tuvieron que emprender aventuras arriesgadísimas con capitales anglo chilenos a fin de competir con la producción de alta calidad y bajo costo proveniente de los sedimentos aluvionales de Malasia

6 El mejor estudio de la minería de la plata del siglo XIX es el de Antonio Mitre: *Los patriarcas de la plata*. Lima, 1981.

e Indonesia (y más tarde también del Congo y Nigeria). Contrariamente, en Bolivia la mayoría de los yacimientos se encontraba en la profundidad de compactas rocas y pronto se fue comprobando que su ley iría en rápida disminución; así, de un promedio de 6,65 por ciento de contenido en 1925, cayó a 0,98 en 1970. Las primeras excavaciones tuvieron la ventaja de poder utilizar la infraestructura existente para la explotación de plata, mineral que generalmente se encuentra en condiciones geológicas similares a las del estaño.

Lo más notable del crecimiento de la industria estañífera boliviana probablemente está en el hecho de que los requerimientos de transportar grandes volúmenes de mineral a través de terrenos considerados entre los más difíciles del mundo, la necesidad de asegurar una recapitalización en constante ascenso para descubrir y tratar rudimentariamente (concentración) el mineral de vetas cada vez más profundas y pobres y la urgencia de integrar el proceso de excavación con medios de fundición y mercado no favorecieron a empresarios extranjeros sino a capitalistas nativos. Estos últimos, habiéndose beneficiado en principio con inyecciones de capital extranjero, estaban ya en condiciones de utilizar su influencia local, al igual que sus cuantiosas ganancias iniciales y una tasa impositiva excesivamente reducida para independizarse de asociaciones que pagaban muy altos dividendos, para reinvertir fuertes sumas y absorber capitales británicos y chilenos que operaban a pequeña escala o bien bajo una contraproducente presión de sus accionistas. Por lo tanto, el modelo de desarrollo y control funcionó de manera opuesta a la tendencia normal y, sin embargo, obligó a los miembros de la Rosca boliviana a convertirse en capitalistas internacionales y monopolistas locales.

La más grande y célebre de las empresas estañíferas fue aquella de Simón Patiño, quien hacia la década de 1920 controlaba el cuarenta por ciento de la producción nacional y en las vísperas de la revolución era responsable del diez por ciento de la producción mundial del estaño. La compañía de Patiño fue la columna vertebral de la Rosca y se desarrolló hasta transformarse en una poderosa empresa transnacional sobre la base de las ricas vetas de Catavi-Siglo XX, su principal centro minero, grandes sectores del cual fueron comprados a empresarios británicos y chilenos que carecían de capital disponible, conocimientos regionales y recursos legales y coercitivos para desarrollar plenamente sus propiedades. Patiño había comenzado en 1896 en un barato paraje de cuatro hectáreas, cercano al actual complejo, donde explotó las superficiales y ricas vetas con un reducido personal y condiciones financieras inicialmente malas. Hacia 1906 ya pudo fundar su propio banco, el Banco Mercantil, con un capital de un millón de dólares, el doble de la suma que poseían los otros

cinco bancos del país y superior al total de ingresos del Estado, que apenas aplicó un magro impuesto de cuatro por ciento a las exportaciones de estaño.[7] En 1924, Patiño arrebató a intereses chilenos todo el paraje de Llallagua (la mina de Siglo XX y la planta de concentración de Catavi), construyó una línea férrea privada entre Uncía y Machacamarca (sobre la línea principal de Oruro a Chile) por un valor de cinco millones de dólares, compró las minas de Colquechaca, Kami, Colavi y Oploca y registró un ingreso anual de tres millones de dólares después de pagar los impuestos. Empero, cuando el régimen del partido republicano incrementó el impuesto de exportación de 7,5 por ciento a cerca de quince por ciento al año siguiente, Patiño se vio forzado a dar un paso ya previsto por la proporción de sus empresas y trasladó su cuartel general a Delaware, con lo cual redujo su exposición a las presiones fiscales y políticas, al mismo tiempo que se aseguró una base para administrar su operaciones internacionales. (Eligió Delaware por tratarse de un estado poco rígido en su legislación empresarial; en realidad, el propio Patiño pasaba la mayor parte de su tiempo en París, más cerca de sus intereses europeos). Al adquirir acciones en intereses mineros y comprar importantes plantas procesadoras en el mundo entero –la más estratégica de las cuales fue la fundición Williams Harvey en Bootle–, la corporación logró control sobre todo el proceso de producción, sobre la cuarta parte de la capacidad mundial de fundición y, consecuentemente, una influencia considerable en la fijación del precio mundial del estaño. En el año de su muerte (1947), su compañía registraba beneficios del orden del 31 por ciento del valor del capital y controlaba más de cien subsidiarias a nivel mundial; su propia riqueza personal fue valorada en setenta millones de dólares por la revista Fortune.[8]

Este proceso de internacionalización tuvo lugar en una escala mucho más modesta en lo que se refiere a las otras dos compañías que, por lo demás, dependían de las plantas de fundición europeas de Patiño. La Compagnie Aramayo de Mines de Bolivie S.A., registrada en Suiza en 1915 pero incluida en la Bolsa de Londres desde 1906, concentró sus operaciones en las antiguas zonas de extracción de plata en los alrededores de Potosí (Chorolque, Tasna, Telamayu, Ánimas), aunque también adquirió los campos paceños de Caracoles y Viloco (donde empezó a explotar wolfram) y los yacimientos de oro de Tipuani, al norte de La Paz.[9] A partir de la década

7 Charles F. Geddes: *Patiño: The Tin King*, Londres, 1972.
8 Sergio Almaraz, *op.cit.*, p. 47 y ss.
9 Alfonso Crespo: *Los Aramayo de Charcas*, Barcelona, 1981

de 1920, la cuota de producción nacional de Aramayo se mantuvo constante en siete por ciento, con una producción anual que en la década de 1940 alcanzó las tres mil toneladas finas. Sin embargo, en esta fase la muy bien establecida y en cierto modo cauta empresa estaba sufriendo presiones comerciales y políticas en la misma medida que su gigante rival. Disputó las estimaciones oficiales de sus bienes, desafió los ajustes salariales patrocinados por el gobierno (aunque por lo general fue más generosa que la de Patiño) y dirigió una feroz campaña en contra del incremento de las imposiciones fiscales y en especial de la obligación de depositar un porcentaje variable de los ingresos de divisas en el Banco Central, propiedad del Estado, que siempre estaba corto de moneda sólida. Aunque no cabe duda que Patiño pudo reducir los efectos de tal obligación más fácilmente que Aramayo, también es evidente que este último había adoptado una política de descapitalización hacia la década de 1940, como lo muestra su declaración de un promedio de 10,7 por ciento de pago de dividendos en quince años y una reinversión de sólo cinco millones de dólares durante el mismo periodo. Entre 1940 y 1948, Aramayo registró beneficios por un valor de 641 millones de bolivianos y pagó 98 millones por concepto de impuestos. Lo significativo es que esta compañía se resistió a todo esfuerzo por establecer una fundición en Bolivia; a pesar de que con ello no obtenía ninguna ventaja especial y que al utilizar las instalaciones británicas de Patiño incurría en colosales gastos de transporte, no estaba preparada para afrontar los enormes riesgos políticos y financieros que suponía concentrar el proceso de producción dentro de las fronteras nacionales.[10]

La última de las grandes compañías que habría de establecerse fue la de Mauricio Hochschild, un judío inmigrante de Austria que comenzó como corredor de metales, pero que a principios de la década de 1920 pudo adquirir valiosas minas debido a que muchos de sus clientes independientes quebraron durante la recesión que siguió a la primera guerra mundial. La primera compra importante de Hochschild fue la Compañía Unificada del Cerro de Potosí, a la cual siguió inmediatamente la de los valiosos yacimientos orureños de San José y Colquiri. Con tales propiedades, Hochschild competía con Aramayo en el control de una cuarta parte de la producción nacional de estaño, así como de significativas cantidades de plata, cobre y otros metales. En 1948, los beneficios del grupo sobrepasaron las setecientas mil libras esterlinas.

10 Compagnie Aramayo de Mines de Bolivie S.A.: *Sinopsis de su economía en el último quinquenio, 1944-1948*, La Paz, 1949; *El caso Aramayo*, La Paz, 1969.

Con tan formidables recursos, los barones del estaño ejercieron un verdadero poder político, aunque nunca desde los altos cargos del gobierno, optando por ejercer influencia y presión desde sus puestos de embajadores en el extranjero y dejando que sus abogados y consejeros sirvieran en gabinetes de diverso color político. A partir de la década de 1930, la Rosca ya no gozaba de la simpatía de muchos y se opuso abiertamente a una serie de regímenes transitorios en el país. En ocasiones se vio forzada a apelar a medidas extremas para lograr condiciones aceptables de operabilidad. Sin embargo, puesto que La Razón era propiedad de Aramayo, que Hochschild tenía intereses decisivos de control en Última Hora y Patiño poseía gran parte de las acciones de El Diario, las respectivas compañías podían recurrir al poder de la prensa para complementar la influencia de sus hombres en el gobierno, las reservas de sus bancos y su estrecho contacto con naciones consumidoras claves. Estuvieron, por lo tanto, profundamente inmersas en la clase gobernante local e integradas en su aparato estatal, lo cual les permitió consolidar una serie de ventajas frente a sus competidores, aunque por la misma razón se convirtieron en un blanco muy bien definido para la oposición.

Un factor importante que contribuyó al debilitamiento de esta clase gobernante y a generar la grave crisis de vísperas de la revolución estaba fuera del control de la Rosca: era la alteración radical de la estructura del mercado mundial ocasionada por la segunda guerra mundial. A fuerza de atinados convenios y la aceptación común de una reducción de cuotas e ingresos, las compañías habían sobrevivido al crash de 1929 y a la consecuente recesión cludiendo un repliegue frente al capital americano, como estaba ocurriendo en otros países latinoamericanos. No obstante, el estallido de la guerra en Europa y Asia exigía un realineamiento mayor, pues no solamente los depósitos malayos estaban ya en manos de los japoneses, sino que las rutas atlánticas de embarque resultaban también demasiado vulnerables para continuar la fundición en Bootle, a pesar de las esperanzas iniciales de Patiño. Hacia 1942, Bolivia era el único proveedor importante de los Aliados y –lo que resultó de mayor importancia inmediata– tuvo que negociar directamente con EE UU, que prácticamente no poseía estaño propio (Alaska produjo cuarenta toneladas anuales entre 1900 y 1940). El gobierno norteamericano construyó una gigantesca planta de fundición en la ciudad de Texas, cerca de Houston, y ejerció una considerable presión política en el régimen particularmente dúctil del general Peñaranda a fin de obtener un precio bajo por el mineral, como parte del esfuerzo de guerra de los Aliados. El precio oficial del estaño en la bolsa de Nueva York se mantuvo inalterable entre 1941 y 1945, pero su valor real declinó en esos años; con lo cual el Estado boliviano perdía un ingreso fiscal esencial y se invertía la tendencia ascendente de los márgenes de beneficios de las compañías. (La de Patiño incrementó sus beneficios de 80 mil libras esterlinas en 1939 a 1,4 millones de libras esterlinas en 1942, pero éstos disminuyeron nuevamente a 300 mil libras esterlinas en 1946). Con objeto de reducir al mínimo el efecto a corto plazo de esta baja y con el fin de atender la gran demanda de estaño, la Rosca aumentó la producción al máximo, engrosó su fuerza de trabajo en un cuarenta por ciento y dobló la producción de 1938 en el curso de cuatro años.[13] Consecuentemente, al finalizar la guerra se había explotado cuantiosos yacimientos de estaño con un margen decreciente de utilidades y con el resultado de que, en términos comerciales, había demasiado personal en los socavones y una grave descapitalización. La respuesta de las compañías a esta situación fue provocar serios problemas políticos dentro del país. Pero las secuelas a nivel internacional no fueron menos duras, pues EE UU poseía la mayor capacidad de fundición del mundo y una enorme provisión de estaño, que le permitían controlar el precio internacional casi como lo haría un productor y sin muchos de los consiguientes riesgos.

Las verdaderas consecuencias de tal estado de cosas no se manifestaron de inmediato, ya que los precios subieron modesta pero continuamente en los años de la posguerra, al punto de que en 1950 habían recuperado su nivel de 1935. Empero, el estallido de la guerra de Corea renovó la demanda en circunstancias de franca competencia; el precio de seiscientas libras esterlinas por tonelada de junio de 1950 se elevó vertiginosamente a 1.600 libras esterlinas en febrero de 1951. La acelerada inflación originada dentro de EE UU y la inaceptabilidad política de financiar el esfuerzo bélico con un incremento en los impuestos añadieron una enorme carga a la "política de pasillos" a favor de la venta de las reservas estratégicas de estaño para reducir su precio y aliviar la crisis. En 1951, Washington vendió a novecientas libras esterlinas la tonelada de estaño por el que había pagado a Bolivia entre doscientas y cuatrocientas libras esterlinas durante la década de 1940. Los productores bolivianos perdieron una ventaja mercantil fundamental, por lo que, ante el grave peligro que corrían sus márgenes de utilidad, aunaron fuerzas con la junta de Ballivián para negociar e incrementar el precio a 1.200 libras esterlinas. Con todo, la US Reconstruction Finance Corporation (RFC)* sufría una extremada presión interna como para

[13] Kathryn Ross: *Bolivia and the War Effort: An Economic History of 1939-45 in the Context of Allied Tin Procurement Policy*, (tesis inédita). University of Oxford. 1977.

* Institución creada en el marco de la segunda guerra mundial para reactivar la economía norteamericana. (N. de la T.)

forzar la baja del precio a través de la venta de las reservas estratégicas. El testaferro de esta campaña fue Lyndon B. Johnson, quien protegía los intereses de sus electores en términos inequívocos: "...los productores de estaño parecen preocuparse más por la futura imposibilidad de vender excedentes de estaño que con el espectro de una agresión comunista".[12]

La RFC mantuvo su postura y no se dejó impresionar con la draconiana medida adoptada por los bolivianos, cuando éstos decidieron parar las exportaciones de estaño durante nueve meses. Aunque para la junta esto significaba la pérdida de una fuente de ingresos, no estaba en condiciones de soportar las consecuencias políticas de una baja prematura del mineral; mientras que las compañías abrigaban un justificado temor a una mayor declinación de los precios y la paralización de sus industrias en caso de que la insurrección maltusa fracasara y la guerra de Corea tocara a su fin. (Los precios sufrieron una permanente baja hasta 1958 y no recuperaron el nivel de 1951 sino en 1964, como resultado de otra guerra: la de Vietnam). Las pocas opciones de la Rosca quedaron aún más reducidas cuando Washington firmó un convenio con el gobierno británico por un precio superior a aquel ofrecido a los bolivianos; con lo cual se erigía un nuevo espectro: el de un perfecto monopolio de estaño de propiedad angloamericana.

Si bien en sus negociaciones con Bolivián, EE UU trataba con un régimen no solamente "amistoso" sino que llegó al poder a través de un golpe de Estado, poniendo fin a un gobierno elegido democráticamente y con "respaldo comunista", Washington no supo percibir el impacto del boicot no declarado, ni pudo comprender por qué tales negociaciones resultaban tan ásperas. Esto no se hizo evidente sino semanas después de que los barones del estaño por fin comenzaron a actuar según los lineamientos norteamericanos, en marzo de 1952. Como cabía esperar, la primera reacción en EE UU frente a la revolución de abril fue criticar las tácticas de la RFC; pero a largo plazo, el poder que las reservas de estaño le confería a Washington habría de serle vital para controlar la evolución política dentro de Bolivia.

Estos factores internacionales sin duda desempeñaron un importante papel para acelerar la destitución de la Rosca y el colapso del *ancien régime* que había presidido con decreciente garantía durante medio siglo. Sin embargo, tales factores fueron equiparados por un desafío más inmediato que fue plan-

12 *Financial Times*, 5 de marzo de 1951, citado en Laurence Whitehead: *The United States and Bolivia. A Case of Neo-Colonialism*, Washington, 1969, p. 6.

teado por los propios trabajadores de las compañías, quienes en la década anterior a la de 1952 acumularon una fuerza organizativa sin precedentes y un compromiso político radical.

El proletariado minero era pequeño en comparación con la población campesina; en su mejor época, durante los años de expansión por la guerra, alcanzó apenas la cifra de 53 mil, misma que nunca fue igualada después de 1952. Con todo, este sector tenía una influencia política y económica desproporcionada, en virtud de la importancia estratégica de la industria. Es más, los mineros bolivianos vivían y trabajaban —aún lo hacen— en condiciones mucho más costosas de lo que generalmente se considera fundamental para determinar los singulares lazos de solidaridad y radicalismo de los mineros en todo el mundo. Retomaremos este tema nuevamente, pero vale la pena observar que, con muy contadas excepciones, los campamentos mineros bolivianos se encuentran en regiones muy altas, estériles y aisladas de los Andes, cuyas condiciones climatológicas son extremadamente duras y sus medios de comunicación absolutamente rudimentarios; prácticamente todas sus provisiones básicas tienen que ser enviadas desde muy lejos y deben atravesar escarpadas cadenas montañosas para llegar a campamentos que, en algunos casos, "se encuentran por encima del nivel de los nevados". Son centros industriales desolados y peligrosos, habitados por comunidades totalmente dependientes de sus empleadores en lo que se refiere a luz eléctrica, vivienda, alimentación, atención sanitaria y trabajo.

Cuando el Consejo Económico de Guerra de EE UU se dispuso a negociar un contrato con la Rosca, antes de redactar las cláusulas del convenio final envió una comisión para inspeccionar la situación de las minas. La comisión Magruder (1943) fue considerada por Patiño como una ultrajante intervención y no únicamente porque se sumaba a la ya cuantiosa información sobre situaciones pormenorizadas de las minas. Entre sus numerosas críticas, la comisión observaba: "...la falta total de asociación libre y negociación colectiva", que "...los salarios reales de los trabajadores mineros han sido reducidos, pese a los considerables incrementos de los sueldos nominales", que no había salario mínimo y que el consumo nutricional de la comunidad minera en su conjunto era bastante inferior a "las normas generalmente aceptables para una buena salud... peligrosamente bajo".[13] Según el MNR, sólo el tres por ciento de los trabajadores de Patiño percibía más de un dólar al día en 1943.

13 *Report of Joint US-Bolivian Commission of Labour Experts*, La Paz, 1943, p. 2 y ss.

En octubre de 1946, el sindicato de Catavi planteó una demanda por salario mínimo equivalente a 32 centavos de dólar por día para un trabajador varón adulto.[14] En el mismo campamento, de acuerdo al sindicato, Patiño había proporcionado únicamente 3.869 viviendas, provistas de una sola habitación y ventana y sin alcantarillado, para un total de 7.500 mineros con un promedio de tres hijos cada uno.[15] Si bien los pozos de chimenea de las minas no están tan contaminados por el gas como aquellos de las vetas de carbón, carecen de normas mínimas de seguridad y se mantienen en condiciones sumamente precarias, originando un alto índice de accidentes. Frecuentemente, con el agua hasta la cintura, los mineros tienen el rostro expuesto a un intenso calor que hace extremadamente difícil, al cabo de pocos minutos de trabajo, el uso de las pocas máscaras protectoras disponibles. Como resultado de esto, el índice de silicosis ha sido siempre muy alto. En 1945, el médico jefe del hospital central de Oruro descubrió que la edad promedio de los enfermos de silicosis en tercer grado era de 32 años y con una media de 4,5 años de trabajo en interior mina.[16]

En tales condiciones, los principales campamentos evolucionaron hasta transformarse en centros de sindicalismo militante, vigilados de cerca por guarniciones militares. Empero, en gran medida por su aislamiento, las minas no se vieron afectadas por las doctrinas anarquistas y anarcosindicalistas que fueron llevadas a Bolivia desde Argentina y Chile durante las primeras décadas del presente siglo. Esto habría de hacerlas accesibles a otras corrientes políticas en la década de 1940; pero no por ello faltó radicalismo o se redujo el nivel de conflicto social, que en muchos casos llevó a una lucha abierta y a la intervención directa del ejército en la época anterior a la guerra. El primer y más importante caso se dio en 1923, cuando los militares aplastaron una huelga en Uncía (población que se encuentra a ocho

14 Servicio de Publicidad y Orientación Popular del MNR: *Víctor Paz Estenssoro y la masacre de Catavi*, La Paz, 1943, p. 14; Sindicato Mixto de Catavi: "Pliego de peticiones", 15 de octubre de 1946, archivo de documentos pertenecientes a Fernando Bravo. Agradezco a Alberto Aguilar Morales por haberme permitido consultar estos documentos. Estas cifras corresponden a las minas de Patiño; Hochschild pagó salarios igualmente bajos, en tanto que Aramayo pagó sueldos marginalmente más altos. Wálter Gómez estima que en 1926 los costes laborales no eran superiores al trece por ciento del costo de producción, p. 48. En Ricardo Anaya: *Nacionalización de las minas de Bolivia*, Cochabamba, 1952, se ofrecen muchos datos útiles sobre la Rosca.

15 *La Calle*, (La Paz), 20 de abril de 1944.

16 Luis Mealla Caso: *Consideraciones sobre la vida de los obreros mineros de Bolivia*, Cochabamba, 1945.

kilómetros de Siglo XX), con un saldo de ocho trabajadores muertos y otra docena de heridos. En diciembre de 1942, este escenario se repitió en una escala mayor. Después del año en que Patiño aumentó sus ingresos en un 84 por ciento, en que la inflación alcanzó el ochenta por ciento y el costo real en salarios para la compañía apenas aumentó en menos del cinco por ciento, los trabajadores de Catavi se declararon en huelga en demanda de veinte a setenta por ciento de incremento de sus sueldos. La compañía hizo pocos intentos de negociación y persuadió al gobierno de Peñaranda de que enviara sus tropas. No hubo resistencia armada y sin embargo 35 personas resultaron muertas, incluyendo varias mujeres, quienes tradicionalmente encabezaban las marchas de protestas, en un ataque inusualmente viciado por parte de la guarnición local.[17]

Éstos fueron los casos que más atrajeron la atención de todo el país y provocaron un insidioso debate político; pero hubieron muchos otros en que se empleó una violenta represión y en que diversos campamentos estuvieron virtualmente condenados a estados de sitio a partir de la década de 1940. Como advirtiera la Asociación de Mineros Medianos hacia fines de la década: "...cada día se revela como más necesaria la represión o sanción a los promotores de las huelgas ilegales".[18] En sus memorias, René López Murillo recuerda que en su juventud, como teniente apostado en Catavi a fines de esa década, recibía mensualmente de la compañía Patiño –aparte de su salario del Ejército– setecientos bolivianos en efectivo, 1.500 bolivianos en asignaciones de vivienda, doscientos cigarrillos Derby, entrada libre al cine y precios bajos en la pulpería. A sus hombres se les asignaban sumas más pequeñas a modo de asegurar su sumisión a los directores de la empresa y de mitigar el impacto de la emisora minera que los exhortaba a unirse a sus hermanos afirmando "...somos soldados de la lucha de clase...".[19] A pesar de eso, la embajada americana aunó su voz a la de Patiño expresando su descontento por la "...inaceptable deportación de la policía local..." de Siglo

17 Gumercindo Rivera: *La masacre de Uncía*, Oruro, 1967; Guillermo Lora: *A History of the Bolivian Labour Movement*. Laurence Whitehead ed., Cambridge, 1977, p. 216 y ss. (Este volumen es una condensación de Lora: *Historia del movimiento obrero boliviano*, La Paz, 1966-80, algunos de cuyos volúmenes no son fáciles de obtener ahora. Siempre que sea posible, se hará referencia a la versión inglesa). Agustín Barcelli: *Medio siglo de luchas sindicales revolucionarias en Bolivia*, La Paz, 1956, pp. 108-111; 161-164. Juan Manuel Balcázar: *Los problemas sociales en Bolivia*, La Paz, 1947.

18 Asociación Nacional de Mineros Medianos: *Informe presentado por el directorio de la ANMM a la junta general ordinaria correspondiente a la gestión 1947-48*, La Paz, 1948, p. 39.

19 René López Murillo: *Los restaurados*, La Paz, 1966, p. 62.

XX durante la guerra civil de 1949, al enviar y respaldar una carta escrita por D.C. Derringer Jr., gerente local de Patiño, en que instaba al "...envío de expertos policías americanos a Bolivia para el entrenamiento técnico de una guardia elitista". No deja de ser revelador el que la embajada pensara que la compañía pagaría por tales servicios, poniendo así de manifiesto su relación con el Estado formal.[20]

A estas alturas, la embajada que tan enfáticamente había respaldado el informe Magruder se refería a los mineros en términos de "notoriamente radicales" y alertaba sobre grupos "que recibían entrenamiento militar" ofreciendo "un terreno especialmente fértil para el desarrollo del comunismo soviético".[21] Lo que había ocurrido en el interín es que el proletariado minero conformó una federación sindical nacional, encabezada por hombres cercanos al MNR pero también relacionados con el trotskista Partido Obrero Revolucionario (POR), cuyos líderes habían redactado el programa de la federación comprometiéndola en la abolición del capitalismo y en la instauración de la dictadura del proletariado. Un resultado menos conmovedor pero más inmediato fue que los costos en salarios de Patiño para 1946 habían aumentado en más de cincuenta por ciento con relación a 1941, y ahora enfrentaba una firme resistencia contra los despidos a que se vio obligado por la declinación de la demanda en el periodo de las posguerra.

La creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en la mina Huanuni, de Patiño, durante un congreso al que concurrieron más de treinta delegados en junio de 1944 fue, en gran parte, iniciativa del MNR, que en ese momento era un socio menor del gobierno reformista del mayor Gualberto Villarroel (1943-46). Aunque el patrocinio del partido había de ser crucial después de 1952, en ese momento el MNR no reflejaba una orientación clara respecto al movimiento obrero y tampoco ejercía ningún control ideológico sólido sobre el mismo. En efecto, el trascendental sindicato de Siglo XX se había formado bajo la iniciativa de dos miembros de clase media seguidores del promoscovita Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR): los hermanos Ruiz González. Por otra parte, si bien el MNR había ganado adeptos en las minas a través de sus certeros ataques en el parlamento contra el gobierno de Peñaranda (1940-43) por la masacre de Catavi y los había capitalizado cuando el PIR adoptó la desastrosa política de unirse a los partidos tradicionales para oponerse al "nazifascista" MNR y al "totalitario" Villarroel, su caída del poder en 1946 lo

20 *Espy to Washington*, N° 548, 14 de septiembre de 1949.
21 *Bleek to Washington*, N° 1545, 3 de marzo de 1947.

privó del patrocinio para apoyar las acusaciones a la Rosca. Durante los seis años siguientes de repliegue y clandestinidad, el MNR estrechó sus contactos con los mineros y obtuvo la afiliación de líderes sindicales claves —la del astuto y carismático Juan Lechín Oquendo (secretario ejecutivo de la FSTMB) y la de Mario Torres Calleja (secretario general)— pero nunca se dedicó a trabajar con las bases ni obtuvo el control total. Esto se debió en parte a que los mineros desconfiaban de lazos partidarios demasiado fuertes y estaban más apegados a la idea de independencia sindical; pero también reflejó la influencia poristá, que no se limitaba a vituperar en contra de los barones del estaño con tanta vehemencia como el MNR, sino que tenía además un programa infinitamente más coherente y radical que era defendido por sus militantes en los propios campamentos.

En noviembre de 1946, cuatro meses después de la caída del régimen Villarroel-MNR, cuando se vivía una situación de acrecentada represión y violento retroceso hacia la derecha, la FSTMB realizó un congreso extraordinario en la mina sureña de Pulacayo. Dos de los militantes más jóvenes y activos del POR asistieron al congreso: Guillermo Lora (elegido por Siglo XX) y Fernando Bravo (quien sorprendentemente actuó como corresponsal de El Diario). A pesar del nivel de desorden provocado por las dudas y ambigüedades de Lechín, Lora y Bravo no sólo lograron redactar el extremadamente radical discurso del secretario ejecutivo sino también obtener el apoyo a una extensa resolución política, que desde entonces ha sido trivializada por partidos de prácticamente toda denominación pero, pese a su antigüedad, continúa siendo el punto de referencia programático esencial de los mineros bolivianos y por extensión de la clase obrera en su conjunto. La Tesis de Pulacayo fue, en esencia, una adaptación a la situación boliviana del Programa de Transición redactado por Trotsky en 1938, con especial referencia a los objetivos sindicales. Definía a Bolivia como un país capitalista subdesarrollado y al proletariado como la única clase verdaderamente revolucionaria; convocaba a una alianza con campesinos, artesanos y clase media bajo su liderazgo; denunciaba al estalinismo y a la Rosca en igual medida; alertaba contra los riesgos que supone el confiar en "ministros de los trabajadores" nombrados por gobiernos burgueses; demandaba una escala móvil de salarios; proponía la ocupación de las minas y una confederación sindical centralizada, y finalmente hacía énfasis en que el movimiento sindical tendría un impacto duradero sólo si se convertía en una ofensiva de la clase obrera en contra del capitalismo.[22] Lo irónico de esto es que tal plataforma política habría desaparecido si Patiño no hubiera tomado a

22 Lora, *op. cit.* en inglés, pp. 246-252.

su cargo la tarea de propaganda de la izquierda, cuando publicó la Tesis de Pulacayo en su integridad en El Diario con objeto de alertar acerca del rumbo que estaba tomando la FSTMB.

Pese a que para muchos gran parte de la Tesis era incuestionable en sí y para otros su línea estratégica era demasiado académica para un debate prolongado, el énfasis puesto en las demandas y métodos tácticos le otorgó aceptación general, aun de quienes estaban lejos de simpatizar con el trotskismo. Posteriormente, incluso miembros del MNR habrían de reconocer la validez de muchos acápites de la Tesis: hecho que de ninguna manera significaba el fortalecimiento del POR, puesto que éste carecía de la capacidad organizativa para capitalizar el sindicalismo radical de los mineros y su simpatía general en apoyo político directo. El resultado general de esto fue que en los años previos a la revolución de abril, cuando el proletariado minero era mantenido a raya por la represión, se desarrolló una fuerte orientación radical que en muchos sentidos estuvo restringida por un economicismo, pero que también amenazó con sobrepasar ese límite y encabezar una iniciativa política obrera independiente. Las contradicciones de esta disyuntiva pasarían a ser la constante de las acciones mineras durante los treinta años posteriores a la revolución.

Desintegración en el campo

La Tesis de Pulacayo comenzaba con estas palabras: "Bolivia es país capitalista atrasado. Dentro de la amalgama de los más diversos estudios de evolución económica, predomina cualitativamente la capitalista, y las otras formaciones económico-sociales constituyen herencia de nuestro pasado histórico". En ninguna parte del país el lastre del pasado fue más evidente o perjudicial como en el campo, cuya organización agrícola abundó en residuos feudales. Si la minería fue el sector más dinámico, más moderno, de mayor capital intensivo en Bolivia y el que estableció un nexo directo con la economía mundial, la agricultura sin duda prevaleció en términos de ocupación, determinando el ritmo económico y el modelo sociopolítico de la vida a lo largo de todo el territorio nacional. Como hemos visto, más del setenta por ciento de la población económicamente activa trabajaba en este sector, la mayoría asentada en las áridas provincias del altiplano o en los valles más fértiles de Cochabamba. El norte y este del país, acosados por la malaria, estaban extremadamente poco poblados, pese a que estas regiones (Santa Cruz, Beni y Pando) son las de mayor extensión geográfica.

En términos precisos y locales, la forma de tenencia y el cultivo de la tierra fueron diversos y complejos, combinándose varios sistemas de enfiteusis (derecho perpetuo sobre tierra de propiedad de un tercero o arriendo hereditario), usufructo (derecho a la posesión temporal y uso de tierra de propiedad de un tercero), cultivo comunal y el sistema europeo tradicional de feudo franco. Sin embargo, la correlación de poder y propiedad en el campo era muy clara y al mismo tiempo profundamente desigual, pues estaba basada en el sistema de latifundio (hacienda grande) establecido durante la colonia y expandido durante los siglos XIX y XX, en detrimento de las tierras comunales que sobrevivieron de la época anterior a la conquista. Este sistema de concentración de la propiedad privada en inmensas haciendas sirvió para sustentar el retraso y las desigualdades estructurales de la agricultura boliviana, así como para mantener una tradición de opresión económica y social de la masa indígena, que no fue muy diferente a una mezcla de esclavitud y segregación racial.

Cuadro 1
Tenencia de la tierra (1950)

Tamaño de la propiedad (hectáreas)	Nº de propiedades	Total con dueño (hectáreas)	Total explotado (hectáreas)	Explotación según porcentaje
Menos de 5	51.196	73.877	40.028	54,2
5 a 50	19.509	278.459	86.378	31,0
50 a 200	5.014	478.291	75.090	15,6
200 a 1.000	4.033	1.865.408	134.790	7,4
1.000 a 5.000	4.000	8.724.776	167.006	1,9
5.000 a 10.000	797	5.146.334	55.365	1,0
más de 10.000	615	16.233.954	86.850	0,5
Total	85.160	32.741.099	645.506	

Fuente: Consejo Nacional Agropecuario, 1950.

El cuadro 1 ilustra muy claramente la escala de concentración de tierras en grandes haciendas y la ineficiencia con que fueron trabajadas, sin olvidar el bajo nivel de fertilidad de la tierra en el altiplano.

Entre las 615 haciendas que controlaban aproximadamente la mitad de las tierras cultivables del país, pero sólo el trece por ciento del total de cultivos, se dijo que hubo una hacienda de 6,5 millones de hectáreas; mientras, el cincuenta por ciento de la población rural controlaba el 0,13 por ciento de tierra cultivada, necesariamente sujeta a una dura explotación. Se ha estimado que en 1938 ocho hacendados poseían una décima parte

de la tierra cultivada.[23] El elevado nivel de importación de alimentos y el hecho de que menos del seis por ciento de la tierra cultivada fuera trabajado con maquinaria –cuya importación se evaluó en menos de seis millones de dólares en la década anterior a la revolución– ponen de relieve la ineficacia de esta forma de organización rural en un país que tenía los recursos naturales para ser un exportador neto de productos agrícolas. En efecto, resulta difícil negar la validez del argumento que sostiene que la hacienda se desarrolló más para controlar la mano de obra que como unidad para utilizar la tierra o perfeccionar la producción. Esta tendencia, sin embargo, no mitigaba las presiones expansionistas sobre las comunidades, ochenta por ciento de las cuales estaban en los populosos departamentos de La Paz y Oruro y muchas de ellas situadas en las ricas tierras alrededor del lago Titicaca.[24]

Entre la independencia y 1950, el número de comunidades descendió de cerca de once mil a 3.799, que conservaron algo más de siete millones de hectáreas en propiedad nominalmente colectiva, que en la práctica estaban sometidas a un sistema de jerarquía indígena aceptada y plenamente aprovechada, primero por las autoridades españolas y luego por las republicanas, como el único medio práctico de mantener la paz en el campo, de garantizar el antes vital tributo y de proveer constantemente mano de obra para las minas. Enormemente reducido en superficie y en cantidad de miembros, el número de comunidades supervivientes de 1950 reflejó, al menos, un grado de triunfo en la lucha contra la invasión de los latifundios que fueron sancionados a través de los estatutos de 1866, 1879 y 1884 en un esfuerzo por capitalizar la tierra, si no por incorporar a la mayoría de la población rural dentro de la economía de mercado. Empero, según el censo de 1950, los 259 mil cabezas de familia que no poseían tierra alguna, ni individual ni colectivamente, sobrepasaron en número a los comunarios de diversos tipos. Este sector de la población también resultaba mucho mayor que los 16 mil agricultores arrendatarios de toda descripción, 95 por ciento de los cuales poseía menos de 35 hectáreas cada uno.[25]

23 James Kohl, "The Role of the Peasant in the Bolivian Revolutionary Cycle, 1952-1964", (tesis doctoral inédita), University of New Mexico, 1969, p. 50; William S. Stokes: "The Revolucion Nacional' and the MNR in Bolivia", en *Inter American Economic Affairs*, XII, septiembre de 1958; David Weeks: "Land Tenure in Bolivia", en *Journal of Land and Public Utility Economics*, XXV, enero de 1950.

24 Una tesis sostenida por William E. Carter: *Aymara Communities and the Bolivian Agrarian Reform*, Gainesville, 1964.

25 Kohl, *op. cit.*, pp. 41-42; Amado Canelas, *Mito y realidad de la Reforma Agraria*, La Paz, 1966, p. 98.

En términos económicos, la "economía dual" de hacienda y comunidad fue más aparente que real, ya que esta última vendía una apreciable porción de sus excedentes y no estaba totalmente enraizada en la agricultura de subsistencia. De igual manera, el bajo nivel de producción de la hacienda, el reducido mercado local, el predominio del alquiler de mano de obra como la principal forma de ocupación del campesino y de acceso a la tierra aseguraban que la evolución hacia una agricultura comercial sea marginal. Hubieron, por supuesto, algunas excepciones regionales donde las comunidades fueron escasas, el número de arrendatarios superior al promedio y propietarios generalmente pequeños, particularmente las estructuras pastorales de Tarija, parte de Santa Cruz, Beni y las tradicionales tierras de guanos de Cochabamba. Tales excepciones no alteraron, sin embargo, el panorama general de la masa de trabajadores rurales que accedía a la tierra ya sea entregando al dueño una buena parte de su producción o trabajando en los campos de la hacienda principal cuatro y, a menudo, cinco veces a la semana con su propia semilla, herramientas y medios de transporte, quedando así marginada de la economía del dinero.

El empleo de los términos "feudal" y "esclavitud" con relación a los trabajadores campesinos en las haciendas señoriales no es puramente impresionista; pues, si bien estas prácticas pertenecían a un modo de producción ya superado y correspondiente a determinados límites económicos y a una superestructura sociopolítica, una serie de importantes rasgos se conservaron intactos en Bolivia aun hasta el siglo XX. La obligación del labriego y su familia a prestar servicios gratuitos al hacendado está entre las principales, es práctica conocida como pongueaje en el caso de los hombres y mitanaje en el de las mujeres. Esta obligación, por lo general, se cumplía dos semanas por año y forzaba al campesino a depender del soporte de su familia en el predio, o a gastar su valioso dinero en buscar quién lo reemplace. Una descripción del pongueaje en Cochabamba, escrita en 1949, refleja el alcance de estas serviles obligaciones con el propietario de la heredad:

> El Pongo costea su alimentación, aunque tiene derecho a los residuos. De ahí que va a cumplir "la obligación" cargado de su pequeña olla de barro, o de cobre, negra y reluciente de ollín, un saz de leña y una bolsa de mote y algunas especies comestibles.
> Se le señala como vivienda, un rincón de la casona señorial, en algún traspatio, junto a los pesebres o porquerizas. Allí improvisa lecho y fogón para preparar su lagua, cocer su mote o tostar su maíz.
> Inicia las labores antes del amanecer y concluye al promediar la noche. Es el último en el reposo como el primero en la faena cotidiana. Entre sus ocupacio-

nes habituales, apuntamos algunas: ayudar en los menesteres de la cocina. Cuidar las acémilas y aves de corral. Barrer las habitaciones, los grandes patios coloniales, caballeriza, porquerizas. Una casa de hacienda, de conformación patriarcal, es un pequeño mundo. Una especie de Arca de Noé. Posee animales de toda índole: desde caballos de paseo, mulas, asnos, aves y hasta cobayos. El pongo es albañil, acémila y muchas veces niñero. Estopa sucia que llena todos los huecos de la servidumbre patronal. Eso durante el día. En las noches se le asignan otras labores que forman parte del largo rosario de las "obligaciones". Hilar, tejer, desgranar maíz, "mukear".[26]

La práctica del pongueaje fue formalmente proscrita en 1945 por el régimen de Villarroel, pero estuvo vigente otros siete años, en que muchos hacendados incluían un número disponible de pongos en los avisos de venta de sus propiedades. Los hacendados ejercieron una autoridad casi total sobre sus colonos: el poder de administrar azotes, de quitarles tierra y privilegios, de conciliar disputas e, incluso, de imponer decisiones sobre sus vidas privadas. En esto, el hacendado generalmente era apoyado por los curas locales, cuya necesidad de recibir diezmos de parroquianos que persistían en conservar sus propias costumbres religiosas, en tanto consentían en participar en ceremonias de la fe cristiana, contribuyeron a afianzar un impresionante circuito local de control. Veinticinco años antes de la revolución, el embajador norteamericano se refirió al millón de "indios puros" como los "esclavos" del país, subrayando que "...parece haber un entendimiento entre los hacendados y la Iglesia para no permitir el contacto de sus colonos sino con curas católicos que hablaran el idioma nativo, a fin de evitar que éstos aprendan el español y huyan de la hacienda para buscar trabajo en las ciudades".[27]

Si éste fue el caso –en ocasiones–, en verdad no sirvió de mucho para fomentar una actitud liberal en los hacendados hacia sus protegidos, a quienes despreciaban paternalmente como a una especie subhumana. En la década de 1930, los hacendados cochabambinos se opusieron a la venta de tierras agotadas de conventos a una cooperativa campesina, porque consideraban que los labriegos nativos eran "flojos mentirosos, engañosos y nadie puede confiar en ellos".[28] Diez años más tarde, Los Tiempos, el periódico más importante de

26 En Rafael Reyeros: *El pongueaje*, La Paz, 1949, pp. 141-142, y en Andrew Pearse: *The Latin American Peasant*, Londres, 1977, pp. 119-162, se ofrece una excelente visión general del campesinado prerrevolucionario.

27 *Cottrell to Washington*, N° 967, 26 de enero de 1926.

28 Citado en Jorge Dandler Hanhart: *Local Group, Community and Nation. A study of Changing Structure in Oruro, Bolivia 1935-52*, (tesis de maestría, inédita), Wisconsin, 1967, p. 38.

Cochabamba, lanzó una serie de inclementes ataques contra la abolición del pongueaje que intentara Villarroel, y calificó al presidente de "demagogo irresponsable que está desatando y agitando a las hordas indígenas y amenazando con destruir a los bolivianos civilizados y sus propiedades".[29] En 1949, la Sociedad Rural Boliviana publicó un panfleto en defensa de la "orientación espiritual" de sus relaciones en el campo, porque "...en Bolivia un 15 % de los habitantes de ciertas ciudades viven en el siglo XX, y los indios del altiplano viven en el siglo XVI y los de la hoya amazónica viven aún en la prehistoria. Por consiguiente las teorías europeas no se pueden aplicar mecánicamente a toda América como piensan vanamente los marxistas".[30]

Tales actitudes fueron apuntaladas por un sistema social que, hasta la víspera de la revolución, prohibía la entrada de "indios" a ciertas calles céntricas y plazas de La Paz y que publicaba libremente en la prensa fotografías de "delincuentes" campesinos capturados, desprovistos de sus vestimentas inferiores y puestos entre rejas.[31]

Una de las características más uniformes de este régimen fue su arraigado racismo. Casi sin excepción, los trabajadores rurales fueron "indios", término cargado de menosprecio hasta la década de 1970 cuando fue restablecido con provocativo orgullo por el creciente movimiento a favor de la independencia política del pueblo nativo boliviano, el mismo que llegó al extremo de rechazar el término alternativo de "campesino" por impreciso y por considerarlo un eufemismo que disfraza la problemática de raza y nacionalidad.

La división de la sociedad en clases sociales correspondía prácticamente a las divisiones de raza determinadas fundamentalmente por la lengua materna y la fisonomía, pero también de acuerdo a la ocupación y a la vestimenta, permitiendo que una considerable minoría de la población sea considerada mestiza o chola por residir en el área urbana o mantener contactos allí, por hablar español y vestir ropa europea. El término "blanco" era aun más susceptible de manipulación y se lo utilizaba con menos frecuencia para referirse a los miembros de la clase gobernante o a la pretensión de establecer una herencia hispánica o europea. En muchos casos se empleó simplemente para establecer una distinción con las masas indígenas y ocultar el elevado nivel de

29 *Los Tiempos*, (Cochabamba), 23 de mayo de 1945.

* Cita traducida porque no se pudo hallar la versión original. (N. de la T.)

30 Sociedad Rural Boliviana: *El ataque comunista del PIR a la democracia y a la agricultura*, I. Paz, 1949, p. iv.

31 Por ejemplo, *El Diario* y *La Noche*, (La Paz), 5 de junio de 1947.

mestizaje evidente hasta en los estratos más altos de la sociedad. Como la Audiencia de Charcas anteriormente, Bolivia era una construcción criolla basada en la constante supresión de las naciones aymara, quechua y guaraní y en la negación de los ancestrales reinos del Kollasuya y Tawantinsuyu. Empero, un cuarto de siglo después de la fundación de la república, probablemente el veinte por ciento de la población era hispanoparlante y un grupo mucho menor tenía al español como lengua materna. En 1950, un millón de personas hablaba únicamente quechua, 664 mil solamente aymara y el español siguió como lengua minoritaria, aunque utilizada por la mayoría de los bilingües. Aun en 1976, más de una quinta parte de la población desconocía toda forma de español.[32]

Un profundo temor que albergaba la clase terrateniente era que esa acendrada identidad étnica y cultural se uniera al descontento por la falta de tierras y, superando la atomización estructural del campesinado y la perspectiva generalmente conservadora y proclive al servilismo, desatara una serie de sublevaciones rurales. Si bien tal posibilidad era exagerada, a menudo con fines políticos, el temor no carecía de fundamentos. La tradición oral había preservado el ejemplo de Tupaj Katari, quien en 1781 condujo una rebelión de las provincias altiplánicas contra el gobierno colonial y criollo, la cual en conexión con el levantamiento de Tupaj Amaru en el Cuzco había logrado desplazar por unos meses a la autoridad imperial en un área que por el sur se extendía hasta Salta. El recuerdo popular de Tupaj Katari incubó una visión milenaria pero también impulsó una serie de movimientos menos extensos: aquellos de 1866-71 en defensa de la comunidades y los de 1898-1900 que estallaron después de una década de desórdenes y en medio de una guerra civil "blanca", cuando uno de los contendientes se sintió lo suficientemente amenazado como para movilizar a los "indios" armados en su defensa, acción que fue extraordinariamente insultada y clamorosamente condenada.

El descontento en el campo por lo general era provocado por reclamos específicos y tenía objetivos limitados y fronteras parroquiales –a pesar del extraordinario nivel de movilidad de aquellos que transportaban mercancías o buscaban trabajo estacional–, pero no por ello era menos peligroso. Después del levantamiento de Zárate, "El Temible" Willka, en 1899, el acelerado desarrollo y profesionalización del ejército estaría esencialmente destinado a la

32 José María Dalence: *Bosquejo estadístico de Bolivia*, Sucre, 1851; *Censo Nacional de Población y Vivienda*, La Paz, 1976.

represión del mismísimo campesinado que engrosaba los rangos inferiores de sus filas. En 1914, el embajador británico desechó confidencialmente toda posibilidad de triunfo de una rebelión indígena, empleando apenas un poco más del escarnio que él y sus colegas reservaban para la clase gobernante boliviana, cuando decía "...actualmente... todo intento de sublevación está condenada al fracaso y el sueño del indio de reconstruir la dinastía inca, si en realidad la hubo alguna vez en su cerebro torpe y saturado de alcohol, desaparecerá frente a una ráfaga de balas Máuser...".[33] En realidad, este tipo de respuesta se transformó en norma, pero muy pocas veces o nunca la rebelión fue provocada por movimientos genuinos de restauración, sino más bien por arranques de exasperación aislados frente a las prácticas abusivas de hacendados corregidores o mayordomos. En marzo de 1921, los comunarios de Jesús de Machaca mataron a varios dignatarios locales y al corregidor, cuando descubrieron que éste había dejado morir de hambre a un prisionero mientras recibía una visita de diez días a La Paz. El ejército respondió asesinando a varios cientos de campesinos, quemando casas y destruyendo los cultivos, antes de enviar a siete cabecillas a la cárcel de la capital. No podía esperarse del presidente en funciones, Bautista Saavedra, mayor muestra de indulgencia, pues veinte años antes como abogado defensor de Zárate Willka se había referido a ellos como: "...orangutanes sedientos de sangre...", "...la honda perversión de la sensibilidad moral aymara..." y "...una raza moralmente arrofiada que está degenerando en deshumanización...".[34] En 1927 se desató una represión igualmente radical cuando, debido a que la construcción de la línea ferroviaria entre Potosí y Sucre incrementó aceleradamente el valor de las tierras y avivó la presión de los hacendados sobre las comunidades, éstas comenzaron a movilizarse en los departamentos de Potosí y Chuquisaca. El embajador británico (otra persona, pero la misma acritud) informó que eran "...12.000 los sublevados...", pero después de que "...unos 100 ó 200 fueron muertos a tiros, el orden fue restablecido...", añadiendo para suavizar el informe que "...los indios son más salvajes cuando están sublevados..." y que "...vuelven al canibalismo, devoran a su enemigos caídos".[35] El informe enviado a Washington fue tan ridículo como el anterior, puesto que incluía una denuncia en sentido

33 *Gosling, to London*, N° 21, abril de 1914, FO 371/1914. En 1928, el embajador Mitchell informaba que el presidente Siles era "mitad débil como fuloor su código del honor está muy por debajo de aquel de un chino". FO 371/13466.

34 Bautista Saavedra: *El ayllu - Proceso Molinos*, La Paz, 1971.

* Cita traducida porque no se pudo hallar la versión original. (N. de la T.)

35 *Mitchell to London*, N° 12, 13 de septiembre de 1927, FO 371/11963.

de que la revuelta fue desatada por la ejecución de Sacco y Vanzetti en EE UU, y añadió un aspecto alarmante: la presencia confirmada de "agitadores comunistas" en la región. En este caso, se trataba de los hermanos Luis y Gustavo Navarro (Tristán Marof), antiguos y enérgicos militantes, que, contrariamente a lo que afirmaba el gobierno, no estaban en directo contacto con Bujarin, sino que hablaban perfectamente el quechua y el aymara y eran frecuentemente arrestados por sus actividades de instigar a los oprimidos tanto en el campo como en la ciudad.[36] En las décadas siguientes se descubrió que la mano oculta de la "agitación comunista" estaba prácticamente en cada uno de los casos de desorden rural, pero de mucha más importancia fue el arrancar a cientos de miles de campesinos de las múltiples coacciones de su existencia parroquial para reclutarlos en el ejército y hacerlos pelear contra el Paraguay en la guerra del Chaco (1932-35).

Surgimiento de una política de masas

En la década de 1930, los regímenes de las oligarquías liberales y propulsoras del libre cambio que se establecieron durante la segunda mitad del siglo XIX experimentaron una grave crisis política y económica generalizada en toda América Latina y dieron origen a nuevas formas de dominación política para contener la expansión real de la nación política y combatir la influencia de corrientes radicales de pensamiento. En su mayor parte, fueron los militares quienes acometieron esta tarea, dado que por su carácter institucional poseían los medios coercitivos e ideológicos para cubrir la brecha, aunque en muchos casos sólo temporalmente. Fue ésa una década de proyectos bonapartistas, de fluidez política y de experimentación, así como de reorganización económica. Indudablemente, una buena parte del poder acumulado por la hacienda y la acrecencia de la democracia formal se mantuvieron inclementes, pero se puso fin a algunas formas de gobierno establecidas en muchos países: desde la consolidación de una democracia estatal reformista en México, con Cárdenas, hasta el movimiento semicorporativista de Getulio Vargas en Brasil y el surgimiento de un frente popular en Chile.

Esta tendencia generalizada halló eco en Bolivia. Durante los veinte años anteriores a la revolución, la oligarquía tuvo que enfrentar crecientes

36 *Contrail to Washington*, N° 1366, 27 de agosto de 1927.

ataques de diversos sectores que llegaron a ejercer poder político formal en una serie de ocasiones. El viejo orden fue constantemente cuestionado y progresivamente debilitado; pero pudo conservarse firme gracias a una fina fuerza económica y recurriendo con más frecuencia a la dictadura y a la represión.

Las raíces económicas de tan extendida crisis estaban firmemente asentadas en la depresión mundial. A despecho del hábil manejo de las cuotas de producción por parte de los barones del estaño y de sus destreza para revivir precios en el lapso de tres años, las finanzas públicas bolivianas cayeron en un desorden total y los pequeños negocios quebraron en una escala sin precedentes. Aun para las pequeñas y sofisticadas empresas mineras relativamente provistas de recursos el impacto fue serio: de las 47 compañías que conformaban la Asociación de Industriales Mineros en 1924, en 1932 solamente quedaban 16. El boliviano dejó de ser una moneda convertible en 1931 y el gobierno suspendió el pago de la deuda pública, cuya cifra prácticamente correspondía al cincuenta por ciento del ingreso por exportaciones. El costo de vida subió de 100 en 1931 a 1.011 en la década siguiente y a 5.041 en 1951; el germen de la inflación se implantó firmemente en el sistema económico. El desempleo aumentó rápidamente, aunque no hay cifras exactas registradas. De modo que, mientras las grandes empresas salieron bastante bien de la crisis, las pequeñas cayeron en bancarrota, la clase media perdió gran parte de su poder gananciał y su potencial de ahorro, y la clase trabajadora fue duramente golpeada por la pérdida de sus empleos y una caída perpendicular de su salario real. En términos inequívocos, la economía de la Rosca se mostró vulnerable y excesivamente parcial en sus concesiones; nunca volvería a alcanzar el auge de la década de 1920 ni a restructurar las alianzas que tanto le sirvieron en las primeras décadas de siglo.[37] Sin embargo, en términos políticos y sociales, esta crisis fue superada por otra que afectó profundamente a la nación, dislocando el molde de la antigua Bolivia.

La guerra del Chaco fue identificada, por el MNR y por muchos escritores bolivianos de historia política moderna, como la causa más importante de la revolución de 1952. Este argumento tiene peso en muchos sentidos, pero tiende a empequeñecer la influencia de una serie de sucesos políticos consecutivos que, si bien derivaron directa o indirectamente de la guerra también estuvieron determinados por otros factores tanto nacional como internacionalmente.

37 Laurence Whitehead: "El Impacto de la gran depresión en Bolivia", en *Desarrollo Económico*, N° 45, vol. 12, abril-junio de 1972.

No obstante, la guerra indudablemente tuvo un papel fundamental en la apertura de una nueva época.

En apariencia, los tres años de guerra entre Bolivia y Paraguay por la posesión de las enormes e inaccesibles extensiones de tierra cubierta de maleza que comprende el Chaco Boreal representaron simplemente una nueva derrota en una serie de guerras que redujeron la superficie del país a la mitad de lo heredado con la independencia. La guerra se libró a cientos de kilómetros de los principales centros de población, lo cual contribuyó a forzar más los recursos logísticos tan rudimentarios de la nación y a desorientar y debilitar sobremanera a los cientos de miles de reclutas enviados desde el altiplano y los valles a los llanos del sur, donde alternativamente se deshidrataban al sol como camarones o eran empapados por torrenciales lluvias; la sed y las enfermedades causaron mayor cantidad de bajas que las balas de los paraguayos. En total, unos 250 mil hombres fueron enviados al frente, un elevado porcentaje de los hombres entre los dieciséis y cincuenta años de edad de una población de casi dos millones de habitantes. De estas tropas, más de cincuenta mil soldados murieron y los otros veinte mil capturados estuvieron hasta cuatro años en campamentos insalubres, alimentando un odio constante contra sus comandantes de mayor rango, así como un vehemente nacionalismo. La guerra, por lo tanto, afectó a la mayoría de los sectores de la sociedad boliviana y, casi sin excepción, ocasionó descontento por las terribles condiciones del frente, por la manifiesta ineficiencia del alto mando y por la rigidez y "cobardía" del gobierno, que, después de haber provocado el conflicto, había presidido una serie casi ininterrumpida de derrotas, cambiando comandantes a intervalos uniformes, incumpliendo con la provisión adecuada de suministros o no tomando iniciativa alguna para sacar a las tropas del "infierno verde" donde fueron fácilmente aventajadas en maniobras por los guaraníes, más acostumbrados a tales terrenos y condiciones.

Después del primer año de guerra, cuando ya quedó claro lo que acarreaba el servicio militar, muchos campesinos se opusieron a la conscripción y tuvieron que ser reclutados a la fuerza. Una aplastante mayoría de los soldados de infantería estaba compuesta por campesinos quechuas o aymaras, para quienes esa pesadilla fue su primer contacto prolongado con gente urbana y una introducción a la noción de Bolivia como nación, a la de política, a la habilidad en el manejo de armas de fuego y a un conocimiento superficial del español. Para los jóvenes de clase media reclutados como suboficiales y subalternos, el impacto fue igualmente duro, pues no sólo percibieron y soportaron las consecuencias de la incompetencia y actitudes egoístas de sus superiores, sino que

también compartieron la situación de las tropas de primera línea en el frente; se informaron de la vida en el campo y en las minas y tuvieron que reflexionar sobre el sistema político que los condujo a semejante desastre. Una generación entera fue desgarrada por la experiencia de la guerra. La mayoría de aquellos que regresaron del ejército con opiniones políticas positivas había alimentado un trepidante nacionalismo; sólo una ínfima proporción de militantes izquierdistas fue licenciada, una minoría se mantuvo fiel al pacifismo y salió al exilio y muchos más murieron en el frente por sus ideales.[38]

Aun antes de la derrota final y de la tarea extremadamente difícil de desmovilización, el ejército ocupó el centro mismo del escenario político, reemplazando al presidente Salamanca por su vicepresidente en noviembre de 1934. Después de la tregua final, la institución castrense se vio en la necesidad de participar más activamente con objeto de defender su identidad corporativa y poner límites sólidos a las corrientes radicales que surgieron tanto dentro como fuera de sus filas. Luego de una corta huelga general en 1936, el alto mando derrocó al presidente Tejada Sorzano para iniciar una década de gobiernos militares; fue la primera vez –con una excepción no muy larga en 1930-31– que gobernaron oficiales en servicio desde 1880. La época de la posguerra fue testigo de una explosión de sentimiento popular, aquella que es tan inherente a las crisis políticas y tan difícil de captar para los científicos políticos. En este caso, se trataba de un sentimiento muy específicamente determinado de tracción, sufrimiento compartido, visión maniqueísta de cobardía y heroísmo, división generacional y desplazamiento ideológico mezclados por el trauma colectivo de la derrota en la guerra. Estos elementos, a menudo

38 La cantidad de bibliografía sobre la guerra del Chaco es absolutamente alucinante y muy frecuentemente fatal es de un carácter extremadamente detallado. En inglés existe solamente un estudio completo y fiable, el de David H. Zook: *The Conduct of the Chaco War*, Gainesville, 1960. Yo intenté brindar una descripción sucinta y racional de esta guerra en el último capítulo de mi trabajo *Politics of the Bolivian Army: Institutional Development, 1879-1945*, (tesis doctoral), University of Oxford, 1979. En castellano se ha editado con el título de *Orígenes del poder militar. Historia política e institucional del Ejército Boliviano hasta 1935*, Quipus, La Paz, 1987, y Plural editores, La Paz, 2003). Desde la perspectiva boliviana, el mejor estudio global pertenece a Roberto Querejazu (*Masamaclay*, La Paz, 1965), si bien debido a sus trigerencias ideológicas es preciso leerlo con bastante agudeza. El trabajo militar modelo pertenece al chileno Aquiles Vergara Vicuña (*La Guerra del Chaco*, 7 vol., La Paz, 1940-1944), y el equivalente al lado paraguayo es de Carlos José Fernández (*La Guerra del Chaco*, 3 vol., Buenos Aires y Asunción, 1956-67). Herbert Klein, en *Parties ...* ofrece un bosquejo ilustrativo; pero es mucho más detallado y útil en cómo a los regímenes de la posguerra, cuya descripción continúa siendo la mejor de las existentes.

impalpables, se combinaron para erosionar la hegemonía liberal y su sentido más amplio del orden de cosas, construyendo la matriz dentro de la cual cobraron forma las nuevas ideas políticas nacionalistas y radicales.

La caída de Tejada Sorzano, significativamente acelerada por una mezcla de poderes sindicales y militares, fue el comienzo de un período de gobierno militar populista, que desde entonces ha sido apodado como "socialismo militar". Los regímenes de los coroneles David Toro (1936-37) y Germán Busch (1937-39) en la práctica estuvieron caracterizados por una falta de dirección y coherencia que los condujo por un sendero sumamente irregular: desde la declaración protofascista de la sindicalización obligatoria a la nacionalización de la Standard Oil (1937), y de la obligación de depositar todo beneficio en divisas en el Banco Central al retroceso que significaba la disolución de un Congreso dominado por izquierdistas y la declaración de dictadura total (1939). Con todo, estos gobiernos conservaron un temple firmemente populista y nacionalista que sin duda agotó las fuerzas e iniciativas de los grupos izquierdistas agitadores de obreros y veteranos, pero que también actuó en detrimento de la Rosca, cuyos administradores trataron permanentemente de evitar que los impulsivos oficiales jóvenes tomasen medidas que les parecían imprudentes. Este bonapartismo delineó los rasgos de futuros acontecimientos, en el afán por conferir carácter popular y nacional a un gobierno militar, en su preocupación por desarrollar los recursos y el aparato del Estado, un patronazgo autoritario de sectores del movimiento obrero y en el apoyo brindado a la convención reformista de 1938. Esta reunión engendró mucha palabrería y un agrio debate, pero de ella resultó un nuevo Código del Trabajo que redujo la jornada laboral y estableció un seguro social básico, así como una Constitución que vindicaba la propiedad, siempre que ésta cumpliese una función social. Por lo tanto, si bien el "socialismo militar" tambaleó bajo la presión de los barones del estaño y sus aliados, puso en evidencia su vulnerabilidad política y los definió como la antítesis del nacionalismo, ahora venerado en la experiencia del Chaco.

Cuando el joven e inestable héroe de la guerra, Germán Busch, se voló los sesos en agosto de 1939 como un último gesto de exasperación ante su incapacidad de dominar a las grandes compañías o de controlar a los partidos de izquierda, él mismo puso fin a uno de los períodos más dinámicos y confusos de la vida política boliviana. Fuerzas contrarias habían intentado ejercer influencia a través de un mismo gobierno, el cual sobrevivió menos por alguna lógica política interna que por representar al elemento "bueno y saludable" de un ejército derrotado y por tener el respaldo de los veteranos. Con la muerte

de Busch, una política predominantemente determinada por el Chaco tocó a su fin. En el paréntesis posterior se demostró que este vacilante cesarismo había triunfado parcialmente en la medida en que la izquierda se mantuvo profundamente dividida y desorganizada. Los regímenes de los generales Carlos Quintanilla (1939-40) y Enrique Peñaranda (1940-43), respaldados por una alianza de último momento entre los partidos tradicionales conocida como la Concordancia, reimpusieron el mandato de la Rosca sin demasiado problema. La nacionalización de Toro fue mitigada con el pago de una generosa indemnización; y las medidas de Busch o bien fueron invertidas, como en el caso de las imposiciones sobre divisas, o bien abandonadas al polvo de los libros de estatutos, como en el caso del Código del Trabajo y varios artículos de la Constitución.

Esta fácil restitución del viejo orden acentuó la naturaleza poco clara de las fuerzas políticas posbélicas, muchas de las cuales eran bastante menos radicales de lo que sus resonados nombres sugerían. Empero, si la febril actividad de Toro y Busch había logrado retrasar el desarrollo de nuevas corrientes políticas, el poco imaginativo régimen de Peñaranda tuvo el efecto de acelerar su surgimiento. Los partidos que se consolidaron en este período habrían de tener una vida extraordinariamente larga y muchos de sus líderes se mantendrían en el centro de la vida política durante otros cuarenta años. En las décadas que siguieron, el gobierno de estos coroneles resultó ser menos importante en sí mismo que como un hito decisivo del que surgió una nueva política de masas.

Las dos fuerzas que manifestaron más claramente la influencia nacional corporativista de la década de 1930 fueron el MNR y la FSB, y ambos pusieron sus ojos en Europa en busca de orientación. La Falange se había fundado en Chile en 1937, a imagen y semejanza de su homónima española. Durante muchos años, este partido fue una fuerza marginal y representaba sólo uno de los minúsculos grupos fascistas que desempeñaban actividades proselitistas en las universidades. Su fundador y dirigente, Óscar Unzaga de la Vega, era un hombre que se irritaba con facilidad, pero excelente orador que poco a poco se convirtió en el punto de atracción de oficiales y estudiantes jóvenes que no se dejaban impresionar por el tedio de los programas económicos o por las minucias de una política social, pero que sí se entusiasmaban con la existencia de células secretas de conspiración y las temerarias concepciones del "Decálogo" de 1941 del partido, "...una creación típicamente juvenil..." que proclamaba: "Bajo los auspicios de la Organización, Justicia y Solidaridad, el nuevo Estado Boliviano será organismo integral que, basado en la voluntad de ser una na-

ción, subordinará los intereses personales, de grupo y de clase al supremo interés de la bolivianidad... El individuo participará de la unidad orgánica del Estado mediante un régimen corporativo en el que cada uno desempeñe su función de acuerdo a la calidad y especialización de su trabajo".[39] En los cuarenta años siguientes apenas se alteró marginalmente la esencia y tenor de la ideología del partido. Si bien este partido resultó ser un colaborador útil para la conspiración y siempre pudo contarse con él para reunir a una serie de oficiales simpatizantes y a bandas de estudiantes extremistas para manifestaciones y actividades terroristas, nunca llegó a ejercer un liderazgo real sobre la derecha tradicionalista y no logró ingresar en el gobierno sino en 1971, por primera vez.

En sus primeras etapas, el MNR no fue muy diferente de la FSB. Los periodistas que tenían afinidad con este partido y trabajaban en el periódico La Calle en la década de 1930 y principios de 1940 fueron ciertamente más sofisticados y creativos desarrollando un estigma sumamente fuerte y popular de censura contra la Rosca. Sin embargo, su nacionalismo, en lo esencial, fue muy poco menos místico que aquel de los falangistas. La fuerza impulsora del MNR derivó de la destreza verbal y de la propaganda parlamentaria de una camarilla de jóvenes veteranos del Chaco que aumentaron sus adeptos corporativistas a través de una amplia orientación antioligárquica y antiimperialista. Figuras como la de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo, Wálter Guevara Arze, Germán Monroy Block, Carlos Montenegro y Augusto Céspedes, todos ellos con educación universitaria y dentro o en los linderos de la élite profesional, tuvieron algo que ver en los experimentos "socialistas" de la década de 1930. En 1941 se unieron para formar el MNR sobre la base de un programa que no fue muy distinto de aquel del partido nazi alemán. Uno de sus primeros documentos muestra esta combinación de tonalidades: "Denunciamos como antinacional toda posible relación entre partidos políticos internacionales y las maniobras del judaísmo, entre el sistema democrático liberal y las organizaciones secretas... Exigimos la prohibición absoluta de la intervención de accionistas o capital extranjero en los periódicos, revistas y demás publicaciones...".[40] Los intelectuales del MNR

39 Citado en Marcos Domic: *Ideología y mito: los orígenes del fascismo boliviano*. La Paz, 1978, p. 221. Sobre la propia versión de la evolución de la FSB, ver Enrique Achá Alvarez y Mario H. Ramos y Ramos: *Unzaga: mártir de América*, Buenos Aires, 1960; y Mario Gutiérrez: *Memorias*. La Paz, 1979.

40 *Movimiento Nacionalista Revolucionario*. La Paz, 1942. En Christopher Mitchell: *The Legacy of Populism in Bolivia*. Nueva York, 1977, se ofrece un estudio sobre los primeros dirigentes del MNR.

tenían un claro sentido de la historia, que los llevó a reclamar, desde un principio "la liberación económica y la soberanía del pueblo boliviano"; empero carecían de un programa coherente con que respaldarla y que fuera más allá de filípicas en contra de un capital que era extranjero. Nunca hicieron amago de nacionalizar las minas o de aplicar una reforma agraria. Con solamente algunos centenares de miembros, el partido buscó principalmente una alianza con los militares, ya que su línea antiimperialista para muchos miembros de la clase obrera no era sino un aspecto de su orientación predominantemente fascista. Y no fue diferente la precepción de la embajada americana al ligar al MNR con Perón o al describirlo en 1946 como "típicamente totalitario del tipo nazifascista, encomiadamente antisemita" (*sic*) y señalar que muchos de sus líderes más notables eran simpatizantes del nazismo. La embajada añade que "...mientras estuvo en el poder utilizó métodos tiránicos para aplastar a sus opositores".[41]

El partido que sostuvo esta crítica de la manera más vehemente y firme fue el promoscovita PIR fundado en 1940 por un grupo creado en torno a los intelectuales cochabambinos José Antonio Arze y Ricardo Anaya. Habiendo vivido el período de exilio del Chaco en Santiago, estos personajes recibieron una enorme influencia de la política del Partido Comunista Chileno, de "un frente popular con partidos democráticos de la burguesía", línea que fue forzosamente suscrita a escala internacional después de la invasión alemana a la Unión Soviética. A pesar de no mantener lazos formales con el Kremlin, el PIR fue un partido sumamente ortodoxo y produjo bastante literatura sobre teoría marxista y sobre desarrollo económico de Bolivia, el cual –argüía– debía pasar por una fase democrático-burguesa, por la erradicación del feudalismo y por un desarrollo masivo de las fuerzas de producción, antes de lanzarse a una revolución socialista.[42] Fue precisamente el PIR el partido que agrupó a las principales tendencias izquierdistas de la década de 1930. En las elecciones de 1940, Arze obtuvo considerables votos con relación a Peñaranda, aventajó al MNR en el Congreso y sus partidarios en las universidades y sindicatos fueron apreciablemente más numerosos. En los primeros años de su existencia, el PIR parecía haber remediado la prolongada ausencia de un partido comunista lo-

41 Willard Galbraith: "Report on Political Parties and Aggrupations in Bolivia", adjunto en *Flack to Washington*, N° 619, 21 de noviembre de 1946.

42 La sólida *Sociología marxista* (Oruro, 1963) de José Antonio Arze es representativa de su enfoque teórico. El programa original del PIR está en *El PIR y el desarrollo nacional. Soluciones para los problemas nacionales*, La Paz, 1961.

cal y daba visos de estar conformando el primer partido de masas de la izquierda en la historia del país.

En este sentido, sufrió la permanente oposición del POR, creado en 1935 por Tristán Marof y José Aguirre Gainsborg, quienes se separaron poco después por la obstinación de Marof en dar al partido una orientación populista amplia. Bien podría uno referirse a Aguirre como el padre de la sólida y prolongada tradición trotskista, pero su temprana muerte accidental en un parque recreativo dejó al movimiento sin líder determinado alguno. Aunque Tomás Warqui (Oscar Barrientos) y Miguel Núñez mantuvieron vivo al partido, éste no dejó de ser un núcleo muy pequeño de intelectuales, obreros y estudiantes activistas hasta 1946, cuando tanto el POR como el MNR comenzaron a beneficiarse, en términos de militancia e influencia, de la degradación del hasta entonces mucho más grande PIR.[43]

Este cambio del equilibrio de fuerzas se produjo con el golpe que destronó al afable e incompetente Peñaranda en diciembre de 1943, durante y en el periodo inmediatamente posterior al régimen de Villarroel. El flamante régimen militar tuvo un carácter muy diferente al de su predecesor. Planificado y provisto de jóvenes oficiales de la logia secreta RADEPA (Razón de Patria), el gobierno de Villarroel resultó ser una respuesta más categóricamente nacionalista y de mayor autoridad ante el clima de la posguerra del Chaco que las gestiones de Toro y Busch. Por la presión norteamericana, se vio constantemente forzado a camuflar la simpatía de muchos radepistas con el Eje y a justificar el respaldo que daba y recibía del régimen militar argentino, en el cual Perón era ya un líder altamente influyente. Inexperta en administración política y civil, la logia buscó un aliado civil, y, ante el rechazo del PIR, se decidió por el MNR, con quien tenía un terreno ideológico bastante común. El PIR se apresuró a formar un bloque con la derecha tradicionalista y la embajada americana ante la nueva "dictadura" del régimen y su "rechazo a la democracia".

El problema crucial para el PIR y la preocupación constante de la Rosca no radicaban en la intermitente torpeza o en las motivaciones fascistas necesariamente menguantes del régimen, sino en el éxito de su política, que obtuvo el apoyo de importantes sectores de la clase obrera y el campesinado.

43 Para un análisis crítico y detallado de los primeros años del POR por uno de sus militantes ver Guillermo Lora: *Contribución a la historia política de Bolivia*, vol. 1, La Paz, 1978. Las posiciones del partido en su primera fase están descritas en *Boletín de Información*. La Paz, 1939.

Villarroel declaró que "...él no era enemigo de los ricos, pero sí más amigo de los pobres". Permitió que sus ministros movimientistas aumentaran los impuestos de las compañías estañíferas a través del Banco Central, aplicó el Código del Trabajo de Busch, aprobó incrementos de sueldos, hizo causa común para la creación de la FSTMB, abolió formalmente el pongueaje y presidió el primer Congreso Indigenal del país (1945), al que concurrieron una diversidad de representantes campesinos. Todo esto aconteció de una manera desigual y estrictamente limitada. Dirigidos por Víctor Paz Estenssoro, los economistas del MNR no dinamizaron la economía pero redujeron los niveles de inflación e incrementaron las reservas a través de políticas ortodoxas. Los radepistas siguieron controlando el orden público con métodos violentos y, sin lugar a dudas, persiguieron a miembros del PIR de la misma forma que ejecutaron a unos cuantos líderes conservadores. El estímulo al movimiento campesino nunca pasó de declaraciones formales, el Congreso de 1945 fue una imposición efectiva sobre el régimen y, como hemos visto, la situación del campo se mantuvo extremadamente atrasada. Se amplió muchísimo la libertad sindical, pero aun así el ejercicio de ésta fue sumamente parcial y muy similar al sindicalismo de la Argentina de Perón. Además, Washington tuvo una carta a su favor en el control de la ventas de estaño y estuvo en condiciones de forzar la renuncia de muchos ministros movimientistas, de poner restricciones a la política exterior del régimen y de prohibirle que lance una ofensiva contra la Rosca, la cual aún controlaba la prensa y las esferas más altas de la economía.[44]

En última instancia, fue este factor, combinado con las contradicciones inherentes y las limitaciones naturales de la forma política que cobró este enfático pero desorganizado empeño reformista, la causa de su caída. La base proletaria, todavía notable, del PIR en las ciudades, el considerable apoyo de la clase media aliada con el aparato ideológico de las compañías estañíferas y las formidables presiones "democráticas" de Washington fortalecieron un movimiento popular urbano contrario al estilo autoritario del régimen. Divididos en líneas generacionales por RADEPA, hacia 1946 los militares ya no representaban una fuerza de represión viable; todos los periódicos estaban con la oposición y sectores claves de la clase media presionaban a favor de incrementos salariales que el Estado no estaba en condiciones de otorgar. En una coyuntura

44 El régimen de Villarroel ha sido estudiado desde diferentes posiciones. En Augusto Céspedes: *El presidente colgado*, Buenos Aires, 1975; en José Antonio Arce: *Bolivia bajo el terrorismo nazifascista*, Lima, 1945; en Pedro Zilverti Arce: *Bajo el signo de la barbarie*, Santiago, 1946; en René González Torrez y Luis Iriarte Ontiveros: *Villarroel y el misterio de la revolución nacional*. La Paz, 1983.

política extraordinaria –y quizás única–, la derecha tradicional y la izquierda ortodoxa minaron esfuerzos para dirigir una insurrección popular que llevó el sello indeleble de la situación internacional cuando el confundido pero decidido presidente fue arrastrado desde el palacio y linchado a la manera de Mussolini.[45]

Testigos oculares cuentan que cuando Villarroel y sus asistentes fueron colgados de los postes de la plaza Murillo estalló una tormenta eléctrica que no correspondía a la estación del año, aumentando la superstición de la multitud. Algunos observadores más mundanos, especialmente los militantes de base del PIR, también quedaron meditando sobre el curso que había tomado la rebelión. Aunque sirvió para generar una masa de seguidores en los pueblos, este hecho resultó notablemente efímero; mientras que en las minas y el campo la revuelta produjo oposición pasiva y descontento desde un principio. En seis meses estuvo claro el contenido social de la revuelta; hubo de ser el último movimiento de derecha que contó con respaldo popular y que no hizo sino destruir al PIR y dejar una profunda huella en la memoria política de la izquierda. Villarroel se convirtió en un mártir del nacionalismo y su derrocamiento en una concluyente denuncia de oportunismo político, no importa cuán hermosamente hubiera sido teorizada.[46]

La revolución de 1946 dio paso a una fase política que pasó a ser conocida como el "sexenio", un interludio de seis años de gobierno conservador y de creciente represión entre las reformas transitorias patrocinadas por los militares y la insurrección de abril. En primer término, el respaldo popular a la rebelión y el contexto internacional hicieron necesaria la escrupulosa observación de las formas democráticas; el poder estuvo controlado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta las elecciones relativamente libres de 1947, en las cuales el MNR fue prácticamente proscrito; pero el Bloque Minero del POR y la FSTMB participó y obtuvo media docena de escaños. Con todo, al final de ese año, el conflicto interno y el comienzo de

45 Para este importante episodio ver Alfonso Finot: *Así cayó Villarroel*. La Paz, 1966; Germán G. Villarroel: *Historia de la revolución popular del 21 de julio de 1946*, 2 vol., La Paz, 1946. El 25 de julio, el embajador norteamericano envió a Washington su "Diary of a Successful Revolution", donde la describe como "... una revolución muy popular en todo el sentido de la palabra ...éste puede resultar el primer gobierno democrático en la historia de Bolivia... un golpe irreparable para la formación de un bloque antiestadounidense tan amado por Perón". *Hoy*, 25 de julio de 1946.

46 Las amplias características políticas de este período han sido hábilmente resumidas en Manuel Frontaura Argandoña: *La revolución boliviana*. La Paz, 1974.

la Guerra Fría hicieron que esta pequeña pero no obstante clamorosa oposición fuera inaceptable, especialmente porque estaba ayudando a descubrir fisuras en la alianza gobernante.

Aunque el campesinado no se congregó en defensa de Villarroel, sí mostró su activo descontento a lo largo de 1947, en una escala nunca vista desde el cambio de siglo. Pese a que el MNR y hasta cierto punto el POR habían comenzado a tomar ciertos contactos con líderes campesinos y a que ocasionalmente circulaban folletos políticos en el campo, el primero se opuso a cualquier tipo de política de movilización de masas rurales, en tanto que el segundo carecía de recursos para desarrollar esta tarea eficientemente.[47] No hubo, de manera alguna, un movimiento unificado y mucho menos una noción clara de dirección política, pero la renuencia de los terratenientes a adherirse al decreto de Villarroel y su determinación de erradicar la "subversión" aumentaron considerablemente la tensión. En las minas, la ausencia de una defensa del régimen derrocado condujo a un repliegue mesurado, pero el nuevo gobierno de Hertzog no pudo proscribir inmediatamente la FSTMB o exiliar a sus dirigentes, particularmente mientras los piristas estuvieran en el Ministerio de Trabajo. No obstante, en enero de 1947, el PIR fue parte de un conflicto armado con los mineros de Potosí, hasta entonces fuerte del partido; la masacre resultante de hecho acabó con el PIR como fuerza dentro de la clase obrera organizada, proceso que en algunos sentidos empezó bastante antes de 1946, cuando la ruptura del pacto Hitler-Stalin había llevado al PIR, al igual que a otras muchas agrupaciones comunistas en América Latina, a limitar sus demandas radicales a fin de asistir a los Aliados en su esfuerzo bélico. Uno de los resultados de esto fue el fortalecimiento del POR y del MNR, que siguieron cultivando lazos con los dirigentes de la FSTMB, sobre la base de su patrocinio con Villarroel y de un cercano contacto con Lechín. Otro resultado fue el debilitamiento del PIR a nivel nacional que lo hizo susceptible a los ataques de la derecha. En el curso de un año se vio obligado a pasar a la oposición y de ser considerado aliado "democrático" pasó a ser denominado fuerza "prosoviética". Dentro del movimiento obrero, poca atención se prestó a ataques de esta índole, pues el PIR se había "quemado" por su estrecha participación en una ofensiva de la Rosca dirigida por Patiño y lanzada en septiembre de 1947 contra un fuerte contingente de empleados. Esto cobró la forma de una "masacre blanca", altamente exitosa: la destitución colectiva

47 Dandler, *passim*; Antonio Mamani Álvarez: "Llamado a los indios bolivianos", en James Kohl ed.: *Journal of Peasant Studies*, vol. 4, N° 4, julio de 1977.

seguida por una inmediata readmisión bajo contratos individuales con menor salario. De esta manera, el sindicato fue depurado de sus miembros fundadores y los costos de la fuerza de trabajo fueron drásticamente reducidos. Estallaron huelgas, pero sin liderazgo, y fueron reprimidas con determinación, siendo el hecho más sangriento el ocurrido en Siglo XX en mayo de 1949.

Este panorama de resuelto atrincheramiento político tuvo sus matices. Hertzog se negó a borrar de la legislación las reformas de Villarroel; siguió ejerciendo presión fiscal sobre la Rosca y persistió en autorizar el funcionamiento del PIR; pero luego de dieciocho meses de incertidumbre, a la cual de hecho puso fin la ofensiva de Patiño, las principales fuerzas de la sociedad boliviana ingresaban manifiestamente en un proceso de absoluta polarización. El MNR mostró gran flexibilidad al desplegar acciones propagandísticas, al intentar alzamientos a nivel local y al mofarse de la precaria unidad del Ejército, que había salido traumatizado por el fuerte contenido antimilitarista de la revolución de 1946 y sumamente debilitado por la extensiva depuración de los radepistas.[48] Basándose en la memoria de Villarroel y extirpando gradualmente sus características fascistas, tamando parte en alianzas con el POR, reclutando oficiales jóvenes del Ejército y profundizando su relación con los dirigentes proscritos de la FSTMB, el MNR comenzaba a desarrollar un apreciable movimiento, a tiempo que capitalizaba los beneficios que le traía el ser perseguido por el régimen. En efecto, su ilegalidad contribuyó a subordinar importantes divisiones a la política y preservar la alianza entre nacionalistas "puros" –quienes se las ingeniaban para mantenerse aferrados a sus creencias cuasi fascistas, se complacían en la lucha clandestina y poseían escasas posiciones programáticas–, el "centro político" en el exilio –que dirigido por Paz y Guevara intentaba desarrollar una orientación reformista centrada en los temas sociales más importantes– y la "izquierda" –formada casi exclusivamente por líderes obreros y bajo la influencia del POR y de la izquierda chilena con la cual mantuvo un estrecho contacto en el exilio–. Todos estos grupos interpretaron a su manera las aspiraciones

48 Al menos ochenta oficiales fueron dados de baja un año después de la revolución; muchos de ellos mantuvieron contacto con sus colegas desde sus escondites o desde el exilio. La fortaleza del sentimiento de este grupo puede apreciarse a través de una típica carta enviada por un oficial de campo al nuevo presidente del tribunal militar: "Ud., Brenel, es un imbécil que ha envejecido en el Ejército viendo aumentar cada tiempo sus estrellas... y sueldo" (Capitán Carmelo Cuellas Jiménez: *Dos antemas contra la villanía*, Buenos Aires, 1948) Sobre RADEPA ver Chil. Francisco Barrero: *RADEPA y la Revolución Nacional*, La Paz, 1976.

"multiclasistas", "reformistas" y "democráticas" que eran las únicas motivaciones de una estructura carente de programa pero provista de una impresionante organización.

En agosto de 1949, el MNR intentó poner en funcionamiento las ventajas políticas que había acumulado promoviendo una insurrección que fracasó miserablemente en La Paz, pero que logró un control temporal en casi todos los otros centros importantes. Con todo, los dirigentes internos del partido siguieron ateniéndose a planes conspirativos y ponían demasiada confianza en sus aliados del Ejército, al mismo tiempo que sufrían por la temprana derrota de la huelga minera al haber rechazado la movilización del campesinado. El levantamiento logró reunir apoyo popular y fue brutal y eficazmente aplastado. Este error de iniciativa pareció confirmarse cuando, a mediados de la década de 1950, los maestros de escuela que habían estado al frente durante la campaña contra Villarroel, dirigieron una huelga general en las ciudades creando un clima de insurrección en La Paz que desató una cruel represión que nuevamente culminó con el bombardeo general al barrio obrero de Villa Victoria. Pese a lo impopular que podía ser el régimen, aún tenía la ventaja de contar con mayor fuerza, con el respaldo norteamericano y con un mandato democrático formal.[49]

Fue en este último aspecto donde se dio el cambio. El gobierno de Mamerto Urriolagoitia, anterior vicepresidente que depuso a Hertzog en 1949 porque no adoptó una línea dura de presión, aduciendo "enfermedad", fue obligado a convocar a elecciones en marzo de 1951. En vista de que el MNR no pudo capitalizar las intermitentes ofensivas del debilitado movimiento obrero durante los cinco años anteriores y debido a la importancia internacional que tenía el celebrar elecciones abiertas, se permitió que el MNR presentara sus candidatos, aunque se prohibió el retorno de sus líderes al país. Fue tal la confianza de la clase gobernante que tres candidatos de derecha fueron incluidos en las listas, mientras que la izquierda, con excepción del PIR, aunó sus fuerzas en torno al MNR. El resultado fue que aun en el recuento oficial, el MNR obtuvo una clara mayoría con sus candidatos Víctor Paz y Hernán Siles. En su lucha desde el exilio y la clandestinidad, el MNR había logrado transformar su campaña en una plataforma a favor de una democracia total y en contra de la Rosca y de las anacrónicas relaciones en el campo.

49 Peñaloza brinda la relación más completa de las actividades del MNR durante el decenio. Lora, en *A History...*, y Barcelli esboza los principales acontecimientos en el movimiento obrero.

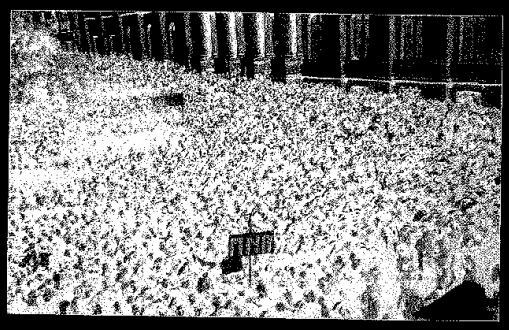
Cayendo en su propia trampa, Urriolagoitia dio un paso que resultó desastroso para la clase gobernante boliviana y entró al lenguaje popular con el nombre de "maniertaro". Alegando, no sin cierto fundamento pero en base a documentos falsos, que existía una alianza informal entre el MNR y el flamante Partido Comunista de Bolivia (PCB) creado en 1951 por la juventud disidente del PIR, el presidente declaró que el resultado de las elecciones era un peligro para la democracia y entregó el poder a las fuerzas armadas. Desconfiando ya de muchos de sus oficiales, el alto mando de entonces delegó el más alto cargo de la república al general Ballivián y sin pérdida de tiempo se autoasignó puestos diplomáticos en el extranjero. Esta última y desesperada maniobra no duró ni un año.

La victoria movimientista en 1951 proporcionó el elemento funesto para el *ancien regime*. La junta podía legitimarse únicamente sobre bases anticomunistas; pero el PIR era una fuerza gastada y el MNR, considerado auténticamente nacionalista, era estrechamente ligado a las reformas de 1943-46 y enormemente exonerado a los ojos públicos de los excesos del período de Villarroel por la represión a gran escala que los sucedió. La campaña del partido a favor de los derechos democráticos estaba entonces a la par con aquella de los mineros, de los sectores profesionales medios y de los trabajadores urbanos, a quienes se había reprimido sucesivamente y cuyos niveles de vida habían sido recortados. También consiguió el apoyo de otros partidos de oposición, excluyendo a la FSB, y finalmente logró desgastar la capacidad del aparato represivo del Estado. En suma, el MNR acentuó las contradicciones del *statu quo*; hablar del ascenso del partido al poder tenía un aire de profecía. Empero, ni la forma que adoptó la revolución de abril ni el alcance de la movilización popular posterior pudieron haberse previsto fácilmente y ambos resultaron cruciales para determinar el curso que hubo de seguir la historia boliviana en los siguientes treinta años.

Campesinos movilizados para la insurrección de 1952.

Milicianos en las calles de La Paz, 1952.

Dirigentes del MNR saludan a la multitud congregada en la plaza Murillo.



2. La Revolución Nacional

En términos netamente militares, los rebeldes estuvieron en franca desventaja en abril de 1952. Empero, conviene no olvidar que un ejército de conscriptos solamente tiene ventaja marginal ante un grupo de civiles armados cuando muchos de éstos tienen entrenamiento militar y mayor decisión que los jóvenes y nerviosos reclutas estrictamente comandados. Este factor indudablemente fue esencial la noche del 10 de abril, cuando una luna llena anuló totalmente la superioridad lograda por el ejército al ordenar un corte de energía eléctrica en toda la capital. A medida que descendían en columnas desde El Alto y subían desde Miraflores y San Jorge, las tropas tomaron conciencia de que los trabajadores fabriles organizados en grupos guerrilleros maniobraban mejor que ellos por su mayor conocimiento del terreno y porque, en su mayoría, obraban por iniciativa propia. Los oficiales del ejército, por su parte, actuaron caprichosamente: algunos mantuvieron a sus hombres en rígida formación, otros se retiraron de manera precipitada o simplemente desaparecieron. A pesar de la supremacía de sus armas de fuego, muchos reclutas se rindieron voluntariamente frente a personas que les instaban a no disparar contra sus propias familias y amigos o a no destruir la ciudad, amenaza que tuvo que tomarse en serio cuando se ordenó a la artillería bombardear el centro de La Paz desde las zonas altas, operación que logró destruir únicamente casas de los barrios obreros. Grupos enteros de soldados voltearon sus quepís –forma tradicional de mostrar cambio de bando– en medio de insultos, súplicas y aun silbatinas furiosas de las cholas, trabajadoras cuya autoridad solía superar el miedo que todavía inspiraban los oficiales.

A pesar de tal derrota, que en gran parte se debía al carácter resueltamente popular de la rebelión, al final del primer día de lucha, Torres Ortiz aún poseía los

suficientes recursos para mantener a La Paz sitiada y reducir gradualmente la insurrección. Sin embargo, la posición del ejército se hizo insostenible durante las primeras horas del 11 de abril cuando descubrió que sus vías de retirada habían sido cortadas por un destacamento de mineros provenientes del cercano centro de Milluni, el cual capturó un tren de municiones y lanzó un ataque sobre la base de El Alto. Esta situación se agravó al recibir la noticia del triunfo de la revolución en Oruro, donde el general Jorge Blacutt, malinterpretando la naturaleza del levantamiento, en principio había ofrecido su colaboración a Manuel Barrau del MNR, pero después cambió de actitud y ordenó ametrallar a la multitud reunida en la plaza principal, con lo cual provocó un súbito y muy violento asalto a los cuarteles que resultó en la huida de las tropas. Las bajas en Oruro alcanzaron los diez muertos y 250 heridos, en La Paz produjo un saldo de alrededor de cuatrocientos muertos, mientras que en Cochabamba, donde la revolución fue poco más que la toma del poder por el líder movimientista Wálter Guevara Arze, no hubo batalla de consecuencias. En otras partes del país, los militantes del partido tomaron cuarteles y prefecturas pacíficamente, muchas veces con la ayuda de los carabineros. Luego de la rendición y huida de Torres Ortiz a la frontera chilena, la resistencia sucumbió muy rápido. Los uniformes y armas abandonados que quedaron esparcidos por toda La Paz fueron recogidos por el populacho que habría de utilizarlos en defensa propia de manera intermitente durante las dos décadas siguientes. Muchos oficiales pasaron a la clandestinidad y sólo salieron a la superficie de la vida civil de la manera más desapercibida posible, señalando con ello el fin de una generación militar. Otros cayeron prisioneros o permanecieron en sus puestos a la espera de un resultado que se vislumbraba decididamente sombrío. Entre estos últimos se encontraban dos subtenientes que fueron capturados el 11 de abril: Alberto Natusch Busch y Luis García Meza, hombres que con su estilo inequívocamente militar, años más tarde habrían de dejar su huella en el curso de la vida política boliviana. Aun así, en aquel momento todo parecía indicar que el aparato militar del país sería desmoronado definitivamente por un movimiento sin dirección política precisa y respaldado por fuerzas heterogéneas en una extensa alianza, pero que podría sobrepasar a sus líderes originales probablemente al modo de la revolución rusa o china.

Establecimiento de un nuevo orden

Cualesquiera hayan sido las expectativas de la clase obrera paceña para el Viernes Santo de 1952, una cosa quedó absolutamente clara: ésta respaldaba plenamente el ascenso del MNR al poder. A través de su trayectoria en la oposición, su victoria en las elecciones de 1951 y del inicio de la rebelión, el MNR había dejado establecida una arraigada legitimidad. No cabía duda que asumiría el poder formal por medio de un mandato popular sin precedentes. Por ello, Hernán Siles Zuazo, líder del levantamiento, prestó juramento inmediato como presidente suplente hasta el retorno del jefe del partido, Víctor Paz Estenssoro, de su exilio en Buenos Aires. Siles nombró un gabinete interino compuesto en su mayoría por dirigentes movimientistas y cuya peculiaridad fue la prudencia. El coronel Ahiaga fue nombrado ministro del Interior para demostrar que se mantendría la alianza con los carabineros; por su parte, Lechín recibió la designación de ministro de Minería, a quien muy pronto se le unieron Germán Butrón en el ministerio del Trabajo y el cruceño Ñuflo Chávez en el ministerio de Asuntos Campesinos, todos ellos como representantes de la clase obrera en el régimen. En principio, esto no parecía ser más que una acción discreta y precavida. Anteriormente hubo ministros de la clase obrera y estos hombres eran destacados miembros del partido. Empero, su presencia en el gobierno muy pronto fue tomada por los sindicatos como una representación forzosa del movimiento obrero.

Siles había sido uno de los fundadores del MNR, frecuente colaborador del procaz diario paceño La Calle y también pertenecía a una buena estirpe chuquisaqueña. Hijo de presidente Hernando Siles (1926-30) y servidor en el Parlamento en diversas ocasiones durante los quince años precedentes, con cerca de cuarenta años de edad, Siles había pasado gran parte del sexenio en el exilio o en la clandestinidad y era reconocido como la fuerza propulsora del sector interno del partido, como su subjefe. Delgado, corto de vista, con un pequeño mostacho demasiado cuidado para su tamaño y de una personalidad más bien apacible, Siles era conocido como "el conejo" y apenas encajaba dentro de la figura de caudillo populista, aunque armonizaba mejor con ese papel que con el de intelectual, y nunca reveló la pericia mental de Paz o Guevara. Si bien inicialmente estuvo más próximo a los derechistas del partido que estas dos últimas personalidades, Siles era asimismo profundamente pragmático además de muy hábil maniobrista político y capaz orador público, cualidades que habrían de capacitarlo para asumir la Presidencia de la República por tercera vez, treinta años después de que lo hiciera por vez primera y 44 años después de que ingresara al Congreso. Su discurso inicial al tomar posesión de su cargo fue clarificador, pero también amonestador:

Pido esfuerzo y serenidad. Nada de desbordes. Somos muy pobres para ser más destruidos. No vamos a repetir lo que pasó el 21 de julio (1946), pues no queremos destruir, sin construir una nueva Bolivia. Sólo os ofrecemos trabajo honesto y sacrificios... Mas no sólo vamos a hacer un gobierno de reparendos, sino un gobierno de transformaciones estructurales, en el aspecto económico, político y social. Vamos a trabajar porque la economía boliviana sea de los bolivianos y no de tres exploradores que viven en el extranjero.
Vamos a incorporar al campesino a la economía boliviana, a la vida nacional, a fin de que deje de ser un ente menospreciado por sus verdugos.
Intensificaremos también la producción nacional y la diversificaremos... Este es un movimiento plenamente democrático movido por la gran mayoría del pueblo boliviano, sin ninguna concomitancia con partidos foráneos ni mucho menos con el Partido Comunista... ¡Viva la Revolución! ¡Gloria a Villarroel! ¡Viva Bolivia![1]

Era, por supuesto, demasiado pronto para hacer declaraciones concretas o para adelantarse a cualquier decisión del jefe; empero, Siles subrayó la importancia de diversos temas, que no tardaron en oficializarse como núcleo de la doctrina partidaria: el MNR no había sido diseñado ni en base ni para defender los intereses de clase social alguna, sino los de un bloque de tres clases sociales: obreros, campesinos y clase media; las contradicciones de clase estarían subordinadas a aquellas presentes entre la nación y sus enemigos; cualquier intento de crear una sociedad comunista en la esfera capitalista del mundo sería absolutamente fútil; y, puesto que el partido estaba integrado por una serie de corrientes divergentes, el MNR estaría obligado a respetar sus tendencias externas pero, de la misma forma, a conservar un equilibrio entre ellas. Como expresó más tarde José Fellman Velarde, esto significaría que "... la victoria de la facción derechista del partido significaría una victoria para la Rosca, en tanto que aquella de la izquierda, por la misma razón, significaría el triunfo del comunismo".[2]

Víctor Paz Estenssoro arribó al aeropuerto de El Alto el 15 de abril. Fue aclamado por una multitud de sesenta mil personas que portaban pancartas donde se leía: "El MNR es el pueblo", "Nacionalización de las minas", "Reforma agraria", "Villarroel mártir - Estenssoro salvador" y "Bienvenido padre de los pobres". Tal era la muchedumbre, que la comitiva tardó una hora en avanzar sobre la media cuadra que separa la catedral del palacio presidencial. La

1 *El Diario*, (La Paz), 11 de abril de 1952.
2 *Reflexiones acerca de la verdad del MNR*, La Paz, 1955, p. 16.

escena fue de jubiloso caos y de enorme expectativa, misma que no fue mitigada por Paz, quien abrió su discurso con las palabras *"Jacca t'anta uthjani"* (habrá mucho pan). Pero el flamante presidente fue más sobrio cuando se dirigió al público en su propia lengua. Comenzó por recordar que fue una alianza de la Rosca y los comunistas la que había derrotado a Villarroel y prosiguió manifestando que cualquier nacionalización de las minas tendría que ser cuidadosamente estudiada por una comisión. Hizo pocas promesas vanas: "Cuando tengamos los recursos necesarios, el gobierno encarará el mejoramiento de la vida de la colectividad". Demandó "ninguna violencia" y "ninguna venganza" pero fue interrumpido por la multitud, que evidentemente no estaba al corriente de los virajes ideológicos del MNR, cuando gritó "Fuera los judíos...". A lo cual Paz replicó: "No hay diferencias raciales para la Revolución Nacional. Los ladrones serán juzgados, sean judíos, extranjeros o bolivianos".[3] Durante el acto de posesión, al día siguiente, Paz añadió muy poco a estos conceptos, excepto para hacer énfasis en el hecho de que ".. no somos un gobierno anticapitalista precisamente por la seriedad de nuestra labor que no es demagógica. Queremos realizar un avance de las clases mayoritarias y por esto nos responsabilizaremos asumimos esta posición porque Bolivia es extraordinariamente rica pero necesita capitales".[4]

Tan cauto planteamiento apenas diferenciaba al nuevo régimen de aquel de sus predecesores, y de esto Paz estaba consciente. Paz no era ni un hombre de acción ni un revolucionario transformado; quizás su momento más altisonante haya sido la censurante acusación de la masacre de Cataví que hizo ante el Congreso en 1943; y aun ésta adquiría toda su fuerza al apoyarse firmemente en la lógica legalista y en la mensurada ironía, que eran parte integral de la tradición local en la retórica parlamentaria. En esa etapa, Paz sin duda fue un ferviente nacionalista y no iba más allá de emplear ciertas categorías marxistas. No obstante, su formidable prestigio como intelectual se basaba principalmente en su larga experiencia en administración financiera, antecedente que había formado en él una profunda conciencia de los problemas prácticos que suponía implementar cambios sociales, así como un enfoque fundamentalmente gerencial de la política. Paz era más un político inteligente y pragmático en el molde populista que un ideólogo, pero poseía una sensibilidad inquebrantablemente conservadora. Era uno de los contadísimos nativos del sureño departamento de Tarija que imprimió su sello en la vida política nacional; provenía

3 *El Diario*, (La Paz), 16 de abril de 1952.
4 *Ibid.*, 17 de abril de 1952.

de una respetada familia de terratenientes. Nacido en 1907, hacia 1932 Paz prestó servicios como asesor legal de la comisión presupuestaria, peleó en el Chaco como suboficial y, después de la contienda, tuvo un precipitado ascenso en el Ministerio de Finanzas, donde ocupó un cargo superior. Breves temporadas de trabajo para Patiño y como ministro de Economía de Peñaranda interrumpieron su carrera como catedrático de universidad y diputado parlamentario desde 1938 a 1946; en adelante vivió de un ingreso privado, escribiendo tratados políticos desde su exilio en el Uruguay y la Argentina. Por sus mandíbulas amplias y frente pronunciada se granjeó el apodo de "el mono"; pero incluso entre la clase obrera, donde hace mucho ha perdido ya buena parte de la popularidad que se le había conferido en 1952, la gente aún se refiere a él con cierta reverencia como "el Doctor Paz". Lo que le faltaba en términos de populismo, lo compensó con una imagen de estadista capaz y responsable, siempre dispuesto a mediar y siempre alejado de la corrupción y violencia endémicas de la política boliviana, imagen que mantuvo durante un período extraordinariamente largo; e incluso cuando había sido irremediablemente empañada, la destreza casi legendaria de Paz como negociador político le permitió actuar como un designado real aun en 1980.

Tales habilidades le fueron necesarias de inmediato, pues al día siguiente de que Paz prestó juramento como presidente, se llevó a cabo una asamblea que creó lo que muy pronto habría de convertirse en el cuerpo más poderoso de la vida pública boliviana: la Central Obrera Boliviana (COB). Desde su fundación el 17 de abril de 1952, la COB se desarrolló como una de las confederaciones sindicales más militantes del mundo. Tiene la distinción de ser la única confederación latinoamericana que posee autoridad sobre todo un movimiento obrero; ha mantenido su independencia de toda afiliación internacional y –a pesar de su reiterado rechazo de vínculos partidarios– tiene un papel claro y fundamental en la política nacional, semejante sólo al de los militares. La independencia de la COB y el radicalismo de sus bases han sido frecuentemente puestos en peligro por las acciones de sus dirigentes y a menudo la han reducido a un ajustado sindicalismo, pero todavía conserva un extraordinario nivel de apoyo de la clase obrera.

El nacimiento de la COB, en muchos sentidos, fue la consecuencia más natural de la revolución. La Tesis de Pulacayo había demandado una organización nacional a lo largo del sexenio, especialmente durante la huelga general de 1950 se habían formado apresuradamente comités de coordinación en procura de unificar los sindicatos, muchos de los cuales eran aún jóvenes o atrasados, aunque manifestaban una predisposición política cada vez más

coherente y radical. La consolidación de la FSTMB y el colapso de la fraccionante política del PIR –que llegó al extremo de autodisolverse varios meses después de la revolución– fortalecieron esa tendencia, pero resultó imposible hacerla realidad mientras no se eliminaran las condiciones de represión. Al igual que en 1982, en 1952 el estratégicamente importante sindicato de trabajadores mineros constituyó la piedra angular de la COB. Juan Lechín Oquendo pasó a ser su secretario ejecutivo, cargo que nunca perdió a pesar de numerosos retos, de profundos enredos políticos y de un exceso de evidentes errores y de acciones mal dirigidas que solamente los más oportunistas cometen y sobreviven a ellos.

No obstante una trayectoria notoriamente desigual, la imagen de "Don Juan" pervive como la de un verdadero héroe popular con una estimación general, se quiera o no aceptarlo, más profunda y extensa que la que nunca tuvieron sus camaradas Siles y Paz, con quienes compartió una afiliación política más por necesidad que por preferencia. Nacido en la norteña población de Corocoro en 1914, de extracción libanesa y padres de clase media, Lechín nunca trabajó en los socavones. No llegó a ocupar una posición privilegiada dentro del movimiento obrero sino bastante tarde; había prestado servicio en el Chaco y ganado seguidores como arquero estelar del equipo de fútbol del campamento minero de Catavi, donde tenía un empleo administrativo. El contacto escolar de Lechín con Siles, así como su popularidad y facilidad de trato hicieron de él una figura clave en las relaciones del MNR con los mineros durante la década de 1940. Sin embargo, su renombre hubiera sido extraordinariamente menos duradero y extremo, de no ser el apoyo y asesoramiento del POR a lo largo de su primera época, lo cual confirió a sus discursos un corte radical, le permitió adquirir una perspectiva más sutil para el análisis de las situaciones tácticas y lo mantuvo en las tareas organizativas que de otra manera hubiera dejado de lado. Lechín nunca fue un militante revolucionario: la lectura lo aburría, se sentía incómodo con la teoría y despreciaba afablemente el estilo de vida puritano de los militantes poristas. Y lo que es más, buscaba una alianza política que brindara algo más que orientación programática; al igual que los líderes de interior mina que se agrupaban en torno a él, pretendía restaurar las condiciones políticas que habían dado lugar a la constitución de la FSTMB. En consecuencia, desechó su coqueteo con el trotskismo y regresó al MNR, pero siempre dando prioridad a su posición sindicalista, la principal fuente de su autoridad y prestigio.[5]

5 Lora da su punto de vista sobre la trayectoria y primeras actividades de Lechín en *History*..., pp. 297-301; Barcelli, en *Medio siglo*..., presenta una evaluación favorable.

A la asamblea del 17 de abril concurrieron Lechín y Butrón como los primeros y únicos "ministros verdaderamente genuinos de los obreros"; Mario Torres y Melquíades Luna por la FSTMB y dos representantes por cada uno de los sindicatos más importantes (trabajadores fabriles, ferroviarios, bancarios, empleados del sector privado, obreros de la construcción y campesinos). Muchos carecían aún de afiliación política sólida, pero allí hubo presencia de todas las corrientes principales de la izquierda. Una buena parte del trabajo preparatorio estuvo a cargo de los poristas Edwin Möller, Miguel Alandia y José Zegada. Un día después de este evento, Lechín anunció a la prensa que la COB pediría al nuevo gobierno abrogar toda legislación antiobrera, respetar la independencia de la COB, implementar la nacionalización de las minas y ferrocarriles, patrocinar una "revolución agraria", diversificar la economía y promover mejoras en el sector asalariado.[6]

En su primer pronunciamiento, la COB demandó asimismo la realización de un congreso en la primera oportunidad posible, pero éste no tuvo lugar sino hasta 1954; demora que provocó un considerable descontento entre sus bases. En el ínterin, los dirigentes desarrollaron sus actividades sobre una base *ad hoc*, definiendo políticas y estrategias en reuniones bien publicitadas, donde Lechín y sus seguidores promovimientistas llevaban la voz cantante, pero eran constantemente presionados a tomar una línea más dura, particularmente por el POR y en algunas ocasiones también por el PCB. Sin duda, este proceso favoreció al MNR, pero resultó asimismo en un programa y una serie de estatutos que se situaban bien a la izquierda de la dirigencia del partido.

Después de un período inicial de descontento por la idea de representación formal en el gobierno debido a que los ministros obreros con mucha frecuencia dejaban de informar a sus bases o de pedir su mandato explícito, el sistema logró la aceptación de una mayoría. En agosto de 1952, Luna auspició una moción de la FSTMB demandando la renuncia de Lechín al gabinete, luego de que el sindicato de Siglo XX había enviado un telegrama donde observaba una "...comprobada interferencia, sabotaje y desprestigio" de sus acciones por elementos de derecha, poniendo en peligro la independencia y reputación de los sindicatos mineros.[7] Este recelo, en cuanto a los riesgos que implicaba lo que para la COB era un cogobierno, no hubo nunca de desaparecer y no solamente era sustentado por la crítica porista de participación en un régimen pequeño burgués, sino también por un básico descontento sindicalista ante

6 *El Diario*, (La Paz), 20 de abril de 1952.
7 *Ibid.*, 22 de agosto de 1952.

los enredos oficiales y las concesiones resultantes. Con todo, durante los primeros meses de la revolución, esta desconfianza fue superada con el argumento de que el cogobierno era el medio más eficaz de garantizar las demandas sindicales y evitar la claudicación del gobierno frente a las políticas populares: "...Los ministros obreros fueron el más serio obstáculo dentro de las esferas estatales a todo intento contrarrevolucionario".[8] Los ministros en cuestión permanecieron en el gabinete y su número creció a cinco con el tiempo, pero su nombramiento en ningún momento salió de los sindicatos ni tampoco ellos trataron de obtener el mandato directo de la COB o de someterse a poderes de revocación, permitiendo así que el MNR se beneficiara de esa presencia en el gobierno y evitar al mismo tiempo un reconocimiento formal como "gobierno mancomunado".

Ése era un paso obligado; incluso Guillermo Lora, quien se opuso tenazmente a una participación formal, señaló que "...para el grueso de las masas subvertidas, la COB era su única dirección y su único gobierno".[9] Cualesquiera hayan sido las demandas que planteó la COB y quienquiera que haya ejercido influencia en ella, el MNR tuvo que aceptar su legitimidad y a su masa de seguidores así como imponerse la tarea de ganar a sus líderes para la causa gubernamental, lo cual se logró con bastante éxito; pero el proceso implicó el hacer numerosas e importantes concesiones y el meterse en una serie de conflictos muy agudos.

La izquierda movimientista estaba conformada, casi sin excepción, por miembros de la COB. Es más, la presión que ejercía en los dirigentes del partido aumentó cuando obtuvo el apoyo de elementos no partidarios en su campaña para "profundizar la revolución". Si bien el joven PCB estaba aún en el proceso de consolidación, tenía una buena representación en la COB con su respaldo a la estrategia de formar un frente de liberación nacional compuesto por partidos de diversas clases. Criticó al MNR por rechazar esta estrategia con su tesis de "un solo partido que representa a todas las clases a la vez...", pero redujo los ataques al mínimo y adoptó la táctica de apoyar a la izquierda obrera del MNR, a la que consideraba "...sana, consciente y valiosa".[10] Consecuentemente, para el gobierno resultó difícil lanzar una ofensiva específica contra el PCB, sin atacar al aliado de una de sus principales fuentes de apoyo; de ahí que, durante la primera fase, dirigió sus filípicas contra los "comunistas" en

8 Central Obrera Boliviana: *Cartilla de organización*, La Paz, 1954, p. 4.
9 Lora, *op. cit.*, p. 284.
10 Jorge Ciaros Lafuente: *Frente de Liberación Nacional*, Cochabamba, 1953, pp. 3 y 6.

general. Igualmente, dentro de la COB, los líderes movimientistas aún estaban muy ligados al POR y deseosos de ganar a sus militantes para su causa. En este contexto, no hay que olvidar que los trotskistas habían amasado bastantes simpatías a lo largo del sexenio, y aunque desde un principio fueron muy críticos al régimen del MNR, no hicieron demanda alguna a favor de un gobierno obrero y más bien reclamaron una radicalización de las reformas propuestas, la defensa del régimen contra el imperialismo y la educación revolucionaria de las masas.[11]

No obstante, la simple aceptación de esta situación por parte del MNR resultó insuficiente. Bajo una fuerte presión de la izquierda, en septiembre la COB publicó una plataforma programática tentativa en su periódico Rebelión, editado por el poeta Edwin Moller. Esta declaración trataba de apaciguar los temores acerca del cogobierno y plantear un reto a la derecha movimientista. Comenzaba clarificando la posición de los ministros obreros:

> De lo que se trata no es de llevar un obrero al gabinete capitalista, conservando el orden económico intocado, sino de tomar todo el poder para la clase obrera y cambiar toda la estructura económica capitalista, sustituyéndola por otra que corresponda a los intereses colectivos del pueblo... Contra la especulación y el negocio de las divisas, los trabajadores y la COB exigen el monopolio total del comercio por parte del Estado... La COB plantea la ocupación de fábricas y minas por los trabajadores, como única garantía para prevenir el sabotaje a la desocupación... Nacionalización de las minas, sin indemnización y bajo control obrero. Los trabajadores no aceptamos ninguna otra forma de nacionalizar las minas... El pueblo boliviano no puede cargar con el peso que significaría el pago de fabulosas indemnizaciones... El destino de la revolución se liga inmanentemente al destino de la propiedad privada, que sólo podrá ser superada por la acción revolucionaria de las masas. El Congreso Nacional de Trabajadores es un paso hacia la obtención de un Parlamento Obrero que superando la estructura jurídica democrático-burguesa, abrirá el camino hacia el Gobierno Obrero y Campesino.[12]

Esto era demasiado para el gobierno, pues se trataba nada menos que de una versión atenuada de la Tesis de Pulacayo. El Comité Político Nacional (CPN) del MNR, su cuerpo matriz, condenó la declaración inmediatamente y

11 Pierre Scali: *La Revolución Bolivienne (1952-54)*, París, 1954, p. 36.
12 Citado en Lydia Cacilda: *La mujer y la revolución*, La Paz, 1959, pp. 119-121. James Malloy: *Bolivia: The Uncompleted Revolution*, Pittsburgh, 1970, pp. 224-225.

recordó a los líderes de la COB que solamente ese comité tenía la autoridad para emitir proclamaciones políticas a nombre del partido, trayendo así a colación un problema de disciplina y obligando a Butrón a que retirara el documento apresuradamente y subrayara que era sólo un borrador y no una política oficial de la COB.[13] Empero, la fraseología trotskista del proyecto logró llevar a la derecha del partido a la exasperación; tal parece haber sido la intención de Lechín desde un principio. El 15 de septiembre, el periódico En Marcha, controlado por la derecha, pero portavoz de todo el partido, lanzó un ataque desenfrenado contra

> ...una Declaración de Principios abiertamente comunista de la Central Obrera Boliviana con el nombre de "Programa Ideológico de los Trabajadores Bolivianos", hecho que tiene su gravedad para el país y para el destino de la Revolución Nacional y que por tanto obliga al Movimiento Nacionalista Revolucionario a declarar ante la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente: "Que el Movimiento Nacionalista Revolucionario es en su esencia un Partido Nacional y en consecuencia contrario al Comunismo Internacional... Que el mencionado programa ideológico de la Directiva de la Central Obrera Boliviana es contrario al sentimiento nacional... Que el noventa por ciento de los obreros son nacionalistas y pertenecen al MNR; en cambio los dirigentes de la COB son en su mayoría elementos comunistas de todas las internacionales: POR, PIR y Partido Comunista... El MNR considera que en el país debe fomentarse el espíritu de empresa entre los bolivianos y también atraerse capitales extranjeros... Consiguientemente no acepta lo afirmado por la Directiva de la COB en cuanto a la supresión del comercio y la empresa privada... Que contrariamente a la disolución del Ejército, tal como lo sostiene la Directiva de la COB en su declaración, el MNR plantea la necesidad de reorganizar el Ejército Nacional. Que la Directiva de la COB ...pretende desarrollar una política antiboliviana en favor del imperialismo Ruso-Soviético...".[14]

La brecha a la que se había puesto parches durante cinco meses ya estaba completamente abierta y a la vista de todos. Esta situación puso intensamente a prueba a la dirigencia movimientista que se vio obligada a mediar entre ambas fuerzas, pese a ser en sí misma enérgicamente anticomunista y a estar bajo la insistente presión de una mayoría claramente derechista del Comité Nacional del partido. Aunque Siles por entonces se acercaba más a la política de Paz de

13 *El Diario*, (La Paz), 19 de septiembre de 1952.
14 Guelfer, *op. cit.*, p. 125. Ver también Lora, *op. cit.*, p. 282; para mayores comentarios del autor de este, Alfredo Candia.

neutralizar ambos extremos, a través de extensas negociaciones, en sus declaraciones suscribía que el MNR era el último baluarte contra el comunismo en Bolivia y que difícilmente podría permitir a la COB continuar con la línea que planteaba ese momento, poniéndose así del lado de los provocadores autores de En Marcha.[15]

Los primeros enfrentamientos importantes sobre política concreta se referían a la cuestión militar. El ejército había sido prácticamente destruido en abril. Y mientras los carabineros se mantenían todavía intactos, las milicias populares fuertemente armadas y organizadas en fábricas, en las minas, en el campo y en los pueblos, a través de militantes movimientistas, los superaron en número con gran margen. En los festejos del 1° de mayo, la mayor parte de los cuarenta mil que conformaban el contingente de la COB marcharon bulliciosamente frente al palacio presidencial portando armas y llevando muchos de ellos pancartas que pedían la total abolición del ejército. Durante todo el mes de mayo, Oruro estuvo bajo el control absoluto de milicias populares, las cuales expulsaron sucesivamente a oficiales del ejército y de la policía enviados a dirigir las fuerzas de la ciudad. Únicamente una delegación de máximo nivel, encabezada por el canciller Wálter Guevara Arze, pudo persuadir a estas beligerantes tropas civiles de aceptar a un oficial del ejército como su comandante, garantizándoles que éste respondería a los cuerpos elegidos a nivel local.[16] En la propia ciudad de La Paz, la Policía emitió un quejumbroso comunicado declarando que tenía cuatrocientos hombres dispuestos a salir en cualquier momento y haciendo votos porque los milicianos colaboraran con ellos en la preservación de la paz.[17] Poco podía hacer la policía, ya que, en los meses posteriores a la revolución, en las noches paceñas se escuchaba el estrépito de los disparos producidos por diversos grupos armados que imponían su propia ley y orden. Pronto quedó claro que había dos tipos de milicias: aquellas derivadas de los Grupos de Honor del MNR y que respondían a los jefes del partido y aquellas que tenían como base su lugar de trabajo. En su mayoría eran independientes del MNR y estaban ligadas a la COB a través del sindicato local. El deseo de Lechín era que ambas sustituyeran por completo al ejército. En un discurso en la mina Huanuni, proclamó que "... la desaparición del ejército fue un gran triunfo ya que se anuló una fuerza creada por el pueblo para defender su integridad soberana pero que posteriormente pasó al servicio de la Rosca...

15 Ver los comentarios de Sides al *New York Times*, 19 de abril de 1952.
16 Ver, por ejemplo, *El Diario*, (La Paz), 23 de mayo de 1952.
17 *Ibid.*, 5 de septiembre de 1952.

No debemos permitir la reorganización del ejército. ¿Qué mejor ejército que el pueblo? Para desterrar definitivamente las masacres debemos repetir una y cien veces que no queremos ejército... es precisamente un abogado de una gran empresa minera el que en cierta oportunidad dijera la frase que repito ahora: 'No hay general que aguante el cañonazo de un millón de bolivianos'".[18] Aunque reconocía que no era tarea fácil desmantelar y aun contener a las milicias, Paz se opuso a Lechín abiertamente desde un principio. Si bien el Colegio Militar fue clausurado, la conscripción anual se hizo con retraso y el presidente autorizó la apertura de una nueva Escuela Militar de Aviación en Santa Cruz, apenas siete semanas después de la insurrección. Entre los primeros admitidos estaba el joven Juan Pereda Asbún, futuro presidente militar que llegaría al poder a través de un golpe de Estado. Una misión militar norteamericana arribó a La Paz al día siguiente de la inauguración de la escuela para visitar el ruinoso y despoblado Ministerio de Defensa, entonces encabezado por un exoficial de RADEPA que fue precipitadamente ascendido a general. Entre los visitantes estaba cierto capitán de la Fuerza Aérea estadounidense de nombre Fox, que también habría de desempeñar un rol crucial en la organización de un golpe derechista.[19] Con todo, Paz estaba convencido de que podía confiar en los nacionalistas de las FF AA, para revivir el espíritu de Busch y Villarroel. El cuerpo de oficiales fue depurado, pero un número considerable de ellos fue mantenido en las nóminas con sueldos bajos, obligándolos a jurar lealtad al partido y a dedicarse a una "actividad productiva", particularmente a la ingeniería. En septiembre, Paz se declaró convencido de que el ejército había sido liberado de sus viejas actitudes y volcado hacia nuevos "conceptos técnicos y productivos"; pero eso no fue todo: "...siendo el Ejército un factor para la seguridad externa ha de poder también hacer frente a conmociones internas que pudieran presentarse; porque la seguridad interna no radica sólo en el perímetro del centro a la periferie, sino también viceversa...". Al mismo tiempo, el jefe de estado mayor general (JEMG), teniente coronel Delfín Caraldi afirmó que "...la mentalidad del oficial nacionalista se identifica, pues, plenamente con el verdadero sentido de la Revolución Nacional: contra la Rosca y contra el Comunismo".[20] En el curso de algunas semanas, Paz anunció que se reabriría el Colegio Militar el siguiente año, con una admisión que procedería en gran parte de las "clases populares", garantizando así generaciones de oficiales

18 *Ibid.*, 28 de mayo de 1952.
19 *Ibid.*, 5 de julio de 1952.
20 *Ibid.*, 16 de septiembre de 1952.

nacionalistas para el futuro. Esto causó conmoción en la COB, pero el propio Lechín habría de firmar el decreto necesario con el tiempo. Paz dejó en claro que el tema de los militares era una cuestión de principios sobre la que él no haría concesiones. Luego de varios días de feroz intercambio y enorme tensión, la COB finalmente se abstuvo de lanzar un reto intransigente sobre el asunto. Los gastos militares fueron reducidos prácticamente a la mitad, el personal recortado, el equipo renovado y las tropas acuarteladas a bastante distancia de las minas y los centros urbanos, y se ocuparon fundamentalmente de la construcción de caminos. La situación de las fuerzas armadas en el ámbito oficial era extremadamente grave y éstas tampoco estaban en condiciones de equiparatse a las milicias; pero a pesar del golpe mortal que fue su derrota, habían sobrevivido.

El tema del ejército puso de relieve el cauto reformismo de la dirigencia movimientista. El primer paso importante no lo dio hasta fines del julio y no tuvo que ver ni con cambios en las relaciones de propiedad ni con la instauración de nuevas formas de poder popular, sino con la introducción de una reforma fundamental en el sistema democrático: la otorgación del sufragio universal. Con la supresión de los requisitos tradicionales de ser varón y saber leer y escribir para ser miembro de la nación política formal —tal condición significó que el MNR ganara las elecciones de 1951 con el apoyo de 2,6 por ciento de la población—, el MNR aumentó el número de votantes a su favor de cien mil a cerca de un millón de golpe: en efecto habilitaba a los campesinos. Unos trece países latinoamericanos ya habían otorgado a la mujer los mismos derechos de voto que al hombre, pero estos cambios ruvieron lugar, por lo general, en las décadas de 1930 y 1940 y Estados como Brasil, Chile y Perú seguían prohibiendo la participación política de los analfabetos hasta la década de 1970. En términos relativos, la medida del MNR no fue ni tan innovadora ni tan tardía como podría parecer a mentalidades europeas.[21] La concesión de derechos políticos fue una medida obligada, pero sus consecuencias políticas y sociales quedaron abiertas y no se produjeron mayores cambios pues los votos campesinos eran extremadamente vulnerables a las presiones locales y bien podían servir a un repliegue para una reacción conservadora. De hecho, una acción complementaria como la reforma agraria no habría de realizarse sino después de un año.

21 Una exposición extremadamente desatinada pero informativa en general de las formas democráticas en América Latina es la de Göran Therborn: "The Travail of Latin American Democracy", en *New Left Review*, N° 113-114, enero-abril de 1979.

La extraordinaria falta de tompimiento con el estilo político y la vida cultural anteriores reflejó asimismo el carácter gradual de los cambios introducidos por el gobierno. La palabra "compañero" tomada en préstamo de los sindicatos encontró cabida en el lenguaje popular y la "V", signo del triunfo de Paz, se transformó en un símbolo fundamental de la limitada iconología del partido; ambos fueron adoptadas para oponerse al término "camarada" y el puño cerrado de la izquierda tradicional respectivamente. La palabra "campesino" también halló su lugar en el léxico y se unió a la más formal "indígena" para desplazar a "indio". Sin embargo, el comportamiento social en las calles no cambió mucho; no hubo ninguna alteración en las formas de vestir —la variedad de no usar corbata, evidente después de julio de 1946— o cambio importante en la sobria etiqueta de la clase media urbana. Los líderes políticos llevaban ponchos y llachus con manifiesta falta de naturalidad en las asambleas rurales; estas prendas seguirían distinguiendo al sector que visitaba pero no controlaba las oficinas oficiales. Aún era escaso el interés por la música indígena en las ciudades (el auge de la música folklórica no hubo de producirse hasta la década de 1960 bajo el liderazgo del gran guitarrista tupiceño Alfredo Domínguez y el siempre activo maestro del charango Ernesto Cavour), el MNR se contentó con expropiar unos cuantos huayños y cuecas tradicionales para imponerles una letra patriótica, como es el caso del himno del partido, *Siempre*, de Gastón Velasco.

Tampoco se produjo un súbito renacimiento en la literatura o en las artes. La novela social del Chaco siguió escribiéndose en considerables cantidades, pero dio pocas obras maestras: los mejores ejemplos de este género, *Sangre de mestizos* de Augusto Céspedes o la semificción *Repete* de Jesús Lara, fueron prerrevolucionarios. Como lo afirmara Guillermo Lora, en su ensayo enérgico pero cargado de sensibilidad, lo mismo ocurrió con el género menos prolífico de la novela minera; la más importante sigue siendo *Socavones de angustia*, escrita por Fernando Ramírez Velarde, acerca de los acontecimientos de 1929 y publicada en 1947.[22] Aunque la novela más aplaudida de Bolivia es aún *Juan de la Rosa* de Nataniel Aguirre (1885), la igualmente poco notable promoción de buenos poetas del país cambió algo en la época posrevolucionaria; pero tuvo que pasar bastante más de una década para que personajes como Óscar Alfaro, Oscar Cerruto y el joven Pedro Shimose recibieran la adecuada aclamación por sus versos. En tanto que la dedicación de toda una vida de Jesús Lara a la recolección y traducción de cuentos y poemas quechuas merecieron

22 Guillermo Lora: *La insurgencia de la gran novela minera*, La Paz, 1979.

mucho menos estudio que respeto. Y lo que es más, Alfaro y Lara fueron dos raros ejemplos de escritores que mostraron un interés perdurable en el cambio social o en la política revolucionaria. La pintura, por su parte, registró un impacto más inmediato, fundamentalmente por el uso político directo que se podía dar al trabajo de un pequeño grupo de talentosos muralistas que superaron un pintoresco pero estático indigenismo. Las figuras más destacadas de este movimiento fueron Wálter Solón Romero –cuya magnífica serie de *Don Quijote en el exilio* (1981) representa un cambio de técnica pero ninguna disminución de su compromiso político o de la fuerza pictórica– y el veterano militante del POR, Miguel Alandia Pantoja, cuyo trabajo recibió mayor influencia estilística de Orozco que del más radical Rivera. Actualmente es imposible apreciar las figuras turbulentas de Alandia denunciando a la Rosca o celebrando la lucha del pueblo, ya que se limitan a decorar las tapas de los libros de su amigo de toda la vida y mentor político, Guillermo Lora. El mural antimilitarista encargado por Víctor Paz para el palacio presidencial y terminado en 1953 fue hecho trizas por los esbirros del general Barrientos en 1964, el mural de las oficinas de la COB fue retirado antes de que el edificio fuera demolido por órdenes del coronel Arce Gómez en septiembre de 1980 y la decoración interior del mausoleo de Villarroel queda fuera del acceso al público.[23]

En otras áreas, Bolivia estaba demasiado arrasada y la revolución era demasiado reciente para explotar al máximo su potencial simbólico y propagandístico, menos aún para dinamizar el esfuerzo creativo. En junio de 1952, un emprendedor agente de ventas de la compañía Pye de televisión, un tal Albert Rose, arribó a la ciudad de *La Paz* y declaró que el país podría tener un sistema de televisión en el curso de un año; en los hechos, tuvieron que transcurrir quince años. Tampoco hubo cine revolucionario; apenas se produjo un documental pobre inmediatamente después del levantamiento de abril y en los siguientes treinta años no se hizo ninguna película sobre la revolución, sea de ficción o de otra índole, lo cual contrasta con los casos de México, Cuba, Nicaragua y aun El Salvador. Hacia mediados de la década de 1950, Bolivia tenía doscientas salas cinematográficas pero todas dependían de películas sensacionalistas mexicanas o americanas subtituladas, que ya habían pasado por Lima o Buenos Aires. Hubo de ser la siguiente generación de revolucionarios quienes recurrirían al celuloide, pero incluso ellos estuvieron representados en la práctica y durante algún tiempo por un solo

23 Guillermo Lora: *Miguel Alandia*, La Paz, 1978.

hombre: Jorge Sanjinés, cuyos *Yawar mallku* (*Sangre de cóndor*), *El coraje del pueblo* y *Fuera de aquí* están entre las mejores películas políticas modernas de América Latina. Parece dudoso que aún poseyendo los recursos, el MNR hubiese hecho algo bueno a juzgar por la extraordinariamente psicofanática y deprimente complacencia del periódico oficial La Nación, que brindaba mucho menos información que La Razón, portavoz modelo de la Rosca silenciado para siempre después de la insurrección. El mejor periodismo político del país y el comentario más conciso no hubo de encontrarse en ningún periódico movimientista, sino en semanarios izquierdistas como El Pueblo, editado por el formidable Fernando Siñani. La dirigencia del partido había superado las frivolidades de La Calle, en tanto que el ala joven tenía poca experiencia en esa adversidad que genera la literatura política independiente e imaginativa.

Con todo, el MNR introdujo ciertos cambios en un área. Desde los albores del sexenio, el MNR tuvo que utilizar más a sus mujeres militantes, quienes en algunas ocasiones llevaron la delantera en actividad, especialmente en lo que se refiere a propaganda. Durante y después de la insurrección, las "Barzolas" (nombre que fue tomado de María Barzola, una mujer victimada en la masacre de Catavi en 1942) eran renombradas por su vigor y, muchas veces, por imponer violentamente la línea del partido entre los sectores populares. Lydia Gueiler Tejada fue la líder de facto de este movimiento y desempeñó un papel prominente en la insurrección de abril, habiéndose convertido en la secretaria de Paz, para después unirse al liderazgo de izquierda, junto a su esposo Edwin Moller.[24] El papel de Lydia Gueiler fue ciertamente extraordinario, al mismo tiempo que representaba la hábil explotación de sus atractivos por parte del partido y de su ilimitada energía, en una sociedad claramente machista donde mujeres como ella sin lugar a dudas inspiran más admiración que repudio. Lydia Gueiler fue la única mujer que impuso su sello en los escalafones superiores del MNR, como cabeza de la sección más "femenina" que feminista. Las esposas de los otros altos dignatarios siguieron dedicándose al rito tradicional de las buenas obras y a apoyar a sus esposos en ocasiones formales. No obstante, el MNR tuvo que reconocer tanto la deuda que tenía con estas mujeres trabajadoras como el poder latente de un sexo que ya gozaba de derechos políticos, que muy posiblemente formaba una mayoría de la fuerza de trabajo, que ya comenzaba a participar en cargos profesionales en aún pequeña pero creciente escala y que ejercía un dominio

24 En Gueiler, *op. cit.*, se da una relación completa de la lucha de las mujeres del MNR.

total en los mercados urbanos. El control social sobre las mujeres se mantuvo rígido, especialmente en los hogares, pero ahora tenían que ser tratadas como un electorado legítimo por encima de la exaltación de los papeles de esposa y madre. No hace falta decir que la constante referencia a "los hombres y mujeres del MNR" se convirtió en un rasgo característico, pero esto era sólo parte de una perceptible tendencia a la adopción del lenguaje y los motivos de una política moderna concebida en términos de la nación en su conjunto y que respetaba la importancia del consumidor, si no del consumismo, como un medio de incorporación. Empero, el poder del partido no derivaba de estos factores, tampoco se hacía esfuerzo alguno por construir una legitimidad en torno a ellos, prefiriéndose mantenerlos subordinados y complementarios a sus reformas económicas concentradas en la nacionalización de las propiedades de los barones del estaño y en la reforma agraria.

Nacionalización de las minas

El tema de las grandes compañías mineras ocupó el primer lugar de la agenda revolucionaria. Desde su fundación misma, el MNR había intentado ampliar el control estatal sobre este sector a través del recurso fiscal; y después de 1946 se acercó todavía más a la reivindicación de la FSTMB en torno a una nacionalización inmediata. Empero, en abril de 1952 el partido no estuvo en modo alguno completamente de acuerdo con la posición de los sindicatos, los cuales insistían en el control obrero y se oponían a la indemnización. La dirigencia movimientista quería evitar a toda costa cualquier tipo de roce con EE UU, así como un nuevo boicot que demostró ser tan perjudicial para la junta. La necesidad de afianzar las reservas extranjeras y la situación fiscal eran, con todo, abrumadoras; las reservas no llegaban a los treinta millones de dólares y, según documentos oficiales, el total de la declaración de impuestos de la familia Patiño en 1951 alcanzaba apenas los 415 dólares.[25] Consecuentemente, la primera medida adoptada por el régimen fue imponer a las compañías estañíferas la obligación de tramitar sus exportaciones a través del Banco Minero, que estaba bajo control estatal y de convertir todos sus ingresos en divisas en el Banco Central. Paralelamente, Paz nombró a Víctor Andrade como embajador en Washington, cargo que éste había ocupado durante el

25 *El Diario*, (La Paz), 5 de octubre de 1952.

gobierno de Villarroel. Relativamente nuevo en el partido, ligado a su ala derecha y exempleado de Nelson Rockefeller en la International Basic Economy Corporation en Guayaquil, Andrade simpatizaba mucho más con los intereses norteamericanos que con aquellos de los "criptocomunistas" que veía detrás de los líderes de la COB. En años posteriores proclamó que estaría más dispuesto a trabajar para la CIA (de lo cual fue ampliamente acusado), que ver a Bolivia "camino al comunismo". Con todo, en 1952 su tarea fue aplacar los temores de Eisenhower y el Departamento de Estado respecto a una nacionalización, la misma que el MNR se vio forzado a implementar de todas maneras. Esta misión dio lugar a una serie de conversaciones entre Andrade y Milton Eisenhower, hermano del presidente del país del norte –quien más tarde fue enviado a Bolivia a evaluar la situación–, así como a partidos de golf con el propio presidente Eisenhower en el Burning Tree Club, actividades que reflejaban el éxito de Andrade en cultivar el aprecio de los altos miembros del gobierno norteamericano.[26]

Evidentemente, no fue fácil convencer a Washington. Una nueva administración republicana encabezada por un soldado totalmente consagrado a los principios de la libre empresa en un mundo sobre el cual tenía un dominio sin precedentes, conocida por su labor desestabilizadora del régimen guatemalteco, absorbida por la guerra de Corea y por la cruzada maccarthista en contra del comunismo y ya profundamente atribulada por el estado de su relaciones con la industria estañífera boliviana, presentaba un obstáculo de proporciones. Por otra parte, Andrade se enfrentó al problema de que la nacionalización del petróleo realizada por Mossadegh en Irán estaba a punto de estallar en una seria crisis política. No obstante, el embajador en Washington contó con el importante apoyo de Paz, quien apenas unos días después de llegar a La Paz declaró: "...la nacionalización de las minas no es un proyecto rígido o general" y que para que funcione de manera seria se necesitaba un estudio preliminar, especialmente para conservar los servicios técnicos extranjeros.[27] Esta explicación fue inmediatamente recogida por EE UU, que dos días después observaba en su revista American Metals Market:

> ... las declaraciones emitidas de La Paz han sido contradictorias y desconcertantes para el observador extranjero. A su regreso de Buenos Aires, el nuevo

26 Víctor Andrade: *La revolución boliviana y los Estados Unidos 1944-1962*, La Paz, 1979. Significativamente, este libro apareció primero en inglés.

27 *El Diario*, (La Paz), 20 de abril de 1952.

presidente Víctor Paz Estenssoro declaró que la nacionalización de las minas sería un tema de investigación, pero que no se darían pasos precipitados en este sentido. Es probable que su declaración haya sido demasiado blanda para los radicales extremistas que están presentes en bastante número en las filas del Movimiento. Pero para el capital, venga de donde venga, la "nacionalización" tiene consecuencias alarmantes, un hecho que el presidente parece haber reconocido e intentado conciliar, cuando al día siguiente aseguró que su partido no es "anticapitalista" y reconoce la urgente necesidad que tiene Bolivia de capital extranjero... Esperamos que los acontecimientos demuestren que tan inquietantes derivaciones hayan sido prematuras.[28]

Estos comentarios fueron destacados en la prensa boliviana y, aunque intentaban prevenir cualquier forma de nacionalización, Paz respondía subrayando continuamente la necesidad de un "estudio sereno" del problema y las peligrosas consecuencias que podía acarrear el hecho de que el veinte por ciento de los accionistas de Patiño fueran norteamericanos. Esta respuesta dio resultados; a principios de mayo el Time describió a Paz como "...un experto en balancear el presupuesto... no es un Mossadegh cuando se trata de finanzas". La revista señalaba asimismo que Paz estaba dispuesto a vender estaño a 1.21 dólares la libra, a lo cual incluso la junta se había opuesto. Refiriéndose a Lechín, decía que "...ha trabajado con los trotskistas y además hasta cierto punto habla como un marxista, masculiando que él y sus trabajadores son independientes del gobierno. Quiere que se ponga en efecto la nacionalización rápido. Y la preparación de un informe por la comisión no debería demorar más de treinta días".[29]

Una vez más, la posición de Lechín frente a este tema era muy diferente que la de Paz. En la marcha del 1° de mayo, Lechín hizo una clara advertencia sobre la postura de la FSTMB y la COB:

> ...Pero la Revolución no ha concluido. Sólo los oportunistas y los burócratas pueden creer que con haber llegado al Palacio Quemado se ha detenido su curso impetuoso. La Revolución recién ha comenzado y con el sacrificio de nuestros mártires, debemos construirla sobre la base del proletariado organizado y consciente, única garantía para salvarla de la rosca y del oportunismo saboteador y contrarrevolucionario. Aquí estamos nosotros para exigir, orientar y defender. Mientras que no nacionalicemos las minas, para que el capital de los bolivianos se quede con los bolivianos; mientras que no ejecutemos la revolución agraria para que la tierra que cultivan los bolivianos sea para los bolivianos; mientras que no acabemos con los especuladores y demos pan al pueblo; mientras no afianzemos nuestra organización y clarifiquemos nuestra conciencia, la rosca destruirá nuestra revolución. Nosotros somos la única garantía para evitar los golpes contrarrevolucionarios que prepara la oligarquía, pero exigimos al Gobierno, que cumpla nuestro Programa. Y el que está contra nuestro Programa está contra Bolivia, porque nuestro Programa es el Programa de los explotados de Bolivia.[30]

El contenido de esta amonestación era duro, pero pronto quedó demostrado que divergía un tanto del comportamiento de Lechín, una discrepancia entre palabras y hechos que habría de ser un rasgo persistente de la errática carrera del líder cobista. El 13 de mayo, el gobierno anunció el nombramiento de una comisión para estudiar el proyecto de nacionalización; poco después Lechín y Torres fueron cooptados para participar en ella. No habría una expropiación inmediata y los temas relativos a la indemnización y al control obrero se hicieron *sub judice*, objeto de negociación tras bastidores. Lora, por su parte, habiendo instado a la inmediata ocupación de las minas, identificó esta participación como adelanto de la primera y quizás más grave claudicación en la movilización popular.[31] Retrospectivamente, está claro que una de las características claves de la revolución estaba en proceso de "burocratizarse";[*] pero cobró la forma de vacío político, el ritmo de cambio parecía haberse roto y, a partir de entonces, sería tema de negociación administrativa. La respuesta popular no fue muy tangible; si la noción de indemnización fue un anatema, el concepto de control obrero no dejó de ser vago para muchos. Además, nada se había decidido. En los meses subsiguientes fue notable la ausencia de toda agitación y debate. En cierto sentido, el tema parecía crítico y al mismo tiempo resuelto.

Tal demora fue crucial para el régimen. Le permitió mantener a raya todas las demandas de la COB mientras los líderes del partido pudieran instruir a aquellos del movimiento sindical sobre la complejidad e implicaciones políticas de la nacionalización. No se logró persuadirlos, pero sí convencerlos de discutir y realmente se logró una tregua en el escenario público. Finalmente, el trabajo de la comisión se prolongó durante cinco meses. No fue sino a fines

28 *American Metals Market*, 2 de abril de 1952.
29 *Time*, 5 de mayo de 1952.

30 *El Diario*, (La Paz), 3 de mayo de 1952.
31 Guillermo Lora: *La revolución boliviana*, La Paz, 1964, pp. 117-127.
* En el original: "process of being bureaucratized". (N. de la T.)

de octubre cuando la COB, que ya sabía lo que iba a ocurrir, retomó sus reivindicaciones originales en una larga y detallada carta a Paz donde explicaba por qué la indemnización representaría una continuidad de la tradición explotadora de la Rosca y cómo deterioraría las finanzas de la nación; asimismo daba razones de por qué ninguna expropiación lograría sus objetivos sin una transformación fundamental de las relaciones sociales en las minas. Los argumentos acerca de la indemnización fueron absolutamente vehementes, la posición de la COB en torno al control obrero también fue esbozada con bastante energía:

> Deseamos a este respecto, compañero Presidente, dejar establecido nuestro punto de vista para evitar por un lado campañas demagógicas sin responsabilidad y por el otro para demostrar a los tímidos y a los que ignoran el grado de madurez política que han alcanzado los trabajadores de Bolivia y que se encuentran suficientemente preparados para conocer su capacidad. Deseamos que el mecanismo de control obrero se establezca de modo directo, esto es, mediante delegados o representantes de los trabajadores que pongan en ejecución el referido control. Pedimos que se haga efectivo en el planeamiento de la producción, en los documentos y sistema contable, en el aprovisionamiento y atención de almacenes y pulperías; y fundamentalmente en la inversión de la plusvalía resultante de esta actividad.[32]

Esta tardía intervención logró un acuerdo, el cual fue de tal índole que no pasó mucho tiempo antes de que se estableciera lo enormemente desventajoso que resultaba para la FSTMB. El 31 de octubre, Paz y Lechín fueron a Siglo XX-Catavi, el centro minero de mayor oposición a la Rosca y de gran concentración de mineros, y firmaron el decreto de nacionalización en medio del fragor de las explosiones de dinamita y de abundantes salvas de la milicia local. Los festejos fueron jubilosos y se prolongaron por varios días. Bolivia había logrado su "independencia económica" y el régimen revolucionario cumplió con su principal mandato nacionalista.

Según los términos del decreto y sus medidas complementarias, la ya constituida Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) tomó posesión de todas las propiedades que anteriormente eran controladas en el país por Patiño, Hochschild y Aramayo: 163 minas operadas por trece compañías con una producción total de 27 mil toneladas métricas (cuatro veces mayor que aquellas restantes del sector privado) y una fuerza de trabajo de 29 mil hombres. No obstante, habría de pagarse una indemnización que a la larga alcanzaría los 27 millones de dólares (cifra que, en aquel momento, correspondía a dos tercios de las reservas de divisas del país). La FSTMB tenía sólo dos representantes (en lugar de delegados) en el consejo de siete de la COMIBOL, aunque el control obrero habría de permitirse un año completo después de la firma del decreto y, una vez más, a través de representantes individuales en lugar de tomar la forma colectiva o de delegados sujetos al poder de revocatoria.

32. *El Diario*, (La Paz), 24 de octubre de 1952.

En Washington, el problema de la indemnización cobró mucho más importancia que cualquier arreglo subsidiario relacionado con la representación obrera. Andrade lo sabía y respondió en consecuencia:

> 1) Mi gobierno se suscribe fervientemente a los principios de la democracia. 2) La nacionalización de las propiedades de los grupos Patiño, Hochschild y Aramayo representó un caso especial. La nacionalización de la propiedad privada no es política de Bolivia. 3) La nacionalización de las minas de estaño no significa confiscación de la propiedad. Pretendemos pagar a los anteriores dueños hasta el último centavo que se les debe. 4) El gobierno de Bolivia está consciente del papel que tiene el capital privado para contribuir al desarrollo de sus recursos y espera atraerlo.[33]

A pesar de las reservas, esta línea fue finalmente aceptada. La administración de Eisenhower ya había reconocido al gobierno de Paz Estenssoro y, en rara manifestación de perspicacia política, lo identificó como esencialmente amistoso y de carácter anticomunista. Hubo, en efecto, algún estruendo provocado por los accionistas de Patiño; pero luego de que Hochschild y Aramayo fracasaron en sus intentos de persuadir a las cortes chilenas de confiscar los cargamentos de estaño que yacían en los muelles de Arica, la Rosca no desarrolló campaña alguna de boicot a la COMIBOL. La nacionalización expedió el éxodo de 170 de alrededor de doscientos ingenieros y técnicos; pero en enero de 1953 ya estaba en La Paz un equipo de la Williams Harvey para negociar un nuevo contrato a nombre de la planta de fundiciones de propiedad de Patiño. Acordaron llevarse el cincuenta por ciento de la producción de COMIBOL, subrayando la enorme dependencia que tenía la corporación estatal de compañías foráneas; en este caso de una a la cual acababa de reemplazar en el punto de extracción.

33. Citado en Robert Alexander, *The Bolivian National Revolution*, New Brunswick, 1958, p. 103.

Así, con la neutralidad estadounidense, la aceptación a regañadientes de la nacionalización por parte de las compañías y una tregua tácita entre el régimen y la FSTMB, el futuro comercial de la COMIBOL parecía razonablemente sólido. Un año después de la nacionalización, el gobierno publicó una serie de discursos conmemorativos en que se sostenía: "...las minas han sido administradas de forma irreprochable... los conflictos sociales han desaparecido. Ahora que se ha establecido el control obrero, son los trabajadores de interior mina quienes mantienen el ritmo de la producción...". Significativamente, Víctor Paz no hizo referencia al control obrero y en cambio inició su apología encomiando a los técnicos extranjeros que se habían quedado. Por otra parte, Lechín sugirió que "...ahora podemos decir que controlamos nuestros destinos...", arriesgó una rápida cita de Adam Smith, enfatizó que el control obrero en COMIBOL era único en el mundo e identificó a los mineros íntegramente con su trabajo.[34]

La realidad, penosa pero previsible, estaba en desacuerdo con esa visión, pese a que, en ciertos aspectos muy importantes, la organización de las minas bolivianas sufrió transformaciones. En primer lugar, cualesquiera hayan sido los nuevos lineamientos internos, la posición de la COMIBOL en el mercado mundial no era mejor, y en algunos sentidos era extraordinariamente peor que aquella de la Rosca, su predecesora. Los cambios en el sistema ciertamente alteraron los mercados por algún tiempo; pero el precio del estaño, de todos modos, rendió a la baja; no se recuperó entre 1952 y 1961 y recién en 1964 recobró su nivel de 1951. Es más, fue en el curso de los primeros tres meses de la nacionalización cuando los niveles de precios experimentaron la más grave declinación: de 1,21 dólares a 0,80 centavos de dólar por libra. La RFC hizo una compra spot en enero de 1953, pero no habría de volver a adquirir estaño hasta julio. Las exportaciones de COMIBOL aumentaron algo en 1953, pero desde entonces bajaron de manera continua: en 1958 los ingresos de la exportación del estaño correspondieron a menos de la mitad de aquellos de 1952.

En segundo lugar, ni la propia COMIBOL ofreció una solución viable a su deteriorada situación. Desde un principio, la corporación –parte vital de la economía boliviana– resultó ser una entidad ineficiente, escenario de interminables conflictos políticos, objeto de constantes malos manejos y de una progresiva burocratización. No es éste el lugar para preocuparnos de todos los detalles; pero habría que señalar algunos aspectos. El más importante de éstos, desde un punto de vista puramente comercial, fue el problema de revivir una infraestructura que fue peligrosamente descapitalizada y cuyos recursos disminuían aceleradamente. A primera vista, esta tarea sería imposibilitada por las reivindicaciones obreras, ya que el poder de la FSTMB exigió claramente la inmediata reincorporación de todos aquellos que habían sido despedidos por actividades políticas o sindicales. En cuatro años, la fuerza laboral de la COMIBOL creció de 29 mil a 36 mil y el Estado desembolsó ocho millones de dólares en "pago de reposición" como bono de recontratación. Empero, los trabajadores de base en realidad aceptaron el argumento de que la COMIBOL no podía financiar los gastos de un incremento en el salario básico; por lo tanto, se abstuvo de plantear sus ya antiguas demandas y siguió trabajando en condiciones muy similares a aquellas que prevalecieron en el período de la Rosca.

34 *Al año de la nacionalización de las minas*, La Paz, 1953.

De modo que, en una época de inflación desenfrenada, el congelamiento del precio real de una variedad de productos básicos en las pulperías cobró importancia vital para los trabajadores, cuyo salario real se redujo en 42,5 por ciento entre 1950 y 1955.[35] Tanto René Ruiz González como Wilfter Gómez, quienes han llevado a cabo cuidadosos estudios sobre la COMIBOL, señalan una declinación en los costos de personal de 38 por ciento en 1952 a 35 por ciento en 1958; costos que aumentaron recién cuando el poder sindical fue cercenado (el incremento se debió menos a la militancia obrera que a los efectos acumulados de la descapitalización). Según Gómez, los costos laborales de Comibol por trabajador fueron de 86 dólares mensuales en 1952; bajaron a 42 dólares en 1956 y nunca volvieron a aumentar por encima de los setenta dólares antes de 1970.[36] Algunos economistas norteamericanos sugieren que los sueldos fueron incrementados considerablemente, sobre la base del aumento de subsidios de pulpería, y afirman que la productividad sufrió una disminución extrema y abrupta tomando como base la reducida exportación de mineral.[37] En efecto, la productividad declinó, pero si nos basamos en la producción por trabajador encontramos que la producción de 3,91 toneladas finas/hombre en 1952 aumentó a 4,5 en 1956 y bajó solamente a 3,6 en 1958, a pesar de la permanente disminución del contenido de estaño, de una grave escasez de equipo y de seguir empleando los mismos ineficaces métodos, desde el proceso de extracción hasta el de concentración inicial. Por otro lado, tomando el

35 Informe de Ford, Bacon y Davis sobre COMIBOL, citado en René Ruiz González: *La administración empírica de las minas nacionalizadas*, 2a. ed., La Paz, 1980, p. 190.

36 Gómez, *op. cit.*, pp. 24 y 229.

37 Thorn: "The Economic Transformation", en James Malloy y Richard Thorn (ed.): *Beyond the Revolution. Bolivia since 1952*, Pittsburgh, 1971, p. 171. Thorn basa sus afirmaciones en cifras desconfiables extraídas del *US Army Handbook* y en una lectura limitada de Ruiz González, quien modifica bastante la descripción de una caída general de la productividad.

nivel total de mineral en bruto extraído en Siglo XX, encontramos que un turno promedio en 1955 producía 1,31 toneladas contra 1,22 toneladas en 1950 con una excavación total que subió de 1,05 millones de toneladas a 1,45. Si a esto se añade el hecho de que en 1960 se necesitaba avanzar diez metros para producir una tonelada de mineral, mientras que en 1950 se lograba la misma cantidad avanzando apenas un metro, resulta por demás demostrado que la imagen de indisciplina y pereza es equivocada, ya sea por un interés político o por un cálculo erróneamente concebido.[38]

Gran parte del personal sobrante y de la ineficacia se encontraban en exterior mina y no concentrados en los socavones. El porcentaje de trabajadores de interior mina en las nóminas totales se redujo de 82 por ciento en 1952 a 52 por ciento en 1959. Hacia 1967, cerca de la tercera parte de los 22.250 empleados de la Corporación eran de escritorio, y de los 14.700 trabajadores nominales sólo 7.600 trabajaban en la roca; los demás estaban empleados en el mal organizado y poco mecanizado servicio de transporte y en las actividades de procesamiento de exterior mina.[39] La COMIBOL fue la principal víctima de la capitulación del MNR ante la demanda de "trabajo para los muchachos", su administración se sobresaturó de personal y consecuentemente de ineptitud. Hasta 1964 no tenía una evaluación confiable de sus ingresos y aún en 1970 carecía de un coherente sistema contable. El nivel de producción proyectado para la COMIBOL en 1963 tenía un error de cálculo que sobrepasaba el margen del treinta por ciento, habiendo sido reformulado tres veces en un año. Los asesores traídos para evaluar sus operaciones fueron consistentemente críticos en señalar considerables deficiencias administrativas en toda una gama de actividades, comenzando por la falta de un proceso claro de toma de decisiones, hasta el saboraje y el robo.[40] En combinación con la baja calidad del mineral, esta situación contribuyó enormemente a las pérdidas de la Corporación que alcanzaron los trece millones de dólares en 1960, cuando los costos de producción todavía estaban por encima de los precios del mercado. Empero, la temprana falta de rentabilidad de COMIBOL fue probablemente más directamente determinada por la política económica general del MNR, diseñada más para impulsar la diversificación, especialmente a favor de la industria petrolera, que para revivir aquella del estaño. El mecanismo principal del régimen en este

38 Sinforoso Cabrera R.: *Informe de labores*. La Paz, 1960; Amado Canelas: *Mito y realidad de la Corporación Minera de Bolivia*. La Paz, 1966, p. 43.

39 Laurence Whitehead: "Los trabajadores mineros de Bolivia: sus tradiciones y perspectivas políticas" (ponencia entregada al Simposio sobre Bolivia), Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1976.

40 Para un resumen, ver Ruiz González, *op. cit.*, pp. 169-172.

sentido fue el empleo de una serie de distintas cotizaciones y la obligación que impuso a la COMIBOL de vender sus dólares al Banco Central a precios considerablemente inferiores a los vigentes en el mercado libre (por ejemplo 230 bolivianos contra 683 bolivianos en 1955). De habérsele permitido a la Corporación vender dólares al precio del mercado paralelo, hubiera rendido utilidades de 103,8 millones de dólares de bolivianos en lugar de las pérdidas de 10,2 millones de bolivianos.[41] En 1956, la COMIBOL contribuyó con treinta millones de dólares a la

Cuadro 2
Estado de las principales minas de COMIBOL (1956) (a)

Mina	Utilidad	Duración estimada (años)	Contenido de estaño % (b)		Subsidio (US$/T)	Producción (c) costo (US$/lb.)
			1950	1960	1956	
Colquiri	+	16	2,02	0,68	2,74	1,54
Huanuni	+	8	1,90	0,97	3,52	1,16
Catavi	-	10	1,20	0,68	2,21	1,62
Chocaiqui	+	3,4	1,80	1,94	2,05	0,69
Potosí (Unificada)	-	4	1,72	1,10	5,91	1,27
Caracoles	+	3	2,30	0,84	3,89	0,87
Viloco	-	2-3			3,89	,96
Oploca	+					
Siete Suyos	+	1,2				
San José	-	Ninguna		19,07	1,53	
Santa Fe	-	Ninguna			11,32	
Morococala	-	Ninguna		4,41	1,78	

Observaciones:
(a) Todos los datos, con excepción de las columnas tres y cuatro, han sido extraídos del informe *Ford, Bacon and Davis* (1956). Todos estos ingenios siguen produciendo en 1983, como demostración del valor de las mejoras en las técnicas de fundición de minerales de baja ley, así como de la subestimación de la capacidad de los trabajadores de interior mina y de los ingenieros para encontrar nuevas vetas y reorganizar la explotación de las ya descubiertas.
(b) En los casos en que no se consigna cifras, no hay datos fácilmente disponibles.
(c) El precio promedio en el mercado por libra de estaño en 1956 fue de 0,98 centavos de dólar; la utilidad general no se basa sólo en el estaño, aunque en todas las minas, con excepción de Viloco, es por mucho el mineral con mayores beneficios.

41 Thorn, *op. cit.*, p. 174. George Jackson Eder: *Inflation and Development in Latin America: A Case Study of Inflation and Development in Bolivia*, Ann Arbor, 1969, p. 118. Esta crítica también es sostenida por un importante trotskista militante de la FSTMB, Filemón Escóbar, en: "Testimonio de un obrero", (manuscrito), 1967-79, p. 43

Corporación Boliviana de Fomento (CBF) y con diez millones de dólares a la empresa estatal del petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuando de acuerdo a la empresa norteamericana Ford, Bacon and Davis necesitaba apenas 2,25 millones de dólares para corregir sus propias dificultades estructurales. Con el gobierno movimientista, más de cien millones de dólares fueron transferidos de COMIBOL a YPFB. La diversificación era correcta y muy deseable en teoría, pero pésimamente administrada en la práctica.

En términos de organización, la nacionalización fortaleció muchísimo a la FSTMB y a la COB. La oficina del control obrero estaba investida de una importante autoridad administrativa y de efectivos poderes de veto sobre muchos temas en el ámbito de los campamentos. Esto originó bastantes problemas a los gerentes de la COMIBOL, quienes no siempre podían o estaban dispuestos a llegar a una *entente* amigable con los controles, pues a pesar de funcionar individualmente, no podían permitirse enfrentamientos frecuentes con las bases que los habían elegido en asambleas públicas. En los campamentos más chicos, el conflicto podía limitarse a problemas puntuales secundarios, pero en Siglo XX-Catavi, que siempre fue el foco de descontento en ese período, el control obrero pronto llegó a desempeñar un papel dominante en negociaciones sumamente cargadas, no sólo entre la fuerza laboral y la gerencia, sino también entre el sindicato y el menos poderoso, pero respaldado por el Estado, Comando Especial del MNR. Resulta significativo que los principales responsables de la oficina no eran militantes del MNR; el rimbombante y popularísimo líder comunista Federico Escóbar se mantuvo en el puesto entre 1955 y 1963, lo cual refleja la permanente autoridad del PCB en el sindicato local, a despecho de los numerosos ataques que recibía del MNR y de la más caprichosa influencia porista. En Catavi, este puesto estuvo ocupado durante varios años por Sinforoso Cabrera, quien resistiendo la presión de que era objeto para unirse al MNR conservó su simpatía por el POR, aunque no fue militante de ese partido. No obstante, la oficina del control obrero en general se burocratizó demasiado –Mario Torres recibía noventa mil bolivianos como jefe del control obrero, en tanto que los trabajadores tenían un salario de cuatro mil bolivianos– y a medida que las relaciones entre la FSTMB y el MNR se deterioraron, los sindicatos de planta tuvieron que recurrir a métodos tradicionales de acción directa contra una administración sobre la que no ejercían control formal.

Con todo, a principios de 1953, estos hechos fueron previstos por muy poca gente y el predominio de la COB fue lo suficientemente grande como

para provocar una aguda crisis política. Ésta adoptó dos formas: la depuración de la extrema derecha del MNR y una campaña concertada contra la influencia gutista; en ambas instancias, los dirigentes centristas del MNR obtuvieron importantes beneficios.

Después de los violentos intercambios de septiembre de 1952, quedó claro que la derecha tradicionalista del MNR no permanecería sometida por mucho tiempo. El nivel de movilización de masas, la independencia y fuerza de las milicias, la "arrogancia" de la COB y la aparente buena voluntad de Paz al ceder ante muchas de sus demandas fortaleció la visión de los conservadores, quienes sostenían que la revolución nacional estaba tomando una dirección marcadamente comunista. A principios de enero de 1953, este grupo, que incluía a figuras como Alfredo Candia, Luis Peñaloza y Hugo Roberts, quienes ocupaban altos puestos en el gobierno y el partido, se unió al JEMG, coronel Cataldi, para intentar un golpe con el fin de "librar al presidente de la influencia comunista". El golpe fue pésimamente organizado y aplastado por los carabineros aun antes de que las milicias salieran a las calles. Los rebeldes correspondían a una minoría de la dirigencia del partido y entre ellos no se contaba muchos de los que mantenían considerables reservas acerca de la orientación del gobierno, pero esta acción marcó un hito importante. Paz, por haberse comprometido –en ocasiones muy vehementemente– con la COB, resultaba un blanco de la derecha y, aunque manejó el tema de los disidentes muy indulgentemente, su popularidad creció extraordinariamente, lo cual amplíaba su esfera de acción para controlar a la izquierda. Esto, unido al hecho de que el proceso revolucionario demostró ser sumamente vulnerable, fortaleció a Paz para exigir a los dirigentes cobistas a mantenerse en la línea y a reducir el poder de los miembros no movimientistas de la organización.

A principios de 1953, el MNR confiaba demasiado en su capacidad política para contener a la FSB y a la "reacción oligárquica". El recientemente creado Instituto de Capacitación Política estaba brindando solidez política al partido y editaba publicaciones para respaldar sus ataques a otros partidos. Aquella destinada a la FSB –que muy pronto se opuso públicamente a la revolución movimientista– mostraba una incontrolada burla de la corriente política que "...después de muchos años de acción vegetativa esterilizada en un puro antipirismo, partido que le disputaba la hegemonía en las chicherías cochabambinas..." no había apoyado la causa de los rebeldes en la guerra civil de 1949, ni la huelga general de 1950, ni la nómina democrática en las elecciones de 1951, ni el levantamiento de 1952 ni tampoco a sus propios

compañeros de alma en lo ideológico en enero de 1953.[42] El MNR repudió enérgicamente las declaraciones de la FSB en sentido de que ese partido tenía el monopolio de las políticas católicas en el escenario público, lo cual, afirmaba, no era sino una manera de encubrir el fascismo, mientras que el propio gobierno estaba más cerca de las doctrinas básicas de la fe cristiana en todo sentido.

El POR planteaba una amenaza mucho más seria en lo inmediato, ya que supuestamente controlaba por lo menos la mitad del Comité Central de la COB, que estaba integrado por trece personas; este tema fue muy manejado por la prensa de principios de 1953. Mientras el MNR recurrió a Carlos Velarde para denunciar al trotskismo teórica e ideológicamente acusándolo de proimperialista porque "...menosprecia el papel y la capacidad revolucionaria del campesino en un país como Rusia, y de la clase media y hasta de la burguesía nacional en una colonia o semicolonia...", Paz se apoyó confiadamente en Lechín para reducir el número de los miembros poristas de la cúpula de la COB.[43] A esto contribuyó el PCB a través de su aflautada oposición al POR. En Siglo XX, el secretario sindical comunista Gabriel Pórcel emprendió una campaña contra el hermano de Guillermo Lora, César, y cuando éste estuvo en la cárcel durante un año por un cargo urdido por el comando movimientista, no hizo nada por ayudarlo. Dentro de la COB misma, los ataques más vehementes contra el trotskismo provenían del delegado estudiantil comunista, Sergio Almaraz. El partido tuvo que asumir una posición defensiva y, aunque transcurría algún tiempo antes de que entrara en crisis, los posteriores meses a enero de 1953 mostraron una declinación de su influencia.[44] No obstante, estos meses no resultaron menos abrumadores para el partido del gobierno, pues habiendo negociado satisfactoriamente los obstáculos a la nacionalización, tenía que enfrentar el descontento generalizado del campo y la avasalladora necesidad de implementar una reforma agraria.

Reforma agraria

La posición del MNR sobre el tema de la reforma agraria en términos generales fue similar a la que adoptó respecto a la nacionalización. Nunca figuró

42 *El trotskismo frente a la Falange fascista*, La Paz, 1953, pp. 4-5.

43 Carlos Velarde: *El nacionalismo y la acción demagógica y proimperialista del trotskismo*, La Paz, 1953. Sobre un ataque de centro izquierda del partido ver René Zavaleta Mercado: *El caballo porista*, La Paz, 1959.

44 Lora (*A History...*, p. 289) es bastante claro sobre el uso que se hizo del PCB, una interpretación apoyada en informes de prensa de los debates de la COB.

en ningún programa del partido antes de 1953 una reforma agraria en cuanto tal y se discutía únicamente en términos más generales; frecuentemente se hacía referencia a una vaga "incorporación" del campesino a una sociedad y nación ya existentes. Esta actitud sufrió poquísimas alteraciones inmediatamente después de abril, pues los campesinos habían tenido una participación muy marginal en la insurrección y parecían estar ampliamente dispuestos a aceptar una dócil relación clientelista con el flamante régimen. Así, los líderes gubernamentales expresaron cierta confianza en desarrollar limitadas propuestas de cambio, lo cual estuvo determinado en parte por las presiones del ala derecha del partido, cuyos miembros percibían que una reforma agraria entrañaba consecuencias en las relaciones de propiedad en general mucho más peligrosas que aquellas evidentes en la nacionalización de la compañías mineras. La derecha movimientista estaba dispuesta a aprobar una medida que otorgara el derecho a comprar progresivamente predios corrientemente alquilados a los colonos; mas, no aceptaría la idea de expropiación de otras tierras de latifundio. La COB y la izquierda movimientista, por otra parte, estuvieron hasta octubre casi completamente absorbidas por el tema de las minas y carecían de propuestas concretas para la esfera rural, más allá de demandar una "revolución agraria", aunque se enviaron algunos militantes al campo para apoyar la formación de sindicatos y la COB ocasionalmente instó a las tomas de haciendas por los campesinos.

El nuevo ministro de Asuntos Campesinos, Ñuflo Chávez Ortiz, hijo de un rico hacendado de Santa Cruz y un miembro más cauto de la izquierda del partido, intentó reconciliar estas dos posiciones. Dos meses después de la revolución declaró: "...vamos a orientar la reforma agraria sobre la base del fortalecimiento de la propiedad colectiva comunaria y la implantación de la etapa capitalista en las propiedades privadas, liquidando el feudalismo...".[45]

Con esto, la derecha empezó a temer la introducción de una colectivización en gran escala; pero, en realidad Chávez estaba separando la organización en dos esferas ya existentes: los latifundios y las comunidades. Cuando se le presionó para que explique la naturaleza de las propuestas, que en la práctica eran ideas muy generales de uno de los miembros de su equipo, el ministro dejó claro que "la Reforma Agraria no implicará ningún desconocimiento del Derecho de Propiedad... la organización de un nuevo sistema de trabajo agrario que se desarrollará en base a las actuales comunidades indígenas, para realizar la cooperativización... No es posible ir a la redistribución de tierras por-

45 *El Diario*, (La Paz), 6 de junio de 1952.

que ello implica establecer el minifundio, perjudicial a la producción…".[46] Paz fue aun más cauto en sus proclamaciones. En una estrepitosa asamblea en el municipio de Jesús de Machaca, por mucho tiempo núcleo del descontento campesino, habló (a través de un intérprete) a la manera de un patrón benevolente y sin hacer apreciables promesas: "…el gobierno, atento siempre a las necesidades de la clase indígena, ha dado instrucciones del caso para que sean atendidas de inmediato por los distintos ministerios y las reparticiones públicas… Yo quiero que todos ustedes presten su más decidida cooperación al gobierno. Pero ¿cómo? Manteniendo el orden perfecto en el altiplano, produciendo más, trabajando más… y a la vez nosotros haremos todo cuanto esté de nuestra parte para mejorar sus condiciones en todo sentido".[47] Esto ocurrió en junio y la referencia al "perfecto orden" no resultaba inoportuna, pues los campesinos ya comenzaban a darse cuenta de las posibilidades de la revolución de abril y a embarcarse en acciones independientes, que continuaron escalando hasta y aun después del decreto final de reforma agraria, firmado en agosto de 1953.

Dadas las condiciones esencialmente provincianas de la existencia rural, la forma e intensidad de esta movilización era bastante desigual. Sin embargo, a fines de 1952 estaba tomando la forma de una simple negativa a trabajar para los hacendados, dado que éstos no reconocían el decreto de Villarroel que abolía el pongueaje; o de constantes apelaciones legales por la expropiación de haciendas y verdaderas tomas y divisiones de propiedades. Al mismo tiempo, se establecieron rudimentarios sindicatos, que apenas guardaban una semejanza formal con los sindicatos urbanos, sobre lineamientos francamente caóticos, aunque a veces para acciones inmediatas. Durante cinco meses, las zonas claves del campo boliviano estuvieron inmersas en desórdenes, con frecuencia localizados en una finca o poblado, pero constantes y dirigidos primordialmente a la clase terrateniente, provocando en ella un sentimiento de aguda aprehensión e incluso un pánico, que justificadamente Herbert Klein lo ha comparado con el "Gran Miedo" de la Francia revolucionaria.[48]

Los disturbios se concentraron en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Oruro, también fueron evidentes en el norte de Potosí y en algunas zonas de Chuquisaca, pero prácticamente no existieron en el resto del país. A lo largo de las playas del lago Titicaca y en el valle de Cochabamba,

46 *Ibid.*, 2 de agosto de 1952.
47 *Ibid.*, 18 de junio de 1952.
48 Klein, *Revolutions…*, p. 235. Un maravilloso estudio del caso francés está en Georges Lefebvre: *The Great Fear of 1789. Rural Panic in Revolutionary France*, Londres, 1973.

casas de hacienda eran semanalmente objeto de asaltos y, aunque estas pequeñas revueltas quedaban disueltas por falta de una dirección o apoyo consistente, gran número de trabajadores rurales participaron en ellas. En noviembre de 1952 campesinos de Colomi, Cochabamba, bloquearon el camino de acceso a la hacienda Emusa, destrozaron un camión y maltrataron a sus ocupantes; seguidamente, más de tres mil campesinos, armados con machetes y palos, ingresaron al pueblo, se apropiaron de armas, cortaron las líneas telefónicas, quemaron varias viviendas y tres casas de hacienda y mataron a una persona. La situación era tan delicada que el director local de Reforma Agraria responsabilizó por el incidente al historial de malos tratos prodigados por el hacendado de Emusa y no tomó medida alguna, aparte de enviar dos representantes para discutir los problemas de los campesinos.[49] En junio, La Patria, de Oruro, registraba con cierto detalle "un horrible crimen" en la finca Caravi, que parece ser representativo de los muchos incidentes que tuvieron lugar en las extensas y áridas haciendas del Altiplano. Según los informes recogidos por once soldados enviados a investigar la muerte del hacendado:

> El señor Rómulo Ruiz… había notado que tres bueyes estaban pastando en sus sembradíos y como es costumbre en las propiedades rústicas para no sufrir mayores perjuicios condujo los animales hasta la casa de hacienda. Inmediatamente se presentó el indígena Condori, excolono de la hacienda Caravi, e increpó al señor Ruiz. Luego de palabras violentas, se fueron a los hechos dándose ambos de bofetadas en las que llevó la peor parte el indígena.
> Condori, deseoso de tomar venganza, reunió casi a la mayor parte de los colonos de la hacienda y contó lo ocurrido instigándoles a que agredieran "al patrón". Con argumentaciones belicosas exasperó los ánimos y en grupo los condujo hasta la casa de hacienda. No hubieron discusiones cuando los indígenas invadieron el domicilio de los esposos Ruiz-Flores. Armados de palos unos, lampas y picotas otros, de inmediato lo atacaron y victimaron a Rómulo Ruiz de un tremendo golpe de picota en la cabeza y a su señora le produjeron una herida profunda con la lampa. La señora, que aún estaba con vida, fue llevada hasta el dormitorio donde entraron la mayoría de los colonos y allí a golpes de palo le quitaron el último hálito de vida. Alicia Ruiz, de veinte años, que fue a la hacienda de su hermano Rómulo con motivo de pasar una breve temporada fue testigo ocular de estos atentados. Salvó milagrosamente su vida pidiendo de rodillas perdón, la acompañaban en sus ruegos una señora y dos niñas, cuyos nombres no se ha podido averiguar. Los indígenas para tal gracia primeramen-

49 *El Diario*, (La Paz), 10 de noviembre; 20 de noviembre de 1952.

> te la llevaron a la iglesia y allí junto a sus compañeras en desgracia las hicieron jurar y besar una cruz para que no dijeran palabra alguna de lo que habían visto.[50]

Por supuesto, la señorita Ruiz rompió su promesa inmediatamente y Condori tuvo que darse a la fuga, mientras otros veintitrés colonos fueron capturados posteriormente en Sicasica. Difícilmente puede sorprendernos que el relato de la señorita Ruiz y el estilo de un documento provincial hayan contribuido a acentuar la cruda violencia de los campesinos: pues, cualesquiera hayan sido las motivaciones sociales de estos hechos, lo cierto es que el señor Ruiz y su esposa estaban incuestionablemente muertos. Las columnas de La Patria, al igual que aquellas de Los Tiempos de Cochabamba, estaban inundadas de pedidos de los hacendados de mayores garantías gubernamentales y de más tropas. Paralelamente, muchas haciendas del altiplano fueron abandonadas por sus dueños y pasaron a la propiedad de facto de los peones. En las haciendas más prósperas del valle, los hacendados ofrecieron mayor resistencia y los campesinos se vieron frecuentemente involucrados en actividades más organizadas. En diciembre, los campesinos del Chapare cochabambino cercaron los caminos de Aguirre y cobraron peaje a los viajeros durante varios días.[51] A mediados de 1953, los pueblos de Tarata, Cliza, Punata y Arani fueron invadidos y registrados en busca de armas. Cuatro personas murieron en enfrentamientos, todos los caminos fueron bloqueados y el tren de Cochabamba detenido y enviado de vuelta a la ciudad, y la comisaría de policía de Vacarra fue sitiada. Los pobladores de Tarata parecían haber incurrido en una hostilidad particular, ya que los campesinos regresaron la noche después de la ocupación inicial, confiscaron las mercancías de las tiendas del pueblo y, según los informes, al grito de "exterminaremos Tarata", saquearon un gran número de casas.[52] Esta región habría de ser nuevamente escenario de prolongados y violentos disturbios a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960, como resultado de los conflictos mercantiles entre Cliza y Ucureña y de una empecinada lucha entre los líderes locales de los respectivos sindicatos campesinos.

Muy a menudo, no había nada que pudiera hacerse en tales situaciones; el ejército no estaba en condiciones de tomar a su cargo las operaciones y, en cualquier caso, estaba estrictamente prohibido de tomar medidas represivas.

50 *La Patria* (Oruro), 19 de junio de 1952.
51 *El País*, (Cochabamba), 10 de diciembre de 1952, citado en Kohl, p. 68.
52 *El Diario*, (La Paz), 2 de julio; 3 de julio de 1953.

Las milicias urbanas y los carabineros se mostraron reacios a enfrentarse con campesinos que habían declarado formalmente su lealtad al MNR, que responsabilizaban de los desórdenes a los patrones y a la Rosca y en muchos casos tenían bastante poder militar y sobrepasaban en número a las fuerzas urbanas. Sin embargo, en ocasiones las autoridades fuertemente presionadas pudieron prevenir situaciones explosivas con diligentes mediadores. En noviembre de 1952, el prefecto de Cochabamba y un oficial mayor del Ministerio de Asuntos Campesinos, Vicente Álvarez Plata, no demoraron en llegar a Cliza para intervenir en una disputa que evidentemente estaba sumiendo a todo el valle en la violencia. El corresponsal local de El Diario, claramente impresionado por la recepción de que fueron objeto, informaba:

> En cuanto reconocieron el automóvil prefectural, los campesinos dispararon sus armas de fuego, y el ronco bramar de millares de pututus hirió los aires con presagios funestos. Era el saludo a la primera autoridad departamental. Un mar de manos se agitó en el espacio con la característica señal de la "v". El prefecto reunió a los principales cabecillas y les pidió en un discurso en quechua que depusieran su actitud beligerante, por cuanto de inmediato atendería sus reclamaciones. Fundaron su queja los campesinos de que se les había arrebatado sus "pacjales" y que se había cancelado sus gratificaciones anuales al c. Emilio Pinto, colono de Ramón Ledezma.[53]

El tema de los pagos para "garantizar" la propiedad de las tierras y como contribuciones al sindicato fue frecuentemente señalado como la causa de los desórdenes, ya que personas mucho menos que escrupulosas podrían liberar a los campesinos de, muchas veces, considerables sumas en retribución de "servicios" imaginarios con las autoridades a favor de ellos. A menudo se acusaba de tales prácticas a los líderes que caían en desgracia o que estaban en disputas ya sea personales o colectivas, dificultando así cualquier tipo de alianzas que pudieran estar en juego. La primera víctima renombrada, pero aparentemente justificada, de esto fue Antonio Álvarez Mamani, un viajero callawaya de Calachaca que tenía antiguos vínculos con el MNR y que había estado promoviendo agitación en el altiplano norte por más de una década. Después de la revolución, Álvarez competía con Gabino Apaza por molestar las "ramas" de los campesinos de La Paz y Oruro. Arrestado por "fraude" y "subversión" cuatro veces en un año, Mamani era puesto en libertad según

53 *Ibid.*, 22 de noviembre de 1952.

las necesidades de alianzas locales y conciliación de disputas entre dirigentes.[54] En marzo de 1953, en una de su estadías en la cárcel, Mamani afirmó que encabezaba cincuenta sindicatos por su "conducta ejemplar y servicio a la nación". Poco después de ser liberado, acusó a Apaza de estar bajo influencia comunista y de incitar deliberadamente a los campesinos a la insurrección; Apaza respondió inmediatamente de manera similar.[55] Tales acusaciones habrían de ser un rasgo común en las laberínticas luchas entre dirigentes rivales a lo largo de los treinta años siguientes. Empero, en ese momento los terratenientes organizados en la Sociedad Rural eran quienes lanzaban tales denuncias con más frecuencia. En junio de 1952, una delegación de la Sociedad consiguió una cita con el ministro de Gobierno, a quien presentó "...numerosas reclamaciones referentes a un ambiente de agitación que existe en numerosas regiones del altiplano, creado por agitadores profesionales de afiliación comunista".[56] Si el estaño había sido controlado por una diminuta élite de tres compañías, los terratenientes rurales conformaban la arrolladora mayoría de la clase capitalista retrógada de Bolivia. Ahora no sólo sentían la amenaza de perder sus tierras sino también el espectro de una rebelión masiva campesina que presagiaba el colapso total del control social en el campo: detrás de todo ello estaban como siempre los bolcheviques.

En realidad, la agitación de los partidos políticos en el campo fue muy limitada. En la década de 1940, el PIR ejerció cierta influencia en Cochabamba y el MNR había mantenido una serie de contactos poco fiables en el altiplano, los cuales se disolvieron el año anterior a la reforma agraria en el crisol del paternalismo gubernamental –aún sumamente inestable en ambos extremos–, sobrepasados por la acción independiente originada por falta de sistemas de control local, pura impaciencia, disputas regionales, permanente provocación de los patrones o por las actividades de los peripatéticos agentes de la charlatanería. El único incidente importante de influencia "comunista" involucraba al POR que, bajo la dirección de su otrora líder, Warqui, había establecido cierta presencia entre los campesinos de Ucureña, pero esto pronto demostró ser efímero y había sido posible únicamente a través del apoyo a una facción en conflicto por cuestiones financieras con el líder de la confederación regional. Con todo, estos hechos no tuvieron mayores consecuencias para los habitantes

54 J. Blanco: *Antonio Álvarez Mamani, historia de un dirigente campesino*. La Paz, 1969.
55 *El Diario*, (La Paz), 18 de marzo; 30 de marzo de 1953
56 *Ibid.*, 14 de junio de 1952.

de Cochabamba a fines de enero de 1953, como El Diario le confirmó con bastante detalle:

> Más de mil indígenas armados causaron pánico en Cochabamba el sábado pasado cuando, armados con garrotes, hachas, palos y algunos con fusiles, marcharon desde Ucureña toda la noche del viernes para obtener la libertad de Pauline Morales, José Rojas, Crisóstomo Iñañuras, Liborio Orellana, Carlos Montaño, Napoleón Chacón y Félix Tenoris, todos ellos de filiación peristista.
> Los dirigentes anteriormente nombrados habían sido arrestados el jueves por subversión... La gente despavorida huyó precipitadamente temiendo que los subvertores iniciaran el ataque. Los propietarios de tiendas y otros puestos de venta rápidamente cerraron sus puertas y levantaron sus productos, en previsión contra un posible saqueo. Felizmente los indígenas no tocaron nada ni hicieron daño a nadie.
> Frente a la prefectura se congregaron los manifestantes y demandaron la libertad para sus dirigentes. Los subvertores del orden hacían sonar sus pututus anunciando su franca beligerancia. Desde los balcones de la prefectura habló la señora Rosa Morales de Guillén, destacada dirigente del MNR. En quechua pidió serenidad y el nombramiento de parlamentarios para solucionar el conflicto. Los indígenas no aceptaron ninguna proposición, pidiendo el respeto al fuero sindical y acusaron a Agapito Vallejos, actual Secretario de Gobierno de la Federación de Trabajadores Campesinos de ser traidor y de haber abierto cuenta corriente en uno de los bancos de La Paz de Bs. 60.000 con dineros procedentes de "rutas".
> Cuando Emilio Chacón, que encabezaba a los manifestantes, trató de hablar desde el kiosko de la plaza, los automóviles oficiales hicieron funcionar sus bocinas, ahogando las palabras de éste. Los indígenas se tomaron la revancha cuando intentó hablarles Agapito Vallejo, tocando sus pututus.
> Cuando los indígenas se mostraron más belicosos, los militantes del MNR tomaron sus armas e inmediatamente cercaron la plaza. Entre tanto, agentes civiles rociaron la plaza con polvos de gases lacrimosos. Uno de los agentes tuvo que huir y refugiarse en un edificio particular cuando fue descubierto en esta actividad... uno de los indígenas echó al hombro una rústica escopeta de las que se cargan por el cañón e intentó disparar contra el intruso; por suerte sólo estalló el fulminante, no saliendo el tiro, que habría ocasionado una víctima.[57]

57 *Ibid.*, 2 de febrero, 3 de febrero de 1953. Luis Antezana Ergueta (*La revolución campesina en Bolivia*. La Paz, 1982) ofrece un relato muy detallado pero igualmente parcial de la movilización y sindicalización campesina en los primeros años de la revolución.

Se ha señalado una serie de ejemplos de movilización campesina para dar una idea de su alcance y de lo amenazada que se sintió la población urbana de un país abrumadoramente dominado por sus masas rurales y de su extraordinaria vulnerabilidad cuando no contaba con las fuerzas represivas adecuadas. En esa situación, no resultaba sorprendente que Nuño Chávez y sus numerosas "brigadas móviles" recorrieran constantemente el campo, se sintieran obligados a emitir declaraciones prácticamente todos los días asegurando que "no hay agitación" o "la siembra/cosecha sigue normal" y que pronto se verían obligados a adoptar un plan de reforma agraria más radical que aquel que habían abrigado originalmente. Las minas y sus trabajadores eran sin lugar a dudas el núcleo del desarrollo económico y político del país, pero el campesinado debía controlarse a cualquier costo para preservar la revolución.

Por lo tanto, cuando Paz finalmente nombró una comisión para redactar el decreto de reforma agraria mientras los "subversivos" indígenas perturbaban a los quejumbrosos "ciudadanos" cochabambinos, el MNR tomó la inusual medida de incluir en ella a líderes del PIR – Arturo Urquidi, experto en agricultura, decano de la Universidad de San Simón de Cochabamba y del POR –el joven y talentoso ideólogo Ernesto Ayala Mercado–. Resultó que Urquidi logró dominar el trabajo de la comisión y el borrador final llevaba el sello del objetivo pirista de desarrollar el capitalismo en la agricultura boliviana sobre la base de propiedades medianas, trabajadas por su propietario o en cooperativa como una etapa primordial antes de introducir la colectivización generalizada. Los 177 artículos del Decreto Ley No. 3464, firmado por Paz y Chávez el 2 de agosto de 1953, frente a cien mil campesinos en Ucureña, tenía seis objetivos básicos:

1. Proporcionar parcelas adecuadas de tierra a campesinos que poseían pocas o ninguna, siempre que las trabajaran, expropiando para tal efecto latifundios ("propiedades excesivamente grandes").
2. Reponer a las comunidades las tierras usurpadas y cooperar en su modernización, con pleno respeto de sus tradiciones colectivistas.
3. Asegurar la absoluta abolición del pongueaje.
4. Incrementar la productividad, la inversión y la ayuda técnica.
5. Proteger los recursos naturales.
6. Promover la migración del altiplano al oriente.[58]

58 Estos objetivos son expuestos en Carter: "Revolución and the Agrarian Sector", en Malloy y Thorn, p. 243 y ss.

La ley protegía la casa de hacienda y una parte de sus tierras cultivadas, las "propiedades pequeñas y medianas" (cuyo tamaño dependía de la región y extensión de los cultivos) y las "empresas agrícolas", fincas modernas en su mayor parte ubicadas en Santa Cruz. Puesto que no había un límite cabal y claramente definido de sus alcances, la reforma agraria desde un comienzo fue vulnerable a un millar de escaparatorias, a la vaticinable presión de los hacendados sobre los funcionarios de la reforma agraria en el ámbito local, así como a negociaciones que llegaban a las esferas más altas de su estructura. Además, el hecho de que el decreto creara tres agencias diferentes, cada cual con un magro financiamiento, con reglas propias y sumamente engorrosas en su funcionamiento, hizo que los procesos de presentar demandas, investigación de hecho y evidencia complementaria, estudios topográficos, tasación, apelación y contraapelación resultaran tan extensos que muchos campesinos simplemente tomaron medidas directas sin esperar ninguna aprobación oficial. Hay actualmente fincas en el altiplano que aún pertenecen formalmente a hacendados ausentes, pero que desde 1952 o 1953 han sido cultivadas por campesinos que las consideran suyas, no pagan renta y que en caso de estar registrados en el censo como habitantes de la propiedad o los alrededores podrían ser desposeídos legalmente aunque con gran dificultad. La expropiación directa siguió dándose en considerable escala, pero con menos violencia que antes y, muchas veces, como simple "anticipo" de ratificación legal.

Empero, el efecto de la reforma agraria en el esquema general de tenencia de tierras no alcanzó las expectativas populares; entre 1954 y 1968, de un total aproximado de 36 millones de hectáreas cultivadas apenas ocho millones cambiaron de dueño.[59] Después de dos años, el 51 por ciento de los latifundios de La Paz, 49 por ciento de Chuquisaca y 76 por ciento de Oruro habían sido afectados; pero en Tarija la cifra fue de 33 por ciento; en Santa Cruz de 36 por ciento y en Cochabamba sólo de 16 por ciento, sumando un total nacional de solamente 28,5 por ciento.[60] Tan lento proceso habría de prolongarse hasta el final de la década; hacia 1960, el 23 por ciento de la tierra cultivada había sido distribuido entre el 28 por ciento de las familias rurales. Posteriormente, habría de acelerarse el proceso, tanto por necesidad política como por mejoras en su administración (por ejemplo la adquisición de una computadora IBM); sin embargo, rasgos constantes de la reforma agraria fueron y siguen siendo el mal empleo de los muy reducidos créditos y un nivel extremadamente bajo de

59 Carter, *op. cit.*, p. 246.
60 Kohl, *op. cit.*, p. 116.

mecanización. La redistribución en general era considerada una meta en sí misma por los políticos, si no por los planificadores, lo cual contribuía a la continua reducción del minifundio y a que la producción se mantuviera en el nivel prerrevolucionario hasta fines de esa década. En 1959, la propiedad agrícola del departamento de La Paz consistía en 64.280 unidades, de las cuales 45.281 tenían menos de una hectárea. La proporción en otros departamentos, con excepción de Santa Cruz, Cochabamba y del infrapoblado Beni, fue muy similar.[61] El MNR se había opuesto públicamente al fortalecimiento del minifundio de subsistencia, pero hacia el fin de la década, era aceptado que éste se había convertido en un problema serio en tanto que la cooperativización no llegó a emprenderse.

No obstante, un día después de la firma del decreto de reforma agraria, el otrora cabeza de la federación de Cochabamba, Sinforoso Rivas, dijo a sus miembros: "...para la consolidación de la Reforma Agraria... se necesitan muchos años... tenemos que ser pacientes y confiar en que el proceso se va a realizar...".[62] Viniendo de alguien que en otro tiempo era considerado "agitador comunista", esta declaración tuvo cierta resonancia; reflejaba el hecho de que, cualesquiera fueran las deficiencias que presentara para importantes estratos del campesinado, había ya la predisposición de aceptarla como un gran logro. Este sentimiento se generalizó muy pronto, ayudando al MNR a obtener un enorme capital político. El eje de la agitación en el campo se volcó hacia adentro, dirigiéndose hacia las disputas por tierras, la competencia por favores políticos y el control de mercados, ferias y niveles de precios. Se erradicó el pongueaje y muchos miles de campesinos tenían ya sus propios predios, donde podían trabajar a tiempo completo; la agricultura siguió tan atrasada como antes, pero la antigua estructura social fue, en efecto, mutilada, disipando muchos de los factores que habían causado el descontento. Pronto se haría evidente que el sindicato reemplazaría a la hacienda como mecanismo de control social y se convertiría en la principal mediación entre el gobierno y las masas rurales. El MNR y Paz, en particular, reconocieron el gran potencial político que había en ello y durante los años siguientes recurrirían al campesinado como un aliado seguro en la lucha contra los militantes mineros. Aunque sus deficiencias y fracasos fueron innumerables, la reforma agraria consiguió neutralizar el poder independiente del campesinado durante años. De ninguna manera el campo era un sitio tranquilo,

61 Amado Canelas: *Mito y realidad de la Reforma Agraria*. La Paz. 1966, p. 217 y ss.
62 *El Diario*, (La Paz), 3 de agosto de 1953

pero tampoco se convirtió en escenario de una movilización de izquierda y, como habrían de demostrarlo los acontecimientos posteriores, esto cobró vital importancia.

Consolidación del partido

La nacionalización de las grandes compañías mineras, la reforma agraria y el sufragio universal fueron los tres logros fundamentales del MNR y constituyeron la base de la revolución nacional. Con todo, el partido hubo de gobernar por más de doce años en virtud de medidas aprobadas en los primeros dieciocho meses de su mandato; pese a lo populares que demostraron ser las reformas esenciales, claramente este éxito dependió de otros factores. Retrospectivamente parece que el elemento más decisivo fue el haber logrado cooptar o neutralizar a los dirigentes de la COB en coyunturas determinantes. Pero, tanto ese hecho como el haber conseguido un amplio respaldo del campesinado estuvieron sujetos a la capacidad del MNR para mantener seguidores en los centros urbanos, lo cual no sólo precisaba de una redistribución diligente de riqueza en una situación de creciente crisis –aun de bancarrota–, sino también una ininterrumpida imagen populista y un aparato coherente que cumpla la función de asegurar la supremacía política y canalizar los favores.

El I Congreso de la COB realizado en octubre de 1954 reveló hasta qué punto Paz y el MNR consiguieron un nuevo acercamiento ventajoso al movimiento obrero. El mero hecho de que se hubiera postergado tanto tiempo la realización de dicho congreso era un signo del afán con que los líderes cobistas pretendían obtener delegaciones aceptables y acogida favorable para un programa de estatutos que marcaría un claro alejamiento de la Tesis de Pulacayo en temas aparentemente secundarios, pero no menos importantes. Como resultado, se dio una notable falta de discrepancia entre los 310 delegados, sesenta de los cuales representaban a la FSTMB y por lo tanto estaban en su mayoría con Lechín. Los sindicatos fabriles dominaban el congreso con 177 delegados, mientras que la "clase media" tenía 56, con trece "delegados especiales" y solamente cincuenta campesinos –un delegado por cada cincuenta mil personas de las zonas rurales, una cifra puramente arbitraria destinada a preservar un "liderazgo proletario" y que sería causa de gran descontento en años posteriores–. Paz tuvo que inaugurar el congreso y se dirigió así a los delegados: "... en el régimen actual del MNR, con Ministros Obreros, con todas las transformaciones realizadas en nuestra economía, no pueden los sindi-

catos actuar con la misma orientación y en idéntica forma que frente a un gobierno de la oligarquía...".[63] Ésta fue, sin duda alguna, la lógica que había detrás de la inclusión de ministros obreros en el gabinete del MNR. Fueran cuales fueran los recelos de la izquierda en torno a las consecuencias que esto pudiera tener, los dirigentes de la COB observaron: "...perfecta identidad de intereses y de sentimiento que actualmente existen entre Gobierno y Pueblo..."[64] El programa aprobado por el congreso declaraba: "Hoy, se ha dicho con justa razón que los Congresos Obreros y Campesinos son verdaderos PARLAMENTOS POPULARES"; pero esto no significa que eran soviets potenciales o que se había llegado a una situación de poder dual: "...la toma del poder..." por los sindicatos sería un absurdo teniendo en cuenta que eran cuerpos económicos y no políticos. Por otra parte, la COB descartó esta posibilidad al declararse en armonía con la naturaleza de la revolución y al confiar en su capacidad de influencia en el curso que ésta tomaría:

> La creciente participación de las masas confiere a nuestra revolución carácter popular, que tiende a superar el esquema puramente democrático-burgués de sus principios. La cuota cada vez mayor de Ministros Obreros (ampliada a cinco), la aplicación de control obrero, las labores colegislativas y coejecutivas de la COB y de los congresos sindicales, etc. muestran que nuestra revolución es una revolución popular antes que democrático-burguesa o proletaria. No puede caracterizarla como democrático-burguesa porque la evolución desigual de los países impidió su culminación en América Latina en el pasado y no permite la sistemática generalización de dicha experiencia en la actualidad.[65]

Un aspecto interesante de la posición adoptada por la izquierda del MNR fue su orientación hacia el ejemplo chino de liberación nacional "por una alianza de varias clases sociales", que en esa etapa se comparaba directamente con el caso boliviano.[66] El propio Paz había señalado anteriormente una similitud cuando observaba: "...no somos tan reaccionarios, Mao Tse Tung está acudiendo ahora mismo al fomento de la industria privada..."[67] Al mismo tiempo, la COB lanzó su repudio formal a los partidos tradicionales y ortodoxos de la izquierda, que a menudo iba a suprimir pero nunca descartaría del todo.

63 Central Obrera Boliviana: *I Congreso Nacional de Trabajadores. Discursos*, La Paz, 1954, p. 13.
64 COB, *Cartilla...*, p. 9.
65 Central Obrera Boliviana: *Programa ideológico y estatutos de la COB*, La Paz, 1954, p. 22.
66 *Ibid.*, pp. 13-14.
67 *El Diario*, (La Paz), 9 de enero de 1953.

> Es fácilmente comprensible que al stalinismo le haya disgustado bastante la claridad con que se enfoca "la barbarie política" impuesta por la burocracia soviética surgida como un "monstruoso quiste" del estancamiento de la Revolución de Octubre, operado por la derrota de la Revolución Proletaria en varios países importantes y por el consiguiente "cerco capitalista" impuesto sobre la URSS. Por otra parte, tampoco puede confundirse la posición de la COB con la de los epígonos de Trotsky que han capitulado ante el stanilismo o se niegan a reconocer el progresivo de los movimientos nacionales de liberación del yugo extranjero que ocurren con carácter de "liberación política" en los países sometidos al Kremlin (caso Yugoeslavia) o de "liberación nacional" de los dependientes del capital financiero (caso Bolivia). Nosotros reivindicamos la tradicional línea estratégica del marxismo revolucionario al señalar como tarea fundamental del proletariado internacional la conquista de una férrea unidad internacional para imponer la paz socialista y su victoria...[68]

Ni el mismo MNR adoptó jamás el "socialismo" como motivación, mucho menos adheriría a él como objetivo formal. Además, en su programa se incluía una serie de demandas que el gobierno no estaba dispuesto ni tenía las posibilidades de otorgar: salario mínimo con escala móvil de acuerdo al nivel de inflación, nacionalización de todo el transporte, cooperativización masiva en la agricultura, tribunales revolucionarios populares, reacondicionamiento total del sistema educativo, control obrero con derecho a veto en todas las actividades económicas y no sólo en las minas nacionalizadas. Por lo tanto, pese a que el grado de colaboración hubiera sido alto, habrían importantes temas de conflicto potencial entre los sindicatos y el partido.

A pesar de todo, el hecho de que el programa de la COB atacara al PCB y al POR en su propio lenguaje e incluyera en sí muchos signos de familiaridad con la teoría marxista reflejaba el triunfo del MNR de haber ganado para sus filas a miembros claves de la izquierda ortodoxa, particularmente del POR, que, consecuentemente, ingresó en una profunda crisis.

Desde principios de 1953, los militantes poristas fueron el blanco de los ataques gubernamentales y de apresamientos periódicos por "subversión comunista"; tanto César como Guillermo Lora permanecieron un año en la cárcel. Este partido también experimentó los efectos de su debilidad organizativa, la cual contribuyó a que muchos de sus simpatizantes se unieran al MNR, en lugar de permanecer cerca de un grupo reducido y doctrinario, cuya influencia era decreciente y poco podía ofrecer en forma de recursos concretos, en com-

68 COB: *Programa ideológico*..., pp. 4-5.

paración con un partido gobernante que parecía estar a la vanguardia del movimiento revolucionario, sin que importara cuán híbrida fuera su ideología. Además, el POR quedó particularmente afectado por las complejas escisiones que se dieron en la IV Internacional: para el sector boliviano fue ciertamente importante que las exasperadas discusiones que tenían lugar en París y Nueva York no sólo girasen en torno a las características del stalinismo en los Estados de los trabajadores de la posguerra, sino también a la estrategia a adoptarse frente a partidos reformistas con base masiva o sólida influencia en la clase obrera. Fue en esta atmósfera tan cargada que en 1954 se desarrolló una facción opositora a la línea "derrotista" que sostenía Guillermo Lora, quien afirmaba que, a corto plazo, habría una depresión en la militancia de la clase obrera, encubierta por la burocratización de los sindicatos y que el MNR conservaría una popularidad más trascendente; en consecuencia, la estrategia revolucionaria debería dirigirse fundamentalmente a las tareas organizativas y de educación, a fin de formar una vanguardia. La Fracción Proletaria Internacionalista de oposición, aliada con Miguel Pablo a nivel internacional, pensaba que había un potencial de ruptura mucho más grande, especialmente dentro de la COB y que la línea correcta era pasar inmediatamente a la ofensiva para lograr una revolución social amplia. Después de una serie de acalorados y complejos encuentros que llevaron a la publicación de dos periódicos independientes a lo largo de dos años, el partido se dividió completamente a mediados de 1956. Los disidentes, con Hugo González Moscoso y Víctor Villegas, arrastraron una mayoría y se quedaron con el periódico Lucha Obrera, mientras que Guillermo Lora reorganizó a la fracción leninista de trabajadores en torno al periódico Masas, que se editó hasta la fecha, con un estilo rajante y agudo como testimonio de la perdurabilidad del militante más prolífico del POR.

Sin embargo, no todo terminó ahí, ya que muchos de los que estaban con Lora sostenían que la lógica de su posición era ingresar prácticamente al MNR para ejercer influencia en su interior y ganar a sus miembros para el socialismo revolucionario, según los lineamientos trazados por Trotsky para el trabajo de la sección francesa en la década de 1930 y de la forma adoptada por los trotskistas británicos en el Partido Laborista. Este grupo estaba dirigido por Edwin Möller, una figura respetable de la COB, influenciada por los militantes pontistas del sindicato. Lora estuvo ausente de la decisiva reunión en que se definiría el tema (habiendo retornado recientemente de otra de la Internacional en París) en circunstancias que aún siguen siendo polémicas. Se apresuró a condenar la decisión de adoptar la táctica entrista considerándola capitulacionista, pero el mal ya había sido infligido; Möller y Ayala Mercado se llevaron a un nutrido sector del resto del POR al MNR. Durante un tiempo se dijeron revolucionarios, pero pronto comenzaron a tomar una posición muy cercana a aquella de Lechín y a defender el partido contra sus antiguos camaradas. Esto indudablemente fortaleció a la izquierda movimientista dotándola de un núcleo militante y de fuerza teórica para combatir a la derecha. (El programa de 1954 de la COB en realidad fue redactado por Agustín Barcellí, un peruano errante y radical que anteriormente había roto con el partido comunista chileno por su ingreso al Frente Popular pero nunca abrazó totalmente el trotskismo).

La ruptura 1954-56 señalaba el eclipse de la segunda generación del trotskismo boliviano. Lora, intermitentemente encarcelado por sus vituperios, tuvo que concentrar su atención en el pequeño núcleo de miembros partidarios que trabajaban en Siglo XX, lugar donde el POR estaba acumulando seguidores pero estaba todavía dominado por el PCB; Warqui se retiró a una pequeña propiedad en Santa Cruz y Alandia se refugió en la pintura, en tanto que personalidades como Fernando Bravo, al que se le unió González, emprendieron una campaña de alto nivel contra el MNR, con muy poco éxito: en 1960 Bravo y González se enfrentaron a Paz y Lechín en las elecciones presidenciales y obtuvieron 1.420 votos contra 735.713. Bravo, minero convertido en maestro de escuela, habría de morir joven después de una prolongada enfermedad, agravada por la persecución de que fue objeto. González siguió recibiendo apoyo internacional para su POR (Combate) mucho después de perder la fuerza que había heredado en 1956 y se convirtió en una más de las diversas facciones de un movimiento ya sumamente debilitado. El trotskismo habría de regresar como una fuerza importante pero con una nueva generación de militantes y con una aguda percepción de las lecciones de la década de 1950.[69]

El éxito del MNR al haber neutralizado al trotskismo fue asimismo evidente —aunque de una manera mucho menos manifiesta y categórica— con relación al resto de la izquierda. Como era de esperar de un movimiento populista dedicado a incorporar una serie de posiciones dispares, el MNR absorbió a muchos independientes al igual que a exputistas, impidiendo así el crecimiento del joven PCB, pues el entrismo resultó ser norma durante aquella temprana época. No obstante, los resultados que consiguió en las universidades fueron extraordinariamente pobres, en gran parte debido a que la "Avanzada Univer-

69 La historia de la división es detallada y muy contenciosa. Un vigoroso punto de vista que critica a ambos lados duramente es el de Liborio Justo (Quebracho): *Bolivia: La revolución derrotada*. Buenos Aires, 1971. La versión de Lora está extensamente esbozada en *Contribución*..., II, pp. 255-237. Pienso exponer este tema más ampliamente en un próximo estudio.

sitaria" del partido adoptó tácticas intervencionistas beligerantes y a menudo violentas que rápidamente se percibieron como una amenaza para la celosamente resguardada autonomía de la institución de educación superior. En efecto, la Avanzada lanzó un ataque directo a la autonomía en 1955 cuando, plenamente respaldada por Lechín, la COB –el partido y las milicias mineras– intentó apropiarse de las universidades. La respuesta fue inmediata y profundamente chocante para la izquierda movimientista, que creyó estar comprometida en una fácil erradicación de los falangistas. Los centros de mayor conflicto fueron Sucre y Cochabamba, donde partidos de todas las creencias, desde el POR a la FSB defendieron la autonomía en una serie de huelgas, manifestaciones y peleas callejeras. El contingente de estudiantes movimientistas se encontró sumamente reducido y se sintió obligado a optar por un apresurado repliegue. El partido perdió muchísimo respaldo entre los estudiantes, quienes se volcaron en creciente número a la oposición del ala derecha. Esto proporcionó a la FSB un incentivo inesperado para expandir su actividad conspirativa y a buscar mayores lazos con grupos que estaban desarrollando una incipiente forma de democracia cristiana.

El estatismo y los recursos disponibles para un partido gobernante resultaron mucho más provechosos para el MNR en otras áreas. Su rigurosa jerarquía formal, desde el jefe hasta el militante de menor nivel de un comando zonal, se convirtió en canal para la obtención de "pegas" y favores en una escala sin precedentes; se estima que en cuatro años la cantidad de empleados públicos se duplicó a consecuencia de la necesidad de acomodar a los miembros del partido. En Cochabamba fueron tantos los militantes que recibieron cargos gubernamentales que las nuevas elecciones tuvieron que realizarse seis semanas después de un escrutinio local para reducir la cantidad de los que podían cargos formalmente y para descartar a los muchos "paracaidistas" (nombre utilizado para referirse a aquellas personas que ingresaban al MNR únicamente para mejorar sus posiciones personales).[70] Muchas veces, la presión de esa enfermedad tradicionalmente boliviana, la "empleomanía", acarreó graves conflictos; durante varios meses después de la revolución, el comando regional del MNR en Potosí estaba en una situación de anarquía, ya que diversas facciones peleaban por él con objeto de garantizarse el monopolio de recursos locales del Estado y de poder, recurriendo frecuentemente a las milicias y a huelgas mineras. Al final, sólo el asesinato a la luz del día del líder de una facción dio lugar a un mínimo de

70 Mitchell, *op. cit.*, p. 43

orden. En algunas ocasiones, estos conflictos guardaban cierta relación con luchas ideológicas, pero con mayor frecuencia se trataba simplemente de contiendas personalistas.

La importancia de la militancia partidaria fue bastante más allá de las "clases populares". Todos los oficiales del ejército tuvieron que jurar lealtad al MNR y muchos de los más prevenidos asumieron seriamente su personalidad partidaria organizando células en sus unidades, como protección contra la organización paralela y el debate político. Incluso empresarios urbanos se unieron a sus filas; en 1954 se creó una célula de "importadores" en La Paz, la cual cosechó enormes beneficios de la afiliación partidaria. Durante dos años, esta "célula" compró 6,6 millones de dólares a un precio de cambio de 190 bolivianos, cuando en el mercado dicho precio se incrementó de 1.415 bolivianos a 7.768.[71] No es de extrañar que el reconstruido PIR concentrara gran parte de su filípica contra "la... burguesía de compañeros... una plutocracia comercial financiada por el Estado y protegida en el contrabando y la especulación...".[72]

La creciente aceptación y generalización de tales opiniones, especialmente entre aquellos que dentro del MNR sufrían los severos efectos de la inflación, hizo imperativo para Paz el asegurar la autoridad sobre el aparato represivo, lo cual resultó una empresa relativamente fácil una vez superada la resistencia de la COB. El 1° de mayo de 1953, Lechín declaró ante la multitud de La Paz: "...necesitamos crear un Ejército Popular y Revolucionario...", aceptando finalmente la necesidad de un aparato militar formal y, en junio, contribuyó a la apertura del Colegio Militar. En noviembre, luego de un levantamiento abortado de la FSB, Paz actuó para afianzar su control sobre las milicias, creando una nueva fuerza, el Control Político, que incorporó a todas las milicias del partido bajo el mando del general Claudio San Román. A diferencia de las milicias de trabajadores, que se mantuvieron intactas pero en su mayor parte inactivas fuera de las minas, el Control Político fue profesionalizado y altamente activo. Por una década fue el órgano represivo más importante del país, con lo cual su reputación se hizo cada vez más impopular, pues sus miembros imponían un orden partidista, se valían de pequeños privilegios en las calles y dirigían una red de campos de concentración (Coati, Alto Madidi y Pekín) que se multiplicaron para fines de la década de 1950 cuando la oposición al partido era mayor. El Control Político fue, en muchos sentidos, el predecesor

71 *El Diario*, (La Paz), 10 de octubre de 1956.
72 PIR, *Soluciones nacionales*, p. 74.

de los grupos paramilitares que emergieron a fines de la década de 1970 y varios de sus miembros se destacaron entre ellos; pero el propio San Román resultó tan impopular que inclusive los regímenes militares de derecha, que gobernaron después del MNR, se negaron a permitirle el regreso de su exilio en Asunción.

Esta diversidad de elementos de resistencia a la movilización obrera independiente fue apuntalada por una crisis económica que prácticamente habría de detener todo, excepto la verborrea de cambio social. Si bien la economía de la Bolivia revolucionaria no se enfrentó a un bloqueo económico norteamericano abiertamente hostil, como pasó con Guatemala, Cuba y Nicaragua, fue, como lo hemos señalado, peculiarmente vulnerable a las fuerzas del mercado internacional que le fueron muy desfavorables. Este problema estructural empeoró notablemente con las presiones reflaccionarias originadas políticamente. En el curso del primer año de la revolución, el costo de vida aumentó en más de cien por ciento; durante el año siguiente, creció en una proporción aún mayor. La balanza de pagos pasó de un excedente de 9,7 millones de dólares en 1951 a un déficit de 10,3 millones de dólares en 1954.

Paz tuvo que recurrir a Washington para confrontar esta situación. En octubre de 1953 escribió una carta pública a Eisenhower suplicando ayuda inmediata. Puesto que ya en mayo había intentado devaluar el peso, había cumplido su palabra respecto a la nacionalización y la cuestión militar; y dado que era incuestionable la gravedad de una situación que todavía podía favorecer a las fuerzas radicales, el gobierno de EE UU reaccionó positivamente. Eisenhower ofreció inmediatamente nueve millones de dólares para aliviar la escasez y proveer de productos básicos y prometió doblar la ayuda técnica. Así, comenzó un proceso que llevaría a Bolivia a recibir el más alto nivel de cooperación alimentaria per cápita del mundo y hacerse dependiente de fondos americanos en una tercera parte de su presupuesto hacia 1958. El costo político de dicha asistencia fue, en realidad, muy alto.

3. La revolución en repliegue (1956-1964)

Aparentemente, el proceso iniciado el 9 de abril de 1952 culminó el 4 de noviembre de 1964, cuando, con una serie de entusiastas ráfagas, la aviación comandada por el general René Barrientos sofocó la resistencia de los milicianos movimientistas ubicados en su último reducto, el cerro Laikacota, en pleno centro de La Paz. La "Revolución Nacional" del partido llegó a su fin. El MNR solamente volvería al gobierno como aliado de una coalición y bajo la estricta vigilancia de las fuerzas armadas, cuya derrota había presidido una vez. Sin embargo, la revolución terminó antes y después de noviembre de 1964. La economía boliviana, su estructura social, la memoria popular y los hábitos políticos seguirían registrando cambios que la revolución había implementado, como podremos ver, bastante después del golpe de Barrientos. Lo que, en cierto sentido, es menos fácil de determinar es la forma en que el segundo y tercer gobierno de Paz Estenssoro (1960 a julio de 1964 y agosto a noviembre de 1964), así como aquel de Hernán Siles Zuazo (1956-1960), pudieron presentarse como continuidad natural de la revolución de abril, cuando, en la práctica, dicha "continuidad" implicó una concertada inversión del ímpetu radical con que se inició la revolución, una extensa redefinición de su contenido social y una cadena de graves y en ocasiones violentas rupturas dentro de la alianza política que produjo la revolución.

El talentoso polemista Sergio Almaraz, quien estuvo hondamente involucrado en la actividad política de ese período, escribiría más tarde: "La historia sería simple si los avances y retrocesos respondieran exclusivamente

al juego alternativo de gobiernos revolucionarios y contrarevolucionario".[1] El extenso termidor de la revolución boliviana nos presenta una historia más "compleja" que la de cualquier otro período de la vida política reciente del país, sus contornos no pueden comprenderse plenamente en términos de meros antagonismos de clases, pues éstos se reproducían en la esfera política de manera excepcionalmente distorsionada. Las complejidades de este interregno entre períodos de gobierno autoritario y franca polarización social con demasiada frecuencia llevan a interpretaciones según la teoría de Nicos Poulantzas, poniendo mayor énfasis en el Estado como un punto de conflicto de clase y no tanto como instrumento del dominio de clase, sino reconociendo la importancia de un bloque dominante como instrumento real, si no determinante, del poder político de una sola clase dominante.[2] No es éste el espacio más adecuado para desarrollar tal interpretación, pero se puede comprobar parte de su pertinencia en el hecho de que hacia mediados de la década de 1950, el Estado boliviano ejerció un considerable poder económico, en comparación con el sector privado, controlado y administrado por gente mayoritariamente procedente de la pequeña burguesía, cuya ideología era más burguesa que proletaria pero cuyo poder y legitimación dependían directamente del respaldo de una clase obrera militante. Observando desde muy cerca los años inaugurales de la revolución, hemos visto ya algunas de las contradicciones y conflictos originados por tal estado de cosas, que desembocaron en una crisis generalizada durante la última década del gobierno movimientista.

Las características precisas de este proceso son muy variadas para estudiadas de manera exhaustiva en el presente trabajo, pero evidentemente merecen una serie de comentarios generales. En primer lugar, la crisis económica que alcanzó su apogeo entre 1956-1957 brindó a Washington una oportunidad sin igual para ganar influencia sobre sectores claves del MNR y profundizar su control sobre la economía a través de la administración de su ayuda. El carácter de esta intervención fue cada vez más generalizado y abiertamente político, pero se condensó en el Plan de Estabilización de 1956 y en el Plan Triangular de 1961. Consecuentemente, los diferentes gobiernos del MNR sufrieron las tensiones derivadas de la obligación de implementar la política norteamericana al mismo tiempo que se empeñaban en conservar su independencia, su popularidad redistribucionista y una apariencia antiimperialista. Éste resultó ser un dilema insuperable; sin embargo, cobró más la forma de una

1 Sergio Almaraz: *Réquiem para una república*, La Paz, 1980, p. 17.
2 Ver por ejemplo Nicos Poulantzas: *Political Power and Social Classes*, Londres, 1973.

descomposición general que de una súbita desintegración de la alianza gobernante. Ello se debió principalmente a que la izquierda del partido, centrada en la COB, había perdido la iniciativa de los primeros años así como los recursos ideológicos y fuerza política para derrocar al ala de centro derecha, pese a que conservaba la suficiente independencia y fortaleza para recuperar gradualmente terreno. Así, los dirigentes de la COB intentaron negociar con la derecha y mantuvieron un punto de apoyo dentro del aparato de gobierno, si bien con frecuencia fueron obligados a enfrentarse directamente con el régimen por sus bases, a las que no podían controlar íntegramente.

Esta veleidosa respuesta era reflejo de aquella del sector conservador dominante dentro del MNR, que se alimentaba de los beneficios del 52 pero que fue incapaz de mantener un movimiento de masas disciplinado para confrontar a los sindicatos en su propio terreno. La revolución boliviana, por lo tanto, difiere de aquellas de Cuba, México y Nicaragua en cuanto el partido gobernante no pudo cooptar y controlar al movimiento obrero, mayormente debido a la fuerza de sus tradiciones sindicalistas establecidas antes de 1952 con participación de la izquierda marxista. Por lo tanto, el MNR se valió crecientemente de su asistencia al campesino e inició la reconstrucción del ejército, fuerza a la que no podía controlar sin la ayuda, precisamente, de esa clase obrera contra la cual realizaba una ofensiva cada vez más pronunciada. A medida que esta dependencia se agudizó, la guerra política de maniobra dentro del MNR se convirtió en guerra de posiciones y desbordó los límites del partido. El golpe de 1964 marcó el regreso de los militares como el árbitro más importante de un bloque dominante al que le faltaba una burguesía nacional consecuente y que ya no podía administrar el legado del 52, excepto a través de una coerción directa al movimiento obrero.

Estabilización y resistencia

Entre 1946 y 1964, el compromiso financiero de Estados Unidos con Bolivia alcanzaba la suma de 327,7 millones de dólares, frente a los 64,4 millones de dólares de la década anterior. Los 25 millones de dólares desembolsados por Washington en 1957 representaban el 32 por ciento del ingreso estatal boliviano.[3] Aun para la derecha del MNR, la dimensión de esa ayuda planteaba claros problemas respecto a la independencia del régimen; no obstante, Paz y

3 Wilkie, *op. cit.*, pp. 13 y 48.

Siles, su sucesor, afirmaban que ése era el único medio de evitar el colapso total del país y de preservar los logros de 1952.

El grado de la crisis era impresionante y 1956 resultó el año más crítico de todos. El índice de los precios de alimentos en La Paz subió de 100 en 1931 a 7.036 en 1952; de 52.627 en 1955 a 86.010 en marzo de 1956 y luego aceleradamente a 390.492 durante los nueve meses siguientes.[4] El índice del costo de vida en su conjunto aumentó a 100 en 1952 a 2.270 a fines de 1956; la emisión de dinero a 2.229 y la cotización del dólar paralelo a 3.104. Las reservas de moneda extranjera en el Banco Central se mantuvieron en una cifra casi irrelevante de 1,2 millones de dólares. Este estado de cosas fue indudablemente exacerbado por una fabulosa especulación, debida a la multiplicidad de tipos de cambio y al complicado sistema de racionalización de productos básicos en base a cupos. Un floreciente mercado negro fue encauzado por los "cuperos", quienes generalmente tenían el control de provisiones por su afiliación partidaria. La desaparición de productos de consumo de los mercados y el espectro de los desórdenes por desabastecimiento de pan perturbaban al gobierno que ya había sido sorprendido por el nivel de apoyo otorgado a la Falange en las elecciones de 1956. El enfático e ignominioso derrocamiento del MNR realizado por la clase media paceña en 1946 estaba lo suficientemente fresco como para infundir graves temores dentro del partido respecto a una renovada movilización popular con este partido.

En consecuencia, uno de los últimos actos de Paz Estenssoro como presidente fue la nominación de una Comisión de Estabilización en agosto de 1956. Esta medida tuvo amplia aceptación; y a pesar de su composición nominal, esta comisión había sido creada a instancias del FMI y habría de ser supervisada por un equipo de asesores de ese organismo, a cuya cabeza estaba un ardiente devoto del monetarismo: George Jackson Eder. El propio Eder proporciona un elocuente testimonio de cómo él, un ciudadano americano contratado y pagado por Washington, responsable ante el gobierno de EE UU, adquirió un control administrativo directo sobre la economía de un país extranjero. No debió disfrutar demasiado de la experiencia, ya que se refiere a la gente con la que tuvo que trabajar como al "...grupo de políticos probablemente más corrupto, incompetente y oportunista que haya gobernado jamás los destinos de una nación".[5] Además opinaba que "...no hay ahora, no ha habido nunca una

4 Eder, *op. cit.*, p. 590.

5 *Ibid.*, p. 241. Estas y otras afirmaciones que siguen están citadas en un estudio particularmente agudo y útil sobre el trabajo de la misión realizado por Laurence Whitehead: *The United States and Bolivia. A Case of Neocolonialism*, Watlington, 1969.

empresa gubernamental exitosa en Bolivia ...hubiera sido mejor que todas las actividades productivas se dejaran enteramente en manos de la empresa privada".[6]

Esas opiniones no convencen totalmente a nadie de la objetividad del director ejecutivo de la comisión, cuya función formal era la de brindar asesoramiento técnico. Tales dudas se confirman con la referencia de Eder al hecho de que todos los miembros de la comisión debían ser "personas gratas" a la embajada americana, al presidente y a los demás miembros del consejo; al mismo tiempo, por lo menos no debían ser totalmente detestables a Juan Lechín o a Ñuflo Chávez.[7] En efecto, dos nombramientos presentados por Siles fueron rechazados porque "...al consultar con la embajada americana fui informado de que ambas personas eran inadecuadas por sus antecedentes ideológicos".[8] Cuando Eder afirma que en la promulgación del decreto de estabilización no fue el gobierno soberano de Bolivia quien impuso la cotización del dólar con relación al peso "...es evidente que si el presidente (de Bolivia) hubiese insistido en mantener una tarifa de siete mil bolivianos, pese a las circunstancias cambiantes, el tesoro (de EE UU) se habría negado a proseguir con sus planes de *stand by*".[9] Más tarde, cuando Siles intentó echarse atrás en su capitulación sobre este punto, Eder describe cómo él ingresó al Banco Central en "paso de parada" y declaró que "...de no permitirse una fluctuación de la tarifa, telegrafiaré a la ACI (Alianza de Cooperación Internacional) y esto probablemente será el fin del fondo de estabilización".[10]

Tal planteamiento estaba en absoluta consonancia con el decreto final, emitido el 15 de diciembre de 1956. Las medidas económicas que harían posible que Bolivia recibiera 25 millones de dólares de ayuda se adherían estrechamente a los principios del monetarismo, el cual es hoy más ampliamente apreciado que en 1956. En resumen, el plan estipulaba:[11]

1. Reducción de los gastos gubernamentales en cuarenta por ciento.
2. Eliminación de todos los déficits de las empresas estatales, principalmente a través de la suspensión del control de precios y de los subsidios en las pulperías.

6 Eder, *op. cit.*, pp. 603; 195.

7 *Ibid.*, p. 164.

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*, p. 274.

10 *Ibid.*, p. 498.

11 El decreto completo está en Eder, *op. cit.*, pp. 269-273.

3. Reducción y suspensión de aranceles; incremento de los impuestos internos.
4. Nivelación de los tipos de cambio; estricta limitación de reservas para los bancos.
5. Incremento limitado de sueldos compensatorios, seguido de una congelación salarial después de un año; incremento del doscientos por ciento en las rentas internas.

El decreto constituyó un ataque directo a la economía popular establecida después de abril de 1952; pues si bien logró reducir la inflación, contrajo muy pronto la producción, aumentó el desempleo, redujo el crédito y recortó el ingreso real de todos los sectores, con excepción del rural, pues los campesinos se beneficiaron de un incremento en los precios de sus productos. Se consiguió abolir el mercado negro, pero Eder había asumido erróneamente que toda la población urbana compraba sus productos allí y, por lo tanto, se equivocó totalmente respecto a los efectos de un incremento inmediato de cien por ciento en los precios legales.[12] Confiadamente vaticinó que en el curso de tres meses no serían necesarios mayores aumentos de sueldos, ya que los precios comenzarían a bajar. Pero la inflación continuó y alcanzó al 115 por ciento en 1957, porcentaje que no habría de reducirse sino en años posteriores. Los manufactureros locales fueron enfrentados a una total competencia con el exterior, pero sin la capacidad de conseguir créditos para adquirir materia prima; la producción manufacturera se redujo en treinta por ciento en 1957 y las ventas de algodón en más del noventa por ciento. Sin embargo, el decreto tuvo mayor impacto en el sector más vulnerable a la resistencia popular: las minas.

Kilo	Pulpería (en Bs.)	Mercado negro (en Bs.)
Carne	23,9	800
Harina	8,7	760
Arroz	16,9	650
Azúcar	11,2	260

Las consecuencias de la suspensión de subsidios a las pulperías se pueden juzgar a partir del hecho de que en 1956 éstas compraron el 22 por ciento de todo el arroz importado, el trece por ciento de la leche en polvo y el doce por ciento de la harina para revender estos productos a precios muy inferiores a los vigentes en el mercado negro.[13]

El plan de estabilización fue tan gravemente deflacionario en sus efectos y tan directamente aterrorizante al ingreso real de los mineros que, sin lugar a dudas, habría de generar una fuerte oposición, a despecho de los alcances de la inflación y las secuelas apenas distinguibles de la administración monetaria y de la planificación estatal. Washington había logrado su objetivo de introducir a la economía en la disciplina del libre mercado, pero a Siles se le encargó la tarea de mantener la contracción del sector estatal y de limitar los aumentos salariales, lo cual consiguió sólo parcialmente.

La izquierda movimientista apoyó la candidatura de Siles a la presidencia, mayormente con objeto de neutralizar las ambiciones de la derecha, la cual bajo el liderazgo de Wálter Guevara Arce había lanzado una feroz campaña contra los dirigentes de la COB, descartando en la práctica toda posibilidad de que Lechín obtuviera apoyo partidario para la nominación.

Aunque en este caso, como en 1960, se decía que a Lechín se le había ofrecido la presidencia precisamente para quitársela a último momento, la izquierda se mostró satisfecha con lo que consideraba una clara mayoría en el Congreso y con la nominación de Nuflo Chávez para la vicepresidencia. Por lo demás, ni Lechín ni el grueso de la dirigencia de la COB encontraron nada impropio en el plan de estabilización. Inicialmente, Lechín afirmó que no afectaría el poder adquisitivo, que se recuperaba el abastecimiento y que la economía recibía el incentivo de la ayuda norteamericana. Según se dice, en junio de 1956, llegó al extremo de exclamar: "...es una pena que el Dr. Eder no estuviera aquí hace tres años".[14] Al día siguiente de la publicación del decreto, Lechín intentó negociar mayores incrementos de salario con Siles, pero aparentemente aceptó concesiones mínimas. El ampliado de la COB, destinado a considerar el plan, fue postergado por diez días, en un afán de evitar críticas; pero cuando finalmente se realizó, el 27 de diciembre, se criticó a los ministros obreros por no haber logrado mejores compensaciones, en tanto que se aceptó la idea general de la estabilización. Únicamente la delegación de Siglo XX atacó el conjunto del decreto. Lechín arguyó que no se le había consultado plenamente acerca del plan, pero esto no fue aceptado como excusa válida, particularmente porque él había formado parte de la comisión. En la siguiente

12 Guillermo Lora: *La estabilización: una impostura*. La Paz, 1959, p. 27. En Paul Cammack (*The Politics of Stabilization. The Bolivian Stabilization Plan of 1956* [tesis inédita], University of Oxford, 1976) se considera con detalle el plan y sus efectos.

13 Cornelius H. Zondag: *The Bolivian Economy, 1952-1965*. Nueva York, 1966, p. 161.

14 Eder, *op. cit.*, p. 138. Para otras citas ver Lora: *A History...*, p. 305

reunión de la COB, el 4 de enero de 1957, hubo mociones a favor de la renuncia de todos los ministros obreros, pero el secretario ejecutivo de esa organización sindical respondió con un ataque sutil a la "ultraizquierda" y una defensa de los fundamentos de la estabilización; sin embargo ahora estaba atrapado entre dos fuerzas; por lo tanto, tuvo que exigir a Siles una serie de importantes reconsideraciones.

El 23 de enero, Lechín envió a Siles una carta en nombre de la COB, reiterando su lealtad al gobierno "…del que nos consideramos parte…", solicitando aumentos salariales en gran escala, al igual que control de precios y un impuesto sobre bienes de capital. Todas sus demandas fueron rechazadas. Siles ya había adoptado una actitud gandhiana ingresando en una huelga de hambre contra el precipitado paro convocado en Siglo XX: renunció formalmente al empleo de la violencia para imponer el plan de estabilización y se dio cuenta de que podía dividir a la COB, en cuanto aquellos sectores que no tenían los privilegios de la pulpería estaban siendo golpeados con mucho menos rigor que los mineros, de donde la izquierda obtenía gran parte de su fuerza. Por lo tanto, cuando se hizo evidente que el tema seguiría en el tapete, Siles inició una campaña contra la izquierda, tanto dentro como fuera del movimiento sindical. Los riesgos de esta situación aumentaron substancialmente cuando Lechín y Torres lograron cambiar una resolución del POR en el Octavo Congreso de la FSTMB realizado en el mes de marzo en Pulacayo, en el cual resultó que el sindicato minero proponía poner fin al cogobierno de la COB y anunciaba una huelga general indefinida si el salario básico de los mineros no se incrementaba en un 66 por ciento hasta junio.

El tema siguió en discusión durante el II Congreso de la COB, que tuvo lugar a principios de junio, en medio de una enorme tensión. Pero el asunto dió un giro peculiar cuando el PCB se opuso a la izquierda y sostuvo que cualquier huelga sólo serviría para llevar a Siles a una dependencia total de EE.UU. Lechín vaciló pues reconoció la vulnerabilidad del grupo radical frente a la cada vez más popular campaña gubernamental contra una "huelga de dilapidadores", pero también se dio cuenta que el PCB se había alineado con sectores (principalmente ferroviarios, petroleros y de trabajadores de la construcción) que Siles estaba tratando de separar para hacer la oposición a los dirigentes de la COB. El presidente se dirigió al Congreso con un discurso en el que declaró que nunca recurriría a políticas inflacionarias y fustigó a la izquierda de manera claramente provocadora. Los partidarios de la huelga finalmente ganaron la moción, pero con sólo 260 votos de 439; estaba claro que

emprenderían la medida de presión con el movimiento sindical profundamente dividido.[15]

La defensa de Siles y una real amenaza de renuncia en caso de que se llevara a efecto la huelga sacudió a los líderes cobistas. El que Siles los acusara de presentar demandas de "sectorcitos" a expensas del bienestar de la comunidad, la movilización de comandos y milicias del partido y el aislamiento de mineros y maestros de casi todos los demás sindicatos aconsejaban a la jerarquía sindical impedir una huelga en que podría destruirse todo concordato establecido después de 1952. Nuflo Chávez, uno de los más resueltos oponentes de Eder, trató de formar el tema renunciando a la vicepresidencia, en espera de que el Congreso rechazara esa medida y proporcionar así apoyo parlamentario a la oposición; pero Siles había ganado terreno, y en una votación cerrada Chávez tuvo que abandonar el gobierno. El 25 de junio, víspera de la huelga, la masiva campaña publicitaria del régimen consiguió el respaldo de todas las principales fábricas de La Paz y la aceptación tácita de la mayoría de los campamentos mineros con la decidida excepción de Siglo XX. La COB suspendió la huelga a último momento, la izquierda estaba desorientada y muy dividida, Lechín desacreditado y el régimen en una excelente posición para enemistar a importantes sectores del movimiento obrero con los dirigentes de la COB.

Apenas semanas después del fracaso de la huelga, Siles puso en evidencia sus intenciones de declarar que la COB, "…creada con el respaldo pleno del MNR", no podía ni debía apartarse de la conducta señalada por el oficialismo. Por esto se tomó la libertad de propiciar la "restructuración". Añadió que "…la resolución de la huelga general del último Congreso de Trabajadores inducida por dirigentes trotskistas… y coreada por falangistas, ha demostrado mediante el pronunciamiento nacional de la semana pasada contra la huelga, la necesidad de que el CEN de la COB tenga, además de los compañeros mineros y campesinos, también representación de grandes sectores laborales".[16] Ese mismo día, el Comité Ejecutivo llamó a una asamblea de autocrítica, pero cuatro días más tarde un comunicado firmado por delegados de todos los sindicatos más importantes, con excepción de fabriles y mineros, pedía a dirigentes de la COB su renuncia o la aceptación de una "restructuración". Se formó un "Bloque Restaurador" y Lechín fue empujado a refugiarse en los brazos de los militantes concentrados en Siglo XX, quienes según el joven líder porista, Filemón

15 Para detalles completos del congreso ver Loora, *op. cit.*, pp. 307-308.
16 *Ibid.*, p. 309.

Escóbar, vitorearon al MNR en 1955 por última vez y nunca volverían a hacerlo. El bloque pasó a ser directamente supervisado por el ministro del Interior, José Cuadros Quiroga, un derechista de línea, quien según uno de los miembros del bloque financió la nueva organización por la cantidad de diez millones de bolivianos mensuales hasta su renuncia a mediados de 1956, cuando lo sucedió el igualmente antilechinista Wálter Guevara.[17] El nuevo ministro también supervisó la coordinación de las actividades del bloque con los comandos especiales del MNR que ahora entraban en conflicto directo con las milicias sindicales en varios campamentos mineros. Como resultado de esta campaña, la COB se reunió en noviembre para lanzar una "declaración de unidad" y ratificar su pleno respaldo al plan de Eder. A Lechín se le permitió permanecer en el gobierno.

La posición del gobierno en esta confrontación se vio extraordinariamente estimulada por el apoyo de los sindicatos de Huanuni y Colquiri a favor de su causa. Estos campamentos entraron en un prolongado antagonismo con Siglo XX. El sindicato de Huanuni había sido erigido originalmente por la compañía, lo cual provocó una serie de choques con la FSTMB durante los años iniciales. Su primer secretario, Emilio Carvajal, mordaz enemigo de Lechín, estaba entonces en la presidencia de COMIBOL. Además, la mina tenía un gran número de trabajadores contratados como corporativistas, autoempleados en un sistema de trabajo a destajo conocido como *pirquin* que fue explícitamente denunciado en la Tesis de Pulacayo. Estos trabajadores eran totalmente contrarios a las huelgas, mientras que a la cantidad de mineros de exterior mina de Huanuni, potencialmente desempleados peligrosos, se les encontró empleo remunerado en las milicias del comando movimientista, consolidando así una verdadera alianza anti Siglo XX. Dado que Huanuni estaba ubicada entre las redes camineras y ferroviarias de Oruro a Siglo XX, el control de este centro por parte del régimen fue decisivo tanto política como logísticamente. Colquiri era menos importante en tamaño y ubicación, pero era una mina relativamente joven, y con sus operaciones en expansión legítimamente pudo proporcionársele grandes sumas de capital y mejor tratamiento que a otros campamentos, si bien con esto no se logró aplacar a los trabajadores del subsuelo por mucho tiempo.[18]

17 Información brindada a Jorge Dandler Haaback y citada en Laurence Whitehead: *The Movement as Federation*, (manuscrito inédito), p. 116 A.

18 *Ibid.*, que contiene una exposición completa de estos temas.

A fines de 1957, la FSTMB tuvo un ampliado en Potosí, donde la izquierda, encabezada por Ignacio Pimentel (PCB), César Lora y Filemón Escóbar (POR), todos de Siglo XX, consiguió una mayoría de 78 a ocho, con quince abstenciones, a favor de una resolución demandando un importante incremento de salarios, la suspensión del cogobierno (que en la práctica ya había sido abolido) y repudio a Eder. El respaldo de Pimentel significó un cambio de línea para el PCB, que se unió al POR en la opinión de que había que suprimir las críticas de la burocracia por la defensa de la independencia sindical. La victoria de la izquierda demostró que, aunque la convocatoria a la huelga general podía haber sido un error tácticamente, la política divisionista de la COB aplicada por el gobierno no era menos peligrosa, especialmente porque las políticas de Eder comenzaban a obtener respuestas. Sin embargo, en el IX Congreso de la Federación, realizado en Colquiri en julio de 1958, el régimen actuó inmediatamente contra el bloque izquierdista de Lechín. El comando local combinó con destacamentos enviados de Huanuni para atacar a los participantes aún antes de que el congreso hubiera comenzado. Los trabajadores de interior mina de Colquiri salieron en defensa de la federación a través de varios ataques con dinamita; pero, bajo la amenaza del fuego, los delegados tuvieron que escapar hasta el campamento de San José, donde se pronunció la muerte del cogobierno y se hicieron demandas a favor del desmantelamiento de los comandos especiales, los cuales fueron identificados como los malhechores del sindicalismo amarillo. El apoyo brindado por los delegados a la resolución política, reiterando su declaración de que la FSTMB no era apolítica sino revolucionaria y basada en clase, acusaba al gobierno de Siles de antipopular y proimperialista, señalaba que, con excepción de aquellos campamentos donde el comando estaba bien armado y generosamente financiado, la Federación había recobrado su independencia y autoridad, si no el control total.

La política de Siles de fomentar la rivalidad dentro del movimiento sindical creó enormes dificultades al MNR que, desde el comité político nacional (CPN) hasta el comando zonal de menor rango, aún estaba formalmente sujeto a elecciones internas y extremadamente vulnerable a luchas entre fracciones. Inclusive en la cumbre de su popularidad, a mediados de 1957, el presidente no podía estar seguro del apoyo de todas las organizaciones partidarias regionales o departamentales. Ésta no era materia puramente interna, ya que, por lo menos en los pueblos, el comando no sólo controlaba una parte significativa de la milicia local sino también las alcaldías, pudiendo ejercer además bastante presión en las prefecturas y guarniciones militares. Así, la administración de las regiones dependía de la obtención de una acertada mezcla de

nombramientos a los puestos de prefecto y comandante de división y al patrocinio de una sólida pero amistosa nómina dentro del partido local. A menudo, esto se lograba; pero muchas veces se rompía el equilibrio debido a peleas internas en torno a la distribución de poder en el gobierno local, y no por diferencias ideológicas. Durante este período, el ejército hizo todo lo posible por proteger sus limitados recursos manteniéndose al margen de estas contiendas; pero hubieron obvios y reiterados problemas en la determinación del equilibrio de fuerzas locales entre la prefectura –que controlaba a los carabineros– y el comando –bajo cuya responsabilidad estaban las milicias–; y entre la alcaldía –que administraba mercados urbanos y servicios municipales–, dos entidades locales: las prefecturas –encargadas de mantener en funcionamiento la infraestructura departamental– y el comando –que inclusive después de la supresión del sistema de cupos ejercía una presión indirecta en los mercados, lo mismo que en los nombramientos para un vasto número de instituciones estatales–. Es así como los políticos locales cobraron gran importancia e incluso los municipios más provinciales se politizaron enormemente.

En las mismas minas, los comandos estaban en permanente desventaja, puesto que los sindicatos no sólo abarcaban la totalidad de la población laboral, sino también conformaban una especie de frente parroquial popular que agrupaba a una serie de partidos (incluyendo el MNR) y no únicamente a aquel del gobierno. Además, el sindicato generalmente tenía muchísimo prestigio. Una vez que se hubo logrado conservar las pulperías, el sindicato pasó a controlar el acceso a provisiones baratas y manejaba su propia radioemisora, la cual, aun antes del advenimiento del gobierno militar, fue de un valor político y organizativo inestimable.[19]

Estos factores precipitaron una mayor disgregación del poder en un período marcado por grandes fisuras en la alianza gobernante.

Siles intentó invertir esta situación, suprimiendo elecciones dentro del aparato local del MNR y a través del nombramiento directo de interventores para dirigir los principales comandos. Esta regresión a una centralización originó protestas generalizadas, pero se mantuvo hasta principios de 1959, cuando la próxima elección hizo necesario otorgar mayor espacio para renegociar pactos. Empero, la administración de Siles introdujo un burocratismo irreversible en el MNR, el cual a partir de entonces se dividió en varios "sectores" de diversa naturaleza política a todo nivel, en tanto que el poder se concentraba cada vez más en manos de la dirigencia nacional.

19 *Ibid*., pp. 95 y ss.

Paradójicamente, el lugar de mayor tensión, en términos de la relación entre autoridades locales y centrales, no fue el altiplano sino la tropical ciudad de Santa Cruz, que a lo largo de ese período experimentó un notable crecimiento y el caos político normalmente asociado a retirados pueblos en auge. Santa Cruz había estado siempre apartada de las tierras altas y los sistemas de valle que constituían el corazón de Bolivia en cuanto a población, industria, política y cultura –y no en un sentido puramente geográfico– Esta ciudad, sujeta a estallidos poco frecuentes pero bastante fuertes de sentimientos separatistas, estaba impregnada de un poderoso sentido de identidad regional apuntalado por la marcada diferencia de temperamento entre cambas y kollas y su papel de capital de facto del oriente boliviano; la escasamente poblada mitad de la república. Con excepción de las regiones próximas a la ciudad de Santa Cruz, Trinidad y Riberalta en el Beni y algunas de las zonas gomeras de Pando, esta gigantesca parte del país era prácticamente una tierra incógnita, siendo los únicos medios de comunicación el avión que aterrizaba en pequeñísimas pistas o la compleja red fluvial que desemboca en el Amazonas, con mayor grado de confiabilidad. Santa Cruz de la Sierra era un asentamiento colonial establecido hace mucho tiempo y dominado por misiones eclesiásticas legadas al imperio jesuítico del Paraguay. Sus industrias azucarera y ganadera habían preservado débiles nexos con el altiplano, pero todavía en 1950 se mantenía enclaustrada y casi totalmente autárquica. El MNR hizo de esa ciudad su cuartel general durante la guerra civil de 1949, porque allí no había guarnición alguna (recién en 1959 se instaló una guarnición apropiada), lo cual refleja la relativa "apertura" de una sociedad a la que de ninguna manera le faltaba su cuota de terratenientes, pero que aún era gobernada por frágiles normas de competencia económica y control social. El belicoso populismo y la organización relativamente disciplinada del partido progresaba de manera apreciable en semejante circuito político, donde el poder personal se aplicaba tanto por medio del gansterismo como de pequeños favores.

La política movimientista de diversificación económica, que tenía la industria del petróleo como vanguardia, desarrolló Santa Cruz y la acercó al resto de la nación. A lo largo de la década de 1950, la corporación estatal del petróleo, YPFB, mostró una expansión modesta pero constante en el sur del departamento, mientras ni el gobierno ni las agencias de cooperación norteamericanas descuidaron las posibilidades agroindustriales de la región. Esto estimuló la construcción de una carretera que uniera Santa Cruz con Cochabamba, la cual se concluyó dos años después de la revolución y fue

rescllada más tarde con una gran dosis de asistencia norteamericana al desarrollo. En 1956 el tráfico mensual de camiones en esa carretera fue de 11.755, en 1960 alcanzó prácticamente los cincuenta mil.[20] Entre 1955 y 1960, el oriente recibía el 57,7 por ciento de todos los créditos del Banco Agrícola contra el 16,1 por ciento destinado a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí en su conjunto. Como resultado de ello, la producción azucarera aumentó de 34 mil toneladas en 1950 a 1.950.000 en 1964; y la del arroz, de diez mil toneladas a 123.500. También hubo una expansión de la producción de algodón y café, pero en menor escala.[21] Si bien este crecimiento, que habría de ser sobrepasado en años posteriores, tuvo un efecto meramente parcial en la economía nacional, su impacto en la región fue enorme y contribuyó a reavivar lo que quedaba de caudillismo. Desde entonces, Santa Cruz ha sido escenario de actividades políticas inusualmente violentas aún en épocas de relativa estabilidad.

Con el régimen movimientista, las luchas de poder fueron tan complejas como itacundas, pues incorporaban en ellas toda la fluidez evidente en el escenario nacional dentro de un contexto local donde los terratenientes todavía detentaban bastante poder; pero tuvieron que aceptar las reformas agraria y urbana (1956) que afectaban a un considerable número de extensiones de terreno en el perímetro circundante a la ciudad, proporcionando una fuente de gran valor para el clientelismo distribucionista de diversos líderes del partido. La derecha –en su mayoría intereses terratenientes aliados a la universidad dominada por la FSB– funcionaba a través del Comité Pro Santa Cruz, creado en 1950 para promover los intereses regionales y dirigido por el dignatario local, Melchor Pinto. El control del MNR fue menos estable pero generalmente se resolvía directamente a través de enfrentamientos con el Comité, los cuales resultaron en 21 prefectos de departamento entre 1952 y 1962.

La figura clave en el MNR durante este período fue el joven abogado Luis Sandoval Morón, quien junto a su hermano Edil desplazó primero a una coalición moderada de movimientistas de la vieja guardia y luego a otro clan agrupado en torno a la familia Barbery en una serie de elecciones de comando, muy cargadas, donde el errático paternalismo gubernamental se mezclaba con donaciones liberales de tierra, desembolsos de fondos municipales, manipulación de "sindicatos" campesinos y olas de secuestros humillantemente persistentes, alborotos callejeros, castraciones y asesinatos.[22] Inicialmente, en enero de 1954 Sandoval accedió al poder, pero acusado de asesinato fue destituido y el partido "intervino" a través de un coronel nombrado desde La Paz. En septiembre de 1955, ya "limpio" y sin el menor rastro de haber pasado por interrogatorios judiciales, Sandoval fue restituido a su cargo. Conservó el control hasta fines de 1957, cuando la política intervencionista de Siles permitió que el Comité recobrara su influencia por un caótico período de dos años durante los cuales Sandoval capitaneó una banda guerrillera autónoma y semilegal que hizo diversas incursiones al estilo de los caudillos del siglo XIX. En una ocasión, según se dice, ingresó a la ciudad montado en un semental blanco y con dos revólveres de mango perlado con la intención de "invitar un trago a sus hombres".

El "comitecismo" estaba demasiado ligado a la FSB como para mantener el poder durante mucho tiempo; en efecto, una vez que Siles había perdido control del aparato movimientista en 1959, el rebelde Sandoval recuperó su cargo para dirigir los asuntos de la ciudad hasta mediados de 1961, pues para entonces los militares ya empezaban a desempeñar un papel primordial en la imposición del orden en todo el país. Éstos llegaron a Santa Cruz para poner freno al faccionalismo durante los ocho años siguientes, con breves intervalos. Para dar una idea del estilo político y de la independencia de Sandoval, recojamos un incidente típico ocurrido en marzo de 1961: con las primeras lluvias, la recientemente asfaltada plaza principal de la ciudad quedó desintegrada en grumos de petróleo y arena. Los consternados y encolerizados pobladores, instigados por el comando se desquitaron tomando como rehenes a los ingenieros de la CBF que tuvieron a su cargo el trabajo. Paz ordenó su inmediata liberación, pero como respuesta, Sandoval arguyó: "Yo no sé, en realidad mala suerte tiene nuestro pueblo, para que todos los esfuerzos o inquietudes el destino se empeñe en defraudar. Estos hombres son culpables y deben ser castigados. Considero justa la reacción del pueblo, pero como autoridades debemos también velar por el orden público".[23] En este caso, Sandoval concebía el orden público en términos de exigir a los ingenieros en cuestión que se guitaran

20 Zondag, *op. cit.*, p. 135.
21 Arze Cuadros, *op. cit.*, pp. 268-269

22 El modelo cruceño de política está esbozado en Laurence Whitehead: "National Power and Local Power: The Case of Santa Cruz de la Sierra, Bolivia", en Francine Rabinovitz and Felicity Trueblood (ed.): *Latin American Urban Research*, vol. 3, Beverly Hills, 1973. Sandoval brinda su propia versión en un texto que aún no fue publicado: *Bolivia: revolución y contrarevolución en el oriente, 1952-1964*. Agradezco a José Luis Roca por mostrarme una copia de estas memorias.
23 *La Cruceña*, (Santa Cruz), 31 de mayo de 1961.

los zapatos y marcharan alrededor de la plaza sumergidos en el lodo, al son de la banda municipal y ante las burlas del populacho. Tres meses después, su estilo demagógico e incitador de los sectores bajos fue nuevamente desplazado y sus quinientos milicianos armados de artillería antiaérea fueron insuficientes para combatir al gobierno respaldado por aquellos que fueron obligados a conceder préstamos forzosos y propiedades "para el desarrollo" y perder sus empleos en la administración. Los hermanos Sandoval Morón eran ciertamente extremos en sus métodos, pero su estilo estaba fundamentalmente en consonancia con condiciones cruceñas y no era tan avieso como para negarles influencia a nivel nacional, donde participaron en espirituosas, si no efímeras, alianzas casi siempre contra el presidente gobernante. Su legado populista duró lo suficiente como para permitirles irrumpir una vez más en la vida política, aunque fuera temporalmente en 1979, después de años de exilio y deshonra alegremente exhibida.

Aunque Sandoval Morón era un permanente estorbo para La Paz, se lo valoraba como un baluarte contra la Falange que se había incrustado de manera particularmente profunda en Santa Cruz pese a que durante la década de 1950 estuvo también presente en actividades conspirativas de la mayoría de los centros urbanos. El crecimiento de la FSB y el respaldo que obtuvo de la clase media urbana y los estudiantes no se debió tanto al atractivo de su torpe y extraordinariamente irrevisado arsenal ideológico, como al simple hecho de que resistió *tout court* al MNR acusando al régimen tanto de comunista como de venderse a los yanquis, demandando respeto a la propiedad (principalmente en el campo) y sin embargo prometiendo transformaciones estructurales aún más profundas que las introducidas en abril de 1952. Al erigirse tan absolutamente en oposición, la FSB fue consignada a la esfera de la subversión y se vio condenada a los problemas concomitantes de la represión, la actividad clandestina y las violentas trifulcas tan típicamente fomentadas entre sectas. Con todo, el falangismo era la única esfera accesible a las fuerzas desplazadas del poder por la revolución y, por lo tanto, halló bastantes adeptos entre aquellos que tenían cuentas que saldar con el MNR para montar una serie de mal organizadas acciones armadas durante toda la década. La más grave de éstas tuvo lugar en La Paz el 19 de abril de 1959, cuando la FSB sitió parte de la ciudad y se mantuvo durante seis horas. Entre las cincuenta personas que murieron en esa acción se cuenta al veterano jefe fascista Únzaga de la Vega, quien fue encontrado con un disparo de bala en su departamento. El estado mental de Únzaga ciertamente era tan poco claro que las afirmaciones de suicidio por parte del MNR no parecían descabelladas, pero la reputación del

Control Político tampoco era tan intachable como para que la denuncia de asesinato que pesó sobre él se descartara tan fácilmente.

La muerte del que fue su jefe durante 22 años alteró el rígido apego de la Falange a las doctrinas de la década de 1930 y, con su nuevo líder Mario Gutiérrez, redujo un poco su actividad militar y comenzó a explorar terrenos comunes con la democracia cristiana. Esto confirió al partido un halo de respetabilidad y seguramente explica el hecho de que, si bien sacó el tercer lugar en las elecciones de 1960, la FSB obtuvo 79 mil votos, cerca de ocho veces el apoyo brindado al PCB cuando éste, a su vez, gozaba de mucha más popularidad entre la clase obrera. Por lo tanto, la extrema derecha estaba lejos de haber perecido y podía presentársela legítimamente como la "nueva Rosca" y como la más peligrosa amenaza contra la revolución. Ciertamente importunó al gobierno de Siles, pero en el momento de la muerte de Únzaga, Siles ya estaba perdiendo terreno frente a un renovado desafío sindicalista.

La huelga realizada en febrero-marzo de 1959 por la FSTMB duró más de dos semanas y costó 2,8 millones de dólares a la COMIBOL, pero finalmente consiguió un incremento del veinte por ciento en los salarios y, lo que es más decisivo, la conservación de los subsidios en las pulperías. Si se compara con los acontecimientos de los dos años anteriores, éste representa un importante revés para el régimen que, si bien pudo mantener a Huanuni y Colquiri funcionando, a la larga tuvo que aceptar su derrota en torno a un componente clave del plan de estabilización. Con todo, la huelga señaló un nuevo viraje en las alianzas dentro de la Federación de Mineros, ya que Lechín, Mario Torres y otros líderes nacionales, preocupados ante la vulnerabilidad del gobierno de Siles y la posibilidad de que una acción prolongada pudiera duplicar los errores de 1957, hicieron todo lo que estaba a su alcance para reducir el paro y llegar a un acuerdo. Con ello, perdieron el apoyo de la izquierda, bajo cuyo control estaba el comité huelguístico independiente presidido por César Lora.

La tensión entre ambos cuerpos no sólo reflejó las ya antiguas diferencias entre las bases y una burocracia que se había mantenido inalterada desde 1944, sino también una división entre aquellos que estaban en conflicto con el gobierno y aún pertenecían al MNR con una buena predisposición para llegar a un entendimiento y conservar el equilibrio, y los que pese a que no buscaban el derrocamiento inmediato del régimen, luchaban por una victoria de las bases para revertir la política de 1956 y reavivar el radicalismo de 1952. Como hemos visto, el PCB osciló entre ambas posiciones y en 1959 se unió al PCR. El resultado fue la invalidación del Bloque Restaurador que había estado perdiendo afiliados desde mediados de 1958. El Bloque se derrumbó del todo en

enero de 1959, cuando los dirigentes de los trabajadores fabriles fueron desplazados por una votación masiva de las bases, escépticas de su postura progubernamental desde el principio y que ya habían forzado una abstención en la votación de 1957. El posterior apoyo fabril brindado a Siles había sido recompensado con la designación de Abel Ayoroa, su líder, en el Ministerio de Trabajo. Después de la huelga minera de 1959, fue destituido de su cargo y denunciado como traidor de la clase obrera. La nueva dirigencia del sindicato estaría compuesta en su mayoría por lechinistas liderizados por Daniel Saravia.

Esta restitución de la unidad sindical fue selllada a principios de 1960, cuando el sindicato de Siglo XX finalmente venció la resistencia del comando de Huanuni. La causa original del conflicto yacía fuera de los asuntos sindicales, en la campaña independiente para las elecciones de presidente emprendida por la figura central de la derecha movimientista: Wálter Guevara. El intento de Guevara de obtener la nominación del partido fue respaldada por los comandos de Huanuni y Colquiri, los cuales habían recibido armas y financiamiento cuando él fue ministro del Interior. No obstante, tanto la izquierda como el centro del partido apoyaron el retorno de Víctor Paz, quien había podido distanciarse del plan de estabilización durante su estadía en la embajada en Londres y había ofrecido a Lechín la vicepresidencia, en un esfuerzo por renovar el espíritu de la alianza anterior a 1956. Al principio, Siles apoyó a Guevara, pero retrocedió cuando su favorito lanzó ataques aún más duros contra la COB y contra Paz, que provocaron su destrucción como ministro. Consecuentemente, los guevaristas se vieron aislados dentro del MNR y forzados a tomar fuertes medidas independentistas. Este cambio en el equilibrio de fuerzas se registró en las elecciones que tuvieron lugar en diciembre de 1959 en el sindicato de Huanuni, donde la antigua dirigencia comandista obtuvo apenas la mitad de los votos otorgados a la izquierda y fue acusada de varios delitos, incluyendo el de asesinato. El 22 de enero de 1960, el desplazado comando volvió a golpear; 120 hombres armados cercaron el edificio sindical y proclamaron la reinstauración de la antigua dirigencia. Cuatrocientos trabajadores que se acercaron al edificio recibieron una descarga y tuvieron que retroceder. Al saber esto, Irineo Pimentel y César Lora movilizaron a seiscientos trabajadores de Siglo XX y se dirigieron a Huanuni. La lucha se prolongó por varias horas y diez personas resultaron muertas, incluyendo el líder del Comando, Celestino Gutiérrez, a quien los atacantes dejaron suspendido en una cuerda hasta el arribo de Siles para negociar una "tregua". Los sindicatos amarillos volverían a aparecer en las minas y fábricas bolivianas, pero jamás volverían a atraer el apoyo popular.

Las elecciones de 1960 aceleraron asimismo la movilización en el campo, donde el desafío de Guevara ofrecía adhesiones clientelistas alternativas y exacerbaba la arraigada competencia entre líderes regionales (caciques) en torno al patronazgo oficial, al control de mercados y tierras y el poder militar. Este último tema fue de enorme importancia, pues aunque los sindicatos campesinos por lo general eran aglomeraciones locales o regionales mal organizadas, compensaban su falta de disciplina con el potencial de dar una respuesta masiva a líderes que actuaban de manera impulsiva o autoritaria y que controlaban una considerable provisión de armas; en 1953, una fuente estimaba que los dieciséis "regimientos" organizados en el campo estaban compuestos por 110 mil campesinos armados; aun si esta cifra se redujera al cincuenta por ciento, seguiría representando una fuerza formidable.[24] En ciertos casos, el conflicto entre campesinos se mantuvo bastante marginado de los cambios que se producían en la política nacional. Ése fue el caso de la lucha encarnizada entre laimis y jukumanis en el norte de Potosí a lo largo de generaciones, donde las autoridades siempre quedaron perplejas ante las intrincadas demandas de los contendientes y donde, muchas veces, asentían a las exigencias de ambas partes a fin de mantenerse fuera del caso, el mismo que sólo podía ser resuelto en términos exclusivamente locales y definitivamente no hispanos.[25] Empero, por esto no debe interpretarse que se trataba de disputas triviales; a fines de 1959, 260 personas murieron en enfrentamientos. En otras partes, las contiendas por recursos fueron a menudo asimiladas dentro de la política formal de la nación, aun cuando muchos de los participantes tenían una confusa percepción de los demás factores que estaban en juego.

La ruptura de Guevara con Paz y luego con Siles le atrajo el apoyo de dos figuras campesinas sobresalientes: Miguel Veizaga, que estaba a la cabeza de los campesinos independientes y productores en pequeña escala de Cliza, en el valle de Cochabamba, y Zenón Barrientos Mamani, un cacique aymara del departamento de Oruro. La razón externa de esta alianza fue la coincidencia con los ataques de Guevara a la burocratización del MNR y a la dejadez con que se administraba la reforma agraria. Sin embargo, la motivación de esto también derivaba de antiguas luchas encarnizadas con los líderes dominantes, aunque aún inseguros de sus respectivas regiones: José Rojas, jefe del sindicato de excolonos de Ucureña, y Toribio Salas, el cacique de las alturas, con base

24 *El Diario*, (La Paz), 9 de abril de 1953.

25 Para tener una idea de la complejidad de este caso ver Xavier Albó y Olivia Harris: Monteras y guardatojos, "Cuadernos de CIPCA", No. 7, La Paz, 1976.

en Achacachi. En ocasiones, estas rivalidades sobrepasaron el circuito ritual de intrigas dentro de ministerios, los bloqueos de caminos y la competitividad en torno a las "afiliaciones" en zonas intermedias para manifestarse en conflicto. Pero no fue sino a partir de 1959 que el MNR demostró ser incapaz de imponer su voluntad y orden en el campo, sin aceptar alianzas que otorgaran a los caciques una considerable autonomía. Así, Rojas, un veterano del Chaco y por mucho tiempo caudillo campesino de Cochabamba, fue nombrado ministro de Asuntos Campesinos por seis meses, con objeto de neutralizar el apoyo de Veizaga a Guevara. Cuando finalmente se lo destituyó de su cargo por manifiestos excesos en su comportamiento provinciano y, uno podría aventurarse a decir, por el menosprecio de la dirigencia movimientista hacia un hombre que se empeñaba en hablar quechua pero que recorría alegremente el campo en una limousine manejada por un chofer, Rojas bloqueó los caminos de acceso a la feria semanal de Cliza durante dos meses y lanzó numerosos ataques que requirieron de la intervención del ejército. En el ministerio, su predecesor no había sido un campesino pero sí miembro del aparato del MNR: Vicente Álvarez Plata, quien intentó frenar el poder de Salas en el altiplano pero no logró obtener el suficiente apoyo. En noviembre de 1959, Álvarez Plata fue asesinado en Achacachi, en circunstancias que comprometían directamente a Salas. Pero tal era su autoridad, que el cacique pudo sobrevivir a su expulsión del MNR, mantener reuniones nocturnas con sus seguidores y persistir en su acoso al poblado de Warisata.

Los diversos caciques campesinos participaron cada vez más en la formación de alianzas regionales y pactos de defensa, algunos de los más importantes se produjeron en los campamentos mineros. En marzo de 1959, tres mil hombres de Rojas fueron despachados en un tren especial a romper la huelga de la FSTMB en San José; un mes después, las milicias de Ucureña fueron nuevamente movilizadas para aplastar el levantamiento de la FSB en La Paz y cuando finalmente se hubo sofocado la rebelión, sólo con gran dificultad se logró mantenerlos fuera de la ciudad. Asimismo, Rojas firmó una alianza con el comando de Colquiri, pero fue anulada una vez que los trabajadores de interior mina retomaron el control del sindicato. Por otra parte, Veizaga hizo que sus fuerzas ocuparan las poblaciones de Tarata y Tolata en enero de 1960, después del conflicto de Huanuni, ya que responsabilizó a Rojas de la muerte de Gutiérrez, el líder del comando.

En efecto, fue ese incidente (en el cual Rojas no tomó parte directamente) el que desató el conflicto más importante entre las facciones del valle cochabambino. A fines de enero de 1960, los ataques, secuestros y ocupaciones

eran ya tan comunes, que Paz y Guevara, ambos ya candidatos formales para las elecciones, se apresuraron a visitar la zona para negociar una tregua. A principios de marzo, dos provincias fueron declaradas zonas militares y la Séptima División del Ejército prohibía portar armas y la entrada de políticos a la región, ya sea del MNR o del nuevo MNR Auténtico de Guevara. Pero incluso esto fue insuficiente; grandes zonas del valle carecían de toda apariencia de orden. Mientras Rojas amenazaba con ocupar Cochabamba, Veizaga intimidaba con cortar el suministro de agua a esa ciudad. De ser una frontera regional, Río Rerama pasó a ser línea defensiva, provista de vallas de alambre de púa, trincheras, nidos de ametralladoras e inclusive emplazamientos de morteros. Veintenas de personas murieron en escaramuzas y varias comisiones gubernamentales fueron enviadas para mediar en el conflicto.

Únicamente las elecciones lograron apaciguar temporalmente el conflicto. En los diversos pueblos controlados por Rojas, todos los votos fueron para Paz; pero en Oruro, al MNR-A le fue bastante bien, con sólo dos mil votos menos que el MNR. Veizaga y Barrientos Mamani repudiaron inmediatamente a Guevara, solicitaron su reincorporación al MNR y sostuvieron conversaciones con Paz. Pero no fue sino a fines de 1960, después de la declaración de estado de sitio y del despliegue de varios regimientos más la fuerza aérea y con la intervención de Lechín, que Rojas dejó la persecución de Veizaga y ambos caciques se comprometieron a celebrar elecciones sindicales libres.

Tal estado de cosas en el campo reflejaba la más general atmósfera de tensión y conflicto que caracterizó a las elecciones de 1960. La separación de Guevara fue la fisura más seria que sufrió el MNR y supuso una enorme carga para la frágil unidad de su aparato partidario. Sin embargo, puesto que Guevara luchaba no sólo contra la naturaleza arbitraria y no democrática tanto del gobierno como del partido sino también a favor de un conjunto de políticas claramente conservadoras, no pudo alejar a los sindicatos de Paz y, de esa manera, retrasó el cisma por tres años. Además, habiendo obtenido la nominación de Lechín para la vicepresidencia, los dirigentes de la COB creían haber recuperado por sí mismos una ventaja estratégica sobre la derecha del partido. Incluso el PCB, que pronto hubo de lamentar públicamente su error, se equivocó en la estimación de la fuerza del desafío de Guevara y se movilizó en apoyo de Paz, a pesar de que presentaba sus propios candidatos para el Congreso.[26] En un plano más amplio, tal reacción no resultaba sorprendente, ya

26 Partido Comunista de Bolivia: *Segundo Congreso*. La Paz, 1964, pp. 8-9.

que Paz aún era identificado con las reformas revolucionarias esenciales. Siles, por otra parte, había perdido credibilidad y, si bien en la octava convención movimientista identificó sólo a la extrema izquierda como su detractora, la lista de los cargos que le atribuía arrastraba a un electorado mucho más amplio: "Según las acusaciones de los partidos de extrema izquierda, mi Gobierno habría vendido la patria a los consorcios petroleros y sometido las decisiones de Gobierno al visto bueno del Departamento de Estado; habría sido el artífice de una política de desocupación masiva y de masacres, de muertes de obreros; habría frenado la Reforma Agraria y restablecido el piso y la esperanza de los exlatifundistas y pretendido desnacionalizar las minas, debilitar financieramente YPFB como preámbulo de su liquidación; finalmente sería autor de la división del movimiento obrero...".[27]

Obstinado hasta el extremo, Siles prosiguió acusando al POR y al PCB de manejar un "estado feudal" y una "dictadura" en Siglo XX. Tildó de subversiva la huelga de 1959, defendió al comando de Huanuni y las acciones de las milicias de Rojas, aracó a Lora por intentar promover una segunda Comuna de París y declaró que de no haberse implementado el plan de estabilización, Bolivia habría sido llevada al comunismo. En oposición a semejante diatriba, el tono mesurado y conciliatorio adoptado por Paz parecía presagiar una nueva era. En la elección final del MNR registró un elevado porcentaje de votos, pero el respaldo combinado del MNRA –que pronto hubo de adoptar otra denominación, Partido Revolucionario Auténtico (PRA)– y de la FSB constituía una tercera parte del total obtenido por el partido gobernante, lo cual, considerando las condiciones de votación, de intimidación, soborno, amenazas y una dependencia residual del oficialismo por "pegas", resultaba un logro significativo. Los previsibles cargos por fraude fueron recibidos con desdén por la izquierda movimientista, pero fue éste el sector que cargaría con las consecuencias y el que sufriría más bajo el régimen de Paz.

Represión y desarrollo bajo Paz

Lechín y los sindicalistas del MNR fueron marginados tan enfática y rápidamente con Paz, que retrospectivamente se puede decir que cometieron un grave error al apoyarlo. En un sentido simple, por supuesto, fue así; pero no debe olvidarse que, a despecho de toda su retórica de lucha, Lechín seguía

27 Hernán Siles Zuazo: *Mensaje informe dirigido a la VIII Convención del MNR*, La Paz, 1960, p. 6.

siendo un movimientista y, a no ser que pudiera sacar a la mayoría de los sectores más militantemente proletarios del MNR, no se arriesgaría a perder su posición dentro de la COB, dando ese paso él mismo. Dado que se oponía enteramente al "stalinismo" del PCB y al "maximalismo" del POR, los que hubieron puesto serios límites a su ahora famosa maniobrabilidad, era imposible que se uniese a ellos. Juzgó que la situación de 1960 no conduciría a que una ruptura de la izquierda con el MNR pudiera formar un nuevo partido obrero. Como resultado, ni él ni el resto de los cobistas en el MNR tuvieron más opción que negociar los mejores términos dentro del partido sobre la base de la restitución del movimiento sindical. Las expectativas de éxito para este grupo crecieron por el hecho de que, después de las elecciones, los sectores "extraoficiales" que habían existido dentro del MNR desde 1955 cobraron una forma mucho más coherente, siendo el sector "izquierdista" el que parecía tener mayor cantidad de seguidores entre ellos. El "sector socialista"* se restringía a un pequeño grupo formado en torno al nuevo ministro de trabajo, Aníbal Aguilar Peñarrieta y al ubicuo Edil Sandoval Morón. Éste adoptó un socialismo realmente muy blando, era considerado como una facción predominantemente tecnócrata y apoyada por muchos silistas. Los seguidores personales de Paz se vieron obligados a seguir el juego porque, aunque el presidente y el CPN tenían que denunciar persistentemente el faccionalismo, Paz lo había usado a su conveniencia para recobrar el poder y, cuando estuvo claro que había mucho más en juego que los planes personales de Siles, se hizo necesario intervenir en las listas.

Desde un principio, Víctor Paz dirigió el gobierno y el partido de manera cerrada y burocrática, con la colaboración de un pequeño grupo conocido como la "maquinita". Dentro del MNR, retomó la política intervencionista de Siles y utilizó al secretario ejecutivo del partido, Federico Fortún Sanjinés, para evitar al incontrolable y dividido CPN, consolidar una cadena vertical de comando y reprimir las tendencias disidentes en los mismos. Este enfoque se reflejó en el gabinete, ahora integrado en su mayoría por jóvenes tecnócratas de la generación posrevolucionaria. Lechín fue el único izquierdista en los niveles más altos del gobierno y pronto se vio privado de todo poder ejecutivo.

Paz se rodeó de hombres que se suscribían a sus ideas desarrollistas y que compartían su creencia de que la modernización era una prioridad para Bolivia. Paz tenía una idea clara de la forma que debía adoptar ese cambio: "Todos los

* Entrecomillado nuestro. (N. de la T.)

hombres y mujeres del Partido deben hacer conciencia de este concepto; necesitamos acudir al capital extranjero para desarrollar nuestra economía... Se ha dicho que si yo vuelvo al Gobierno reaparecerán las colas y los cupos. Es falso, como lo es la insidia de que, si yo llego al Gobierno, voy a destruir la estabilización. La estabilización era otra necesidad. Había que llevarla a cabo y es preciso mantenerla...".[28] Ocasionalmente, sin embargo, el veterano economista sacrificó mucho en aras de la claridad: "...una de las características del subdesarrollo es la carencia de capital. Entonces, tiene que obtenerlo del exterior. El ideal es conseguir préstamos, porque el préstamo, con intereses, después de un tiempo se amortiza y el país queda libre de toda obligación...".[29] Paz previno que esta "nueva etapa" de la revolución no sería tan espectacular como la primera, pero que sus efectos de transformación serían igualmente profundos. Criticó los prejuicios en torno al capital privado, al que ofreció amplias garantías, en tanto que Fortún Sanjinés puso énfasis en los aspectos más políticos y organizativos de la línea: "La Revolución no siempre ha tenido una actitud clara con respecto de las capas medias, ni en los hechos se les ha considerado como los aliados naturales de la Revolución... apoyo decidido e inmediato se debe brindar a la minería privada... un partido revolucionario sin organización vertical no podría aplicar un programa político...".[30] Tal planteamiento encajaba muy bien con la Alianza para el Progreso de Kennedy, la cual pretendía contrarrestar los efectos de la revolución cubana a través de una acrecentada inversión norteamericana en proyectos de infraestructura destinados a generar un crecimiento industrial, diversificar la propiedad de la tierra, la producción agrícola y dar impulso a reformas estructurales, reduciendo así la polarización social y la radicalización política de forma "moderna... evolutiva...". Washington veía en la administración de Paz un "excelente" socio para apuntalar la Alianza: ya había implementado importantes reformas, era civil y democrática en su forma, estaba bajo una clara presión de la izquierda, pero también había hecho considerables concesiones a EE UU en 1956 y ahora parecía estar más vulnerable a la cooperación económica y política directa. En Kennedy, Paz veía a un hombre a su gusto, un político capaz de sustituir a la burguesía nacional progresista de la que Bolivia carecía tan manifiestamente para su necesaria transformación en un Estado moderno. En 1963, Paz visitó al presidente de EE UU, a quien saludó en un lenguaje típicamente extravagante, pero también cautivadoramente auténtico. "En mi patria existe admiración por este país, por su progreso técnico, por la juventud de su cultura, por su dinámica democrática y por su contribución a la tarea común de preservar los valores que nos legaron nuestros antepasados y que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos...".[31]

28 Víctor Paz Estenssoro: *La Revolución seguirá adelante*, La Paz, 1960, p. 29.
29 Víctor Paz Estenssoro: *La Revolución Boliviana*, La Paz, 1964, p. 50.
30 Federico Fortún Sanjinés: *Tercera etapa de la Revolución Nacional*, La Paz, 1964, pp. 12, 13 y 24.

A los seis meses de la posesión de Paz, la fortalecida alianza con los EE UU cobró forma palpable en el borrador de lo que se conocería como el Plan Triangular. Este proyecto fue financiado en forma conjunta por el gobierno norteamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo y Alemania Occidental y apuntaba a la rehabilitación completa de COMIBOL así como a su refinanciamiento. En 1961, la deuda de COMIBOL había alcanzado la extraordinaria suma de veinte millones de dólares. El plan otorgó un crédito de 37,75 millones de dólares a la Corporación bajo la modalidad de lo que se conoce como términos "blandos"; en este caso consistentes en un período de gracia de tres años, 4,5 por ciento de interés y un término de diez años para el pago. Sin embargo, los términos para la "rehabilitación" de COMIBOL fueron notablemente menos "blandos": despido general de más de una quinta parte de su fuerza laboral y cierre de una serie de minas (no especificadas). Aquellas empresas que no hubieran sido "técnicamente racionalizadas" no recibirían inversión o subsidio alguno. En el XI Congreso de la FSTMB, realizado en Huanuni en mayo de 1961, Lechín aprobó el principio de la operación evitando el tema de redundancias y argumentando que su aceptación era el único medio garantizado de renovar al sector minero. "Tiempo atrás, los trabajadores, con sentido realista, exigieron la capitalización de COMIBOL, con créditos vengan de donde vengan. De modo que, si se logran créditos de cualquier lado no se puede decir que es una posición contrarrevolucionaria, sino actitud progresista la que se asume. Por lo tanto, debe apoyarse el Plan. La euforia de algunos dirigentes está colocando a los obreros en una situación aislacionista".[32]

La izquierda se opuso resueltamente a esa línea, pero Lechín supo unir el apoyo oficial a la fuerza de su autoridad para volcar a la mayoría de los delegados a favor de la propuesta. Empero, de ninguna manera esta decisión fue establecida de antemano y el debate fue particularmente acalorado debido a que

31 *Visita del Presidente Víctor Paz Estenssoro a los Estados Unidos*, La Paz, 1963, p. 13. En una ocasión, Paz se refirió al Secretario de Estado Adjunto como "el compañero Henry Holland", una alusión que la izquierda nunca le permitiría olvidar.
32 Citado en "XI Congreso Nacional de la FSTMB", *Control Obrero*, La Paz, junio de 1961.

el MNR ya había ignorado a la COB al rechazar un paquete mucho más favorable ofrecido por la Unión Soviética. En octubre de 1960, Kruschev abordó al representante boliviano ante la ONU ofreciéndole créditos para que Bolivia construyera la planta de fundición que tanto necesitaba. En diciembre, Brezhnev escribió a Paz confirmando esta oferta. Por su parte, el gobierno checo ofreció generosos términos para la construcción de una fundidora de antimonio. Moscú envió una misión parlamentaria a Bolivia en diciembre de 1960 para consolidar la respuesta popular, favorable a estas ofertas, y para ejercer mayor presión en el régimen que ya manifestaba signos de estar buscando una excusa para rechazarlas. La delegación ratificó su oferta, junto a otros proyectos por un valor de 150 millones de dólares en créditos, por la construcción de caminos, para YPFB y para ferrocarriles. El Congreso boliviano y la COB recibieron la iniciativa con beneplácito, pero Paz estaba perfectamente consciente de que Washington se oponía totalmente y por ello recorrió nuevamente a su efectiva política de postergar la decisión argumentando la necesidad de realizar "estudios técnicos". Paralelamente, los dirigentes movimientistas reavivaron la vieja campaña contra el lanzamiento de estaño al mercado internacional que hizo la Unión Soviética, deprimiendo los precios y requiriendo una acción decidida del Consejo Internacional del Estaño. Esta política de Moscú parece haber estado mal dirigida en todo sentido, pues en 1959, aquel país se había convertido en un importador neto de estaño. Sin embargo, el tema fue manipulado con gran insistencia y con cierta efectividad, particularmente por el belicoso presidente de la COMIBOL, Guillermo Bedregal.[33]

Naturalmente, el PCB movilizó todos los recursos a su alcance para apoyar la oferta soviética. Algunos meritorios ciudadanos estaban tan horrorizados ante la perspectiva de que los rusos pusieran sus pies en el país, que abandonaron la ciudad de La Paz por los días que duró la visita de la misión, en tanto que el obispo de Oruro instó a sus feligreses que rogaron al Señor para que impidiera la aceptación de la oferta. En las minas, las oscilaciones del PCB y su ocasional reagrupamiento en torno a Paz en 1960 había significado un nuevo aliento de vida para el POR, que atacó a los stalinistas con una malicia no vista desde la década de 1940. De acuerdo al relato del porista Filemón Escóbar, esto provocó una recepción a los delegados soviéticos en Siglo XX que difícilmente la podrían haber anticipado:

33 Guillermo Bedregal: *El convenio internacional del estaño*, La Paz, 1961; *Recuperación de la minería nacionalizada*, La Paz, 1961.

> La recepción fue tremenda. Al ver a los rusos, los mineros comentaron que eran gringos igual que los norteamericanos. En ese momento, nuestro partido estaba sosteniendo una sesión nacional de entrenamiento. Se decidió que tomaríamos parte en la recepción de los rusos defendiendo nuestro propio punto de vista. Toda esa noche estuvimos preparando pequeñas banderas rojas con la hoz, el martillo y el número 4. A las ocho de la mañana, cuando los mineros salían del turno de la noche, pusieron nuestras banderas en sus guardatojos donde normalmente llevan una linterna: unos cuatrocientos portaban las banderas de la Internacional.
> Los comunistas reaccionaron impulsivamente al descubrir que la plaza de Siglo XX estaba dominada por pancartas y banderas rojas de los trotskistas, pero no llegaron a la violencia porque los diputados estaban dirigiendo su saludo a los trabajadores. Al escuchar sus discursos, César comentó que no eran políticos sino meros administradores. Lo que los mineros querían saber era cómo los obreros rusos hicieron posible la revolución de 1917, que era la verdadera base del progreso de ese país. Alguien, expresando la posición de nuestro partido, dijo que si el gobierno rechazaba su oferta para una planta de fundición: "nosotros los mineros de Siglo XX la aceptaremos con entusiasmo revolucionario".
> Los rusos fueron rápidos en responder que sólo podrían emprender negociaciones entre gobiernos y que no podrían hacer compromisos con los sindicatos obreros. Al final hubieron vítores a Rusia; por una parte estaba la poderosa voz de nuestro partido vitoreando a Lenin y Trotsky y por la otra, la de los comunistas vitoreando al gobernante ruso de entonces… Los diputados soviéticos saludaban levantando tres dedos, y nosotros respondíamos levantando cuatro.[34]*

Todo parece indicar que Paz aprovechó la oferta soviética para presionar a Washington con objeto de que EE UU presentara una alternativa concreta, la cual finalmente no incluía una planta de fundiciones. Las compañías mineras privadas siguieron oponiéndose a tal medida argumentando que Bolivia no tenía las suficientes reservas para justificar una fundidora, pese a que ellos mismos aumentaron su inversión en las excavaciones de estaño. Dentro del MNR, el tema cobró renovada importancia puesto que representaba un paso vital hacia el desarrollo nacional autónomo, era respaldado entusiastamente por el joven ministro de Minería, René Zavaleta; pero en la práctica, todas las propuestas substanciales fueron objeto de bombardeos por el liderazgo del partido.[35]

34 Filemón Escóbar: "Testimonio", pp. 60-61.

* Cita traducida porque no fue posible hallar la versión original. (N.de la T.)

35 Sobre el tema de la fundición ver Almaraz: *Réquiem…*, p. 41 y ss., Universidad Técnica de Oruro: *El deber de la hora: Hay que derrotar el atraso instalando hornos de fundición*, Oruro, 1963; Augusto Céspedes: *Fundición de estaño en Bolivia*, La Paz, 1962. En 1964, el MNR afirmaba que una planta de fundiciones no constituía una prioridad absoluta (MNR: *Programa de Gobierno 1964-1968*, La Paz, 1964, p. 11).

La seguridad con que actuó Paz en ese momento se evidenció más que nunca en la rapidez y eficiencia con que destituyó a Lechín. En realidad, Lechín apenas objetó al presidente, pues implícitamente aceptó las limitaciones de la vicepresidencia, tradicionalmente carente de poder; apoyó el Plan Triangular, se mostró menospreciativo de la revolución cubana y llegó al extremo de visitar a Chiang Kai-Chek en Taiwán para mejorar su imagen y congraciarse con Washington. Empero, a mediados de 1961, el líder de la COB fue deliberadamente "puesto en evidencia" cuando el ministro del Interior, José Antonio Arze Murillo, lo implicó en un escándalo de cocaína a través de un conocido en Cochabamba. Retrospectivamente, resulta inevitable concluir que Lechín, a pesar de su inocencia, fue negligente en algunas de sus relaciones. Renunció y retiró su dimisión varias veces, pero esta inevitabilidad hizo fácil que Paz lo exiliz con una embajada en Roma. Puede ser que Paz se acordara de que el padre de Siles Zuazo se quitó de en medio a un vicepresidente que le resultaba molesto enviándolo al exterior e impidiendo posteriormente su regreso, también por un escándalo de drogas, o bien –como el propio Paz afirmó– después es posible que ya en esta etapa el jefe de la CIA en Bolivia, teniente coronel Edward Fox, ejerciera tal control sobre el ministro del Interior, que actuó sin pasar por el Palacio Quemado.[35]

Un factor decisivo para la creciente beligerancia del gobierno de Paz fue la ampliación de la ayuda norteamericana que, como lo dijera un escritor, creció "estratosféricamente", en más del seiscientos por ciento entre 1960 y 1964. Esto contribuyó además a una mejora a corto plazo de la economía, limitando la inflación a cifras únicas (e incluso a un porcentaje negativo en 1963); el crecimiento promedio anual entre 1960 y 1964 alcanzó al 5,7 por ciento (comparado con 1,5 por ciento entre 1956-61). En el sector de la minería, la ayuda del plan apenas logró disminuir el ritmo del incremento de costos de la COMIBOL, pero la situación habría sido considerablemente peor si la guerra de

35 La campaña emprendida por el presidente Hernando Siles contra Abdón Saavedra en 1926 fue una suerte de "causa célebre" en la vida política nacional. Saavedra se había ganado el rechazo de mucha gente por su ostentoso enriquecimiento personal bajo el régimen anterior. La ciudad de La Paz estaba cubierta de carteles con una sola palabra: "opio", un uno que los estudiantes hicieron un encierro simbólico del vicepresidente. Rara vez, en alguna parte del mundo, un vicepresidente ha tenido tanto poder; pero también rara vez desacreditó tanto un gobierno para que el periódico oficial se refiera a él en los términos que le hizo La Razón a fines de noviembre de 1926, diciendo que el vicepresidente Saavedra había caminado alrededor de la plaza el día anterior y que antes de que acabara de dar una vuelta completa ya faltaban tres bancos y una parte del monumento nacional.

Vietnam no hubiera elevado repentinamente el precio del estaño de 1,17 dólares a 1,70 dólares la libra.

El gabinete de Paz se sintió capaz de seguir impulsando el Plan Triangular a mediados de 1961, a pesar de que otros indicadores importantes, tales como la producción de petróleo y la desocupación estaban lejos de reasegurarse. Ahora se escuchaban pocos ecos de 1952 en el lenguaje de quienes administraban la rehabilitación de COMIBOL. Aguilar declaró peligrosamente: "No soy un ministro obrero", y en 1960 colaboró con Bedregal –la cabeza de COMIBOL– en la elaboración de la Tesis de Telamayu a fin de contrartestar los programas sindicalistas de la COB. Esta carta constitucional de jefes para trabajadores estaba retocada con fragmentos retóricos marxistoides, pero se mantenía firmemente asentada en sus postulados iniciales: "...con la Revolución Nacional desaparece la antigua relación obrero-patrón.... La Tesis de Telamayu postula que las reivindicaciones eventuales deben subordinarse y depender del desarrollo de la Revolución Nacional".

Consecuentemente, estaba muy cerca de detallar la parodia del "anarcosindicalismo", extendiéndose desde "su abuso de la coadministración" al "empleo subversivo de la huelga general", el rechazo a los lazos con el "partido que dirige la Revolución", "falso internacionalismo", supresión de una democracia representativa en el cogobierno y la dictadura de los controles obreros.[37] Bedregal prosiguió criticando severamente a la FSTMB por la pérdida de doce millones de dólares en "huelgas ilegales" e insistió en la reducción de la fuerza laboral de la COMIBOL en otros cinco mil trabajadores, añadidos a los 7.700 empleados despedidos entre 1956 y 1960.[38]

A fin de adelantarse a la previsible respuesta de la izquierda, Paz encarceló a dieciocho de sus líderes nacionales incluyendo al primer secretario del PCB, Jorge Kolle Cueto, a Guillermo Lora, a Irinco Pimentel, a Federico Escóbar y a Filemón Escóbar, en tanto se introducía el plan. Como resultado de ello, el PCB y el POR enterraron momentáneamente sus diferencias y acordaron luchar con otra huelga defensiva con sede en Siglo XX, liderizada por el curiosamente no encarcelado César Lora. Después de dieciocho días de huelga, se obtuvo la liberación de los izquierdistas presos y la COMIBOL perdió otros 1,5 millones de dólares; empero, no se logró detener el plan. El respaldo al paro fue una muestra de la popularidad de dos hombres que llegaron a personificar

37 *Tesis de Telamayu, carta del sindicalismo revolucionario*, La Paz, 1960.

38 Bedregal: *Recuperación...*, pp. 19-20; Amado Canelas: *Historia de una frustración*, La Paz, 1963, pp. 117-178.

tradiciones radicales del campamento minero más grande de Bolivia: Federico Escóbar y César Lora. Estos líderes, el primero en el control obrero y el segundo un simple delegado de base, eran muy diferentes en carácter y en conducta política, pero compartían un prestigio de honestidad y de principios que los capacitaron para arrastrar a muchos obreros apolíticos a prolongadas confrontaciones con la COMIBOL y con el gobierno, tanto sobre temas políticos como sobre temas estrictamente sindicales.

Escóbar era el mayor de los dos; agradaba por sus modales amigables y naturales con sus compañeros trabajadores, al igual que por su absoluta hostilidad para con la administración de COMIBOL. Escóbar había sido una de las víctimas de la "masacre blanca" de 1947 y despedido de una diversidad de empleos durante el sexenio; esta experiencia lo llevó a unirse al PCB. No era ningún intelectual y, en el desarrollo de su trabajo sindical, era susceptible de toda forma de "desviación" política. Se lo veía siempre portando algún tratado marxista clásico y traslucía el entusiasmo propio del autodidacta; era ferviente en su apego a la causa fundamentalmente revolucionaria y puso a sus hijos nombres como Krúpskaya y Fidel. No obstante, no fue tanto por esto como por su implacable sindicalismo que Escóbar se convirtió en una especie de leyenda en las minas. Un estudiante* que fue a trabajar a Siglo XX en 1970, recuerda:

> {Los mineros} lo recuerdan en todos sus actos de prepotencia hacia los jefes, sea éste del grado que sea. Se decía que una vez llegó a la gerencia y estaban los gringos en reunión. Les dijo: "Ustedes están tranquilos fumando cigarrillos importados mientras que el obrero subsiste con coca y alcohol. Ustedes están fumando lo que nosotros ganamos. Salgan de aquí, carajos". Todos salieron, menos el gerente que habló sobre problemas gremialistas con Escóbar y los obreros. Escóbar los hizo sentar donde estaban los gringos y repartió cigarros de las cajetillas dejadas por éstos. Cualquier obrero, si no era avisado en la pulpería, iba a quejarse donde él. Escóbar iba a granputearlo. Le decía al empleado que si no quiere aviar a ese obrero se vaya a su casa. Todos le temían. Estaba llegando a un lugar y los empleados empezaban a temblar.[39]

El prestigio de Escóbar y la capacidad organizativa de Irineo Pimentel como secretario general del sindicato preservaron el control del PCB sobre Siglo XX por muchos años. Aunque en 1964, Pimentel desconoció su pasado radical y

* El estudiante al que se refiere Whitehead es René Poppe y la cita ha sido tomada directamente de su libro: Interior mina, testimonio, La Paz, 1986. (N. de la T.)

39 Citado en Whitehead: *The Moneyminers...*, pp. 123-24. René Poppe: *Interior mina, testimonio*, La Paz, 1986, p. 43.

Escóbar[40] se unió al maoísta Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), el control del PCB se mantuvo con una nueva generación de líderes como Simón Reyes y Oscar Salas (Huanuni), menos profusos en su estilo, pero más disciplinados políticamente. Así, cuando Escóbar murió en 1966, supuestamente de una enfermedad al hígado, fue llorado por la fuerza laboral y no por el partido.

César Lora era más introvertido y sofisticado intelectualmente que Escóbar y nunca consiguió el mismo nivel de popularidad, ni siquiera un cargo sindical formal. El hecho de que Lora evitara un comportamiento manifiestamente dogmático al mismo tiempo que mantenía una línea partidaria firme realzó su prestigio construido sobre la base de una persecución casi constante; muchos mineros lo identificaban como un hombre cuya política era a menudo ajena a ellos, pero en quien podían confiar por su honestidad y absoluta conciencia de clase. También era extraordinariamente oportuno en la conformación de alianzas tácticas con el PCB para luego oponérsele agudamente; encabezó una campaña particularmente venenosa a fines de 1962 en torno a lo que se dice fue un mal manejo de los fondos sindicales por Pimentel. Con Lora como su líder, el POR recobró gran parte del terreno perdido en la década de 1950, cuando sus políticas maximalistas parecieron totalmente utópicas. No fue coincidencia que ante la situación impuesta por el Plan Triangular, los trotskistas recuperaran parte de la autoridad que ostentaron a fines de la década de 1940.

El conflicto que desató el Plan llegó a su punto culminante a mediados de 1963, cuando Bedregal, habiendo logrado destituir a sólo dos mil trabajadores durante los años anteriores, aplicó un *lock out* en Siglo XX para llevar a la práctica su planeada "rehabilitación". El 15 de junio, este campamento ingresó en una huelga que muy pronto se extendió al resto de las minas. Llamado por Paz, Lechín regresó de Roma e intentó aplacar la situación, pero se trataba de un impasse sobre el que no cabía negociación alguna; el 3 de agosto se puso en efecto un acuerdo con Washington por el que Bolivia recibiría ayuda a cambio de comprar casi todos los productos de importación de EE.UU. Consecuentemente, una serie de productos escasearon en el mercado o se los podía adquirir únicamente a precios muy elevados. La FSTMB declaró formalmente una huelga minera nacional, en Siglo XX se tomaron como rehenes a los técnicos extranjeros y a algunos miembros del personal de la embajada americana y los principales centros mineros fueron declarados zonas militares. La total ocupación militar de Siglo XX y Huanuni se impidió solamente con charlas de último momento entre dirigentes sindicales y el extraordinariamente flexible

40 La autobiografía de Escóbar: *Mi vida*, está reeditada en *Venceremos*, La Paz, agosto de 1967.

comandante de la guarnición de Oruro, coronel Juan José Torres; pero las escaramuzas entre milicias se produjeron a lo largo de todo el mes de septiembre. Cuando finalmente el 1° de octubre se levantó la huelga, Pimentel y Escóbar fueron nuevamente a la prisión (donde permanecieron un año), y Lora fue despedido de su trabajo junto con muchos otros radicales.

La huelga de 1963, una de las más prolongadas de la historia de los mineros, separó a la FSTMB y a la COB del MNR para siempre y precipitó la escisión del propio MNR. La resolución política del XII Congreso Minero de diciembre asemejaba el gobierno de Paz con aquellos de la Rosca y declaraba al presidente "traidor a los objetivos de la revolución". Dos semanas más tarde, en la Convención del MNR se le negó toda voz a la izquierda en la nominación de los candidatos para las elecciones de 1964. Lechín retiró sus delegados y anunció la formación de un nuevo partido: el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN) que no emitió programa alguno, pero obtuvo el apoyo de casi todos los movimientistas de la COB y emprendió la discusión de un pacto estratégico, no sólo con el PCB sino también con todas las fuerzas opositoras a Paz, incluyendo a Siles y a la FSB. El MNR había perdido sus lazos con la clase obrera organizada y, con ellos, sus últimas credenciales radicales. El sector socialista comenzó a vacilar y la dependencia de EE UU y del ejército se profundizó.

El Plan Triangular fue la actividad norteamericana más importante de aquel tiempo, pero evidentemente no la única en Bolivia. Aún antes del plan de estabilización, Washington había dejado su huella en la industria petrolera del país, asesorando y ejerciendo una fuerte influencia en el código del petróleo de 1955, que no por nada se difundió como el Código Davenport. Más tarde, Paz defendió los generosos términos de este código para la empresa privada, arguyendo que las pérdidas que sufría esta última en la explotación del petróleo no habían podido ser afrontadas por YPFB, cuya expansión fue estrechamente limitada después de 1956. El debate político sobre la industria petrolera fue acalorado pero bastante abstracto hasta 1961, cuando a YPFB se le estaban agotando los pozos existentes así como su capacidad de explotación, en tanto que la Gulf Oil hizo un importante descubrimiento en su sector y al cabo de un año ya estaba bombeando petróleo. Esto redujo la capacidad de estructurar una defensa nacionalista –a la que Paz se opuso consistentemente– y fortaleció la posición de la Gulf Oil de considerable manera, preparando el terreno para la expansión aún mayor que se realizaría luego de la caída del MNR.

En otros sectores, los intereses norteamericanos fueron abordados más directamente. Un prolongado intento de reformar el Banco Minero instando a un aumento colosal de las tasas de interés y a la eliminación de su monopolio sobre las transacciones de estaño estaba tan manifiestamente dirigido a lograr mejores condiciones para los bancos privados, a expensas del Estado, que los ejecutivos del banco pudieron efectivizar una defensa real de su institución.[41]

A fines de 1963 y principios de 1964, la embajada americana avanzó directamente al terreno de las relaciones laborales. Emmanuel Bigg, funcionario de la embajada, alentó y, según se dice, financió con la suma de 57 mil dólares una "COB alternativa", la cual nació muerta. Esta organización conocida como COBUR fue repudiada incluso por el ministro de Trabajo, Aguilar, pese a que Paz le había dado su bendición. La operación se emprendió con los auspicios del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (AIFLD) y de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), ampliamente conocida como un aparato sindical amarillo y estrechamente ligado a la CIA.

Otro de los destacados funcionarios de la embajada americana involucrado en este caso fue el agregado laboral Tom Martin, a quien el embajador Ben Stephansky dio carta blanca para actuar. Martin concentró gran parte de sus esfuerzos en cultivar una cercana relación con el nuevo ministro de Asuntos Campesinos, el letrado Carlos Ponce Sanjinés. Su estilo, sin embargo, dejó algo que desear en cuanto a sofisticación: en una cena oficial en Potosí, Martin se dirigió a las personalidades locales en estos términos: "...yo tengo el dinero de los EE UU y las ideas las tiene Ponce... si ustedes apoyan a Ponce tendrán el dinero...". Esto pudo haber originado un escándalo mucho mayor, de no haber sido apocado por las acusaciones que se le hicieron al ayudante de Martin de haber ofrecido cincuenta dólares a uno de los funcionarios de Ponce por favores sexuales como sobremesa.[42]

41 Ver detalles en Almaraz: *Réquiem...*, pp. 54 y ss.

42 Estos incidentes son citados por el polémico pero siempre escrupuloso Almaraz, *op.cit.*, p. 33. Si bien el personal nominado por la embajada americana en la década de 1950 fue generalmente de un carácter severo y metódico, el puesto de La Paz arrojó en el pasado su cuota de indiscreción. En febrero de 1922, el embajador británico observaba respecto a la esposa de su colega norteamericano que "la señora Cottrell es joven y bonita, pero inexperta y muy dividida entre su deseo de actuar correctamente y aquel de divertirse". Seis años después, la señora Cottrell obviamente había optado: "El Sr. y la Sra. Cottrell partieron definitivamente a principios de 1928 y pocos fueron a la estación a despedirlos. El Sr. Cottrell no regresaría, pero la Sra. Cottrell pronto habría de ser vista en La Paz como esposa de otra persona con quien su nombre había estado escandalosamente ligado durante los descuidos de su esposo oficial por sus excesos de embriaguez. El Sr. David Kaufmann arribó en mayo para tomar el lugar del Sr. Cottrell. El Sr. Kaufmann es un israelita con fama de millonario, ciertamente gasta su dinero muy generosamente y a menudo su casa está abierta... Los bolivianos comienzan a burlarse de él... (y) se le ha señalado en tono amistoso que si espera recoger algún agradecimiento de esta gente está arando en el mar". (O'Reilly, N° 21, 2 de febrero de 1922. FO 371/7182; Mitchell, N° 6, 3 de diciembre de 1928, FO 371/13456).

En general, las actuaciones políticas transcurrieron más afablemente. El reconocidamente incauto embajador cubano fue declarado persona non grata luego de una clarísima manipulación de sus contactos con el cacique de Achacachi, Toribio Salas, quien desde entonces fue tachado de propagar la "subversión castroide". Empero, resultó difícil persuadir a Paz de que adopte una poco ambigua línea anticubana, ya que originalmente el MNR había aclamado a la revolución cubana identificándola con la suya propia e incluso dignándose a ofrecer consejo a sus líderes. Aun después de que Castro dirigiera su primer discurso "marxista", Paz se mostró reacio a cortar todo vínculo, temiendo las obvias consecuencias para su imagen. Así, no fue sino hasta mediados de 1964, luego de que Lyndon Johnson suspendió un acuerdo económico por esta razón, que las relaciones diplomáticas se agravaron totalmente.

Fue el ingreso de Lyndon Johnson a la Casa Blanca lo que originó un evidente cambio en las relaciones, no tanto en términos de política abierta sino en virtud de que el Pentágono comenzó a ejercer mayor influencia en los asuntos extranjeros. Paz había mantenido muy buenas relaciones con Stephansky y las mantuvo con Douglas Henderson, nominado en diciembre de 1963. Pero el propio Henderson pronto hizo llegar sus quejas por las presiones del coronel Fox, especialmente sobre el tema de Cuba.[43] Habiendo visitado a Kennedy apenas unas semanas antes de que fuera asesinado, Paz decidió presentarse nuevamente como candidato a las elecciones de 1964; porque, a pesar de los evidentes riesgos, no veía otra alternativa viable. El Departamento de Estado parece haberlo apoyado en esto y Henderson sin duda hizo todo por impulsarlo. Por supuesto, Fox y sus esbirros tenían otras ideas, ya que desde 1964 cooperaban directamente con el periódico ultraconservador El Diario que lanzó una fuerte campaña contra Paz.

El hombre clave de esta operación en concreto fue el coronel Julio Sanjinés Goitia, graduado de West Point, quien era miembro del consejo de redacción del periódico y sin embargo siguió sirviendo en el ejército como ingeniero militar y como empleado de la embajada americana, donde trabajaba en programas de la Alianza para el Progreso. La posición de Sanjinés como el más antiguo ingeniero del ejército lo colocaba en un lugar especialmente influyente dentro de "Acción Cívica" programa financiado por EE UU para la construcción de carreteras, escuelas y para la edificación de torres de agua; dicho

43 Almaraz, *op. cit.*, p. 20. El liberal cientista político norteamericano Cole Blasier también ha identificado el predominio del personal de inteligencia militar en la embajada de La Paz (Malloy y Thorn, *op. cit.*, p. 98).

programa contribuyó mucho a mejorar la imagen del Ejército y brindó a los oficiales la posibilidad de entablar relaciones con varios líderes civiles, independientemente del MNR. Con todo, a través de su prestigio como intelectual y como el "muchacho que actúa tras bastidores" (más tarde llegó a ocupar la presidencia de la Corporación Andina de Fomento), Sanjinés fue esencialmente un agente negociador del apoyo del Pentágono a los militares. Dentro del país intentó pasar desapercibido y su influencia en las fuerzas armadas estuvo subordinada a la del general Alfredo Ovando Candia, comandante del Ejército, y a la del general René Barrientos Ortuño, jefe de la Fuerza Aérea.

Estos dos hombres tenían temperamentos completamente distintos. Ya antiguo capitán en 1952, Ovando era un estricto militar muy reservado y acosado por una úlcera de estómago. Un institucionalista ante todo, había adquirido mucha experiencia en el mantenimiento de la unidad dentro del cuerpo de oficiales y sus compañeros lo respetaban por la forma en que conservaba relaciones afables con el MNR, al mismo tiempo que lo tenía a raya y procuraba una reconstitución gradual de la fuerza. Su nombramiento como jefe de estado mayor en 1957 coincidió con una mejora de los caudales militares, fruto de las presiones ejercidas por Eder. Una de las condiciones de la estabilización había sido que el MNR adoptara una política claramente más favorable a las fuerzas armadas y que permitiera a EE UU "profesionalizarla". Siles había adoptado esta política con renuencia e inicialmente no hizo mucho, pero al poco tiempo la institución comenzó a recibir más fondos, más hombres y renovado equipo. Su cuota en el presupuesto aumentó de 6,8 por ciento en 1958 a 16,8 por ciento en 1964. En el mismo periodo, incrementó sus efectivos militares de cinco mil a quince mil; hacia 1964 recibió más de 1,5 millones de dólares en ayuda norteamericana y alrededor de 1.200 oficiales y hombres habían sido entrenados en la Escuela de las Américas de la zona del Canal de Panamá.[44] Las fuerzas armadas aún carecían de tanques, sus aviones eran antiguos (no se compró un escuadrón de Mustangs de segunda mano sino en 1965) y la mayoría de sus unidades ocupaban más de la mitad de su tiempo en agricultura. No obstante, recuperaron su espíritu corporativo y una estabilidad organizativa, además llegaron a poseer los suficientes recursos para contener a las milicias. Ovando reconocía que Paz, en particular, había hecho mucho por

44 Willard F. Barber y C. Neale Rolling: *Internal Security and Civic Action in Latin America*, Columbus, Ohio 1966. W. H. Brill. *Military Civic Action in Bolivia*, (tesis doctoral inédita), University of Pennsylvania, 1965; Charles D. Corbett: *The Latin American Military as a Sociopolitical Force; a Case Study of Bolivia and Argentina*, Miami, 1972.

contribuir a este proceso y él, igual que muchos de sus subalternos formados en el Colegio Militar post 1952, simpatizaba ampliamente con las ideas nacionalistas del MNR. Por lo tanto, Ovando consideraba que la creciente participación del ejército en el mantenimiento del orden público y la ocupación temporal de puestos en la administración pública eran temas fundamentalmente institucionales, teniendo cuidado de evitar vínculos políticos innecesarios pero buscando siempre ventajas fragmentarias. El Pentágono necesitaba de Ovando para mantener en orden a los militares, pero no podía pensar en promoverlo como alternativa a Paz, aunque lo hiciera muy sutilmente.

Barrientos, por su parte, era un popular oficial bastante bien conocido y ambicioso políticamente. Nació en el valle de Cochabamba en 1919, de antecedentes humildes, era locuaz, hablaba quechua y era una figura carismática. Estuvo ligado al MNR durante el sexenio; luchó con el partido en la guerra civil de 1949 y fue dirigente de su célula militar después de 1952. También había visitado EE UU en varias ocasiones y conocía a Fox de un curso para oficiales superiores de la Fuerza Aérea en Oklahoma. Sin embargo, si el proceso de cultivar buenas amistades militares hubiera evolucionado en la preparación de un golpe antes de mediados de 1964, tanto la CIA como el Pentágono se habrían sentido algo inseguros respecto a un candidato cuyo machismo, a menudo, rayaba en una clara temeridad. Como piloto, Barrientos se "salvó por un pelo" de morir varias veces y el número de accidentes que tuvo fue inusual incluso para el promedio aeronáutico boliviano. El hecho de que una buena parte de estos accidentes fueron atribuidos a "falta de carburante" podría haber originado todavía más dudas. (Los pilotos bolivianos están considerados entre los mejores de América Latina y la aerolínea nacional Lloyd Aéreo Boliviano es la más antigua del continente, pero las condiciones físicas en las que opera y las instalaciones de aeropuertos están entre las más pobres del mundo). Había decididamente un aspecto de doble filo en torno a los atributos de un hombre que, al saber que tres conscriptos habían muerto debido a que sus paracaídas no se abrieron durante los ejercicios, se lanzó en persona con el mismo equipo. El apetito sexual de Barrientos tampoco contribuyó mucho a dañar su reputación en general; pero cuando le guiñó hacia las esposas de sus colegas y suponía bigamia, comenzó a causar inquietud en la desconsolada pero silenciosa Iglesia e incluso entre las filas de un cuerpo de oficiales raramente acusado ya sea de fidelidad o sobriedad. Se ha dicho de Barrientos que, como Marshal Ky en Vietnam, concebía el país como un gran aeródromo; pero con esto se ignora su poderoso atractivo popular, que fue muchísimo más importante que su capacidad administrativa o militar.

El campo era el lugar donde los militares, y Barrientos en particular, hicieron el mayor avance acumulando apoyo popular. Paz había reconocido desde el comienzo de su segundo mandato que necesitaba un sólido respaldo campesino para contrarrestar la amenaza de las minas. Por ello, revivió la reforma agraria y firmó más de 200.413 títulos entre 1960 y 1964, frente a sólo 47.746 emitidos entre 1955 y 1960; el área distribuida esta vez fue seis veces mayor. Pero apoyándose en su acostumbrado sistema de oponer a los líderes regionales –Rojas contra Veizaga en Cochabamba, el ascendente Felipe Flores contra Toribio Salas en el altiplano y Rubén Julio contra Sandoval Morón en Santa Cruz–, Paz no pudo reducir el conflicto en el campo y aún carecía de seguidores mayoritarios. El valle de Cochabamba siguió inundado de violencia, al extremo de que se mantuvo como zona militar prácticamente durante todo el año 1963.

Esto permitió a Barrientos, orgulloso de ser cochabambino, tomar parte en las negociaciones de tregua y en la generosa distribución de favores. En septiembre de 1963, la fuerza aérea había adjudicado de tal manera ese papel, que Barrientos podía llevar en avión a los caciques en conflicto, hasta su casa de La Paz, donde acordaban enterrar sus diferencias, brindaban con champagne y le prometían apoyo para su candidatura vicepresidencial con Paz en las elecciones de 1964.[45] Posteriormente, la Federación Campesina de Cochabamba lo nominó como candidato presidencial para el período 1968-72, sin hacer ninguna referencia al MNR.

Los esfuerzos de Barrientos para obtener el nombramiento de candidato vicepresidencial parecen haber obedecido a motivaciones sumamente personales, ya que las fuerzas armadas desempeñaron un mínimo papel en impulsar su demanda y varios oficiales superiores estaban evidentemente insatisfechos por las secuelas que esto traería para la institución en su conjunto. Por otra parte, hubo escasa oposición directa dentro del cuerpo de oficiales, pues el predominio del general sí ofrecía promesas de mayor influencia y un incremento presupuestario. En la Convención partidaria de enero de 1964 hubo muchísima más oposición dentro del propio MNR; el tema generó tal clima, que se tuvo que llamar a la policía para controlar los altercados entre quienes apoyaban a los distintos candidatos, que se valían de intrigas para obtener un puesto que había cobrado una importancia inusual, puesto que la presidencia misma ya estaba decidida. Lo que ocurrió fue que Paz respaldó a un fiel miembro del aparato, Federico Fortún, quien logró reunir los votos necesarios a

45 *El Diario*, (La Paz), 27 de septiembre de 1963.

través de sus acostumbradas maniobras burocráticas y de tácticas violentas. Barrientos declaró a la prensa que la nominación fue un "error" y se retiró al bar España, donde se empapó de alcohol, estalló en lágrimas y trituró un vaso de champagne entre sus dedos.

Sin embargo, a principios de 1964, las normas del juego político eran ya tan inestables, que no había ninguna garantía de que la fórmula Paz-Fortún se mantuviera intacta durante los meses que faltaban para las elecciones. Ocurrió que la derrota de Barrientos se volcó en un incidente característico del estilo de ese hombre. Temprano, en la mañana del 25 de febrero, en medio del conflicto originado por la Convención y bajo la amenaza de perder su comando, Barrientos fue herido por una bala en el pecho cuando abandonaba la casa de su hermana en la ciudadela de Miraflores de La Paz. Rápidamente se difundió la noticia: de no haber sido porque el proyectil chocó contra las "alas plateadas" de la insignia de la Fuerza Aérea Americana que Barrientos portaba en su uniforme por vanidad y contra el reglamento, habría muerto. La verdad de los hechos no se sabrá nunca, pues el general fue transportado con increíble velocidad en un avión de la Fuerza Aérea Americana a un hospital militar en la zona del Canal de Panamá, donde fue sometido a una "prolongada operación". Inmediatamente se convirtió en un héroe y la aventura de la "bala de plata" generó tal simpatía que en el curso de cuatro días Paz, que con toda su sofisticación aún era capaz de leer las normas del procedimiento político con la suficiente astucia, se deshizo de Fortún sin ceremonias y telegrafió a Barrientos comunicándole su designación como su nuevo compañero de fórmula en las elecciones. Tres semanas más tarde, éste, desde el balcón de Palacio Quemado declaraba: "...no dejaré que el ejército sea un instrumento de las maquinaciones políticas ...mi misión es acompañar y ayudar a Víctor Paz Estenssoro para que no se cometan errores...".[46] La ambigüedad de tales palabras reflejaba las nada fáciles relaciones que desde un principio existieron entre ambos hombres y que empeoraban con la sospecha que recaía sobre el general San Román, jefe del Control Político a quien Barrientos desagradaba profundamente, de haber dirigido los diferentes ataques que se lanzaron contra Barrientos y Lechín en ese período.

Tan develado viraje al gansterismo fue apuntalado por la consolidación de una sólida coalición contra Paz, con la que Barrientos mantuvo estrechos y no muy privados contactos a pesar de estar candidateando en unas elecciones que el Bloque de Defensa del MNR declaró ilegales y procedió a boicotear. La alianza se extendió bastante más allá de las facciones disidentes del MNR, aunque sus caudillos fueron Lechín, cuyo PRIN no se consideraba totalmente escindido del antiguo partido, y Siles, quien en mayo había declarado que Paz debía ser inmediatamente reemplazado y que un congreso extraordinario debía nombrar una administración militar interina para presidir nuevos comicios. Fuerzas tan diferentes como la Falange y el POR (González) se unieron para construir una oposición a la reelección; la Falange montó una guerrilla más bien mansa pero imperturbada en Santa Cruz y los representantes de siete partidos se plegaron al recuperado Siles en su truco favorito de la huelga de hambre. Cuando esta táctica hubo fracasado y la nómina oficial ganó las elecciones, el tenor y la escala de los ataques cambiaron. En agosto, Siles, admitiendo que la unidad del MNR no era más un objetivo válido se dedicó abiertamente a engatusar a Barrientos para que se declare en rebelión, afirmando que el gobierno de Paz era contrarrevolucionario y debía ser derrocado. Para su pesar, fue exiliado junto con otros cuarenta opositores.

La apuesta de Paz a la reelección falló, ésta no unificó al MNR sino a la derecha y a la izquierda en la oposición a los destartalados residuos de un partido que ya no poseía popularidad alguna, más allá de la generada a través del paternalismo estatal. El hecho de que tanto Lechín como Siles parecían percibir la única solución al problema en Barrientos no era tan extraordinario como puede parecer a primera vista, ya que de todos los partidos sólo el POR se opuso claramente a la reconstrucción del ejército y a la creencia de que éste resolvería la crisis sin recurrir a la dictadura, el resto aparentemente tenía su mente en cierta reencarnación de Busch y Villarroel, imagen que Barrientos procuró estimular, pero que apenas sobreviviría un análisis más objetivo.[47] Aun el PCB, que evidentemente no apoyó solución militar de ninguna clase, demuestra haber malinterpretado la situación política en su parcial y excesivamente optimista expectativa de un nuevo frente popular durante las últimas semanas del régimen de Paz.[48] En esa etapa, los militares estaban patentemente listos y habrían temido que ser directamente atacados y marginados si no hubieran

46 Luis Antezana: *Hernán Siles Zuazo, el estratega y la contrarevolución*. La Paz, 1979. p. 147. Para mayor debate del incidente ver W.H. Brill: *Military Intervention in Bolivia: The Overthrow of Paz Estenssoro and the MNR*. Washington, 1967.

47 Ver por ejemplo su determinada resolución respecto a este punto en Colquiri, citado extensivamente en Lora, *op. cit.*, p. 326.

48 Sobre la posición del PCB en la víspera del golpe ver *Unidad Popular y Antiimperialista*, La Paz, octubre de 1964.

derrocado a Paz de la misma manera que los militares brasileños sacaron a Joao Goulart para instaurar una dictadura conservadora en 1964, un ejemplo que debe haber sido fundamental en las deliberaciones de los oficiales bolivianos.

En septiembre, Paz se vio forzado a depender de una constante acción policial para mantener el control. Cerca de cien opositores fueron enviados al exilio, los arrestos políticos se generalizaron y, dado que los ataques de la prensa crecieron, se impuso la censura. Esto agudizó un conflicto ya antiguo con los maestros por sus salarios, que pronto escaló hasta una nociva huelga y provocó el enfrentamiento directo de los estudiantes con el gobierno. En una serie de manifestaciones y peleas callejeras a fines de octubre –primero en Cochabamba y más tarde en Oruro y La Paz–, unas treinta personas resultaron muertas. La mayoría fue alcanzada por las balas de la policía, aunque en Oruro los carabineros ya temían responsables para las muertes: "...con la dinamita proporcionada por elementos de San José y dada la inexperiencia del estudiantado en el manejo de este peligroso explosivo se está ocasionando graves heridos y hasta algunas muertes...".[48] La mayor parte de los preparativos de estas manifestaciones estuvieron a cargo del joven líder falangista Guido Strauss; pero la izquierda también estuvo en primer plano y muchos de los militantes que confrontaron a la policía y al Control Político en las calles le pertenecían. Esta alianza contingente y no buscada se evidenció en un plano más amplio; mientras la guerrilla de la Falange hacía extensas y ampulosas declaraciones desde las zonas rurales circundantes a Santa Cruz, camiones repletos de mineros del campamento de Siglo XX dirigidos por el POR trabaron feroz batalla con el ejército en Sorasora, fuera de Oruro, para evitar una ocupación militar de los principales campamentos mineros. Bien pudo haber sido este enfrentamiento el que determinó la fijación última de la fecha para el golpe.

Tal estado de absoluto desorden permitió a Barrientos –públicamente en desacuerdo con su presidente a pocas semanas de las elecciones– montar una rebelión dirigida específicamente contra Paz y, en general, a favor del orden y la libertad. Empero, el golpe final que se inició el 2 de noviembre tardó en extenderse, pues muchos comandantes estaban todavía inseguros de la fuerza de las milicias y recurrieron al inescrutable y dilatador Ovando en busca de guía. Después de un día y una noche de "negociaciones", durante las cuales Ovando comunicó a Paz que había sido tomado como rehén en el comando, el jefe del Ejército finalmente llegó a palacio en la madrugada del 4 de

49 *La Patria*, (Oruro), 27 de octubre de 1964.

noviembre para escoltar al presidente hasta El Alto. Paz se fue a Lima convencido de que Ovando le había sido fiel hasta el final, cuando, en realidad, había evaluado el equilibrio de fuerzas para brindar sus cualidades administrativas a la insurrección bastante mal organizada de Barrientos.

Paz no estaba solo en su incomprensión de la naturaleza de la revuelta; poco después de que el presidente abandonó la ciudad, Lechín fue alzado en hombros encabezando una gran multitud de trabajadores en dirección a la plaza Murillo, pero una descarga de los nuevos ocupantes de palacio los hizo retroceder. En la confusión que siguió, el dirigente cobista perdió un zapato. Unos minutos después y, de acuerdo al vespertino promovimientista Jornada, un amable oficial le prestó un par de botas militares. La significación del hecho no fue perdida de vista por el vespertino como tampoco, tiempo después, por un sector más amplio de la población.[50]

50 Antezana, *op.cit.*, p. 166.

Abajo, las primeras damas del período 1952-1964; arriba, la "barra co-legislativa".

4. La larga noche

Aparte de los más fervientes seguidores de Barrientos –y en los círculos políticos establecidos la mayoría estaba lejos de ser ferviente–, pocos bolivianos pondrían en duda la afirmación de que su régimen (de noviembre de 1964 a abril de 1969) era dictatorial. Sin embargo, al igual que todas las dictaduras, ésta tuvo su carácter peculiar. Aunque presidido por militares, éste no fue un movimiento estrictamente militar del tipo instituido por entonces en Brasil ni del que se instauraría pronto en la Argentina (1966, con el general Onganía). Había un profuso anticomunismo, pero apenas muy rudimentarios vestigios de una doctrina "estatal de seguridad nacional". Las fuerzas armadas bolivianas se habían expandido muy rápidamente, pero todavía carecían del vigor profesional de las instituciones militares de sus vecinos. La ideología del grupo era retrógrada y contribuyó a moderar, pero de ninguna manera a erradicar, las ambiciones personales de oficiales de alto rango; tampoco había evolucionado al punto de que las FF AA pudieran generar y poner en práctica un proyecto político propio. La represión fue dispuesta de manera *ad hoc* y desprovista de sofisticaciones. De ahí que Barrientos lograra que el régimen fuera más suyo que de los militares en su conjunto. Empero, no tuvo tanto poder como para marginar a los sectores institucionales agrupados en torno a Ovando, lo cual resultó en una forma caprichosa de colaboración por la que Barrientos y Ovando tomaron el poder el 4 de noviembre. Barrientos presidió el gobierno sólo a partir del 5 de ese mes, cuando el comandante del Ejército fue abucheado en su primera aparición pública en el balcón de palacio. Ovando recobró el control conjunto en mayo de 1965 para fortalecer la ofensiva contra la COB. Por

otra parte, Barrientos se retiró de la presidencia entre enero y agosto de 1966 para disputar una elección y en el ínterin su puesto fue ocupado por Ovando, quien finalmente dejó la silla presidencial para dar paso a Barrientos, que obtuvo una aplastante victoria en las urnas, lo cual le otorgó un estatus "constitucional" hasta su muerte, en abril de 1969.

Esa incierta combinación de caudillismo a la antigua y control institucional era característica de un régimen que tanto en su forma como en su dinámica estaba a caballo entre dos épocas políticas. Ruinoso y venal, se empeñó en ser popular e hizo todo por conservar una apariencia democrática, al estilo de los regímenes de la década de 1940. No obstante, bajo la presión del Pentágono y frente a la constante amenaza que representaba el movimiento obrero, constantemente se acercaba a las formas de autoritarismo totalitario que iba a arraigarse en el subcontinente en la década de 1970. Consecuentemente, restringió las actividades políticas pero no las prohibió totalmente y la vida cotidiana en general no estaba sujeta a los tormentos que se harían tan comunes en el Cono Sur, una década después. Los arrestos arbitrarios, la tortura y los asesinatos fueron bastante manifiestos, pero estaban dirigidos más a líderes de izquierda y sindicales que a la población en su totalidad. Al mismo tiempo, en el ejército creció la inseguridad acerca del rumbo que debería tomar su misión; la necesidad de una posición anticomunista era indiscutible, pero quedaba en duda si ésta debía adoptarse con la franca colaboración de Washington o con una orientación nacionalista más independiente. Por un lado, el Pentágono financiaba y entrenaba a las FF AA y EE UU representaba el pináculo del "mundo libre"; pero su omnipotencia era tan evidente, que cada vez estaba más claro que la cooperación era un mero parasitismo. Por otro lado, muchos oficiales de medio rango se habían educado bajo el MNR y estaban imbuidos de un nacionalismo fundamentalista que fue fácilmente incorporado a la ideología institucional y ofrecía una línea viable de desarrollo político independiente, pero esto implicaba una ruptura con Washington y requería una autoconciencia colectiva y una unidad orgánica que aún faltaban en 1964. Barrientos pudo entonces adoptar una estrategia decididamente pronorteamericana y únicamente después de su muerte las tensiones que esto acarreó salieron a la luz. Durante más de cuatro años, las FF AA se adhirieron a la política paresten-sorista de "abrir" la economía y la expandieron reemplazando el ya agotado sistema de cooptación y negociación por la coerción directa. En el fondo, este régimen se diferenciaba de los últimos del MNR en que sustituyó al Departamento de Estado por el Pentágono en el papel de fiscalizador del país.

Orden restaurado

No se acometió de inmediato una ofensiva contra la COB. Entre noviembre de 1964 y mediados de mayo de 1965 prevaleció una especie de tregua armada: los militares listos para entrar en acción todavía estaban inseguros de los resultados. No hay que olvidar que las conquistas sobre las que se apoyaba la COB ya tenían doce años y constituyeron parte integral del consenso político durante gran parte de este tiempo. El Control Político fue abolido inmediatamente, pero no se tocó a las milicias obreras y Barrientos desde un comienzo fue inflexible en cuanto a que las FF AA habían implementado una "revolución en libertad" destinada a garantizar y dinamizar el legado del 52. Durante los primeros meses, el equilibrio de fuerzas fue mayor de lo que podría parecer retrospectivamente; no fue por mero artificio que Siles fue festejado como uno de los autores de la rebelión, que no se perturbó a una buena parte de la izquierda e incluso se llegó al punto de que Barrientos prometiera restituir el control obrero. En efecto, inmediatamente después del golpe, el PCB y el PRIN se unieron a la COB y a partidos de derecha para formar un Comité Revolucionario del Pueblo, el mismo que inicialmente proporcionó un apoyo inequívoco al levantamiento. A nombre del Comité, Lydia Gueiler lo describía diciendo: "...la esencia de esta insurrección es popular, democrática y revolucionaria, que lucha contra el hambre, contra la negación de la libertad y la justicia, por una democracia social, política y económica".[1]

Sin embargo, no tardó en comprobarse que la adopción de una postura por parte de los partidos que tenían la mayor influencia en la clase obrera fue un error de proporciones históricas. El manifiesto del Comité que esbozaba un retorno a la primera época de la revolución fue aprobado de muy buena gana por la junta; empero a los pocos días de asumir el mando de la nación, Barrientos demandó de los mineros "...una deposición de las armas espiritual y material". El líder recibió una contundente respuesta de la FSTMB: "...que vayan a las minas a pedirles sus armas a los mineros, veremos si los van a devolver. Cuando un minero agarra un arma no la suelta por nada de este mundo..."[2] Barrientos reaccionó recortando los campamentos mineros sin sus guardaespaldas en una típica actitud de alarde. Aceptó gustosamente las peticiones que le fueron presentadas y expresó su deseo de "...destituir la incomprensión entre nosotros.

1 *El Diario*, (La Paz), 8 de noviembre de 1964.
2 *La Patria*, (Oruro), 13 de noviembre de 1964.

Vengan al palacio a discutir todos los problemas... no vamos a encarcelar a nadie...".[3] Algunos dirigentes, como el recientemente liberado Pimentel, elogiaron al nuevo presidente, pero las bases se mostraron profundamente suspicaces y la aplastante mayoría de los dirigentes evitaron cualquier compromiso y solicitaron una demostración de buena fe.

Nunca hubo tal; por el contrario, en los primeros meses de 1965, las amonestaciones oficiales contra "extremistas" y contra la "irresponsabilidad anarco-sindicalista" puso en evidencia la orientación del régimen. En abril, Lechín era ya un blanco nítido: el ministro del Interior declaró que el líder sindical en realidad era chileno; ésta fue considerada una mentira muy eficaz por un gobierno que, como muchos otros regímenes militares, reducía su "nacionalismo" a filípicas en contra del Estado vecino y a estridentes demandas a favor de una salida al mar. La COB no respondió; en realidad, la izquierda fue totalmente rebasada durante ese periodo de transición.

A mediados de mayo, el peligro de caer en una dictadura era tan evidente que, ante la inactividad de la COB, mineros, fabriles, trabajadores de la construcción y maestros se unieron a los gastronómicos –cuya influencia no debe subestimarse en un país donde el comer está sumamente socializado– para formar un pacto de defensa de los derechos sindicales básicos.[4] Los estudiantes seguían apoyando a la junta, pero esto no duró mucho. El 15 de mayo, tres días después de la firma del pacto, Lechín fue arrestado luego de un allanamiento a su domicilio a medianoche y puesto en un avión con destino al Paraguay. Se convocó a una huelga general, pero en las ciudades la falta de preparación fue sintomática y el paro no prosperó. Fue en las minas donde la resistencia cobró firmeza y donde el ejército concentró sus fuerzas. Todos los campamentos fueron declarados zonas militares el 16 de mayo y con buenas razones, ya que recién el 23 se logró aplastar completamente a las milicias y las tropas tomaron el control. La lucha fue feroz incluso en Viloco y Colquiri, campamentos donde normalmente no había un elevado nivel de militantes. Estaba claro que todos los beneficios de la nacionalización estaban siendo objeto de agresión; las bajas fueron numerosas en ambos lados.

3 *Ibid.*, 22 de noviembre de 1964.

4 El papel de los trabajadores gastronómicos a veces puede ser clave, pues la principal comida en Bolivia es el almuerzo, que toma dos horas y con frecuencia se realiza en la ciudad, donde hay muchos locales populares. Se han hecho varios intentos, frecuentemente motivados por huelgas de transporte, de instituir el horario continuo de ocho horas, pero nunca han tenido éxito.

El alto mando emitió una declaración que habría de ser el modelo de los futuros enunciados militares en lo que se refiere a su política en las minas: "...los trabajadores de las minas son una cosa; los dirigentes otra muy distinta. A los hombres de base de las minas y los líderes honrados les prestaremos toda ayuda. A los dirigentes extremistas se los expulsará sin remisión, porque destruyen la estabilidad política y social del país... Por sólo esta acción previsora, las FF AA hicieron más que el MNR en doce años y merecerán el reconocimiento de los bolivianos...".[5] El 17 de mayo se anunció la "liquidación" de la FSTMB, de la COB y de la mayoría de sus afiliados y muchos dirigentes sindicales y políticos fueron exiliados en el curso de la siguiente semana. El 23 de mayo, el nuevo presidente de la COMIBOL, coronel Lechín Suárez (hermano de padre de Juan Lechín Oquendo) despidió a todos los dirigentes sindicales y proclamó el fin de una "dictadura extremista" en las minas.[6] Estas medidas fueron ratificadas con el decreto del 23 de septiembre, que prohibía la existencia de toda organización obrera, con excepción de aquellas controladas por el gobierno, al mismo tiempo que vedaba expresamente a cualquiera que hubiera ocupado un cargo político de participar en un puesto sindical. La FSTMB había sido cruelmente desbaratada, pero no completamente aniquilada, pese a que hubieron de pasar cinco años enteros antes de que recobrara sus derechos y la autoridad sobre sus bases. Sus dirigentes fueron enviados al exilio o bien pasaron a la clandestinidad; muchos militantes tuvieron que sobrevivir ilegalmente del jukeo –el robo de mineral con trabajo nocturno–, actividad que era casi una ocupación tradicional para los mineros desempleados.[7] La FSTMB organizó una asamblea de sindicatos clandestinos en septiembre con el apoyo de los estudiantes que, como resultado del "verdadero golpe" del 16 de mayo, estaban virando en gran número a la izquierda por primera vez desde 1946. Sin embargo, frente a un repliegue total del movimiento obrero, éste fue un logro parcial. Toda una generación de mineros estaba experimentando la ocupación y el control militar de las minas por vez primera, lo cual hizo de la reorganización clandestina un lento y doloroso proceso que dependía de cuadros secundarios sin gran experiencia o prestigio.

En septiembre, un corresponsal del moderado periódico católico Presencia visitó Siglo XX, donde en lugar del proletariado militante que regularmente

5 Jefatura de las Fuerzas Armadas: *Morir antes que esclavos vivir*, La Paz, 1965, p. 6.

6 *Presencia*, (La Paz), 24 de mayo de 1965.

7 June Nash: *We Eat the Mines and the Mines Eat Us. Dependency and Exploitation Bolivian Tin Mines*, Nueva York, 1979, p. 281.

elegía a comunistas y trotskistas como sus dirigentes, encontró una "...desmoralización masiva... Pregunté a los obreros por qué no se organizaban sus sindicatos; las respuestas fueron más o menos las mismas: porque todos los que han sido elegidos han sido retirados de la empresa; nos fijamos en el más responsable, en el más serio, en el que habla mejor y lo elegimos aun contra su voluntad para que nos represente, y a los pocos días está fuera de la pega. ¿Para qué vamos a hacer más daño a nuestros propios compañeros?".[8] Este sentimiento de temor había sido infundido por la ejecución de César Lora realizada en julio; este dirigente había permanecido en Siglo XX para reconstruir un sindicato clandestino, pero pronto cayó víctima de una muy bien organizada persecución, fue capturado y muerto cerca de la localidad de San Pedro.

El 18 de septiembre, dos meses después del asesinato de Lora, las bases del campamento minero de Siglo XX intentaron romper la ocupación militar. Un destacamento de mineros tomó el control de la estación de policía de Llallagua y capturó la cantidad suficiente de armamento como para expulsar a las tropas enviadas de Catavi. Ochenta personas murieron y doscientas resultaron heridas en el intercambio de fuegos; el ejército tuvo que retirarse esa noche y esperar la ayuda aérea. Los mineros se apoderaron de los cuarteles de Catavi y de mayor cantidad de armas y municiones. Con todo, el esfuerzo resultó vano. Al día siguiente, los refuerzos llevados desde Santa Cruz recapturaron Llallagua, Siglo XX y poco después Catavi. La represión fue feroz; durante los tres días de lucha murieron un total de doscientas personas. Por ello no sorprende que el corresponsal de Presencia encontrara desmoralización: la tardía reacción ante la intervención de mayo fue un valiente pero estrepitoso fracaso. Los servicios de seguridad intensificaron su actividad, restringiendo la organización de las bases y persiguiendo a fondo a la dirección clandestina. En 1966, Federico Escóbar murió en misteriosas circunstancias y en julio de 1967 el camarada porista de Lora, Isaac Camacho, fue asesinado por la policía secreta.[9]

La sensación de derrota en las minas no fue engendrada únicamente por la represión, la destrucción de sus sindicatos y el asesinato de sus dirigentes, sino por el gigantesco recorte de sus salarios que vino después, implementado para poner en práctica las últimas fases del Plan Triangular que seguía en vigor desde 1963. El decreto de mayo prescribía la nivelación de todas las escalas y contratos salariales a aquellos vigentes en la mina Quechisla en agosto de 1964 –es decir, el de la mina peor pagada en la peor época del

8 *Presencia*, (La Paz), 10 de septiembre de 1965

9 Lora, *op. cit.*, pp. 351-356.

año– a partir del 1° de junio de 1965. Para los trabajadores de los principales socavones –Siglo XX, Huanuni, Colquiri y San José–, este significaba un recorte salarial de entre cuarenta y cincuenta por ciento. La medida fue rigurosamente cumplida y, como ilustran las cifras del cuadro 3, tuvo un efecto revelador. El régimen emitió una serie de documentos para demostrar la "corrupción", desperdicio y agotamiento de los recursos causados por la FSTMB; sin embargo, aún después del desalojo del sindicato y de un recorte del quince por ciento en todos los costos de excavación, las pérdidas de la COMIBOL siguieron en ascenso.[10]

Barrientos aseguró a los mineros que el recorte salarial se limitaría a seis meses; pero se mantuvo vigente por un período diez veces superior. Les ofreció asimismo un bono equivalente casi a la mitad del salario básico, aunque para merecerlo debían trabajar siete días completos todo el mes; un requisito que no era técnicamente imposible ya que, con el tiempo, el gobierno encontró un minero que cumplió la tarea y fue debidamente festejado como un Stajánov andino. Puesto que gran parte del magro acceso al seguro social dentro de la COMIBOL fue revocado, había una total falta de deseo de trabajar 56 horas continuas a la semana y agotar rápidamente una vida laboral ya extremadamente corta para recibir un salario similar al básico de antes de mayo. El tan alardeado esquema del régimen de "compartir beneficios" hizo poco por mejorar la situación, pues sólo logró un incremento de cuatro pesos bolivianos para los trabajadores de interior mina y dos para aquellos de superficie en diciembre de 1965, el mismo que un año después aumentó a cinco pesos bolivianos.[11] Frente a esto, no es de extrañar que los esfuerzos del gobierno por establecer un sindicato amarillo se redujeron a la nada o que incluso los trabajadores que apoyaban a partidos cercanos al régimen prestaran poca o ninguna atención a la declaración de los generales gobernantes: "...ajenos a toda intención demagógica, podemos asegurarles, con entera franqueza, que los sacrificios actuales redundarán, posteriormente, en beneficios de ustedes mismos, pues cuando aumente la producción y se organicen todos los servicios técnicos, administrativos, así como el rendimiento laboral, mejorarán también las remuneraciones. Eliminados los dirigentes rojos que después de engañarles y

10 Ver, por ejemplo, Comisión Investigadora Nacional: *Daños y costos del sindicalismo a Comibol*, La Paz, 1965. Los costos de operación de Comibol en mayo y octubre de 1965 están desglosados en Hans Jürgen Pühle: *Tradición y política de reformas en Bolivia*, Santiago, 1972, p. 141.

11 Lora: *El proletariado en el proceso político 1952-1980*, La Paz, 1981, pp. 60-61.

explotarles durante muchos años, han fugado por temor a responder a sus delitos, les pedimos no dar oídos a los pocos extremistas que aún quedan entre ustedes, y que seguirán su vieja táctica de mentiras, intrigas e incitación a la violencia".[12] El efecto de esa ofensiva fue que los curas que trabajaban en los principales campamentos mineros pasaron de una posición básicamente anticomunista, con rasgos antisindicalistas, a una actitud más favorable a las bases en su conjunto y no limitada a sus fieles. Esto se puso de manifiesto a través de una disminución de la propaganda antiizquierdista por las emisoras católicas y en especial por Pío XII en Siglo XX. Con el tiempo, esto acabaría en una defensa abierta de los militantes y en un conflicto directo con el ejército.

Cuadro 3
Salarios promedio en COMIBOL (1965)

	Enero - abril Nº de empleados	Salario (Bs.)	Julio - diciembre Nº de empleados	Salario (Bs.)
Trabajadores de interior mina	8.529	887	8.076	527
Empleados de interior mina	623	1.221	584	1.086
Trabajadores de ingenio	2.586	589	2.551	486
Empleados de ingenio	579	870	498	662
Trabajadores de exterior mina	4.531	514	4.711	452
Empleados de exterior mina	4.587	862	4.074	690
Total	21.431		20.464	
Promedio		770		407

Fuente: *Estudio sociológico de los centros mineros de* COMIBOL. *Salarios y costos de vida*. La Paz, junio de 1970, p. 13

La política laboral del gobierno estaba emparejada con una enfática apertura de la economía a capitales extranjeros. En el sector de la minería, los dos casos más notables fueron concesiones a firmas norteamericanas: la International Mining and Processing Corporation (IMPC) y la Philips Brothers, una

12 Gonzales Ocampo y Barrientos: *Mensaje a los trabajadores de las minas*, La Paz, 1965, pp. 4-6.

subsidiaria de la US Steel. En 1966, Barrientos otorgó a la IMPC plenos derechos para procesar y exportar las colas y desmontes de la mina Catavi, las gigantescas montañas de restos de mineral que sólo podían aprovecharse por medio de sofisticadas técnicas de fundición y que, en ese momento, se valoraban en 3.500 millones de dólares.

El precio del acceso a un recurso de tan estratégico valor para Bolivia fue el pago de regalías de doce por ciento al Estado y del ocho por ciento a la COMIBOL. La concesión de mina Matilde a la Philips Brothers significó una subasta todavía mayor, ya que había de prolongarse por veinte años completos y proporcionaba a la compañía acceso a riquísimos depósitos de zinc, plomo, plata y cadmio, valorados en un mínimo de doscientos millones de dólares por una renta de sólo 120 mil dólares al año. Se le puso a la firma el límite de procesar determinadas cantidades de mineral que, según las tarifas vigentes en el mercado, tenían un valor de quince millones de dólares al año, correspondiendo al Estado un 1,6 por ciento de su valor de exportación. Además, en lo inmediato, la Philips Brothers se benefició de varios años de trabajo preparatorio y de mantenimiento acometido por la COMIBOL a un costo de cinco millones de dólares, suma que el Estado recuperaría únicamente al cabo de todo el periodo que duró la concesión.[13] Estos acuerdos fueron tan claramente perjudiciales para los intereses de Bolivia, que causaron gran consternación aun dentro de las fuerzas armadas y la FSB. Fueron políticamente absurdos y económicamente desastrosos.

En 1967, las compañías mineras privadas tenían a su cargo el 24 por ciento de la producción mineral del país. La afluencia de bancos extranjeros –First City National, Banco Boliviano Americano y Bank of America eran los más fuertes– tuvo un efecto todavía más pronunciado; hacia 1969, controlaban el 58 por ciento de los depósitos nacionales. Sin embargo, mientras el gobierno y sus aliados mostraban un cuadro de inversiones como nunca crecientes, el país se había convertido en un exportador neto de capital. Entre 1965 y 1968, la inversión privada de capital extranjero ascendía a 27,7 millones de dólares, en tanto que las utilidades repatriadas excedían los 320 millones de dólares. Además, la deuda externa pública se había incrementado casi en un setenta por ciento para 1968 y los reembolsos anuales de capital e interés habían

13 En Mariano Baptista y Sergio Almaraz (*Guerrillas y generales sobre Bolivia*, Buenos Aires, 1968), y en José Luis Accáser y José Baldivia (*Bolivia: otra lección para América*, México, 1972) se pueden encontrar reseñas de estas dos concesiones.

alcanzado los cincuenta millones de dólares, una tercera parte del monto de las exportaciones bolivianas.

El descontento también se dirigió a la política barrientista con relación a la industria petrolera, aunque ésta fue más resultado de una debilidad a largo plazo respecto al capital extranjero, originada en el Código Davenport de 1955. Para 1954, YPFB producía el petróleo suficiente para hacer frente a las necesidades del país, con excepción del carburante de aviación, y ese nivel de producción se mantuvo a lo largo de la década de 1950. Empero, la falta de exploraciones por parte de la corporación estatal colocó a esa entidad en una posición muy vulnerable respecto a la Gulf Oil, la única compañía que hubo de descubrir petróleo de las catorce que habían comprado 1,2 millones de hectáreas de concesiones después de 1955. Así, la Gulf comenzó a bombear petróleo a Arica en 1966 y desde allí a California. El acuerdo del Estado boliviano con la Gulf Oil exigía a ésta responsabilidades impositivas extremadamente moderadas y le concedía el derecho de repatriar el 79,3 por ciento de todas las utilidades; este comportamiento tan generoso debilitó enormemente a YPFB. Fue así como las reservas de Yacimientos en 1968 ascendían tan sólo a 33 millones de barriles frente a los 187 millones de barriles de la Gulf Oil. La compañía estatal había invertido 38 millones de dólares en todas sus operaciones, mientras la firma extranjera estaba gastando 1,20 millones de dólares tan sólo en la exploración. La falta de protección a empresas nacionales, aún menor a la que se daba cuando Paz hizo que durante el régimen de Barrientos la cuota de producción de petróleo que en 1964 era de tres por ciento para la Gulf y más del 95 por ciento para Yacimientos, en tres años se invirtiera a 82 por ciento para la Gulf y a menos del veinte porciento para YPFB.[14] Como sucedió con los contratos firmados para el sector minero, éste fue el origen de mucha inquietud dentro de algunos círculos militares, mientras que la izquierda, que aún pudo hacer escuchar su voz hasta 1967, emprendió efectivas campañas contra las "subastas" de un régimen que estaba totalmente embolsillado por Wall Street y el Pentágono.

No fue difícil fundamentar tales acusaciones y no simplemente con referencia a la empresa privada, sino también respecto a las relaciones bilaterales del Estado. Por ejemplo, la aceptación por parte del gobierno de

14 Para una visión general de la industria petrolera ver Sergio Almaraz: *Petróleo en Bolivia*, La Paz, 1969; Enrique Mariscal: *Mito y realidad del petróleo boliviano*, La Paz, 1966; Jorge Fernández Soliz: *Tema. El petróleo*, La Paz, 1976; Marcelo Quiroga Santa Cruz: *Oleocracia o patria*, México, 1982.

Barrientos de importar trigo norteamericano y otros productos alimenticios, estropeó los planes de autosuficiencia en cultivos básicos que había sostenido la reforma agraria. En 1967, únicamente el 22 por ciento del arroz que se consumía era producido en el país; en 1968, el veinte por ciento de las importaciones de Estados Unidos, valoradas en 158,6 millones de dólares, eran de productos alimenticios. Como en el caso del petróleo, hay que admitir que el MNR sentó las bases para tal estado de cosas, pues ese partido dirigió un proceso que provocó el descenso de la producción nacional de harina de 57 mil toneladas en 1956 a siete mil en 1962, en tanto que las importaciones aumentaron de 14.800 toneladas a 111mil en el mismo período. Las deudas al país del norte por este concepto alcanzaron los 23,6 millones de dólares en 1964 y las importaciones de ese país fueron nueve veces superiores a las compras que se hicieron de Argentina, pese a que resultaban más caras en un cincuenta por ciento.[15] De conformidad con el decreto de agosto de 1963 de Paz, se dio absoluta prioridad a las relaciones comerciales con EE UU; en 1968, más del cuarenta por ciento de todas las importaciones bolivianas provenían de ese país, el cual era receptor del 42 por ciento de todas las exportaciones de la nación latinoamericana.

El monto de la ayuda norteamericana directa al régimen de Barrientos no aumentó substancialmente, puesto que el alza de los precios del estaño por la guerra vietnamita brindaba al Estado un margen más amplio de maniobra con los ingresos. Pero, la cooperación directa se hizo más evidente que nunca. La presencia norteamericana en Bolivia se hizo ver cuando el ejército norteamericano adquirió una estación de radio en El Alto, la que pasó a ser conocida con el nombre de "Guantanamito", recordando la base americana de Guantánamo en Cuba. Se otorgó plena libertad de acción al Cuerpo de Paz, el cual bajo los auspicios de USAID —que a lo largo de la década de 1960 insistía en que el problema de América Latina surgía del alto índice de nacimientos— inició una campaña de anticoncepción y esterilización en el campo. Esta imposición de arrogante e irreflexivo malthusianismo en un país de menos de cinco millones de habitantes y cuatro veces más grande que las islas británicas lógicamente causó una reacción violenta que fue el tema de la película *Yawar mallku*, de Jorge Sanjinés. El régimen también fue impulsado a mejorar su aparato de control. Entre 1964 y 1966, el costo de mantenimiento de la burocracia estatal aumentó en más del doble, siendo el pago mensual a un teniente

15 Nash, *op. cit.*, p. 233; *Esperanza*, (La Paz), N° 7, junio de 1964, pp. 24-27.

del Ejército equivalente a dos veces el promedio del ingreso per cápita anual (120 dólares) y cuatro veces el salario del maestro con mayor grado.[16]

Bajo el régimen de Barrientos, la economía prosperó prácticamente al mismo ritmo que en el resto de América Latina y se mantuvo un bajo nivel de inflación, pero la deuda siguió aumentando, la distribución de la riqueza fue cada vez menos equitativa y el gasto social declinó. La política de entrega de los sectores más rentables de la industria nacionalizada a las empresas extranjeras no pudo dar una respuesta al subdesarrollo estructural y aceleró la depreciación de valiosos recursos con un mínimo de acumulación de ganancias para el Estado. La planificación de la economía en este sector se redujo a poco menos que un saqueo sistemático y la economía del país se cubrió con un aura de estancamiento, corrupción y deterioro.

Una atmósfera similar prevaleció a nivel político; si bien después de agosto de 1966 el gobierno era nominalmente constitucional y el parlamento funcionaba brindando a los escasos diputados de oposición la oportunidad de formular sus críticas aun cuando esto era frecuentemente castigado con temporadas en prisión. Barrientos nunca fue capaz de garantizarse una coalición coherente de fuerzas civiles, por lo que se vio obligado a crear una serie de partidos políticos propios, cuya existencia fue extremadamente efímera. El más importante fue el Movimiento Popular Cristiano (MPC), a partir del cual se formó el núcleo del Frente Revolucionario Barrientista (FRB), bajo cuyo auspicio los diversos gabinetes del general dirigieron sus negocios. De los partidos de la derecha, solamente a la FSB le fue permitido participar en el gobierno, aparentemente debido a que su relativa fuerza le otorgaba demasiado poder de negociación e independencia. Sin embargo, la FSB conservó estrechos lazos con Ovando y ambos sacaron provecho de ese vínculo en sus maniobras para ganar ventaja sobre Barrientos. Aparte de los militares, de muchos tecnócratas y de simpatizantes

16 Es ilustrativo comparar el salario de los oficiales de las fuerzas armadas con el de los maestros bajo el régimen de Barrientos:

Maestros		Oficiales	
1er. grado	69	General	516
2do. grado	61	Coronel	352
3er. grado	55	Tte. Coronel	323
4to. grado	50	Mayor	295
5to. grado	45	Capitán	267
Categoría	38	Teniente	241
		Subteniente	216

del MPC, el régimen obtuvo gran parte de su apoyo de los "taxipartidos" (así llamados porque se consideraba que el número de sus miembros alcanzaba a llenar un taxi urbano), del reconstruido PIR y del Partido Social Demócrata (PSD). Encabezado ahora por Ricardo Anaya, el PIR se adhirió a un "marxismo puro" que naturalmente estipulaba el apoyo a una dictadura militar –la cual, en este caso, retribuyó el cumplido aprobando únicamente el "marxismo puro"– mostrando escasa semejanza incluso con las políticas adoptadas por el partido en su reformulación de 1956.

Su ingreso al gobierno presagiaba la muerte de una corriente política que había degenerado en un total oportunismo y que carecía de partidarios, a no ser por unos cuantos fieles mojigatos que sobrevivieron de la década de 1940. El PSD era aún más reducido, habiéndose fundado a fines de la década de 1940 en un intento tardío de brindar a la Rosca una vía más flexible para desafiar al MNR, no impactó absolutamente en los círculos populares. Entre sus líderes se contaban hombres como Luis Adolfo Siles Salinas, hermano de padre de Hernán Siles, a René Ballivián Calderón, un antiguo empleado de Aramayo, al principal asesor financiero de Barrientos e influyente ejecutivo de la empresa petrolera, Rolando Kempff Mercado, y a Roberto Arce, miembro fundador y antiguo funcionario de la ONU. Por lo tanto, el partido tuvo una influencia desproporcionada para su tamaño y actuó como conducto vital entre el régimen y los intereses comerciales norteamericanos. A esta relación se añadieron los contactos más políticos de Guevara; sin embargo, desde que el PRA se unió a Barrientos, perdió una buena parte de su apoyo popular heredado de la época del MNR. El PDC, por su parte, había acumulado una apreciable cantidad de partidarios durante la última época del Movimiento. Fundado como el Partido Social Cristiano en 1954, éste experimentó una expansión desde principios de la década de 1960 bajo el liderazgo de hombres como Remo di Natale, Luis Ossio y Benjamín Miguel; se constituyó en una alternativa moderada a la Falange, con especial fuerza en círculos estudiantiles. Más cauto que sus partidos hermanos del resto del hemisferio –y significativamente menos audaz que el partido chileno que ejercía el poder entonces bajo la presidencia de Eduardo Frei (1964-70) , el PDC pronto se vio peligrosamente sacudido por la experiencia de participar en un gobierno militar en lugar de haber demandado libertades individuales y democracia de un MNR mucho menos autocrático. Lo mismo que el resto de la derecha, el PDC pagó el precio de su entusiasta y remunerada participación del patronazgo militar en una respuesta casi pavloniana a la caída del MNR. La Democracia Cristiana durante Barrientos comenzó a perder el apoyo de su ala joven, la cual se sintió progresivamente

atraída por las alternativas radicales que surgirían en la región, provocadas más por un igualitarismo doctrinal y por el inicio de la teología de la liberación que por contactos con la izquierda ortodoxa.

La coalición así detallada no fue ni vigorosa ni firme; a cada uno de los partidos le tocó separarse de una u otra acción emprendida por Barrientos, pero ninguno tuvo los recursos políticos o la voluntad de hacerlo definitivamente. Aun el MPC del propio general se vino abajo finalmente en 1967 a raíz de altercados en torno a "pegas" para ser reemplazado por el todavía más efímero Partido Agrario Laborista de la Izquierda Cristiana (PALIC), cuya posición ideológica precisa fue evidentemente demasiado sofisticada para merecer un programa. En la práctica, estos partidos brindaban una apariencia pluralista, así como un caudal de burócratas a un gobierno que debía su fortaleza local a militares y campesinos.

En las elecciones presididas por Barrientos en 1966, los campesinos lo elevaron al poder constitucional con el 63 por ciento de los votos, porcentaje bastante mayor que el obtenido por el candidato falangista, general Bernardino Bilbao La Rioja, un veterano héroe del Chaco. Aunque se dio el tradicional uso del fraude, la coerción, el soborno en pequeña escala y la manipulación de los medios de comunicación, debe señalarse que la izquierda participó en los comicios, pero desastrosamente dividida. El PCB propuso sus candidatos propios bajo la bandera del Frente de Liberación Nacional (FLIN), negándose a formar parte del frente unido erigido por el PRIN, POR, los maoístas, la izquierda movimientista y los socialistas independientes del Grupo Espartaco que se unieron para formar un Comité Democrático del Pueblo (CODEP). Ninguno de estos frentes obtuvo curules en el Parlamento y el mismo MNR apenas consiguió un puñado –principalmente de Tarija, la base de Paz– y la oposición parlamentaria pasó a depender excesivamente de la voz de unos cuantos independientes, entre los que se destacaba por su locuacidad el joven y aristocrático escritor Marcelo Quiroga Santa Cruz y algunos falangistas disidentes. La represión influyó enormemente en este fracaso electoral, pero tampoco explica del todo la victoria oficialista que se derivaba de la popularidad del general no sólo con los dirigentes de los sindicatos campesinos, sino también con muchas de sus bases. Ya hemos visto los orígenes de esta alianza a principios de la década de 1960. Con el régimen barrientista, ésta se consolidó a través de un diligente patronazgo y se formalizó en lo que se denominó el Pacto Militar-Campesino por cuyo intermedio "...las Fuerzas Armadas garantizarán el respeto a las conquistas de las clases mayoritarias, tales como la reforma agraria, educación básica, derechos sindicales y otros... los campesinos apoyarán y

defenderán, firme y lealmente, la institución militar, bajo cualquier circunstancia. Se pondrán bajo órdenes militares contra las maniobras subversivas de la izquierda".[17]

Barrientos ocupaba gran parte de su tiempo en hacer visitas al campo; iba de pueblo en pueblo en un helicóptero donado por la Gulf Oil al que bautizó con el nombre de Holofernes, no tanto por alusión a alguna figura clásica, sino porque éste fue el título conferido al corcel blanco del tirano populista del Siglo XIX, Mariano Melgarejo (1864-71), quien también había nacido en Tarata como el general de la fuerza aérea y como él dependía del apoyo de base de poder del valle cochabambino. Si bien es cierto que el estilo peripatético de hacer campaña de Barrientos, sus discursos realistas y distribución liberal de pelotas de fútbol, televisores y bicicletas tuvieron gran importancia, también es evidente que habrían tenido un valor meramente marginal de no ser por la red clientelista heredada del MNR. Empero, y así lo demuestra el cuadro 4, Barrientos no dinamizó la reforma agraria y más bien optó por adjudicar predios más grandes a menos personas, en una explotación más discreta del estatuto con fines políticos. El general Banzer adoptaría más tarde la misma política.

El apoyo brindado a los estratégicos líderes campesinos hacía necesaria la imposición de una estructura jerárquica de patronazgo y de un estrecho control y protección a los dignatarios locales, así como la persecución de disidentes y fuerzas independientes. Precisamente en ese período, las divisiones personalistas y regionalistas del movimiento campesino se hicieron más complejas a raíz del surgimiento de un estrato de líderes campesinos "nacionalistas" comprometidos con el pacto y que debían su influencia al ejército. Esta tradición resultó sumamente duradera y un constante impedimento tanto para corrientes radicales como para la organización de sindicatos independientes en el campo. Con todo, el hecho mismo de que se tuviera que imponer un sistema como ése –el que desde luego no servía de mucho para mejorar la situación de la gran masa rural– indicaba una debilidad estructural que con el tiempo se haría crítica.

Con el triunfo electoral, el eficiente desmantelamiento de la COB, la supresión de la izquierda, una alianza garantizada con líderes campesinos y con Washington, además del continuo asesoramiento de un grupúsculo erróneamente inocuo de políticos conservadores, el régimen de Barrientos parecía tener asegurados a fines de 1966 cuatro años de gobierno relativamente

17 Citado en Mitchell, p. 98.

tranquilo. Había una serie de descontentos y ambiciosos oficiales del ejército agrupados en torno a Ovando y los estudiantes se desplazaban claramente a la izquierda; pero éstos no eran problemas excepcionales, si se tiene en cuenta que se revirtió el "legado subversivo" de 1952. El campesinado estaba inmóvil y el proletariado todavía replegado, pero en las minas se había arrebatado del gobierno una serie de concesiones, como la devolución de las emisoras de radio, y algunos militantes comenzaban a salir a la luz pública. En ese momento habría sido enteramente razonable que una evaluación de equilibrio de fuerzas presagiara la continuada estabilidad, lo tenebroso de un régimen militar latinoamericano bastante común y profetizara la defunción definitiva de las tradiciones nacidas en 1952. Sin embargo, no ocurrió así. Precisamente en la etapa en que las fuerzas populares y radicales del país estaban en la mayor decadencia y cuando el país era gobernado por un régimen peculiarmente intrascendente, Bolivia pasó a ser el centro de atención de un mundo que podía identificar a esta nación como latinoamericana, pero que apenas sabía su ubicación exacta y menos aún pormenores políticos.

Cuadro 4
Distribución gubernamental de tierras (1955-1974)

		% Títulos	% Área	Tamaño promedio de títulos (Ha.)
1955-59	MNR	9,8	4,9	19,1
1960-64	MNR	39,8	27,6	26,4
1965-69	Barrientos/Siles	14,8	21,1	54,3
1970-71	Ovando/Torres	17,7	14,9	32,2
1972-74	Banzer	17,8	31,5	67,6

Fuente: Servicio Nacional de Reforma Agraria, 1975, citado en Xavier Albó: *Bodas de plata o réquiem por una reforma agraria*, La Paz, 1978, p. 42.

Ñancahuazú

Poco antes de las dos de la tarde del 8 de octubre de 1967 se transmitía un mensaje de radio al cuartel general de la Octava División de un grupo táctico cuya base estaba en el colonial pueblo de Vallegrande, al oeste de Santa Cruz. El mensaje, breve pero claro, estaba dirigido al comandante de la División, coronel Joaquín Zenteno Anaya y fue captado por una estación cercana en el caserío de Abra del Pinacho: "Soy flaco, atención, soy el flaco, tengo a papá. Cambio". La voz correspondía a Gary Prado Salmón, un oficial formado en los

Estados Unidos y miembro del regimiento de élite Ranger. Prado hablaba desde un lugar aislado situado a unos cuarenta kilómetros al sud de Vallegrande, era la hondonada conocida con el nombre de Quebrada del Yuro. Su mensaje informaba a Zenteno que el Ejército boliviano finalmente había capturado al más célebre guerrillero del mundo, el argentino Ernesto "Che" Guevara. Había sido herido en una pierna y sufría un agudo ataque de asma, pero estaba vivo. Con él se encontraba un joven minero de Huanuni, Simón Cuba, cuyo nombre de guerra era Willy. Había sido el guardaespaldas del Che y lo llevó en sus espaldas durante su último y desesperado esfuerzo por evadir el cerco de tropas que se cerraba en torno a lo que quedaba de la fuerza guerrillera, en un accidentado terreno al sud de Vallegrande. Estos hombres fueron ejecutados veinticuatro horas después en la escuela de La Higuera, junto con un tercer combatiente, el Chino (el peruano Juan Pablo Chang). Ese día –9 de octubre– y el 24 de junio –la fiesta de San Juan Bautista y solsticio de invierno, pero también la noche de una efectiva masacre planificada en Siglo XX– continúan siendo las fechas más importantes en el calendario de la memoria política boliviana y ambas corresponden a 1967.

Sin embargo, la muerte de Guevara fue un acontecimiento fundamentalmente internacional, fue difundida por muchos periodistas que por ese motivo visitaban por primera vez el país y fue deplorada por millones de personas que, en el espíritu de su internacionalismo, no prestaron atención inmediata a la exacta situación geográfica de su deceso. Este hecho fue registrado en Bolivia pero no tanto como el impacto concreto de la última campaña del Che en Ñancahuazú. El singular prestigio de Guevara y su extraordinaria influencia nuvo el efecto de convertir un episodio militar, que a todas luces resultaba quijotesco e inconexo y que rayaba en una total carnicería, en una amenaza peligrosamente pública y embarazosa. En efecto, ni siquiera el legendario combatiente pudo superar las dificultades que él mismo contribuyó a crear; empero, consiguió sacudir al régimen de Barrientos y dejar un legado que sería retomado tanto dentro como en el exterior del país.

Guevara y Ñancahuazú centraron la atención del mundo en Bolivia por un corto período. Se ha escrito mucho, pero de los escritores extranjeros únicamente Regis Debray, importante protagonista de la aventura, ha analizado el contenido nacional y las consecuencias de la misma.[18] Resulta en cierto

18 Regis Debray: *Che's Guerrilla War*, Londres, 1975. Otras fuentes sobre la campaña utilizadas en este relato incluyen a Rubén Vázquez Díaz: *Bolivia a la hora del Che*, México, 1976; Daniel James ed.: *The Complete Bolivian Diaries of Che Guevara and Other Captured Documents*,

modo irónico que Debray, quien fue puesto en ridículo por la derecha y atormentado por la izquierda a raíz de la defensa abstracta y esencialmente idealista que hacía de la estrategia foquista empleada por el Che, hubiera escrito dos años antes de la campaña que la peculiar situación de Bolivia después de la revolución de 1952 significaba que la guerrilla rural tendría solamente un papel subordinado a movimientos revolucionarios de los centros proletarios tradicionales.[18] Lo que pasó fue que tanto él como el Che prestaron muy poca atención a tal observación; en efecto, muchos de los problemas que acosaron a la guerrilla se debieron a factores originados fuera del país, aunque solamente tomarían forma concreta en los rudos terrenos de Santa Cruz.

La teoría foquista propiamente dicha estaba basada en la experiencia de la revolución cubana. Como lo reseñó Debray, que transformó las acciones de Castro y Guevara en un sistema político militar completo, el foquismo invertía el esquema leninista tradicional sobre el que construyeron sus estrategias los partidos comunistas latinoamericanos y ponía lo rural por encima de lo urbano, a los campesinos por encima del proletariado y la violencia revolucionaria por encima de las maniobras organizativas. Cristalizada en la obra del filósofo francés, *Revolution in the Revolution* (1966), la táctica programática de los rebeldes cubanos de Sierra Maestra cobraba la forma de una estrategia alternativa para la izquierda, por la cual se implantarían en el campo pequeños grupos de dedicados combatientes, los que proletarizarían y revolucionarían al campesinado a lo largo de una guerra móvil que reduciría gradualmente la unidad y eficacia de las fuerzas armadas y dinamizaría las contradicciones del sistema de control a través de una serie de crisis en ascenso. Es necesario señalar que esta tesis se inspiraba en varios aspectos de las revoluciones china y vietnamita, pero emanó más directamente del ejemplo cubano, que en aquel momento se consideraba válido para el resto del subcontinente.

Londres, 1968; Ricardo Rojo: *My Friend Che*, Nueva York, 1968; Luis J. González y Gustavo A. Sánchez: *The Great Rebel, Che Guevara in Bolivia*, Nueva York, 1969; Luis Suárez: *Hacer el fusil y la palabra*, México, 1980; Richard Gott: *Rural Guerrillas in Latin America*, Londres, 1973.

19 "También es el único país donde la revolución podría cobrar la clásica forma bolchevique si se considera la insurrección proletaria de 1952 sobre la base de 'soviets' que hicieron explotar el aparato del Estado a través de una lucha armada corta y decisiva. Por lo tanto, la teoría del foquismo en Bolivia por razones de formación histórica que son únicas en América Latina, si no inadecuada, en todo caso es secundaria". (Regis Debray: "Castroism: The Long March in Latin America", en *Strategy for Revolution*, Londres, 1970, p. 38.

Incluso antes del inicio de la campaña boliviana, se desató una violenta polémica dentro de la izquierda en torno al foquismo que ya estaba siendo ensayado en Guatemala, Colombia, Perú y Venezuela.[20] En todos los casos, la atención había aumentado dentro de los partidos comunistas locales, cuyos dirigentes seguían firmemente ligados a Cuba, pero a menudo en desacuerdo con la "exportación" de sus métodos revolucionarios y resueltamente celosos de su autoridad nacional. En el caso de Venezuela, esto ocasionó divisiones particularmente profundas y un conflicto declarado con los líderes de La Habana.

Éste no es el espacio más apropiado para hacer un seguimiento detallado de esos debates. Sin embargo, debemos señalar que en 1966, cuando Guevara regresaba a Cuba de un corto viaje que hizo a África con el fin de asesorar sobre la guerra del Congo, su posición en torno a la estrategia revolucionaria se apartaba incluso de aquella de los líderes cubanos, quienes habían estado sometidos a bastante presión durante la división chino-soviética con objeto de traducir su dependencia económica de Moscú en una política más equilibrada hacia los partidos hermanos de América Latina. Originalmente, La Habana se inclinaba por la posición china porque ésta parecía estar a la par con su propia crítica de los partidos latinoamericanos, los cuales insistían en su rechazo al foquismo por aventurista y antileninista.

En el momento del rompimiento, la neutralidad de Cuba se formuló en un "lenguaje" tan sutil que si bien la colocaba en el grupo moscovita, también le permitía continuar con una línea relativamente independiente dentro de su propio continente. Por lo tanto, Guevara y Castro compartían formalmente una misma postura; pero en la práctica y en cuanto a su predisposición personal Castro se distanciaba de la irreflexible insistencia del Che en el foquismo de orientación resueltamente internacionalista y con poca o ninguna referencia a la posición de los partidos comunistas regionales para hacer la revolución; este planteamiento en muchos sentidos acercaba al Che más a Pekín que a Moscú. Su poco destacado papel en la administración estatal como ministro de Industria y los subsiguientes viajes que realizó al extranjero precipitaron esa orientación del Che hacia un compromiso permanente y hacia los riesgos de acciones directas. Aunque nunca se produjo una ruptura abierta entre ellos, Castro dejó que el Che tomara su propio rumbo, lo apoyó financiera y públicamente, pero desistió de brindarle un respaldo total.

20 Sobre la conducta de esas campañas ver Gott. Sobre una exposición del foquismo, Leo Huberman y Paul M. Sweezy: *Regis Debray and the Latin American Revolution*, Nueva York, 1969.

Estas claras diferencias de énfasis en el lado cubano no fueron en sí las causas directas de la falta de apoyo local, ni del aislamiento político que sufrió el Che en Bolivia, pero contribuyeron a exacerbar las dificultades fundamentales originadas por divisiones en el movimiento comunista. Indudablemente, resultó un obstáculo para Guevara el que Castro hubiera logrado impedir la participación de la delegación de CODEP –entre cuyos miembros se contaba a Lydia Gueiler y Guillermo Lora, y que era asesorado directamente por el líder socialista chileno Salvador Allende– en la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que tuvo lugar en La Habana en enero de 1966, donde el mencionado comité fue objeto de una serie de ataques y luego obligado a salir rumbo al Canadá. Más tarde, el propio Debray habría de calificar esto como un grave error, que privó a la guerrilla del apoyo de una izquierda no alineada, pero, con todo, influyente.[21] Castro respaldó plenamente a la delegación del ELN, compuesta exclusivamente por el Partido Comunista promoscovita; pero pronto fue evidente que este partido necesitaba más que expulsiones de conferencias internacionales como ayuda para resistir los ataques del partido maoísta boliviano, el PCML.

En Bolivia, el contenido de la ruptura chino-soviética influyó mínimamente en la división del PCB. Desde fines de 1963, ya cobraba forma una tendencia disidente bajo la dirigencia de Raúl Ruiz González, Luis Arratia y el líder estudiantil Óscar Zamora Medinacelli, quien como funcionario de la International Student's Unión había desarrollado estrechos contactos con Pekín. Los ataques de este grupo a la postura vacilante del PCB con relación al MNR y sus desviaciones revisionistas del leninismo pronto atrajeron a militantes sindicales claves, como Federico Escóbar, así como a muchos de los miembros estudiantiles del partido, todo lo cual hacía de ese sector una fuerza digna de tomarse en cuenta. En agosto de 1964 fueron expulsados cuatro miembros del comité central del PCB y en 1965 el nuevo partido adoptó una forma concreta que, bajo el liderazgo de Zamora, optó por una línea prochina para completar sus ataques al reformismo interno del PCB. Zamora había formado parte de la delegación de CODEP expulsada de La Habana, como representante del PCML, pero incluso a mediados de 1967, casi dieciocho meses después, conservaba esperanzas de mejorar sus relaciones con Cuba y ofreció apoyo a Guevara, a pesar de la falta de contacto con Castro, que sólo trataba con los dirigentes del PCB: Mario Monje, Jorge Kolle Cueto y Simón Reyes.

21 *Che's Guerrilla War*, p. 17. La versión de Lora sobre este acontecimiento está en *Proletariado...*, pp. 167-170.

Aunque el PCB monopolizaba el apoyo político y material de La Habana, no brindaba sino un respaldo simbólico a Guevara, quien hacia mediados de 1966 ya había establecido una presencia preliminar en La Paz. Esto se puede comprender en parte por el hecho de que el grupo explorador del Che, formado por los cubanos Ricardo y Pombo, encargados de establecer contactos partidarios y de reclutar gente, y por Debray, encargado de investigar las áreas adecuadas de actividad y de llevar a cabo una evaluación sociopolítica general, lograron una perspectiva independiente y mantuvieron contactos con el PCML. Sin embargo, otra razón de peso fue que el propio PCB se mostró extremadamente cauteloso de la táctica guerrillera y deseoso de conservar el control de las operaciones en su propio territorio nacional. Las relaciones se hicieron más tensas debido a que estas actitudes –inicialmente reprimidas– se canalizaron hasta enero de 1967 casi exclusivamente a través de la persona de Mario Monje, secretario del partido que administraba los fondos provenientes de Cuba y prometía a Castro apoyar el operativo, pero que desconocía el alcance del proyecto y la presencia de Guevara hasta que la campaña se emprendió efectivamente.

Consecuentemente, no es de extrañar que el PCB planteara un compás de espera y protegiera sus posturas ahora que percibía el peligro de ceder terreno y prestigio a los cubanos, a los maoístas y trotskistas. Monje ofreció unirse él mismo a la guerrilla y, a pedido de Castro, inicialmente prestó los servicios a cuatro de los mejores cuadros del partido, entre ellos Roberto (Coco) y Guido (Inti) Peredo Leigue. Pero ya el 24 de septiembre de 1966, las cosas estaban tan cargadas, que el contacto cubano en La Paz, Pombo (capitán Harry Villegas), anotó en su diario que había advertido a Monje: "1°) Ellos (el PCB) no han mostrado confianza en la lucha guerrillera. 2°) No han hecho esfuerzo alguno para organizarse y más bien consideran que no resuelve nada. Añaden que han concentrado todos sus esfuerzos en función de un alzamiento general y piensan que la guerrilla es secundaria. Les preguntamos qué habían hecho hasta la fecha; contestaron: 'Nada'. Les dijimos que no podíamos estar esperándolos por veinte años".[22*]

Por lo tanto, la campaña comenzó con el apoyo a la guerrilla de un pequeño número de militantes de confianza del PCB que habían estudiado en Cuba y fueron reclutados antes de que su partido hubiera captado el significado del operativo; pero ellos no se adhirieron seguidamente y las relaciones se dete-

22 *Bolivian Diaries*, p. 274.

* Cita traducida porque no se pudo hallar la versión original. (N. de la T.)

rioraron aún más cuando la lucha hubo comenzado. Algunos de los reclutados provenían de otros círculos políticos, pero en los hechos Zamora no llegó a enviar un contingente del PCML; los "maoístas" a menudo considerados parte de la guerrilla del Che eran un grupo dirigido por el exminero Moisés Guevara que había sido expulsado del PCML. Moisés Guevara fue incapaz de reclutar a ninguno de sus ex camaradas, por lo que influyó a amigos y contactos, cuya aptitud no analizó con detalle; en consecuencia, este grupo resultó el menos confiable y estaba integrado sólo por nueve de los cuarenta prometidos, de los cuales salieron varios de los desertores claves. En su punto más alto, la guerrilla contaba con 29 bolivianos y 18 cubanos.

No cabe duda de que, a pesar de las posteriores extensas y formalmente correctas racionalizaciones de su conducta, el PCB fue incapaz de apoyar al Che Guevara debido a intereses sectarios y a diferencias programáticas. Con todo, el Che y sus colaboradores resultaron extraordinariamente insensibles a las previsibles dificultades, algunas de las cuales se debieron a su peculiarmente inflexible adhesión al foquismo y a su profunda desconfianza del que, después de todo, era uno de los partidos más débiles y cautos de América Latina. Sin embargo, la actitud de Guevara también puede comprenderse por la relativa falta de importancia que dio a Bolivia misma, comparada con el movimiento continental que se proyectaba difundir desde ese país. Como escribiera Debray más tarde, el objetivo principal de Guevara no era el de tomar el poder en Bolivia, sino desarrollar un núcleo de campañas para varios países circundantes. La situación geopolítica de Bolivia la hacía ideal en ese sentido y Guevara intentaba claramente regenerar las fracasadas guerrillas en Argentina y Perú e iniciar actividades similares en el Brasil. Este proyecto bolivariano era demasiado ambicioso, pues únicamente en el Perú una previa actividad guerrillera había mostrado signos temporales de éxito a principios de la década de 1960.[23]

En sí mismo, este proyecto debe haber reducido la sensibilidad del Che a las condiciones específicamente bolivianas y a las exigencias de su partido comunista. Pero la elección del Che de un lugar original del foco también se debe entender como resultado de la visita que éste realizó a La Paz en 1953, cuando la revolución estaban su apogeo y gran parte del país en manos de las milicias populares. Con ese recuerdo y la estabilidad relativamente mayor de los regímenes de países vecinos, el gobierno corrupto e impopular de Barrientos

23 *Che's Guerrilla War*, p. 73.

parecía un objetivo especialmente atractivo, pese al escaso nivel de movilización de la clase obrera.

Guevara ingresó a Bolivia por el Brasil a fines de octubre de 1966, con un pasaporte uruguayo hecho a nombre de Adolfo Mena González, un "enviado especial" de la Organización de Estados Americanos (OEA). Disfrazado de recaucásico calvo y con anteojos, el Che pudo moverse libremente e incluso obtener credenciales de la propia oficina presidencial. Su arribo aceleró los preparativos para el establecimiento de una base en el campo, la misma que él y los cubanos –que se estaban congregando en La Paz, a donde llegaron después de una variedad de bien disimuladas rutas desde La Habana– estaban deseosos de emprender.

Debray había inspeccionado tres lugares potenciales durante su breve visita de septiembre. El primero era el Alto Beni, región ubicada al norte del departamento de La Paz, con bastante densidad de población, cercano a centros urbanos y con un terreno apropiado para una campaña guerrillera. El propio Debray parece haber preferido esa zona e incluso Coco Peredo llegó a comprar una propiedad allí, pero pronto se la descartó en parte por la sólida presencia militar en la zona, pero también porque los dirigentes del PCB, que aún mantenían estrechos lazos con los hermanos Peredo, se habían enterado del plan y esto se consideraba peligroso.[24] La segunda zona posible estaba en el Chaparé, al este cochabambino y muy similar al Alto Beni. Finalmente el Che eligió Ñancahuazú, la tercera opción, en la frontera de los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz; Peredo también compró una hacienda bastante grande allí. La zona ofrecía además la posibilidad de circular por la vital carretera Santa Cruz-Cochabamba para llegar al Chaparé, hacia el este al Brasil o hacia el sur, por las regiones petrolíferas con base en Camiri, hasta las fronteras con Paraguay y Argentina. Desde un punto de vista expansionista, Ñancahuazú era el sitio más atractivo.

Sin embargo, habría sido más difícil encontrar un área menos adecuada para la lucha guerrillera en toda Bolivia, particularmente para el método foquista. La elección era casi inconcebible desde ese ángulo, como lo señala Debray (retrospectivamente) y muchas de sus críticas con bastante extensión. El lugar es de cadenas montañosas irregulares, de complejos sistemas fluviales y de profundas cañadas. Ofrece protección, pero es extremadamente difícil de atravesar y carece de un perímetro de defensa. Posee muy poco de margen de

24 *Ibid.*, p. 94

maniobra y, a diferencia de Sierra Maestra, no crecen muchos frutos silvestres allí. Desde el punto de vista sociopolítico, era una zona tan diversa como escasamente poblada; los campesinos que habitan allí poseían cantidades apropiadas de tierra, tenían una perspectiva sumamente provinciana, estaban distanciados de los acontecimientos políticos nacionales y nunca habían demostrado un descontento arraigado o una tendencia política radical.[25] En ninguna fase de la campaña (noviembre de 1966 a octubre de 1967) hubo campesino local alguno que se uniera al combate; sin embargo, muchos estaban encantados de poder vender alimentos a la guerrilla (a precios exorbitantes) y otros tantos la traicionaron. En consecuencia, la fuerza no creció nunca y con los efectos acumulados de la deserción y de las enfermedades, pronto resultó demasiado chica para acometer una actividad militar eficaz en la zona misma, menos aún para ampliar sus operaciones. Estos factores cobraron importancia a lo largo de 1967 y libraron al mal organizado ejército boliviano de las tareas de desgastar y aislar a los rebeldes. En la última fase de la lucha (julio a octubre de 1967), ciertas unidades militares estaban utilizando el terreno y sus contactos campesinos de una manera más similar a la experiencia cubana que los rebeldes.

Algunos de los problemas básicos de la zona seguramente ya eran evidentes hacia fines de 1966, cuando gran parte de las fuerzas se trasladaron de La Paz a Ñancahuazú. Pero los preparativos iniciales de levantar campamentos y depósitos secundarios, confeccionar bombas, explotar la apertura de senderos, entrenar, reclutar y distribuir tareas se desarrollaron correctamente y consumieron mucho tiempo y energía. En esta fase, el grupo tenía ya contacto por radio con La Habana: una red en La Paz (encabezada por Loyola Guzmán, de la juventud comunista) mantenía contacto con la población petrolera de Camiri a través de "Tania" (Laura Gutiérrez Bauer, una germana oriental que había estado en el país durante dos años y tenía una buena cobertura tanto en La Paz como estudiante, como en Camiri, donde era *disc jockey* de un programa de trasnoche para "corazones solitarios", desde donde transmitía mensajes en clave).

Fue en medio de tan laboriosos preparativos que Mario Monje llegó al campamento, escoltado por Tania y el principal lugarteniente del Che, Ricardo. Monje acababa de regresar de Cuba, de su visita a Castro, a quien presentó sus quejas por las actividades cubanas y de quien había buscado garantías especialmente decisivas para una futura cooperación, ya que ahora estaba siendo presionado por Kolle Cueto para que abandone el partido si

25 *Ibid.*, pp. 88, 90, 92, 122.

persistía en su proyecto de unirse a la guerrilla. Castro finalmente confesó a Monje que Guevara estaba a cargo de los operativos, lo cual evidentemente lo sorprendió; aunque en un mensaje al Che el 14 de diciembre, Fidel afirmó: "...no puedo asegurar cual será su actitud definitiva de Stanislao (Monje), pero puede servir de fuente para captar mucha gente buena...".[26]

Monje y Guevara se reunieron en Bolivia, por primera y última vez, el 31 de diciembre. Como anotara el Che en su diario:

> La conversación con Monje se inició con generalidades pero pronto cayó en su planteamiento fundamental resumido en tres condiciones básicas:
> 1° El renunciaría a la dirección del partido, pero lograría de éste al menos la neutralidad y se extraerían cuadros para la lucha.
> 2° La dirección político-militar de la lucha le correspondería a él mientras la revolución tuviera un ámbito boliviano.
> 3° El manejaría las relaciones con otros partidos sudamericanos, tratando de llevarlos a la posición de apoyo a los movimientos de liberación.
> Le contesté que en el primer punto quedaba a su criterio, como secretario del partido, aunque yo consideraba un tremendo error su posición. Era vacilante y acomodaticia y preservaba el nombre histórico de quienes debían ser condenados por su posición claudicante. El tiempo me daría la razón. Sobre el tercer punto no tenía inconveniente en que se tratara de hacer eso, pero estaba condenado al fracaso.
> Sobre el segundo punto no podía aceptarlo de ninguna manera. El jefe militar sería yo y no aceptaba ambigüedades en esto. Aquí la discusión se estancó y giró en un círculo vicioso.[27]

Monje abandonó el campamento a la mañana siguiente y con él se fue toda probabilidad real de cooperación activa del PCB. El secretario del partido no logró obtener los únicos términos sobre los que tanto él como un comité central, manifiestamente menos entusiasta, cooperarían. La posición de Monje dentro del partido se debilitó y la actitud del PCB se tornó de recelosa a extremadamente fría. Kolle y otros dirigentes mantuvieron su apoyo a la guerrilla públicamente, pero declinaron toda responsabilidad; subrayaron la importancia de la organización de masas por medios tradicionales y rechazaron implícita-

26 El mensaje completo está citado en Gott, pp. 501-502 y fue editado en *El Diario*, (La Paz), 31 de octubre de 1967.
27 *Bolivian Diaries*, pp. 95-96; Prensario, (La Paz), 17 de junio de 1984.

mente el tipo de frente unido propuesto por la guerrilla.[28] En la práctica, la línea del partido fue más definitivamente antagonista; en febrero de 1967, Loyola Guzmán, contacto del Che en La Paz y tesorera del partido, fue expulsada, y en agosto se amenazó con la expulsión a veinte militantes del partido en Cochabamba, cuando se supo que pretendían unirse a Guevara. Según Debray, al Che se le escuchó decir: "El Partido Comunista Boliviano es nuestro enemigo número uno".[29] En enero de 1968, Monje presentó al PCB una detallada crítica a la guerrilla, en la cual defendía su propio comportamiento y la línea partidaria, pero desistía de toda crítica directa a La Habana.[30] Por su parte, Óscar Zamora y el PCML, aunque también apoyaban públicamente a Guevara, posteriormente atacaron vehementemente a Monje por sabotear la campaña del Che y a Castro por servirle de parrilla.[31] Del resto de la izquierda, que en su totalidad ofreció abiertamente su respaldo, sólo el POR dejó clara su posición crítica en esos momentos al método foquista. Los guerrilleros se vieron obligados a emprender una activa carrera muchísimo antes de lo previsto cuando, el 19 de enero, un destacamento de policía llegó a Casa Calamina en Ñancahuazú, guiado por un terrateniente vecino de nombre Algarañaz. Las sospechas de este hombre habían nacido ya en noviembre, por el trajín, poco acostumbrado, en los alrededores de la recientemente adquirida hacienda; lo cual él atribuyó originalmente a un operativo de narcotráfico. Puesto que su curiosidad y repetidas visitas fueron groseramente rechazadas, llamó a los carabineros. El resultado fue que no encontraron mucho de qué sospechar (la fuerza principal acampaba lejos de la casa); los carabineros conversaron amigablemente con una pareja de guerrilleros bolivianos y confiscaron un revólver que –dijeron– podía ser reclamado en Camiri. El incidente no tuvo mucha importancia en sí mismo, pero sí fue indicio de que las fuerzas eran susceptibles de ser localizadas en una fase demasiado prematura. A eso siguieron problemas muchísimo más graves cuando, a principios de febrero, el Che llevó al grueso de la fuerza a una marcha de entrenamiento que debía durar 25 días, pero que se prolongó por 48, debido a las fuertes lluvias de verano y a la crecida de los ríos. Durante la marcha, varios hombres (incluso Guevara) se enfermaron, los alimentos se agotaron y las disputas entre bolivianos y cubanos

28 Ver entrevistas con Solé editadas en Gott, pp. 537-539 y Vázquez Díaz, pp. 152-158.
29 *Che's Guerrilla War*, pp. 105, 139.
30 "Las divergencias del P C boliviano con Che Guevara", en *Punto Final*, N° 49, febrero de 1968; parcialmente recogidas en Gott, *op. cit.*, pp. 504-513.
31 Gott, *op. cit.*, p. 467.

eran frecuentes y acaloradas. Exhausta, la tropa regresó a Ñancahuazú el 19 de marzo, para encontrarse con la novedad de que dos miembros de la retaguardia (reclutados por Moisés Guevara) habían desertado y que dos días antes, una patrulla del ejército había inspeccionado la zona circundante a la casa y encontrado un diario perteneciente a uno de los cubanos (Braulio) y varios croquis de combatientes (incluyendo uno de Guevara), además de otros documentos. La guerrilla había sido descubierta y pronto sería objeto de ataque.

Cuatro días más tarde, el 23, Epifanio Vargas, un empleado local de YPFB, que había estado con los rebeldes y que no había creído su relato de que eran geólogos mexicanos, guió a una patrulla de avance al mando del teniente Rubén Amezaga hacia arriba por el río Ñancahuazú e inadvertidamente hasta una emboscada guerrillera apresuradamente tendida. El teniente, Vargas y seis de sus hombres cayeron muertos, y gran parte de su patrulla, incluyendo a un mayor y a un capitán, fue capturada. Según Guevara, estos hombres "hablaban como loros", pero proporcionaron poca información útil y fueron rápidamente liberados. La emboscada había sido un éxito en sí misma, pero ahora la guerrilla se hallaba embarcada en operativos militares de gran envergadura, bastante antes de estar preparada para ello.

Las fuerzas de la Cuarta División de Ejército, con base en Camiri, ocuparon la primera semana de abril el primer campamento guerrillero, obligando a los combatientes a proseguir la marcha y a desquitarse. Al principio, tuvieron éxito; el 10 de abril, una extensa patrulla dirigida por el mayor Rubén Sánchez, que inspeccionaba los alrededores de Iripití, a unos 19 kilómetros de Ñancahuazú, fue emboscada por una fuerza dirigida por Coco Peredo y perdió 19 hombres. El mayor Sánchez se defendió bastante mejor que sus colegas y se negó a cooperar en los interrogatorios, pero sus capturadores rechazaron la invitación de ejecutarlo y soltaron a sus cautivos al día siguiente; haciendo disponible con ello más información valiosa. Para entonces, Barrientos había declarado cuatro provincias en estado de emergencia y había emitido un llamado a la nación a "unirse a la lucha contra los anarquistas locales y extranjeros con armamento y dinero de los castrocomunistas"; pero no quiso creer que Guevara era el líder ni que estuviera vivo. Como medida preventiva proscribió al PCB, PCML y al POR formalmente, ya que éstos habían estado funcionando en forma semiclandestina desde hacía mucho tiempo.

La emboscada del 10 de abril cerró la fase inicial de la guerrilla y colocó sus operativos en un nuevo plano. A partir de ese momento, la derrota sería permanente. Los problemas de los rebeldes se agudizaron porque un par de semanas antes se les unieron Regis Debray y Ciro Bustos, un artista bonaerense

contactado por Tania como organizador potencial en la Argentina. El 17, cuando se había decidido que ambos debían ser sacados clandestinamente en vista de la escalada de los operativos y de la presión de que eran objeto, un periodista anglochileno de nombre George Andrew Roth fue a su encuentro escabulléndose misteriosamente a través de las posiciones delanteras del ejército. Guevara decidió dividir la fuerza y enviar a los visitantes y heridos hacia el sur, en un destacamento dirigido por el cubano Joaquín (comandante Julio Vitale Acuña Núñez). Este grupo partió el 17 dejando a los visitantes dos días después en un lugar próximo al campamento de Muyupampa. Habían pensado escapar sin gran dificultad, pero fueron casi inmediatamente atrapados por oficiales del DIC (Departamento de Investigación Criminal) y entregados a la Cuarta División.

La captura de Debray en especial, causó sensación fuera de Bolivia y amplió enormemente la imagen de la campaña. Los tres extranjeros fueron acusados de guerrilleros, pero el enigmático Roth fue liberado en julio. Dado que se los juzgó bajo ley militar, su pretendida culpabilidad era punible con una pena máxima de treinta años de prisión, pues en Bolivia la pena de muerte había sido abolida. Empero, pocos bolivianos creían que alguien pudiera sobrevivir a una sentencia de treinta años de cárcel militar y señalaban que, con excepción de aquellos que habían colaborado activamente con el ejército, ningún guerrillero había sido capturado vivo, llamando la atención el tradicional respeto del ejército por la ley de fuga, bajo la cual los prisioneros eran muertos "mientras intentaban escapar". Por ello, se comprendió que la vida de los prisioneros corría grave peligro. Como resultado de esto y de la creciente conciencia en torno a la presencia de Guevara en el país, Bolivia comenzó a atraer observadores nunca antes vistos. Feltrinelli y Maspero, los editores de Debray, llegaron a La Paz para proteger los intereses de su autor; Maspero fue expulsado por el empeño que puso en ello. Por otra parte, un tal Khan se las arregló para infiltrarse en Camiri, donde en una empresa descaminada se dio a la tarea de tomar instantáneas a los oficiales locales. Resultó ser el trotskista paquistaní Tariq Alí, que no hablaba ni rudimentariamente el español, por lo cual se tardó un poco en comprender que –como él afirmaba– no se trataba de un guerrillero; pero esto no impidió que se lo expulsara del país aún más rápidamente que a Maspero. Estos acontecimientos y uno de los informes más detallados tanto sobre la situación de Debray como sobre la creciente presencia norteamericana en Camiri, fueron presentados por Perry Anderson y Robin Blackburn, intelectuales marxistas que dejaron momentáneamente sus tareas de editores del New Left Review con sede en Londres para trabajar como re-

porteros del Observer. La captura de Debray originó asimismo una carta de De Gaulle, quien a pesar de haber dejado impresionados a los oficiales de alto rango durante su visita a Cochabamba en 1964, no pudo con la carta disminuir la francofobia que había infectado la prensa local.

En el frente militar, el esfuerzo de sacar clandestinamente a los visitantes había resultado en una grave división de las fuerzas guerrilleras, que nunca pudo ser superada. Los rebeldes estaban compuestos ahora por un total de cuarenta hombres en dos grupos, además de Tania. Ninguno de los dos sabía dónde se encontraba el otro, teniendo que enfrentar una fuerza de 1.500 hombres. Joaquín perdió más hombres en escaramuzas al intentar salir de la región de Muyupampa, y Guevara presentaba un deprimente balance para el mes de abril: "...el aislamiento sigue siendo total: las enfermedades han minado la salud de algunos compañeros, obligándolos a dividir fuerzas, lo que nos ha quitado mucha efectividad; todavía no hemos podido hacer contacto con Joaquín; la base campesina sigue sin desarrollarse, aunque parece que mediante el terror planificado, logramos la neutralidad de los demás, el apoyo vendrá después..."[32]

Si las cosas estaban sombrías para la guerrilla, las FF AA claramente tampoco estaban logrando gran éxito ni en lo militar ni en lo que a relaciones públicas se refiere. Las versiones oficiales de lo que estaba ocurriendo "en el frente" al principio eran cautelosas, pero después entraron en una fase de verborrea contradictoria, hiperbólica y falsa. A Barrientos se le dio por ofrecer conferencias de prensa en las que en un momento adjudicaba quinientos hombres a las fuerzas rebeldes, en otro demandaba la invasión de Cuba y alternaba desatinadamente entre afirmaciones de que la existencia de Bolivia estaba en juego y confirmaciones acerca de la "eliminación" de un elevado número de guerrilleros. Habituado ya, el cuerpo de periodistas extranjeros era convocado a palacio para escuchar cosas como "...la ideología de Fidel Castro es la ideología de un loco, que usa millones de dólares por día, o por mes, con el fin de pagar agentes, quienes finalmente no hacen nada más que satisfacer el hambre de China comunista..." o que los males de la economía boliviana se debían al crecimiento de la población, lo cual, en consonancia con una hasta la fecha desconocida ley económica, había reducido la producción.[33]

Los periodistas fueron invitados a deleitarse con una "manifestación espontánea" del pueblo de La Paz en un día en que todas las oficinas del go-

32 *Bolivian Diaries*, p. 151; *Presencia*, (La Paz), 17 de junio de 1984.
33 Vázquez Díaz, *op. cit.*, pp. 56, 98, 111.

bierno permanecieron cerradas desde las tres de la tarde. A los funcionarios que se negaron a participar se les descontó cinco días de sus salarios. El evento comenzó bien, con contingentes del recientemente creado Comité de Damas Cristianas y el Frente Anticomunista de Bolivia, que vendieron banderines y gritaron consignas como "muera Debray". "Debray debe morir" y "con las Fuerzas Armadas contra los bandoleros rojos", al son de *Puente sobre el río Kwai*, entonado por la banda militar que pasaba casualmente en ese momento. Pero, a medida que se agotaba el día, el número disminuyó y las anteriores consignas que surgían entre la multitud eran otras, ahora contra el régimen y de apoyo a Fidel. Cuando la campaña estaba en su punto culminante, incluso Ovando emitió con pesar: "a los bolivianos les repugnan los comunistas pero todavía no han demostrado su repugnancia..."; resultó imposible introducir un sentimiento antiguerrilla generalizado y el gobierno desvió muy pronto su atención hacia temas directamente militares, requiriendo, de vez en cuando, de los servicios del arzobispo Clemente Maurer para confirmar que la Iglesia se oponía inalterablemente a aquellos "...quienes están ahogando al país en sangre, portando banderas extranjeras y haciendo mal uso de la palabra 'guerrillero', que para nosotros significa honor, patriotismo y dignidad humana".[34]

En el poco definido frente entre Camiri y Santa Cruz, las dos divisiones a las que se atribuyó la "eliminación" de los rebeldes –la Octava que avanzaba del norte y la Cuarta que avanzaba del sur– tardaron en adaptarse a las condiciones de una guerra de guerrillas y a la fastidiosa presencia de los periodistas. Al principio, la fuerza aérea admitió alegremente su empleo de napalm e incluso se le lanzó desde un avión donde viajaba un reportero. En Camiri se observó de cerca una situación próxima al caos; en agosto, el comandante de la Cuarta División fue duramente presionado a explicar la muerte de su jefe de inteligencia, un capitán Padilla, muerto de un disparo de su propio revólver en el hotel Chapaco. La afirmación de que había sido ejecutado por la célula urbana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras interrogaba a una mujer sospechosa fue discretamente abandonada cuando se descubrió que la dama en cuestión estaba más que borracha y que su esposo se oponía a las atenciones de que era objeto. Un manifiesto emitido por el ELN (formalmente enunciado por Guevara a fines de marzo) sugería de que de tomarse por cierta la versión oficial, sólo se podía pensar que las técnicas de interrogatorio que estaban siendo difundidas por entonces en

34 *Ibid*., p. 94.

la zona del Canal de Panamá estipulaban que para realizarlo había que despojarse de botas y cinturones durante el mismo. El que los oficiales participaran en tales diversiones se debía a que muy pocos de ellos estaban preparados para exponerse a los riesgos de ingresar al campo, tarea que fue delegada en gran medida a subalternos y suboficiales.

Tal situación alarmó a los militares norteamericanos que seguían de cerca los acontecimientos. Ya el 9 de marzo, el general Robert Porter, jefe del Comando Sur de Panamá, visitó La Paz para conversar con Ovando y todo el estado mayor general. Tres días después llegó al país un equipo de entrenamiento para contrainsurgencia compuesto por cinco hombres. A mediados de marzo, cuatro miembros de la misión militar norteamericana permanente sobrevolaron la zona guerrillera en compañía del agente de la CIA, Aurelio Hernández. Esta actividad inevitablemente atrajo la atención del público y poco después La Paz estaba inundada de rumores sobre el supuesto envío de 25 mil marines a Bolivia, tal como ocurrió en la República Dominicana un año antes. Se dio mucha publicidad a un tren enviado de la Argentina, supuestamente cargado con harina, pero del que se sospechaba que en realidad contenía tropas y municiones. Tanto el general Stroessner como el general Onganía desplegaron un elevado número de hombres a las fronteras paraguaya y argentina respectivamente y cooperaron estrechamente con el alto mando boliviano. Esto provocó una especie de reacción nacionalista y más bien invalidó las denuncias de Barrientos acerca de una "intervención extranjera". Respaldado por el influyente jefe de estado mayor, general Marcos Vásquez Sempértegui, el coronel Zenteno argumentó que la ayuda militar externa debía limitarse al mínimo y que el conflicto no debía internacionalizarse. Ovando coincidía con esta postura y a mediados de año obligó a Barrientos a cambiar a los comandantes de localidades claves, enviando a Zenteno a Santa Cruz y a Luis Reque Terán a Camiri, donde emprendieron la "Operación Cynthia", un movimiento de pinzas destinado a forzar a los rebeldes a salir a campo abierto en el noreste. Los resultados de tal operación tardaron en revelarse, pero a la larga fueron gratificantes. En efecto, no fue hasta septiembre que se logró acorralar a los guerrilleros, un contingente total de seiscientos rangers entrenados en La Esperanza (en las afueras de Santa Cruz) por el coronel Joseph P. Rice, el mayor Robert ("Pappy") Shelton y otros veinte hombres de las Fuerzas Especiales norteamericanas ("Boinas Verdes") se lanzaron a la zona. La presencia norteamericana en Ñancahuazú estuvo sumamente restringida a representantes de la CIA, cuyo papel en los interrogatorios de cautivos fue primordial.

La debilidad fundamental de los guerrilleros cuya "base política no coincidía con el teatro de operaciones" –en palabras de Debray–[35] se demostró de modo concluyente y brutal a fines de junio, cuando el régimen desvió momentáneamente su atención de la zona de combate a Siglo XX, tan sólo 257 kilómetros más allá. Que la guerrilla había desestabilizado al gobierno y fortalecido a la oposición ya estaba claro el 19 de abril, cuando en una asamblea general en Catavi se resolvió demandar la restitución de salarios y la reincorporación de aquellos despedidos desde mayo de 1965, plegarse a la causa de los rebeldes, contribuir a ella con alimentos y medicinas y, finalmente realizar una marcha en Oruro el 8 de junio y un ampliado en la FSTMB con delegados estudiantiles y otros sindicatos el 24 de junio. La declaración de un estado de sitio suspendió la manifestación, pero resultó difícil detener los preparativos para la asamblea; la cual tenía toda la apariencia de convertirse en la más amplia y políticamente vigorosa que se celebraría desde el golpe de 1964. En Siglo XX, los partidos de izquierda estaban unidos en torno a las demandas básicas y acordaron turnarse para hacer guardia de las entradas al campamento y del edificio sindical. En la víspera del ampliado, la noche de San Juan, Llallagua estaba transformada por la afluencia de los delegados visitantes, por el cuadro que ofrecían muchas fogatas y el resonar de júbilo de los mineros y sus familias que celebraban la fiesta del solsticio de invierno. Se dice que, en aquella ocasión, la COMIBOL se portó desacostumbradamente generosa en la distribución de cerveza y que organizó bailes en conexión con radio Pío XII, algo que jamás antes había ocurrido. Hacia la medianoche, muchos habitantes del campamento estaban muy animados. Uno que no estaba demasiado embriagado era Rosendo García Maisman, un militante del PCB a quien le tocaba el turno de guardia del sindicato y que, junto a Simón Reyes, había pasado una velada relativamente sobria. Alrededor de las cuatro de la mañana, García se dirigió al sindicato, donde se reunió con Juan Carlos, un muchacho de 18 años y *disc jockey* de La Voz del Minero que, al emitir música para despertar al primer turno, entremezclaba exhortaciones de mantenerse alertas por si el ejército intentara suspender el ampliado.

Cuando García ingresó en el edificio, las tropas ya estaban escabulléndose silenciosamente por los linderos del campamento, después de haber llegado en un tren que pudo rodar calladamente hasta detenerse a un kilómetro y medio de la estación. Su primer objetivo era la emisora, pero García logró

35 *Che's Guerrilla War*, p. 114.

alcanzar la sirena y la hizo sonar en señal de alarma. Le dispararon pero antes de caer pudo matar al oficial que dirigía el ataque. Una resistencia organizada era imposible y las bajas del ejército fueron posteriormente atribuidas al hecho de que la policía, que también había sido alistada para el operativo, había disparado por error a sus colegas. No obstante, fueron los mineros y sus familias quienes más sufrieron bajo el fuego de las bazukas y ametralladoras durante cerca de dos horas. Inicialmente, el ejército reportó 16 muertos y 71 heridos, pero pronto se supo que alrededor de 87 personas, incluyendo a mujeres y niños, habían muerto y muchos más estaban heridos. (La cifra real se conoció en parte, porque la nueva planta de *sink and float* había sustituido a los hornos de calcinamiento que el ejército había utilizado en el pasado para desembarazarse de los cuerpos).

La masacre de San Juan no fue la más sangrienta, pero sí la más cuidadosa y duramente planeada en la trágica historia de las minas bolivianas. Como respuesta a la acusación de asesinato a sangre fría que inevitablemente atrajo la atención de los periodistas que cubrían la guerrilla, Barrientos declaró:

> No estoy inventando una historia. El proceso subversivo se desarrolló en la siguiente forma: primero hubo reuniones agresivas en las cuales los participantes se declararon en favor de las guerrillas y recaudaron dinero para las mismas. Después vinieron las amenazas contra el poder constitucional. Más tarde, las radios de Huanuni, Catavi y Siglo XX emitieron declaraciones y trataron de incitar al pueblo a derrocar el gobierno, para comenzar la lucha de clases, e instalar un gobierno proletario. Últimamente los rojos y los viejos líderes sindicales corrompidos declararon a las tres minas nacionalizadas más importantes "territorio libre", donde nadie podría entrar sin su permiso. Debido a esto, el gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas que ocuparan las minas, para restablecer el orden y el principio de autoridad. Esto hubiera sucedido en cualquier país.[36]

Unas treinta mil personas asistieron al entierro de los muertos, en un formidable despliegue de solidaridad y protesta; pero la asamblea que tuvo lugar al día siguiente en el nivel 411 de interior mina mostró una respuesta aún más palpable, con la convocatoria a una huelga, la cual fue cumplida con admirable disciplina. El paro finalmente duró dos semanas, a pesar de la total ocupación militar del campamento y se suspendió únicamente cuando el comandante local obligó a los administrativos de la compañía –que habían

36 Vásquez Díaz, *op. cit.*, p. 14. Se pueden encontrar relatos de la masacre en Lora: *A History...*, pp. 345-351 y Simón Reyes: "La masacre de San Juan", en *Guerrillas y generales*, pp. 167-186.

sustituido a los dirigentes sindicales elegidos– a ponerle fin o enfrentar otras "medidas". Para entonces, la universidad de La Paz también había sido declarada territorio libre y Barrientos y Ovando "enemigos del pueblo"; se requirió del empleo de gases lacrimógenos y de la ocupación de sus instalaciones para recobrar una apariencia de orden. Los rumores de golpe crecieron, pero tanto Vásquez Sempértegui como Ovando se resistieron a dar ese paso, debido a la permanente amenaza en el este. Barrientos aguantó la tormenta.

Los acontecimientos del altiplano coincidieron con una serie de escaramuzas entre el ejército y el grupo del Che, bastante lejos de la zona de operaciones y peligrosamente cerca de la vía férrea Santa Cruz-Yacuiba, de la carretera a Cochabamba y de la ciudad misma. Los enfrentamientos en La Florida, Piray y El Filo no fueron choques importantes, pero preocuparon a Zenteno, que no pudo darse cuenta de que las incursiones de Reque Terán desde el sur eran las que estaban obligando realmente a Guevara a avanzar hacia el noroeste y no que el Che estaba tratando de tomar control sobre la carretera Cochabamba-Santa Cruz, como ellos pensaban. Sin embargo, la enfermedad –desde mediados de junio, el Che sólo pudo desplazarse a lomo de caballo, debido a su asma– y el hambre hicieron que las principales fuerzas rebeldes necesitaran abastecerse de provisiones y medicinas; el lugar más lógico para proveerse de ellas era Samaipata, un poblado en la carretera principal. El 6 de julio, en lo que hubo de ser la más célebre de sus acciones, los guerrilleros secuestraron un camión y una flota llena de estudiantes oruretios que regresaban de Santa Cruz de participar en una manifestación contra el gobierno. Todo el tráfico fue interrumpido en las afueras del caserío de Las Cuevas, en tanto que los rebeldes ordenaron a un alemán, propietario de una barraca, que telefoneara a Samaipata y comunicara a las autoridades municipales que ocuparían el pueblo esa noche. Esto no parece haber originado demasiado nerviosismo ya que, poco después de medianoche, cuando los vehículos se acercaban a la tranca de Samaipata (el puesto de control de tránsito que existe en cada poblado boliviano, sea del tamaño que sea), la policía de tránsito se acercó a examinar sus papeles con la acostumbrada imperturbabilidad y se la pudo vencer con facilidad. Una vez en el pueblo, se compró productos a precios magnánimos (y no con dinero falso como afirmaba el régimen) y la pequeña guarnición, que dormía en la escuela, fue despojada de sus armas y sólo murió un soldado que ofreció resistencia. En treinta minutos, los guerrilleros habían partido dejando a sus rehenes militares en Las Cuevas y desaparecido por la carretera hacia el sur. El país quedó

estupefacto ante la audacia de esta incursión; pero resultó ser la cúspide de la campaña guerrillera, un golpe propagandístico que encubrió la desesperada situación de los rebeldes.

Lo anterior se confirmaba con nuevas deserciones a principios de agosto y el desmoronamiento de la ahora aislada red urbana con el arresto de Loyola Guzmán (a quien liberaron a cambio de los rehenes alemanes capturados a mediados de 1970). Con todo, el grupo de Joaquín, que durante varios meses intentó en vano reunirse con el Che, aceptó la oferta que le hizo un campesino llamado Honorato Rojas, a quien conocía de previos encuentros, de guiarlos por el río Grande hasta un lugar conocido como el Vado del Yeso. La hacienda de Rojas había sido acantonada con soldados vestidos de campesinos y él había fijado con el capirán Mario Vargas Salinas el punto donde cruzarían el río. Al atardecer del 31, Rojas guió a los diez hombres que componían el grupo de Joaquín, incluyendo a la ahora deprimidísima Tania, hasta una emboscada de la que era imposible escapar. Todos fueron muertos inmediatamente o una vez que fueron interrogados. Tres días después, el grupo del Che atravesó el mismo lugar; habían estado tan sólo a unas horas de marcha de distancia de ellos.

El grupo de diecisiete hombres que quedaba se dirigió al oeste en un esfuerzo más por romper el apretado cerco. El 22 de septiembre ingresaron al poblado de Alto Seco, donde participaron en una fiesta y sus integrantes ofrecieron disertaciones políticas. Un campesino quiso unírseles, pero uno de los combatientes bolivianos lo disuadió con estas palabras: "…no seas tonto, estamos acabados… no sabemos cómo vamos a salir de aquí…".[37] Ya no pudieron ocultar su posición por mucho tiempo; cuatro días después, la Cuarta División había determinado con precisión que estaban camino al pueblo de La Higuera. A mediodía del 26, la vanguardia al mando de Coco Peredo fue interceptada y eliminada, pero se requirió del despliegue de los rangers durante las siguientes dos semanas para establecer con exactitud la situación de Guevara.

No muy lejos de La Higuera, el operativo dirigido por el capitán Prado en que se capturó al líder guerrillero no fue el último evento en esa aislada y desordenada guerra. Un grupo encabezado por Inti Peredo, enviado en una misión más bien suicida para detener el ataque más importante del ejército, en la Quebrada del Yuro, se las arregló contra toda probabilidad para escapar. De estos diez hombres, cuatro murieron el 14 de octubre, a unos 32 kilómetros de La Higuera, y uno (el boliviano Ñato) fue capturado y ejecutado cuando estaba prácticamente fuera de la zona, en El Mataral. De toda la fuerza, un

37 González y Sánchez Salazar, *op. cit.*, p. 179.

total de cinco hombres escaparon: tres cubanos que cruzaron la frontera chilena en febrero de 1968 y que fueron escoltados por Salvador Allende hasta Tabitf, desde donde viajaron a Praga y La Habana; y dos bolivianos –Inti Peredo y Darío (David Adriázola Veizaga)–, que llegaron a Santa Cruz, tomaron un avión a Cochabamba y allí se ocultaron. En tardía represalia, el reconstituido ELN y sus amigos extranjeros en 1969 mataron al campesino traidor Rojas que vivía bajo protección militar en Santa Cruz; el oficial de inteligencia de Zenteno, coronel Quintanilla, fue muerto en Hamburgo en 1971. En mayo de 1976, el propio Zenteno fue asesinado en las calles de París y, aunque el régimen de entonces del coronel Banzer atribuyó la acción al ELN, toda la evidencia disponible sugiere que el propio gobierno dirigió el asesinato dado que el general manifestaba una creciente independencia y oposición al régimen.

Barrientos anunció la derrota de la guerrilla con la muerte de Guevara. Pero aún le quedaba por resolver el problema de Regis Debray, cuyo consejo de guerra comenzó el 26 de septiembre y todavía estaba en proceso cuando el Che fue capturado. Si bien la presión externa a favor de un juicio adecuado y la insistencia de la CIA en torno a la realización de un interrogatorio profundo (a cargo de un tal Dr. Eduardo González, exiliado cubano), libraron a Debray de una ejecución sumaria, las órdenes de Barrientos de juzgarlo en un tribunal militar crearon más problemas de los que resolvieron. Los oficiales de menor rango, sedientos de sangre, fueron de algún modo aplacados, pero el tribunal ofrecía poca apariencia de justicia a tiempo de que permitía a Debray dar un impresionante discurso, cuyo efecto fue similar a la defensa de Castro después del asalto al cuartel Moncada en octubre de 1953.[38] Asediados por periodistas, los oficiales encargados del juicio se vieron nadando en aguas demasiado profundas; el coronel Efraín Guachalla se excusó de responder a todas las preguntas con el argumento de que él no era un "*homo sapiens*", en tanto que el fiscal, coronel Remberto Iriarte Paz, prometió estudiar aquellas afirmaciones de que el juicio estaría quebrantando la Constitución, sólo para regresar a la sala del tribunal por la rande y disculparse por haber olvidado importantes apuntes en su otra chaqueta.[39] Para el Ejército fue mucho más vergonzoso el caso de Jorge Vázquez Viaña, militante del PCB e hijo del respetado historiador Humberto Vázquez Machicado. El guerrillero, capturado cerca de Monteagudo el 27 de abril con varias heridas, fue transferido a un hospital de Camiri. Luego de varios días de

38 Ambos discursos están editados en On Trial, Londres, 1968.
39 Vázquez Díaz, *op. cit.*, p. 215.

interrogatorios dirigidos por González, el agente de la CIA, Vázquez desapareció y el Ejército afirmó que había escapado a la Argentina, pero el hombre estaba completamente inmóvil y todavía recuperándose del shock posoperatorio. Con un macabro sentido de corrección, las autoridades dejaron un asiento vacío para Vázquez en la sala del tribunal, ya que era "testigo para el enjuiciamiento". Cuando un periodista preguntó a Iriarte si Vázquez sería presentado, éste respondió que había "huido del hospital", a lo cual el periodista añadió que tenía información de que Vázquez aparecería el 2 de noviembre. Iriarte sonrió e hizo observaciones sobre lo bien informada que estaba la prensa, sin darse cuenta que el 2 de noviembre era Día de Difuntos.

La reputación de las autoridades bolivianas fue constantemente manchada por revelaciones sobre la intervención de la CIA en la operación contrainsurgente. Los periodistas habían observado el papel tan notable que habían desempeñado Eduardo González y Félix Ramos en Camiri y Vallegrande, formalmente incorporados al ejército boliviano como capitanes. Un año después, el nada liberal ministro del Interior de Barrientos, Antonio Arguedas, abandonó repentinamente La Paz y apareció en La Habana, donde entregó a Castro una copia del diario del Che que había sido fotografiado por Ramos, habiendo sido enviado a Estados Unidos casi antes de que los bolivianos supieran de su existencia. El extraordinario cambio de actitud de Arguedas y las no menos dañinas revelaciones acerca del alcance de las operaciones de la CIA en Bolivia, hirieron profundamente el amor propio de los servicios bolivianos, los que se embarcaron en una serie de investigaciones judiciales sobre el tema en julio de 1968. En éstas, toda una columna de oficiales de alto rango, incluyendo a Zenteno y al coronel Andrés Selich Chop, procedieron a detallar los nombres y narrar en detalle las actividades de los agentes norteamericanos en Bolivia, las cuales fueron esenciales para derrotar a la guerrilla.[40] Aunque tales revelaciones apenas sirvieron para dar mayor cuerpo a una historia ya ampliamente conocida, reflejaron y ahondaron los antagonismos que habían surgido dentro del ejército. En lo superficial, por lo menos, éstos corresponden a diferencias entre los seguidores de Barrientos y aquellos de Ovando, generalmente

40 Arguedas nombró a jefes de la CIA en La Paz, como Larry Sternfeld y John S. Tilton, y al mismo tiempo detalló los nombres de agentes como Nicholas Leondiris, Hugo Murray, Gabriel García García, Mario González y N. Hernández. Zenteno subrayó el importante papel desempeñado en la campaña de Ñancahuazú por el coordinador de inteligencia en Santa Cruz, Willy Cuéllar, por Ramos y González. En Suárez, *op. cit.*, pp. 195-208; y en Gregorio Selser: *La CIA en Bolivia*, Buenos Aires, 1970, se ofrecen muchos testimonios complejos junto con una serie de entrevistas.

oficiales jóvenes. Los miembros del tribunal fueron ascendidos a generales después del juicio, en tanto que Reque Terán y Zenteno, los comandantes claves en la campaña y claramente favorables a Ovando, se quedaron con el grado de coroneles. Tales disparidades también se pusieron de manifiesto en los escalafones inferiores de la jerarquía: el capitán Vargas Salinas, cuyas proezas militares alcanzaron al ametrallamiento, desde una posición inexpugnable de su ribera, de gente varada en medio de un río caudaloso fue inmediatamente promovido a mayor y recibió el apodo de "León del Misicuni"; en tanto que el capitán Prado, que había capturado a Guevara, y el mayor Sánchez, que había desplegado más tenacidad y coraje personal que cualquier otro oficial, conservaron sus rangos. En realidad, al más bien honesto capitán Prado se lo eligió como chivo expiatorio para la ejecución de Guevara, ordenada desde La Paz y procesada en una visita de Ovando y del feroz croata Selich a La Higuera: de este último se dice que descargó su revólver en el brazo de Guevara durante el interrogatorio dirigido por Ramos.

La verdad sobre este incidente y sobre la suerte que corrió el cadáver de Guevara probablemente jamás se sabrá,* en gran parte debido a que muchos de los involucrados ya han muerto y algunos en circunstancias muy dudosas. La mayoría de los relatos identifican a un sargento Mario Terán como el verdadero asesino del Che y el gran número de heridas de bala en sus extremidades bien pueden explicarse por la versión de que, una vez que el líder guerrillero había expirado, se permitió a una serie de militares de bajo rango "participar" en la ejecución. Sin duda, el culto erigido en torno al Che dictaminaba que tales cuestionamientos habrían de atraer un exceso de comentarios y alimentar los montones de basura comercial rápidamente acumulable en los Estados metropolitanos hambrientos de sensaciones. Para la vida política boliviana, sus consecuencias fueron bastante más subrepticias pero también más significativas.

La guerrilla resultó catalizador de una serie de cambios en la vida política, aunque a corto plazo el régimen de Barrientos se mantuvo firme. El ejemplo de los rebeldes de Ñancahuazú tuvo un impacto particular en los estudiantes, para quienes su abnegación y heroísmo contrastaba enormemente no sólo con las limitaciones doctrinales y la orientación organizativa evidentemente indolente de la izquierda establecida, sino también con la salumería espiritual tan transparente de los partidos de la derecha moderada, especialmente del

* Los restos del Che y de sus compañeros fueron recuperados en julio de 1997 y trasladados a Cuba. (N. del E.)

PDC. Al igual que en otros países de América Latina, la contienda guerrillera provocó rupturas generacionales muy grandes en las principales agrupaciones políticas y motivó el interés en nuevas corrientes ideológicas que pretendían fusionar la crítica social del marxismo con un humanismo cristiano combativo. En Bolivia, el desarrollo de la corriente entre la juventud de la clase media tomó un atajo ligeramente distinto. La Iglesia misma estaba muy débil, pues contaba aun con menos curas que Uruguay, el país más secular de todos los Estados latinoamericanos y sumamente dependiente del apoyo del Vaticano que tuvo el efecto de restringir el crecimiento de la teología de la liberación entre los curas nacionales jóvenes. Por otra parte, la relativa falta de autoridad de la jerarquía eclesiástica hizo posible que los elementos disidentes del PDC desarrollaran ideas independientes sin tener que vencer mayores restricciones. Muchos, como Néstor y Jaime Paz Zamora, adoptaron un radicalismo ideológico en el extranjero, en Chile o en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Otros, como Adalberto Kunjara, que más tarde se convertiría en un líder de PCB, asumieron una postura francamente sindicalista; mientras que muchos dirigentes estudiantiles, como el agitador cruceño Óscar Eid Franco, comenzaron a adoptar una actitud directamente aventurista y proguerrillera.

La formación del PDC revolucionario que señalaba más que consolidaba este proceso desigual y confuso, tuvo el efecto de empujar a la izquierda movimientista, ahora completamente desorientada y desorganizada, a reconsiderar su posición. Si bien la ruptura más importante se presentó en el PDC, lo que se dio en el curso de los dos años posteriores a Ñancahuazú fue una crisis generalizada en todos los partidos centristas, en los círculos políticos de la clase media urbana y en los medios intelectuales. A pesar de su fracaso, la guerrilla proporcionó una especie de salto cualitativo de la órbita del 52 y un desafío para reconsiderar posiciones para los sectores ubicados entre las masas populares, la pequeña pero políticamente belicosa burguesía y el ejército. Este ímpetu fue reforzado por la permanente ausencia de la COB y de cualquier avance perceptible hacia la reconstitución del sindicalismo militante como eje fundamental de la izquierda, a lo que se añadía la falta total de orientación en el régimen, a no ser su degeneración en una dictadura absolutamente impune y a la entera disposición de Washington.

En efecto, la experiencia de la guerrilla había disminuido la credibilidad de Barrientos a los ojos de EE.UU, pues aquél mostraba signos de una errática independencia y no conseguía afianzar un aparato bastante menos estable de lo que aparentaba. Consciente de que la guerra de guerrillas y la sólida presencia norteamericana en su gobierno había inquietado a ciertos sectores militares y

provocado cambios en los partidos centristas de clase media, Barrientos intentó redefinir su estilo: "Yo debo reafirmar una definición que ha hecho mi gobierno en forma rotunda: si bien nosotros somos antiimperialistas, pero estamos con la Alianza para el Progreso, porque en esta nueva oportunidad encontraremos todas las posibilidades para poder cumplir un verdadero plan de gobierno".[41] Otras de sus declaraciones fueron aún más confusas, proporcionando con ello a los humoristas paceños, encabezados por el cortés y acre "Paulovich", una actividad diaria de parodia al discurso político estilo militar.[42]

A lo largo de 1968, Barrientos vio que estaba perdiendo respaldo político y militar. Los miembros del gabinete ya no poseían ninguna base real de popularidad y la FSB mostraba un peligroso interés en respaldar a Ovando y en cultivar el apoyo de oficiales que formulaban críticas nacionalistas frente a la política económica del régimen. El hombre que sobresalió como figura principal de ese movimiento fue el exfalangista general Juan José Torres, uno de los oficiales más antiguos y respetados del Ejército, que empujó a Ovando a romper con el presidente. No obstante, el reto más palpable que enfrentó Barrientos no provenía de ese sector, más institucionalista y proclive a la tecnocracia, sino de un caudillo militar de viejo estilo, el general Marcos Vázquez Sempértegui, jefe de estado mayor, quien en agosto de 1968 se lanzó en un intento de golpe que fue inmediatamente aplastado debido a que tanto los nacionalistas militantes como la FSB le quitaron su apoyo, temiendo justificadamente que Vázquez reemplazaría una dictadura personalista por otra.

Como respuesta a esto y a la creciente amenaza que representaba Ovando, Barrientos empezó a crear fuentes de apoyo independientes dentro del Ejército. Prestó especial atención a la brigada paracaidista de élite denominada CITE (Centro de Instrucción de Tropas Especiales), que tenía su cuartel general en

41 *Presencia*. (La Paz), 3 de agosto de 1967.

42 "El asunto es bien claro: soy nacional izquierdista, anarco-militarista. Esto quiere decir: social-nacionalista antimarxista pro-derechista, que no se debe confundir con nacional-socialismo o popular anti-civilista. Soy una especie de neo-socialista anti-ruso, casi tiroista, pero anti-imperialista y pro-americanista sin tener nada que ver con los peronistas gonzalistas y viendo más bien con simpatía los movimientos políticos que combaten al totalitarismo sin desechar al liberalismo pero marchando siempre *juntos* con los pueblos subdesarrollados que sufren su atraso por causa de las dictaduras militaristas..." (citado en Mariano Baptista Gumucio, *Historia contemporánea de Bolivia*, La Paz, 1976, p. 256). Para una descripción sucinta de Barrientos, así como de las principales acciones de su gobierno, ver Raúl Peña Bravo: *Hechos y dichos del Gral. Barrientos*. La Paz, 1982 o –pero sólo para aquellos con un sólido criterio– la verdaderamente horrible hagiografía redactada a gran costo por Fernando Díez de Medina: *El general del pueblo*, La Paz, 1972.

la ciudad natal del general. También estableció una fuerza paramilitar a principios de 1969, FURMOD (Fuerzas Unidas para la Represión y el Mantenimiento del Orden y el Desarrollo), que era independiente del alto mando y leal únicamente a Barrientos. La aparición de FURMOD, que pronto comenzó a actuar de manera que rememoraba al Control Político, aumentó los temores sobre la preparación de una dictadura abierta por parte del presidente. Si ése era el caso, resulta dudoso que hubiera durado mucho, ya que ahora Barrientos no contaba con apoyo sólido de ningún sector, excepto del campesinado; pero tampoco había ninguna figura popular capaz de plantearle un desafío: la falta de un toque populista era apreciable en Ovando. La pregunta inmediata sobre el futuro del gobierno fue súbita y violentamente resuelta sin consecuencias políticas obvias, cuando en abril de 1969 el helicóptero de Barrientos se estrelló al regresar de una asamblea política con campesinos cerca de Arque, en el departamento de Cochabamba. Nunca llegó a comprobarse si fue un accidente o sabotaje, aunque no se encontraron balas en los cuerpos rescatados de los restos del helicóptero. Las acusaciones y sospechas se prolongaron por cinco años y el conocido e impetuoso mayor Faustino Rico Toro fue objeto de acusaciones relacionadas con la muerte del presidente por algún tiempo; sin embargo, fuese como fuese, el incidente que causó la muerte de Barrientos no resultaba nada extraño a la forma en que éste desarrolló su vida.

La muerte de Barrientos dejó al país en un vacío que no habría de llenarse en más de dos años. Le sucedió su vicepresidente electo, el socialdemócrata de modales apacibles Luis Adolfo Siles Salinas. Este paso fue aprobado por el alto mando, que de por sí estaba bastante desorientado, ya que Ovando estaba en EE UU con licencia médica para recuperarse de un tratamiento a su úlcera estomacal, pero también inspirada en motivaciones políticas. En estas condiciones, a Ovando le resultaba conveniente aceptar la asunción de Siles al poder, pues el nuevo gobierno carecía visiblemente de popularidad o base política a despecho de su carácter civil. La falta de independencia de Siles respecto a los militares restringió su capacidad de acción casi completamente al intentar, de alguna manera, aflojar las restricciones políticas, pero aún dentro del marco establecido por Barrientos. Por su parte, Ovando apresuró su regreso e intentó recuperar el legado de su difunto colega a través del pacto, pero su estilo personal era inadecuado para tal actividad. Al mismo tiempo, participó en la ahora crítica tarea de deliberar entre las diversas facciones de los oficiales, tratando de juntar las piezas que le permitieran formular un proyecto viable para una nueva etapa de gobierno militar. Este proceso fue directamente influido por el régimen militar nacionalista del general Velasco, establecido

en el Perú en octubre de 1968, el cual ya estaba auspiciando una cadena de nacionalizaciones, preparando una reforma agraria y poniendo considerable distancia entre su gobierno y Washington con cierto efecto y no sin aclamación popular. A fines de septiembre de 1969 y luego de haber estado estudiando silenciosamente la experiencia peruana, Ovando se aseguró de que hubiera suficiente acuerdo entre los comandantes para dar el paso definitivo.

El 26 de septiembre, el desventurado Siles, que reconociendo su situación una vez había declarado: "...he llegado al gobierno solo y también lo abandonaré solo", fue arrestado mientras realizaba una visita a Santa Cruz y llevado fuera del país sin mayores ceremonias. Los cinco meses de prolongación del régimen barrientista, que fueron producto de un refinamiento constitucional y de una falta de preparación en todos los frentes, llegaron a su fin sin mayor consternación. Su caída abrió paso a un período sumamente cargado de maniobras políticas y de experimentación, donde los remanentes del 52 y de Ñancahuazú desempeñarían un papel fundamental.

Alfredo Ovando y René Barrientos, antes de los golpes que los llevaron a la presidencia en 1964 y 1969, respectivamente.

5. Crisis de hegemonía (1969-1971)

En los últimos años de la década de 1960 y el inicio de la de 1970 se vivió el fin del "auge de la posguerra" en las naciones metropolitanas, y los Estados neocoloniales sufrieron crisis políticas aun más agudas. La proposición de que los años comprendidos entre 1968 y 1975 representan un "momento revolucionario" definitivo no solamente en países subdesarrollados sino también en Europa no resiste un análisis serio (aun cuando se excluya a Norteamérica), pero ciertamente resulta que en ese lapso el sistema político y económico establecido después de 1945 se fracturó profundamente. Si bien es posible que en la memoria popular no estén presentes ni la devaluación de 1967 de la libra esterlina, moneda que desde entonces quedó desposeída de su autoridad mundial, ni la devaluación del dólar que devino cuatro años más tarde con consecuencias infinitamente mayores, ya que señaló el colapso del sistema financiero post 1945 establecido en Bretton Woods, indudablemente tiene registrados la subida de los precios del petróleo y una serie de conflictos más amargos que en algunos sentidos todavía no pasaron a formar parte de la historia. Entre ellos podemos mencionar las barricadas de Praga y París, en 1968, seguidas del "verano caliente" en Italia, la ofensiva del Tet,* los disturbios de los ghettos urbanos en los Estados Unidos, la revolución portuguesa seguida de la caída del moribundo imperio de Lisboa en África y Asia —se debe señalar aunque sólo sea en reconocimiento al drama del olvidado pueblo de Timor del Este— y, lo más crítico de todo, la humillante derrota para Washington después de la

* Tet: año nuevo lunar en los países del Asia, el cual se celebra durante tres días. (N. de la T.)

prolongada, bárbara y tremendamente costosa guerra en Vietnam, Camboya y Laos.

Esta agitación social y política era absolutamente evidente en Latinoamérica, pese a que muchos países de ese continente estaban todavía bajo los gobiernos militares que habían contenido el impacto de la revolución cubana. La masacre de trescientos estudiantes en el barrio de Tlatelolco, en Ciudad de México, en octubre de 1968, acontecimiento al que la prensa extranjera que se encontraba allí para dar cobertura a los juegos olímpicos dio una amplia difusión, confirmaba que la rebelión no era, de manera alguna, monopolio de la juventud europea: sus compañeros americanos entraron en ella en circunstancias muy distintas. En Guatemala, Venezuela y Colombia, los jóvenes de clase media urbana seguían conformando la mayoría de los grupos guerrilleros que, a despecho de los persistentes reveses que sufrieron, representaban un estorbo más que marginal para los regímenes que acometieron extensas campañas contrainsurgentes en su contra. En otras partes, tal radicalismo generacional fue ensombrecido por una movilización más amplia de masas y por el descontento destinado a debilitar el aparato de control erigido como resultado de la Alianza para el Progreso y de las doctrinas de seguridad del general Maxwell Taylor. En mayo de 1969, los trabajadores de la industria automotriz en Córdoba, Argentina se lanzaron a las calles en un movimiento semiinsurreccional que precipitó la caída de los gobiernos militares que lo sucedieron (Levingston y Lanusse) y allanó el camino para el retorno de Perón. En Chile, el peso de los partidos de la izquierda, los sindicatos y las expectativas originadas por las reformas de la administración de Frei posibilitaron a Salvador Allende acceder al poder en 1970. Su gobierno de la Unidad Popular fue gravemente debilitado por la falta total de una mayoría parlamentaria; no obstante, fue el primer régimen latinoamericano de carácter marxista que nació del voto popular en la posguerra. Cuando ese triunfo se añadió al tenor radical del régimen peruano del general Velasco Alvarado, todo parecía indicar que los temores de Washington de un bloque antinorteamericano en el Cono Sur no carecía completamente de fundamento. Aparte del casi ruritanio* régimen de Stroessner en el subdesarrollado Paraguay, los únicos aliados fiables de Estados Unidos eran Uruguay, donde la persistente amenaza de los tupamaros y la firme actuación del Frente Amplio en las elecciones de 1971 se anularon

* De Ruritania, reino imaginario en las novelas de A. Hope. Significa "con características de irrealidad". (N. de la T.)

única y finalmente con el golpe de 1973; y Brasil, donde las movilizaciones de abril y julio de 1968 no pudieron alterar el sistema basado en el golpe de 1964 y provocaron un serio endurecimiento "institucional". Más hacia el norte, la atención del Departamento de Estado no se concentraba en el descontento social creciente pero firmemente suprimido de Nicaragua, Guatemala o El Salvador sino en el caudillo populista de pistola al cinto, general Omar Torrijos, cuyo golpe de 1968 fue interpretado como una gran amenaza sobre Panamá, país estratégicamente decisivo y hasta entonces gratamente controlable. Aunque el tratado del canal de 1977 habría de enterrar los temores de muchos, no se debe olvidar que por varios años la sagaz locuacidad y la imprevisible naturaleza de Torrijos mantuvieron a la derecha norteamericana en un estado cercano a la apoplejía.

En este contexto, los dos años de confusión política que siguieron al golpe de Ovando en Bolivia pueden interpretarse cuando menos como reflejo de una fractura más importante de la hegemonía estadounidense sobre el hemisferio. Sin embargo, sería incorrecto entender tal inestabilidad como determinada única y predominantemente por la manifiesta vulnerabilidad de Bolivia ante la influencia de sus poderosos vecinos, el apoyo implícito a las fuerzas del radicalismo que ofrecía Santiago o la continua cooperación militar y la presión de ventajosos convenios económicos de Buenos Aires o los avances cada vez más abiertos y aventurados del "subimperialismo" brasileño centralizado en Santa Cruz.

Estos factores desempeñaron un papel importante, pero la crisis de 1969-71 fue más directamente producto de los legados de 1952 y Ñancahuazú, que se combinaron de manera compleja y a menudo contradictoria para colocar la independencia proletaria, la lucha armada y el poder popular nuevamente en la agenda política. La respuesta a esto –un nacionalismo de "izquierda" o "revolucionario" dirigido por los militares– se agotó rápidamente, revelando así el grado de la movilización social, los avances logrados por la izquierda y la extremadamente limitada posibilidad de restringir las reformas dentro de los parámetros establecidos en 1952. Como pronto se puso de manifiesto, las alternativas eran ya sea una ruptura total con ese sistema presionado desde abajo o la imposición violenta del control directo introducido por Paz y depurado por Barrientos.

Los gobiernos de los generales Alfredo Ovando (septiembre de 1969 a octubre de 1970) y Juan José Torres (octubre de 1970 a agosto de 1971) diferían entre sí en estilo y forma, pero compartían el objetivo fundamental de intentar empalmar los extremos identificados con abril de 1952 y con

noviembre de 1964 a mayo de 1965. El hecho de que estos oficiales y la institución sobre la que tenían un control muy irregular hubiera sobrevivido y el que tuvieran relación con las contradicciones esenciales de ese calendario político los obligó a realizar piruetas particularmente tortuosas. Es más, este hecho no tardó en poner en evidencia la debilidad de reeditar un nacionalismo al estilo movimientista, como la de las fuerzas armadas como vehículo de tal proyecto. Los militares estaban en condiciones de recurrir a sólidos precedentes en Busch y Villarroel e incluso a su propio papel en la mejor época del MNR, pero no podían exorcizar la potente memoria del 52. Por otra parte, la COB y la izquierda confrontaban todos los problemas de crear una estrategia que supere dos fracasos históricos: aquel de 1952 en que la clase trabajadora tuvo el poder armado pero no una dirigencia política independiente; y el de 1967, en que se proclamó esa dirigencia sobre la base de acciones armadas, cuyas consecuencias fueron casi insignificantes debido a que estaba completamente distanciada tanto geográfica como políticamente de la masa de obreros y campesinos.

Ovando cambia el curso

Aparte del propio Barrientos, nadie estaba más estrechamente ligado al régimen de 1964-69 como el propio Ovando. Había garantizado el éxito del golpe original, había actuado como presidente interino, controlando al ejército y había estado en primer plano en la destrucción de la guerrilla, en la ejecución del Che Guevara y en la masacre de San Juan. Pero ni el que Ovando hubiera mostrado un desprecio personal poco disimulado por Barrientos, ni el que se hubiera esforzado por detectar los intentos de establecer una dictadura total, ni que en 1966 haya actuado con cierto grado de independencia en la negociación de un contrato con la empresa alemana Klockner para construir la primera planta de fundición de estaño de Bolivia en la localidad de Vinto, pudieron servir de mucho para atenuar su imagen de "gorila" obcecado. Con todo, el golpe del 26 de septiembre no confrontó una oposición popular e incluso fue cautamente acogido. La razón más obvia de tal actitud fue que la COB y la izquierda no estaban en condiciones de emprender una fuerte ofensiva política; pero en ningún caso estaban dispuestas a participar en el nuevo régimen, el cual en su más bien prolongado periodo de gestación y en sus pronunciamientos iniciales parecía estar buscando revertir la orientación adoptada por Barrientos.

Esto se hizo evidente principalmente en un documento publicado el día del golpe y presentado como la base ideológica del nuevo gobierno, el "Mandato revolucionario de las Fuerzas Armadas de la Nación". Este manifiesto había sido redactado por el general Torres, nuevo comandante en jefe y ampliamente identificado como líder de una facción nacionalista dentro del ejército; empero, también lo firmaron varios oficiales de alto rango –generales Rogelio Miranda y David La Fuente y el Almirante Alberto Albarracín–, que habían sido consagrados barrientistas. En ese momento, se pensó que estos oficiales habían puesto sus firmas en un documento que suponían no era más que una variante de la tradicional verborrea militar, el cual les permitía sacar provecho del experimento peruano como justificación para eliminar al entrometido régimen civil de Siles. En efecto, Miranda y los otros se habían opuesto al Mandato por considerarlo "demasiado comunista", pero en cuanto Ovando se puso en contra suya, su aprobación formal los comprometía inicialmente a conformarse con una política según la cual las FF AA:

> "...se ponen al servicio de la Revolución y comprometen su concurso en la lucha por la justicia social, por la grandeza de la Patria y por la auténtica independencia nacional, hoy en riesgo de zozobrar por el sojuzgamiento extranjero... las Fuerzas Armadas advierten la necesidad inaplazable de enfrentar la anarquía desde un gobierno verdaderamente revolucionario que oponga la revolución integral al simple uso de la violencia que se agota en sí misma; que realice una rápida y profunda transformación de las estructuras económicas, sociales y culturales para enfrentar la dependencia, la pobreza, la desorientación y la ignorancia. Sólo un gobierno semejante podrá evitar la polonización y la vietnamización de Bolivia y una nueva y estéril inmolación fratricida".[1]

El objetivo primordial de erradicar la amenaza de otro foco guerrillero está evidente en todo el Mandato, pero los términos en que está expuesto se alejan un tanto de aquellos empleados en los manuales de contrainsurgencia editados por el Ejército de EE UU: "...se instituye el Poder Revolucionario para poner fin a un orden pseudo democrático, antinacional y falsamente estable, caracterizado por ...la existencia de un gobierno que, infiltrado por la rosca, e idológicamente dependiente de la reacción y la derecha, está descalificado para librar la batalla nacional contra la aventura terrorista y contra el

1 "Mandato revolucionario de las Fuerzas Armadas de la Nación", en *Documentos fundamentales de la revolución*, La Paz, 1970, p. 10.

atraso y la dependencia".[2] Habiendo hecho esta valoración, el documento prosigue esbozando los preceptos militares: "...el desarrollo de un país que, como Bolivia, pertenece al área de la miseria y la dependencia no puede basarse en un sistema exclusivamente capitalista ni un sistema exclusivamente socialista, sino en el modelo revolucionario nacional, donde coexistan la propiedad estatal, la propiedad social, cooperativa y comunitaria de los medios de producción y la propiedad privada".[3] Entre los dieciocho puntos tendentes a lograr ese equilibrio, se encuentran promesas de defender y desarrollar el capital nacional manteniendo las garantías para la inversión extranjera, de autorizar subidas de salario "responsables y eficaces", de implementar un amplio programa de obras públicas y de adoptar una línea completamente independiente en política extranjera, incluyendo el establecimiento de relaciones con el bloque soviético.

Inmediatamente después del gobierno de Barrientos y de un período de "cooperación" con EE UU que había sido humillante y económicamente desastroso, semejante programa parecía mucho más aventurado de lo que era. El propio Ovando declaró que uno de los problemas centrales era la ausencia de una burguesía auténtica y la necesidad de reanudar las tareas conferidas históricamente a esa clase.[4] Puesto que tal substitucionismo había sido un objetivo esencial del MNR, no resultaba sorprendente que Ovando también proclamara al nuevo gobierno como continuador de abril de 1952; sin embargo, en ninguna etapa de su régimen repudió a Barrientos; por el contrario, a menudo se presentaba a los campesinos como el sucesor natural del antiguo caudillo y defendía firmemente el Pacto. Es más, Ovando no vaciló en declarar que "...no queremos el socialismo...",[5] o en hacer comparaciones con el gobierno de Velasco Alvarado, donde la participación popular era extraordinariamente limitada: "...obviamente no hay dos países idénticos, sus problemas difieren y también la forma de afrontar esos problemas. Pero en lo fundamental nuestra revolución es igual a la peruana".[6]

Uno de los elementos claves de esta analogía reside en la tesis –expuesta más coherentemente por Torre– de que la verdadera frontera de los países

2 *Ibid.*, pp. 10-11.
3 Ibid., pp. 12-13.
4 Citado en: *El pensamiento político boliviano después de la nacionalización del petróleo*. Cochabamba, 1970, p. 80.
5 *Ibid.*, p. 92.
6 *New York Times*, 30 de septiembre de 1969.

subdesarrollados no yace en sus límites formales sino en el interior, en los principales centros de producción, donde la presencia imperialista es más poderosa. Lo cual significaba que la tarea de las fuerzas armadas –defensa de las fronteras– no debía restringirse a guarniciones en zonas limítrofes, sino extenderse –como en el Perú– a la defensa política y administrativa de la empresa nacional y a la participación directa en el gobierno.[7]

Tales ideas constituían una gran atracción para muchos intelectuales de clase media que se opusieron a Barrientos, pero eludieron la opción de la guerrilla o la afiliación a partidos de la izquierda tradicional. Así como Velasco Alvarado se había rodeado de algunos de los profesionales radicalizados más brillantes del Perú para asesorar a oficiales cuya preparación técnica rara vez sobrepasaba la oficialía del servicio de intendencia, Ovando seleccionó figuras capaces e independientes de la élite de clase media para dotar a su gabinete de cierto encanto y de capacidad burocrática, la cual era considerablemente inferior en el cuerpo de oficiales boliviano que en aquel de Perú.[8] El papel de los civiles en el primer gabinete de Ovando fue diferente del que desempeñaron los que sirvieron a Barrientos, en la medida en que tuvieron la oportunidad de introducir medidas nuevas y aprovechar la falta de confianza y dirección evidente en la mayoría de los círculos militares. Aunque estuvieron poco tiempo en sus cargos y notoriamente incómodos, éstos no eran una serie de "Donatos" (término que se aplica a los colaboradores omnipresentes y generalmente serviles de gobernantes militares, al estilo de Donato Muñoz, ministro de Gobierno del ignominioso general Melgarejo). El más célebre del joven equipo de Ovando fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, el aristocrático escritor cochabambino que, a lo largo de la década anterior, había girado en sus simpatías desde la Falange hasta una posición nacionalista de izquierda y que había

7 *Pensamiento político...*, p. 205.
8 Luego del golpe de 1964, se observó que los oficiales enviados a ocupar cargos diplomáticos a menudo eran incapaces de realizar la transmisión rutinaria de mensajes por telex. Bajo Barrientos, muy pocos oficiales del ejército ocuparon puestos que exigieran esfuerzo intelectual o que requirieran un mínimo de planificación o discusión de políticas, más allá del simple mantenimiento de oficinas. Una importante excepción fue el general Juan Lechín Suárez, gerente de la Cauchol, quien no tardó en ganarse el respeto de las firmas extranjeras que trataban con él y en pasar a formar parte del pequeño club de "técnicos" militares con el coronel Julio Sanjinés. El régimen de Ovando inició un proceso de mayor entrenamiento técnico que habría de continuarlo Banzer; pero no debe olvidarse que según se iba una pequeña minoría la que deseaba seguir este proceso o la que verdaderamente era capaz de aprovechar las escasas posibilidades que les eran ofrecidas.

sido encarcelado por Barrientos por su intento, único en la historia de Bolivia, de interpelar a un presidente en funciones. Quiroga fue nombrado ministro de Hidrocarburos, un cargo decisivo ya que se consideraba que, dentro de la sensacional variedad de beneficiarios que tuvo el régimen barrientista, la Gulf Oil había sido el más importante en toda esa época. A él se unían un compañero de ideas políticas, Alberto Bailey, en el Ministerio de Informaciones, y su abogado defensor, José Luis Roca, un demócrata cristiano progresista del Beni, como ministro de Agricultura. Mariano Baptista Gumucio, un movimientista de mentalidad independiente, escritor político e influyente periodista se hizo cargo de los asuntos educativos y empezó a popularizar las ideas de Freire e Illich, mientras que el competente José Ortiz Mercado, diplomático tecnócrata, se encargó de Planeamiento. Tales nombramientos ofrecían solidez a la influencia intelectual que el escritor brasileño Helio Jaguaribe ejercía sobre el régimen durante la primera etapa. Jaguaribe era uno de los más fervientes defensores del "capitalismo de Estado" como la "tercera alternativa" entre el imperialismo y socialismo. Para compensar este contingente potencialmente peligroso, Ovando reclutó a tres figuras de la minería mediana, Oscar Bonifaz (ministro de Minas), Antonio Sánchez de Lozada (Finanzas) y Eduardo Quiroga (secretario de la Presidencia). Desde luego, podía confiar en las credenciales menos que radicales de los miembros militares del gabinete, quienes estaban encabezados por el ambicioso y meticuloso coronel Juan Ayoroa, que controlaba el poderoso Ministerio del Interior y que no mostró signo alguno de ablandar la mano dura que caracterizó a ese ministerio con Barrientos.

Casi todo el capital político amasado por el régimen de Ovando en su breve interregno de un año y una semana provenía de la nacionalización de la Gulf Oil, acometida el 7 de octubre de 1969, "Día de la Dignidad Nacional". Esto ocurrió cuando no habían transcurrido quince días después de que el régimen accedió al poder, dando así la impresión de que Ovando había preparado la medida de antemano y que había logrado un acuerdo al respecto. Pero en realidad no fue así, pues varios jefes militares se opusieron firmemente a Quiroga Santa Cruz y a sus aliados hasta el último momento. El 27 de septiembre, Ovando descartó la posibilidad de la nacionalización y sólo prometió un reajuste a los impuestos de la compañía.[9] Durante las discusiones de gabinete, el general conservó su habitual e inescrutable silencio, mientras los civiles, deseosos de tomar medidas rápidas y decisivas así como de ganar respaldo

9 *El Diario*, (La Paz), 28 de septiembre de 1969.

popular, engatusaron a sus colegas a favor del acuerdo; sin que sea el último de sus métodos el de utilizar argumentos económicos que escapaban a la comprensión de los oficiales. La posición era tan insegura que, en la noche del 6, algunos miembros del gabinete no durmieron en sus casas por temor a que los arresten. No obstante, Ovando puso el operativo en manos de Torres, quien apoyaba a Quiroga, y ordenó a sus tropas ocupar las instalaciones y oficinas de la Gulf al atardecer, es decir bastante antes de que el decreto hubiera sido firmado.[10] En su discurso anunciando la nacionalización, el presidente hizo énfasis en el hecho de que la Gulf controlaba el 90 por ciento del gas boliviano y en que era "...una empresa que alcanzó un predominio económico y político semejante al de los barones del estaño". También subrayó que se trataba de un caso único, que el gobierno ofrecía absolutas garantías a la empresa privada y que, si bien no aceptaría ninguna "dependencia o chantaje", las leyes internacionales serían respetadas (es decir que se pagaría indemnización). Asimismo, hizo más de lo que podía para apaciguar al departamento de Santa Cruz, el cual perdería importantes regalías de la producción de gas y petróleo hasta que YPFB pudiera recuperar sus niveles.[11] Esto fue necesario ya que la expropiación de la Gulf había provocado una airada protesta del Comité Pro Santa Cruz al igual que de El Diario y Los Tiempos, pero la derecha carecía de respaldo popular para su campaña. La COB, los estudiantes e incluso los trabajadores petroleros aplaudieron la medida como un paso vital y la interpretaron con diversos niveles de confianza, como un signo positivo del carácter potencialmente progresista del régimen.[12]

La respuesta del gobierno de Estados Unidos fue criticar pero consentir la nacionalización y de emprender una campaña para obtener la mayor indem-

10 Alcázar y Balblina, *op. cit.*, pp. 53-54.

11 *Documentos*, pp. 29-35.

12 El 26 de septiembre, los dirigentes de la COB, todavía ilegal formalmente, enviaron una carta a Ovando diciendo: "Para el movimiento sindical obrero, la Revolución integral, el cambio profundo de estructuras, el nacionalismo económico y la liberación del país significan la expulsión del imperialismo de los monopolios, la defensa del sector público de la economía, el derrocamiento del poder económico del pacifismo y la oligarquía capitalista y cipaya. La intervención protagónica esencial e irreemplazable de las masas en la emancipación nacional y social, las consignas de soberanía nacional, de desarrollo económico y de justicia social son signos salidos de la entraña del pueblo trabajador y explotado. Estamos ante una alternativa: o el ejército es capturado y desviado por fuerzas reaccionarias y fascistas imponiendo al país nuevos días de entrega, dolor y luto o es conducido por fuerzas sanas nacionalistas, identificándose con el pueblo y siguiendo el camino de una verdadera revolución". (*Pensamiento político...*, p. 234).

nización posible. Pudo haber sido el embajador Siracusa quien aconsejó este "enfoque blando", que suponía no recurrir a la enmienda Hickenlooper para imponer un boicot económico oficial, puesto que, desde el primer momento, se sabía que las compañías internacionales de petróleo aplicarían su propio boicot al petróleo boliviano. El resultado fue que el gobierno de Ovando perdió 14,4 millones de dólares en ingresos por exportación y pronto tuvo que enfrentarse con desmesuradas tasas de interés y un peso boliviano gravemente debilitado. El desempleo también aumentó, pero la industria privada organizada en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) criticó con mayor firmeza la política económica del gobierno, demandando más apoyo a la inversión privada y "poner fin a la incertidumbre".[13] Esa actitud debe haber sido determinada en parte por la radical disminución de la ayuda bilateral norteamericana al régimen, de 21,5 millones de dólares en 1969 a ocho millones en 1970, un signo claro de desaprobación política. Eso podría considerarse una torpeza, pues el régimen de Ovando era manifiestamente anticomunista y de carácter inequívocamente militar. Sin embargo, el propio Ovando había pronunciado un discurso inicial criticando la política de Nixon con relación a América Latina y afirmando que la Alianza para el Progreso era un error y que Estados Unidos obtuvo mejores resultados que sus receptores al dar ayuda.[14] Con todo, es posible que el discurso pronunciado por Torres ante el Consejo de Defensa Interamericana, un cónclave de los oficiales de mayor rango que se reunió en La Paz en noviembre, haya sido más preocupante. El comandante en jefe denunció la democracia formal como una impostura, hizo un ferviente ataque nacionalista contra la dependencia y criticó el pensamiento vigente sobre contrainsurgencia como mal concebido e insuficiente.[15] Tanto el Pentágono como los comandantes de ejército de los países vecinos comenzaban a temer que las fuerzas armadas bolivianas estuvieron perdiendo el control. Probablemente, los más lúcidos veían en las ideas de Torres una estrategia coherente y nada radical, mientras que los poderosos bien pueden haber sido informados por su servicio de inteligencia de que Torres representaba sólo una pequeña minoría dentro de las fuerzas armadas. Sin embargo, no se debe subestimar la importancia que tales grupos dan a la fraternidad incondicional, como tampoco su innata aversión a experimentar.

13 *El Diario*, (La Paz), 20 octubre de 1969; *Presencia*, (La Paz), 6 de marzo de 1970.
14 *Documentos*, pp. 40-48.
15 *El general Torres habla a Bolivia*, Buenos Aires, 1973, pp. 15-29.

Aparte de la nacionalización de la Gulf, el gobierno de Ovando tomó pocas medidas positivas. Como complemento a la nacionalización, abrogó el Código del Petróleo de 1955 y el Banco Minero recobró su monopolio sobre las ventas de minerales, se establecieron relaciones con la Unión Soviética, Rumania, Hungría y Checoslovaquia y se negociaron tratados económicos con esos Estados; el tema de Cuba resultó demasiado neurálgico para tratarlo con el cuerpo de oficiales y fue silenciosamente dejado de lado. Bolivia también ingresó al Pacto Andino establecido en Cartagena, Colombia, el cual, con sus restricciones sobre la repatriación de beneficios y la promesa inicial de integración regional y planificación económica, parecía ofrecer un importante antídoto a la preponderancia estadounidense, de manera semejante a la orientación industrialista del régimen. Pero prácticamente en todos los aspectos restantes, el gobierno se limitó a brindar las condiciones básicas para una apertura rescindiendo la Ley de Seguridad de Barrientos, legalizando los partidos de izquierda y la COB y levantando la censura. Alberto Bailey dio un paso adelante con la reducción del extraordinario poder de la prensa tradicionalmente reaccionaria al otorgar a los periodistas una columna donde expresar sus opiniones independientemente de sus editores y al fomentar La Prensa, un periódico a cargo del sindicato de periodistas. Por esto, tuvo que soportar la creciente vigilancia del coronel Ayoroa, y Jorge Carrasco prohibió toda mención de su nombre en El Diario.

La respuesta de la izquierda al gobierno se dividió en tres grupos. En el primero estaban aquellos que carecían de una filiación partidaria y eran seguidores de la línea del escritor argentino Jorge Abelardo Ramos, un trotskista renegado y el principal ideólogo del "nacionalismo de izquierda", para quien la contradicción principal estaba entre Ovando y Siracusa. Impresionados por el asalto a la Gulf y convencidos de las posibilidades que tenían los militares de avanzar aún más hacia la izquierda y de dirigir un auténtico movimiento de liberación nacional, los partidarios de esta línea instaban a la aplicación de una política de no provocación por parte de la izquierda.[16] Sin embargo, se trataba de una pequeña minoría compuesta fundamentalmente por intelectuales de clase media.

La segunda tendencia identificable comprendió a los partidos establecidos de la izquierda y mostraba marcadas diferencias de enfoque táctico dentro de ella. Su común denominador fue el reconocimiento de que los militares no eran monolíticos y que a veces podían ser independientes de las ordenanzas

16 Sobre las ideas de Ramos ver *El pensamiento político...*, pp. 15-48.

del Pentágono. No obstante, consideraban necesario defender la independencia de la clase obrera, recobrar los derechos democráticos básicos y ejercer presión sobre el régimen para emprender otras medidas radicales. En ese marco, el planteamiento más blando era aquel del PRIN y el PCB, que habían sufrido los golpes más duros a lo largo de los cinco años anteriores y manifestaban un deseo casi instintivo de recuperar la seguridad y credibilidad, restringiendo sus actividades a la esfera tradicionalmente sindical. Jorge Kolle Cueto (PCB) describió al régimen como "...reformista con algunas manifestaciones antiimperialistas, de un patriotismo vacilante de cierta velada reserva ante el peligro obrero y popular... un régimen democrático a porcentaje". El régimen de Ovando venía a ser fruto del fracaso de la Alianza para el Progreso, pero ni él ni sus colaboradores se enfrentarían al imperialismo o a la reacción.[17] El POR, típicamente y disfrutando de una confianza interna y de un prestigio externo quizás no igualados en su historia, hizo una valoración similar en lo fundamental, pero con un tono más resonante y poniendo más énfasis en las limitaciones del gobierno e instando a una inmediata acción de masas.[18] Vale la pena añadir que, aún con un lenguaje muy diferente, la valoración que hizo el "francesito" Debray de Ovando desde su celda de Camiri coincide básicamente con esta tesis. Aunque Debray hizo algunas observaciones admirablemente optimistas acerca del "carácter de clase media" de los militares –sin duda eran los primeros pasos en la revisión de los excesos del foquismo–, captó un elemento esencial de régimen cuando lo describía como "para el pueblo y no con el pueblo".[19]

La tercera tendencia de la izquierda coincidía con una buena parte del análisis realizado por el PCB y por el POR, pero insistiendo en que la característica clave del régimen era su ligazón con Barrientos. El más riguroso exponente de tal punto de vista fue Óscar Zamora, "Motete", del maoísta PCML. En un foro político organizado por la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba en enero de 1970 y que se

17 *Ibid*., pp. 158-159.

18 Lora: *Contribución...*, II, pp. 445-446; Masas, N° 362, octubre de 1969. El POR (Lora) no fue invitado a participar en el foro de donde se extraen los discursos esbozados en *Pensamiento político*. El POR que allí aparece es el dirigido por Amadeo Vargas y afiliado a la sección de la IV Internacional del argentino Posadas. En ese momento, los posadistas ejercían alguna influencia en los círculos estudiantiles; pero si bien brindaban pleno apoyo a Torres, pronto habrían de ser reducidos a una secta productora de panfletos, al igual que su matriz internacional.

19 Regis Debray: *Prison Writings*. Londres, 1973, pp. 11 y 15.

prolongó por una semana, Zamora se diferenció claramente del resto de la izquierda en que hacía caso omiso de los elementos reformistas del gobierno, marginaba las tareas de organización de masas y sostenía que el carácter contrarrevolucionario del régimen (una cualidad que compartía con el de Allende en Chile) necesitaba de la iniciación de una "guerra revolucionaria del pueblo"; la cual, implicó firmemente, estaba pronta a comenzar.[20] Con una trayectoria similar, aunque con una buena dosis de análisis menos pomposo y rígido, estaba el PDCR, cuyo simpatizantes y miembros reconocían las posibilidades del trabajo de masas, pero dado que pertenecían mayoritariamente a la clase media, aún se inclinaban por la perspectiva de la lucha armada como una de las tareas del momento.[21]

Como cabía esperar, fueron los partidos tradicionales los que ejercieron mayor influencia en los debates del decisivo IV Congreso de la COB en mayo de 1970. No cabe duda que esa reunión fue la más contenciosa políticamente en la historia de la organización, especialmente porque se hizo una autocrítica de la política adoptada durante el gobierno del MNR y en noviembre de 1964. Lechín, cuyo prestigio había decaído mucho a lo largo de los últimos meses, fue el blanco natural de la izquierda. En el congreso de la FSTMB, realizado en abril, tuvo que sufrir el ultraje de no ser reelegido por aclamación popular y de que se le pidiera que defienda su candidatura, en lo que no fue sino la segunda votación nominal en la historia de la Federación. Su oponente era Víctor López, el secretario general del sindicato de la mina de Siete Suyos, políticamente independiente, respaldado por el POR e incluso por algunos de las bases del propio PRIN de Lechín.[22] Sin embargo, el POR apoyó a Lechín y éste ganó por muy poco, solamente para enfrentar un congreso donde hubo todavía otra votación similar, durante la cual sus opositores elevaron gritos de "No al traidor de la clase obrera" y "Contra el oportunismo político".[23] Evidentemente, la COB estaba dividida y sus dirigentes fueron objeto de graves ataques, pero en los debates subsiguientes se las ingenió para elaborar una tesis política que habría de desempeñar un papel

20 *El pensamiento político...*, pp. 120, 126, 133.

21 Dado que el PDCR no aceptaba tener relaciones más estrechas con el ELN, no pudo seguir la línea militarista con toda la fuerza que sus miembros hubieran deseado. El discurso de Jorge Ríos Dalenz, reproducido en *El pensamiento político*, pp. 165-194, brinda lo que podría llamarse el "programa mínimo" del PDCR.

22 Baptista: *Historia contemporánea...*, p. 282; Lora: *Contribución...*, II, p. 451; entrevista con Víctor López, La Paz, 11 de septiembre de 1982.

23 *Jornada*, (La Paz), 11 de mayo de 1970.

importantísimo en la determinación del curso de los acontecimientos a lo largo del año siguiente.

La tesis política de la COB de mayo de 1970 fue elaborada en torno a una resolución presentada con anterioridad a la FSTMB por el POR. Los aspectos esenciales de este documento fueron, por una parte, su renovada declaración sobre la necesidad de independencia de la clase obrera y, por otra, la conexión entre la lucha antiimperialista y la lucha por el socialismo. Estos objetivos no fueron debatidos; en realidad, a la luz de la experiencia de la COB bajo el régimen movimientista, casi se los tomó al pie de la letra. No obstante, el PCB no pudo aceptar una serie de párrafos donde se sustentaba manifiestamente la crítica trotskista de la "revolución por etapas" se hacía pedazos la tesis del cogobierno y se ponía en tela de juicio la toma del poder por la clase obrera y la dictadura del proletariado como metas no tan distantes. El PCB recibió respaldo para varias de sus objeciones, pues una buena parte de la oposición a Lechín y el desconcierto más generalizado en lo que se refería a la reciente trayectoria de la COB no era de carácter tan político como sindicalista y estaba precisamente en contra de la subordinación de intereses sindicales a los de partido. Por lo tanto, luego de un debate político sofisticado y muy cargado, se incluyeron diversos anexos comunistas, en tanto que se ratificaron otras posiciones poristas críticas particularmente sobre el cogobierno. El resultado final fue un montaje de lo más singular, en el que varios capítulos expresaban posiciones trotskistas para ser continuados por párrafos evidentemente redactados por stalinistas. Por ejemplo, el capítulo dos, "Socialismo y capitalismo de Estado", en su párrafo cuarto comienza diciendo: "...la experiencia del período 1952-1964 nos enseña que una revolución, para ser victoriosa, no debe detenerse, sino continuar hasta el fin, y que el problema decisivo es la cuestión de saber qué clase controla el poder...".[24] Lo anterior difícilmente es compatible con la línea del PCB que emerge en el capítulo cinco, "Unidad Laboral Antiimperialista", y en su párrafo cuatro señala: "...para llegar al socialismo se plantea la necesidad de unir, previamente, a todas las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas".[25]

A pesar de estas contradicciones, el POR consideró que su posición aparecía suficientemente clara en el documento y permitió que el partido votara a

24 *Tesis política de la COB*, La Paz, 6 de mayo de 1970, Sección 2, párrafo 4.

25 *Ibid.*, Sección 5, párrafo 4. Los párrafos 2 y 3 de esta sección son del POR, el 4 es del PCB y el 5 y 6 del POR. Sobre una exposición de este tema desde un punto de vista trotskista ver la introducción por Francois y Catherine Chesnais a Guillermo Lora: "Bolivie: De la Naissance du POR a l'Assemblée Populaire", París, 1972, p. LXXXI.

favor de una tesis híbrida, especialmente porque si no lo hacía perdía más terreno.[26] Tal situación se reflejó en los resultados de las elecciones para los cargos más importantes de la FSTMB, que aparte de Lechín, ahora estaban ocupados por el independiente López, por Simón Reyes del PCB y por Filemón Escóbar del POR, a quienes popularmente se los conocía como "troika". Otro importante producto del debate, así como del verdadero equilibrio de fuerzas entre el PCB y el POR fue el acuerdo de establecer un comando político, formado por todos los partidos de la izquierda, por la COB y por los principales sindicatos con todo derecho. Dicho cuerpo actuaría como la dirigencia política del movimiento popular de acuerdo con la tesis de la COB, la cual era susceptible de interpretaciones ampliamente divergentes en una gama de temas, pero también inequívoca en problemas tácticos claves.[27] Inicialmente, este frente unido tuvo una existencia más bien sombría, pero no mucho después habría de ser impulsado al primer plano de los acontecimientos en los cuales Lechín fue obligado a participar como miembro de un colectivo y bajo estrecha supervisión política y no en su papel acostumbrado al estilo de caudillo independiente.

26. Lora: *Contribución*..., II, p. 453. Este tema pronto hizo de Lora –de por sí poco cortés en el debate político– una víctima de todo el sarcasmo que el movimiento trotskista es capaz de generar debido a su "capitulación al stalinismo". Su principal acusador, el Comité Internacional de la IV Internacional dirigido por Gerry Healy, de la Liga Laboral Socialista Británica (posteriormente Partido Revolucionario de los Trabajadores), no demostró ni conocimiento de la situación concreta, ni ninguna intención de discutir el tema de forma constructiva. En cuanto a sus perspectivas sectarias, ver *Trotskyism versus Revisionism*, Londres, 1975 pp. 39-42. Otra secta, irremediablemente absurda, denominada Liga Espartaquista –conocida por su descripción de la población de Afganistán como "unacubras" (en inglés: *goatfuckers*. N. de la T.) y por su llamado "revolucionario" a la invasión soviética a Polonia– llegó al extremo de proclamar que Lora "tenía sangre en las manos" como resultado del golpe de Banzer en 1971. Tales excrecencias no tienen absolutamente ningún interés, excepto como indicación de la manifiesta importancia del POR –y de la gran exageración generada por él– dentro de los a menudo desesperados círculos del trotskismo internacional.

27 Los elementos fundamentales de la *Plataforma de lucha* fueron: unidad en torno a los dirigentes de la COB y de la FSTMB, un gobierno de los obreros y el establecimiento del socialismo, expulsión de la misión militar, de la CIA y del Cuerpo de Paz, creación de un frente revolucionario antiimperialista, libertades democráticas plenas, incremento de salarios a los niveles anteriores a mayo de 1965, completa restitución de aquellos despedidos por actividades sindicales o políticas, control obrero con poder de veto, socialización de la medicina y de la universidad, nacionalización de las minas privadas sin indemnización, monopolio estatal del gas y de la gasolina, radicalización de la reforma agraria, autonomía universitaria, apoyo a las luchas de Vietnam y Camboya, relaciones diplomáticas con Cuba.

En el momento en que se realizó el congreso de la COB, el régimen de Ovando se aventuraba en un paso concertado hacia la derecha. No pudo continuar sobre la base de sus primeras medidas y mostró signos de estar respondiendo a presiones del cuerpo de oficiales para reafirmar su autoridad en contra del movimiento popular, el cual se estaba recuperando acelerada y evidentemente bajo una dirección de extrema izquierda. Pese a que oficialmente presidía un movimiento institucional, en febrero de 1970, Ovando, presionado por la guarnición de La Paz, tuvo que permitir que ochenta de sus oficiales interrogaran a los ministros civiles sobre sus planes y conducta. Desde todas las perspectivas, fue una reunión turbulenta, donde la facilidad de palabra y complejidad de ideas de los ministros acabó con la paciencia de una camarilla de coroneles locuaces pero no demasiado intelectuales. Los ministros habían pasado la prueba, pero la suerte ya estaba echada.

Los signos más consistentes del desprecio militar por los aspectos democráticos del régimen yacían en las acciones del coronel Ayoroa, quien se tomó la libertad de cerrar La Prensa y de investigar con peculiar indolencia una serie de asesinatos políticos que, contrariamente a las masacres al por mayor, eran sumamente raros en Bolivia. Las muertes de Alfredo Alexander, propietario del vespertino Última Hora y del matutino Hoy, de Jaime Otero Calderón, otro periodista que estaba investigando las circunstancias de la muerte de Alexander y su esposa, así como aquella del dirigente campesino Jorge Soliz, causaron especial consternación porque estaban ligadas al encubrimiento de un tratado de armas con Israel muy lucrativo e ilegal realizado por Barrientos. Es más, la evidencia circunstancial señalaba que los asesinos estaban estrechamente ligados al propio Ayoroa, al coronel Rafael Loayza, jefe de inteligencia militar (G2 o Segunda Sección) y el capitán Luis Arce Gómez, jefe de seguridad del Palacio Quemado. Los criminales nunca fueron encontrados, pero la imagen del régimen cobró un aspecto decididamente lóbrego.[28]

Ese desliz de actos discretos de terrorismo tuvo su paralelo político en julio, cuando, alentado desde los flancos por el general Rogelio Miranda, Ayoroa consiguió sacar a Quiroga Santa Cruz y a su equipo del gabinete. Éstos fueron reemplazados por otros tres civiles de naturaleza mucho más sumisa y bajo la firme tutoría militar. Unos días más tarde, los militares de línea dura lograron

28 Baptista (*Historia contemporánea...*, p. 289) defiende a los oficiales de estas acusaciones; pero a la luz de las posteriores actividades tanto de Arce Gómez como de Loayza, ese autor quizás desee revisar su opinión, pese a que fue miembro del gobierno de Ovando.

persuadir a Ovando de abolir el cargo de comandante en jefe de las FF AA, destituyendo así a su amigo Torres, quien representaba el impedimento institucional más grande para quienes trataban de recuperar los poderes que sustentaron con Barrientos. A Torres se lo despachó a exponer sus interesantes ideas en la conferencia de los No Alineados en Lusaka, mientras Miranda tomaba a su cargo el comando de las FF AA en su calidad de jefe del Ejército, para ser sucedido rotativamente por los jefes de la Fuerza Aérea y de lo que comenzó siendo una fuerza patrullera lacustre y fluvial y ahora disfrutaba del título de Fuerza Naval por razones políticas perfectamente sólidas, si no por otras, lo cual originó cierta hilaridad en las cancillerías y cuarteles de los Estados vecinos.[29]

El reemplazo de Torres por Miranda debilitó aún más la independencia de Ovando y brindó a Ayoroa mayor confianza para que permitiera más ataques abiertos de la extrema derecha. El más importante de estos fue el asalto en agosto a la Universidad Mayor de San Andrés por hombres armados de la FSB y una conocida banda de matones, "los marqueses". Los cuarenta asaltantes fueron pagados y armados por Alfredo Candia, cabecilla de la Liga Anticomunista Mundial, asistido por el capitán Arce Gómez, que estaba impaciente por saldar cuentas con la FUL, dominada por la izquierda. No fue un simple asalto sin consecuencias, sino una verdadera ocupación armada en la que se produjo un fuerte tiroteo con una serie de bajas y el cese de las actividades académicas. Los ocupantes no fueron perturbados durante una semana, al cabo de la cual Ovando se vio obligado por las manifestaciones populares a ordenar a Ayoroa que retirara a los falangistas y a sus amigos del hampa de la manera más discreta posible. Sin embargo, se permitió que una invasión similar a la

29 En la década de 1970, un oficial chileno preguntó a su contraparte boliviano por qué el país tenía almirantes si no tenía mar, a lo cual éste respondió: "Nosotros siempre nos hemos preguntado por qué ustedes tienen un ministro de justicia". En 1980, la Armada tenía dos mil hombres; la Fuerza Aérea, cuatro mil, y el Ejército 18 mil. La Fuerza Naval posee limitada voz en tiempo de crisis y esto se debe en gran parte a que tiene su guarnición en el puerto de Tiquina, en el lago Titicaca, cerca de La Paz. Para muchas de las comunidades ribereñas de Beni y Pando, que sólo pueden atravesarse por vía fluvial o por avión, el personal de la Fuerza Naval constituye lo más representativo del Estado. La Fuerza Naval posee un buque, el "Libertador Bolívar", donado por el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez y normalmente anclado en Rosario, Río de la Plata, Argentina. A principios de 1978, una conexión de radio posibilitó que se emitieran instrucciones desde la cubierta del barco al interior del país; en la plaza principal de Sucre, si no en otros lugares, esto atrajo una visible respuesta de personas que nunca habían disfrutado del derecho al mar y muy probablemente jamás lo habían visto.

Universidad Gabriel René Moreno se prolongara hasta la caída del régimen. Si bien la FSB poseía una considerable capacidad para desarrollar actos de vandalismo y violencia gratuita, la ocupación de la universidad también tuvo el objeto de neutralizar lo que correctamente se consideraba la principal fuente de apoyo al ELN, el cual en julio de 1970 salió de un prolongado período de preparación clandestina y se lanzó en una campaña guerrillera rural en los alrededores del asentamiento minero de Teoponte, al norte de La Paz.

La guerrilla de Teoponte, desde todo punto de vista, fue una aventura trágica, pálida sombra incluso de la debacle de Nancahuazú. Mal concebida, políticamente y militarmente inepta, en el curso de ocho semanas dio como resultado la muerte de 63 de los 75 insurgentes; en tanto que para los militares de línea dura representó una excelente oportunidad de extender su poder bastante más allá de la zona guerrillera y prepararse para dar un golpe totalmente reaccionario. El líder y principal instigador de la campaña de Teoponte fue otro miembro de la familia Peredo, Osvaldo o "Chato", quien había regresado de su exilio en Chile para retomar la causa por la que sus hermanos habían perdido la vida. Sin embargo, Peredo no era un idealista solitario y el ELN tampoco una causa perdida entre los estudiantes y profesionales jóvenes. Durante los dos años anteriores había conseguido un respaldo significativo para una organización de sus características, y su primer manifiesto posterior al haberse "embarcado en operaciones" llevaba la firma de diez líderes estudiantiles muy conocidos que habían abandonado el PCB o el PDCR para emprender la lucha armada. Asimismo, entre aquellos que ingresaron a Teoponte el 19 de julio disfrazados de voluntarios alfabetizados, estaban varios médicos jóvenes, el poeta y maestro de teología Néstor Paz Zamora y el cantante de temas folklóricos Benjamín Cordeiro (Benjo Cruz). Durante el corto lapso de sus actividades, estos luchadores reclutaron algunos campesinos y mineros, pero Teoponte fue fundamentalmente una iniciativa de clase media y su fracaso se registró con mayor fuerza en dicho sector.

En la literatura producida por el ELN en ese período no se hallan signos de revisión alguna de la tesis foquista que tan mal le había servido al Che Guevara. El que Siracusa aceptara la nacionalización de la Gulf se consideró –en lo que sólo pudo haber sido una interpretación intencionalmente unilateral de la coyuntura– una evidencia de la absoluta identificación de Ovando con el imperialismo, la cual precisaba de una ofensiva directa. Pero más importante que esto fue el creer que tal resistencia contra el imperialismo primero debía co-

brar la forma de lucha militar, antecedente necesario para cualquier trabajo político: "...al imperialismo hay que vencerlo en un enfrentamiento abierto que inicia una guerra incontenible. Sólo entonces los comunicados, la concientización, la maniobra tendrán el aval de los hechos y no de las palabras".[30]

Peredo reiteró la necesidad de conducir una campaña en el campo, con argumentos absolutamente militares: "...la experiencia ha probado que la ciudad es el peor enemigo, porque es donde se concentran todos los medios del aparato represivo. Es decir: actuando en la ciudad estaríamos actuando en el terreno del enemigo. La idea del Che, con la que nosotros continuamos, era la de organizar el ejército en base de elementos campesinos, pero con ideología proletaria, que pueda derrotar a otro ejército, sostén del sistema. Y a este nuevo ejército no se lo puede formar en la ciudad, sino en el terreno donde nos podamos mover más libremente y con más perspectivas de desarrollo".[31] Hasta qué grado las ideas del Che Guevara permanecían intactas en el ELN se evidencia en la correspondencia que Peredo mantuvo con Debray, donde el francés subraya los orígenes políticos de la actividad militar y sugiere, con camaradería pero en términos enérgicos, que el balance de fuerzas no era propicio para lanzar una nueva guerrilla. La respuesta de Peredo a esto fue inequívoca: "La frase de Lenin y Clausewitz de que la guerra no es más que la continuidad de la política por otros medios debe invertirse para la mayoría de nuestros países: la continuación de la política por otros medios no es otra cosa que la guerra".[32] Tan torpe defensa del militarismo llegó a un triste apogeo en el argumento del ELN: "...la violencia revolucionaria es ahorrar vidas y sacrificios al pueblo".[33]

La campaña de Teoponte –si es que en realidad merece ese nombre– demostró que Peredo estaba equivocado en todas sus apreciaciones. El único logro tangible de la guerrilla fue el intercambio de dos ingenieros mineros alemanes que fueron tomados como rehenes por Loyola Guzmán; la suma de trescientos mil dólares entregada por la embajada de Alemania Occidental se quedó en los bolsillos de los militares. Esto ocurrió el segundo día de la campaña y a partir de entonces los rebeldes fueron empujados a una lucha precipitada, en un terreno y unas condiciones climáticas desconocidas para ellos y con-

30 Hugo Assmann: *Teoponte. Una experiencia guerrillera*, Cruzo, 1971, p. 30.
31 *Ibid.*, p. 27.
32 Debray: *Prison Writings*, p. 75.
33 Assmann, *op. cit.*, p. 37.

tra las cuales su constitución física urbana apenas tenía resistencia. Varios combatientes, incluyendo a Néstor Paz, murieron de agotamiento; otros dos, a quienes se los sorprendió robando latas de sardinas fueron ejecutados por sus compañeros. La mayoría desertó o fue capturada muy rápidamente. En todos los casos y en directa contravención a las declaraciones de Ovando, que ofreció plenas garantías a todo aquel que se rindiera, esta gente fue ejecutada en el lugar. Los rangers pronto acordonaron la zona y gracias a la experiencia de Ñancahuazú sufrieron muy pocas bajas. A principios de septiembre, los escasos sobrevivientes se habían dividido y quedaron totalmente a expensas del apoyo de simpatizantes mineros y campesinos para salir. Al final, esto fue posible únicamente por la caída del régimen de Ovando y por el ingenio de la población local que obligó a las tropas locales a obedecer las órdenes de Torres de perdonar al resto de los combatientes de la guerrilla. En lo que debió ser una manifestación sumamente impresionante de los errores de su estrategia, Peredo fue salvado de una ejecución sumaria por los pobladores de Tipuani que formaron una línea a lo largo de diez kilómetros de carretera, para asegurar que él y sus compañeros no sean capturados por el Ejército. Uno de los lugartenientes de Peredo, Gustavo Ruiz Paz ("Omar"), escribe en su diario que tanto él como sus compañeros llegaron a las lágrimas por el hecho de que la misma gente que les demostraba tanto afecto y arriesgaba su vida por ellos pudiera criticar tan severamente el foquismo, en el cual los sobrevivientes habían creído tan fervientemente.[34] Lo que quedó de la vanguardia revolucionaria se salvó gracias a las masas que ellos habían pretendido dirigir. Pese a esa experiencia y al hecho de que sus principales líderes fueron exiliados a Chile, el ELN siguió operando, pero desde entonces sus acciones se restringirían a la ciudad, donde la movilización popular era mucho mejor cobertura que la jungla.

No cabe duda de que la supervivencia del Chaco Peredo y de sus acompañantes fue más fácil por la caída de Ovando y por la consecuente incapacidad de los reaccionarios del alto mando para completar su cometido de exterminar la guerrilla con el propósito de levantar la moral de los militares y asestar un golpe final a la "izquierda infantil". Empero, el golpe inicial del 4 de octubre contra Ovando que fue realizado precisamente por este grupo de derecha se inspiraba en los triunfos de Teoponte y en el hecho de que el presidente no podía contener la represión ejercida por los comandantes locales. La opinión que prevalecía en esos círculos y, sin duda, en la embajada

34 Alcázar y Baldivia, *op. cit.*, pp. 69-72.

americana era que la distensión política iniciada en septiembre de 1969 había llegado muy lejos, que Ovando debía ser destituido y que las condiciones políticas estaban ya maduras como para un golpe institucional decisivo. Sin embargo, la estimación que hicieron del equilibrio de fuerzas tanto dentro de las FF AA como, y más resueltamente, fuera de ellas resultó ser gravemente equívoca al crear una situación en la que la izquierda y no la derecha tomó la ventaja.

En Bolivia, un golpe de Estado generalmente ocurre cuando un oficial de rango que pertenece a una unidad poderosa se declara en rebelión y recibe respaldo a través de las expresiones de solidaridad de sus camaradas conspiradores. A esto normalmente sigue un período de exaltadas negociaciones, durante las cuales los comandantes de guarnición consultan con sus oficiales antes de brindar su apoyo a uno u otro bando, o bien, como sucede frecuentemente, manteniéndose "neutrales" en espera de la evolución de los acontecimientos. El golpe supone una guerra de nervios concertada y depende no solamente de la validez de las demandas de los rebeldes, sino también del tipo de unidad (Blindada, Infantería, Fuerza Aérea) que los apoya, los antecedentes y vínculos personales de sus cabecillas, la expansión geográfica del respaldo y la decisión con la que actúan. El resultado del golpe generalmente se decide por teléfono bastante antes de que se produzca el enfrentamiento entre unidades, aunque muy a menudo supone un despliegue amenazador de tropas y simulacros de ataques aéreos. Los comandantes rebeldes no sólo necesitan la garantía de un apoyo político con antelación sino también capacidad para "interpretar los silencios" de aquellas guarniciones con cuyo respaldo limitado cuentan o de aquellas con cuyos oficiales de rango no tienen una alianza. La realización de un golpe es, por lo tanto, un verdadero arte cuya iconolografía es tan familiar al pueblo de Bolivia como los artificios de las elecciones parlamentarias lo son al pueblo europeo.

La guarnición de La Paz y sus alrededores es la más fuerte del país y los rebeldes deben ganar una mayoría de la misma a su favor si quieren tener alguna probabilidad de éxito. Las unidades claves de esa capital son el Regimiento Motorizado Tarapacá (la unidad más poderosa de todas), acantonado en El Alto, el Regimiento Bolívar de Artillería y la unidad motorizada Max Toledo acantonada en Viacha, a veinticuatro kilómetros de la ciudad, el Colegio Militar, el Regimiento Ingavi de Infantería, cuyo principal batallón es responsable de la guardia presidencial y se aloja en el cuartel Sucre. Finalmente, pero de ninguna manera menos importantes, están la base de la

fuerza aérea en El Alto, el cuartel general del Grupo Aéreo de Caza (GAC), y los Transportes Aéreos Militares (TAM), cuyo poder de fuego es restringido, pero constituye el único medio rápido para transportar tropas. Las guarniciones de Cochabamba (Séptima División) y Santa Cruz (Octava División) son menos poderosas, pero ambas poseen unidades claves capaces de cambiar el equilibrio de fuerza: la Escuela de Clases y el Regimiento de Tropas Paracaidistas CITE en Cochabamba, el Regimiento Manchego de Rangers y la Escuela de la Fuerza Aérea en Santa Cruz. Aparte de estos centros, únicamente Oruro, con el cercano Regimiento Motorizado Andino en Challapata, posee algo más que una guarnición local de reclutas de infantería capaz de controlar un pueblo y sus alrededores, pero no de lanzar ofensivas importantes fuera de la localidad.

Es evidente que, a principios de octubre de 1970, el coronel Rogelio Miranda, comandante del Ejército y comandante en jefe en funciones, tenía buenas razones para pensar que la corriente de opinión institucional era sumamente contraria a Ovando. No solamente la Asociación de Generales y Coroneles Retirados, un cuerpo de no escasa influencia en los círculos militares, había publicado un comunicado invitándolo a retirarse, sino que también había un dinámico movimiento de oficiales de menor rango dirigidos por Humberto Cayoja y Norberto Salomón que querían elecciones. Por lo tanto, Miranda dio el golpe el 4, anunciando que Ovando –que estaba ausente en una visita a Santa Cruz– había sido destituido de su puesto y que él (Miranda) asumía la presidencia en espera de decisiones institucionales; esta movida recibió el apoyo político del MNR y del PDC. Tropas que dependían directamente del EMG y del Colegio Militar cercaron la ciudad bajo el mando del entonces coronel Hugo Banzer Suárez.

Con todo, Ovando logró volcar a su favor tanto la evidente identificación del golpe con las fuerzas de la derecha como su ausencia de La Paz, obteniendo en persona las promesas de lealtad de las guarniciones de Cochabamba y Santa Cruz, apoyo que le permitió volar hasta la sede de gobierno bajo la protección del CITE y obligar a Miranda a negociar. Los rebeldes se vieron aún más debilitados por la falta de apoyo del Tarapacá y del GAC que se declararon neutrales o no hicieron ningún pronunciamiento, así como del poderoso Segundo Batallón de los Colorados que, bajo el comando del mayor Rubén Sánchez, se opuso firmemente al golpe. Además, Miranda, en un notable lapsus de eficiencia militar, fracasó en silenciar a radio Illimani, llegando a preguntar a sus auxiliares, según se dice, si alguno tenía amigos en la compañía de electricidad para poder arreglar un corte de energía.

La contundente división en el cuerpo de oficiales se hizo aún más profunda durante las negociaciones entre Ovando y Miranda en la Nunciatura Papal, donde ambos generales fueron acompañados por concurridos grupos de guardaespaldas, que estuvieron a punto de protagonizar un tiroteo abierto. Luego de un día de tensas e interrumpidas conversaciones, de un incesante movimiento de tropas y gran confusión, ambos militares acordaron retirarse. El 6 se entregó formalmente el poder a un triunvirato compuesto por los comandantes de las tres fuerzas: generales Efraín Guachalla (Ejército), Fernando Satori (Fuerza Aérea) y almirante Alberto Albarracín (Fuerza Naval). La junta declaró que gobernaría hasta 1971, en que se celebrarían elecciones.

Si bien los oficiales de la guarnición de La Paz habían votado con 317 contra cuatro votos a favor de la destitución de Ovando y los relegrama de las ciudades de provincia mostraban un balance similar de opiniones, no era tal el consenso en lo que se refiere a la junta. Esto incentivó un tercer desafío por el poder, lanzado sin previo aviso en el atardecer del 6 por el recién llegado general Torres, quien se abrió camino hasta la base aérea de El Alto y consiguió el apoyo de los oficiales y hombres del CITE, del GAC y de otras unidades en contra de la formación de un triunvirato. El contragolpe de Torres se fortaleció con el respaldo de aquellos que antes habían apoyado a Ovando, especialmente de Rubén Sánchez, cuya unidad ya estaba avanzando sobre el Palacio Quemado, al mismo tiempo que los aviones del GAC ametrallaban la zona circundante a Miraflores.

Sin embargo, como admitiera el propio Torres después, no cabe duda de que su victoria final se debió principalmente a la decisión del comando político de convocar a una huelga general para el 7. La huelga se decretó formalmente en oposición a la junta, pero se interpretó ampliamente como apoyo a Torres, hecho que persuadió rápidamente al triunvirato de entregarle el poder que había controlado por escasas nueve horas, en un día en que Bolivia fue gobernada, ni más ni menos, que por seis presidentes. Los únicos militares firmes partidarios de Torres fueron la fuerza aérea y los Colorados, comandados por un oficial conocido por su independencia; empero, el respaldo de la COB, que había sembrado el pánico en todo el cuerpo de oficiales, le permitió tomar el poder el 7 con una aclamación popular que sobrepasó a aquella que había acogido a Ovando un año antes. La convocatoria a la huelga general resultó crucial, pero quedaba por verse si el comando político ofrecería apoyo político pleno a un general, sea cual fuera su popularidad o cuán izquierdistas sus antecedentes. Por otra parte, estaba claro que el respaldo para Torres dentro de las FF AA era muy restringido, que la mayoría se refugió tácticamente en

la neutralidad en tanto que una apreciable minoría se mantuvo en una hosca oposición.[35]

Torres y la Asamblea Popular

Los peores temores de los partidarios de Miranda cobraron forma real el 7 de octubre, cuando Torres, en reconocimiento a la importancia del llamado a la huelga general en favor de su victoria, invitó a la COB a participar en la nueva administración. El 8 de octubre, el comando político discutió el tema del cogobierno durante ocho horas, siendo los argumentos a favor de una respuesta positiva sostenidos por el PCB y por un grupo de dirigentes sindicales que abandonaron el PRIN para formar el Frente de Acción Revolucionaria Obrera (FARO).[36]

Pero, dado que Torres inicialmente ofreció únicamente la tercera parte de los asientos del gabinete y que la tesis política de la COB contenía una serie de inequívocas denuncias contra el cogobierno, los opositores a la propuesta lograron forzar un rechazo. Los consejeros principales de Torres –Jorge Gallardo y Hugo Torres Goitia– intentaron impedirlo, aumentando la oferta a la mitad de los ministerios y haciendo pública la propuesta. Esto sirvió para presionar más al comando político, que, después de discusiones aún más acaloradas, aceptó finalmente la propuesta; pero los nombres sugeridos como "ministros obreros potenciales" eran todos de figuras sindicales secundarias, que actuarían claramente como delegados, bajo el control del comando.[37] Frente a la evidencia de que tanto la oferta como el debate en torno a ella estaban generando otro intento de golpe –esta vez a cargo del hermano de Ayoroa,

35 Esta relación proviene principalmente de *El Diario*. Se pueden hallar relatos detallados de este confuso período en Isaac Sandoval Rodríguez (*Culminación y ruptura del modelo nacional revolucionario*), en Torres (*El escenario político boliviano*, La Paz, 1979, pp. 63-76), en Jorge Gallardo Lozada (*De Torres a Banzer. Diez meses de emergencia en Bolivia*, Buenos Aires, 1972, pp. 125-148), y en Alcázar y Baldivia (*op. cit.*, pp. 93-97).

36 Baptista, *Historia contemporánea*..., p. 283; Lora, *Proletariado*..., p. 216; Gallardo, *op. cit.*, p. 259. Los principales líderes de FARO eran Alberto Jara, Sinforoso Cabrera, Alberto López, José María Palacios y Guillermo Aponte, quien sirvió como ministro de Salud hasta marzo de 1971.

37 *El Diario*, (La Paz), 9 de octubre de 1970, proporciona los nombres. Gallardo, *op. cit.*, p. 154, reclama esta "falta de seriedad" y Sandoval, después ministro, critica los debates calificándolos de "anodinos", *op. cit.*, p. 82.

Miguel Ayoroa, comandante del Regimiento Ingavi–, Torres, que de todos modos estaba desilusionado con los nombres que le habían presentado, revocó la oferta. La COB no insistió y obviamente sintió alivio de poder dejar al presidente "...en libertad para elegir a su equipo de colaboradores".[38]

La COB ofreció su "apoyo militante" a Torres y reiteró su intención de "...luchar hasta el último momento contra la bestia fascista, para aplastarla allí donde se encuentre", pero advirtió que "...en el primer indicio de desviarse o retroceder, seremos igualmente, los trabajadores, los primeros en denunciar ante el pueblo y ocuparla barricada que nos corresponde".[39] El mismo día, el comando político publicó un programa de veinte puntos que instaba al gobierno no sólo a garantizar el reconocimiento oficial, sino también a cumplir todas las demandas de la Tesis de la COB. Aunque no tenía posibilidades de hacerlo, el gobierno se apresuró a declarar su aceptación.[40]

Como consecuencia de este encuentro de prueba con la izquierda, el primer gabinete de Torres fue más militar y argumentablemente más de derecha en carácter que el primer gabinete de Ovando. La COB no tardó en denunciar la presencia de los generales Soliz y Lafuente, así como el nombramiento del rompehuelga de confianza de Siles, Abel Ayoroa (ministro de Trabajo) y del general Luis Reque Terán, un destacado arquitecto de la derrota infligida a la guerrilla en Ñancahuazú, "experto autotitulado en defensa contra ataques nucleares", como comandante del Ejército. No obstante, pese a que Torres estaba empeñado en proteger a las FF AA, a que realizó pocos cambios en sus comandos y a que se limitó a exiliar sólo a Miranda, su gobierno fue palpablemente más vulnerable al movimiento obrero que el de Ovando. La oferta del gobierno fue una movida táctica astuta, pero también provenía de una posición de debilidad.

Durante los primeros meses de su gobierno, esta debilidad no fue totalmente manifiesta para las masas, debido en gran parte a la enorme popularidad

38 Alcázar y Baldivia, *op. cit.*, pp. 97-98. Se brindan más detalles en Lora: *Consolidación*..., II, p. 468; y en Chantal Coppy y Henry Hassan, *Bolivia 1971: L'Assemblée Populaire*, (tesis inédita), Universidad de Grenoble, 1973, p. 62, un trabajo que lleva el sello político de su supervisor Pierre Broué, importante miembro de la Organisation Communiste Internationale, a la que en ese momento estaba afiliado el POR.

39 *El Diario*, (La Paz), 9 de octubre de 1970.

40 *Ibid.* Sobre las demandas ver la nota 27 anterior. Este documento está firmado por la COB y los sindicatos más importantes, los estudiantes y el MNR (Hernán Siles Zuazo y Ñuflo Chávez), el PRIN, el PCB, el POR (Lora), el PCML, el PDCR, el Movimiento Revolucionario Espartaco y FARO.

de que gozaba Torres. Si bien su prestigio se acrecentó enormemente después de que fue asesinado en 1976, "Jota Jora" se congració desde un principio con el pueblo mucho más que cualquier otro soldado y posiblemente mucho más que cualquier otro presidente de la era moderna. En primer lugar, obviamente había derrotado un golpe de la derecha, algo que llegó a ocultar el que posteriormente protegiera a los líderes del mismo, movido por sentimientos de lealtad a una institución a la que había servido durante treinta años y que tenía en una estima casi mística. La fuerza de Torres yacía en la capacidad de ganarse el afecto personal por su estilo de discurso simple, por su sonrisa sincera y por la conciencia de su extracción humilde, habiendo ascendido de rango luego de haber pasado su niñez vendiendo dulces en las aceras de los cines de Cochabamba. A su transparente convicción de que lo que hacía era lo apropiado y correcto hay que añadir la identificación de su apariencia y su personalidad de clásico marido y padre de clase media que intentaba por todos los medios vivir de sus ingresos. Este aire de domesticidad fue robustecido por Emma Obleas, una mujer con antecedentes más elevados, pero cuyo liberalismo y simpatía constituyeron un complemento decisivo de las cualidades de su esposo. Torres no poseía ni los rasgos de imitación Kennedy del blanquoide Barrientos, ni la arrogancia hispánica de Ovando; su grueso bigote, su masa de cabello oscuro y su pequeña estatura lo hacían aparecer como un cholo, semejante a la mayoría de los habitantes urbanos de Bolivia. (Presumiblemente a veces solía olvidar la ventaja de esto; en una ocasión, un auxiliar con mediana instrucción salió fuera de sí cuando un dirigente de izquierda se refirió al presidente como "bonapartista" creyendo que hablaba de su corta estatura). Si bien, como pronto se reveló, el régimen era débil y vacilante, casi temeroso de gobernar o de intranquilizar a las fuerzas sociales, a Torres no le faltó ambición ni estilo con que proyectarla, como se evidenció en su primer discurso en la plaza Murillo: "...Soy hijo de este pueblo y las puertas de mi despacho estarán abiertas las veinticuatro horas del día para recibir a mis hermanos trabajadores. Como ustedes, los obreros, los campesinos, los intelectuales y los militares revolucionarios, construiremos un nuevo orden social donde impere la justicia y no haya más miseria en los hogares bolivianos... Impondremos un orden de justicia social que borre las distinciones entre pobres y ricos, pues todos los seres nacidos en el territorio patrio tienen los mismos derechos, son iguales y merecen un destino común..."[41]

41 Sandoval, *op. cit.*, p. 76.

Los objetivos del régimen de Torres eran similares a aquellos de Ovando, pero necesariamente hizo mayores esfuerzos para lograrlos. El gobierno tenía como meta obtener un verdadero control soberano sobre las empresas productivas aumentando más la participación estatal en una economía mixta, donde los intereses del capital extranjero fueran estrictamente limitados.[42]

Esto resultó mucho más complejo de lo que suponía al principio, pero hubieron ciertas áreas en las que el régimen no podía permitirse perder tiempo si quería conservar su impulso popular. La más importante de éstas fue sin duda la cuestión del salario de los mineros que los militares habían prohibido a Ovando restituir a los niveles anteriores a mayo de 1965. Los costos reales de la COMIBOL eran de seis millones de dólares inferiores en julio de 1970 con relación a los de abril de 1965, y las bases estaban plenamente movilizadas en torno a un tema con el que las FF AA estaban inequívocamente identificadas; Torres no tuvo más opción que autorizar aumentos.[43]

El acuerdo firmado a fines de noviembre brindó al régimen el tipo de dinámica que la nacionalización de la Gulf había otorgado al gobierno de Ovando, pero no respondía totalmente a las demandas de la FSTMB, que estaba bajo la presión de un movimiento de masas, resucitado pero todavía suspicaz. Cuando la delegación dirigida por Filemón Escóbar llegó a Siglo XX para explicar los términos del decreto que aseguraba la reposición, no se puede decir que recibió una aclamación militante:

> Cuando Filippo y otros dirigentes sindicales vinieron, los mineros comenzaron a protestar por su retraso. Hubo rechiflas y silbatos durante unos veinte minutos, en que se profirieron gritos de "pequeño burgués", "traidor", "comprado" y otros insultos en tono similar... Sentados en el suelo, escucharon a Filippo hablar sobre la reposición de salarios y precios de contrato. Filippo lo explicó paciente, clara y reiteradamente. Hizo comparaciones, los de piedra blanda, media y dura, la escala de precios de 1965, la caída que habían sufrido hasta 1970 y los que prevalecían ahora, que en algunos casos eran superiores a aquellos de 1965. Los mineros lo cuestionaron agresivamente; ellos sabían cómo defender sus salarios con resolución y demandaron que se les expliquen los hechos hasta que les queden absolutamente claros. Cuando finalmente habían

42 *Ibid.*, pp. 85-86.

43 El costo salarial total en 1970 era de 10,5 millones de pesos bolivianos contra 14,2 millones de pesos bolivianos en 1965, pero se deben añadir otros dos millones reducidos por pagos de seguridad social. Se brindan detalles en Sandoval, *op. cit.*, p. 109.

evaluado la posición, no creyeron realmente que cuando se les explicó habría de cumplirse de que se pondría en efecto la reposición, esperarían al día de pago."[44]

En parte para contribuir a la medida y en parte para reforzar una imagen igualitaria, Torres también aceptó la demanda de la FSTMB de recortar los sueldos de la burocracia de COMIBOL, fijando un tope de mil dólares ($b. 12.000) mensuales para todos los salarios públicos. En COMIBOL, esto significaba un recorte salarial para cerca de 250 personas; en YPFB para otras 145, algunas de las cuales ganaban hasta sesenta veces el salario básico de un obrero normal (Sb. 600).[45] El salario de los militares no sufrió alteración. Por otra parte, el gobierno sólo prometió considerar complacientemente la otra demanda principal del sindicato: el cogobierno (participación obrera en la administración) con poder de veto. La trayectoria tan irregular de los controles obreros bajo el MNR y la cautelosa actitud de las bases cuando se enfrentaban a la posibilidad de una participación formal en la administración otorgaron al régimen cierto espacio en este tema. Empero, dado que en marzo de 1971 la demanda estaba obteniendo apoyo tan rápidamente, Torres, consciente del carácter más burocrático y conservador del sindicato de petroleros, declaró la cogestión en YPFB con él mismo presidiendo la junta directiva. Dicha junta cobró más la forma de participación sindical que de control, pues los representantes de los trabajadores y aquellos de la administración del gobierno eran iguales en número, los trabajadores no tenían veto; estaba lejos del modelo abogado por la "troika" de la FSTMB.

Desde su inicio, el régimen tenía menos habilidad para controlar los sucesos que estaban más allá del sector estatal. El día del golpe se produjeron ocupaciones de centros de trabajo. Las más importantes tuvieron lugar en el sector de la prensa, incluyendo a El Diario, Los Tiempos y a radio Indoamérica, de Potosí. Con la destitución de Carrasco, el propietario, y la instauración de una cooperativa laboral de facto en El Diario, hicieron que esta ocupación fuera la más relevante y duradera de todas, ya que el tradicional órgano con-

44 Diario de un estudiante que trabajó en Siglo XX, citado en Whitehead: "Los trabajadores mineros", p. 22 (René Poppe, *Interior mina, testimonio*, La Paz, 1986, p. 174).

* El estudiante a que se refiere Whitehead es René Poppe; la cita ha sido tomada directamente de su libro *Interior mina testimonio*. (N. de la T.)

45 *Presencia*, (La Paz), 20 de noviembre y 23 de noviembre de 1970.

servador fue convertido en un portavoz de la izquierda. Esto sirvió de estímulo para un debate sobre temas como la libertad de expresión y tenencia de propiedad, en el que se oponía los derechos del individuo a los de colectividad de manera particularmente aguda y similar a los casos de Radio Renascença durante la revolución portuguesa y La Prensa durante las primeras etapas de la revolución nicaragüense. Hasta ahora, todas las ediciones de El Diario incluyen, en su segunda página, la frase: "Usurpado el 7 de octubre de 1970 por defender la libertad y la justicia. Reinició sus ediciones el 1 de septiembre de 1971"; un recordatorio de Jorge Carrasco respecto a este breve interregno en el control familiar de un periódico y los medios que se necesitaron para recobrarlo. Luego de bastante prevaricación, el régimen decidió finalmente ratificar la cooperativización del matutino a pesar de que estaba adoptando una línea bastante alejada del oficialismo; la embajada americana había declarado que la decisión de ocupar el periódico era una prueba reluciente de la actitud del gobierno hacia la empresa privada.

Siracusa seguramente hubiera adoptado esta postura de todos modos, pero le dio especial realce debido a que el Centro Boliviano Americano (CBA), de propiedad de EE UU, en La Paz y Sucre y las oficinas de información de EE UU (USIS) en Oruro y Cochabamba fueron asaltados, saqueados y ocupados por estudiantes; en La Paz, varios "marines" americanos fueron golpeados, supuestamente amenazados de muerte y expulsados del CBA. Iracundo, el embajador demandó 45 mil dólares de indemnización, garantías plenas y la inmediata devolución de sus instalaciones. El gobierno prometió cumplir e hizo algunos avances en sus negociaciones, pero el CBA de La Paz, al igual que el Centro Jesuita IBEAS, igualmente ocupado, siguió bajo la tutoría del Comité Revolucionario de San Andrés, que montaba guardia sobre oficinas que, declaró, habían sido recuperadas del imperialismo para uso del pueblo. Puesto que el ejército en Oruro había matado a una veintena de personas durante el golpe de Miranda y una gran multitud asistía al entierro de los guerrilleros de Teoponte en La Paz, Torres rehusó sacar tropas de los cuarteles para retomar las instalaciones ocupadas por temor a reavivar la movilización antimilitarista.

El alto mando y muchos oficiales se enfurecieron más con las declaraciones de Torres sobre la distribución de armas al pueblo. Durante su triunfal recorrido por los principales campamentos mineros, luego de la reposición de salarios, el presidente fue permanentemente acosado por los mineros con demandas para la repartición de armamento. En Siglo XX respondió a ellas diciendo: "...los trabajadores serán armados sólo en caso de que las FF AA no estén más, como ahora,

con el pueblo".[46] Dos semanas más tarde prometía al pueblo de Potosí que "...si las FF AA defraudan al pueblo daré armas a los trabajadores...".[47]

Anuncios como éstos generaron expectativas en un lado y temores en el otro, pero ninguno de ellos llegó a consumarse. La reacción de la derecha fue avivada aún más por el enfrentamiento de Torres con el alto mando en torno a la liberación de Debray y los demás prisioneros de Ñancahuazú. A fines de noviembre, Reque Terán descartó toda posibilidad de amnistía para el francés, pese a que el gobierno había anunciado que estaba considerando el asunto de manera positiva.[48] Justo antes de Navidad, Torres aprobó furtivamente la liberación y envió un destacamento al penal de Camiri, el cual prácticamente sacó clandestinamente a los prisioneros hacia Chile en contra de la voluntad de la mayoría de los oficiales. Una semana después, Reque Terán manifestó su irritación declarando a la prensa que hubieron diferencias de opinión en torno al tema.[49]

Muy pronto, la oposición militar se identificó en dos partidarios importantes de Miranda: los coroneles Hugo Banzer Suárez y Edmundo Valencia. A pocas semanas del golpe, estos dos oficiales estaban lo suficientemente seguros de sí mismos como para romper el protocolo militar y desafiar a Lechín a un debate público sobre la acusación que les hizo de fascistas y proimperialistas. Los estudiantes plantearon un foro debate y plenas garantías, pero los coroneles querían debate en estudio de televisión en lugar de uno con audiencia en "vivo" y argumentaron que la FUL no podía ofrecer las condiciones mínimas para un debate libre. A mediados de diciembre, todavía como comandante del Colegio Militar, a Banzer se le frustró un intento de golpe, debido a que a último momento Torres no asistió a la ceremonia de graduación de esa institución, donde debía haber sido tomado rehén. Sin embargo, Banzer leyó un pronunciamiento apenas velado y conservó su cargo.[50] Pero tal estado de cosas no podía mantenerse por mucho tiempo; un mes después, ya mejor preparados y armados con sesenta mil dólares donados por el desprendido embajador brasileño, general Hugo Bethlem, y con el apoyo de la mayoría de los oficiales jóvenes que habían respaldado a Miranda, los dos oficiales tomaron el estado mayor y se declararon en rebeldía.[51]

46 *Torres: presidente de los mineros*, La Paz, 1970, p. 11.
47 *El Diario*, (La Paz), 11 de diciembre de 1970.
48 *Ibid.*, 24 de noviembre de 1970.
49 *Presencia*, (La Paz), 9 de enero de 1971.
50 *El Diario*, (La Paz), 10 de diciembre de 1970.
51 Los principales rebeldes eran: Banzer; Valencia, Mario Adett Zamora, Humberto Cayoja, Jorge Echazú, Rolando Saravia, Norberto Salomón, Carlos Fernández.

El golpe de Banzer-Valencia del 10 de enero de 1971 fue derrotado de forma muy semejante a aquella en que se desmanteló el de Miranda en octubre de 1970, es decir, a través de una huelga general y a causa de graves divisiones dentro del cuerpo de oficiales. La rapidez con que se convocó a la huelga, y con la que los mineros se trasladaron a La Paz blandiendo sus Mausers para tomar el centro de la ciudad, claramente anuló cualquier respaldo a la rebelión. La fuerza de la movilización popular era significativamente mayor que la que se vio en octubre y hacía prever serios enfrentamientos en caso de mantenerse el intento de golpe. En el frente militar, los rebeldes se vieron impulsados a tomar como rehenes a Reque Terán y al jefe de estado mayor, coronel Samuel Gallardo, lo cual no dejaba de ser un signo de la falta de apoyo para el golpe en las altas esferas, al mismo tiempo que impedía negociaciones dentro de la institución. Por otra parte, la fuerza aérea y los Colorados siguieron leales al general Torres, aislando y atacando a los golpistas en Miraflores, mientras que multitudes de trabajadores llenaban el centro de la ciudad.

Comprendiendo el equilibrio de fuerzas, los comandantes de muchas unidades, simpatizantes de las denuncias de anarquía y desorden que levantaron los rebeldes, también opuestos a la liberación de Debray, no se pronunciaron, limitándose a observar cómo el golpe fracasaba en cosa de horas. Después de secundar el llamado del comando político para una total movilización y de haber sido obligado a expulsar finalmente a Banzer, a quince de sus cómplices y a Bethlem, Torres se encaminó a la plaza Murillo para pronunciar un discurso frente a la multitud allí congregada. El aplastamiento de tan previsible como precipitado alzamiento fue ampliamente considerado como obra de las propias masas, lo cual aumentó ostensiblemente la confianza y la predisponibilidad general para acelerar el proceso iniciado en octubre. Esta tendencia se evidenció en la plaza, donde Torres, víctima de sus propias arengas, fue partícipe de un nada común intercambio con la multitud. Denunció al "pequeño grupo de fascistas" que había protagonizado la revuelta, se comprometió a distribuir armas cuando haya dinero y prometió profundizar la revolución nacional, contra un torrente de consignas: "Queremos armas", "mina Matilde al Estado" y "los enemigos del pueblo al paredón". Finalmente, estos abucheos llegaron a tal punto que el presidente tuvo que interrumpir el hilo de su discurso y contrarrestar los gritos de "Revolución socialista", en un diálogo improvisado. Ante la imposibilidad de persuadir a las masas de las virtudes de su "revolución nacionalista", Torres acabó por declarar que "...esta participación del pueblo nos dirá también el tipo

de gobierno que el pueblo desea darse…".[52] Tal gesto retórico se emitió indudablemente al calor del momento y no representaba ni el carácter absolutamente abierto del régimen ni la abdicación de toda responsabilidad respecto a seguir una política, como afirmaron algunos. Sin embargo, mostraba una falta esencial de autoridad y dirección que habría de hacerse gradualmente más evidente durante los meses subsiguientes.

Los acontecimientos de enero obligaron al régimen de Torres a tomar otras medidas radicales; caso contrario corría el riesgo de ser sobrepasado por una izquierda que en su convocatoria de huelga subrayaba la debilidad, vacilación e incapacidad del gobierno frente a la reacción. El día del frustrado golpe, otras oficinas norteamericanas de Santa Cruz fueron atacadas y radio Progreso, emisora de la CEPB, fue tomada por los trabajadores y pasó a ser controlada por ellos. Torres recuperó cierta credibilidad al renacionalizar las colas y desmontes de Catavi que Barrientos había cedido a la IMPC y tres meses después, en la víspera del 1° de mayo, doblegándose una vez más a la presión popular, procedió a la expropiación de mina Matilde, probablemente el centro minero más rico entregado a una corporación norteamericana. Así, las principales medidas de Barrientos a favor del capital extranjero fueron revertidas, pero el costo fue muy alto. En marzo, Nixon anunció que la General Services Administration lanzaría al mercado reservas de estaño y sólo la noticia de ello empezó a afectar el precio del mineral.

En lo más inmediato, Bolivia se dio cuenta que sus exportaciones de zinc sufrían el boicot tanto de Norteamérica como de Europa, lo cual la obligaba a buscar desesperadamente mercados alternativos. Los préstamos del BID y del Banco Mundial (BM) fueron suspendidos, en una medida que el Washington Post calificó como la acción más abierta de un secretario del Tesoro para manipular el crédito internacional con fines políticos. El préstamo del Banco Mundial estaba destinado a la construcción de un gaseoducto entre Santa Cruz y Yacuiba, proyecto que no dependía tanto del color político del régimen de La Paz, pero era vital para los planes de exportación del país. Empero, el secretario del Tesoro, John Connally, era muy amigo del presidente de la IMPC, Frank Tye, y estaba convencido de que "los EE UU podían permitirse un comportamiento duro con Latinoamérica, puesto que ya no les quedaban amigos allí".[53]

52 *Presencia*, (La Paz), 12 de enero de 1971; Sandoval, *op. cit.*, p. 93.
53 *Business Week*, 10 de julio de 1971. Ver también *El Diario*, (La Paz), 27 junio 1971; Sandoval, *op. cit.*, p. 94.

El recurso de la nacionalización, como medio de fortalecer el sector estatal y eliminar la presión radical, pronto resultó insuficiente, aunque sólo haya sido porque la inversión norteamericana en Bolivia no era muy grande, además, tampoco resultaba muy rentable. El régimen se mostró sumamente reacio a asumir el control de operaciones de la South American Placers en Tipuani, a pesar de estar siendo ésta saboteada y de sufrir un virtual bloqueo por parte de la población local, ya que se sabía que era una empresa en decadencia.[54]

No obstante, el sentimiento contrario a los EE UU siguió creciendo. Inmediatamente después del golpe de Banzer, Lechín, que estaba adquiriendo un sitial político más destacado, pronunció un vehemente discurso contra ese país, en los siguientes términos: "…mientras haya CIA y Pentágono, el general Torres no podrá dormir tranquilo ni en su casa ni en el palacio, menos los trabajadores. Si quiere comenzar un período de tranquilidad política, tiene que echar a la misión militar norteamericana de este país… si en el Ejército queda el resabio del fascismo, ¿por qué no lo liquida de una vez? Cuando decimos liquidar, es para que los eche y les quite el poder de las armas que tienen en sus manos, que en lugar de echar a dieciocho, eche a decenas y centenares del ejército y a todos los fascistas".[55]

Dos meses después, luego del anuncio de Nixon de vender las reservas de estaño, dirigiéndose a los mineros de San José, el líder de la COB respaldó plenamente la propuesta del comando político de una Asamblea Popular, como órgano independiente del poder popular y demandó que "…los gringos …que han chupado la sangre del pueblo por quinientos años…" sean expulsados e insistió en que la lucha armada era la única forma de hacerlo: "el enemigo nos ha enseñado a usar la violencia y haremos uso de la violencia boliviana".[56] Si con tales afirmaciones, Lechín retomaba el espíritu de 1952, esto se debía a que estaba respondiendo a una situación que, en muchos sentidos, se asemejaba a la que había prevalecido casi veinte años antes. La ola de disposición antiimperialista no se limitaba al sector estudiantil, si bien es cierto que fue este sector el que tomó a su cargo las iniciativas más prácticas, incluyendo la organización de una clamorosa semana "antiimperialista" a fines de mayo. Como resultado de las permanentes demandas, manifestaciones y ocupaciones temporales, Torres tuvo que hacer mayores concesiones en este campo. En febrero, cerró el Centro Boliviano de Educación Sindical (CEBES), organización

54 Gallardo, *op. cit.*, p. 306.
55 *Presencia*, (La Paz), 7 de enero de 1971.
56 *Ibid.*, 4 de abril de 1971.

sindical respaldada por la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) y el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (AIFLD). En mayo anunció la expulsión del Cuerpo de Paz y, cuando el embajador de EE UU se mostró vacilante, presionó para asegurar que sus voluntarios abandonen el país hasta fines de ese mes. Poco después, el gobierno rescindió el contrato con el gobierno norteamericano para usar la base de "Guantanamito" como estación de rastreo de satélites. En este caso, Torres recurrió inusitadamente a una ironía al explicar que la base extranjera constituía un grave peligro para la seguridad del Estado debido a que estaba demasiado cerca de las instalaciones militares bolivianas. Paralelamente, Julio Garrett, embajador de Bolivia en Moscú, firmó un acuerdo con la Unión Soviética para la instalación de un centro de astronomía en La Paz. Estas medidas exasperaron a Siracusa y preocuparon hondamente al alto mando: el presidente rehusó expulsar a la misión norteamericana, consciente de que esto inevitablemente provocaría algo más que muchas caras en el país del norte. En prácticamente todos los casos, tales acciones se emprendieron generalmente con objeto de adelantarse a la izquierda, encarnada en los estudiantes o en el revitalizado ELN, que amenazaba con tomar a su cargo la resolución de los problemas, lo cual llegó a hacer en muchas ocasiones, revelando así la falta de autoridad del gobierno. En febrero, grupos de mineros de San José y estudiantes tomaron las oficinas de la DIC (Dirección de Investigación Criminal) en Oruro, en protesta por la nominación de barrientistas para cargos de alto rango en la Policía; ocupaciones similares en Sucre y Potosí durante el mes de marzo forzaron la renuncia de diversos oficiales.[57] Amenazas de organizar redadas a la embajada norteamericana en busca de agentes de la CIA precipitaron el éxodo de varios diplomáticos. En Oruro, la FUL ocupó la mansión de propiedad de la Fundación Patiño y la transformó en un centro de cultura popular, habiendo expulsado anteriormente a la Sociedad Cívica 10 de Febrero de la universidad por considerar que sus miembros eran "representantes de la burguesía".[58] Los estudiantes de Potosí siguieron ese ejemplo expropiando el Club Social de los Franciscanos, mientras que aquellos de Cochabamba y Santa Cruz "recuperaron para el pueblo" varias propiedades de Barrientos. En una manifestación ligeramente disinta de ese aventurismo juvenil, un grupo de estudiantes mujeres de la Facultad de Bienestar Social de la UMSA se equipó de escopetas e hizo una redada al único motel de La Paz a media noche. Supuestamente al grito de "manos arriba, ha llegado el socialismo", el comando sacó a

57 *Ibid.*, 17 de febrero, 6 de marzo, 11 de marzo de 1971.
58 *Ibid.*, 15 de febrero, 29 de marzo de 1971.

ocho parejas prácticamente desnudas y demandó que el edificio sea convertido en guardería, ya que ahora era un centro de prostitución y consumo de drogas. Muy probablemente las demandas habrían sido aceptadas de no ser por las protestas del personal del motel, que sintió que su subsistencia estaba en juego y llamó a la policía. Gallardo, el ministro del Interior, en sus memorias escribe que no hubo una semana, en todo el gobierno de Torres, en la cual no lo llamaran a resolver problemas originados por acciones directas, fue sacado de su sueño para finalmente lograr una difícil tregua bajo cuyos términos el motel seguiría funcionando pero sería cooperativizado.[59]

La renuencia del régimen a utilizar a la policía o tropas incentivó la acción directa como medio para obtener concesiones del Estado y fue utilizado aun por sectores que normalmente no se inclinaban por tal acritud. En Potosí, el ministro de Urbanismo fue tomado rehén por varios días para obtener financiamiento departamental y asegurar la construcción de una nueva central telefónica. En Corroico, el prefecto de La Paz y varios ingenieros sufrieron igual suerte y el "Comité Revolucionario" local bloqueó todos los caminos para reforzar sus demandas de garantías para la conclusión de la carretera de Santa Bárbara. El alcalde y el concejal del aislado pueblo de Rurrenabaque secuestraron un avión DC-3 del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), para forzar la promesa de vuelos más frecuentes y una mejor pista.[60] Probablemente la instancia más concertada y de mayor connotación política entre estas movilizaciones masivas localizadas haya sido la campaña para arrancar de Oruro a la Segunda División. Esta demanda se originaba directamente en las matanzas que tuvieron lugar durante el golpe de Miranda y se popularizó tanto que, luego de numerosos intercambios entre la Central Obrera Departamental (COD) y Reque Terán, se tradujeron en la convocatoria a una huelga general en todo el departamento. A último momento, el ministro de Defensa, Lafuente, cedió y entregó los cuarteles al ministro de Educación, tal como lo había pedido el cabildo abierto. Este humillante retroceso irritó más que ningún otro incidente a los oficiales, incluso más que la liberación de Debray, pues parecía concentrar tanto la debilidad de la "institución tutelar" como el menosprecio con que se la consideraba en círculos populares. Oficiales retirados y en servicio inundaron la prensa con cartas de protesta por tal "injuria e ignominia".[61]

59 Gallardo, *op. cit.*, p. 307; Baptista: *Historia contemporánea...*, p. 299; *Presencia*, (La Paz), 27 de enero de 1971.
60 *Presencia*, (La Paz), 29 de enero, 10 de marzo, 27 de marzo de 1971.
61 *Ibid.*, 7 de febrero de 1971.

Las manifestaciones de descontento público y la alteración del orden que generalmente los acompañaba se producían a intervalos bastante frecuentes durante la primera mitad de 1971. Antes del mes de mayo parecía tratarse solamente de un caos generalizado, en tanto que después de la celebración más grande que se haya visto en el país del Día del Trabajo, tales manifestaciones tuvieron lugar en un nuevo contexto político.

La Asamblea Popular programada por el Comité Político se reuniría por primera vez el 22 de junio en el Palacio Legislativo. El establecimiento formal de un "órgano de los trabajadores y del poder popular" completamente independiente del gobierno provocó una marcada transformación del clima político; la confusa etapa de múltiples demandas al régimen y de acciones independientes desembocó en una nueva etapa en la cual la legitimidad y el poder del régimen se enfrentaban al desafío de una fuente alternativa de autoridad. Durante cerca de dos meses, esto no fue sino una expectativa, pero una expectativa que influía en los acontecimientos y preparaba el comportamiento político. Incluso el régimen, que evidentemente no hizo nada por contribuir a la formación de la Asamblea, se entregó al afán de ganar al nuevo cuerpo a su favor y daba la impresión de sentirse aliviado ante la aparición de una nueva iniciativa. El hecho de que la Asamblea –que desde su inicio daba signos de poderse convertir en un cuerpo tipo soviet en lugar de ser una mera cámara de debate– se hubiese instaurado siete semanas antes de empezar sus sesiones, sin mayor obstáculo por parte del gobierno, demostraba la amplia legitimidad que había adquirido el comando donde la izquierda llevaba la voz cantante.

Tal situación llevó al establecimiento de dos nuevos partidos políticos, los cuales habrían de acumular considerable popularidad durante la década siguiente y plantearían un gran desafío a la organización ortodoxa de la izquierda, misma que siguió dando prioridad a la claridad programática y a la disciplina interna antes que a la apelación popular. El primero de ellos fue el Partido Socialista (PS) creado el 1° de mayo de una fusión del Frente de Acción Revolucionaria (FARO) y la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) de Marcelo Quiroga y de lo que quedaba del Frente de Liberación Nacional (FLIN) donde exmiembros de la izquierda movimientista dirigida por Mario Miranda Pacheco habían ganado el control. El PS estaba orientado a un radicalismo independiente, construido sobre la base de un frente unido de un antiimperialismo formulado en lenguaje marxista pero desprovisto de limitaciones estratégicas rigurosas. Era similar, en muchos aspectos, al partido de Allende en Chile y ciertamente no le faltaba presencia en círculos sindicales; sin embargo, en la primera fase de su existencia y debido a la falta de un programa preciso, abarcó una serie de posiciones contradictorias que en poco tiempo engendrarían una crisis interna. El PS declaró su independencia de Torres, pero tanto la trayectoria de sus líderes como el carácter indefinido de su plataforma indicaban un planteamiento fundamentalmente centrista, diseñado para acrecentar al máximo sus oportunidades tácticas. La izquierda del PS no tardaría en descubrir que su mayor fortaleza yacía en aquellos denominadores comunes del sentimiento popular boliviano: antimilitarismo y antiimperialismo. Con todo, el partido chocó siempre con el obstáculo de su falta de organización disciplinada, tan esencial para sustentar una presencia en la clase obrera. También el PS se debilitaba por tener que competir, en los círculos de la clase media radicalizada, con la otra agrupación política que surgió en ese período.

Se trataba del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que había comenzado a funcionar a fines de mayo, pero no fue formalmente instituido sino hasta septiembre de 1971. En sus primeras fases, el MIR proclamaba una línea marxista nada ambigua, adoptaba posturas extremadamente radicales y parecía estar listo para desplazar la autoridad del PCB y el POR con una política joven y valiente capaz de trascender los tradicionales límites del sindicalismo. Ante todo un partido generacional, el MIR fue producto de la fusión del PDCR, liderado por Jorge Ríos Dalenz, Antonio Araníbar y Adalberto Kunjara, con el Movimiento Revolucionario Espartaco, un grupo de jóvenes intelectuales dirigido por el economista tarijeño Pablo Ramos y de varias figuras destacadas como Jaime Paz Zamora y René Zavaleta Mercado, que antes habían estado ligados al PDCR o a la izquierda movimientista. Al igual que el Partido Socialista, el MIR adoptaba otra serie de posturas contradictorias; ya en junio, Antonio Araníbar daba énfasis al papel de vanguardia del proletariado, mientras que Kuajara sostenía que la fuerza esencial en la batalla por el socialismo era el campesinado.[62] En el curso de un año, esto resultaría en la formación de dos tendencias claras dentro del partido y más tarde provocaría que se desechen los objetivos marxistas originales, un agudo viraje a la derecha y una pérdida muy grande de militantes. No obstante, en 1971 el MIR exhibía muy poco de estas características, establecía estrechos contactos con el ELN, criticaba a los partidos ortodoxos considerándolos letárgicos e invocaba a Lenin en sus ataques al populismo militar y al nacionalismo:

> No se trata de que el pueblo apoye y confíe en esos pocos militares progresistas, sino de que ellos apoyen, confíen y sigan al pueblo. Nuestro deber revolucio-

62 *Ibid.*, 12 de junio, 18 de junio de 1971.

> nario no es callarnos esta verdad marxista-leninista por el temor de "molestar" a los militares progresistas o por miedo a empujarles "infantilmente" a que en el momento de las decisiones se unan con sus camaradas de armas reaccionarios. . . el MIR considera que la contradicción principal en la actual coyuntura no "se opera entre la nación oprimida y el imperialismo" sino entre las clases explotadas de la nación dependiente y el imperialismo.[63]

Con esa línea, el partido no tardó en ganar el apoyo de muchos estudiantes, así como la juventud urbana radicalizada, asumiendo la dirigencia de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), a través de Óscar Eid, y de la FUL paceña, que anteriormente habían estado subordinadas al informal Comité Revolucionario dirigido por Jorge Lazarte y Víctor Sossa del POR.

La aparición del MIR indudablemente ejerció gran presión sobre el PCB y el POR, partidos que redoblaron su resistencia a la "ultra izquierda" e insistieron en la necesidad de construir un movimiento revolucionario dentro de la clase obrera sobre la base de las aspiraciones y organizaciones vigentes en lugar de imponerlo desde fuera por medio del "aventurerismo". Mientras los miembros más jóvenes del POR coincidían particularmente en la importancia de la lucha armada, el partido dirigía su atención hacia la Asamblea afirmando que el mismo comando político tenía las características de un soviet, que la Asamblea se encargaría de consolidarlas y que generaría una situación de poder dual, brindando las bases para la toma del poder estatal.[64] Atacando al MIR desde una posición más favorable a Torres, el PCB en su III Congreso realizado en junio subrayaba que: "...no somos ni podemos ser antimilitaristas..." y que prefería enunciar los elementos positivos antes que las deficiencias de un régimen cuya "...forma se orienta hacia una gestión popular progresista con rasgos antiimperialistas...".[65] Por otra parte, durante los meses anteriores a la consolidación del MIR, el PCML adoptaba posiciones y participaba de acciones que se situaban más a la izquierda de aquel partido. Con el propósito de iniciar la guerra popular –su objetivo– los maoístas habían respondido al golpe de Torres organizando la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO) en el norte de Santa Cruz; asimismo, habían dirigido la ocupación desorganizada de la hacienda Chané de propiedad del poderoso terrateniente Raúl Bedoya, destacado portavoz del sector privado. En primera instancia, Torres intentó negociar un compromiso, dado que los campesinos tenían una serie de demandas irrefutables y que Bedoya no había cumplido con el pago de un abultado préstamo obtenido del Estado con el fin de expandir su estancia ganadera. Sin embargo, en enero, el gobierno central perdió el control de la situación cuando, en vista de la falta de acción oficial, UCAPO ocupó nuevamente la hacienda y provocó otras tomas en la región, incluyendo la de un ingenio azucarero y también la de un leprosario. Por propia iniciativa, los Rangers se trasladaron rápidamente al lugar y poco después anunciaron la captura de cuatro "guerrilleros" y del "comandante Rolando", que, como se supo luego, no era otro que el propio Óscar Zamora, en cuyo arsenal se encontraron dos revólveres y una pila de panfletos de Mao. Zamora fue sumariamente exiliado, pero pronto retornó al país, en tanto que su partido no cesó de incentivar la movilización del campo y de la ciudad en el departamento de Santa Cruz, donde el descontento popular por el predominio de la extrema derecha y de los grandes intereses agroindustriales había alcanzado niveles sin precedentes.

La política de lucha armada fue practicada con más eficiencia por el ELN, que concentró sus acciones en las ciudades. Alternando sus tácticas, el ELN se dedicó a realizar rápidas ocupaciones de emisoras de radio, al igual que al secuestro de importantes empresarios. En eficientes y ampliamente publicitados operativos, secuestró al propietario minero suizo Alfredo Kuser y al dueño de la firma más grande de papel e imprenta, al alemán Johnny von Bergen, de cuya familia los guerrilleros obtuvieron cincuenta mil dólares. Si bien el ataque a la base de la fuerza aérea de Santa Cruz en apoyo de UCAPO fracasó rotundamente, el ELN logró colocar bombas en los domicilios de varios terratenientes y prominentes derechistas, en una campaña de "ajustamiento" que abarcaba desde espías policíacos de menor importancia hasta el coronel Quintanilla, acribillado en Hamburgo. Algunas acciones, tales como el asalto a los locales de la Cámara de Comercio en Cochabamba –que dio como botín documentos que implicaban a hombres de negocios locales en planes para un golpe– resultaron populares y justificaron la acción directa; pero otras obras, como la colocación de trampas explosivas que causaron la muerte de humildes policías, produjeron la aversión popular y lo mismo ocurrió con el innecesario antagonismo hacia los militares. A lo largo de ese período, el ELN permaneció en la clandestinidad y se concentró en provocar a la derecha; era la única fuerza de izquierda que no tenía representación en la Asamblea, pero sí contaba con muchos amigos que simpatizaban con los métodos guerrilleros y los concebían como un factor indispensable en la construcción del movimiento socialista.

63 *El Diario*. (La Paz), 3 de junio de 1971.
64 *Ibid.*, 16 de noviembre de 1970; *Masas*, N° 386, 15 de febrero de 1971.
65 Partido Comunista de Bolivia: *III Congreso Nacional. Documentos*, La Paz, 1971, pp. 51, 52 y 57.

La Asamblea Popular ha sido un tema de bastante controversia en el debate político boliviano. Algunos la desecharon como un cuerpo efímero y totalmente inefectivo, un centro de oratoria para ideólogos en búsqueda de realización personal, que se reunieron durante apenas diez sesiones, cinco de las cuales estuvieron inmersas en minucias burocráticas y el resto en provocar un golpe, en el cual no pudieron erigir una dirección.[66] En general, la izquierda ha defendido la experiencia, si bien con bastantes diferencias en cuanto a si representó una "escuela" (PCB) o si "tenía las características de un soviet... y gérmenes de poder dual" (MIR) o si se trataba de un cuerpo con rasgos más marcados de soviet surgido de un estado de poder dual (POR).[67] Parte del acalorado y meticuloso debate en torno a la Asamblea ciertamente ha sido presentada como irrelevante o sumamente abstracto por el hecho de que las circunstancias determinaron que nunca llegara a ser más que un experimento superficial. No obstante, la experiencia tuvo un carácter peculiar, representó un intento consciente y práctico de la izquierda por construir algo a partir de la experiencia de 1952 y además aterrorizó a la derecha.

El cauce original de la Asamblea salió de la resolución política de la COB de mayo de 1971; pero en el curso de las semanas que antecedieron al 22 de junio se redefinió en el borrador redactado por el Comité Político las "bases constitucionales" del flamante cuerpo, discutido y aprobado en los debates iniciales. El documento declaraba que la Asamblea no podía cobrar la forma de un "parlamento burgués", pues era un "órgano de poder popular" que "ejecutaría sus decisiones utilizando los medios de lucha que corresponden a la clase obrera". Con el fin de garantizar una línea firmemente proletaria, el sesenta por ciento de los delegados y miembros de comisiones representaba a sindicatos mineros y fabriles, con un total de 132 delegados. A las "organizaciones de clase media" se les otorgó 53 delegados; a los campesinos (en la práctica al Bloque Independiente, con predominio del PCML), 23 delegados y a los partidos de izquierda, trece –inicialmente el PCB, PCML, PRIN, POR (Lora), PDCR y Esparraco –.[68] Esa distribución generó dos críticas esenciales: la primera

66 Ver por ejemplo Baptista, *op. cit.*, p. 297; Klein: *Evolution*..., pp. 252-253.

67 Una exposición completa sobre el carácter de la Asamblea aparece en René Zavaleta Mercado (*El poder dual en América Latina*, México, 1974), parte de la cual está traducida en "Bolivia Military Nationalism and People's Assembly", en *New Left Review*, N° 73, mayo-junio de 1971; Guillermo Lora: *Bolivia: De la Asamblea Popular al golpe fascista*, Buenos Aires, 1972.

68 Entre los participantes de la Asamblea dominada por la FSTMB (38 delegados), los trabajadores fabriles (24), los ferroviarios (17), los trabajadores de la construcción (13) y los trabajadores petroleros (12). La COB y las CODs tenían una gran representación estudiantil y del sector transportista (nueve delegados cada uno), al igual que un amplio despliegue de funcionarios, desde empleados de cine hasta artistas y trabajadores de salud y bancarios. El Bloque Independiente controlaba 18 de los 23 delegados campesinos. A la larga, el PS, el POR (González) y el POR (Vargas) habrían de tomar los asientos políticos originalmente asignados al MNR. El MIR no tenía delegados oficiales; dos lugares fueron ocupados por el PDCR y uno por Esparraco.

de la extrema izquierda, para la cual el campesinado estaba ridículamente poco representado; y la segunda del gobierno, para el cual, pese a que el MNR había sido excluido formalmente, en realidad poseía una mayoría de los sindicatos. La primera crítica fue rechazada por la COB y la mayoría de los partidos políticos, argumentando que la clase obrera debía tener una mayoría por ser vanguardia, que el movimiento campesino aún estaba profundamente dividido y que, con excepción del Bloque, seguía ligado a sus pactos con los militares, por lo cual, si se otorgaba al campesinado una representación sobre una base más numérica que política, se entregaría la Asamblea al control de la derecha. La crítica acerca de la representación movimientista fue, en cierto sentido, más enojosa, ya que la izquierda estaba bien consciente de que, pese a que el Comando lo proscribió, el MNR tenía una poderosa presencia. Pero en realidad, los militantes sindicalistas del partido, si bien podían haber objetado el ocasional control de las sesiones por parte de los partidos revolucionarios, estaban bastante a la izquierda de la dirección de su propio partido, ahora dividido entre Paz y Siles.[69] En los hechos, estos delegados se adhirieron a la línea tomada por la FSTMB y la COB. Aunque Paz Estenssoro había apoyado inicialmente la idea de la Asamblea, fue rápidamente rechazado e incluso Torres se negó a negociar un acuerdo político con él; lo cual llevó al veterano caudillo a una posición golpista absolutamente contraria a los deseos de los militantes obreros del MNR.[70]

La Asamblea Popular dio inicio a sus sesiones en el Palacio Legislativo el martes 22 de junio, con la aprobación tácita y bajo la observación preocupada del régimen de Torres. En muchos de los debates se notaba la ausencia de

69 Este punto es expuesto por Zavaleta: *Poder dual*, p. 108, donde también señala que si bien el MNR no tuvo influencia, la Asamblea estuvo muy dominada por objetivos sindicales. Zavaleta era delegado del grupo informal del MIR y fue particularmente crítico del importante papel desempeñado por el PCB y el POR en contra de los cuales su libro abre una polémica poderosa pero sectaria.

70 *Presencia*, (La Paz), 26 de enero de 1971; Suárez: *Entre el fusil y la palabra*, p. 230. Según Torres, Paz le ofreció el apoyo movimientista a cambio de la promesa de suspender las elecciones.

dirección y disciplina y se diferenciaron muchísimo del protocolo formal de la legislatura que ocasionalmente ocupaba la cámara. Esto fue lo que menos preocupó a los delegados, quienes rechazaron explícitamente el papel parlamentario; pero se esperaba asimismo que el nuevo cuerpo estableciera estrictas normas de procedimiento y nombrara comisiones especializadas antes de pasar al debate esencial. A pesar de que la amenaza de golpe estaba siempre en el aire, es únicamente con el privilegio de un análisis posterior que se puede notar que preocupaciones organizativas de la Asamblea serán tan graves en cuanto al tiempo que toman. Los primeros días se ocuparon en nombrar una comisión de poderes que considerara solicitudes de las delegaciones y la creación de otras comisiones que estudiaran la cogestión, una universidad obrera, milicia obrera y tribunales populares. Todas estas comisiones fueron dotadas de personal en estricta relación con la composición general de la Asamblea y todas produjeron informes y borradores de resoluciones en el curso de una semana.[71] Sin embargo, la elección del presidente causó cierto retraso; en ella Lechín se enfrentó una vez más a Víctor López. Esto dio lugar a una división en la delegación de la FSTMB; y pese al apoyo de los fabriles, el PCB y el POR, López logró 58 votos contra los 103 del líder cobista, quien se granjeó el respaldo de toda la delegación campesina, así como el de los trabajadores petroleros, ferroviarios y de los estudiantes.[72] Las frecuentes ausencias de Lechín de la cámara, un debate de siete horas sobre la elección del segundo vicepresidente y un día y medio de caústicas discusiones sobre la insistencia del PCML de dar un voto de apoyo a Zamora por la ocupación Chané-Bedoya, se combinaron para detener el progreso de la Asamblea. Zamora, por su parte, sin ser delegado, dio una conferencia de prensa "clandestina" en la que acusaba al POR y al PCB de sabotear la resolución; pero la acción de su partido sirvió únicamente para que muchos delegados sindicales lo condenaran, algunos de los cuales pidieron la exclusión de todos los partidos políticos. Se evitaron otros problemas de este tipo con el acuerdo de "...no tolerar ningún tipo de represión que se ejercite contra cualquier organización o persona empeñada en la lucha por la liberación

71 No existe un estudio detallado sobre la Asamblea Popular, la cual carecía de recursos para reproducir los debates más allá de la cobertura de prensa, que fue bastante extensa. La siguiente descripción sucinta se ha hecho a través de informes de *El Diario* y *Presencia*, conversaciones con participantes de diversas alianzas políticas, copias mecanografiadas de resoluciones e informes y de las notas de primera mano que me prestó Laurence Whitehead, quien asistió a los tres últimos días de debate.

72 *El Diario*, (La Paz), 26 de junio de 1971.

nacional y por el socialismo...".[73] Tales dificultades, quizás previsibles, surgieron tanto de la manifiesta subestimación que tenían los maoístas del valor de la Asamblea, como de la igualmente franca renuencia de muchos delegados sindicales a apartar la discusión de una serie de cuestiones específicas; la más destacada de éstas era la cogestión a la que, a su entender, la extrema izquierda atribuía escasa importancia. Con todo, los tres primeros días de discusiones dieron como resultado la aprobación de un número de estatutos, por los cuales la "Asamblea Popular se constituye como dirección y centro unificador del movimiento antiimperialista y su fin fundamental consiste en lograr la liberación y la instauración del socialismo en Bolivia. Es un frente antiimperialista dirigido por el proletariado. Está constituido por la COB; las confederaciones y federaciones sindicales de carácter nacional; las organizaciones populares, y por los partidos políticos de orientación revolucionaria".[74]

La primera resolución más importante fue propuesta por Lora y recibió respaldo unánime, descartando en la práctica las esperanzas del gobierno de coptar la Asamblea. En ella se señalaba que la derecha estaba preparando un golpe, se declaraba que los trabajadores recurrirían a la violencia revolucionaria, se convocaba a la huelga general y a la ocupación de los centros de trabajo en caso de producirse cualquier tipo de ofensiva reaccionaria y se sostenía que, en tal circunstancia, la Asamblea asumiría la dirección tanto militar como política de las fuerzas populares. Si bien la adopción de esa postura era esencial para desafiar tanto a la derecha como a Torres, pronto se enfrentaron los problemas prácticos que planteaba la resolución cuando la Comisión de Milicias y Tribunales Populares hizo un informe preliminar. En la siguiente discusión se acordó que, en tanto la Asamblea careciera de los medios coercitivos para imponer sus decisiones, los tribunales populares no tendrían credibilidad. La distribución de armas a las milicias constituía otro problema agobiante, mientras que Torres rehusaba entregar armamento y un gran porcentaje de las tropas le seguía siendo leal. El resultado fue que el PCB hizo devolver el informe de la comisión, solicitando un estudio más profundo.

El principal debate giró en torno a la cogestión; se prolongó por tres días y enfrentó a los sindicatos más importantes, al PCB y al POR contra los estudiantes, el PCML y los partidarios del MIR. La extrema izquierda no se opuso formalmente a la moción de la FSTMB presentada por Noel Vásquez y Filemón

73 *Ibid.*, 27 de junio de 1971.

74 *Ibid.*, 25 de junio de 1971.

Escóbar, pero sostuvo que el control obrero era extremadamente vulnerable a la burocratización y, en sus fundamentos, una desviación de la toma del poder, lo cual sólo podría resolverse a través de la lucha armada. López respondió subrayando que el control de la COMIBOL era un tema político y económico crucial para el ejercicio del poder en Bolivia, mientras que Lora se encontró en la excepcional posición de ser aplaudido por los dirigentes de la FSTMB y del PCB, cuando solicitó poner fin al "terrorismo verbal" y, en lugar de la reiteración de verdades formales, instó a reconocer que "...no se puede ir a donde los obreros que están apunto de declararse en huelga por mejoras salariales y decirles mañana ustedes irán a la guerra civil".[75] Habían, por supuesto, poderosos y recientes ejemplos que podían utilizarse para respaldar esa línea, pero asimismo habían problemas igualmente sobresalientes respecto a la organización del control obrero, incluso con el poder de veto; y aunque los maoístas y el MIR votaron finalmente a favor de la moción, sus advertencias acerca de la necesidad de enfrentar la amenaza fascista resultaron estar mejor fundadas de lo que suponían los otros partidos. En este aspecto, no se recibió mucha ayuda del ELN, pues el último día de debates distribuyó un estridente manifiesto anunciando que había asumido la responsabilidad de defender la Asamblea y seguiría protegiéndola a condición de que los delegados ordenaran la inmediata detención de los golpistas, la nacionalización de las empresas que les brindaban su apoyo y el despliegue de obreros armados y patrullas de estudiantes por toda la ciudad.[76]

La primera sesión de la Asamblea fue clausurada el 2 de julio, cuando las finanzas de la mayoría de los delegados eran ya muy escasas. Se aprobaron estatutos básicos y otros informes y resoluciones sobre la Universidad Obrera, en tanto que las Milicias y Tribunales Populares estaban en preparación. Se instruyó a los delegados reanudar las sesiones el 2 de septiembre, luego de que hubiesen informado a sus sindicatos y recibido nuevos mandatos.

Entre tanto, el comando político reasumió la dirección política y las Asambleas departamentales se convocaron sobre la misma base que el cuerpo nacional. Comenzaron sus reuniones en una serie de capitales provinciales desde principios de julio y aunque su alcance fue más restringido desde el punto de vista geográfico, fueron tan populares y no menos radicales que su modelo paceño. Liberadas de restricciones políticas más amplias y confrontadas con problemas locales concretos, las Asambleas departamentales parecían estar

75 Ver *El Diario*, (La Paz), 1° de julio de 1971, para mayores referencias.
76 *Ibid.*

destinadas a convertirse en una versión popular del cabildo abierto tradicional y suscitaron considerable aprehensión entre los empresarios locales y entre oficiales del ejército. Aunque las deliberaciones de la Asamblea fueron breves y en algunos sentidos inconclusas, era evidente que provocaban un movimiento nacional de gran ímpetu y representaban una amenaza directa no sólo para un gobierno sumamente frágil, sino para todo el sistema social del país.[77] El gran número de corresponsales extranjeros que había llegado a La Paz para cubrir las noticias sobre la Asamblea transmitió una versión similar a la prensa extranjera, desde donde personalidades como la del general Bethlem no tardaron en opinar que con "...la ayuda de un gobierno ilegítimo, en Bolivia se había instaurado el primer soviet del continente, bajo la dirección de Rusia".[78]

La evidencia de una desestabilización planificada y de la preparación del golpe por parte de la derecha en bloque – un fenómeno que realmente no se había repetido desde 1946– no fue difícil de hallar. Como hubo de ocurrir en Chile más tarde, los transportistas autónomos estuvieron en primera línea, primero reduciendo sus servicios y cobrando tarifas arbitrarias, y después declarando en junio una huelga general. Debido a que las grandes empresas agrícolas retuvieron sus productos y los vendedores mayoristas comenzaron a especular, el abastecimiento en los mercados era muy escaso; los precios del pan, la leche, el arroz, el azúcar y el café sufrieron los más notables aumentos y en algunos casos llegaron al veinte por ciento mensual. Como admitió Torres después, el gobierno confrontó una campaña de sabotaje económico centralizado en Santa Cruz, no solamente por expropiación de la Gulf, sino también debido al establecimiento de Consejos Nacionales del azúcar y del café como primer paso hacia la nacionalización. Esta acción representaba una amenaza para compañías tales como la Grace y para empresarios locales como Gasser, la firma administrada por inmigrantes alemanes que tenían casi el monopolio de la refinación de azúcar en la zona este del país. Otro grupo cruceño que fue duramente golpeado –esta vez por la ocupación ilegal de una propiedad urbana valiosa pero subdesarrollada– fue la familia Eciainini, que tenía estrechos lazos con Banzer, de quien se sabía que mantenía permanente contacto con intereses comerciales a nivel regional durante sus repetidas incursiones clandestinas a Bolivia en la primera mitad del año 1971. La campaña de Banzer

77 La respuesta del régimen a la Asamblea está esbozada en Hugo Torres Goitia: *El gobierno revolucionario y la Asamblea Popular*. La Paz, 1971.
78 *Presencia*. (La Paz), 20 de junio de 1971.

en su ciudad natal contaba con una amplia cooperación de los militares brasileños, quienes muy probablemente decidieron ir más allá en su respaldo a la desestabilización, brindando una colaboración directa al golpe cuando, a mediados de agosto, Torres rechazó su ofrecimiento de explotación y procesamiento de mineral de hierro de los depósitos fronterizos del Mutún y otorgó el contrato a la Unión Soviética.[78] Berhlem, que ya había dado rienda suelta a su idea de disolver Bolivia convirtiéndola en protectorado de los Estados vecinos grandes, ahora instaba públicamente a la intervención directa para recibir solamente una repulsa formal del canciller brasileño, quien había llegado a reconocer la necesidad de tener un fuerte *protegé* militar que reemplazara a Torres y que fuese contrario a los intereses argentinos.[80] La sustitución del relativamente flexible Levingston por el mucho más ambicioso Lanusse en Buenos Aires brindó mayor ímpetu a los golpistas, bajo la cobertura de una proclamada "neutralidad" en cuanto a los asuntos internos de Bolivia por parte del presidente argentino. Para los argentinos, el principal candidato era el general Remberto Iriarte Paz, pero también ayudaban a Miranda y a Juan Ayoroa.

La clausura de la primera sesión de la Asamblea y el proyecto de una segunda en el curso de dos meses brindó a los conspiradores la base necesaria para lograr apoyo dentro del país y el tiempo requerido para organizar el golpe. En el frente político, Banzer, reconocido por la mayoría de sus opositores como el reto más importante, si no como el presidente natural, se benefició enormemente de una alianza tanto con dirigentes del MNR (Guillermo Bedregal, Ciro Humboldt, Raúl Lema Peláez) como de la FSB (Arturo Violand, Héctor Ormachea, Carlos González). Sus contactos militares los manejaba el mayor Humberto Cayoja, quien para muchos era cultivado independientemente por intereses comerciales de Santa Cruz, como una especie de reencarnación derechista de Villarroel. En un plano político más amplio, esta actividad encontró bastante resonancia en aquellos grupos que predeciblemente reaccionaban con horror ante el "peligro comunista" y la permanente movilización social: la Confederación Nacional de Instituciones Femeninas (CONIF), el Opus Dei, los francmasones, las Cámaras de Comercio locales y no pocos miembros del cuerpo diplomático. Seguramente, estos grupos no encontraron nada más intranquilizando que la publicación de una carta pastoral del arzobispo de Sucre, cardenal Clemente Maurer, donde

79 Ramiro Sánchez: *Brazil en Bolivia; lecciones de un golpe militar*, Santiago, 1972, p. 12.
80 *Ibid.*, p. 27.

pedía "justicia y no violencia" y se instaba a una orientación popular para la Iglesia. Al día siguiente de su aparición, varios católicos prominentes de la plácida capital de la república amenazaron con crucificar a su cardenal si persistía en esa línea.[81] En las FF.AA ocasionó un trauma de similares proporciones la publicación en julio de un extenso y radical manifiesto del vocero clandestino Vanguardia Militar del Pueblo (VMT), indicando una medida de progreso en los intentos de la izquierda por ganarse el apoyo de los suboficiales no comisionados, quienes desempeñaron un papel crucial en el ejército boliviano, compuesto mayoritariamente por conscriptos bilingües.[82] Las demandas de naturaleza esencialmente institucionalistas del MNR, añadidas a la expulsión de la Segunda División de Oruro, a la liberación de Debray y a las continuas actividades de la UCAFO y el ELN, se transformaron en una invitación casi irresistible para los oficiales, si no a iniciar, al menos a respaldar el golpe que se avecinaba.

En los hechos, la rebelión no prosperó tan rápidamente como sus autores esperaban. Ésta comenzó el 18 de agosto, cuando el departamento de inteligencia militar fue alertado sobre la presencia de Banzer en Santa Cruz y oficiales de la policía local lo arrestaron en el domicilio de la familia Foianini. Una versión dice que Banzer, siendo sacado en pijama, reveló los detalles de una conspiración, temiendo, con buenas razones, ser puesto contra una pared y fusilado.[83] En efecto, otra serie de importantes conspiradores fueron apresados poco después; sin embargo, el núcleo conspirador –el mayor Cayoja y los capitanes Tito Vargas, Mario Oxa y Ernesto Campos– permaneció en libertad e instó al comandante del Ranger, coronel Andrés Selich, a que se rebelara y ocupara Santa Cruz. A despecho de sus tendencias firmemente anticomunistas y sus enormes ambiciones, Selich vaciló aún en esta última fase. Como admitió libremente un miembro de la familia Gasser seis meses más tarde, en un programa alemán de televisión que reveló el alcance del apoyo al golpe por parte de la comunidad industrial expatriada, dicha ayuda supuso una generosa infusión de dinero en efectivo destinado a persuadir al coronel a que movilizara sus tropas desde Montero y procediera el 19 de agosto a la toma de la

81 *El Diario*, (La Paz), 27 de julio, 28 de julio de 1971.
82 El manifiesto está reproducido junto con otros importantes documentos de este período en: *Bolivia, el rostro del fascismo*. Cuadernos de Marcha, Montevideo, Nº 51, julio de 1971. (En realidad este número debe haber sido editado después del 18 de agosto, pero en la carátula se indica "julio").
83 Alcázar y Bolivia, *op. cit.*, p. 438.

capital oriental a nombre de los rebeldes.[84] Banzer ya había sido trasladado a La Paz, pero ahora el golpe tenía una base firme para continuar ganando apoyo.

Inclusive antes de que Selich lograra el control del centro de la ciudad, aviones brasileños empezaron a aterrizar en el aeropuerto El Trompillo con grandes lotes de ametralladoras marca INA que fueron distribuidas a las fuerzas de la FSB, mismas que habían adoptado el nombre de "Ejército Nacionalista Cristiano". Los vuelos fueron reanudados al día siguiente, pero en esta ocasión tales aviones ostentaban ya un recién pintado distintivo boliviano. La intervención brasileña fue escasamente discreta; el 15 de agosto había declarado la total movilización de sus tropas en la frontera; hizo escaso o ningún intento por encubrir la identidad de los aviones que hicieron viajes regulares a Santa Cruz entre el 18 y el 20; y, finalmente, el cónsul de ese país en Santa Cruz, Mario Amorín, resultó herido mientras participaba en la lucha.[85] Luego de un breve enfrentamiento fuera de la prefectura, Selich emitió un mensaje radical que ahora se transmitía a nombre del Frente Popular Nacionalista (FPN), anunciando que varios militantes del MNR y de la FSB habían sido atacados y que "...los autores del mismo fueron drásticamente castigados, ultimándose a ocho de ellos...".[86] De hecho, con tales declaraciones se advertía que los opositores serían ejecutados y que Selich volvía a actuar como acostumbraba; no obstante, la resistencia en la universidad se prolongó por varias horas. A su caída, otras dos docenas de personas fueron puestas en el paredón de fusilamiento.[87] De acuerdo a los datos de la Cruz Roja, 98 personas fueron asesinadas y 506 heridas en el operativo dirigido por Selich, que duró treinta horas.

84 "Monitor" (Stoffregen-Boller y Gisela Vollmer-Koening), 28 de febrero de 1972. Al mismo tiempo que confirmaban su temor a una total nacionalización del café y del azúcar, los participantes subrayaban su preocupación en torno a una radicalización de la reforma agraria. Un empresario, Kyllmann, estimó el apoyo financiero de la comunidad alemana en veinte mil dólares en Santa Cruz y en diez mil dólares en Cochabamba; se recogió mucho más bajo la supervisión de Bernhard Elsner en La Paz; una selección de transcripciones de este programa serán reeditadas en Marcelo Quiroga Santa Cruz, *Bolivia recupera la palabra: fuicio a la dictadura*, La Paz, 1982, pp. 66-69. De acuerdo a la Cámara de Comercio Boliviano-Alemana de La Paz, compañías alemanas controlaban el treinta por ciento de las firmas de comercio privado (*Aquí*, [La Paz], N° 18, 14-20 de julio de 1979). Para mayores detalles ver *Stern*, noviembre de 1972.

85 Sánchez, *op. cit.*, pp. 13-15.

86 *La Crónica*, 21 de agosto de 1971.

87 "Según un testigo presencial, el coronel Selich, inmediatamente después de la explosión, dio órdenes de eliminar a todos los detenidos con estas palabras: 'No quiero presos ni heridos',

Le tomó dos días a la rebelión implantarse en La Paz, debido en parte a que la fuerza aérea se abstuvo de dar su apoyo hasta el último momento. La resistencia militar fue muy limitada. Reque Terán intentó convencer a Torres a que renunciara, despistó al gabinete respecto al alcance del respaldo al golpe y posteriormente inició conversaciones con los rebeldes locales; como resultado, recibió un disparo y fue herido en uno de los muchos incidentes confusos, tan característicos en las primeras fases de un golpe. Las unidades del Regimiento Andino, enviado por Torres para apoyar a los mineros en su intento de cercar a los rebeldes en Oruro, simplemente se detuvieron fuera de la ciudad y acordaron, con sus colegas opositores del régimen, esperar hasta que los acontecimientos estuvieran mejor definidos.[88] Solamente los Colorados, comandados por Rubén Sánchez, se opusieron al levantamiento hasta el final y fue por esa razón –como afirmó Torres después– que el resto de esa institución castrense no volvió a considerarlos parte de las FF AA.

Pese a que apenas recibió el respaldo de una solitaria unidad de las FF AA, Torres todavía rehusaba distribuir armas al pueblo.[89] Gallardo señala que incluso al ministro del Interior se le negó acceso a armamento para su defensa y que fue forzado a la extrema medida de comprarlo de la FSB, el mismo partido que en ese momento estaba en rebelión.[90] La noche del 20, cuando la huelga general y la movilización popular declaradas por el comando político ya estaban en vigencia, una delegación (Lechín, Mercado, Lora, López, Reyes y Eid) visitó a Torres para demandarle la inmediata distribución de armas; éste respondió negativamente y agregó que, de todos modos, no quedaba ninguna en su poder.[91] Aunque ya daba igual en ese último momento, ésa era la situación en efecto, pues cuando la multitud reunida por el comando en las puertas del estadio fue finalmente enviada por sus comandantes amateurs a tomar los almacenes centrales del ejército, encontró apenas 1.200 Máusers antiguos y muy reducida

ocasionando que los grupos más exaltados ...iniciaran el asalto al edificio universitario, haciendo volar las puertas con granadas de mano ...Nosotros sólo escuchábamos 'Hay que matarlos'. 'Ningún perro rojo vivo'... Lo único que hicimos fue tirarnos al suelo." (Central Obrera Boliviana, *Informe: violación de los derechos humanos en Bolivia*, La Paz, 1976, pp. 126-127). "Fue tanta la bestialidad demostrada en sus acciones punitivas por el esmirriado, acicalado y neurótico gorila, gorila cien por cien, que la cristiana Asociación de Damas Paceñas se creyó obligada a condenarlo." (Lora, *Proletariado...*, p. 295).

88 David Padilla: *Decisiones y recuerdos de un general*, La Paz, 1980, pp. 81-82.

89 *Cuadernos de Marcha*, p. 89.

90 Gallardo, *op. cit.*, p. 365.

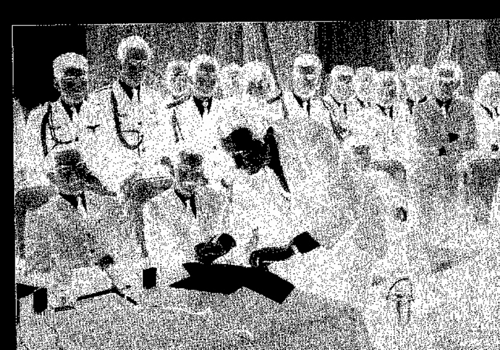
91 Lora, *op. cit.*, p. 271.

existencia de municiones. Reforzados por pequeños contigentes del ELN y de los Colorados, los estudiantes y trabajadores utilizaron estas armas durante el 21 de agosto, en un intento desesperado por recapturar el estado mayor y por aferrarse al cerro Laikakota. La manifiesta falta de preparación militar condujo a la pérdida de muchas vidas, lo cual se debió también al hecho de que las fuerzas populares creían que tanto la fuerza aérea como el Tarapacá seguían leales a Torres; por lo tanto, cuando tales unidades avanzaron para eliminar los últimos vestigios de resistencia a la insurrección, las sorprendieron completamente desprevenidas. Una de las razones para la tardía decisión de cambiar de bando fue la interrupción que sufrió la red de comunicación de los rebeldes, la cual no fue solucionada sino cuando el agregado militar norteamericano, mayor Robert Lundin, les entregó instalaciones de radio. Esta participación de Lundin recibió mucha cobertura en la prensa norteamericana a sólo dos días del golpe, pero el argumento de que este funcionario no sabía nada sobre los planes del levantamiento y que sólo apoyó a Banzer a último momento quedó invalidado por su falsedad cuando se reveló que la embajada americana –desde donde el 21 de agosto se realizaron disparos y algunas personas murieron a consecuencia de los mismos– había aconsejado el 18 a todos los ciudadanos americanos que no salgan hasta el 22 de sus hogares.[92]

Al atardecer del 21 de agosto, el régimen de Torres se había derrumbado y Banzer, una vez liberado, se declaró presidente antes de que otros contendientes exigieran para sí el cargo. Los estudiantes de San Andrés resistieron durante otras 48 horas, después de lo cual tuvieron que rendirse ante las bombas y ametralladoras, con otras tantas bajas. Con la confianza del triunfador único, el coronel Banzer declaró que "…ya no habrán más gases lacrimógenos sino balas…". Su aliado político, Víctor Paz Estenssoro, desde Lima ofreció una característica interpretación de los hechos anunciando que el golpe brindaba las condiciones para "…realizar las tareas de la revolución nacional todavía pendientes y preparar el tránsito a la etapa socialista que deberá alcanzarse el día de mañana".[93] Las matanzas de Santa Cruz y La Paz impidieron otras medidas de resistencia activa por parte de la izquierda; sus miembros pasaron a la clandestinidad para embarcarse en una extensa autocrítica y establecer alguna forma de organización. La derrota que había sufrido fue la más dura en la historia de la clase obrera, superando incluso aquella de 1946.

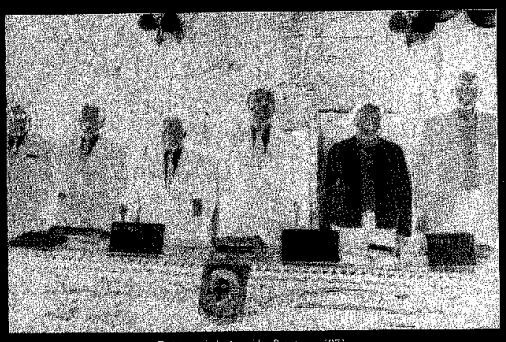
92 *Washington Star*, (Washington), 23 de agosto de 1971. *El Diario*, (La Paz), 18 de agosto de 1971.
93 *El Comercio*, (Lima), 21 de agosto de 1971.

Ernesto Che Guevara muerto el 8 de octubre de 1967



Marcelo Quiroga Santa Cruz firma el Decreto de nacionalización del petróleo en 1969.

Manifestación del 1° de mayo de 1970



Dirigentes de la Asamblea Popular en 1971

6. El banzerato (1971-1978)

Hugo Banzer Suárez gobernó Bolivia durante casi siete años. Este régimen fue el más duradero del presente siglo y abarcó gran parte de una década, en la cual la actividad política abierta fue privilegio exclusivo de los militares y sus colaboradores más cercanos. El golpe de agosto y la dictadura instaurada a partir de éste alteraron radicalmente la vida pública, que para la mayoría estaba subordinada a la riesgosa negociación de lo cotidiano y lo cívico.

Ciertamente, Banzer encontró oposición; pero dentro de las FF AA pudo contenerla con hábiles maniobras, mientras que el descontento y la resistencia populares fueron reprimidos sin clemencia. Esto condujo a muchos sectores de la población a una angustiosa resignación provocada por la azarosa situación de la izquierda, que buena parte de ese período estuvo enteramente absorbida por las arduas y penosamente lentas tareas de reorganización. La capacidad de Banzer de sostener este sistema rígido de control se debió principalmente al decidido apoyo que recibió de Washington durante varios años, el respaldo de un Brasil económicamente en expansión y políticamente ambicioso y a los intereses dominantes de la agroindustria cruceña, convertida en la fuerza motriz de la economía gracias al mayúsculo incremento del precio del petróleo y al auge de la agricultura de exportación. Las coordenadas de la economía boliviana cambiaron casi en el mismo grado que la política del país; tales transformaciones se proclamaron con tanto estruendo que a muchos les pareció que realmente había comenzado una nueva era.

Este anhelo fue enormemente alentado por el advenimiento de regímenes similares en todo el Cono Sur de Latinoamérica. Los golpes de junio y

septiembre de 1973 en Uruguay y Chile instauraron gobiernos aún más duros que el de Banzer, los cuales desde su inicio actuaron con un radicalismo y confianza tales que dieron lugar a ambiciones de dominar por más de una década o hasta el fin del siglo. El derrocamiento del presidente Velasco –delicado de salud– dirigido por el general Morales Bermúdez en 1975, que ocasionó el viraje a la derecha en el Perú, fue menos drástico, pero marcó la tendencia general totalmente confirmada por el establecimiento del régimen institucional del general Videla en Buenos Aires, en marzo de 1976. Surgió un "modelo del Cono Sur" caracterizado por la prohibición de actividades sindicales e independientes, por un Estado-cuartel autoritario, por la exaltación belicosa del "Cristianismo occidental" y del "nacionalismo", y por sistemas corporativistas de organización social. La represión fue generalizada y extraordinariamente cruel; la izquierda fue derrotada a escala regional, produciéndose la muerte y "desaparición" de decenas de miles de personas. La administración económica fue entregada a entusiastas acólitos de Milton Friedman y del libre cambio predicado por la Escuela de Chicago, quienes desmantelaron el aparato del proteccionismo así como la empresa estatal, cercenaron los gastos sociales y se lanzaron frontalmente contra los salarios. Aunque a mediano plazo los resultados fueron desastrosos en todos los casos, no debe olvidarse que grupos financieros locales, al igual que capitales extranjeros cosecharon algunos espectaculares beneficios inmediatos.

Si Bolivia no mostró la extrema dureza evidente en los grandes Estados vecinos, se debió en gran medida a que los límites ecológicos de su economía eran simplemente demasiado estrechos. Después de su "autogolpe" en noviembre de 1974, Banzer prescindió de los servicios de sus aliados civiles, instituyó una administración exclusivamente militar y puso en vigencia un conjunto de decretos corporativistas similares a los promulgados por Pinochet. Así, con una reorganización formal que no resultaba inconsecuente con la ideología de agosto de 1971, se adoptó totalmente el modelo de "régimen orgánico". Este sistema habría de mantenerse intacto durante otros tres años. El colapso final de este régimen se hizo evidente a fines de 1977 y fueron factores económicos y las presiones de la administración de Carter los que más obviamente precipitaron tal desenlace; pero, innegablemente, la caída del régimen fue acelerada por el resurgimiento de fuerzas políticas que reformularon y aprovecharon oportunidades inesperadas con enorme rapidez. Así, entre las dictaduras del Cono Sur, la de Banzer fue, pese a su notable longevidad, la primera en sucumbir; su "nueva Bolivia" mostró ser una estructura demasiado endeble para subsistir, una vez agotada la expansión económica y suprimido el patrocinio externo.

Orden, paz, trabajo

Banzer era un talentoso oficial de carrera, a quien la extravagancia política le era ajena. Sus dotes políticas, que por mucho tiempo no fueron reconocidas en su plenitud por sus colegas, se encontraban en la capacidad de controlar a las FF AA a través de un hábil manejo que frecuentemente requería adelantarse a los hechos con decisiones, lo cual generalmente tenía como base la negociación. No era un hombre atiborrado de ideas originales, nunca gozó de mucha popularidad entre sus colegas, tampoco se imponía por su físico o su personalidad y sólo con el tiempo desarrolló una aptitud como orador público. El nuevo presidente era descendiente de inmigrantes alemanes, hijo de un comandante poco sobresaliente de la guerra del Chaco; estaba muy bien relacionado con la comunidad financiera expatriada influyente en Santa Cruz, su ciudad natal. Con sólo 44 años de edad al llegar al poder, Banzer se había graduado como subteniente en las postrimerías de la contrarrevolución de 1946, cuando el sentimiento antimilitarista era una corriente dominante. Como teniente, sobrevivió a las depuraciones de 1952; y bajo el régimen movimientista fue rápidamente ascendido, llegando al grado de coronel a la edad de 35 años, después de haber asistido a una serie de cursos avanzados en EE UU. Experto en logística, fue ministro de Educación con Barrientos y posteriormente agregado en Washington. Cáusticamente conservador y sin filiación partidaria, era respetado por sus colegas, depositario de la confianza de los norteamericanos y festejado por la burguesía cruceña; Banzer –el diminuto maquiavélico– era el líder perfecto, casi en todo sentido, para la nueva contrarrevolución boliviana. La trinidad "paz, orden, trabajo" se transformó en el *leitmotiv* del gobierno de Banzer y para muchos confirmaba su carácter fascista. Sin embargo, en agosto de 1971, ni Banzer ni los militares en su conjunto se sintieron capaces de avanzar sin el apoyo de los dos partidos tradicionales más poderosos e históricamente antagónicos: la Falange y el MNR. Cada uno de estos partidos obtuvo cuatro puestos en el nuevo gabinete, el cual contaba con siete cruceños entre sus quince miembros. El líder de la FSB, Mario Gutiérrez, fue nombrado canciller en reconocimiento al papel desempeñado por su partido en la rebelión de agosto; pero Víctor Paz, quien antes de finalizar el mes declaraba con desmedida confianza: "…soy el caudillo de Bolivia y la gente cree en mí", prefirió dedicarse a los asuntos de su partido sin ocupar un cargo gubernamental.[1]

1 *El Diario*, (La Paz), 31 de agosto de 1971.

En una acción que pronto hubo de provocar cierto descontento institucional, Banzer firmó un pacto con dos partidos para formar el Frente Popular Nacionalista (FPN), a través del cual los militares participarían formalmente en un movimiento político. La CEPB también fue incluida en este nuevo frente, el cual sería financiado con "aportes" que se obtendrían de la deducción del uno por ciento de todos los salarios públicos. Pocos días después de que el flamante régimen asumiera el poder, el New York Times declaró, con singular alivio, que dicho gobierno "confirma que EE UU todavía tiene amigos en Latinoamérica y que los cambios políticos no necesariamente deben tender a la izquierda".[2] El Washington Star, por su parte, coincidía al afirmar: "...Bolivia vuelve a sus cabales".[3] Ambos periódicos hacían votos por un rápido mejoramiento de las relaciones con EE UU, y no fueron defraudados. Banzer se apresuró a decretar una nueva ley de inversiones que otorgaba excelentes condiciones para el capital extranjero y, en la práctica, ignoraba las restricciones del Pacto Andino referentes a la repatriación de utilidades. A esto siguió la ley de 1972 sobre hidrocarburos que desintegró el monopolio de YPFB y lo obligó a presentar contratos a numerosas compañías foráneas, de las cuales quince se convertirían en concesionarias. El nuevo régimen también indemnizó a las empresas que habían sido nacionalizadas durante los dos años anteriores; consiguió un préstamo extranjero para la abultada indemnización de la Gulf por un total de cien millones de dólares; la Philips recibió 13,5 millones por mina Matilde y a la IMPC se pagó 1,5 millones por la pérdida de las colas y desmontes.[4]

La respuesta de Washington era previsible. John Connally fue el encargado de traer a La Paz los "más cálidos deseos de Nixon" y de alabar el "gran coraje" de Banzer. A su vez, en Washington, el recientemente designado embajador, coronel Valencia, visitó la Casa Blanca para escuchar del presidente norteamericano las promesas de una estrecha cooperación "...a realizarse durante la década de 1970...", lo cual señalaba que ambas partes confiaban en la prolongación del régimen. En efecto, durante varios años, la caída en los precios del estaño fue prácticamente la única nimiedad que rompía el encanto; en 1973, después de un período de continuos aumentos, Nixon finalmente decidió que había llegado el momento de reducir las reservas americanas de

2 *The New York Times*, (Nueva York), 2 de septiembre de 1971.
3 *Washington Star*, (Washington), 24 de agosto de 1971.
4 "Bolivia: The War Goes On", en *Nacla's Latin American and Empire Report*, vol. VIII, N° 2, febrero de 1974, p. 30.

estaño de 232 mil toneladas a 40.500, empezando con la venta de 18.500 toneladas al final de ese año.[5] Esto significaba una gran amenaza para la economía boliviana, lo que se venía previniendo por algún tiempo; pero Banzer no estaba en condiciones de objetar las ventas, especialmente debido a que su gobierno se estaba beneficiando de cantidades imprecedentes de ayuda norteamericana. Entre 1942 y 1970, Bolivia recibió un total de 6,7 millones de dólares de EE UU para "administración y gobierno"; a lo largo de dieciséis meses, entre agosto de 1971 y diciembre de 1972, Banzer obtuvo un total de 32 millones de dólares por este concepto. En el primer año de ejercicio, la asistencia militar de Washington dobló aquella del período 1968-70, con un monto de préstamos de USAID que sobrepasaba los sesenta millones de dólares; las donaciones militares para 1973 y 1974 fueron tres veces mayores a todas las que había hecho EE UU anteriormente a un país latinoamericano.[6] La magnitud de esta ayuda por parte de Washington precipitó un debate en el Congreso, pues el Pentágono ya aceptaba públicamente que Cuba no representaba una amenaza para un país como Bolivia. Durante ese debate, el Secretario de Defensa, Melvin Laird, no pudo dar ninguna razón para tal generosidad que no fuera aquella de la "insurgencia interna".[7] Desde luego, Banzer gozó de privilegios especiales, puesto que, hasta mediados de 1973, Bolivia fue el reducto estratégico más decisivo para los intereses norteamericanos en el Cono Sur.

Intereses geográficos similares subyacían a la política del Brasil con el régimen. Brasilia, tradicionalmente preocupada por los intereses de la Argentina en el altiplano, podía ahora contrarrestarlos con relativa facilidad favoreciendo a Santa Cruz, que cae exactamente dentro de su órbita política y económica. A menos de un mes del golpe, Brasil concedió a Bolivia diez millones de dólares en créditos para maquinaria destinada al mejoramiento de la línea férrea entre la capital oriental y el pueblo fronterizo de Corumbá. Durante los años siguientes, los créditos anuales alcanzaron la suma de 46 millones de dólares, apuntalando con ello una serie de acuerdos económicos a través de los cuales Bolivia habría de proporcionar a su gigante vecino petróleo, gas, goma, manganeso y mineral de hierro a tarifas preferenciales.[8] Los términos de algunos de estos acuerdos fueron tan generosos que la oposición a los mismos se

5 *Latin America*, Londres, 15 de junio de 1973.
6 *Nacla*, pp. 27-29.
7 US Senate, Committee on Appropriations: *Foreign Assistance and Related Programmes*, Appropriations FY 1973, 92° Congreso, 2a. sesión, Washington D.C., 1972, p. 928.
8 Ver por ejemplo *Newsweek*, 20 de agosto de 1973.

extendió más allá de los amigos de Buenos Aires, forzando a Banzer a restringir el entusiasmo con que inicialmente acogió la nueva alianza.[9] Pese a que el petróleo y el gas bolivianos fueron por un tiempo de mínimo interés para los planificadores económicos del Brasil y a que ese país ofrecía un mercado limitado de exportación, no se deben subestimar las motivaciones más estratégicas de los militares brasileños. Éstas no solamente conllevaban el control sobre una zona de gran importancia política, sino también contemplaban el trazado de carreteras internas hacia la costa del Pacífico. Naturalmente, la posesión chilena del territorio costero boliviano presentaba inconveniente a este último objetivo; pero con un régimen complaciente en La Paz, la influencia de Brasilia en ese sector aumentaba notablemente. Una vez que Pinochet llegó al poder, las posibilidades de un acuerdo entre gobiernos de similar disposición ideológica fueron mayores. Los generales brasileños hicieron pocos esfuerzos para disimular tales propósitos; en 1972, la "Escuela Superior de Guerra" publicó un documento que sostenía: "Las Fuerzas Armadas del Brasil deben intervenir... en casos en que fueren identificados litigios fronterizos entre otros países del continente, pero con reflejos en los intereses nacionales, indicios de conflictos armados en el continente y la acción del comunismo internacional, sea en el propio país o en los países vecinos".[10]

Si Banzer y sus colegas se alarmaron por esta ética intervencionista nada moderada, en la práctica dieron pocas muestras de oponerse a ella. En abril de 1974, Bolivia entregó al Brasil doce mil kilómetros cuadrados, incluyendo los poblados de San Ignacio y Palmarito (con una población de tres mil habitantes), como resultado de una revisión limítrofe. En 1976, se perdieron 27 mil kilómetros cuadrados de manera similar; un año después, la isla Suárez, en el Beni, cambió de dueño; esta vez por la ocupación directa de los brasileños. En diversas zonas del noreste, la colonización progresiva de ciudadanos brasileños llegó a tal punto que en 1974 la cancillería boliviana tuvo que pedir a su contraparte brasileña que restrinja este flujo, pues la soberanía nacional estaba en peligro. No hubo ninguna respuesta.[11]

9 La oposición de ninguna manera se restringía a la izquierda, pero la crítica más reveladora es la de Marcelo Quiroga Santa Cruz en su libro *El saqueo de Bolivia* (Buenos Aires, 1973). Algunos de sus hallazgos serán detalladamente descritos en la edición póstuma de *Obras completas* (México, 1982).

10 Citado en Quiroga, *Saqueo*... , p. 77.

11 *Ibid.*, pp. 76-77.

La naturaleza complaciente del gobierno banzerista en sus relaciones con EE UU y Brasil se complementaba perfectamente con una política interna muy rigurosa contra sus opositores. Tanto la represión legal como la de facto excedieron a aquella impuesta por Barrientos y fue particularmente violenta en la fase inicial del régimen. Banzer designó a Selich como su primer ministro del Interior, cerró las universidades por seis meses, reinstauró la pena de muerte y no hizo nada por contener a aquellos de su grupo que proclamaban: "...diez extremistas caerán por cada nacionalista que caiga".[12] Luego de la toma de San Andrés, el 23 de agosto, la resistencia armada fue mínima y no representaba ninguna amenaza; sin embargo, siempre se aludía a la "subversión comunista" como causa de los arrestos, deportaciones y del cierre de periódicos o radioemisoras; aquellas personas que morían a manos de los militares invariablemente eran calificadas de "subversivos" o "castrocomunistas".

Con el Decreto Supremo 9875 (del 7 de septiembre de 1971), el régimen puso en vigencia la constitución de 1967 "en todos los aspectos que no contradigan el espíritu y naturaleza del Gobierno Nacionalista y sus acciones". Otorgándose a sí mismo el derecho a obrar inconstitucionalmente, el gobierno se molestó únicamente en legalizar la pena de muerte y el derecho de apresar a los sospechosos indefinidamente (Decreto Supremo 10295 de 3 de junio de 1972). Inmediatamente después del golpe, Selich obtuvo carta blanca para liquidar a los opositores; dos de los más destacados eran Alcides y Félix Sandoval Morón, quienes fueron atacados con armas de fuego en la comisaría de Santa Cruz, ciudad donde este clan populista todavía era temido por los intereses establecidos que había combatido durante la década de 1950.[13] En ciertas ocasiones, la imaginación de Selich mostró ser demasiado fértil, aun para el propósito de fundamentar la represión; por ejemplo, cuando acusó a Torres de comandar el ELN y a Ovando de supervisar sus operaciones desde Madrid.[14] Empero, en su mayor parte actuaba con absoluta falta de consideración por la vida humana o por el impacto externo que podría causar el matar arbitrariamente. En noviembre de 1971, cuando un capitán torrista y otros diez prisioneros persuadieron a cinco guardias del campo de concentración de Alto Madidi

12 *Hoy*, (La Paz), 18 de marzo de 1972.

13 Russell Tribunal: *Repression in Latin America*, Londres, 1975, pp. 136-137. Esta versión inglesa no reproduce el extenso testimonio presentado por Jaime Paz Zamora que el MIR publicó por separado: *Bolivia: la forma-democracia*, Bruselas, 1975.

14 *El Diario*, (La Paz), 10 de noviembre de 1971.

para capturar un avión y escapar al Perú, Selich bombardeó y ametralló el campamento antes de cerrarlo.[15]

Para enero de 1972, la actuación de Selich era recelosa y había logrado concentrar tanto poder en su ministerio que Banzer, temiendo un intento de golpe, le envió como embajador a Asunción. Cuatro meses después fue retirado del cargo, lo cual, sin embargo, no significó ningún apaciguamiento por parte del régimen, como quedaría claramente ilustrado en mayo de 1973, cuando Selich fue apresado por los que habían sido sus propios oficiales, entrevistado por el nuevo ministro y luego asesinado a golpes. La versión oficial de que se había arrojado por las escaleras en un "ataque de nervios" no convenció a nadie y provocó indignación en los militares, que exigieron una investigación pública. Quizás la mayor ironía del destino de Selich fue que su muerte brindó una de las revelaciones mejor documentadas sobre cómo acometió sus operaciones el sistema que él mismo había instituido.[16]

Los coroneles Mario Adett Zamora y Juan Pereda Asbún prosiguieron el trabajo iniciado por el difunto coronel; como ministros del Interior controlaron el tan temido Departamento de Orden Público (DOP), el principal instrumento de control político. Durante una buena parte del banzerato, el DOP estuvo bajo las órdenes del coronel Rafael Loayza, que tenía como brazo derecho a Abraham Baptista, un enérgico jefe de Policía bajo el gobierno de Barrientos. El capitán Carlos Mena fue otro destacado oficial que mostró gran interés por el trabajo del DOP; pero muchos de sus ignominiosos detectives –Guido Benavides, Fernando "Mosca" Monroy, "Danger" Salamanca y Daniel Torrico, este último durante los fines de semana se transformaba en el popular luchador "Mr. Atlas"– eran civiles reclutados de los rangos inferiores de la FSB o del hampa. En general, la actividad del DOP se organizaba en torno a las cárceles, centros de interrogatorio y campos de concentración en Madidi, Chonchocoro, Viacha y en la isla Coati del lago Titicaca; Coati, al igual que Madidi, tuvo que cerrarse durante un tiempo cuando 67 prisioneros escaparon al Perú después de derrotar a sus guardias en un partido de fútbol en noviembre de 1972. Si bien a la larga fue posible seguir el rastro de la mayoría de las personas que cayeron en manos del aparato represivo boliviano –lo que no sucedió en los casos de Chile o Argentina, donde el verbo "desaparecer" adquirió una forma lamentablemente transitiva–, resulta difícil detallar con exac-

15 CEP: *Bolivia 1971-76, Pueblo, Estado, Iglesia*, Lima, 1976, p. 29.

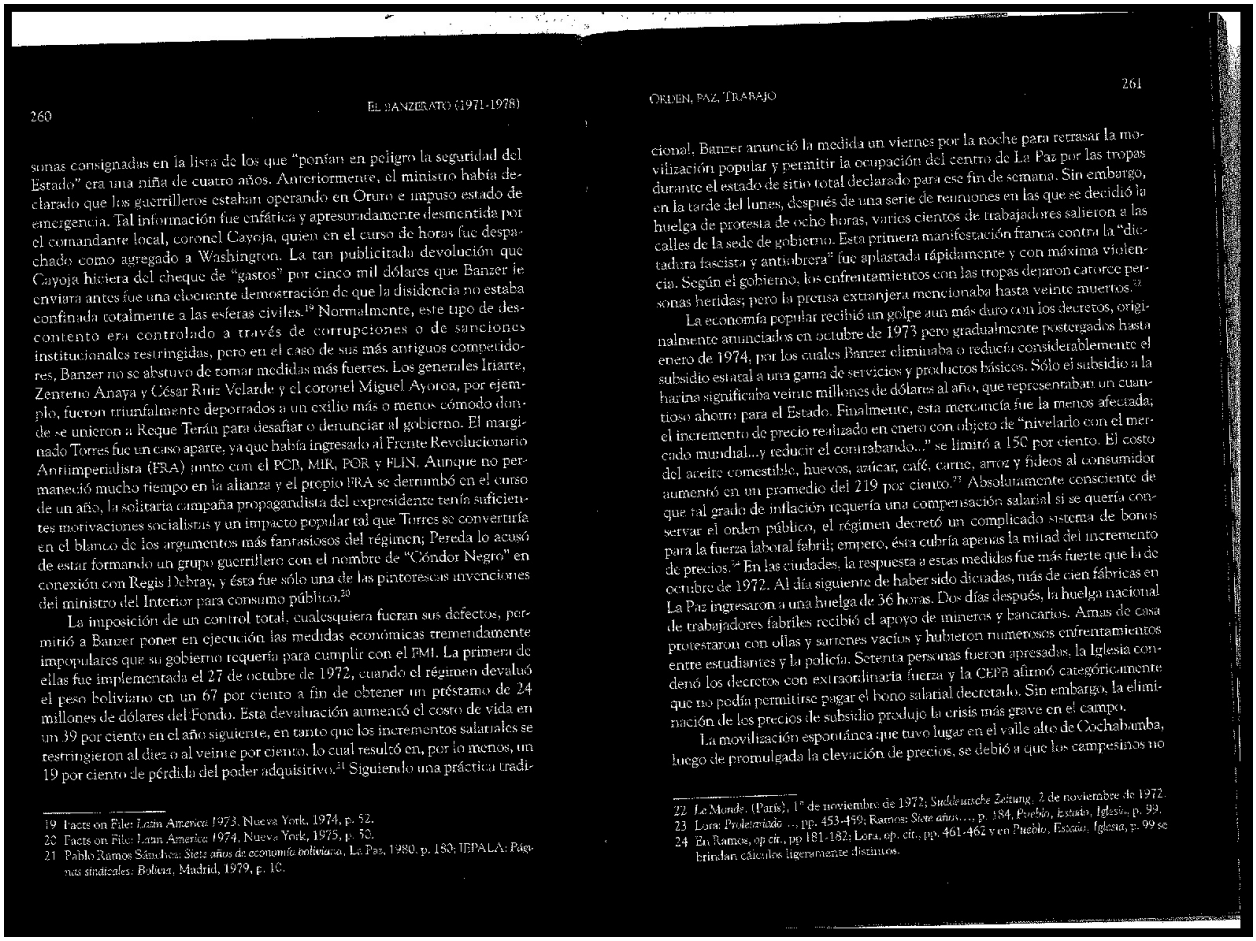
16 El caso se describe con detalle en *Represión...*, pp. 138-139; en Quiroga: *Juicio...*, p. 55 y ss., y en Lora: *Proletariado...*, pp. 299-305.

titud los efectos de la represión. Con todo, la copiosa documentación reunida por varias organizaciones de derechos humanos señala un mínimo de doscientos muertos entre octubre de 1971 (luego de la ofensiva original) y diciembre de 1977. Alrededor de 14.750 personas fueron encarceladas por "ofensas al régimen", casi todas sin pasar por nada parecido a un juicio y generalmente después de haber sido interrogadas con las técnicas que tan claramente describe Domitila Chungara en su libro *Si me permiten hablar*. Otros 19.140 fueron obligados a salir al exilio político; el número de exiliados económicos prácticamente permanentes ya llegaba a los 780 mil.[17] Además, a lo largo de ese período no hubo actividad sindical independiente, se proscribió la libertad de participación política, excepto para los miembros del FPN (aunque en agosto de 1972, Víctor Paz se quejaba de que miembros del MNR estaban siendo encarcelados y torturados) y la prensa fue severamente censurada; en total, 68 periodistas fueron exiliados, 32 encarcelados, veinte emisoras de radio "intervenidas" o clausuradas.[18]

Estas cifras podrían parecer moderadas en comparación con las espeluznantes estadísticas de persecución de los otros Estados del Cono Sur, pero no hay que olvidar que Bolivia tenía una población de menos de seis millones de habitantes, y que la mayoría vivía en el campo. En los centros urbanos e industriales donde se concentraba la vida política y pública, el impacto fue considerable. Sin embargo, dado que estos círculos eran muy limitados, en términos relativos, el éxodo no fue comparable al de países con fuerte densidad urbana o extensas clases medias, como Uruguay, Chile y Argentina, de donde oleadas de refugiados salieron a Europa en escala sólo vista anteriormente en la década de 1930. En estos países, una de las características predominantes de la represión fue el empleo de sofisticadas técnicas de detención y control, en tanto que en Bolivia no se puede evitar concluir que la brutalidad y entusiasmo visceral sobrepasaban generalmente al profesionalismo en el mantenimiento del orden público y en la eliminación de la oposición. En marzo de 1973, el coronel Adett se las ingenió para expulsar a 119 diplomáticos soviéticos, para luego disculparse por el "error administrativo" cuando fue informado por el embajador de que no había más de cuarenta en el país y que una de las per-

17 Asociación Pro-Derechos Humanos: *Bolivia 1971-1977. El gobierno de Banzer y la violación de los derechos humanos*, Madrid, 1977, passim; Mariano Baptista ed.: *¿Por qué se van los hijos de Bolivia?*, La Paz, 1975.

18 *El delito de ser periodista. La libertad de prensa en Bolivia. Documentos y testimonios, 1971-1977*, s.l., 1977, pp. 12-14.



sonas consignadas en la lista de los que "ponían en peligro la seguridad del Estado" era una niña de cuatro años. Anteriormente, el ministro había declarado que los guerrilleros estaban operando en Oruro e impuso estado de emergencia. Tal información fue enfática y apresuradamente desmentida por el comandante local, coronel Cayoja, quien en el curso de horas fue despachado como agregado a Washington. La tan publicitada devolución que Cayoja hiciera del cheque de "gastos" por cinco mil dólares que Banzer le enviara antes fue una elocuente demostración de que la disidencia no estaba confinada totalmente a las esferas civiles.[19] Normalmente, este tipo de descontento era controlado a través de corrupciones o de sanciones institucionales restringidas, pero en el caso de sus más antiguos competidores, Banzer no se abstuvo de tomar medidas más fuertes. Los generales Iriarte, Zenteno Anaya y César Ruiz Velarde y el coronel Miguel Ayoroa, por ejemplo, fueron triunfalmente deportados a un exilio más o menos cómodo donde se unieron a Reque Terán para desafiar o denunciar al gobierno. El marginado Torres fue un caso aparte, ya que había ingresado al Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA) junto con el PCB, MIR, POR y ELN. Aunque no permaneció mucho tiempo en la alianza y el propio FRA se derrumbó en el curso de un año, la solitaria campaña propagandista del expresidente tenía suficientes motivaciones socialistas y un impacto popular tal que Torres se convertiría en el blanco de los argumentos más fantasiosos del régimen; Pereda lo acusó de estar formando un grupo guerrillero con el nombre de "Cóndor Negro" en conexión con Regis Debray, y ésta fue sólo una de las pintorescas invenciones del ministro del Interior para consumo público.[20]

La imposición de un control total, cualesquiera fueran sus defectos, permitió a Banzer poner en ejecución las medidas económicas tremendamente impopulares que su gobierno requería para cumplir con el FMI. La primera de ellas fue implementada el 27 de octubre de 1972, cuando el régimen devaluó el peso boliviano en un 67 por ciento a fin de obtener un préstamo de 24 millones de dólares del Fondo. Esta devaluación aumentó el costo de vida en un 39 por ciento en el año siguiente, en tanto que los incrementos salariales se restringieron al diez o al veinte por ciento, lo cual resultó en, por lo menos, un 19 por ciento de pérdida del poder adquisitivo.[21] Siguiendo una práctica tradi-

19 Facts on File: Latin America 1973. Nueva York, 1974, p. 52.
20 Facts on File: Latin America 1974. Nueva York, 1975, p. 50.
21 Pablo Ramos Sánchez: *Siete años de economía boliviana*, La Paz, 1980, p. 180; IEPALA: *Páginas sindicales: Bolivia*, Madrid, 1979, p. 10.

cional, Banzer anunció la medida un viernes por la noche para retrasar la movilización popular y permitir la ocupación del centro de La Paz por las tropas durante el estado de sitio total declarado para ese fin de semana. Sin embargo, en la tarde del lunes, después de una serie de reuniones en las que se decidió la huelga de protesta de ocho horas, varios cientos de trabajadores salieron a las calles de la sede de gobierno. Esta primera manifestación franca contra la "dictadura fascista y antiobrera" fue aplastada rápidamente y con máxima violencia. Según el gobierno, los enfrentamientos con las tropas dejaron catorce personas heridas; pero la prensa extranjera mencionaba hasta veinte muertos.[22]

La economía popular recibió un golpe aun más duro con los decretos, originalmente anunciados en octubre de 1973 pero gradualmente postergados hasta enero de 1974, por los cuales Banzer eliminaba o reducía considerablemente el subsidio estatal a una gama de servicios y productos básicos. Sólo el subsidio a la harina significaba veinte millones de dólares al año, que representaban un cuantioso ahorro para el Estado. Finalmente, esta mercancía fue la menos afectada; el incremento de precio realizado en enero con objeto de "nivelarlo con el mercado mundial...y reducir el contrabando..." se limitó a 150 por ciento. El costo del aceite comestible, huevos, azúcar, café, carne, arroz y fideos al consumidor aumentó en un promedio del 219 por ciento.[23] Absolutamente consciente de que tal grado de inflación requería una compensación salarial si se quería conservar el orden público, el régimen decretó un complicado sistema de bonos para la fuerza laboral fabril; empero, ésta cubría apenas la mitad del incremento de precios.[24] En las ciudades, la respuesta a estas medidas fue más fuerte que la de octubre de 1972. Al día siguiente de haber sido dictadas, más de cien fábricas en La Paz ingresaron a una huelga de 36 horas. Dos días después, la huelga nacional de trabajadores fabriles recibió el apoyo de mineros y bancarios. Amas de casa protestaron con ollas y sartenes vacíos y hubieron numerosos enfrentamientos entre estudiantes y la policía. Setenta personas fueron apresadas. la Iglesia condenó los decretos con extraordinaria fuerza y la CEPB afirmó categóricamente que no podía permitirse pagar el bono salarial decretado. Sin embargo, la eliminación de los precios de subsidio produjo la crisis más grave en el campo.

La movilización espontánea que tuvo lugar en el valle alto de Cochabamba, luego de promulgada la elevación de precios, se debió a que los campesinos no

22 *Le Monde*, (París), 1° de noviembre de 1972; *Süddeutsche Zeitung*, 2 de noviembre de 1972.
23 Lora: *Proletariado* ..., Pp. 453-459; Ramos: *Siete años*..., p. 184; *Pueblo, Estado, Iglesia*, p. 99.
24 En Ramos, *op cit.*, pp 181-182; Lora, *op. cit.*, pp. 461-462 y en *Pueblo, Estado, Iglesia*, p. 99 se brindan cálculos ligeramente distintos.

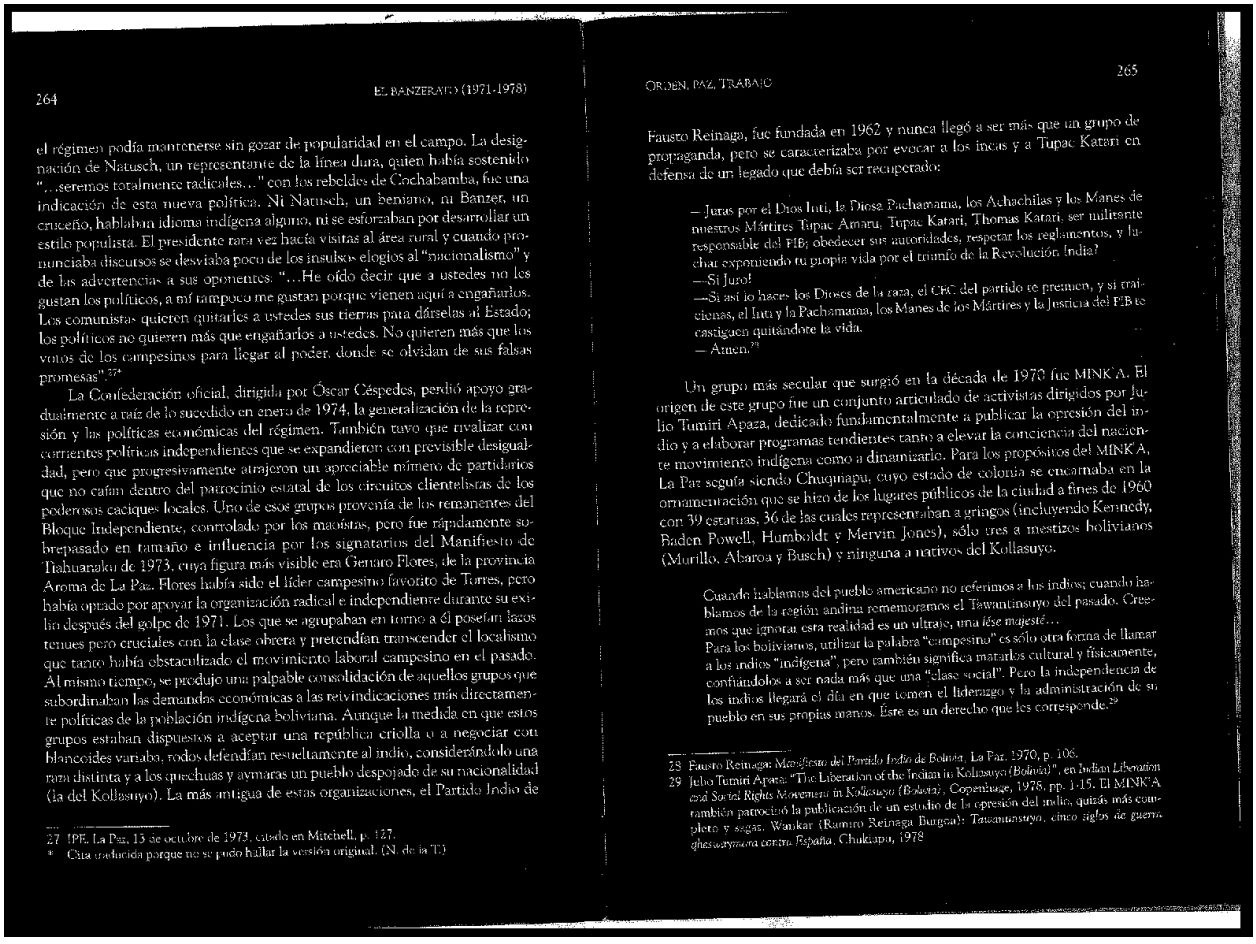
recibieron ningún bono compensatorio y a que se les prohibió incrementar el precio de mercado de sus productos. Es más, muchos de ellos no producían los alimentos afectados y, al igual que los trabajadores urbanos, estaban obligados a comprarlos a nuevos precios, lo cual era casi imposible en enero, cuando las existencias de la última cosecha se habían agotado y cuando todavía había que esperar para recoger los frutos de la siguiente. El problema comenzó temprano el 22, cuando, adhiriéndose a la convocatoria de huelga, los trabajadores de la gran fábrica de zapatos Manaco, en Quillacollo, a quince kilómetros de Cochabamba, realizaron una marcha de protesta, la cual pronto recibió apoyo de otras fábricas y fue tan inmensa que el destacamento local de policía tuvo que retroceder. Al día siguiente, los trabajadores intentaron volar tres puentes y luego sostuvieron una asamblea pública donde se presentaron demandas a favor de la derogación de los decretos, la libertad de los prisioneros políticos, la devolución de las emisoras de radio "intervenidas" y el envío de una comisión de gobierno para discutir las condiciones. Como resultado de la simbiosis entre ciudad y campo, propia de Cochabamba, las noticias sobre los acontecimientos de Quillacollo se difundieron en gran parte del valle. El 24, la carretera de Santa Cruz fue bloqueada; un día después, los bloqueos se extendieron desde el kilómetro 20 hasta el desvío a Sucre, en el kilómetro 126. A pesar de la fortísima lluvia, unos veinte mil campesinos se congregaron en los principales puntos de carretera donde se levantaron barricadas. Sus demandas para la eliminación de los decretos y para que Banzer se presentara de inmediato a negociar con ellos fueron presentadas primero al ministro de Agricultura, coronel Alberto Natusch Busch, el día 25, y luego al recientemente designado "interventor" militar, general Pérez Tapia, el día 28. Negándose ya sea a negociar con subalternos o a viajar a La Paz, los campesinos insistían en la presencia de Banzer como la única condición para levantar las barricadas. La respuesta del presidente fue un lacónico rechazo de "cualquier diálogo bajo presión", la declaración del estado de sitio y el envío del regimiento Tarapacá para reforzar a las tropas locales. El día 29 muy temprano, los dirigentes campesinos sostuvieron otra reunión con el general Pérez, la cual se prolongó hasta media tarde. A su regreso a Cochabamba, Pérez se sorprendió al encontrarse con una columna de seis tanques y ocho carros blindados en dirección al primer bloqueo. Habiendo logrado cierto progreso en la última reunión, mandó que se detuvieran, pero fue informado que Banzer había ordenado "una barrida total de los subvertores". Más tarde, el régimen informó que los campesinos habían tomado a Pérez como rehén y que éste no fue liberado hasta el día 30, después de la acción emprendida por la columna blindada.

Lo que pronto se denominó "la masacre del Valle" comenzó en el poblado de Tolata a las cinco de la tarde del día 29. Cuando vieron acercarse a la columna, los campesinos se agruparon creyendo que Banzer ya había llegado. El oficial de comando les ordenó dispersarse. Al principio reinó el silencio y luego una mujer arrojó una piedra al primer tanque. El ataque que siguió combinaba el uso de aviones de caza con las armas automáticas de los vehículos blindados, pero el comando lo describió como "meras acciones disuasivas". Posteriormente, un conscripto le dijo a un sacerdote: "... hemos visto montones de cadáveres, campesinos apilados como leña". Otros vieron unas treinta camillas cubiertas, que salieron de Tolata en dirección al aeropuerto, y dijeron que después de los ataques algunos soldados se negaron a proseguir, mientras que otros disparaban deliberadamente al aire.[25] Esa misma noche, en un puente cerca de Epitana, setecientos campesinos fueron atacados; se encontraron quince cadáveres y veinte campesinos "desaparecieron". Al día siguiente, las operaciones militares causaron más bajas, pero el resto de las barricadas se despejaron sin más muertes. Se estimó un número de entre ochenta y doscientos muertos, siendo un factor de esta incertidumbre el desconocimiento del paradero de 65 personas que habían "desaparecido". No hubo bajas militares. Tolata fue el San Juan de Banzer y la Iglesia lo describió como "otro My Lai". Esto acabó efectivamente con la alianza entre militares y campesinos; pues aunque los líderes oficiales siguieron firmando cada año el Pacto Militar-Campesino, éste carecía por completo de credibilidad entre las masas rurales. La respuesta del presidente fue declarar que la protesta había sido planeada por los cubanos en combinación con el líder socialista chileno exiliado Carlos Altamirano. Dos días después de las matanzas de Tolata, para apaciguar a los dirigentes campesinos del altiplano, Banzer pronunció un discurso en el cual reafirmó su teoría: "A ustedes, hermanos campesinos, voy a darles una consigna como líder. El primer agitador comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responsabilizo, pueden matarlo. Si me lo traen aquí para que se entienda conmigo, personalmente yo les daré una recompensa".[26]

En la práctica, Banzer ya había dejado de lado muchos métodos de Barrientos al sostener la alianza con el campesinado, puesto que cuando llegó al poder ésta había perdido la importancia que tuvo diez años antes. Con la clase obrera totalmente replegada y las FF AA enormemente fortalecidas, ahora

25 El relato más completo es de la Comisión de Justicia y Paz: *La Matanza del Valle*, La Paz, 1975. Hay más en *Pueblos, Estado, Iglesia*, pp. 114-120; y en MIR: *La masacre campesina, Cochabamba, enero de 1974*, La Paz, 1974.

26 *Presencia*, (La Paz), 1° de febrero de 1974.



el régimen podía mantenerse sin gozar de popularidad en el campo. La designación de Natusch, un representante de la línea dura, quien había sostenido "...seremos totalmente radicales..." con los rebeldes de Cochabamba, fue una indicación de esta nueva política. Ni Natusch, un beniano, ni Banzer, un cruceño, hablaban idioma indígena alguno, ni se esforzaban por desarrollar un estilo populista. El presidente rara vez hacía visitas al área rural y cuando pronunciaba discursos se desviaba poco de los insulsos elogios al "nacionalismo" y de las advertencias a sus oponentes: "...He oído decir que a ustedes no les gustan los políticos, a mí tampoco me gustan porque vienen aquí a engañarlos. Los comunistas quieren quitarles a ustedes sus tierras para dárselas al Estado; los políticos no quieren más que engañarlos a ustedes. No quieren más que los votos de los campesinos para llegar al poder, donde se olvidan de sus falsas promesas".[27*]

La Confederación oficial, dirigida por Óscar Céspedes, perdió apoyo gradualmente a raíz de lo sucedido en enero de 1974, la generalización de la represión y las políticas económicas del régimen. También tuvo que rivalizar con corrientes políticas independientes que se expandieron con previsible desigualdad, pero que progresivamente atrajeron un apreciable número de partidarios que no caían dentro del patrocinio estatal de los circuitos clientelistas de los poderosos caciques locales. Uno de esos grupos provenía de los remanentes del Bloque Independiente, controlado por los maoístas, pero fue rápidamente sobrepasado en tamaño e influencia por los signatarios del Manifiesto de Tiahuanaku de 1973, cuya figura más visible era Genaro Flores, de la provincia Aroma de La Paz. Flores había sido el líder campesino favorito de Torres, pero había optado por apoyar la organización radical e independiente durante su exilio después del golpe de 1971. Los que se agrupaban en torno a él poseían lazos tenues pero cruciales con la clase obrera y pretendían transcender el localismo que tanto había obstaculizado el movimiento laboral campesino en el pasado. Al mismo tiempo, se produjo una palpable consolidación de aquellos grupos que subordinaban las demandas económicas a las reivindicaciones más directamente políticas de la población indígena boliviana. Aunque la medida en que estos grupos estaban dispuestos a aceptar una república criolla o a negociar con blancoides variaba, todos defendían resueltamente al indio, considerándolo una raza distinta y a los quechuas y aymaras un pueblo despojado de su nacionalidad (la del Kollasuyo). La más antigua de estas organizaciones, el Partido Indio de

27 IPE, La Paz, 13 de octubre de 1973, citado en Mitchell, p. 127.
* Cita traducida porque no se pudo hallar la versión original. (N. de la T.)

Fausto Reinaga, fue fundada en 1962 y nunca llegó a ser más que un grupo de propaganda, pero se caracterizaba por evocar a los incas y a Tupac Katari en defensa de un legado que debía ser recuperado:

> — Juras por el Dios Inti, la Diosa Pachamama, los Achachilas y los Manes de nuestros Mártires Tupac Amaru, Tupac Katari, Thomas Katari, ser militante responsable del PIB; obedecer sus autoridades, respetar los reglamentos, y luchar exponiendo tu propia vida por el triunfo de la Revolución India?
> —Si Juro!
> —Si así lo haces los Dioses de la raza, el CEC del partido te premien, y si traicionas, el Inti y la Pachamama, los Manes de los Mártires y la Justicia del PIB te castiguen quitándote la vida.
> — Amen.[28]

Un grupo más secular que surgió en la década de 1970 fue MINK'A. El origen de este grupo fue un conjunto articulado de activistas dirigidos por Julio Tumiri Apaza, dedicado fundamentalmente a publicar la opresión del indio y a elaborar programas tendientes tanto a elevar la conciencia del naciente movimiento indígena como a dinamizarlo. Para los propósitos del MINK'A, La Paz seguía siendo Chuquiapu, cuyo estado de colonia se encarnaba en la ornamentación que se hizo de los lugares públicos de la ciudad a fines de 1960 con 39 estatuas, 36 de las cuales representaban a gringos (incluyendo Kennedy, Baden Powell, Humboldt y Mervin Jones), sólo tres a mestizos bolivianos (Murillo, Abaroa y Busch) y ninguna a nativos del Kollasuyo.

> Cuando hablamos del pueblo americano no referimos a los indios; cuando hablamos de la región andina rememoramos el Tawantinsuyo del pasado. Creemos que ignorar esta realidad es un ultraje, una *lése majesté*...
> Para los bolivianos, utilizar la palabra "campesino" es sólo otra forma de llamar a los indios "indígena", pero también significa matarlos cultural y físicamente, confiándolos a ser nada más que una "clase social". Pero la independencia de los indios llegará el día en que tomen el liderazgo y la administración de su pueblo en sus propias manos. Éste es un derecho que les corresponde.[29]

28 Fausto Reinaga: *Manifiesto del Partido Indio de Bolivia*, La Paz, 1970, p. 106.
29 Julio Tumiri Apaza: "The Liberation of the Indian in Kollasuyo (Bolivia)", en *Indian Liberation and Social Rights Movement in Kollasuyo (Bolivia)*, Copenhague, 1978, pp. 1-15. El MINK'A también patrocinó la publicación de un estudio de la opresión del indio, quizás más completo y sagaz. Wankar (Ramiro Reinaga Burgoa): *Tawantinsuyo, cinco siglos de guerra ghesuarymana contra España*, Chukiapu, 1978

Para 1975, MINKA se convirtió en un partido político hecho y derecho: MITKA (Movimiento Indio Tupac Katari). Después de la caída de Banzer, el MITKA se dividió y uno de los sectores, dirigido por Constantino Lima, se inclinó por una línea más extremista que rayaba en un franco racismo, rechazaba los preceptos religiosos y la validez de las divisiones políticas de "izquierda" y de "derecha" y sostenía que el 99 por ciento del cambio se alcanzaría a través del empleo de la violencia.[30]

Estos partidos nunca desplegaron el tipo de sistema organizativo que caracterizaba a los movimientos políticos urbanos; y frecuentemente estuvieron dominados por caudillos como Lima, que prestaban poca atención a los procedimientos democráticos. La experiencia durante el régimen de Banzer sí acrecentó su popularidad así como el número de "miembros"; de tal modo que, para fines de la década, el MRTK (Movimiento Revolucionario Tupac Katari) de Flores tenía entre sus militantes prácticamente a todos los miembros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que luego de la caída del dictador se transformó, con mucho margen, en la mayor organización campesina y en miembro de la COB, lo cual marca un hito en las relaciones entre trabajadores rurales y urbanos. Aproximadamente de la misma forma que sirvió para regenerar esta política autóctona, el régimen de Banzer provocó una oposición cada vez más abierta dentro del clero. Si bien habían bastantes miembros de jerarquía que sustentaban la tradición de una Iglesia apolítica –el más notable, monseñor Genaro Prata, rector de la Universidad Católica y director del periódico Presencia–, muchos curas nacionales, al igual que miembros predominantemente catalanes o canadienses de distintas órdenes, no sólo se adherían, sino que se movilizaban activamente tras las protestas cotreses pero firmes en contra de la represión y la política económica publicadas regularmente por la Comisión de Justicia y Paz establecida en 1973,[31] Comisión que no fue solamente un vehículo para los teólogos de la liberación, aunque había incorporado aquel sector del clero que formaba la rama local de la Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL), que ya en septiembre de 1971 había declarado: "...(el régimen) pretende ser cristiano única y exclusivamente por decirse anticomunista. No todo lo que afirma el marxismo es anticristiano; en cambio, muchos de los dogmas capitalistas lo son. Para

30 *Criterio*, (La Paz), 10 de marzo de 1983. Las políticas de MINKA (Tumiri) están resumidas en *Pueblo Indio*, periódico teórico del Consejo Indio de Sud América (CISA), (Lima)

31 Muchas de ellas han sido reproducidas en *Pueblo, Estado, Iglesia*.

autodenominarse cristiana, una revolución tendrá que probar que está en favor del hombre. Hasta la fecha, nos parece que el nuevo gobierno ha demostrado lo contrario. El nuevo gobierno se autotitula también como 'nacionalista'. Sin embargo, ya se están dando los primeros pasos para entregar las riquezas del país a la voracidad de los consorcios internacionales".[32]

Tales sentimientos llevaban la clara marca de los sectores bajos de la jerarquía eclesiástica, pero atrajeron la simpatía de algunos de sus altos miembros, como el arzobispo Jorge Manrique, de La Paz, y el obispo Jesús López de Lama, de Cororoco, cuyas casas fueron allanadas por el DOP. Después de que la Comisión publicó *La Masacre del Valle* en febrero de 1975, varios de sus miembros fueron exiliados y ésta se convirtió en víctima de la mismísima represión que estaba denunciando. Como se supo posteriormente, esta medida largamente postergada formaba parte del llamado "Plan Banzer", a través del cual "...la Iglesia como tal no debía ser atacada, menos aún los obispos como cuerpo, sino únicamente una parte de la vanguardia de la Iglesia como el arzobispo Manrique... para separarlo de la jerarquía y crear problemas con el clero nacional (el nacido en Bolivia)".[33]

Los delegados bolivianos al III Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana que se realizó en Asunción en marzo de 1977, describieron el plan con todo detalle y entusiasmo; éste incluía la cooperación de la CIA y pronto se convirtió en práctica común de las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica. Logró mantener en línea a Presencia, moderar el contenido de los programas de radio Fides y forzó a la Iglesia a mantener una actividad restringida en el seno de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), pero hizo poco para refrenar a los oblatos canadienses que administraban la periódicamente silenciada radio Pío XII o a los jesuitas que trabajaban en el Centro de Investigación y Promoción Campesina (CIPCA). Dada la ausencia de una izquierda organizada durante gran parte de este periodo, estos y otros grupos religiosos asumieron cautamente gran parte de la responsabilidad por la defensa de los derechos democráticos.

El descontento y las divisiones de la Iglesia reflejaron tendencias similares en la clase media, la cual de ninguna manera obtuvo beneficios uniformes de la política de mano dura de Banzer. En algunas ocasiones también aparecieron este tipo de presiones dentro del MNR o la FSB y en sectores de las FF AA, pero generalmente no pasaron de disputas internas y rara vez amenazaron la estabilidad

32 *Ibid.*, p. 19.

33 Citado de documentos originales en Penny Lernoux: *Cry of the People*. Londres, 1982, p. 143.

del régimen. Mientras los partidos siguieron brindándole capital político, Banzer no estaba interesado en hacer problema sobre cuestiones tales como la malversación de 22.500 dólares del falangista que ocupaba la dirección de la Lotería Nacional, las frías críticas de Paz a la devaluación o incluso la división de la FSB de febrero de 1973, provocada por el temperamental Carlos Valverde, quien renunció al Ministerio de Salud y se apresuró a regresar a Santa Cruz para "formar una guerrilla". Empero, para fines de 1973 los altercados internos habían llegado al punto de poner en peligro el futuro del FPN. La causa principal fue el tardío reconocimiento de Paz de que la popularidad de su partido había sido profundamente afectada por el apoyo brindado a Banzer. La dureza de los decretos económicos inicialmente dados a conocer en octubre de 1973 junto con la continua fricción con la Falange y la vaga promesa de elecciones controladas en 1974 finalmente llevaron al viejo caudillo a romper con Banzer, ya que el MNR todavía estaba a tiempo de salvar algo de su popularidad. Sin embargo, muchos de los antiguos colegas de Paz no tenían intención alguna de dejar los bien pagados cargos que ocupaban; Paz no pudo sacar a todos los miembros de su partido del gabinete de Banzer sino recién a fines de noviembre de 1973. Cuando seis semanas más tarde, "el jefe" fue enviado nada ceremoniosamente al exilio, Ciro Humboldt, el líder de este numeroso grupo, lo expulsó del partido explicando que: "...el culto de la personalidad trae como resultado el mito del hombre infalible, pese a que la experiencia nos señala que errar es humano... Debo reiterar en esta ocasión nuestro apoyo y solidaridad al líder del nacionalismo boliviano, Gral. Hugo Banzer Suárez. Nuestro presidente ha penetrado profundamente en el corazón de las masas, como ejemplo de responsabilidad cívica, espíritu constructivo y abnegación ilimitada".[34]

Tal lenguaje propio de funcionarios públicos obsecuentes no benefició mucho a Humboldt, quien antes de los seis meses estaba ya en el exilio por su implicación en uno de los pocos auténticos intentos de golpe contra Banzer. Fue un corto pero potencialmente peligroso levantamiento realizado a principios de junio por un grupo conocido como el "Movimiento de Oficiales Jóvenes". Este movimiento, compuesto esencialmente por coroneles y mayores recién promovidos, se había formado después del golpe de agosto de 1971, como resultado de lo que se percibía como la traición total a las creencias nacionalistas postuladas por un régimen que muchos de ellos habían contribuido a establecer. El descontento había sido absorbido hasta cierto punto por la creación, a fines de 1972, de COFADENA, una corporación militar de desarrollo a la cual se encargó una serie de importantes iniciativas económicas a fin de conservar algunos elementos de la política Torres-Ovando que seguían teniendo popularidad entre los oficiales jóvenes. Luego de una prematura prosperidad, COFADENA fue marginada y se le impidió que siguiera la línea totalmente estatista que muchos de sus partidarios buscaban. Más alarmados aún por las políticas económicas del régimen, los líderes principales del grupo –coroneles Raúl López Leytón, Rolando Saravia, Gary Prado y Arsenio Gonzáles – decidieron adelantarse con la acción. El Tarapacá, regimiento de López Leytón (que probablemente sufría todavía los efectos de su actividad en el valle de Cochabamba), ocupó el centro de La Paz el 4 de julio y solicitó que el alto mando respaldara sus demandas de renuncia de Banzer, de un gobierno completamente militar que llame inmediatamente a elecciones, de procesar a todos aquellos que se hubieran enriquecido a través del Estado y de clarificar el sentido de "delitos políticos". La jerarquía de los comandantes no deliberó mucho para rechazar tales demandas y enviar a los 24 cabecillas fuera del país. Con todo, Banzer se sintió forzado a reincorporar a la mayoría de éstos en el término de meses, ya que representaban una corriente de opinión esencial entre los oficiales graduados después de 1952, a quienes el presidente necesitaba apaciguar hasta cierto grado si quería permanecer mucho tiempo más en el poder. Por lo demás, estarían mejor controlados por el Servicio de Inteligencia en las guarniciones provinciales que en el exilio. En el momento, ésta parecía una medida calculada y destinada a desviar el descontento militar del propio Banzer; sin embargo, contribuyó a mantener una facción que agitaba a favor de un cambio desde adentro y que en el futuro se convertiría en mayor obstáculo para los militares de línea dura.[35]

La abortada revuelta del Tarapacá, combinada con el manifiesto agotamiento del FPN y el impresionante ejemplo de gobierno militar corporativista que estaba siendo ensayado por Pinochet, contribuyó a convencer a Banzer de que ya no necesitaba aliados civiles y que podía instituir una administración

34 Presencia, (La Paz), 15 de enero de 1974.

35 Agradezco al coronel Arsenio Gonzáles por haber conversado conmigo acerca de los objetivos del movimiento. A lo largo de los tres años siguientes, el que se denominaí "movimiento generacional" emitió una serie de documentos argumentando a favor de la diversificación económica, concentración en un desarrollo de infraestructura, límites al capital extranjero y redistribución de ingresos. Su consigna era: "De incapaces, traidores y cobardes libertemos a este pueblo". ("Objetivos nacionales del EMG de la oficialidad joven", mimeo., agosto de 1976; "Bases de una doctrina militar para un país subdesarrollado", mimeo., agosto de 1976).

militar que funcionara íntegramente a través de sus propios términos. El "autogolpe" del 9 de noviembre de 1974, si bien se diferenciaba de otros golpes del Cono Sur en cuanto al nuevo orden que instituía, no representaba una alteración fundamental del equilibrio social de fuerzas; fue, no obstante, un significativo hito político. Su contenido estaba formulado en el Decreto Supremo 11947: "...el deseo de constitucionalizar los Poderes Públicos mediante elecciones para los partidos políticos sólo significaba un fin en sí mismo, destinado a la satisfacción de sus necesidades y no un medio por el cual se debe servir a la patria con planes y programas destinados al progreso del país". Todos los partidos políticos fueron, por lo tanto, declarados en "receso" y la administración pública entregada exclusivamente a las FF AA hasta 1980. Se introdujo el servicio civil obligatorio para toda persona mayor de 21 años, permitiendo así a los militares "reclutar" a cualquier ciudadano adulto y someterlo a la ley marcial en cualquier momento. Todas las funciones de sindicatos, de asociaciones estudiantiles, comerciales o profesionales que quedaban fueron retiradas y reemplazadas por "coordinadores" designados por el gobierno. Toda reunión que no fuera oficialmente autorizada podía ser sancionada por la ley marcial; las huelgas y toda otra forma de paro laboral estaban estrictamente prohibidas. A fin de reforzar la moral cívica todavía más, se redujo el número de feriados públicos.[36]

El "golpe" de noviembre ciertamente sirvió para parchar varias de las grietas que existían en el aparato de control, pero su verdadera importancia yacía en representar una aceptación incondicional del modelo de Pinochet y en ser una clara resolución del alto mando de gobernar solo por otros seis años más. Únicamente dos veces antes en el siglo XX habían existido administraciones puramente militares y ambas ocasiones –1930 y 1951– surgieron en plena crisis política, se establecieron por la fuerza y duraron muy poco tiempo. En 1974, las FF AA no afrontaron grandes retos y confiaron en que el "despegue" económico mantendría esa situación.

Administrando el auge

La estrategia económica de Banzer tenía dos objetivos fundamentales: atraer la inversión extranjera eliminando casi todas las restricciones respecto a capitales y fomentar un rápido crecimiento dirigido a la exportación, concentrado en Santa Cruz. Se reconoció que la privatización de porciones de la amplia infraestructura del sector estatal no era atractiva para la empresa privada, excepto en muy pocas áreas, y fue únicamente en la explotación de gas y petróleo donde pudo prosperar. A fines de 1974, el alcance de la expansión económica parecía justificar la estrategia. Empero, la causa real del substancial aumento en las ganancias por exportación no fue la restructuración del sector manufacturero, dinamizado con nuevos capitales extranjeros, sino los grandes saltos del precio del petróleo, respaldados por un auge incidental en la agroindustria, el cual fue incentivado por fluctuaciones todavía a más corto plazo y una sobreabundancia del crédito. La completa mala administración de esta pasajera anomalía en los términos de comercio significaba que cuando se reducían las ventajas de precios, la economía boliviana se sumía en una crisis comparable sólo con aquella de 1956. Los principales rasgos de esa crisis eran, como en toda América Latina, la acumulación de una deuda externa masiva y una persistente inflación.

La incapacidad de atraer inversión extranjera no se debía a la falta de esfuerzo por parte del gobierno. La ley de inversiones de septiembre de 1971 liberó el movimiento de utilidades, eliminó aranceles no solamente sobre bienes de capital (que en este caso incluían vehículos de todo tipo), sino también sobre productos manufacturados y estableció condiciones excepcionalmente generosas para determinar la depreciación de capital.[37] Con la eliminación de aranceles claves, el nivel de impuestos sobre importaciones decayó de 10,2 en 1972 a 5,6 por ciento en 1978. La flexibilidad para obtener créditos no fue menos categórica; durante el mismo período, los préstamos de los bancos locales se elevaron de 1,3 mil a cinco mil millones de pesos bolivianos, mientras que los préstamos extranjeros fueron considerablemente mayores. Con todo, en estos seis años el coeficiente de liquidez (la relación entre el circulante y el valor de la producción) aumentó de 0,2 a 0,8 por ciento, lo cual señala que las grandes sumas de dinero puestas en circulación no correspondían al aumento de la producción real.[38] Una razón esencial fue que el capital extranjero simplemente no llegó; el total de las inversiones externas directas durante el banzerato alcanzó apenas a 96,8 millones de dólares, de los cuales, más del 65 por ciento provino de sólo tres firmas: Atlas Copco Andina en metalurgia,

36 Las principales cláusulas de los decretos 11947 y 11948 están citadas con bastante detalle en Quiroga: *Juicio...*, pp. 30-36.

37 J.M. de la Cueva: *Bolivia, imperialismo y oligarquía*, La Paz, 1983, p. 66

38 Ramos, op. cit., pp. 159, 163, 166.

Sociedad Aceitera del Oriente en agroindustria y la firma Sheraton.[39] Sin embargo, por muy generosa y políticamente estable que haya sido la administración de Banzer, no pudo persuadir al capital extranjero de que Bolivia había dejado de ser una zona de alto riesgo; y, lo que es aún más grave: la inversión extranjera estaba obstaculizada por el hecho de que el país tenía un mercado interno muy pequeño y un bajo nivel de integración regional e interna, que a pesar de la disponibilidad de mano de obra barata suponía costos de producción demasiado altos. Por lo tanto, el comparativamente elevado nivel de exportación de capital durante la década de 1970 no se debía fundamentalmente a la repatriación de utilidades, como a primera vista se deduciría de los términos de la ley de inversiones. Dichas utilidades fueron solamente de setenta millones de dólares (doce por ciento), mientras que la cifra de 314,4 millones de dólares (88 por ciento) salió del país por concepto de intereses a los crecientes préstamos gubernamentales.[40] No obstante, la política de abrir la economía no solamente fracasó en el "despegue", ya que la eliminación del control a las importaciones también ocasionó grandes perjuicios a los intereses del sector local, sumamente vulnerable. Si bien entre 1971 y 1978 la importación de bienes de consumo aumentó solamente entre 20,1 a 21,5 por ciento del total, la importación de bienes de capital cayó significativamente de 49,1 a 42,8 por ciento, mientras que la de materias primas, que a menudo competían con las locales, aumentó de 29,6 a 35,0 por ciento.[41]

Frente a ese panorama, la política gubernamental de dinamizar la economía cruceña parecía un acierto absoluto. Esta estrategia, como lo demuestra el cuadro 5, no era nueva pero fue impulsada por Banzer mucho más acentuadamente que por cualquier régimen desde 1952. Hasta 1971, la generosidad oficial con Santa Cruz en general estuvo dirigida a la industria petrolera. Este respaldo continuó bajo el gobierno de Banzer, pero una de las características más importantes de su política fue la asistencia al desarrollo de cultivos de exportación, particularmente al algodón, al café, al azúcar y a la madera. La presentación de una cadena de estadísticas tabuladas no es de muy fácil lectura, pero un examen del cuadro 6 bastará para mostrar que esa política produjo una serie de impresionantes resultados.

39 De la Cueva, *op. cit.*, pp. 71-72; Ramos, *op. cit.*, p. 54.
40 Ramos, *op. cit.*, p. 125.
41 *Ibid.*, p. 203.

Cuadro 5
Créditos para agricultura (1970-1975) y presupuesto de las Corporaciones Regionales de Desarrollo (1975)
(en porcentaje)

Región	Créditos Banco Agrícola		Presupuesto de desarrollo regional	
	1955-64	1964-70	1970-75	1975
ALTIPLANO	16,1	18,53	4,75	14,9
La Paz	11,0	13,53	2,46	3,6
Oruro	2,5	2,04	1,16	3,3
Potosí	2,6	3,14	0,69	8,0
VALLE	26,4	17,40	6,61	12,1
Cochabamba	13,5	9,92	2,69	0,5
Chuquisaca	5,7	3,86	1,22	8,5
Tarija	6,7	3,60	2,69	3,1
ORIENTE	57,5	64,07	86,63	73,0
Santa Cruz	42,5	43,12	69,64	71,0
Beni/Pando	14,9	20,95	16,98	2,0

Fuente: Eduardo Arze Cuadros, *La economía de Bolivia*, La Paz, 1978, pp. 269 y 281.

Hay, por supuesto, estadísticas y estadísticas, y las cifras del cuadro 6 que evidentemente fueron publicadas por el gobierno encubren tanto como revelan. El incremento en las ventas del café fue de un 444 por ciento en valor, mientras que el volumen de producción apenas se elevó en un 28 por ciento. El aumento del precio del café se debió a un colapso temporal en la oferta mundial ocasionado por heladas en Brasil, inundaciones en Colombia y problemas políticos en Angola durante el período 1976-78. De manera similar, el precio del azúcar se elevó repentinamente a 65 dólares el quintal a fines de 1974, aunque los costos de producción en el Caribe se mantuvieron estables alrededor de los diez dólares, lo cual indica que se trataba de una subida esencialmente especulativa que no se podía esperar que dure. Sin embargo, el régimen de Banzer no solamente desistió de recolectar el impuesto a los productores de azúcar para apropiarse de los subsidios formalmente eliminados en enero de 1974 –una medida que en la práctica financió la cantidad de 98 millones de pesos bolivianos a los propietarios de ingenios en el año fiscal de 1976– sino que también coadyuvó a la enorme expansión de la capacidad de los mismos.[42]

42 MIR: *La gran mentira, informe sobre la situación económica del país en 1976*, La Paz, 1976, p. 4

El resultado fue que cuando el precio bajó a menos de diez dólares el quintal, el gobierno no tuvo más remedio que aumentar el subsidio a los ingenios que estaban trabajando muy por debajo de su capacidad a cambio de réditos mínimos. En 1979, este subsidio llegó a un total de quince millones de dólares en desembolso anual, es decir a 7,0 dólares por quintal de azúcar producida.[43]

Cuadro 6
Exportaciones agrícolas (1972-1978)
(millones de dólares)

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	Total
Castaña	1,3	1,5	2,1	2,2	2,2	2,6	3,1	15,0
Café	4,7	5,9	4,5	7,0	13,1	18,7	16,7	70,4
Cueros			0,3	0,6	2,5	1,5	4,6	9,5
Goma	0,8	1,1	1,9	2,3	2,4	4,0	2,1	14,6
Azúcar	0,4	12,4	21,9	17,4	38,7	22,9	14,2	128,9
Algodón	7,3	9,7	22,0	18,1	12,0	17,7	14,8	101,9
Madera	9,7	7,7	12,9	11,1	10,0	12,0	12,6	70,0
Carne	2,3	3,1	0,2	5,6				
Ganado vacuno	1,8	0,7	0,3	0,8	2,1	3,0	2,6	11,3
Otros (a)	5,8	3,3	4,2	3,5	4,6	10,7	15,9	48,0
Total	28,4	45,4	70,1	63,0	88,6	93,1	86,6	475,2

Nota(a): incluye quina de quina, madera, tabaco, semilla de algodón, etc.
Fuente: Banco Central de Bolivia; Pablo Ramos. *Siete años de economía boliviana*. La Paz, 1980.

No obstante, el caso más destacado de mala administración se produjo en la expansión del algodón. Adoptado como el cultivo preferido con la expectativa de considerables elevaciones de precios, el cultivo fue estimulado bajo Banzer con el 52 por ciento de los préstamos del Banco Agrícola. Entre 1972 y 1975, el área sembrada de algodón aumentó en más del setenta por ciento, reemplazando otros cultivos, particularmente de arroz e incluso empleando miles de soldados, debido a la falta de mano de obra suficiente durante el período de cosecha en Santa Cruz. Nuevamente el auge fue en extremo temporal. Los precios cayeron de su cifra más alta en 1973-74 por una sobreproducción global, obligando a reducir la tierra destinada al algodón en un 37 por ciento anual, entre 1976 y 1980. En este caso, el subsidio gubernamental consistió en no recuperar el dinero prestado por el Banco

43 Ramos, *op. cit.*, p. 215.

Agrícola, que de hecho se esfumó en el aire. En 1979, el 69 por ciento de las deudas, 666 millones de dólares no pagados al banco, correspondía a los grandes intereses de familias cruceñas.[44] Algunos observadores sostienen que frente al colapso del algodón como fundamento para el crecimiento agroindustrial, varias firmas locales desviaron su interés no solo otra vez al azúcar, el arroz y al ganado, sino también hacia una cuidadosamente planificada expansión de otra exportación no tradicional: la cocaína.[45] Compañías familiares como la Gasser Bowles, Bedoya, Suárez, Said y Elsner, al igual que firmas con nexos internacionales –Grace, Hansa y el influyente Banco de Santa Cruz de la Sierra–, no sólo tuvieron gigantescos beneficios caídos del cielo, sino que también absorbieron grandes cantidades de dinero en préstamos gubernamentales, acrecentando bastante su poder político y económico. A través de la adquisición de una vasta hacienda cerca a San Javier, en el norte del departamento, el propio Banzer pasó a formar parte de esta oligarquía regional, consolidando así todavía más su influencia en el control del Estado. Parecía como si el poder nacional se hubiera desplazado de La Paz a Santa Cruz, de la misma manera como, a fines del siglo XIX, Sucre perdió su hegemonía política en favor de La Paz.

Nada acentuó este hecho más que la ubicación en el oriente de los depósitos bolivianos de petróleo y gas que, como resultado de las enormes subidas de precios de 1973-74, generaron una renta que empequeñeció los logros en la agroindustria hasta la insignificancia. En tanto las ventas de productos agrícolas pasaron de 4,1 a 5,6 por ciento del valor de las exportaciones entre 1970 y 1975, las de petróleo y gas crecieron de 5,7 a 31,6 por ciento en el mismo período.[46] El impacto fue cuantioso, pero como lo ilustra el cuadro 7, no hubo de ser prolongado, ya que el empuje que brindó a la balanza de pagos se debió exclusivamente a la elevación del precio y no al volumen de producción, que en el caso del petróleo decaía aceleradamente hacia fines de la década, mientras que el del gas se mantenía estático.

Entre 1970 y 1976, las utilidades brutas de YPFB aumentaron de 18,29 a 96,4 millones de dólares y hubieran sido considerablemente mayores de no haberse mantenido bajo el precio interno, incrementando así el consumo nacional y restringiendo la capacidad de exportación. (En 1976, YPFB exportó ocho millones de barriles de crudo por 112.6 millones de dólares y vendió 6,6

44 *Ibid.*, p. 229.
45 René Bascopé Aspiazu: *La veta blanca: coca y cocaína en Bolivia*. La Paz, 1982, pp. 56-67.
46 Arze Cuadros, *op. cit.*, p. 280.

millones de barriles en el mercado interno por 64,3 millones de dólares). Una fuga mucho menos defendible de los recursos de la Corporación fue el pago de grandes regalías al departamento de Santa Cruz, que, de todas las regiones de Bolivia, era la que menos las necesitaba. En 1977, las regalías de ese departamento alcanzaron a 25 millones de dólares, pero los intentos de YPFB de reducir esta cantidad y expandir la inversión fueron obstaculizados por Banzer sin una seria discusión. Consecuentemente, una creciente proporción de las inversiones de la Corporación tuvo que ser financiada con préstamos extranjeros, los cuales a fines de 1978 sumaron 355 millones de dólares. La mayor parte de esta inversión fue destinada a la expansión y modernización de la refinería , cuya capacidad debía acrecentarse, según las expectativas del plan de desarrollo 1976-80 del régimen, para aumentar la producción de 40 mil a 180 mil barriles diarios. En realidad, la producción nunca sobrepasó su cifra más alta de 1973; a mitad de la década era evidente que los descubrimientos que la Gulf había hecho a principios de la década de 1960 y Yacimientos en 1969 en Monteagudo se estaban agotando.

Entre 1971 y 1977, YPFB y las compañías privadas desembolsaron un total de 120 millones de dólares para exploraciones y sólo encontraron reservas de veinte millones de barriles de petróleo y cincuenta millones de pies cúbicos de gas. En octubre de 1978, cinco equipos de exploración contratados por la corporación estatal pararon el trabajo porque YPFB no tenía los medios para pagarles. En contraste, los gastos de YPFB en las refinerías fueron de 160 millones de dólares para lograr una capacidad de 70 mil barriles diarios, cuando el consumo interno no sobrepasaba los 25 mil.[47]

El no haber descubierto grandes depósitos se debió en gran medida a la extremadamente compleja geología boliviana. De las quince empresas extranjeras que iniciaron exploraciones en seis millones de hectáreas, dadas en concesión según los términos de la Ley de Hidrocarburos de 1972, solamente dos –Occidental y Tesoro– encontraron depósitos accesibles, y el paraje Tita, de Occidental, no empezó a producir sino hasta fines de 1978. Empero, estos problemas se agravaron enormemente por la estrategia que privilegiaba a las refinerías y por la falla de nuevos métodos de producción, siendo la caída de la producción acompañada únicamente por un aumento de la fuerza de trabajo, en especial del sector burocrático.[48] Más allá de esto, la situación no mejoró con

47 La mayoría de los datos de este párrafo han sido sacados de George Phillip: "YPFB and the Development of Oil in Bolivia", mimeo., Londres, 1979.

48 Carlos F. Toranzo Roca: "Banzerato: un nuevo modelo de acumulación", en *Cuadernos de Marcha*, México, septiembre-octubre de 1979, p. 72.

hechos como el pago de generosas comisiones –supuestamente causa de la excesiva capacidad del oleoducto Tita– o con "acuerdos amorosos" como el realizado con la Sexta División del Ejército paraguayo, al que se le vendió gasolina a un precio treinta por ciento más bajo que la tarifa interna boliviana.[49] Por lo tanto, aunque el país eludió el desastroso impacto a la balanza de pagos que sufrieron las naciones subdesarrolladas sin petróleo durante la década de 1970, las expectativas de una futura expansión basada en el petróleo habían desaparecido antes del final del banzerato. Al terminar la década, se generalizó el temor de que, habiendo desaprovechado las oportunidades de principios de la década de 1970, Bolivia pronto se vería obligada a importar petróleo para cubrir la demanda interna.

Cuadro 7
Exportación de petróleo crudo y gas natural por YPFB (1972-1978)

	Volumen de petróleo (miles de m³)	Valor (en miles de US$)	Precio ($us/m³)	Volumen de gas (miles de m³)	Valor (en miles de $u)	Precio ($us/m³)
1972	1.740.0	31.711.9 (a)	18,22	1.605.141.0	9.863.6	0,28
1973	1.883.0	46.860.9	25,95	1.570.154.0	19.101.2	0,33
1974	1.716.8	163.928.6	95,48	1.545.063.7	29.186.2	0,53
1975	1.316.8	111.478.8	84,62	1.566.669.6	42.453.3	0,77
1976	1.252.2	112.571.2	87,79	1.571.241.6	54.896.4	0,99
1977	713.7	67.442.4	94,50	1.639.148.9	66.802.6	1,15
1978	445.2	42.331.3	92,99	1.681.395.5	78.506.8	1,41

Notas: (a) YPFB calculó sus ventas de 1972 como si el peso boliviano se hubiese devaluado en la medianoche del 31 de diciembre de 1971.
Fuente: Banco Central de Bolivia: *Boletín estadístico*, Nº 224.

El régimen de Banzer también gozó de una situación sumamente favorable en relación al mercado del estaño. Después del estancamiento de la década de 1950 y de una tendencia al alza lenta y desigual en la década siguiente, el precio del estaño registró un incremento que fue significativamente más moderado que aquel del petróleo, pero aún así decisivo para una economía que seguía dependiendo de la industria para el 75 por ciento de sus ingresos en divisas. Entre 1972 y 1978, el precio del estaño aumentó de 1,69 a 5,72 dólares la libra. Sin embargo, al igual que con la gasolina, el incremento del valor de exportación de 113 millones de dólares en 1972 a 374 en 1978 correspon-

49 *Latin America*, 5 de enero de 1979; Quiroga: *Ídem*..., p. 103.

dió únicamente a la subida del precio y no a una mayor producción, la que en efecto decayó (de 30.277 toneladas en 1971 a 29.697 en 1978).[50]

La característica más relevante de la organización de la minería en este período fue el influjo creciente con patrocinio oficial de las 25 firmas más grandes del sector privado, organizadas en la Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM). Entre 1973 y 1976, el valor de las exportaciones de COMIBOL aumentó en un 55 por ciento, en tanto que los costos de operación se incrementaron en un 99 por ciento; en el mismo período, los ingresos de la ANMM por ventas al extranjero aumentaron en un 76 por ciento, mientras que sus costos de operación tan sólo en 26 por ciento. Las tasas de beneficios, por lo tanto, variaron enormemente: así, las de COMIBOL decayeron en 107 por ciento y las de la ANMM aumentaron en 27 por ciento.[51] Promovida no sólo por el tratamiento favorable por parte del gobierno sino también por la subida de precios de minerales secundarios que controlaba en gran parte (tungsteno, setenta por ciento; antimonio, cien por ciento; cobre, 65 por ciento), la ANMM aumentó su fuerza laboral en un ochenta por ciento y su producción correspondía a la quinta parte de la producción nacional de minerales. El dominio de la ya entrada en años compañía estatal, hipotecada a bancos extranjeros, fue agudamente amenazado por las firmas privadas, que casi sin excepción estaban ligadas a firmas internacionales (US Steel, W.R.Grace, IMPC, etc.).[52] En este sentido, uno de los nombramientos más significantes de Banzer fue el de Guillermo "Willy" Gutiérrez Vea Murguía en la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Inversiones; Gutiérrez estaba a la cabeza de la compañía minera Avicaya, ligada al grupo Grace; pero lo que es más importante: había sido un antiguo consejero de Aramayo y fue el principal candidato de la Rosca en las elecciones de 1951. Su nominación sugería a viva voz un deseo de retorno a la época previa a la existencia de la COMIBOL.

Cualesquiera sus consecuencias, ninguno de los rasgos anteriormente mencionados de la política hubo de tener un efecto tan profundo y duradero sobre la economía del país como el recurso del gobierno de Banzer a préstamos, pues en ausencia de toda inversión extranjera significativa, la política de crecimiento acelerado tuvo que ser financiada a través de la deuda externa. Por supuesto, éste no era un rumbo anormal para ningún Estado latinoamericano en la década de 1970; pero la escalada de los préstamos en Bolivia fue notable para un país de su tamaño y capacidad productiva, aun considerando los nada envidiables niveles de endeudamiento de la región. En 1971, la deuda externa se mantuvo en 782,1 millones de dólares, a fines de 1978 se incrementó a 3.101,8 millones. Este aumento de 2.319,7 millones de dólares no fue, por lo demás, equiparado por una subida equivalente en exportaciones, de modo que los servicios de la deuda aumentaron de 17,3 a 32,0 por ciento del valor de las exportaciones durante el mismo período.[53] Además de ello, el costo de estos créditos se fue haciendo considerablemente mayor en la medida en que no eran las agencias internacionales o los Estados extranjeros que los otorgaban, sino bancos privados que imponían términos más estrictos. En 1971, menos del cuatro por ciento de la deuda era a bancos privados. En 1972, el servicio de la deuda boliviana –reembolso de capital, pago de intereses y comisiones– era de 36,7 por ciento de la cantidad prestada, en tanto que en 1978 estaba devolviendo 66 por ciento a los acreedores. Entre 1971 y 1978, el promedio anual del servicio de la deuda sobrepasaba la mitad de la suma recibida en préstamo.[54] Como se sabe muy bien ahora, tal situación llevó a adquirir todavía mayores préstamos para cubrir los déficits de la balanza de pagos y para regenerar la producción. Con excepción de 1974 –el año bendecido por la subida del precio del petróleo–, todos los años del gobierno Banzer terminaban con un déficit de la balanza de pagos en la cuenta corriente; y sin embargo, el objetivo de un crecimiento acelerado apenas si se había alcanzado; la tasa de crecimiento promedio hasta 1977 fue de 5,3 por ciento, comparada con 5,5 por ciento a lo largo de la década anterior. El plan 1976-80 había proyectado una tasa de crecimiento del ocho por ciento anual para 1978, 1979 y 1980; las cifras registradas para tales años por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU fueron de 2,8, 2,8 y 1,2 por ciento respectivamente.[55]

En términos tanto de la forma en que fue generado como de sus consecuencias, tal crecimiento evidentemente no fue consustancialmente acompañado por un auténtico desarrollo. Empero, sí proporcionó una apariencia de modernización. Los auges de mercancías a corto plazo precipitaron un incremento en la actividad especulativa, expansión en el tamaño y en el promedio de los ingresos de profesionales de la clase media (los gastos del Estado en servicios se cuadruplicaron) y –producto de la necesidad de acomodar y abas-

50 Ramos: *Siete años...*, pp. 140, 142.
51 *Anuario Estadístico 1977*, La Paz, 1978.
52 Toranzo, *op. cit.*, p. 70; MIR: *Las empresas multinacionales en Bolivia*, La Paz, 1975, p. 25; De la Cueva, *op. cit.*, pp. 172-173.

53 Ramos: *Siete años...*, p. 117; Toranzo, *op. cit.*, p. 73.
54 Ramos, *op. cit.*, pp. 119-120.
55 *Ibid.*, p. 218.

recer las nuevas aspiraciones de consumo de este estrato– un incremento en la construcción. Mientras Santa Cruz creció horizontalmente, La Paz se expandió tanto horizontal como verticalmente con la progresiva aparición de feos pero prestigiosos bloques de edificios habitados por jóvenes de clase media, que escapaban tanto del control como de la estructura de apoyo de sus hogares paternos. Aquellos que dirigieron y fundaron esta actividad construyeron para sí en opulentos suburbios, tales como Calacoto y Cota Cota en La Paz, los cuales daban muestras de un notable y competitivo consumo en una escala tal que provocaría la envidia de muchos ejecutivos europeos. Con el advenimiento de la cocaína, estos reductos de élite fueron complementados con ejemplos más extravagantes de arquitectura espaciosa y *artiviste*.

El gobierno celebraba tan palpable transformación del paisaje como una encarnación del progreso, pero sería más exacto describirla simplemente como una de las caras de la inflación. Para la gran masa de habitantes urbanos, así como para el campesinado, ya considerablemente integrado a la economía monetaria, ni la vivienda ni ningún otro rubro de gastos bajaron de precio, mejoraron en calidad o fueron más abundantes. El equipo económico de Banzer estaba integrado por empresarios derrochadores partidarios del libre cambio; pero como hemos visto, sólo un sector de la empresa podía utilizar esa libertad para negociar. Durante siete años, Bolivia no conoció nada que se pareciera a una "negociación colectiva libre" y registró la tasa más baja de huelgas en tres décadas. El modo y grado de la subida de costo de vida podían ser objeto de discusión, pero a las consabidas acusaciones de que existía una inflación "salarialista" se les quitaba toda validez. Ya ha sido destacado el impacto de los principales factores causantes de la subida del costo de vida –la devaluación de 1972 y la eliminación de subsidios de 1974 , éstos incidieron en la obtención de un promedio de poco más de treinta por ciento anual en la tasa de inflación. Según la COB, esto venía acompañado de una caída de la cuota de participación de los asalariados en el ingreso nacional de 47 a 31 por ciento.[56] Los sueldos de los mineros, que han sido objeto de un riguroso estudio, se redujeron al menos en un catorce por ciento. Las cifras respecto a la pérdida global del poder adquisitivo varían muy ampliamente; en efecto, la cifra más baja aceptable está entre ocho y diez por ciento y la más alta llegaba casi al doble.[57]

56 *Ibid.*, p. 98

57 *Ibid*, pp. 256-258; *Páginas Sindicales*, p. 53, brinda una descripción probablemente exagerada de la caída de los salarios reales. Ver también: Yvon Le Vot: "Bolivie: les militaires, l'Etat, la dépendance: une décennie de pillage", en *Amerique Latine*, París, N° 3, julio-septiembre

El cómputo de este tipo de estadísticas económicas rara vez carece de anomalías, pero los márgenes de error no son tan generosos como para permitir que las confusas matemáticas empleadas por el gobierno sean confiables. En 1976 se estimó el PIB per cápita en seiscientos dólares, en 1977 en 729 dólares.[58] El Banco Mundial, por otra parte, estimó la cifra para 1975 en 360 dólares, pero en 1979 su director local opinaba que las cifras oficiales utilizadas por el gobierno en sus estimaciones eran infladas; en esa misma época, el banco estaba consiguiendo para Bolivia préstamos blandos de los reservados exclusivamente para países con un PIB per cápita inferior a los 280 dólares anuales.[59] Además, el banco –al cual muy difícilmente se lo podría acusar de radicalismo– concluyó que "...Bolivia tiene una de las distribuciones de ingresos más deformados de América Latina...", como lo demuestra el cuadro 8.

Cuadro 8
Distribución del ingreso (1970-74)

Porcentaje población total	Cuota de ingreso nacional % 1970	Ingreso promedio US$ 1974
20% mínimo	4	59
20% más bajo	9	132
40% medio	28	206
20%alto	59	867
(5% más alto)	(36)	(2.115)

Fuente: World Bank: "Income Distribution in Underdeveloped Countries", estimaciones de la misión.

Aunque a 25 años de la revolución, Bolivia había sufrido indudablemente transformaciones en una serie de sentidos, tales cambios de ningún modo alcanzaron a dejar atrás el abyecto subdesarrollo. Su población había aumentado de 2,6 a cerca de seis millones de habitantes; pero la distribución seguía siendo desigual y muy esparcida; el 16 por ciento vivía en el oriente, que abarca el sesenta por ciento del territorio del país, mientras que la densidad aumentó de tres a cinco personas por kilómetro cuadrado, suficiente para que

de 1980. Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia: *Estudio sobre el costo adquisitivo del salario de las mineros*, La Paz, 1978, pp. 21-22.

58 Presencia, (La Paz), 24 de diciembre de 1976; CALA: "Bolivia: Background to the Presidential Elections", Londres, 1978, p. 13.

59 World Bank: *Annual Report 1976*, Nueva York, 1976; Bolivia, *Report of an NUM Delegation in July 1979*, Londres, 1979, p. 14.

McNamara la considerara explosión demográfica.[60] Y, lo que es más decisivo, en 1976 menos del 37 por ciento de los bolivianos sabía leer y escribir; la región con el nivel más bajo de alfabetismo paradójicamente era Santa Cruz, con un 21 por ciento.[61] En la misma época, el número de líneas telefónicas en el país había alcanzado a 112.600; la población universitaria a 34.500 y más de una tercera parte de la población tenía radio, en tanto que el 66 por ciento no tenía agua potable o instalaciones sanitarias. La existencia de médicos disponibles para tratar las inevitables consecuencias de tal estado de cosas era sólo de 2.134.[62] Dado que el 86 por ciento del cuerpo médico estaba instalado en poblaciones de más de diez mil habitantes, la situación en el campo era muchísimo peor de lo que sugiere el promedio de cifras. Muchos médicos concuerdan en que la cifra oficial de mortalidad infantil de 130 por mil nacidos vivos es considerablemente subestimada, puesto que resulta difícil obtener estadísticas confiables en una sociedad donde pocos nacimientos son atendidos por médicos, muchos abortos son provocados por las propias madres o muchos niños nacidos muertos generalmente son considerados como nunca nacidos. Aquellos niños con enfermedades crónicas que tienen la suerte de llegar al Hospital del Niño –a menudo abandonados allí por madres desesperadas– estrán a expensas de una cruel lotería; sólo aquellos que tienen "más probabilidades de salvarse" son puestos en incubadoras, las cuales son tan escasas que deben ser compartidas, a pesar de que con ello se aumenta enormemente la posibilidad de contagio. La incomperencia que ha acentuado tanto esas condiciones no es de manera alguna exclusivamente militar; a principios de 1983, luego del retorno a un gobierno civil y de la designación de un ministro de salud supuestamente izquierdista, este ministro se negó a apoyar una solicitud a agencias extranjeras a fin de obtener fondos para establecer un pabellón especial en el hospital destinado al tratamiento y control de niños desnutridos, pese al hecho de que el ochenta por ciento de los niños menores de quince años no consumen la dieta mínima que establece la ONU como adecuada para una vida sana.

Los pocos médicos que trabajan en este decisivo campo lo hacen a la vista de la indiferencia de colegas que se satisfacen con languidecer en la práctica privada. Naturalmente no hay incentivo económico para alterar esa situación; ni para las farmacias, que expenden medicamentos con o sin receta médica, ni para las grandes compañías como la Bayer o Roche. Uno de los pocos beneficios de la crisis económica de los últimos años es el de haber hecho tan prohibitivo el precio de la leche en polvo importada (en su mayor parte holandesa), que el nivel de lactancia materna sigue siendo muy alto desde cualquier punto de vista.

60 United Nations: *Concise Report on the World Population Situation 1981*. Nueva York, 1982.
61 Instituto Nacional de Estadística: *Bolivia en cifras 1980*, La Paz, 1981, p. 57.
62 *Ibid.*, p. 53; *World Health Organization*, citada en CALA, p. 15.

La "Nueva Bolivia" en repliegue

Si bien el auge de la década de 1970 fue de breve duración, las tasas de crecimiento bajaron súbitamente y el nivel de inflación subió persistentemente; estos factores sirvieron de base pero no fueron la causa directa del posterior derrocamiento del régimen de Banzer. El verdadero alcance de la crisis que se acumuló durante la década no hubo de manifestarse sino más tarde, y las principales fisuras en el edificio de la dictadura fueron de una naturaleza fundamentalmente política y superestructural. Por su propia naturaleza, los regímenes dictatoriales sirven de incentivo a la preponderancia de las demandas democráticas en la oposición; pero en el caso de Bolivia, la debilidad de toda tradición parlamentaria tendió a disgregar el movimiento por la constitucionalización en la defensa de las más sobresalientes libertades que ésta garantizaría, en lugar de cualquier otro sistema *tout court*. Así, por muchísimo tiempo, fuerzas terriblemente debilitadas trataron de ganar terreno táctico y de minar los cimientos de la dictadura; había muy poco acuerdo respecto a una estrategia general de cómo y con qué se la reemplazaría. Esto se vio claramente recién al final, cuando un auténtico movimiento de bases pidiendo la amnistía política quebró el ímpetu del banzerato pero fue fácilmente canalizado hacia el electoralismo: no parecía haber ninguna alternativa preparada; aunque al tomar ese rumbo, Banzer obtuvo una considerable ventaja al preparar su retirada. El entusiasmo de las principales agrupaciones políticas y la importancia de las libertades democráticas elementales sirvieron para deslumbrar a la clase obrera y al campesinado. La forma en que se logró eclipsar al prolongado gobierno de Banzer resultó ser de una importancia más que pasajera; en realidad sólo proporcionó el marco para la crisis política, por lo visto interminable, que siguió.

La primera agresión consolidada contra el sistema fue montada por la FSTMB y tuvo decididamente un carácter sindicalista. En enero de 1975, apenas dos meses después del autogolpe, Siglo XX y Catavi protagonizaron una huelga de quince días pidiendo la devolución de las emisoras de radio que habían sido clausuradas por el régimen. La acción no solamente logró su objetivo, sino que fue una señal

de que la organización de bases se mantenía intacta y de que los comités de bases dirigidos por la izquierda gozaban de un amplio apoyo, pese a que las federaciones sindicales nacionales ya no tenían existencia formal y los sindicatos de planta estaban en manos de los coordinadores. A lo largo de los dieciocho meses siguientes, el ímpetu de esta victoria parcial alentó la movilización en torno al problema de los salarios que, como hemos visto, fueron agudamente afectados en el sector minero. Los dirigentes de la FSTMB proscritos regresaron apresuradamente al país y se entregaron a la tarea de organizar un congreso sindical con carácter nacional, a fin de formular una estrategia. Si bien era ilegal, el régimen no hizo nada por suprimir la reunión, que finalmente tuvo lugar en Corocoro, el 1° de mayo de 1976. La demanda principal consistía en el aumento de un doscientos por ciento en el jornal básico de 1,75 dólares. El gobierno se negó a aceptar la cifra de cuatro dólares como la mínima para sostener una familia de cuatro personas e hizo su oferta de aumento entre treinta y cincuenta por ciento. Aunque el PCB argumentó sólidamente en contra de toda huelga precipitada e instó a tomar medidas tácticas graduales, el congreso se inclinó hacia el bloque radical del PRIN, POR y MIR, que logró obtener apoyo para lanzar un ultimatum al gobierno amenazando con una huelga minera nacional, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas en el término de treinta días.[63]

Cuando todavía se estaba llevando a cabo el congreso, llegó a Bolivia la noticia sobre el asesinato del general Zenteno en París, supuestamente ejecutado por una "Brigada Internacional del Che Guevara", hasta entonces desconocida. En los sectores populares no se observó ninguna aflicción, pero tampoco demasiado júbilo, pues era ampliamente aceptado que el asesinato fue obra de la derecha, sospecha confirmada por revelaciones de la policía que transcendieron a Le Monde implicando al régimen de Banzer y al propio personal de la embajada de Zenteno.[64] Dos meses después, otro general boliviano fue asesinado en el exilio, pero en este caso el impacto dentro del país fue considerablemente mayor: la víctima era Juan José Torres, muerto a tiros en Buenos Aires, al amanecer del 1° de junio. Poco después del golpe de Videla (24 de marzo), Torres había sido amenazado por el agregado militar boliviano y evidentemente su vida corría peligro en el contexto de la nueva "guerra interna" declarada por las fuerzas de seguridad argentinas, las cuales vigilaban continuamente su departamento. La muerte de este caudillo popular fue inmediatamente relacionada con Banzer

63 Sobre los ataques del PCB ver Carlos Soria Galvarro: *Con la revolución en las venas. Los mineros de Siglo XX en la resistencia antifascista*, La Paz, 1980, p. 103.

64 *Le Monde*, (París), 11 de mayo de 1976.

y agudizó una situación de por sí tensa. Crespones negros y banderas aparecieron en los centros populares de la ciudad, veinte mil personas asistieron a una manifestación de protesta y recordación en Siglo XX el 3 de junio. En lo que quizás haya sido el gesto más cínico de su gobierno, Banzer declaró duelo nacional y envió un avión a Buenos Aires con el ofrecimiento a la esposa del expresidente Torres de repatriar el cadáver. Sin embargo, cuando Emma Obleas insistió en que el cuerpo sea velado en San Andrés y en la sede de la FSTMB para luego ser enterrado en Siglo XX, Banzer –que había sugerido un entierro rápido y discreto– se vio obligado a retirar su generosa propuesta. El presidente Echeverría puso fin a este macabro incidente, ofreciendo "asilo" para los restos de Torres en México, donde permanecieron hasta junio de 1983.[65]

La muerte de Torres y las manifestaciones espontáneas de protesta que le siguieron terminaron con la actitud cautelosa del régimen frente a la convocatoria de huelga. El 9 de junio, las oficinas recuperadas por la FSTMB fueron allanadas, sus ocupantes arrestados y seis de los dirigentes nacionales deportados a Chile, donde el general Pinochet los confinó a un campamento aislado del sur. Siglo XX entró en huelga al día siguiente y, cuando las tropas cerraron el campamento minero e iniciaron una requisa casa por casa, los dirigentes de la huelga se refugiaron en interior mina utilizando salidas y socavones que sólo ellos conocían. El gobierno clausuró inmediatamente las pulperías y amenazó con cortes de energía eléctrica. En el curso de pocos días, el paro se había extendido a otros campamentos y había recibido el apoyo de los trabajadores fabriles, que declararon una huelga por 24 horas. Todos los campamentos de la COMIBOL fueron ocupados por el ejército; dos trabajadores fueron asesinados a balazos en Siete Suyos; se impuso la censura de prensa, pero nada impidió que el gobierno ofreciera setenta mil pesos bolivianos por la captura, vivo o muerto, de Cirilo Jiménez, uno de los líderes de Siglo XX, antiguo delegado por la sección Beza y partidario, con Filemón Escóbar, de la recientemente creada Vanguardia Obrera del POR, una escisión predominantemente minera del POR Lora. Domitila Chungara, embarazada de nueve meses, también fue tenazmente perseguida, pero finalmente sacada de la mina para dar a luz a su niño en el hospital del campamento, bajo la protección de la Cruz Roja.[66]

65 Detalles del exilio y muerte de Torres se pueden ver en la entrevista con Emma Obleas en Suárez: *Entre la palabra y el fusil*, pp. 234-241.

66 Una descripción de la huelga por Domitila Chungara está en *Let Me Speak*, Londres, 1989, p. 214 y ss. El relato de uno de sus dirigentes, en Juan del Granado: *Antonio Camargo*, La Paz, 1983, pp. 101-123, también constituye una buena descripción

Con el empleo de un poco acostumbrado tacto seguido de un claro golpe de fuerza, el gobierno obtuvo un resultado exitoso: hizo subir a la oposición y provocó un enfrentamiento directo que se había previsto durante un año y medio. Aunque la huelga ocasionaba a la COMIBOL una pérdida de ochocientos mil dólares diarios, sus recursos alcanzaban las setenta mil toneladas, cantidad suficiente para cubrir tres meses sin producción. La retención de alimentos y la presencia de las tropas desgastaron la resistencia en las minas más pequeñas, donde, por la falta de coordinación o liderazgo nacional, los mineros comenzaron a retornar al trabajo después de dos semanas. En Siglo XX se mantuvo la huelga por 25 días como una prueba desigual de fortaleza. El PCB había expresado su pesimismo con relación a la huelga desde un principio, pero la asamblea abierta de la fuerza laboral de Siglo XX decidió su continuación por aplastante mayoría recién el 29 de junio, subrayando el hecho de que una vez tomada la decisión de luchar por aumentos salariales en Corocoro, no quedaba más alternativa que seguir hasta el final. El régimen de Banzer fue sacudido inicialmente, pero sus tácticas demostraron que aún poseía la fuerza para vencer a cualquier oposición. El fracaso de la huelga no justificó una política de negociación, sino que simplemente puso de relieve el desequilibrio de fuerzas. A mediados de 1976, parecía seguro que el "automandato" de Banzer para gobernar hasta 1980 se cumpliría tal y como él se propusiera.

Fue sólo con la confianza nacida de tal supremacía que el presidente pudo embarcarse en su célebre aventura diplomática con Pinochet para negociar una salida al mar. La recuperación de la costa perdida en la guerra del Pacífico en 1880 siempre había podido aliar a los protagonistas políticos más extremos, siendo de máxima importancia para las FF AA, que fomentaban el recuerdo de la heroica derrota como un mito institucional central y el prepararse para su recuperación como justificación de generosas asignaciones de presupuesto. El hecho de que existiera un enorme desequilibrio entre la capacidad militar de ambos países contribuyó muy poco a debilitar esa ideología de reivindicación. (En ocasiones era respaldada por una espectacular imaginación militar, como cuando se declaró que los carburadores de los tanques chilenos no funcionarían en el altiplano - un hecho que no pudo haber preocupado excesivamente a la Fuerza Aérea de Pinochet, para la cual La Paz representaba un objetivo espléndido . Durante los años 1978 y 1979, en que Chile tenía disputas limítrofes con Argentina y Perú, cuando realmente estaba al borde de la guerra, reaparecía un marcado chauvinismo oportunista, especialmente porque 1979 era el centenario del estallido de la guerra. Inclusive en 1982, un mayor de la

fuerza aérea que pretendía adquirir 53 aviones militares de Bélgica afirmó extraoficialmente que dicha compra no sólo le serviría para equiparse con los chilenos, sino que permitiría a la FAB "sacar la mierda" con un bombardeo al apacible pueblo costero de Arica, que en realidad perteneció al Perú antes de 1880). Por lo tanto, Banzer estaba tomando al toro por las astas al buscar un arreglo diplomático, lo cual desde un principio implicaba el reconocimiento de la soberanía chilena sobre gran parte del territorio disputado y muy probablemente conllevaría mayores concesiones por parte de los desposeídos bolivianos.

Después del famoso abrazo de Charaña, en febrero de 1975, entre un dictador de origen alemán y otro de ascendencia francesa, en la aldea fronteriza se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia por primera vez en trece años. (Se habían roto en 1962 por las exigencias chilenas sobre el río Lauca). Willy Gutiérrez fue enviado como embajador a Santiago y comenzaron las negociaciones. Banzer admitió alegremente que él personalmente, más que el gabinete o el alto mando, había propuesto un *rapprochement* con Pinochet. Lo cual pudo haber sido una especie de desviación del carácter de los decretos de noviembre de 1974, pero no podía dañar su imagen, mientras los asuntos se manejaran con cautela y la salida al mar estuviera a su alcance.[67] A fines de 1975, estaba claro que las propuestas presentadas por Chile a la discusión no satisfacían las espectativas populares bolivianas; y, pese a haberlas aceptado, Banzer las mantuvo en secreto. Requisito fundamental era la obtención de un corredor al Pacífico sobre el cual Bolivia debería ejercer absoluta soberanía, pero la oferta chilena difícilmente alcanzaba este objetivo: "El territorio cedido por Chile sería declarado zona desmilitarizada y de acuerdo a conversaciones sostenidas anteriormente, el gobierno de Bolivia se obligaría a obtener la garantía expresa de la Organización de Estados Americanos respecto a la inviolabilidad de la franja territorial cedida".[68] Como respuesta a esta clara negativa de soberanía, Banzer afirmó que estaba de acuerdo, pero que tendría que discutir el asunto con la otra parte interesada: el Perú. El presidente tampoco rechazó el Artículo "I" del proyecto de acuerdo, que otorgaba a Chile pleno derecho a utilizar las aguas del río Lauca, lo cual siempre antes había sido tenazmente resistido desde La Paz. En diciembre, Gutiérrez, partícipe de estos intercambios, declaró precipitadamente: "Digo modestamente a mi pueblo que ya tiene mar". Entre tanto, Banzer estaba preparando a la opi-

67 *Estrella*, (Santiago), 25 de septiembre de 1975.
68 Nota N° 68_10875, 12 de diciembre de 1975, citada en Quiroga, *Lucha...*, p. 87.

nión pública para el tratado, haciendo énfasis en que: "...es cuestión de negociar un metro, dos metros, diez kilómetros, no sé. Queremos ser sumamente flexibles en esto".[69] Esa flexibilidad suponía un evidente "intercambio" de tierras, mediante el cual Bolivia no podría mantener tropas en el corredor, mientras que Chile obtenía control ilimitado sobre el nuevo territorio que recibiría a cambio de una pequeña porción que había incautado cerca de cien años antes. Banzer afirmó que ésa era la única manera de lograr una salida al mar, pero no supo captar ni el grado de intransigencia chilena ni la fuerza del sentimiento boliviano en torno al tema. La crítica periodística fue inusualmente franca y la agitación del movimiento generacional dentro del Ejército tuvo la suficiente repercusión para obligar al régimen a retroceder ante la firma de acuerdo alguno. Las negociaciones tambalearon a lo largo de 1976 y motivaron críticas particularmente violentas del MIR, que formuló su antimilitarismo en términos nacionalistas de izquierda y emprendió una campaña de propaganda muy efectiva. A fin de año, la prensa de Santiago publicó mapas de frontera, donde mostraba tres grandes porciones de territorio boliviano como pertenecientes a Chile. Si con ello pretendía sabotear las conversaciones, lo consiguió; a principios de 1977, el descontento militar había llegado a tal extremo, que Banzer tuvo que darse por vencido con su plan. En febrero de 1978, las relaciones entre ambos países se suspendieron una vez más. Durante tres años, Banzer había jugado con un problema que no era capaz de controlar, su imagen como "nacionalista" había quedado terriblemente manchada, las relaciones con un importante aliado se estrellaron contra una rivalidad innecesaria y aumentó el inconformismo dentro de las FF AA, especialmente entre los oficiales de menor rango.

Un efecto similar tuvo la publicación a principios de 1977 de una carta que Guido Strauss –el activo falangista que contribuyó al golpe de 1964, ahora subsecretario de Migración– había escrito al general Juan Lechín, entonces ministro de Planeamiento, en noviembre de 1976. La carta decía que el gobierno boliviano había mantenido conversaciones y recibido promesas de ayuda financiera de una serie de Estados europeos y de África del Sur para colaborar con la migración al país de treinta mil familias blancas (aproximadamente 150 mil personas) de Rodesia (ahora Zimbabwe) y Namibia al Beni y Santa Cruz durante un período de siete años. El año anterior, Bolivia había modificado su ley de migración para facilitar tal influjo y ni Strauss ni otra serie de funcionarios se molestaron en negar la existencia de ese plan. Advertidos sobre

69 Presencia, (La Paz), 2 de septiembre de 1975.

el tema, los portavoces del gobierno alegaron la importancia de las habilidades, los recursos, y la "impresionante ética de trabajo" de los colonizadores anglosajones para un país subdesarrollado como Bolivia.[70] Durante un tiempo, el régimen continuó en esa línea, aparentemente porque juzgaba que sus relaciones con el Movimiento de los No Alineados eran menos importantes que la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero de los Estados metropolitanos y la llegada de miles de empresarios pioneros, acostumbrados a mantener relaciones sociales del tipo que la oligarquía terrateniente cruceña tanto admiraba. Empero, su imagen externa se vio aún más perjudicada cuando un grupo de Rodesia, después de un viaje preliminar, expresó públicamente su estupefacción ante las atroces condiciones de trabajo en el agro de Santa Cruz, mientras que otros potenciales migrantes de Namibia hicieron comentarios peyorativos con relación tanto a los criollos como a los "indios" de Bolivia, lo que hizo evidente un racismo tan patente que inclusive el gobierno no pudo evitar criticarlos. Con esto sólo se logró incitar una campaña interna contra la "importación del apartheid", lo cual puso en tela de juicio las credenciales nacionalistas del régimen y reavivaba el interés en los problemas raciales locales. En la tentativa final, el esfuerzo de propercionar a Bolivia el tipo de colonizadores que tanto habían hecho por el desarrollo de países como Argentina y Chile fracasó; sea que los rodesianos blancos estuvieran o no sufriendo una "psicosis colectiva" como afirmaba Strauss, lo evidente es que no había mucho que los atrajera. Todo este episodio no fue precisamente un anacronismo, puesto que la época de migraciones con motivaciones políticas ha resultado en no tener fin, pero se realizó a partir de premisas anacrónicas. En efecto, éste nunca fue un país de grandes inmigraciones. Después de la declinación de Potosí a principios del siglo XVIII, la venida de grupos españoles descendió bruscamente y la cantidad de esclavos negros importados durante la colonia nunca fue muy grande, aunque quedan miles de sus descendientes como quechuaparlantes y conservando su identidad en comunidades cerradas de la región de los Yungas de La Paz. En el siglo XX, Bolivia había acogido a pequeños grupos de judíos europeos y, al cabo de una década, a algunos de sus perseguidores nazis y a un número mayor de coreanos y japoneses, todos los cuales se distinguieron en diferentes actividades económicas y conservaron su identidad social; pero ninguna de estas migraciones había traído consigo el gran proyecto económico

70 Un estudio más completo de los documentos y artículos de prensa sobre este tema se encuentra en *Documents on Colonialist Export from South Africa to South America*, (Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Junio de 1977).

que concurrió a la gran debacle sudafricana. Fue esto lo que convirtió en caso cómico a una tragedia potencial, la magnitud de las ambiciones del régimen hizo que el fracaso las muestre más dañinas de lo que podrían haber sido. Empero, cuando el caso ya era público, el gobierno de Banzer estaba más preocupado por la consecuencias que tendría la elección de Carter como presidente de EE UU, cuya administración de hecho afectó a su régimen mucho más rápida y severamente que a cualquier otro gobierno del hemisferio.

La adopción de los derechos humanos como aspecto fundamental de la política exterior norteamericana hacia el Tercer Mundo señaló un viraje decisivo en las relaciones entre Washington y La Paz. Evidentemente, no hay por qué creer la retórica de esta política o imaginar que el propio Carter, Linowitz, Vance o Brezinski tenían una gran afinidad con el liberalismo para aceptar que su errático afán por lograrlo contribuía a romper la hegemonía estadounidense en diversas zonas importantes. El caso más asombroso seguramente fue Irán, pero América Latina fue la región más consistentemente afectada. En Centroamérica, a Somoza se le privó de todo el apoyo que necesitaba para resistir a los sandinistas en la guerra civil de 1978-79, Guatemala fue puesta en cuarentena y el derrocamiento del régimen del general Romero en El Salvador (octubre de 1979) fue impulsado activamente y sus consecuencias fueron infinitamente, más desastrosas de lo que el Departamento de Estado había podido suponer en ese momento. Sólo la firma del tratado del Canal de Panamá en septiembre de 1977 dio un resultado que se aproximaba a los objetivos de esta política. A diferencia de los casos de Corea del Sur, Indonesia y Filipinas, las dictaduras de Sudamérica fueron presionadas para poner límite a sus excesos, modificar sus métodos y actuar con un mínimo de liberalismo. Esto se alcanzó en los casos de Argentina y Chile con un estallido de beligerante nacionalismo; a Chile se le prestó especial atención por un tiempo, al menos por la fina arrogancia de su Policía Secreta (DINA) en el asesinato de Orlando Letelier –embajador de Allende en EE UU– y de una colega norteamericana en Washington; un hecho que provocó la difusión del importante papel que la administración de Nixon había desempeñado en el golpe de 1973. El gobierno brasileño reaccionó con menos acrimonia, pues estaba ya embarcado en un proceso de apertura extremadamente graduada, luego de muchos más años de indisputable control. Bolivia, por otra parte, no sólo representaba un poder regional mucho menor, sino también era muchísimo más vulnerable en términos económicos. Con una pérdida tangible de dinamismo interno y de unidad –pero no al punto de permitir que una política de moderación auspiciada por EE UU exceda los límites cuidadosamente controlados

en la buscada "redemocratización", el régimen de Banzer resultaba ser un objetivo relativamente fácil para la política de los derechos humanos. Esto, sin embargo, no era garantía alguna de éxito, pues a lo largo de los cinco años siguientes el Departamento de Estado se vio continuamente obligado a intervenir en los asuntos internos bolivianos a fin de sustentar una política que inicialmente fue marginada por el propio Carter y luego completamente invertida (con excepción de Polonia y Afganistán) por Reagan. Esto se debió en parte a que la redemocratización en Bolivia se mostraba persistentemente vulnerable y en parte al surgimiento de un nuevo factor de complicación: la cocaína.

El primer paso para persuadir a Banzer de que considere un retiro gradual fue tomado por el secretario de Estado Adjunto, Terence Todman, que visitó La Paz en mayo de 1977 y sostuvo "conversaciones secretas" con el presidente. Todman había escuchado las demandas que organizaciones de derechos humanos le presentaron informalmente, pero parece que no pudo hacer demasiados progresos, ya que las actividades del gobierno no variaron y Banzer reconfirmó que las elecciones no se realizarían hasta 1980. Con todo, la presión norteamericana a través de su embajada en ese período probablemente habría convencido a Banzer de que un cambio de táctica no perjudicaba necesariamente su estrategia más amplia. A principios de septiembre, viajó a Washington para asistir a la firma del tratado del Canal de Panamá y conversar con Carter. Parece que esta reunión fue decisiva, ya que el 30 de septiembre el presidente declaró que probablemente se adelantarían las elecciones. Esta fue la primera vez en tres años que se había admitido tal alternativa y la razón fue anunciada por la mayor preocupación de Banzer: "nosotros deseamos que las fuerzas armadas, en algún momento, se liberen de su responsabilidad. Responsabilidad nada más, porque prácticamente tenemos miles y miles de civiles cooperándonos. Es por eso que queremos que las FF AA se retiren en el momento oportuno y no cuando estén desgastadas por el ajetreo político... Si mañana o pasado entramos en un carnaval político, entonces no habrán elecciones".[71]

No importa cuán velada fuera, tal información modificó el ritmo de la vida pública completamente. Un rápido recorrido por las guarniciones garantizó el apoyo para tal movida, cuyo éxito ahora dependía casi enteramente de contener la movilización popular. El 9 de noviembre, Banzer anunció que las elecciones se llevarían a cabo en julio del año siguiente, aunque no tomó nin-

71 Presencia, (La Paz), 31 de septiembre de 1977.

guna medida para levantar las restricciones que dificultaban la campaña política que él había declarado prácticamente abierta. Esto no resultaba sorprendente; las últimas elecciones patrocinadas por militares para reemplazar un régimen institucional fueron en 1940. No tenían experiencia en los problemas tácticos que esto conllevaba, ni un sistema establecido como por ejemplo El Salvador o Guatemala, donde los militares podían garantizar un resultado aceptable mientras permitían formalmente la competencia abierta. Consecuentemente, los nueve meses que siguieron al anuncio de los comicios electorales estuvieron caracterizados por esfuerzos mal organizados y frenéticos para obtener una victoria a toda costa, sin mucha preocupación por los efectos más amplios de tan torpe manipulación. Como declaró hacia el final de la campaña: "...Propiciamos el continuismo y nos satisface, porque si recién hemos comenzado con la tarea del desarrollo económico, es lógico que continuemos con la obra iniciada".[72]

Quizás la única acción perspicaz de Banzer en su afán por asegurar su continuismo fue el no presentarse como candidato. El 6 de diciembre, su ministro del Interior, general Juan Pereda Asbún fue declarado "candidato del nacionalismo" con pleno apoyo del gobierno y de las FF AA. En realidad, no era exactamente el caso, ya que el ejército no estaba nada complacido ante la perspectiva de que un oficial de la fuerza aérea se hiciera cargo del poder, y se había estado estudiando minuciosamente en algunos cuarteles la candidatura de Alberto Natusch Busch como una alternativa.[73] La preferencia de Banzer por Pereda para ser su sucesor era sorprendente, ya que era un orador extraordinariamente deficiente –experimentaba gran dificultad en la pronunciación de la única palabra que no podía admisiblemente omitirse de sus anodinos discursos: constitucionalización– y casi tan carente de carisma como es posible serlo sin pertenecer al servicio diplomático británico. Sus cualidades eran, sin embargo, excelentes para un hombre a quien podía entregársele el poder formal sin esperar que lo maneje independientemente. Cruceño y por mucho tiempo uno de los acólitos más fieles de Banzer, Pereda evidentemente no había sido elegido como un sucesor institucional genuino sino como "testaferro" interino, de modo que Banzer mismo pudiera seguir dirigiendo el país por detrás del trono. Tanto la estrategia como la persona elegida para llevarla a cabo resultaron calamitosas, pero evidentemente esto no era previsible a fines de 1977; y una vez que se

72 Citado en: Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia: *El fraude electoral: un atentado contra la voluntad popular*, La Paz, 1979, p. 31.

73 *Latin American Political Report*, Londres, 10 de febrero de 1978.

había dado el paso, el Ejército se lanzó detrás de Pereda y de la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP) creada para realizar la campaña.

Luego de anunciar la candidatura oficialista de Pereda, Banzer se apresuró a reducir las restricciones en vigor desde agosto de 1971 y a sepultar los decretos de noviembre de 1974. El 21 de diciembre anunció oportunamente una amnistía tan limitada que ponía en seria duda el regreso al país de cualquier opositor genuino, ni qué decir de su participación en las elecciones. La medida prohibía expresamente el retorno de 348 "disidentes políticos", incluyendo a Juan Lechín, Marcelo Quiroga, Hernán Siles Zuazo y muchos militantes de izquierda, así como de dos niños de ocho y doce años, hijos de una persona que había sido asesinada por la policía varios años antes y de una serie de personas a quienes se les hizo el dudoso honor de consignar sus nombres dos veces en la lista.[74] En términos reales, la amnistía se traducía en que 33 personas fueron liberadas de la prisión y 19 de ellas fueron enviadas ajuicio y ninguna despedida por actividades políticas o sindicales, incluidos los 950 mineros despedidos después de la huelga de 1976 tenía derecho a la reincorporación.

La respuesta popular a esta tosca maniobra cobró una forma inesperada que pronto resultó insostenible. En lo que parecía una acción desarmada para el feriado de Navidad, que no podía esperar demasiada publicidad, el 28 de diciembre las esposas de cuatro mineros exiliados (Aurora de Lora, Nelly de Paniagua, Angélica Flores y Luzmila de Pimentel) ingresaron a las oficinas del arzobispo Manrique con sus hijos y se declararon en huelga de hambre indefinida hasta que sus demandas de amnistía general e irrestricta, trabajo para todos los despedidos y el retiro de las tropas de las minas sean atendidas en su totalidad.[75] Al principio, la huelga de hambre no parecía diferenciarse de cualquier otra protagonizada por individuos desesperados por una aflicción particular, pero las circunstancias hicieron que, en el curso de días, se transformara en movimiento de masas central en los eventos nacionales. El 31 de diciembre, un segundo grupo formado por representantes de la APDH, la Universidad y por la Unión de Mujeres de Bolivia (UMBO) comenzó el ayuno en las oficinas de Presencia, reemplazando a los niños que habían caído enfermos. El editor del periódico, Huáscar Cajías, fue menos que cordial en su reacción, pero difícilmente podía expulsar a los huelguistas. Desde ese momento, la huelga se difundió rápidamente; al cabo de seis días se plegaron 61 personas; a los

74 La mejor lista está en *El fraude*, pp. 95-97.

75 Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia: *La huelga de hambre*, La Paz, 1979, p. 19-76.

catorce días unas quimientas personas participaban del ayuno y para el final (18 de enero) habían más de mil personas en huelga de hambre en todas las principales ciudades del país y muchas otras más prestaban apoyo activo. El 6 de enero, el régimen –que había puesto a las FF AA en "estado de emergencia" y se había negado tajantemente a reunirse con el expresidente Luis Adolfo Siles, elegido como mediador por los huelguistas- organizó una contramanifestración a la que todos los funcionarios públicos fueron obligados a concurrir. Para aquellos que simplemente salieron a admirar las habilidades oratorias de Pereda, la torrencial lluvia que persistió a lo largo de todo el día resultó ser mucho más inconveniente que para los miles de servidores civiles tiranizados, quienes agradecidos y no muy calmadamente abandonaron la plaza Murillo. La manifestación de apoyo masivo al gobierno y a su masculllante candidato se disolvió ante los ojos de Pereda y tuvo que ser reconstruida para la prensa por medio del empleo creativo de la fotografía. El 16, los coordinadores del régimen en La Paz declararon una huelga de 24 horas contra el ayuno –una medida que se extendió al *lock out* general-, la policía prohibió el tránsito de vehículos en la ciudad. Esto se convirtió en una victoria pírrica, cuando las bases de los comités sindicales anunciaron que su respaldo al paro era para expresar solidaridad con la huelga de hambre y no para repudiarla. Varias comisarías de policía fueron atacadas y sus agentes mataron a tiros a un escolar. Ese mismo día, Banzer había comenzado reacíamente a negociar con los representantes de los huelguistas, pero en vista de la intransigencia y de la pérdida del orden en las calles, optó por suspender las conversaciones y recurrir a la fuerza. Temprano el 17, la policía allanó una serie de lugares ocupados por los huelguistas. En La Paz, unos cincuenta hombres fuertemente armados embistieron contra las puertas de Presencia en formación militar y a gritos ordenaron a los huelguistas que desalojaran; sólo pudo detenerlos una joven médica que dijo al encolerizado comandante que ella los responsabilizaría totalmente, a él y a sus superiores, por cualquier daño que sufriera la gente que no había ingerido otra cosa que agua durante veinte días y que no podía ser trasladada sino en ambulancias. Luego de una espera, a lo largo de la cual el comandante conferenció con el ministro y los huelguistas pronunciaron un apenas perceptible "Viva mi Patria Bolivia" como redención ante una audiencia de ahora avergonzados policías, se llamaron ambulancias y los "prisioneros" fueron conducidos a clínicas de la ciudad.

El empleo de la represión sólo logró aumentar la popularidad y reivindicar la causa de aquellos a quienes estaba dirigida. Bajo las nuevas reglas del juego, Banzer no podía esperar beneficiarse con la perspectiva de individuos

que debilitados por el hambre estaban siendo maltratados por tropas con cascos y chaquetas antibalas. Además, equipos voluntarios estaban preparados para sustituir a aquellos que eran dados de baja. Después de una tormentosa reunión de gabinete, el presidente habló por la televisión a mediodía del 17 para declarar una amnistía total y la "solución de la huelga". Sin embargo, los que estaban realizando ayuno se negaron a suspenderlo mientras no recibieran garantías escritas de que no serían perseguidos, lo cual fue obtenido del régimen sólo después de otros días más. El acuerdo final accedía a todas las demandas, excepto a la de retirar las tropas de las minas. Éste era un asunto clave, pero era evidente que la huelga no podía continuar sin pérdidas de vidas y ya habían conseguido todo lo que razonablemente se podía esperar con tal táctica. Fue levantada al anochecer del 18. Aunque sólo se vería clara algún tiempo después, esta huelga de hambre fue el factor decisivo para poner fin al banzerato y sentar las bases de la movilización que se dio a lo large del siguiente periodo.

A partir de enero, el régimen se vio lanzado a la defensiva y obligado a una manipulación crecientemente frenética para controlar las elecciones. En una reunión de 160 oficiales de alto rango a principios de abril, Banzer intentó obtener apoyo para la suspensión de los comicios o, si eso fracasaba, para el lanzamiento de su propia candidatura.[76] Esto quedó en nada porque una mayoría de los cuerpos de oficiales consideraba que tan clara revocación de la apertura provocaría aún mayor oposición. Así pues, 35 personas fueron arrestadas por realizar una manifestación por el Día del Trabajo y la Universidad de San Andrés clausurada por un mes a raíz de las protestas estudiantiles ante la negativa del régimen a respetar la autonomía. La campaña electoral prosiguió.

Al garantizarse la amnistía total el 20 de enero y otorgarse libertades sindicales cuatro días después, Bolivia experimentó un brusco trastorno político, por el cual no sólo las agrupaciones y partidos políticos que habían existido antes de 1952, sino también aquellos que habían madurado durante el gobierno de Banzer, salieron a la luz e iniciaron una vertiginosa campaña para recuperar a su electorado, formular políticas para la nueva era democrática y ajustar cuentas con sus enemigos. En la izquierda se esperaba que el MIR captura un gran apoyo de la clase media urbana desencantada por el manejo económico de Banzer y con la política entreguista de su gobierno. El MIR había virado paulatinamente a la derecha en el curso de los siete años anteriores, al cam-

76. *El fracade*, p. 22.

biar su inicial tenor marxista y el énfasis en la lucha armada por un populismo beligerante y por la creencia de que representaba una segunda generación del MNR. Esta evolución hacia una social democracia formida limó la popularidad del MIR con la clase obrera y dado que prácticamente carecía de seguidores en el campo, para acrecentar el máximo sus posibilidades, se vio obligado a participar en un frente electoral. El punto de convergencia para ese frente fue la figura de Hernán Siles Zuazo, cuyo MNR de Izquierda (MNRI) no tenía muchos años de vida y había captado los suficientes seguidores del viejo partido para oponerse a Víctor Paz. El MNRI era un partido convencional de la social democracia latinoamericana que atrajo a amplias corrientes de la izquierda del MNR que todavía no desertaron al PRIN, MIR o al PS y que se consolidaba gracias a sus viejos apegos clientelistas y a su defensa del historial del MNR hasta 1960. En suma, apenas si era un partido de "izquierda", pero presentó una imagen reformista y un eje para el canto antimilitarismo. Una vez que estuvo claro que Paz no podía persuadir a Siles de reintegrarse al sector de su partido, el MNRI logró el apoyo del MIR, del PCB promoscovita y del MRTK de Genaro Flores, para formar la Unidad Democrática y Popular (UDP) como frente electoral de centroizquierda.

El programa tan blando de la UDP, el propio historial menos que radical de Siles y la presencia del PCB aseguraban que gran parte de la izquierda no le brindaría apoyo, pues para ella resultaba un frente reformista incapaz de proporcionar una solución radical a los problemas del país. El POR estaba solo en la campaña por el voto en blanco, debido a lo cual no postularía ningún candidato, pero instaría a los votantes a introducir en las urnas una papeleta incluyendo los principales puntos de su programa. Empero, por entonces el POR estaba profundamente dividido y sus ataques al "cretinismo parlamentario" no tuvieron mucho efecto en los círculos populares. El resto de la izquierda cayó en dos grupos amplios que compitieron en las elecciones. El primero era el sector del PS de Marcelo Quiroga, posteriormente denominado PS-1 al separarse del ala centrista liderizada por Guillermo Aponte, que se había plegado a la UDP. Quiroga postuló solo con un programa que era distintivamente más antimilitarista y radical en problemas económicos que aquel de la UDP, pero que dependía mucho más de la capacidad retórica y de la popularidad de su líder que de una militancia organizada. Mucho más poderosa, la segunda fuerza era el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), alianza del PRIN, que seguía siendo más una propiedad personal de Lechín que un partido político, pero que aún tenía cierto peso en los círculos sindicales, el tan expandido y resucitado PCML, la Vanguardia Comunista del POR de Filemón Escóbar, el

POR (Vargas) y el heredero político del ELN, el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRTB), cuyo apoyo popular era mínimo pero que ciertamente había evolucionado del puro foquismo del que estaba imbuido a fines de la década de 1960 y gozaba de cierta simpatía de la izquierda por su nexo con esa estirpe. Por lo tanto, la izquierda estaba dividida con la UDP claramente a la delantera y con posibilidades de obtener los votos tácticos de muchos seguidores del FRI y del PS-1. Aunque el FRI dio el osado paso de nominar al líder campesino maoísta Casiano Amurrio, exvicepresidente de la Asamblea Popular, y a la carismática Domitila Chungara como sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, el efecto de esta fórmula en el campo fue efectivamente apocado porque el MRTK se había unido al bloque de la UDP y a aquellos campesinos inclinados por el voto de protesta que tenían una alternativa sectorial más auténtica en el MITKA, que postulaba a Luciano Tapia Quisbert.

El voto campesino obviamente habría de ser decisivo en el resultado de cualquier elección honesta, pero las simpatías del campesinado en su conjunto estaban profundamente divididas, ya que ni la UDP ni el FRI tuvieron el tiempo y los recursos para emprender una campaña efectiva tanto contra Pereda como contra el MNR de Paz. Este partido ahora llamado MNR-Histórico seguía siendo quizás el partido más popular en el campo. Para muchos campesinos, la participación de Paz en el golpe de 1971 era desconocida o menos importante que el recuerdo de la reforma agraria, y pese a que el nombre de Pereda cubría completamente miles de paredes y llenaba las emisiones de radio en muchas partes del campo, Paz era la figura más reconocible e históricamente identificable entre los candidatos presidenciales. Por contraste, Siles nunca había sido muy estrechamente identificado con la reforma agraria y ahora tenía también la desventaja de vérselas con reiteradas acusaciones de "comunista" por su acuerdo con el PCB. La alianza del MNR con el PRA de Wálter Guevara, por otra parte, también garantizó simpatías de aquellos sectores deseosos de ver una sólida alianza con Washington, garantías para el capital privado y la continuación de un crecimiento económico sobre la base de la exportación sin las restricciones y peligros de la dictadura. Se podía esperar que Pereda obtuviera mucho apoyo de Santa Cruz, pero su condición de marioneta lo privó de lograr el monopolio de la simpatía del conservadurismo tradicional. Menos peligrosa le resultaba la competencia del segundo candidato militar, general retirado René Bernal Escalante, un reaccionario más bien excéntrico, populista, de sangre aymara y origen humilde que se postulaba para la restauración del populismo barrientista y estaba respaldado por el PDC, que no pudo encontrar

ningún candidato adecuado entre sus miembros y todavía era incapaz de anular su asociación con los militares establecida en 1964 y tan manifiestamente decisiva para la protección de su ala derecha. Así, cuando menos en teoría, las elecciones del 9 de julio de 1978 fueron peleadas entre las fuerzas anotadas en el cuadro 9.

La posibilidad de que las diferencias políticas entre los diversos partidos y frentes adquirieran un interés puramente académico aumentó a lo largo de la campaña, a medida que el gobierno se lanzaba entusiastamente a la tarea de proporcionar a cualquier costo la victoria a Pereda. La primera señal de la preparación de un fraude fueron cifras presentadas por la Comisión Nacional Electoral (CNE) para el registro de electores. Puesto que para la inscripción se necesitaba presentar ya sea la libreta del servicio militar, el carnet de identidad, el certificado de nacimiento o matrimonio o una declaración firmada por, al menos, dos garantes –documentación que se estima sólo posee la tercera parte de la población rural–, la cifra global de la CNE de 89 por ciento de inscritos sobre una cifra ya observada de 2,4 millones de electores aptos era increíblemente elevada. Por lo tanto, resultaba que los electores inscritos en Cochabamba y Santa Cruz, zonas de apoyo para Pereda, excedían el 102 por ciento de ciudadanos aptos para votar. En varios distritos electorales, el control gubernamental de las listas produjo tendencias demográficas espectaculares: la población de Yata, que era de 32 personas, resultó con trescientos electores; en Florida, cien personas se convirtieron en trescientos electores, y a Nazareth, una guarnición de frontera habitada por una docena de oficiales y un regimiento de conscriptos no aptos para votar por ser menores de 21 años, se le confirió el honor de incluirla en el registro de electores por primera vez y con la abultada cantidad de seiscientos electores. En otras zonas donde el apoyo a la oposición era sólido, el registro fue enormemente obstaculizado; mencionaremos sólo dos ejemplos: la mina Bolívar que no presentaba ningún inscrito y Guayaramerín, fuerte del MNRH, cuya población electoral fue misteriosamente excluida de las listas después de haberse cumplido todos los requisitos burocráticos para su registro. Aparentemente, el MNRH fue el principal objetivo de esta práctica, pero la CNE/UNP, habiendo incrementado el número de votantes de 1,8 millones a 2,4 millones a tres semanas de las elecciones, tenía una garantía de acero contra todos sus contendientes.[77]

Una vez iniciado el proceso electoral, los maestros fueron obligados bajo amenaza de violencia, a concurrir con sus alumnos a las marchas de respaldo a

77 *Ibid.*, pp. 35-40; *Presencia*, (La Paz), 20 de junio de 1978.

Pereda, las cuales fueron muchas ya que Pereda contaba con el transporte de la FAB (Fuerza Aérea Boliviana) para viajar de un lugar a otro del país. Por otra parte, frecuentemente las reuniones de la oposición fueron atacadas por civiles con grandes provisiones de gases lacrimógenos, y en algunas ocasiones por la Policía uniformada. La UDP fue multada con 2.500 dólares por colocar su propaganda en las sagradas paredes blancas de la ciudad de Sucre y se le dio un término de 48 horas para pagar, en tanto que el país entero estaba empapelado con afiches ensalzando las virtudes de Pereda. A Paz y a Siles se les impidió asistir a sus proclamaciones electorales en Beni y Santa Cruz bloqueando las pistas de aterrizaje y los representantes del gobierno local lamentaron no poder garantizar la seguridad de los candidatos en lugar de ejercer su autoridad y ordenar el retiro del insignificante tractor o nivelladora que obstruía las pistas. En Guayaramerín, el líder de la juventud del MNRH fue secuestrado y posteriormente encontrado colgado. Con mayor frecuencia los opositores eran simplemente apaleados.

Los medios de comunicación fueron dirigidos con mucha torpeza a favor de Pereda. Aunque las estaciones mineras y otras pocas difundían comentarios generalmente objetivos, muchas otras radiodifusoras fueron sobornadas para favorecer al "candidato del nacionalismo". Los programas del canal de televisión estatal fueron especialmente parcializados y el acceso a la oposición estaba estrictamente limitado; la única alocución electoral de Marcelo Quiroga fue cancelada por "razones técnicas" cuatro días antes de la fecha fijada para su transmisión. Con excepción de Presencia, los periódicos estaban directamente predispuestos a favor del oficialismo, o lo suficientemente amedrentados, sea por amenazas directas o por el empleo político de las cuentas de publicidad para limitar su cobertura. Empero, fue en el mecanismo del propio voto donde el gobierno invirtió mayor esfuerzo para llevar a Pereda al poder. Bajo el sistema imperante, la votación se hacía con papeletas en diferente color y cada candidatura era responsable de entregar sus papeletas a los colegios electorales. Dado que Bolivia tiene pocas carreteras y éstas son totalmente controladas por el tránsito en las trancas de cada pueblo, la confiscación de las papeletas de la oposición fue una tarea fácil y se dio en gran escala durante la semana anterior a las elecciones; en algunos puestos electorales simplemente no había papeletas de la oposición. En algunas partes –Apilla Pampa (Cochabamba), Concepción (Santa Cruz), Mineros (Santa Cruz)– no se produjo votación alguna el 9 de julio; pero la mayor parte del fraude identificable tomó la forma de relleno de urnas, cambio o simplemente "pérdida" de éstas. Uno de los casos más notables fue el hundimiento de varias urnas en

el lago Titicaca, de lo cual se informó inmediatamente al bastante atareado equipo de observadores internacionales.[78] En aquellos centros donde los observadores de la oposición no estaban intimidados, o resultó difícil "arreglar" el conteo o la UNP fue fácilmente sobrepasada por la UDP. El cómputo de sesenta por ciento del voto de las provincias de La Paz dio a Pereda 15.223 votos contra 139.236 de Siles y 12.847 de Paz. Sobre esta base, la UDP habría obtenido un total de 232.000 (74,9 por ciento) en el departamento contra 25.371 votos (8,2 por ciento) para la UNP; sin embargo, los resultados oficiales dieron a Pereda 194.946 votos (52,9 por ciento), bastante más que a Siles, quien recibió 124.192 (33,7 por ciento).[79] En ninguno de los departamentos la concurrencia fue inferior al 84 por ciento, lo cual resulta milagroso en un país con tan pasmosas comunicaciones y ni siquiera puede explicarse por la provisión de cerveza, sándwiches y transporte gratis en los camiones del ejército para aquellos campesinos dispuestos a votar por el general. En Santa Cruz, la concurrencia fue de un impresionante 100,9 por ciento, pero nunca comparable al 104 por ciento logrado en el departamento de Chuquisaca.[80] Al otro extremo de la escala, el resultado final en San Luis (Tarija) otorgó a Pereda trescientos votos, mientras que a Víctor Paz solamente dos, escamoteándole el apoyo no sólo de su ciudad natal sino también de una buena parte de su familia, que no es pequeña y cuya presencia en los puestos electorales el día de la votación había sido notoria.

Así, el fraude fue tan flagrante que fracasó en su mismo propósito. La FSTMB amenazó con una huelga si no se investigaba; el PDC, MNRH y la UDP acordaron no reconocer el resultado de las elecciones y Siles se embarcó en su tradicional huelga de hambre. El equipo internacional fue unánime en la opinión de que había habido una extendida conducta inmoral. Banzer, que aún antes de los comicios había desechado toda esperanza en Pereda y consideraba la realización de las elecciones como una causa perdida, puso toda la distancia posible entre él y la UNP y parecía estar dispuesto a sacrificar a su heredero. Por su parte, Pereda, que se declaró triunfador natural bastante antes de que se concluyera el escrutinio, fue persuadido por sus asesores de robar una marcha a la oposición y pedir a la CNE una anulación debido a las irregularidades, aunque el hecho de que éstas se realizaron para favorecerlo no mereció gran

78 *El fraude*, pp. 58-62.
79 *Ibid.*, pp. 72-74.
80 *Ibid.*, p. 76. En Carmen Alcoreza y Xavier Albó: *1978: El nuevo campesinado ante el fraude*, La Paz, 1979, se brinda una relación detallada del fraude electoral en el campo.

consideración. Confrontada a un repudio general por una práctica diseñada inicialmente para impresionar, esto era prácticamente lo único que le quedaba a la UNP por hacer. El 19 de julio, la propia CNE que estaba en el núcleo del fraude complació ese pedido debidamente. Ese mismo día, Banzer marcó su completa ruptura con Pereda al anunciar que en vista de que la CNE no podía declarar un ganador, él entregaría el poder a una junta militar el 6 de agosto. El 20, completamente consciente de que sin victoria electoral era de mínima utilidad para Banzer, Pereda visitó las guarniciones de Cochabamba y Santa Cruz. Al día siguiente se declaró en rebelión "contra el comunismo internacional" e inmediatamente recibió el apoyo de los Rangers y de la FAB. Siguieron veinte horas de indecisión, ya que Banzer intentó sustentarse con la lealtad de la guarnición de La Paz, pero no pudo lograr mucho para limitar el apoyo al golpe declarado fuera de la capital. Al final, la FAB amenazó con bombardear el Palacio Quemado y esto obligó a Banzer a ceder utilizando la consabida fórmula de evitar un derramamiento de sangre entre hermanos. Luego de hacer un largo y lacrimoso discurso se retiró a su domicilio sin molestias. Durante tres horas, una junta de comandantes tomó el poder hasta que Pereda llegó para ponerse la banda presidencial finalmente obtenida a través del método preferido por su fraternidad.

Cuadro 9
Elecciones del 9 de julio de 1978

Fórmula	Principales partidos	Candidatos
1. Unidad Democrática y Popular (UDP)	MNRI MIR PS - Aponte MRTK MIN PCB	Hernán Siles Zuazo Edil Sandoval Morón
2. Unión Nacionalista del Pueblo (UNP)	MNR - Rubén Julio PSB PRA - Gamarra	Juan Pereda Alfredo Franco Guachalla
3. Alianza Democrática de la Revolución Nacional (ADRN)	MNRH PRA	Víctor Paz Estenssoro
4. Partido Demócrata Cristiano (PDC)	PDC PRB	René Bernal Escalante Remo Di Natale
5. Frente Revolucionario de Izquierda (FRI)	PRIN PCML PRTB VCPUN	Casiano Amurrio Domitila Chungara
6. Partido Socialista (PS)	PS - Quiroga	Marcelo Quiroga Carlos Gómez
7. MITKA	MITKA	Luciano Tapia Isidoro Copa

Juan José Torres y su esposa en agosto de 1971, días antes de su derrocamiento.

Mario Gutiérrez (PSB), Hugo Banzer y Víctor Paz (MNR), aliados en 1971.

Militares en la plaza Murillo durante el golpe de 1971

Dirigentes del Comité de Defensa de la Democracia en la transición de 1978-1980.

7. En pos de la democracia (1978-1980)

A la caída de Banzer, Bolivia se precipitaba hacia un caos político. Entre julio de 1978 y julio de 1980 se realizaron otras dos elecciones generales; cinco presidentes subieron al poder (ninguno de ellos como resultado del triunfo electoral) y del conjunto de golpes de Estado en constante preparación sólo cuatro llegaron a declararse realmente; uno fracasó y tres prosperaron. Esta inestabilidad crónica reflejaba tanto la incapacidad de los constitucionalistas para arrebatar la iniciativa de manos de aquellos que querían mantener el banzerato como la de las fuerzas de la derecha para suprimir completamente la apertura. Si bien el golpe del 17 de julio de 1980 del general García Meza, en primera instancia, parecía haber resuelto el problema claramente a favor de la dictadura, ese régimen también habría de desgastarse en el curso de un año. Podemos, empero, dividir los cuatro últimos años del periodo que estamos estudiando en dos fases –después de julio de1980 la competencia por el poder se transformó en una aventura casi exclusivamente institucional–. Hasta julio de 1980, la misma crisis estructural se manifestó en enfrentamientos mucho más abiertos entre fuerzas políticas divididas de las principales clases sociales.

La existencia misma de la democracia constitucional estaba en el núcleo del conflicto, en parte simplemente porque era aborrecida por poderosos sectores de la derecha y en parte porque las formaciones políticas de mayor transcendencia no brindaron nada que se parezca a una alternativa coherente al modelo de Banzer. La natural competibilidad entre partidos políticos, que pronto degeneró en un sectarismo empantanante, reflejaba no solamente la falta de una tradición parlamentaria nativa y la ambigüedad heredada de la

época del MNR, sino también la ausencia de confianza y unidad en la clase gobernante. El bloque dominante eludió el mínimo riesgo que implicaba un frente popular (UDP), cubrió sus aspiraciones patrocinando dos variantes de civilismo reaccionario (Víctor Paz y Banzer), ninguna de las cuales estaba lo suficientemente distanciada de las políticas de la última década como para atraer un respaldo mayoritario, y, sin embargo, se mostraba reacio aplegarse abiertamente a una dictadura en vista de las crecientes fisuras dentro de las FF AA y de la fortaleza defensiva del movimiento popular. La izquierda parlamentaria estaba menos dividida pero muy lejos de ser fuerte; la UDP no supo captarse la simpatía de una abrumadora mayoría porque estaba cada vez más inmersa en maniobras partidarias y desistió de realizar una movilización que hubiera podido exponer el equilibrio de fuerzas del que dependía la supervivencia del constitucionalismo. Consecuentemente, el frente popular encontró una apatía cada vez mayor en las masas, la cual en cierto modo se reflejó en el creciente apoyo al PS-1, pero se evidenció más en términos de un desencanto generalizado del parlamentarismo que en el número de votos. Las grandes movilizaciones populares de este período fueron contra la dictadura y contra las agresiones a la economía popular y no así para respaldar a frente político alguno. En todos los casos, se fue en pos de la causa constitucionalista disminuyendo los logros iniciales en las calles y en los centros de trabajo. Agotado y confundido, el pueblo otorgó una clara mayoría a la UDP en junio de 1980, pero no estaba en condiciones de resistir el golpe de García Meza que siguió a la victoria electoral.

El proceso de polarización que se prolongó durante estos dos años entre Pereda y García Meza no fue ni uniforme ni inexorable; fue seguido de cambios en el equilibrio de fuerzas tanto dentro del sector democrático y del autoritario como entre ambos. Empero, la confusión de este período fue permanentemente apuntalada por la crisis económica agravada por Banzer y sirvió para poner de relieve que las principales fuerzas en Bolivia seguían siendo los militares y la COB, no importa cuán divididas estuvieran internamente. La crisis del constitucionalismo no era, por lo tanto, meramente coyuntural, tampoco era un caso de haber calculado mal el momento, de malas políticas o de una incapacidad colectiva, sino el resultado de una estructura social que no otorgaba un mínimo de espacio a aquellos que querían mantener la división formal de poderes pero invertir el dominio de 150 años del Ejecutivo sobre el Legislativo. Estos objetivos no se logran de la noche a la mañana a fuerza de saber aprovechar buenas oportunidades o por cortesía de patrocinadores extranjeros más o menos benévolos. Ése es precisamente el caso de Bolivia y el

de un país económicamente atrasado pero políticamente avanzado; el constitucionalismo era débil no por incipiente –etapa que se estaba por alcanzar– sino porque nunca representó un medio adecuado de control para la clase gobernante como tampoco un principio histórico de libertades para las masas. Aquí, la distinción entre derechos democráticos limitados y todo el aparato del electoralismo es fundamental: mientras el sistema debe la fuerza de su mística a la incorporación de dichos derechos, éstos invariablemente se habían logrado a través de la acción colectiva y dentro de la órbita de una democracia popular directa y no del parlamentarismo. En este contexto, es posible concebir el proyecto de democracia formal como una especie de opción táctica para ambas partes, la cual surge a fines de la década de 1970 precisamente porque los militares habían perdido su dinamismo político y la clase obrera organizada todavía estaba demasiado desorientada para brindar una alternativa coherente. Había vacío político.

Negociando una salida

El golpe de Estado es un mecanismo político que a menudo se presta al personalismo. No cabe duda de que el golpe de Pereda contra el que por mucho tiempo fuera su jefe se debió a que representaba un obstáculo para la realización de sus ambiciones. Sin embargo, Pereda no era en absoluto un caudillo, ni siquiera de esos astutos que actúan entre bastidores; y su ascenso al poder obedecía en gran parte a la creencia, en círculos militares, de que Banzer había estafado a un heredero que, por todas sus manifiestas deficiencias, era la persona obvia para gobernar después del estropeado ejercicio de control que requirió el fraude. Ningún sector de las FF AA concebía una inmediata retirada a sus cuarteles. Casi todos sin excepción en el cuerpo de oficiales pensaban que era esencial otro período de gobierno militar; algunos simplemente esperaban perpetuar el banzerato con o sin su líder, mientras que otros procuraban un ordenado y mesurado repliegue.

Aparte de prevenir la amenaza del comunismo internacional, Pereda nunca supo con certeza cuál había sido la razón de ser de su golpe. En un primer discurso afirmó que él: "...representaba la voluntad colectiva...", pero se abstuvo de reclamar para sí abiertamente el triunfo en las elecciones.[1] Durante los primeros quince días de su gobierno, parecía que el nuevo presidente pre-

1 *Latin America Political Report*, 28 de julio de 1978.

tendía simplemente retocar y renovar la dictadura de Banzer. Declaró que sería una pérdida de tiempo realizar nuevas elecciones porque los perdedores siempre alegarían fraude; apresó a cerca de cien opositores y envió tropas al municipio yungueño de Coripata, donde una veintena de campesinos fueron muertos después de haber realizado manifestaciones en contra del aparato montado para el fraude electoral. El gabinete era claramente de molde banzerista, incluía al anciano pirista y colaborador de Barrientos, Ricardo Anaya, como canciller; a Román Vaca, figura clave de la oligarquía cruceña, y al militar de línea dura Faustino Rico Toro como ministro del Interior. Rico Toro provenía de uno de los grupos ligados al movimiento generacional pero no estaba tan estrechamente conectado con sus políticos, ni dispuesto a tratar el tema de una mayor distensión.

Sin embargo, ni las condiciones externas ni las internas eran propicias para un continuismo blando. Estados Unidos no tardó en reaccionar, pues el golpe constituía una seria vergüenza para la administración de Carter que había sustentado las elecciones como el primer triunfo de su política de derechos humanos en la región. Al embajador Paul Bocker, quien había sentado quejas contra el fraude, se le ordenó cortar todo contacto con el régimen de Pereda. El Departamento de Estado declaró que el levantamiento militar era un "serio revés al proceso democrático" e instó a Pereda a "tomar medidas inmediatas para restablecer un proceso genuino de desarrollo democrático". Bocker dejó de respaldar las solicitudes de cooperación y Pereda fue informado de que Bolivia perdería setenta millones de dólares si no fijaba una fecha para nuevas elecciones.[2] El flamante presidente se apresuró a anunciar que probablemente se realizarían nuevamente elecciones en 1980 y que sería imposible llevarlas a cabo en 1979 porque ese año se celebraba el centenario de la guerra del Pacífico, para lo cual Bolivia precisaba de un gobierno fuerte y estable. Casi sin excepción, los partidos políticos demandaron otros comicios antes de que termine el año 1979; la FSB se sumó a la UDP en su insistencia a la convocatoria a elecciones en el curso de seis meses.

Aunque la UDP no inició movilización alguna en contra del fraude, pese a haber sido la principal víctima –la única acción concreta fue la huelga de 48 horas de la FSTMB–, la extraña unidad de los partidos civiles en torno a este tema profundizó las preocupaciones de muchos oficiales. Confrontados con la inactividad, por una parte, y con la oposición por la otra, varios sectores militares acumularon la confianza y el incentivo que les permitió

2 *Washington Post*, (Washington), 23 de julio de 1978.

presionar a favor del cambio. Luego de una visita a las principales guarniciones durante la primera semana de agosto, Pereda descubrió que aunque muchos habían respaldado o consentido su golpe como medida de emergencia, la oposición de EE UU y las demandas de los partidos políticos habían convencido a la mayoría de la necesidad de realizar otras elecciones; en la guarnición de La Paz, los ánimos estaban más caldeados que en ninguna otra debido a que estaba dominada por el movimiento generacional y amenazaba con publicar su documento exigiendo elecciones en seis meses si no se daban garantías inmediatas para nuevos comicios.[3] Por lo tanto, el 6 de agosto, Pereda anunció que las elecciones se celebrarían en 1980 y que él no se postularía como candidato. Liberó a todos los detenidos después del golpe y levantó el estado de sitio, lo cual permitía el restablecimiento de relaciones diplomáticas con EE UU. Así, aunque se había autootorgado dos años de reinado en contra de los deseos de la mayoría de los partidos políticos y de una poderosa minoría dentro de las FF AA, Pereda tuvo que reconocer el carácter interino de su régimen y se le impidió consolidar el continuismo. Comenzaba su periodo con una posición muy débil.

Esta situación fue rápidamente identificada por las fuerzas de oposición, que se agruparon exigiendo que el gobierno fije una fecha para otras elecciones antes del 9 de septiembre de 1978, a fin de que los comicios puedan tener lugar antes de julio de 1979. Pereda rechazó formalmente esta demanda pero fue obligado a conformar una comisión para estudiar el tema y mantener conversaciones con los principales partidos. Al mismo tiempo, revocó la Ley de Seguridad de Banzer, así como los decretos del servicio civil obligatorio en un afán por establecer su buena fe democrática y ganar el tan necesario espacio político. No lo logró y tan sólo a un mes de haber asumido el poder, tuvo que aceptar las demandas del sindicato de la prensa de hacer una promesa pública de que los militares no intervendrían en los medios de comunicación; el gobierno también fue obligado a "reconocer la justeza" de las reivindicaciones de la FSTMB en torno a un incremento del setenta por ciento en sus salarios, mientras que con la oferta de 35 por ciento se ponía en contra de los partidos involucrados. Además, el 2 de agosto, "Día del Indio", Pereda hizo una extraordinaria declaración admitiendo que Banzer, y no él, estaba a la cabeza del Pacto –un signo inequívoco de debilidad–. Con todo, esta concesión a la presión ejercida por la irreconstruida federación "nacionalista" no pudo asegurar una tregua con su antiguo patrón, quien

3 *Latin America Political Report*, 11 de agosto de 1978.

declaró que el "nacionalismo" del 21 de agosto de 1971 había dejado de predominar el 21 de julio de 1978, rechazó una oferta de hacerse cargo de la embajada en Buenos Aires y se movía libremente por el país para examinar las posibilidades de un retorno.

Confrontado con un movimiento popular que estaba recobrando vigor y que aún no podía ser reprimido sin exponerse a los peligros de otra ruptura con Washington y simultáneamente privado del apoyo del líder indisputable de la derecha militar, el régimen de Pereda se veía en apuros. A principios de noviembre, la situación se había agravado. Luego de aceptar finalmente la embajada de Argentina, Banzer regresó a Santa Cruz a los cuatro días de asumir su cargo y parecía dispuesto a ser protagonista de otro golpe. Los oficiales de menor rango pidieron y lograron que se nombrara un nuevo gabinete con mayor representación militar como medida defensiva. Empero, Pereda debilitó más su propia posición al cortar los suministros de gas a la Argentina y anunciar un nuevo convenio con Brasil, cuyos términos se consideraron tan perjudiciales para los intereses del país como aquellos propuestos por Banzer años atrás. Al mismo tiempo, en un esfuerzo por apaciguar a las fuerzas populares, Pereda prometió una reducción de sueldos en los cargos públicos superiores y una campaña contra la corrupción; luego visitó Santa Cruz para declarar que se depuraría la aduana para eliminar el contrabando, que según estimaciones del Banco Central alcanzaba los seiscientos millones de dólares anuales y se había convertido en una característica de la economía cruceña. En lugar de complementarse entre sí, tales medidas tuvieron el efecto de privar a Pereda de todo apoyo duradero o de la neutralidad. El desafío de Banzer recibió el vital respaldo de los mismísimos intereses regionales que habían aceptado su destronamiento cuatro meses antes, mientras que la UDP, viendo clara la oportunidad de reducir el régimen de Pereda a una mera empresa de control, convocó a una movilización de masas para el 24 de noviembre en demanda de elecciones para la primera mitad de 1979.

La acción de la UDP fue un ultimátum decisivo y sirvió como excelente pretexto al movimiento generacional para refrenar la reincidencia de Banzer. En un golpe bien planeado, los jóvenes comandantes desalojaron a Pereda al amanecer del 24 y lo reemplazaron por el comandante del Ejército, general David Padilla Arancibia, uno de los pocos oficiales de alto rango que habían ascendido de acuerdo al reglamento y no en virtud de favores políticos; era un institucionalista estricto en moral pero respetado y un hombre que estaba a favor de la pronta realización de elecciones, porque al igual que sus subalternos, deseaba que los militares se retiraran intactos y en servicio.[4] La manifestación se llevó a cabo como estaba planeada, excepto que ahora se celebraría el primer pronunciamiento del nuevo régimen sobre las elecciones del 1º de julio de 1979. Los elogios que recibieron de la dirigencia de la UDP tanto Padilla como los coroneles que lo promovieron a la presidencia fueron lo suficientemente generosos como para confirmar la sospecha popular de que el golpe había sido lanzado con el conocimiento previo del frente. Éste no habría de ser el único caso en que partidos civiles se apoyarían en la acción de las FF AA para que éstas les aseguren la consecución de sus objetivos, pero en ese momento las consecuencias a más largo plazo de tal dependencia no era tema de preocupación generalizada.

El régimen de Padilla fue el único desde 1964 que llegaría a finalizar un período que él mismo había fijado. Como declaró su líder en el primer discurso público, su objetivo fundamental era... "devolver al pueblo sus derechos y libertades, incluyendo la elección de sus líderes a través del voto universal democrático".[5] Este gobierno fue capaz de lograr el modo de mantener el poder que Pereda no pudo y marcó el ascenso de la generación post 1952 dentro de las FF AA. En algunos sentidos, esta modificación en el equilibrio de fuerzas dentro de la institución fue bastante marcada y los miembros más destacados del movimiento generacional recibieron importantes cargos ministeriales: Gary Prado (Planeamiento), Raúl López Leytón (Interior), Rolando Saravia (MACA), Simón Sejas (Educación) –ante el fracaso del coronel José Olvis (un hombre con inclinaciones falangistas) con los maestros– y Jorge Echazú (Minas). Ninguna de estas figuras era liberal y todos profesaban un vigoroso anticomunismo, pero estaban entregados a la tarea de recobrar el prestigio de las FF AA; de sólido espíritu nacionalista, estaban convencidos de que la estabilidad política podía lograrse a través de una disciplinada entrega del mando. Dada la situación política, se requería mucho más que la realización del ideal del "profesionalismo apolítico" que estaba haciendo una especie de retorno en

4 Padilla se había graduado en 1948 y se opuso a la insurrección de abril, pero sus amargos recuerdos de la experiencia provenían tanto del comportamiento mediocre de sus camaradas como del antimilitarismo de la revolución. A una persona que despreciaba absolutamente por su cobardía era a Armando Reyes Villa, entonces subteniente, en 1978 general y a punto de convertirse en una de las principales figuras de la corriente golpista. En sus memorias, Padilla recuerda que el golpe de noviembre de 1978 se debió en gran medida a la renuencia de las FF AA a enfrentarse a la UDP en las calles, lo cual originó que muchos "signófilos" siguieran a los "Karachipampas" (*Decisiones y recuerdos*, pp. 128-136).

5 *Presencia*, (La Paz), 25 de noviembre de 1978.

el vocabulario del Pentágono con Carter. Necesariamente plegados al intervencionismo, las figuras más importantes tomaron una serie de medidas duras contra el aparato banzerista. Saravia, el más abierto de los ministros, disolvió la confederación campesina oficial y ordenó que sus oficinas fueran entregadas a las organizaciones independientes.

López Leytón acusó a la CEPB de financiar los planes para un contragolpe y en enero llevó a cabo una serie de allanamientos a los domicilios de destacados derechistas. Si bien esto sirvió para someter a la CEPB, el régimen volvió a la ofensiva acusando en abril a la empresa privada de desestabilizar la democracia al negarse a pagar los aumentos de sueldo que habían sido autorizados por el gobierno. Al principio de su gobierno de nueve meses, el régimen no hizo nada por impedir que el exmovimientista ministro de Trabajo, Aníbal Aguilar Peñarrieta, iniciara un proceso civil contra Banzer, Pereda y Mario Gutiérrez por una serie de delitos comunes y contra el Estado, abriendo así el camino para una completa interpelación después de las elecciones. Padilla también destituyó a Banzer de la embajada, lo retiró del Ejército y puso en el tapete la posibilidad de que se estableciera una corte marcial para investigar las muertes de Selich, Zenteno y Torres, así como la masacre de Tolata. Finalmente se dejó de lado esta idea por temor a provocar un sentimiento antimilitarista y el régimen se contentó con la tarea mucho menos riesgosa de enjuiciar a 1.600 coordinadores sindicales de Banzer por haber estafado a sus organizaciones con más de tres millones de dólares.[6]

Estas medidas permitieron al gobierno de Padilla frenar a la derecha, que en diversas ocasiones entre fines de 1978 y principios de 1979 estuvo al borde de la insurrección. Hacia abril de 1979 se había establecido una especie de tregua en torno a la aceptación de las próximas elecciones, a las cuales ahora la derecha dedicaba su atención. El precio pagado por el régimen fue la destitución del clamoroso Saravia de su cargo y posteriormente del feroz antibrasileño ministro de Asuntos Exteriores, Raúl Botelho Gosalvez. Sin embargo, gran parte del movimiento generacional que intencionalmente evitó promover ascensos para los miembros del grupo, recalcando su honestidad, mantuvo los cargos de influencia.

Aunque ciertamente actuó con resolución para refrenar a la derecha y garantizar la apertura, el gobierno de Padilla exhibió una "equidad" típica del papel bonapartista, destinado a llenar vacíos, que tuvo que desempeñar. El régimen se negó a retirar las tropas de las minas, ratificó el Pacto Militar-Campesino

6 *Aquí*. (La Paz), 14-20 de julio de 1979.

y prohibió la exhibición de la película de Jorge Sanjinés, *El coraje del pueblo*, que se refiere a la masacre de San Juan. Además, su imagen se empañó más de lo que le hubiera gustado por ciertas prácticas irregulares con relación a la nueva planta de fundiciones en Karachipampa, cerca de Potosí, por las cuales los jóvenes oficiales se ganaron el sobrenombre de "Karachipampas", que no resultaba del todo perjudicial, ya que captaba su apego tanto a la idea de desarrollo industrial autónomo como a la flexibilidad en los medios de lograrlo. Hubo bastante menos ambivalencia en condenar la importación de un cargamento de arroz paquistaní podrido que supuestamente fue muy rentable para el ministro de Industria, el avispado capitancito naval Oscar Pammo, identificado como radical por haber dirigido la operación de nacionalización de mina Matilde en 1971, pero que muy pronto descarrilaría todo vínculo con el grupo institucionalista para siempre.

La cautela y conservadurismo fundamentales del régimen de Padilla se evidenciaron más claramente en su negativa a tomar cualquier iniciativa en el terreno económico, especialmente en términos de una devaluación del peso, un incremento de impuestos o eliminación del subsidio a los precios, medidas que en su totalidad exigía el FMI como condición para el desembolso de un préstamo *stand by* absolutamente necesario para cubrir los reembolsos de las deudas en que había incurrido Banzer. Esta actitud se justificaba con el argumento de que, como gobierno interino, no tenía mandato para comenzar una política económica importante; pero en realidad, los militares estaban sumamente reacios a atraer el oprobio de una política francamente deflaccionaria, después de los ejemplos de 1972 y 1974. Para poder reprogramar la deuda era necesario tomar esas medidas, pero fuera del contexto de un gobierno dictatorial prometían desencadenar una oposición popular tal que el Ejército lo que más quería era poder dejárselas a un gobierno civil elegido. Sobre el mismo fundamento administrativo, se negó a otorgar más aumentos salariales y restringió subidas en el sector estatal al más bajo límite aceptable, con el fin de conservar una neutralidad sindical nada fácil. El problema principal en este sentido lo tuvo el gobierno con los maestros influenciados por los maoístas, quienes a través de una campaña sumamente retórica se las arreglaron para sacar a Olvis, el ministro de Educación, pero no lograron conquistar plenamente su demanda de un sueldo mínimo de cinco mil pesos bolivianos.

Esta cifra fue adoptada por la COB como salario mínimo para todos los sectores de trabajadores estatales, en su V Congreso realizado en mayo de 1979. El primer congreso de la COB después de nueve años fue escenario de conmovedoras reuniones entre antiguos camaradas, muchos de los cuales no se veían

en casi ocho años. Aparte de la rememoración de aquellos que nunca regresarían, el momento más emotivo seguramente correspondió a la elección del antiguo anarcosindicalista Liber Forti como secretario honorario de cultura; éste, luciendo la boina y pipa acostumbradas y no pudiendo contener las lágrimas, aceptó el tardío reconocimiento a sus más de treinta años de agitación cultural a nombre de un pueblo que había adoptado como suyo.[7] El congreso prosiguió reafirmando la tesis de Corocoro de 1970, a la que añadió una resolución que reiteraba la independencia de la COB de toda corriente política –un revés a los seguidores de la UDP que habían buscado la alineación del organismo sindical con su frente–.[8] El debate en torno a este tema fue previsiblemente acalorado, pero los intercambios entre quienes respaldaban a la UDP (PCB, MIR, MNRI) y los lechinistas, aliados con la izquierda revolucionaria, no fueron tan contenciosos como aquellos entre todos esos grupos y el PCML, que desde la primera reunión del subcomité organizativo insistía en la necesidad de posponer el congreso, arguyendo que el anterior ejecutivo carecía de autoridad para dirigirlo. René Higueras del Barco, líder de la corriente maoísta dentro de la COB y secretario de relaciones, cuestionó también el reconocimiento del MRTK y MITKA como representaciones del movimiento campesino en adhesión a la ya muy reducida Confederación dirigida por su correligionario Casiano Amurrio, candidato presidencial del FRI en las elecciones de 1978. Acusados de divisionistas, los maoístas lograron sacar del congreso a treinta de los seiscientos delegados. Ésta fue la peor división desde la época de la presidencia de Siles y quedó plenamente confirmada cuando el discurso de Higueras se convirtió en competencia de insultos con los seguidores del POR (Lora), ocasionando una pelea en la cual un miembro del PCML sacó su revólver y disparó en dirección a los trotskistas, hiriendo a un espectador.

La causa principal de este conflicto, aparentemente innecesario, fue la decisión que había tomado la dirigencia del PCML de independizarse de sus aliados del FRI y sumarse al nuevo frente que estaba organizando Víctor Paz: el MNR-Alianza. Para mucha gente de la izquierda, ésta era una acción cualitativamente diferente de aquella del PCB al apoyar al otro caudillo movimientista –Siles–, porque si bien se admitía que ambos habían sostenido

7 *Ibid.*, 5-12 de mayo de 1979.

8 *Ibid.*; *Unidad*, N° 489, mayo de 1979. La representación de partidos políticos en el comité ejecutivo de la COB compuesto por 34 miembros era la siguiente: PCB: 7; PRIN: 6; MNRI: 5; POR de Pari: 3; Vanguardia Obrera: 2; Octubre: 1; PS-1: 1. Independientes: 5 (*Documentos y resoluciones del V Congreso de la COB*, La Paz, 1979, p. 19).

posiciones "antiobreras" en las décadas de 1950 y 1960, Paz había sido partidario del banzerato, mientras que Siles se había opuesto a él y había defendido los derechos democráticos básicos y aparentemente se había inclinado considerablemente hacia la izquierda, imponiendo prácticamente al líder del MIR, Jaime Paz Zamora, a los reacios MNRI y PCB, como su compañero de fórmula en las elecciones de 1979. La opinión popular de que el viraje de 180 grados del "Motete" Zamora respondía a un consejo de Pekín de aliarse con los "sectores más progresistas de la burguesía" se confirmaba en gran medida con los ataques dirigidos a la nueva línea por pekinistas ortodoxos, en los que se acusaba tanto a Zamora como a Deng Xiao Ping de hacerse la burla del pensamiento de Mao sobre la base del oportunismo.[9] La línea de los dirigentes del PCML, en contraste, decía que el MNR-A: "…constituye un amplio frente de clases que busca una opción democrática popular y antiimperialista, dentro del gran proceso histórico de la Revolución Boliviana… la Alianza se constituye en el momento político actual, en el más sólido obstáculo que encuentra la ultraderecha en sus afanes de retomar el poder… y abre una perspectiva clara y viable a la ciudadanía para impulsar un proceso liberador nacional…".[10] Aunque el propio Paz se hacía así más vulnerable a los ataques de ser "comunista" –ataques que Banzer no rardó en esgrimir– logró contrarrestar la alianza de Siles con los moscovitas en apoyo de una fuerza política que había crecido considerablemente bajo el régimen de Banzer, que tenía peso en ciertos sindicatos y credenciales lo bastante radicales para hacer revivir la desgastada imagen de su alianza. Las motivaciones de Zamora para entrar al pacto eran mucho menos obvias, el hecho de que el "Comandante Rolando", exponente de

9 *Aquí*, (La Paz), 19-25 mayo de 1979. El cambio en la política de Pekín luego de la muerte de Mao tuvo un considerable impacto en los partidos prochinos latinoamericanos, especialmente en el Perú, baluarte del maoísmo en la región. Detrás de las consignas de "¡Muera Deng Xiao Ping!, Viva la Banda de los Cuatro" que aparecieron en los edificios de la ciudad peruana de Ayacucho estaba el emergente Sendero Luminoso, que a partir de 1978 había de iniciar una campaña guerrillera de considerables proporciones a pesar de la antipatía del resto de la izquierda, de la feroz represión y de una campaña notablemente extravagante de mentiras y falsas acusaciones en la prensa peruana, la cual era reproducida por la prensa liberal occidental prácticamente sin alteraciones y con muy poco cuestionamiento, hasta que fuerzas ligadas a las FF AA asesinaron a ocho periodistas en 1982. Los maoístas bolivianos no tenían capacidad para mostrar una campaña semejante, y aunque nadie había escrito en Bolivia una tesis sobre *La terrible hermandad del esperato* como Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero, las fuerzas prochinas no se diferenciaban mucho de las de sus colegas peruanos en cuanto dependían para sus principales cuadros de la pequeña burguesía intelectual.

10 *Ibid.*

la "guerra popular" se convirtiera en un estadista responsable y encorbatado difícilmente podía atribuirse a una mera táctica y resultó enormemente contraproducente para importantes cuadros del partido, puesto que parecía orientado a privar al PCML de los logros que había tenido durante los ocho años anteriores. Dicho esto, es necesario señalar que las diferencias de los maoístas frente al PCB alcanzaban solamente a su elección de un partido popular "multiclasista" al cual ligarse; la decisión le fue impuesta a Zamora después de que el PCB se alió con Siles.[11] Con relación a la estrategia, era poco lo que los diferenciaba; el PCB promoscovita defendía su participación en la UDP en términos muy similares a los utilizados por el PCML para justificar su alianza con Paz: fortalecer un frente popular capaz de restaurar la democracia, poner la economía al servicio de las masas, vigorizar el movimiento obrero, reincorporar a los militares a la sociedad y establecer un gobierno democrático, popular y antiimperialista. Su común denominador era la vía pacífica y electoral al socialismo; siendo el objetivo final parcialmente alcanzado cuando los respectivos frentes llegaron al gobierno.

La nueva fuerza importante en las elecciones de 1979 fue Acción Democrática Nacionalista (ADN), constituida por Banzer en abril, cuando René Bernal rechazó una alianza con él. Reviviendo la vieja consigna de "orden, paz y trabajo" y con una vigorosa facción disidente de la FSB, el PIR y un remanente de la Confederación Oficial de Campesinos liderizada por Pascual Gamón, Banzer puso rápidamente en marcha su nuevo aparato civil, obtuvo respaldo de muchos antiguos empleados y presentó a Paz un fuerte desafío en la competencia para ganarse la simpatía de la clase media. Su belicosa campaña tenía como base el estimular los temores de los militares respecto a una subversión de la izquierda, atacar a los dos frentes más importantes acusándolos de ser vías al comunismo y hacer frecuentes declaraciones de que habría fraude en los comicios; pero nada de esto le sirvió para congraciarse con el régimen. Obtuvo apenas un apoyo velado de El Diario, que describió las elecciones más como una "odiosa obligación que como un deber cívico"; Los Tiempos, por su parte, declaró sin ambages que el pueblo no quería votar. Había un germen de verdad en esta afirmación, ya que la inscripción total fue sólo del

11 El PCB estaba en la UDP con objeto de lograr una democratización real del país, cerrarle las puertas a la reacción fascista y conseguir un gobierno representativo al servicio de los intereses nacionales, *Unidad*, (La Paz), N° 493, agosto de 1979. Para mayores comentarios ver PCB: *IV Congreso*, La Paz, 1980; *Unidad*, N° 489, mayo de 1979; *Aquí*, (La Paz), 23-29 de junio de 1979.

setenta por ciento de aquellos aptos para emitir voto (pese a que en esta oportunidad la cifra de inscritos no fue inflada) e incluso el semanario de izquierda Aquí observó una manifiesta apatía en los sectores populares.[12] Había un temor generalizado de fraude o de que se produjera un golpe en caso de que la UDP obtuviera el triunfo. La campaña electoral en cierto sentido fue similar a las de años anteriores. A Siles se le prohibió visitar Santa Cruz cuando la FSB ocupó el aeropuerto e hirió a una persona. Paz recibió un tratamiento similar en Sucre y Banzer fue apedreado e ignominosamente expulsado de Huanuni, luego de proclamar que el voto para ADN constituía "…la última oportunidad de salvar a Bolivia".[13] Con todo, las elecciones del 1° de julio no fueron ni particularmente violentas ni flagrantemente deshonestas; no se cumplieron con los requisitos establecidos en aquellos países donde las elecciones son un aspecto metódico de la vida política, pero se puede decir que brindaron un reflejo razonablemente exacto de las aspiraciones que tenían los bolivianos respecto a su próximo gobierno.

El primer punto que debe observarse en lo que se refiere a los resultados es la falta de correspondencia entre el número de votos emitidos y los escaños ganados, especialmente entre la UDP y el MNRA. Esto se debió a la exagerada desigualdad en la distribución de los distritos electorales y a la reserva de una cuota de escaños en la Cámara Baja para el partido que hubiese obtenido el segundo lugar en cada distrito electoral. Esto fue particularmente perjudicial para la UDP, que obtuvo el mayor apoyo en zonas urbanas densamente pobladas, a las que comparativamente correspondían pocos escaños. Sin embargo, el que la UDP no lograra una mayoría absoluta no puede atribuirse únicamente a esto, ya que la derecha (MNRA, ADN, APIN y PUB) poseía una clara mayoría de votos, pese a que el extraordinariamente buen resultado alcanzado por el PS-1 se añadió al total de votos de la UDP. Evidentemente, éste era el frente más popular, pero estaba igualmente claro que no habría de formar el próximo gobierno porque le faltaba una mayoría parlamentaria o aliados con bastante fuerza con quienes conformar una coalición viable. Por otra parte, la ADN se negó resueltamente a apoyar a su principal competidor, Víctor Paz, eliminando así la única otra alternativa obvia. Tal empantanamiento –que no en pequeña medida se debió a las divisiones del MNR y PCB en la década de 1960–, de acuerdo a la constitución, debía solucionarse en el nuevo Congreso. Por lo tanto, mientras Hernán Siles y el recién llegado Jaime Paz protagonizaron una huelga de ham-

12 *Aquí*, 19-25 de mayo de 1979.
13 *Latin America Political Report*, 25 de mayo de 1979; 8 de junio de 1979.

bre en defensa de su mandato popular en el pasillo del Palacio Legislativo, los diputados y senadores se enfrascaron en un prolongado debate buscando el modo de salir del atolladero. Esto se realizó bajo una renovada amenaza de intervención militar, pues incluso Padilla estaba perdiendo la paciencia con un ejercicio aparentemente abortivo.

Dignatarios extranjeros, incluida la señora Rosalyn Carter, tuvieron que postergar sus visitas para asistir a la posesión hasta que, luego de una semana de complejas negociaciones e interminables votaciones, finalmente se arribó al compromiso con la nominación de Wálter Guevara Arze, presidente del Senado, como presidente interino por un año, término en el que deberían realizarse aún otras elecciones (en junio de 1980). Aunque no se logró esa decisión con demasiada facilidad, reflejaba la necesidad que tenían los dos frentes más importantes de evitar la conformación de un gobierno de minorías o una administración interina, especialmente porque el problema de la deuda era ya tan grave que hacía de la adopción de medidas económicas un paso inevitable si se quería aplacar al FMI. La nominación de Guevara de hecho estaba en concordancia con la línea de sucesión prioritaria dictada por la constitución y se habría llegado a ella de inmediato, de no ser porque los partidos de más peso insistieron en el regateo para obtener ventajas–, pero también representó una especie de resolución histórica que colocó a la tercera figura del MNR de la década de 1950 entre sus dos antiguos colegas. Si bien el PRA de Guevara se había aliado con Paz en las elecciones y constituía una fuerza concertadamente conservadora, su líder se había opuesto a Paz en el pasado, era considerado como un hombre de temperamento independiente, de quien se esperaba que opondría resistencia a proposiciones militares contra los intereses congresales. Además, tenía la autoridad personal y reglamentaria para actuar como presidente interino, aunque careciera de votos populares. Por lo tanto, pese a que no era demasiado popular, su nombramiento contaba con cierta credibilidad. De la misma manera, ambos frentes parecían haber protegido sus flancos, el MNR porque tenía un aliado en el gobierno a quien utilizar e influir y del que también podía alejarse si resultaba impopular; la UDP, por su parte, se convertía en la oposición real, conservando no obstante la "victoria moral" del voto, combinación que no parecía insalvable para construir una mayoría en 1980.

Guevara procedió eficientemente a nombrar un gabinete "apolítico" de tecnócratas conservadores, cuya predisposición era favorable a una sobriedad fiscal, a las negociaciones con el FMI y a un mantenimiento juicioso del *statu quo*. Al igual que el gobierno de Padilla, Guevara carecía de mandato para

emprender iniciativas económicas importantes; pero, a diferencia de aquél, también le faltaba una capacidad coercitiva independiente. Tenía que responder al Congreso, pero éste no haría nada para colaborarlo en situaciones de apuro; tenía autoridad nominal sobre los militares, pero las FF AA en todo caso estaban menos dispuestas a ponerse de su lado, disfrutando por primera vez después de una década de las ventajas políticas de "servir" a una administración civil. La oposición de ambos grupos no carecía de cierta lógica, pero la suma del conjunto estaba lejos de poder lograr la estabilidad.

Lo anterior quedó demostrado cuando, a dos semanas de que Guevara asumiera el cargo, el Congreso se embarcó en la impugnación de Banzer. Esta acción fue liderada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien a nombre del PS-1 pero con el apoyo táctico de los más diversos grupos, con excepción de ADN, acusó al exdictador, a muchos de sus ministros y a sus colaboradores más inmediatos de 234 casos distintos de delito civil y común. Quiroga brindó una puntillosa condena de todo el banzerato[14] en un discurso de catorce horas, que esgrimía valiosas pruebas, que mostraba una vehemente capacidad y habilidad oratoria no vistas en el Congreso desde el debate en torno a la masacre de Caravi en 1943 y que fue –a insistencia del orador– totalmente transmitido por la televisión estatal así como por la radio. El juicio adquirió una enorme popularidad y fue decididamente riesgoso, pues aunque Quiroga acusó a Banzer en diversas ocasiones de violar estatutos y de abusar de la institución militar, la impugnación indudablemente estaba dirigida a las FF AA en su conjunto. Incluso gente como Padilla, que no alimentaba gran cariño por Banzer, había ocupado cargos de autoridad en su gobierno y había aceptado el carácter "institucional" de su régimen y de ninguna manera estaba dispuesta a rechazar su trayectoria total y completamente. Además, la misma popularidad de la filípica de Quiroga amenazaba con desatar una nueva ola de antimilitarismo generalizado a tiempo que perdía la simpatía de aquellos oficiales que estaban de acuerdo con algunos o con muchos de los alegatos concretos.

14 Quiroga: *Juicio...*, *passim*. Los principales puntos están resumidos en Gregorio Selser: *Bolivia: el cuartelazo de los cocaínómanos*, México, 1982, pp. 27-29.

Cuadro 10
Elecciones del 1º de julio de 1979

Fórmula	Fecha de fundación	Principales partidos	Candidatos	Votos	Escaños
UDP	13/4/78	MNRI, MPS, PCB MIR (a), AUN (b) MPLN (c) PRIN, PRTB PS - Atahuichi MRTK - Ramos Alfredo Ovando	Hernán Siles Jaime Paz	592.866	46
MNR	9/4/79	MNR, PDC PRA, PCYL MRTK - Chila	Víctor Paz Luis Ossio	539.744	54
ADN	20/4/79	ADN, PIR, CNCB (d) FSB - Moreira	Hugo Banzer Hanz Ondarza	225.205	21
APIN (e)	11/4/79	MARC (f) FSB - Gutiérrez	René Bernal Mario Gutiérrez	61.362	5
PS-1	13/3/79	PS-1 OST (g)	Marcelo Quiroga Jaime Taborga	72.527	5
MITKA	27/4/78	MITKA	Luciano Tapia Eufronio Véliz	34.456	1
PUB (h)	27/1/78	PUB	Wálter González	16.997	1
VO (i)	25/11/79	VO	Ricardo Catoira Filemón Escóbar	17.192	0

Notas: (a) Movimiento de la Izquierda Nacional, liderado por Elio Sandoval Morón
(b) Alianza de la Izquierda Nacional, liderada por Rubén Sánchez
(c) Movimiento Popular de Liberación Nacional, liderado por Ramiro Velasco, escisión del ELN - PRTB
(d) Confederación Nacional de Campesinos de Bolivia, liderada por Pascual Gamón
(e) Alianza Popular de Integración Nacional
(f) Movimiento Agrario Revolucionario Campesino, liderado por René Bernal
(g) Organización Socialista de Trabajadores, liderada por Sonia Montaño, era un grupo trotskista afiliado al PST argentino de Nahuel Moreno
(h) Partido de la Unión Boliviana, liderado por el excoronel de Policía Wálter González.
(i) Vanguardia Obrera, liderada por Filemón Escóbar. El POR (Lora) se dividió en su XXIV Congreso (1975), el propio grupo disidente se fraccionó en 1977 en el POR de Pie (Cirilo Jiménez y Benigno Ojeda) y Vanguardia Comunista del POR (Escóbar y Víctor Sossa). En 1978, Sonia Montaño dejó VCPOR para formar la OST, mientras que Escóbar formó VO y Sossa siguió a la cabeza de VCPOR.

Fuentes: *Coyuntura*, 1º de junio de 1979; *Latin America Political Report*, 29 de junio de 1979.

El juicio de responsabilidades –el segundo llevado a cabo por Quiroga– afirmó al PS-1 como una fuerza radical, dispuesta a usar el parlamento con objeto de lograr una amplia movilización; hecho que pronto se manifestó en un marcado aumento de respaldo al partido, el cual carecía de la fortaleza organizativa del resto de la izquierda, pero parecía poseer una singularidad de propósito y adhesión a una independencia de principios. No obstante, el

tema no terminó con el discurso de Quiroga; se llamaron testigos, se tomó nota de testimonios, se fabularon objeciones procedimentales y luego se iniciaron las contraimpugnaciones, y la ADN enumeró detalladamente los delitos de Paz, Siles y Ovando, quien había regresado de Madrid para respaldar a la UDP. A medida que proseguía el debate se revivieron las luchas políticas de veinte años atrás con creciente acrimonia y sin final previsible.[15] Lo que había comenzado siendo una moción parlamentaria provocadora pero respetable –y supuestamente necesaria– se había tornado en un alboroto plagado de injurias. La calurosa acogida que en círculos populares tuvo la denigración de Banzer fue restringida por la ausencia de toda acción concreta y por la perceptible irrelevancia de gran parte del debate; un Parlamento que a la primera oportunidad aprovechaba de todas las ventajas de la libertad de expresión y se envalentonaba por hacerlo con mínimo amparo militar, atacaba a las fuerzas armadas.

A principios de octubre, la paciencia del cuerpo de oficiales fue puesta a prueba una vez más con la propuesta de Lechín de reducir radicalmente los gastos de defensa para aliviar en gran parte la crisis económica. Invitando a los oficiales de alto rango a debatir en televisión, Lechín provocó inclusive al moderado Padilla al caracterizarlo como "enemigo ancestral" de las FF.AA. Las concurridas conmemoraciones del aniversario de la muerte del Che Guevara no contribuyeron a calmar los ánimos en las FF AA durante los días subsiguientes en que Padilla, ahora comandante en jefe, fue duramente presionado a mantener la disciplina. Al amanecer del 11 de octubre, la Sexta División con base en Trinidad (Beni) finalmente rompió filas y se declaró en rebeldía pidiendo la renuncia de Guevara, la disolución del Congreso y el nombramiento de una junta militar para garantizar la seguridad durante la reunión de la OEA, cuya celebración estaba prevista para fines de ese mes en La Paz. Dado que Trinidad es un pueblo aislado y no un centro militar importante, Padilla tuvo tiempo para contener a las demás unidades, negar que el levantamiento tuviera carácter político y despachar una comisión presidida por el coronel Alberto Natusch Busch para negociar un acuerdo. Por su parte, Guevara se limitó a afirmar que la revuelta no era otra cosa que la manifestación de un exceso de alcohol después de una fiesta a la que asistió el personal de la Sexta División la noche del 10. La ADN no se presentó al debate de emergencia que sostuvo el Congreso sobre la sublevación, con lo cual resultaba sospechosa de

15 Los puntos más importantes del debate están incluidos en Germán Vargas Martínez *Responsabilidad, juicio o sainete?*, La Paz, 1982.

haber participado, pero sucedió que Natusch regresó extraordinariamente rápido a La Paz habiendo solucionado las cosas con sus colegas heridos.[16] La UDP, que había adoptado una política de conciliación directa con los militares desde el golpe de Padilla y que estaba presentando una solicitud para el retiro de tropas de las minas en el más cortés de los tonos, no presionó a favor de una respuesta agresiva o punitiva al golpe abortivo, aceptando la posición del gobierno que lo consideraba una aberración.[17]

El rápido fracaso del levantamiento de Trinidad no redujo la tensión política. El 24, en una medida muy juiciosa, la COB procedió a ejercer presión sobre la UDP y se adelantó a cualquier paquete deflacionario preparado por Guevara a instancias del FMI presentando su propio paquete económico. En un documento extenso pero fundamentalmente táctico, la COB proponía un considerable incremento del salario mínimo a cinco mil pesos bolivianos, un riguroso control de cambios y la restricción de los viajes al extranjero, un congelamiento de precios o una escala móvil de salarios de acuerdo a la inflación, una moratoria en el pago de la deuda externa seguida de una amplia renegociación de las condiciones de reembolso, rígidos límites a la subida de alquileres, prohibición de importar productos de lujo o vehículos e incrementos fuertes en el precio de la gasolina superior (usada por el transporte privado), al igual que la nacionalización del transporte público.[18] Si bien la UDP carecía de propuestas económicas precisas y se limitaba a presentar las más vagas estrategias –tendientes a la renegociación "responsible" de la deuda más que una moratoria y a la expectativa de nuevas ayudas bilaterales y créditos blandos de Europa–, era evidente que éstas se quedaban chicas al lado

16 *Aquí*, (La Paz), 13-20 de octubre de 1979.

17 Antes de las elecciones, la UDP publicó en la prensa nacional, como parte de su campaña publicitaria, su carta abierta al jefe de estado mayor, general Víctor Castillo, pidiéndole garantías y que desistiera de la desestabilización, al mismo tiempo que recordaba a todos los militares que todos los miembros de la UDP eran nacionalistas y algunos eran también miembros de las FF AA. (*Presencia*, 11 de junio de 1979). La posición del PCB se reflejó en las siguientes palabras: "Las FF AA están destinadas a defender la Nación. Pueden y deben participar junto al Pueblo en el desarrollo económico y social. Para ellas seguirán siendo las normas legales y los reglamentos de institutos castrenses. Rechaza los intentos de separarlas del pueblo y reconoce el derecho a sus propias reivindicaciones..." (*Aquí*, 23-29 de junio de 1979). Anteriormente, Óscar Eid, del MIR, había mencionado muy cuidadosamente el tema de la ocupación militar de las minas: "Nosotros creemos que este problema debemos verlo desde diferentes ángulos y en ningún caso pensamos que la presencia de las FF AA en ningún punto del territorio nacional debe perseguir un fin de persecución..." (*Ibid.*, 31 de marzo, 6 de abril de 1979).

18 Para detalles ver *Aquí*, (La Paz), 27 de octubre, 2 de noviembre de 1979.

de las demandas de la COB.[19] La administración de Guevara, sin embargo, no estaba dispuesta ni en condiciones de acceder al paquete, pero sí tenía que dar una pronta respuesta, ya que la publicación del mismo agravó una crisis que ya era severa dentro del gobierno. Desde el 13 de octubre, dos días después del levantamiento de Trinidad, Guevara había estado negociando con los dos principales frentes en un intento de invertir su abstención efectiva del gobierno. Guevara consideraba que había dos alternativas: la realización de elecciones y la solución de la crisis económica. Primero intentó obtener una extensión a su período de gobierno, que, según afirmaba, era la única manera de confrontar adecuadamente la crisis por la deuda. No habiendo podido conseguirlo, el presidente demandó una mayor participación y cooperación con su gobierno. Dado el gran triunfo obtenido en la OEA, con 24 votos contra cero (Chile se abstuvo) en favor del derecho boliviano a una salida al mar, su prestigio aumentó lo suficiente como para permitirle un progreso inicial.

Sin embargo, Guevara solamente pudo mantener un casi imperceptible control gracias al apoyo táctico de la ADN; y una colaboración abierta con el partido de Banzer resultaba repugnante para una gran mayoría tanto de la UDP como del MNR. El 29 de octubre, un día después de haberse logrado un acuerdo tentativo respecto a una estrategia conciliatoria con la extrema derecha para evitar un golpe, los principales partidos se retiraron una vez más. Guevara declaró: "...estamos en el mismo barco; si naufraga, todos naufragaremos con él". Esta afirmación no constituía una amenaza gratuita ya que, si bien el presidente contaba con informes de inteligencia que los demás partidos no tenían, para todos era evidente que se estaba preparando una insurrección militar.

El 27 de octubre, Óscar Sanjinés, de la COB, acusó públicamente al coronel Natusch Busch de estar preparando un golpe; a su vez, éste se defendió declarándose absolutamente inocente, demandando pruebas y amenazando con iniciar un juicio por difamación. Al mismo tiempo, el coronel había hecho un compromiso de lealtad tanto con Guevara como con Padilla y puesto que Cyrus Vance –que estaba en La Paz con motivo de la reunión de la OEA– había reiterado que Washington no reconocería a ningún régimen que llegara al poder a través de un golpe, se consideraba que no había peligro inmediato. Con todo, la "solución" al alzamiento de Trinidad no fue ni más ni menos que una acción táctica dirigida a permitir el tiempo necesario para coordinar la

19 Sobre la esencia de la estrategia de la UDP ver MNRI: *Programa de gobierno 1979-85*. La Paz, 1979; y *Programa del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria*. La Paz, 1979, ambos trabajos ofuscadamente imprecisos

preparación de una rebelión. A las dos de la mañana del 1° de noviembre, cuando todavía se encontraban en La Paz muchos de los delegados de la OEA, los tanques del regimiento Tarapacá, comandado por el coronel Arturo Doria Medina, ocuparon el centro de la ciudad y el Palacio Quemado. A las siete de la mañana, toda la ciudad estaba controlada por los rebeldes bajo la dirección del mismísimo coronel Natusch, quien horas más tarde sería designado presidente. Guevara y Padilla se escondieron, mientras que la COB se declaró inmediatamente en huelga general e indefinida.

Pese al gran número de tropas que participaron en la ofensiva inicial, pronto se hizo evidente que el golpe de Natusch no era exactamente una insurrección tradicional derechista al estilo Banzer. En sus primeros pronunciamientos, Natusch prometió colaborar con el Congreso y con la COB, afirmando que su propósito era reemplazar a una democracia débil por una fuerte. Se comprometió a respetar el sindicalismo y las libertades democráticas, los derechos humanos y la autonomía universitaria, no agredió inmediatamente las radiodifusoras ni las oficinas de los periódicos y aparentaba estar en una empresa que obedecía a los moldes de Busch y Villarroel. La razón de esta actitud se puso de manifiesto en cuanto se supo que el régimen rebelde gozaba del respaldo de una serie de políticos que habían resuelto que el gobierno de Guevara estaba totalmente moribundo y que ellos y sus intereses saldrían mejor beneficiados colaborando con el más destacado de los hombres del golpismo para dirigirlo hacia una forma más considerada de bonapartismo. Los consejeros más importantes fueron José Fellman Velarde y Guillermo Bedregal, del MNR; Edil Sandoval Morón (el candidato vicepresidencial de la UDP para las elecciones de 1978), y Abel Ayoroa y Germán Condori, del MNRI. Bedregal fue nombrado canciller y pronto resultó ser el principal ideólogo del régimen, a pesar de que en 1971 había publicado un libro difamando a los militares. Con todo, no cesó de insistir que sólo había respaldado a Natusch porque Paz estaba a favor del golpe.[20] Por muy cierta que pudiera haber sido tal afirmación que fue ampliamente admitida en la izquierda y en la clase obrera–, Paz no tardó en negar tal responsabilidad y en dejar claro que no brindaba su apoyo al

20 Puesto que Bedregal fue el autor de un volumen rabiosamente antimilitarista: *Los militares en Bolivia* (1971), la ironía de su postura era bastante obvia. En realidad, la adopción de posiciones excepcionalmente reaccionarias detrás de un velo aparentemente radical en el lenguaje, en frecuentes apariciones, ha sido una característica de su carrera pública. En la víspera de su experiencia con Natusch, Bedregal no se retiró de la política sino que se dio tiempo para completar un volumen vago, poco inteligible pero interesante sobre la política nacional a partir de 1952: *El poder en la Revolución Nacional*, La Paz, 1982.

nuevo régimen.[21] Los colaboradores fueron rápidamente expulsados de sus partidos e incluso ADN, percibiendo el clima de resistencia evidente desde un principio, no ofreció su respaldo formal y se limitó a dejar que sus miembros participen en el régimen a título personal.[22]

Aunque, de acuerdo a la tradición, Natusch había golpeado en un fin de semana y por lo tanto se había dado unos días de gracia, no tardó en darse cuenta de que no recibiría gran apoyo y que confrontaría una dura resistencia, por lo menos en las calles y centros de trabajo. Ningún otro político se sumó a su causa y, aparte de los varios cientos de tropas acantonadas en el Palacio Quemado, Natusch fue abandonado con sus compañeros iniciales en esa aventura y con un colaborador extranjero a quien la población de La Paz –con ese humor nacido de la adversidad– identificó como Johnny Walker.

Una hora después de la primera convocatoria a la huelga de la COB, ésta anunció que la huelga sería sólo por 24 horas y que se prolongaría de acuerdo a la evolución de los acontecimientos. Al enterarse de esto, Natusch invitó a Lechín a discutir con él el 2 de noviembre. Luego de una decisión muy poco unánime del Comité Ejecutivo, el líder de la COB asistió a palacio el 3, pero no tardó en rechazar una oferta de cogobierno y la implementación del paquete de la COB a cambio de que se ponga fin al gobierno parlamentario. La huelga continuó con intervalos de 24 horas y fue acatada disciplinadamente en todo el país. Siguiendo instrucciones de la CSUTCB, se paró el trabajo en varias zonas del campo; Bolivia quedaba paralizada ante la primera huelga general desde octubre de 1970. El día del golpe se convocó públicamente a una reunión de emergencia del Congreso, pero no hubo quórum. El presidente en funciones de la Cámara de Diputados, el movimientista Leónidas Sánchez, sugirió que se aplazara el debate hasta el lunes siguiente; pero la propuesta confrontó una oposición casi total, ya que en ese momento, en que gente joven moría en gran número en las calles en manifestaciones por la defensa del parlamento, tomarse el fin de semana libre hubiera sido hacer muy poco a favor de su propia causa. Una vez que el Congreso condenó el golpe y votó por no colaborar con el régimen de facto, Natusch inmediatamente lo declaró ilegal y lo obligó a pasar a la clandestinidad. Entre tanto, Guevara y Padilla lanzaron mensajes instando a la resistencia total; el mensaje de Guevara per-

21 Este tema es tratado con profundidad en *Golpe*, La Paz, 19 de junio de 1980, que en general sale a favor de la versión de Paz.

22 *Aquí*, (La Paz), 27-30 de noviembre de 1979. La siguiente relación ha sido extraída en gran parte de *Aquí* y *Cosmorama*, N° 33 y 34.

maneció un tiempo exageradamente largo en manos de Lydia Gueiler, la presidenta de la Cámara, en tanto que aquel de Padilla tuvo un valor más de propaganda que organizativo, ya que los principales "Karachipampas" ya habían sido arrestados.

Confrontado con semejante oposición, Natusch revisó sus tácticas. A comienzos de la semana siguiente –5 y 6 de noviembre– permitió que las tropas de Doria Medina actuaran sin control por La Paz y que volaran parte del edificio de la COB e impuso un régimen ni muy similar al de agosto de 1971. A pesar del despliegue generalizado de vehículos blindados y del ametrallamiento de los centros populares de la ciudad desde un helicóptero alquilado a la empresa constructora americana Groves Ltd., los manifestantes volvían reiteradamente a las calles, sacaban los adoquines y construían "barricadas morales". Más de doscientos murieron, 125 "desaparecieron" y otros doscientos fueron heridos. Perecieron tantos bolivianos bajo el régimen de catorce días de Natusch como en los siete años de gobierno de Banzer.[23] El impacto de esta carnicería fue acrecentado por el hecho de que se produjo casi exclusivamente en La Paz y en el espacio de muy pocos días (la mayoría de las muertes ocurrió el 5 y 6 de noviembre). El régimen de Natusch pasó a conocerse como el de la "masacre de Todos Santos" y su principal arquitecto, el coronel Doria Medina, se ganó el título de "Mariscal de la Muerte".

Tanto el inicio del golpe como la represión que vino después parecían haber sido diseñados precisamente para provocar oprobio internacional. El embajador norteamericano Paul Bocker fue inmediatamente asignado a poner en práctica la amenaza que se le había dirigido el año anterior a Pereda; se denunció el engaño del Ejército, se cortaron relaciones diplomáticas y fueron congelados sesenta millones de dólares de ayuda económica y militar. El Pacto Andino emitió una fuerte condena y también rompió relaciones con Bolivia, mientras Chile, todavía dolido por la votación de la OEA, se apresuró a rechazar cualquier participación; pero esto no evitó que Natusch fuera acusado de prochileno. Después de dos semanas, el gobierno fue reconocido únicamente por Egipto y Malasia; ni los dictadores del Cono Sur estaban dispuestos a acudir en su ayuda una vez que Washington hubo señalado su oposición. Los consejeros civiles del coronel no le habían servido de mucho en lo que se refiere a la cuestión diplomática.

23 Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia: *La masacre de Todos Santos*, La Paz, 1980, proporciona detalles y una serie de fotos ilustrativas.

El 7 de noviembre, admitiendo que la matanza en las calles no obedecía a ningún propósito político y deseoso de encontrar alguna salida al impasse, Natusch levantó el estado de sitio y convocó a la COB y al Congreso a deliberar. El Parlamento no se resistió y el comité ejecutivo de la COB, percibiendo la necesidad de algún tipo de mediación, levantó la huelga general. No obstante, las bases de la FSTMB se negaron a regresar al trabajo y mantuvieron la huelga por varios días más, notificando a los dirigentes de la COB que sus acciones estaban bajo un rígido y crítico escrutinio. Padilla y Guevara también rechazaron las negociaciones e instaron a continuar la resistencia; el depuesto presidente prosiguió con esta causa, infiltrándose en el Congreso luciendo peluca y ropa sport para pronunciar un discurso provocador antes de escapar de las fuerzas de seguridad por una salida auxiliar del Parlamento.

La propuesta presentada por Natusch a sus opositores consistía en un gobierno tripartito compuesto por él mismo como representación de las FF AA y por representantes del Parlamento y de la COB. Esta idea de triunvirato fue bien recibida no sólo por la ADN, sino también por el PCB que, ante la presión del momento, mostró sus preferencias por una alianza bonapartista frente a un debilitado gobierno civil. La crítica más aguda a esta posición del PCB provino de sus aliados udepistas del MNRI, quienes, sin embargo, habían aceptado entrar en negociaciones con Natusch. A despecho de que el PCB había defendido reiteradamente su buena fe democrática, no fue capaz de defender seriamente el hecho de haber apoyado un triunvirato con los militares; un error táctico que tuvo sus consecuencias y provocó una ulterior autocrítica, la más notable hecha por Simón Reyes.[24] Entre el 10 y el 15 de noviembre, la COB siguió rechazando la idea de un triunvirato después de haber consultado con sus bases; se había perdido demasiadas vidas y la reacción era demasiado fuerte como para permitir cualquier concesión en ese sentido. El Congreso era notablemente menos reacio y, fueran cuales fueran sus deseos, sus líderes sabían que sin la COB no había coalición posible. El comportamiento del Parlamento durante la crisis no fue muy diferente al de las semanas anteriores; no pudo alcanzar ni el nivel de la movilización ni el del ejemplo de Guevara y Padilla:

24 *Aquí*, (La Paz), 17-23 de noviembre de 1979; *Presencia*, (La Paz), 9 de noviembre de 1979; *Unidad*, N° 496, noviembre de 1979. En *Esto Es*, (La Paz), 21 de septiembre de 1982, se brinda una relación completa pero partisana de este grotesco episodio, el cual sugiere que debido a que Kolle Cueto estuvo ausente en Lima durante la primera semana del régimen, la línea del PCB se volvió más oportunista bajo la dirigencia de Marcos Domic. Sin embargo, el artículo cita a Kolle Cueto afirmando que Natusch podía haber implementado el plan económico de la COB, pues tenía expectativas de ayuda financiera del mundo árabe.

"...en lugar de fortalecerse, el Poder Legislativo se debilitó, perdió prestigio ante la opinión y esterilizó parte de sus acciones en debate de escaso o ningún interés nacional".[25]

El temperamental Natusch habría querido renunciar una vez que fracasó el intento de aplastar la resistencia popular con la represión, pero ya era prisionero de su propio alto mando, que había apostado todos sus recursos a favor del golpe. La decisión final de negociar una retirada por parte de los golpistas de línea dura, que ahora comandaban a las FF AA, bien pudo haberse precipitado cuando se dieron cuenta de que para evitar la bancarrota tendrían que decretar una devaluación. El 5 de noviembre, el gobierno había clausurado los bancos con objeto de detener una fuga de pesos bolivianos y de pagar generosos bonos a oficiales y tropas, que, confrontados con la permanente resistencia, la cooperación pasiva de la policía y una aversión casi total, estaban mostrándose doblemente inestables. Aparte de que, de la noche a la mañana, habían desaparecido dieciocho millones de dólares de las bóvedas (3,5 millones de éstos luego de una visita al Banco Central en la tarde del 6 de noviembre de un jeep del Ejército), este cierre de los bancos revivió el mercado libre del peso boliviano, que inmediatamente subió de veinte a 35 por dólar. Sin duda, en medio de la confusión, alguien también informó a los generales de que los documentos del FMI hacían énfasis en que una devaluación era inevitable. Habiendo realizado su ataque en un momento absolutamente inoportuno, confrontado con una oposición imprevisiblemente dura que pudo consolidarse de ser frontalmente atacada, resueltamente emboscado por Washington y plantado por sus colegas regionales, el comando del Ejército no tenía ningún deseo de empeorar una situación de por sí grave, provocando una completa revuelta social. Tenía que replegarse; y quedaban únicamente por acordarse los términos de su retirada. La única opción que los rebeldes se negaron a aceptar, porque conllevaba una completa pérdida de prestigio, era la restitución del *statu quo ante* por el que Guevara y Padilla recuperarían sus posiciones. Una vez que era evidente que Natusch saldría, los dirigentes de la COB abandonaron las discusiones en las que, fue ampliamente admitido, ya se habían involucrado demasiado; arriesgando sus

25 Pablo Ramos: *Antecedentes y mecánica del golpe del 17 de julio de 1980*, México, 1981, p. 6. En medio del golpe de Natusch, Pablo Ramos escribió un reflexivo ensayo político que era más simpatizante del Parlamento pero también señalaba su decreciente apoyo a la izquierda independiente (Ramos: *Democracia boliviana, sus defensores y sus enemigos*, La Paz, 1979). El análisis de Guillermo Lora se centró más directamente en los dirigentes de la COB, la cual –según él argumentaba– realmente había reducido al mínimo las posibilidades de un momento insurreccional al impedir la huelga y acceder a negociar (*Enseñanzas de la semana trágica*, La Paz, 1979).

propios intereses, los negociadores congresales aceptaron el veto a Guevara y retomaron el planteamiento que habían adoptado en agosto, esta vez proponiendo a la presidenta de la Cámara de Diputados como mandataria interina de la nación hasta las elecciones de 1980. El Ejército aceptó y volvió a sus cuarteles. El país recibió a su segundo presidente nombrado en el curso de tres meses y tuvo en Lydia Gueiler a la primera mujer que en su historia se hacía cargo del Estado.

Elecciones versus golpe

La designación de Lydia Gueiler Tejada como presidenta conservó el monopolio de figuras del antiguo MNR en altos cargos gubernamentales, el cual caracterizó a la era posbanzerista. Mujer de favorable trayectoria, se destacó inicialmente como miembro militante del sindicato de trabajadores bancarios a fines de la década de 1940 y posteriormente, como hemos visto, en los Grupos de Honor del MNR durante e inmediatamente después de la revolución. Lydia Gueiler era una mujer acreditada y ampliamente respetada. Sin embargo, su carrera política no fue nada sosegada. Simpatizante del ala derecha del MNR al principio, se involucró lo bastante en el golpe de enero de 1953 como para merecer dos años de exilio diplomático en Alemania. A su regreso apoyaba fielmente a Paz, pero bajo la influencia de su segundo marido, el exporista Edwin Möller, fue pasando decididamente a la izquierda y se convirtió en miembro fundador del PRIN. Casi continuamente en el exilio después de 1964, Lydia Gueiler separada de Edwin Möller, cuya actividad política había sido eclipsada por su entusiasmo por la astrología, regresó al país por un breve periodo entre 1970-71 para cooperar en la creación de la Unión de Mujeres de Bolivia (UMBO) y nuevamente en 1978 para postular a la vicepresidencia con el FRI, representando al PRIN. Sin embargo, su antigua vinculación con Víctor Paz la alentó a seguir el ejemplo del PCML de abandonar el FRI y unirse al MNRA, por el cual ocupó un escaño en la Cámara de Diputados en 1979. De manera que su designación como presidenta en 1979 señalaba una clara oscilación a favor del MNR a nivel gubernamental.

Once de los diecisiete puestos de gabinete fueron ocupados por miembros de la alianza de Paz, en tanto que el Ministerio de Urbanismo fue a dar a manos de un macísta, René Higueras, quien meses antes había interrumpido con un alboroto el Congreso de la COB; el ministerio del Interior fue entregado a Jorge Selúm Vaca Díez, compañero de Lydia Gueiler en su disidencia del PRIN. El MNRI recibió solamente dos cargos, aceptó a Paz como el

poder detrás del trono y pretendió volcar ese control sobre el gobierno en su beneficio.

A los pocos días del retiro de Natusch y de la celebración de una victoria popular, se puso de manifiesto que tal control tenía carácter casi exclusivamente formal y se limitaba a nombramientos civiles. El 22 de noviembre, el general García Meza Tejada, que no solamente había sido comandante de Ejército con Natusch sino que también era primo de Lydia Gueiler, dirigió un movimiento para rechazar los nombramientos militares de la nueva presidenta, especialmente aquel de René Villarroel como comandante en jefe. En un esfuerzo concertado por restringir el daño infligido por la derrota de Natusch, sus principales designados militares protagonizaron lo que no puede describirse sino como un "golpe pasivo" ocupando los cuarteles de Miraflores y negándose a aceptar órdenes de los nuevos comandantes así como lanzando acres ataques contra Víctor Paz por "haber traicionado" a Natusch. La situación se prolongó por tres días, durante los cuales ambas facciones militares publicaban airados anuncios en la prensa e impedían que los representantes del sector contrario entrasen a sus oficinas en un abierto conflicto mutuamente destructivo que desmoralizaba aún más.[26] La impotencia del nuevo gobierno, aprisionado por esta situación, fue gráficamente ilustrada por la imposibilidad de ejercer ningún control a través del Ministerio del Interior, que era la única oficina civil con capacidad coercitiva. Cuando Jorge Selúm intentó destituir al coronel Freddy Quiroga, a quien Natusch había nombrado comandante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIE), Quiroga sencillamente se negó a moverse con el argumento de que él acataba las órdenes del estado mayor general (EMG). Dado que el comandante en jefe de Natusch, general Edén Castillo, conservaba el control del EMG y Quiroga había cercado sus oficinas con tropas, no había nada que Selúm pudiera hacer. Esta confrontación, que en ese momento pareció secundaria comparada con la disputa en torno al alto mando militar, trajo nuevamente a la escena pública la figura del coronel Luis Arce Gómez, un rechoncho coronel de 49 años, sin mérito aparente, graduado en 1955, expulsado del ejército en 1960 por una supuesta violación a la hija de un superior; había adoptado una carrera como fotógrafo de la página social de Presencia y fue reincorporado al ejército después del golpe de Barrientos para especializarse en inteligencia y asuntos de seguridad, aunque sin gran sofisticación, como

26 *Coyuntura*, (La Paz), N° 34, 1° de diciembre de 1979; *Aquí*, (La Paz), 24-30 de noviembre de 1979.

lo demuestran sus actividades durante el régimen de Ovando.[27] En cuanto tomó el poder, Natusch nombró a Arce Gómez jefe de Inteligencia Militar (G-2 o Segunda Sección), y fue en el desempeño de esas funciones que el 22 de noviembre apareció en los cuarteles del SIE con un pelotón de tropas y tres camiones para liberar a Quiroga y sacar del edificio todos los expedientes heredados del DOP por el SIE –documentación que brindaba información detallada sobre opositores a Banzer, personas de toda condición y corriente política–. Selúm elevó violentas protestas pero quedó sin ningún poder ante el regreso de Arce Gómez al Ministerio con las manos vacías y seguido por la prensa, que oportunamente registró el "entendimiento" del sonriente coronel con el airado ministro. Selúm, aconsejado por sus subalternos, se negó a pronunciar palabra sobre el incidente a partir de ese momento; demoró un par de meses en renunciar a su cargo y no mucho después murió prematuramente de muerte natural.

La crisis del 22 al 25 de noviembre fue resuelta con una clara ventaja para los golpistas. Villarroel no fue nombrado y su puesto fue ocupado por el general Armando Reyes Villa, un hombre muy poco dado a actividades belicosas o afirmaciones cáusticas, pero simpatizante de la camarilla de Luis García Meza. La designación del general Rubén Rocha Patiño como comandante del Ejército fue el único beneficio para los institucionalistas. Los golpistas lograron el control sobre la Fuerza Naval, reemplazando al contralmirante Wálter Núñez por Ramiro Terrazas, del mismo rango; conservaron el control de La FAB, con la ratificación del general Jaime Niño de Guzmán y del coronel Waldo Bernal como comandante y como jefe de estado mayor. García Meza continuó como jefe del Colegio Militar y Arce Gómez fue ratificado como jefe de Inteligencia.[28] Inclusive los comandantes de tropa, directos responsables de la represión, siguieron en sus puestos: Doria Medina, coronel Alberto Grybowski del regimiento Ingavi, el mayor Víctor Peredo del Mas Toledo, el coronel Moisés Chiriqui del Manchego y el facundo coronel Mario Oxa, que se había destacado por dirigir el ataque central palacio, pero más conocido por sus manifestaciones casi epipéticas de apoyo a The Strongenst, un club que presidía y cuyos asuntos financieros también dirigía sin visible desventaja. Aunque los rebeldes no lograron el ascenso del coronel Mario Vargas Salinas –el "León del Misicuni"– y de

27 La trayectoria de Arce Gómez sigue siendo algo oscura, pero se brindan algunos detalles en *Crónicas*, (La Paz), abril de 1983 y *Bolivia: Información y Análisis*, Quito, N° 1, noviembre de 1980.

28 *Coyuntura*, (La Paz), N° 34, 1° de diciembre de 1979.

Natusch a generales en la orden de ascensos y destinos de diciembre, pudieron impedir la promoción a ese grado de candidatos institucionalistas, tales como Miguel Ayoroa y Humberto Cayoja Riart, ambos anteriormente hombres de línea dura que habían chocado con Banzer y posteriormente se habían acercado más a los "Karachipampas". Asimismo, consolidaron su control sobre las guarniciones de Santa Cruz (Chiriqui en Monrero y el general Hugo Echeverría como comandante del Segundo Cuerpo del Ejército) y Cochabamba (Vargas Salinas como comandante de la Séptima División).[29]

Habiendo soportado los traumas de ese inmediato repudio a su autoridad, la inexperta administración de Lydia Gueiler fue arrojada directamente en los brazos del FMI. Los riesgos políticos de una devaluación o reducción en los gastos estatales (del subsidio de precios al presupuesto militar) no pudieron haber sido más gráficamente ilustrados que con los acontecimientos de las tres semanas precedentes, pero el FMI era inflexible. Durante dos años no hubo una política coherente para administrar la deuda externa que por entonces excedía los tres mil millones de dólares, la producción agrícola, minera y petrolera había decaído en un 3,5 por ciento desde 1976, las reservas de divisas se redujeron de 3.047 millones de pesos bolivianos a 1.226 millones en el mismo período, en tanto que el gasto público siguió aumentando de 8.988 millones de pesos bolivianos en 1976 a una cifra estimada de 17 mil millones en 1979. Se preveía que la cifra negativa de crecimiento global para 1979 sería la más alta en 1980; por lo tanto, cuando la señora Gueiler asumió el poder, su gobierno no contaba con fondos suficientes para cubrir los salarios estatales y los costos del mes de diciembre.[30] El equipo del MNR admitió la necesidad de una devaluación inmediata, pero retrocedió juiciosamente ante la implementación de un reajuste de cincuenta por ciento o más de la moneda, como señalaba el Fondo. Así, el 30 de noviembre, el gobierno devaluó el peso boliviano en un 25 por ciento y por añadidura suspendió los subsidios a la gasolina y al kerosene, cuyos precios se incrementaron en un 120 por ciento. A cambio de ello, se prometió un crédito stand by de 111 millones de dólares para la primera mitad de 1980.[31]

El paquete económico de noviembre o "paquete", como se lo denominaba en algunos círculos, provocó una protesta generalizada, pero en ninguna parte

29 Presencia, (La Paz), 12 de enero de 1980.
30 Aquí, (La Paz), 22 de diciembre de 1979, 4 de enero de 1980.
31 Para mayores detalles de las medidas y de las operaciones del FMI en Bolivia ver Coyuntura (La Paz), Nº 36 y 37, 1-15 de enero de 1980.

tan fuerte como en el campo, donde el aumento del precio de la gasolina amenazaba inflar enormemente los costos de transporte para los productos agrícolas. El alcance y la disponibilidad de la movilización campesina contra las medidas de Lydia Gueiler cogió desprevenida incluso a la COB y ciertamente sacudió al gobierno; fue la más grande y radical campaña independiente en el campo desde 1952. Una de las principales razones para esto fue el establecimiento de la CSUTCB a fines de julio de 1979, que marcó el surgimiento decisivo de un movimiento campesino único, aliado solamente con la COB y sin patronazgo oficial. Si bien la nueva Confederación carecía de la fortaleza organizativa de muchos sindicatos urbanos y fabriles y pese a que sus partidarios estaban desigualmente esparcidos a lo largo del país, consolidó al movimiento como una organización independiente que era más evidente en el altiplano y en el valle cochabambino desde la década de 1960; atrajo a su seno a decenas de miles de trabajadores rurales y estaba liderada por figuras jóvenes y populares con inclinaciones políticas hacia la izquierda, las cuales estaban más que preparadas para emprender acciones directas. En esta instancia, las reiteradas advertencias que la COB hiciera después de las elecciones de junio, así como la realización parcial de bloqueos de caminos en apoyo a la huelga general contra Natusch habían servido ya de preparación. Con todo, el 30 de noviembre fueron los campesinos, y no la COB, quienes asumieron el liderazgo procediendo inmediatamente a cortar las carreteras más importantes del país, aislando así las ciudades. La acción logró ampliamente su objetivo paralizando prácticamente por una semana a todo el transporte motorizado en el altiplano y los valles, en tanto que la CSUTCB procuraba obtener del gobierno la promesa de limitar a un mínimo absoluto la subida de tarifas de transporte, de no modificar los precios de la harina, el arroz, el azúcar, de reducir los impuestos de los productos agrícolas, de crear nuevos mercados y garantizar la cogestión en el Banco Agrícola. Se permitía el paso de provisiones alimentarias únicamente hacia los campamentos mineros y algunas fábricas, según lo acordado con la COB.

La firmeza de la movilización en el campo no fue equiparada en las ciudades, en parte debido al descenso de la militancia después de la derrota de Natusch y en parte porque la dirigencia de la COB se abstuvo deliberadamente de lanzar una ofensiva extrema por temor a poner en peligro el frágil régimen constitucional que recién había sido arrebatado a los militares a un costo muy alto. Consecuentemente, la arrogancia del régimen al declarar una devaluación tan sólo a dos días de iniciar las negociaciones con la COB, no fue respondida con la firmeza que podría haberse esperado.

El 4 de diciembre, ante una multitud de cincuenta mil manifestantes en contra de la devaluación, Lechín dijo que esa medida debía suspenderse y que debían reanudarse las conversaciones; no hubo convocatoria inmediata a una huelga; sólo después de que el comité ejecutivo de la COB llegó a un acuerdo para restringir la subida de tarifas de transporte en un treinta por ciento se llamó a una huelga simbólica de un día para el 10, fecha en que el abastecimiento de alimentos en las ciudades estaba volviendo a la normalidad. En los pueblos más importantes, los ánimos estaban caldeados contra los transportistas, quienes habían parado en protesta por los ataques de que eran objeto por incrementar sus tarifas; pero la COB instó a la CSUTCB a llegar a un acuerdo, consolidando así el contrato social implícitamente encarnado en la nominación de Lydia Gueiler.[32]

Al tomar esta línea, los dirigentes de la COB no solamente se comprometían ellos y sus miembros con la senda electoralista sino que se abstuvieron consciente o inconscientemente de aprovechar una oportunidad sin igual para lanzar un ataque importante contra el sistema económico vigente, que estaba aún más vulnerable que a principios de 1971. Frente a un ejército dividido y desmoralizado y ante una administración muy poco representativa y demasiado atemorizada, la decisión de seguir el ejemplo campesino casi con certeza habría originado una crisis política profunda y abierto la posibilidad de ver realizados muchos de los objetivos de la tesis de la COB de 1970. Sin embargo, la COB no tenía un plan político independiente respecto a la forma de alcanzar aquellos objetivos y como cuerpo sindical estaba tal vez previsiblemente sorprendido y desorientado por la agudeza y la peculiaridad de la crisis que partía por el eje las expectativas acerca de un realineamiento gradual hacia el constitucionalismo. La hegemonía del parlamentarismo no debe subestimarse aquí, ya que estaba claro que, si bien la clase obrera había gastado muchísima energía a principios de diciembre en combatir el militarismo, también había registrado una considerable victoria contra el ejército, inclinando el equilibrio de fuerzas lo suficientemente a su favor para lograr otros avances objetivamente posibles y más radicales. Esto no ocurrió. La izquierda sindicalista siguió a la UDP para construir una lucha contra Natusch; estaba concentrada en el apoyo a un sistema electoral, en lugar de defender los derechos democráticos como parte de un movimiento más amplio contra el imperialismo y el gobierno burgués. En su jugueteo con la idea del triunvirato, el PCB paradójicamente vislumbró la contradicción fundamental que estaba en juego, pero

32 *Ibid.*, 12-18 de abril de 1980.

primero invirtió sus términos y luego se replegó al terreno constitucional. El resultado general de ello provocó el descenso de la militancia de la clase obrera, el cual fue incentivado por una toma de conciencia de que la estrategia electoralista limitaba la agitación en torno a temas económicos y restringía al activismo político a campañas partidarias y a una postura fundamentalmente defensiva contra otro golpe. Para el campesino, al que se le negó en la práctica la realización de tan pregonada alianza obrero-campesina en el momento que la necesitaba más, la retirada fue aún más marcada.

La única discusión profunda de estos problemas dentro del movimiento obrero tuvo lugar en el XVIII Congreso de la FSTMB en Telamayu, a principios de abril de 1980. De acuerdo con la práctica sindical, una serie de resoluciones fueron presentadas por corrientes políticas a nombre de varios campamentos mineros. De las dieciocho planteadas en Telamayu, la del PCB, presentada por Óscar Salas, de Huanuni, pronto emergió como el documento de la mayoría, ya que el partido tenía más de cien delegados y su representación en el ejecutivo aumentó de once a dieciocho de los 48 miembros que lo componían. La fuerza de la UDP fue reafirmada por el MIR, que tenía ochenta delegados y siete miembros en el ejecutivo; pero los seguidores del MIR no estuvieron muy lecuaces en el congreso pues el partido se había comprometido a apoyar una resolución presentada por Catavi, redactada en colaboración con el feroz antielectoralista POR de Pie, que era más fruto del equilibrio local de fuerzas que de una afinidad política más amplia. El PS-1 era la tercera fuerza política más grande, con sesenta delegados y cinco miembros en el ejecutivo, pero también fue marginado desde el principio por su falta de experiencia para presionar al congreso hacia la formación de un frente unido de izquierda para las elecciones. Esta posición fue asumida también por Filemón Escóbar, de Vanguardia Obrera, quien hablando a nombre del Cañadón Antequera instó a formar un frente de izquierda organizado en una sola fórmula de la COB, proyectando así una amplificación de los límites tradicionales del sindicalismo y presionando a Lechín para que declarara su candidatura contra Paz y Siles. Empero, Lechín jamás había recibido el mismo nivel de respaldo en su actividad sindical para sus empeños políticos y aunque el PRIN participaba en las elecciones, no tenía muchas oportunidades de plantear ni siquiera una pequeña amenaza a la UDP. Otra resolución que fracasó aún más rápidamente fue aquella de Siglo XX-Huruchi, que presentaba la defensa que hacía el PCML de su alianza con el MNR; la línea de ese partido fue atacada con bastante encono y su representación en el ejecutivo se redujo de siete a un miembro, tomando uno de los puestos los maoístas disidentes. Así, el documento de la minoría

escogido por la plataforma para ser debatido en contra de la resolución del PC fue el presentado por Ascensio Cruz del POR (Lora) a nombre de Siglo XX. Esa elección reflejaba la fuerza del PCB en la plataforma, puesto que la resolución trotskista ortodoxa de Cruz denigraba el "cretinismo parlamentario", atacaba las dos fórmulas principales como burguesas, subrayaba que la democracia formal no tenía raíces históricas y era demasiado débil para brindar solución alguna a la crisis, incluso a corto plazo, y convocaba a la construcción de un movimiento revolucionario dirigido al establecimiento de una dictadura del proletariado. Aunque el discurso de Cruz fue tan bueno como de costumbre, tanto él como el comité organizador sabían que la intervención del POR había sido diseñada con fines propagandísticos, tenía un respaldo mínimo y sería fácilmente desechada frente al documento del PCB.

No obstante, la fortaleza organizativa del PCB no era garantía alguna de éxito, ya que una buena cantidad de delegados independientes dudaba de los méritos de una resolución que, en la práctica, los comprometía a apoyar a un frente liderado por Hernán Siles Zuazo. Salas intentó oponerse a esta corriente de desaveniencia, argumentando que: "...no somos defensores del Doctor Siles, porque el carácter del frente se hace con otras clases y no con hombres..."[33] Aprovechándose de la ventaja que significaba la elección del documento del POR como posición de minoría, Reyes indujo toda la oposición a la línea udepista al "infantilismo trotskista": "...la verdadera disyuntiva que se está dando aquí es que nosotros planteamos con honestidad que la tarea del momento es la defensa del proceso democrático que permite avanzar; y los que están a nuestro frente dicen que la disyuntiva es fascismo o dictadura del proletariado, lo que implica llevarnos inevitablemente a la derrota, como ya ha sucedido...".[34] Si bien los acontecimientos no tardarían en revelar que el análisis trotskista era bastante más concreto de lo que parecía en ese momento, la tentativa de Reyes de utilizar a su favor las ventajas del "sentido común" fue demasiado lejos. Cuando los delegados estaban listos para votar, un gran sector que no simpatizaba con ninguna de las resoluciones y contrariado por tener que elegir entre ellas, pidió que Lechín tome la palabra. El viejo líder, que no sentía demasiado cariño por los comunistas y era completamente capaz de prescindir del POR con indulgencia paternalista, tardó menos de una hora en saborear a la previsible mayoría comunista, en un discurso de ingenio con frecuentes y hábiles referencias históricas y una autocrítica táctica. Enumeró

33 *Aquí*, (La Paz), 12-18 de abril de 1980.
34 *Ibid.*

los errores del período movimientista admitiendo que él mismo creyó equivocadamente que Paz estaba a la izquierda y recordó a los delegados que el 9 de abril surgieron "...dos posiciones que se sintetizan en dos trilogías: la primera, sustentada por los mineros: nacionalización de las minas, reforma agraria y libertades plenas para el pueblo; y la segunda propuesta por Siles: volver, vencer y perdonar, palabras abstractas mientras nosotros planteamos cosas concretas".[35] Habiéndose extendido en el tema de la reconstrucción de las FF.AA. bajo la presidencia de Siles, Lechín describió la resolución del PCB como "honesta pero confusa" porque, si bien no instaba claramente a votar por la UDP, ése era su mensaje subyacente e inaceptable. Rechazó las proclamaciones a favor de su propia nominación para fórmula de la COB, pero parecía respaldar la idea de una candidatura independiente de la clase obrera; por último proponía que el nuevo comité ejecutivo elabore otro documento "...tomando en cuenta los sentimientos del proletariado minero...", y esto resultó ser una componenda aceptable para la mayoría de los delegados.

Las conclusiones del congreso de Telamayu fueron expresión del estado político más general de la clase obrera durante los meses previos a unas elecciones que eran consideradas como la última oportunidad de garantizar una democracia parlamentaria. La UDP siguió siendo el frente más popular, pero no logró obtener el respaldo formal del movimiento sindical a sus planteamientos y fue gravemente derrotada en diversos temas. Con todo, la oposición presentada por la izquierda revolucionaria se distinguía de aquella del sindicalismo tradicional, confirmando con ello la tendencia a una repetición del estado de cosas de 1979: un sentimiento generalizado de precaución que a menudo se manifestaba en apatía o pesimismo, pero que no se apartaba de la convicción sobre la necesidad de defender el proceso electoral; certeza igualmente generalizada de que la UDP representaba la única fuerza progresista viable y por lo tanto merecía votos tácticos. Asimismo, el PS-1 obtuvo beneficios limitados pero continuos como el principal desafío del ala izquierda.

Un creciente sentido de descontento en el terreno económico era el telón de fondo de esta situación, después de la nada concluyente respuesta de la COB a la devaluación. Durante los primeros meses de 1980, una serie de disputas fabriles engendradas más por la exasperación que por una campaña coordinada acosaron al gobierno de Lydia Gueiler. Los empleados bancarios salieron a las calles en diciembre para reclamar un sueldo mínimo de 3.500 pesos bolivianos acordado en agosto; a ellos se sumaron los trabajadores del Lloyd Aéreo

35 *Ibid.*

Boliviano (LAB), del Servicio Nacional de Caminos (SNC), de las plantas procesadoras de leche (PIL), los maestros y los obreros de la construcción y de los ingenios. A fines de abril, la COB dirigía la mayor parte de su atención a la campaña por un salario mínimo calculado sobre la base de una serie discutida de necesidades de consumo o "canasta familiar".[36]

Naturalmente, las estimaciones de ésta variaban enormemente de la cifra de los maestros de Cochabamba, de 12.405 pesos bolivianos a aquella presentada por el Ministerio de Industria, de 6.382; la propia COB presionaba por 9.273 pesos bolivianos.[37] La unanimidad de la clase obrera en el tema del salario obligaba a un régimen de por sí débil a ceder más terreno del que deseaba; finalmente accedió a conceder bonos por la inflación, los cuales oscilaban entre cinco mil pesos bolivianos en el sector industrial y dos mil a los jubilados. Aunque el sesenta por ciento de la población asalariada recibió menos de tres mil pesos bolivianos y por lo tanto seguía teniendo un ingreso inferior al considerado mínimo por la COB, el incremento fue lo suficientemente grande como para provocar el rechazo inmediato y sin reservas de la CEPB, algunos de cuyos afiliados mostraban temor frente a las consecuencias económicas de una victoria de la UDP y buscaban, aunque menos abiertamente, posibilidades alternativas.

La campaña de los golpistas destinada a conservar y ampliar su influencia dentro de las FF AA para mantener a la administración de Lydia Gueiler bajo riguroso control a fin de desestabilizar el proceso electoral cobró impulso y se hizo cada vez más explícita a partir de principios de año. En la segunda semana de enero, un ampliado de la CSUTCB originó rumores sobre la inminencia de una "invasión india" hacia los suburbios de la clase media de la capital. El sindicato campesino acusó al jefe de estado mayor de la Fuerza Aérea, general Waldo Bernal, de propagar ese rumor y de pretender que cundiera el pánico.[38] Dos semanas más tarde, El Diario sacó un aviso suscrito por un misterioso "Comité de Salud Pública", el cual afirmaba que las elecciones habían fracasado e invitaba a los militares a "regresar al escenario político".[39] A principios de febrero, los movimientos nocturnos de tropas eran de una intensidad poco acostumbrada: el 8 de febrero, en las oficinas del semanario independiente de izquierda Aquí explotó una bomba, causando graves daños. Aquí no era el único que había advertido acerca del peligro de un nuevo golpe prácticamente en cada una de sus ediciones, pero para la derecha era especialmente repugnante porque su director, el jesuita Luis Espinal, y su pequeño equipo de periodistas (Edgardo Vázquez, Gastón Lobatón, Lupe Cajías y René Bascopé) a lo largo del primer año de su existencia habían producido una serie de detallados informes de investigación que cualitativamente resultaban más perjudiciales que la fatua prosa del estilo acostumbrado de la prensa local, sea de izquierda o de derecha. La bomba parecía obra del coronel Arce Gómez, quien había sido entrenado en el empleo de explosivos por el ejército español y además se sabía que él tenía un gran interés en refrenar las actividades de Espinal.

36 Coyuntura, (La Paz), N° 43, 15 de abril de 1980.
37 *Ibid.*, N° 42, 1° de abril de 1980.
38 *Ibid.*, N° 38, 1° de febrero de 1980.
39 El Diario, (La Paz), 27 de enero de 1980.

El mismo día, el comandante de la Fuerza Aérea, Niño de Guzmán emitió una declaración pública advirtiendo contra la amenaza de una "dictadura anarcosindicalista", lo cual contribuyó a que el embajador Boeker reiterara, bastante extensamente, la Doctrina de Carter y la postura de Washington, frente a los cada vez más belicosos generales:

> La explosión de intereses en este momento es producto de demasiados años de gobierno de hecho... Los conflictos están originados en los gobiernos de hecho... Como ha sucedido en otras partes, cuando cae un gobierno de hecho, que ha reprimido los derechos, hay una explosión social que representa peligro mayor para la sociedad... Vamos a cooperar con gobiernos de varios tipos, lo hemos hecho en el pasado y vamos a continuar por ese camino, pero mantenemos nuestra posición en sentido de que el sistema que más perspectiva tiene para resolver las tensiones y problemas que pueden poner al borde de la destrucción a una sociedad es el sistema democrático.[40]

El 28 de febrero, los rumores ante la inminencia del golpe impulsaron a Lydia Gueiler a dirigirse al Congreso para negar que hubiera de renunciar, al mismo tiempo que prometió dar la vida por la democracia; por su parte, el resueltamente indolente Reyes Villa fue persuadido para declarar que, siempre que no "hubiera subversión", las FF AA apoyarían el proceso electoral. Sin embargo, la estrategia y la situación de tensión seguía prevaleciendo; el 4 de marzo, la COB, que había intentado restringir la ola de rumores, reveló que había recibido información sobre planes para una "masacre del Día de San Bartolomé" o de una "noche de los Cuchillos Largos"

40 Coyuntura, (La Paz), N° 39, 15 de febrero de 1980.

en la cual unas trescientas figuras políticas y sindicales, incluyendo a Lechín y Quiroga Santa Cruz, serían asesinadas. Los transportistas convocaron a otra huelga y el Comité Pro Santa Cruz instó a dieciséis diputados del departamento a renunciar en protesta por la autorización que había dado el gobierno para instalar un nuevo ingenio azucarero en el departamento de La Paz.[41]

Al día siguiente, la COB y los principales partidos políticos (excluyendo a la ADN pero incluyendo al MNR) emitieron un "llamado a la defensa de la democracia" que habría de llevar a la fundación, un mes después, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE).[42] La participación de la COB en el establecimiento de CONADE señaló su incorporación formal y absoluta al proyecto electoralista, y que el único propósito de esta organización era el de prevenir cualquier golpe contra los comicios a través de medios como la huelga general y el bloqueo de caminos, utilizados ya durante la resistencia a Natusch. Personas como Paz y Guevara ahora admirían que ésta era la única manera de garantizar unas elecciones sin problemas. El PS-1 era reacio a firmarlo, ya que representaba un acuerdo interclasista y puramente defensivo para sostener las elecciones y no era una iniciativa obrera libre de restricciones. Sin embargo, finalmente Quiroga introdujo a su partido en el pacto en contra de las críticas de las izquierda revolucionaria, pero con reservas muy publicitadas sobre su limitado alcance y sobre los peligros potenciales.[43]

La unidad de la COB y de los principales partidos, más que haber inspirado un sentido de sobriedad en Miraflores, parece haber precipitado medidas dirigidas a adelantarse a cualquier acción de los institucionalistas. El 21 de marzo se encontró en un matadero municipal, en la afueras de La Paz, el cuerpo horriblemente torturado de Luis Espinal. El propio semanario Aquí, ahora privado de su fundador, editor y crítico de cine, no tardó en apuntar su dedo acusador hacia la persona de Arce Gómez, subrayando que el asesinato claramente llevaba el sello de los militares argentinos, de quienes había una cantidad trabajando como consejeros en La Paz. Tanto Espinal como su personal estaban muy conscientes de que, durante muchos meses, habían estado siendo

41 Selser, *op. cit.*, p. 44

42 Sobre detalles ver *Coyuntura*, N° 41, 15 de marzo de 1980; N° 43, 15 de abril de 1980.

43 Sobre la posición del PS-1 consulta: *Aquí*, (La Paz), 10-15 de mayo de 1980. El partido fue objeto de una crítica particularmente severa por parte del POR, el cual mantuvo sus críticas al parlamentarismo a lo largo de este período (Guillermo Lora: *El PS-1 responde a la ideología burguesa*, La Paz, 1979; y *¡Los electores sirven a la burguesía!. La inutilidad de la democracia*, La Paz, 1980).

observados muy de cerca y que eran seguidos por operativos del G-2 y probablemente por otros grupos de paramilitares que, se creía, estaban organizados bajo la dirección de Arce Gómez con el asesoramiento de los argentinos. A mediados de abril, Aquí sostuvo que tales grupos controlaban diecisiete "casas de seguridad" en La Paz y participaban de ellos figuras que estuvieron involucradas en los asesinatos de los regímenes de Ovando y Banzer.[44] La decisión de eliminar a Espinal, una figura enormemente popular, bien pudo haber sido dispuesta a raíz de los preparativos para organizar CONADE, pero es igualmente posible que se hubiese debido a la publicación que hizo el semanario Aquí la semana anterior revelando que la fuerza aérea había torturado y asesinado a un desertor, Máximo Mamani, quien se presentó a sus cuarteles, después de que sus oficiales habían declarado que la desaparición de una cantidad de ametralladoras de sus arsenales era responsabilidad de una "red extremista" que actuaba bajo la dirección de Mamani.[45]

A pesar de la consolidación de CONADE, Lydia Gueiler resultó incapaz de detener a los golpistas. Es más, parece discutible que se hubiera esforzado por conseguirlo. El 9 de abril, la presidenta anunció que el comandante del Ejército, general Rocha Patiño, sería reemplazado por su primo García Meza, uno de los miembros más destacados de la corriente de línea dura. La confirmación del nombramiento tomó cinco días porque, si bien García Meza había recibido un amplio apoyo de la guarnición de La Paz, enfrentaba la rígida oposición de Santa Cruz, donde Echeverría tenía sus propias ambiciones, en tanto que Oruro y Cochabamba declaraban su "neutralidad" públicamente porque García Meza había sido comandante del Ejército con Natusch y el artículo 48 de la Ley Orgánica de la institución castrense prohibía ocupar ese cargo dos veces a cualquier oficial. El aspirante desechó alegremente esta objeción sobre la base de que su primer nombramiento había sido un "acto de régimen de facto" y por lo tanto no podía sujetarse a consideraciones legales o constitucionales. A la larga, Lydia Gueiler se resignó ante este desatino, proclamando el 12 de abril: "...por su trayectoria y por el juramento que acaba de prestar, mi gobierno y sus compañeros de armas ven en él un militar que pondrá todo su empeño y capacidad al servicio de los altos intereses del país, de la constitucionalidad y del orden legalmente constituido".[46]

44 *Aquí*, (La Paz), 5-11 de abril de 1980. Una selección de los escritos de Espinal y relatos sobre su vida aparecen en Luis Espinal: *El grito de un pueblo*, Lima, 1981.

45 *Ibid.*, 1-8 marzo de 1980.

46 *Coyuntura*, (La Paz), N° 44, 1° de mayo de 1980.

El general Rocha Patiño declaró contundentemente que Lydia Gueiler se las había arreglado para despejar el último obstáculo para el golpe, justificando aparentemente el apodo popular de "la princesa idiota" con el que se referían a la presidenta. Un mes después, el reaccionario pero de alguna manera indolente Niño de Guzmán fue reemplazado por el más impulsivo Waldo Bernal como jefe de la Fuerza Aérea.

Es posible que Lydia Gueiler aceptara el nombramiento de García Meza no sólo porque eran parientes sino también debido a que éste no tenía antecendentes de afiliación política, no estaba próximo a Banzer o Santa Cruz y no mostraba signos de ser muy inteligente. Fuera cual fuera la razón, al general no le faltaba tesón e inmediatamente comenzó a poner en duda las elecciones. A los cuatro días de su designación, García Meza volvió al Colegio Militar para dar un discurso que se debilitó bajo el peso de frases semiliterarias y todo el galimatías pomposo que tanto fascina a los comandantes de alto rango pero que de ninguna manera estaba diseñado para tranquilizar a la presidente, a los partidos políticos, a la COB o al Departamento de Estado:

> ...El país se debate en el caos político, en la debacle económica, el hambre, la miseria agravados por el terrorismo subversivo de la ultraizquierda, la presión desembolsada del neocolonialismo y sus gobiernos y la amenaza de una virtual disolución del cuerpo nacional por el ofrecimiento de un "nicaraguazo"... las FF AA... intérpretes de las verdaderas ansiedades y aspiraciones... del pueblo real de Bolivia... conforman una instancia política , orgánica y rígida , con ideología y sentido social bolivianista, que deviene fuerza tutelar de la existencia nacional. Ante el fracaso histórico del partidismo, las fuerzas armadas, por su propia responsabilidad, están impelidas a reabrir los periodos de vacío político o de conflicto de poder, o bien propugnar la inédita democracia contra aquella del reino de las elecciones fraudulentas...[47]

Interrogado acerca de esta "democracia inédita" que había adoptado, García Meza fue algo más coherente:

> ...Es que la democracia no ha dado resultados positivos en el país. Este es un país joven en el que se ha hecho una mala interpretación de la democracia, lo que ha llevado a degenerar en amenazas contra las Instituciones y contra el principio de autoridad. Se ha confundido la famosa democracia con libertinaje. Todas las Instituciones están en caos...

47 *El Diario*, (La Paz), 16 de abril de 1980.
48 *Apertura*, (La Paz), N° 1, 30 de abril, 6 de mayo de 1980.

> Entonces, ¿hay solución democrática para el país?
> Todavía no puede haber una democracia así. La democracia que yo concibo será controlada y a la boliviana. No se puede hablar de democracia mientras haya extremismos. Las fuerzas armadas son de extracción popular. Lo que quieren los extremismos es enfrentarnos con el pueblo del que vinimos. Ser indio es un orgullo.... No trabaja nadie en este país. Decimos que somos ricos, pero no hacemos nada para salir de nuestra condición... en este país no hay líderes. Los viejos no pueden seguir teniendo vigencia ...que se jubilen los viejos... Yo no tengo concomitancias con el pensamiento del general Ovando. He leído algo, sí; pero no comparto con sus ideas... en este país ya no hay qué nacionalizar...[49]

Ésta fue una de las entrevistas más suaves entre las muchas que ofreció el nuevo comandante del ejército una vez que asumió su cargo; sus pronunciamientos públicos revivieron los temores de otro golpe. En reacción a este miedo, el Comité Ejecutivo de la COB –no CONADE– dio el inaudito paso de firmar un pacto con el alto mando. Este acuerdo –firmado el 29 de abril por Lydia Gueiler, el alto mando (incluyendo a García Meza) y los siete miembros más destacados de la COB– comprometía a ambas partes a respetar la Constitución, a iniciar un diálogo y "...ratificar un solemne compromiso para observar un recíproco respeto y para dedicar el esfuerzo conjunto a la vigencia y sostenimiento del proceso democrático que debe culminar con el acto eleccionario y su consolidación..."[50] Con ese acuerdo, la COB rompía su larga tradición de rechazar cualquier pacto o tregua escrita con los militares y fue objeto de duras críticas de la izquierda. Empero, muy pronto se comprobó que el concordato era absolutamente inútil: en el curso de tres semanas, García Meza anunció que los diputados que acusaron de alta traición a Banzer deberían ser juzgados por una corte marcial, dos días más tarde negó que el "pacto" con la COB fuera otra cosa que un "diálogo".[51] Un estrípido papel no iba a detener un golpe.

El 15 de mayo se cerró los registros electorales y se confirmó un nivel de participación muy similar al del año anterior. Después de febrero, el esfuerzo más categórico para alterar la situación había sido hecho por el PS-1 que intentó persuadir a los principales partidos de la UDP, al PRIN y al MRTK de sumarse a un frente unido de izquierda conformado por partidos obreros. Sin embargo, este esfuerzo dejó de recibir apoyo de afuera de las filas del PS-1 y finalmente fracasó por el franco antagonismo del MIR y por la insistencia del

49 *Coyuntura*, (La Paz), N° 44, 1° de mayo de 1980.
50 *Ibid.*, N° 46, 1° de junio de 1980.

PCB sobre un movimiento interclasista, el apoyo a CONADE, la supremacía de los medios electorales para lograr el cambio y la disipación de toda idea de insurrección como característica válida de conducta política, a no ser en una situación revolucionaria futura.[51] Así, el PS-1 se quedó solo una vez más y únicamente podía esperar que contaran a su favor minoría de votos extras que quedaban después de que Lechín retiró la candidatura del PRIN de la contienda electoral y declaró su decidido apoyo a la UDP. Esta fórmula incluía también al MRTK, que ahora se sentía obligado a seguir apoyando a un frente al que había renunciado airadamente luego de experimentar una serie de desatinadas agresiones organizativas por parte del MIR. La fórmula de Banzer se mantuvo intacta, aunque los administradores de ADN habían considerado oportuno reemplazar la antigua consigna con "Banzer vuelve", puesto que ello, pensaban, resultaba más consistente con el estilo menos provocativo que había adoptado el partido después del natuschazo y una situación en la que existía una amenaza golpista independiente dentro de las FF AA. La diferencia capital respecto a las elecciones de 1979 se esperaba que iba a radicar en la suerte del MNR, el cual había perdido bastante popularidad no tanto por las dudas acerca de la participación de Paz en el golpe de Natusch como por la devaluación que introdujo el partido en noviembre y por su casi completa identificación con la administración más frágil que haya gobernado Bolivia durante una década. No obstante este giro, ni la posibilidad de traducirse en escaños congresales llegó a ocupar el primer plano de los acontecimientos políticos, simplemente por lo dudoso que resultaba el proyecto electoral en su conjunto. A lo largo del mes anterior a las elecciones, esta incertidumbre crecía aún más a medida que los golpistas profundizaban sus preparativos.

La fase final de los planes destinados a desestabilizar los comicios se inició el 2 de junio, cuando una avioneta contratada por la UDP de una compañía propiedad de Arce Gómez y de un coronel de la Fuerza Aérea, Norberto "Buby" Salomón, se estrelló segundos después de despegar de El Alto en dirección al Beni, donde los más altos representantes del frente debían realizar una campaña electoral. Hernán Siles Zuazo debía viajar en ese avión, pero a último momento tuvo que desistir para concurrir al entierro de un pariente; el único sobreviviente fue Jaime Paz Zamora, quien se lanzó fuera de la aeronave en cuanto ésta chocó con tierra y poco antes de que explotara. El grave estado de Paz Zamora

51 Sobre la historia de las propuestas del PS-1 ver *Ibid.* y *Mañana el pueblo*, (La Paz), N° 1, junio de 1980. Sobre la respuesta del PCB: *Aurora*, (La Paz), 7-13 junio de 1980

significó que después de una operación de emergencia en una clínica de la ciudad de La Paz (hasta donde tuvo que llegar en el ómnibus de pasajeros del LAB, ya que no había ninguna ambulancia en el aeropuerto), custodiada por militares por mayor seguridad, fuera llevado a Estados Unidos para seguir un tratamiento acelerado de sus quemaduras, después del cual no sólo recuperó la salud y su buena apariencia, sino que evitó exponer su vida a mayores riesgos. Aunque el accidente se produjo por la obstrucción de un motor y no por la explosión de bomba alguna, el hecho de que el día anterior estallara precisamente una bomba en el domicilio de Paz Zamora originó fuertes sospechas de sabotaje. Además, la propiedad de la avioneta volvían dudosas las declaraciones tan apresuradas de las autoridades de aviación atribuyendo el accidente a una "falla técnica", aun para las mentes de ciudadanos que no eran expertos en aviación. El coronel Salomón no tuvo dificultad alguna en cobrar el seguro.[52]

Al día siguiente, CONADE se declaró en estado de emergencia, no tanto por las muertes de los líderes de la UDP como porque el Washington Post había publicado un artículo, suscrito por su corresponsal Charles Krause, donde se afirmaba que el golpe había sido planeado para el 20 de mayo, pero que abortó a último momento ante la falta de apoyo de los oficiales de menor rango y de los suboficiales. Krause fue sacado del hotel Sheraton por hombres vestidos de civil y fue sometido a un violento interrogatorio por Arce Gómez, quien le exigía que señalara las fuentes de aquella información. El nuevo embajador norteamericano, Marvin Weissman, había intervenido para detener el levantamiento, al ser informado por la Agencia Militar de Inteligencia (DIA) que el agregado militar argentino había enviado repentinamente de vuelta a su familia en un viaje de vacaciones. Por entonces ya era ampliamente sabido que los argentinos estaban desempeñando un papel importante en los operativos de la unidad de Arce Gómez y sus miembros no oficiales. A través de Weissman, el Pentágono envió un telegrama a García Meza previniéndole en contra de cualquier rebelión. El 4 de junio, el portavoz del Departamento de Estado, Hodding Carter, respaldó dicho telegrama con una fuerte declaración pública a favor del proceso democrático. Al conocerla, el alto mando emitió de inmediato una respuesta en la que se refería a lo expresado por Carter como una "calumnia" e "insolencia" y declaró que "... sea cual fuere el pretexto, ningún país puede inmiscuirse en los asuntos de Estados soberanos e independientes como el nuestro... Las FF AA de la Nación declaran TRAIDORES A LA PATRIA a todos aquellos que expresen su apoyo al descarado intervencionismo del

52 *Golpe*, 5-11 junio de 1980; *Esto Es*, N° 2, 28 de septiembre de 1982.

gobierno de los Estados Unidos".[53] Esto resultó sorprendentemente fuerte, pero no muy diferente de ciertas declaraciones vertidas por oficiales chilenos o argentinos ante la presión que ejercía sobre sus gobiernos la administración de Carter. Sin embargo, el día 6, el General Echeverría, comandante del Segundo Cuerpo de Santa Cruz, anunció que si Weissman no abandonaba el país inmediatamente, avanzaría con sus unidades hasta La Paz para expulsarlo. Al día siguiente, el alto mando declaró formalmente persona non grata al embajador, lo cual provocó no la correspondiente censura de parte del gobierno, sino una declaración de su comprensión hacia los sentimientos que se habían despertado en los círculos militares; pero no obstante reafirmaba su convicción de que las elecciones estaban recibiendo pleno apoyo internacional.[54]

Esto brindaba una oportunidad sin igual a un grupo de la FSB, del sector de Carlos Valverde, para utilizar una marcha de la izquierda y manifestar sus posturas antiyanquis; ese sector anunció que se iniciaría una huelga de hambre ocupando primero la Nunciatura y luego, cuando no se permitió el ingreso a la prensa, los pasillos del Congreso, para protestar contra la "intervención imperialista". Este acto de abnegados principios fue abiertamente prolongado gracias a la infusión de espesas y fuertes bebidas, pero bruscamente interrumpido cuando después de una casual visita nocturna, la prensa reveló que también los pollos "a la broaster" estaban incluidos en el menú.

El explícito respaldo brindado por Washington a los comicios electorales no sólo fue interpretado como la garantía absoluta de que éstos se celebrarían por la UDP y el MNR, sino también por la ADN. A partir de noviembre, la izquierda parlamentaria no se había destacado por sus filípicas contra el imperialismo; ahora se encontraba rebasada por la extrema derecha, cuyos vituperios contra el neocolonialismo yanqui evidentemente no obedecían a una mera maniobra de propaganda, sino también a que se sentía lo bastante segura como para lanzar una amenaza a su patrón tradicional. El vigor del apoyo argentino desempeñó un gran papel en esto y superó la falacia de aquellas perspectivas simplistas referentes a la relación entre las metrópolis y sus aliados periféricos. Si hubo algún momento en que se vislumbró la decisión política de poner en escena un golpe, fue éste. La izquierda, sin embargo, se equivocó al no tomar tan seriamente la posibilidad de que la ruptura entre los militares y EE UU fuera más que momentánea o que pudiera tener mayores consecuencias. Al

53 Presencia, (La Paz), 5 de junio de 1980.
54 Ibid., 8 de junio de 1980.

POR se lo tildó de "golpista" porque denunció a Carter por su intervención, lo mismo que a García Meza por su ya plancado golpe y, obviamente, la participación entusiasta de Banzer en el proceso electoral fue interpretada como su negativa al alto mando de brindarle la base social o política para la realización de un golpe. Se consideraba que García Meza y Arce Gómez representaban apenas una minoría en el cuerpo de oficiales y se depositó una confianza desmedida en CONADE, que en realidad existía sólo en el papel y estaba lejos de estar adecuadamente preparado.

Las señales de advertencia no se detuvieron allí. El mismo día que el alto mando emitió las órdenes para que Weissman abandonara el país, la propia presidente se convirtió en víctima de la agresión militar. A pesar de su público fracaso en ofrecer la más mínima resistencia al avance de los militares de línea dura, Lydia Gueiler evidentemente albergaba sus propios temores ya que inclusive dentro de la moderna y bien protegida residencia presidencial de San Jorge tomaba la precaución de cerrar su dormitorio con llave. Fue esta acostumbrada previsión la que le salvó la vida, cuando a las seis de la mañana del 7 de junio el comandante de su escolta, coronel Carlos Estrada, llegó a la residencia en estado de total ebriedad, ordenó a los guardias rodear el edificio y armado con un rifle automático intentó ingresar en el dormitorio de la presidenta para matarla. Los gritos y los golpes de Estrada en la puerta le dieron tiempo a Lydia Gueiler para telefonear pidiendo ayuda y ese aislado propósito tuvo un rápido final gracias al asistente de la presidenta y a su personal que vencieron y desarmaron al posible asesino sin mayor dificultad. Fue un intento alocado y difícilmente correspondiente al repertorio de los fríos coroneles argentinos que asesoraban a Arce Gómez, pero sirvió para subrayar la extrema fragilidad de la situación. Dos días más tarde, el alto mando reunido en Cochabamba pidió una postergación de las elecciones por lo menos por un año, arguyendo que la campaña estaba originando desórdenes, empeorando la situación económica y que los comicios habían sido pésimamente organizados y darían lugar a un gobierno débil.[55] Esta nueva estratagema fue rechazada inmediatamente por todos los partidos interesados, con excepción de la propia presidente, quien demoró dos días en anunciar que las elecciones se realizarían el 29 como estaba previsto; la prensa de izquierda describió el cónclave de Cochabamba como una reunión dedicada fundamentalmente a programar el inminente golpe. Durante los días siguientes, los líderes militares no hicieron más declaraciones, sino para anunciar que estaban alertas "contra cualquier

55 Coyuntura, (La Paz), N° 47, 15 de junio de 1980.

intento de imponer sistemas ajenos a Bolivia", pero Echeverría permitió a la FSB y a un grupo de campesinos "nacionalistas" tomar la ciudad de Santa Cruz durante dos días, sin mayor estorbo u obstáculo; en ese lapso el prefecto fue gravemente herido y prevaleció un caos no muy diferente al de agosto de 1971, hasta que la COD y los estudiantes desalojaron a los falangistas con la fuerza de las armas. En La Paz, en el café Lido, lugar predilecto de la izquierda, explotó una bomba ocasionando la pérdida de dos vidas; también se lanzaron granadas contra una manifestación de la UDP, con el resultado de cuatro muertos y 63 personas heridas. La autoría de tales actos no se ponía en duda, como lo señala la siniestra introducción en la jerga local del verbo "arcesinar", en lugar de "asesinar".

Si tales actividades formaban parte de una estrategia cuidadosamente graduada, la misma no incluyó la interrupción o cancelación de los comicios mismos. Las elecciones tuvieron lugar el 29 de junio de manera ordenada y sin mayores problemas. El procesamiento de los resultados fue extremadamente lento, pero pronto se hizo evidente que la UDP había obtenido la victoria, la cual, a pesar de un descenso en la votación global, fue más decisiva que aquella de 1979. El claramente derrotado Víctor Paz no tardó en admitirlo, aunque lo hizo en un estilo un tanto ambiguo: "La UDP debe estar destinada a ser gobierno". Banzer, que había recibido un buen número de votos, reconoció igualmente el resultado y la ADN se comprometió públicamente a desempeñar el rol de una oposición responsable. Ningún partido aludió al fraude o intentó frustrar la fórmula Siles-Paz Zamora, reclamando para sí la presidencia. La UDP carecía de una mayoría congresal plena, pero había sobrevivido a los considerables rigores del año anterior para reivindicar su mandato popular. Una vez realizados los comicios, la amenaza del golpe parecía haber disminuido; Siles sería posesionado como presidente el 6 de agosto, Día de la Independencia de Bolivia.

No hubieron pronunciamientos militares ni signos de una actividad inusual luego del anuncio de los resultados el 10 de julio. Cuando el 14 Siles se encontró frente a los comandantes de las tres fuerzas, a raíz de una reunión organizada por Bedregal y Fellman Velarde, quienes no habían advertido ni a uno ni a los otros a quiénes iban a ver y dónde –y en consecuencia fueron rápidamente expulsados de la misma–, Siles se limitó a declarar que la UDP se reservaba el derecho de efectuar nuevos nombramientos institucionales, pero que respetaría la ley orgánica de las FF AA. García Meza, Bernal y Terrazas respondieron comprometiéndose a apoyar la Constitución, pero los tres sabían que, tal y como estaban las cosas, sus carteras tenían menos de tres semanas de vida.

Al final, fue García Meza quien inició el golpe y Arce Gómez quien garantizó su éxito. A las cinco de la mañana del 17 de julio el coronel Francisco Monroy tomó Trinidad, escenario del intento de golpe de octubre de 1979 y cuartel general de la Sexta División, cuyo comando una vez estuvo a cargo de García Meza, quien casualmente estaba allí ese día. A las siete y cuarto de la mañana, Monroy proclamó el derrocamiento de Lydia Gueiler, la anulación de los resultados electorales y la conformación de una junta militar. Las noticias sobre el levantamiento llegaron a La Paz cuarenta minutos después, pero al principio no fueron tomadas muy en serio. A las ocho y media, CONADE convocó a una reunión para las once de la mañana y a esa misma hora los dirigentes de la UDP se trasladaron a palacio para conferenciar con Lydia Gueiler.

No hubo actividad militar adversa en La Paz, aunque la guarnición de Santa Cruz se había declarado "en emergencia". A las once y diez, los dirigentes de CONADE acordaron llamar a una huelga general y al bloqueo de todas las carreteras, emitieron un comunicado para tal efecto y empezaron a discutir un plan detallado de acción. Media hora después, Arce Gómez asestó el golpe, no con la utilización de tropas sino de personal paramilitar que convenientemente circulaba en ambulancias para iniciar sus acciones desprevenidamente. Unos veinte hombres se agolparon en el edificio de la COB y fueron cubiertos por fuertes descargas de fuego que se prolongaron por veinte minutos. Tanto el líder de la FSTMB, Gualberto Vega, como Carlos Flores, un líder del POR (Vargas), fueron inmediatamente asesinados, mientras que el resto de los ocupantes se rindió cuando hubo cesado el fuego. En el momento en que salían, un miembro del grupo agresor intentó separar a Marcelo Quiroga del resto. El líder socialista se negó a moverse y le dispararon *in situ*. Treinta y cinco personas, entre las que se incluían Lechín, Reyes, Liber Forti, Víctor Sossa, Noel Vásquez y el padre Julio Tumiri, fueron tomadas prisioneras.

Al conocer esta noticia, Siles, Antonio Araníbar y Jorge Kolle, que habían estado en palacio, entraron en la clandestinidad, librándose por muy poco del asalto al palacio, que fue ejecutado con igual rapidez y eficiencia. Lydia Gueiler fue inmediatamente apartada de sus ministros y de los periodistas que asistían a su conferencia de prensa, fue conducida a Miraflores para firmar su renuncia, mientras que los demás fueron apaleados y obligados a recostarse boca abajo por varias horas en el suelo cubierto de estiércol de los establos de los cuarteles que se encontraban cerca. Otro grupo paramilitar, al mando de Fernando "Mosca" Monroy, a quien Arce Gómez había liberado recientemente del Panóptico, tomó radio Fides. En pocas horas, solamente la radio Batallón

Cuadro 11
Elecciones del 29 de junio de 1980

Fórmula	Principales partidos	Candidatos	Votos	Escaños
UDP	MNR MIR, PCB MPLN, VC PS - Atahuichi	Hernán Siles Jaime Paz Z.	507.173	53
MNRA	MNR MNRI-1, POML	Víctor Paz Nuflo Chávez	263.706	45
ADN	ADN PIR, MARC	Hugo Banzer Jorge Aramayo	220.309	25
PS-1	PS-1	Marcelo Quiroga José María Palacios	113.309	11
FDRNA (a)	PCC PS, AJR PCR (Vargas)	Luis Adolfo Siles Benjamín Miguel	30.401	5
PEA	PEA	Wálter Guevara A. Flavio Machicado	36.443	3
MNR-Unido	MNRU MIN	Guillermo Bedregal Miguel Irigo	24.452	2
FSB	FSB	Carlos Valverde Enrique Riveros	21.372	2
PRIN	PRIN MRTK, DST PO+ (Combate)	Juan Lechín Aníbal Aguilar P.	(se retiró)	
ADN-MNR (b)	MNR-Unidad	Roberto Jordán P. Edmundo Roca Díez	17.150	
MITKA-1	MITKA-1	Constantino Lima Honorato Sánchez	17.023	1
MITKA	MITKA	Luciano Tapia Medardo Vélez	15.852	1

Notas: (a) Frente Democrático Revolucionario Nueva Alternativa
(b) Alianza de Fuerzas de la Izquierda Nacional

Fuentes: *Coyuntura*, Nº 46, 1º de junio de 1980; *Hoy*, (La Paz), 22 al 24 septiembre de 1982.

Colorados salía al aire y los rebeldes tenían bajo su control todos los puntos estratégicos de la ciudad incluyendo la universidad. Las tropas no salieron a las calles para impedir manifestaciones masivas sino a las tres de la tarde, en tanto que los grupos de paramilitares allanaban los domicilios de aquellas personas que estaban en la lista de archivos del SIE que Arce Gómez había secuestrado. La huelga de CONADE había entrado en vigor, pero la rebelión ya se había consolidado. Las lecciones que había brindado la caída de Natusch,

los ocho meses de planificación y el asesoramiento del personal argentino estaban en total evidencia.

La dirección de los acontecimientos por Arce Gómez fue absoluta. A mediodía del 18, el alto mando se reunió para discutir la dirigencia del movimiento y no llegó a ninguna conclusión después de cinco horas de deliberación. Únicamente la participación de Arce Gómez y su insistencia para que García Meza asumiera la presidencia de la junta resolvió el problema y permitió que los tres oficiales tomaran juramento, luciendo trajes de combate. Posteriormente García Meza se dirigió a la televisión para acusar a la UDP de "castrista", culpar al "monetarismo" de Lydia Gueiler del caos económico y anunciar un toque de queda de 21 p.m. a 6 a.m. Durante el fin de semana, la junta emitió un decreto ley (17531) que proscribía toda actividad sindical y ordenaba el inmediato despido de todas aquellas personas que no retornaran a su trabajo el lunes siguiente. Las noticias sobre el asalto a la COB y la veloz actividad de los paramilitares impactó enormemente a la población urbana y se rumoreaba ampliamente que Lechín, Reyes y muchos otros dirigentes de la COB habían sido asesinados. La sobrevivencia de Lechín fue confirmada únicamente cuando éste apareció en televisión el 22, en muy mala condición física y mental para declarar: "...Volvemos a hablar de nuestros problemas y ambiciones en otro momento, pero ahora evitemos derramar inútilmente sangre obrera. Vuelvo a repetir, exhorto a los campesinos, obreros, al pueblo en general a abandonar los bloqueos y la resistencia civil..."[56] En los dos días siguientes, la huelga se desmoronó. El efecto del mensaje de Lechín, unas treinta muertes, el apresamiento de por lo menos quinientas personas y la enorme brutalidad de los pelotones paramilitares que recorrían las calles a su gusto bastaron para impedir cualquier resistencia como la que se opuso a Natusch. Arce Gómez fue nombrado ministro del Interior y el coronel Quiroga, jefe del Servicio Especial de Seguridad (SES) –el DOP de la década de 1980–. Desde un principio, ambos hombres actuaron a la manera de sus colegas chilenos o argentinos. En una semana, la única resistencia organizada que confrontaron fue la de las minas.

El experimento democrático había llegado a su fin, repentina y sangrientamente, y fue liquidado, más que por los militares, por sus miembros

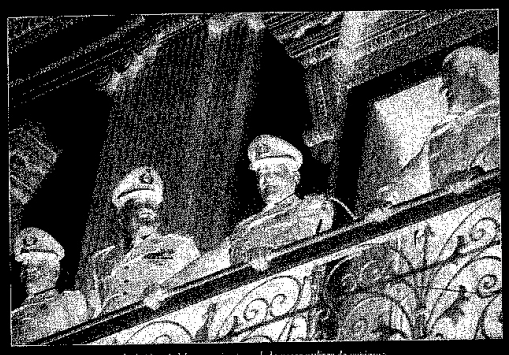
56 En *Bolivia. Información y Análisis*, 1º de noviembre, 1980; PADI: *Los cien primeros días de una larga noche*, Quito, 1981; PADI: *Cronología de una dictadura*, Quito, 1982; POR: *Testimonios de represión*, La Paz, 1981, y Latin America Bureau *Bolivia: Coup d'Etat*, Londres, 1980, se ofrece detalles completos sobre el golpe.

extremistas, quienes estaban preparados para utilizar ampliamente a pistoleros civiles y las tácticas de terror en una insensible y deliberada violación de los derechos humanos; eran inconmovibles ante la inmediata ruptura de relaciones y el boicot de Washington o la posibilidad de ser expulsados del Pacto Andino y no menos confiados en su actitud hacia la mafia de la cocaína, de la cual se percibía que había tenido participación en el golpe. Desde su comienzo, el régimen estaba condenado a la sórdida delincuencia ligada al comercio de la droga y al repudio de prácticamente todas partes del mundo.

Alberto Natusch Busch rodeado de los militares golpistas en noviembre de 1979.

Jaime Paz Zamora y Víctor Paz Estenssoro.

Walter Guevara y Lydia Gueiler.



Luis García Meza y miembros de la junta militar de gobierno.

Luis Arce Gómez y Roberto Suárez, el "Rey de la Cocaína".

8. La dictadura de la delincuencia

Varios días después de tomar el poder, entrevistado por una revista chilena, el general García Meza declaró: "Me quedaré en el poder veinte años, hasta que Bolivia haya sido reconstruida. Mi gobierno no tiene límites fijados y en esto soy como el general Pinochet". Debido a la eficiencia con que se ejecutó el golpe, al extremadamente riguroso y violento control impuesto después y a la aparentemente total derrota del sector institucionalista, tal afirmación fue tomada en serio. Después de todo, Banzer había gobernado siete años y García Meza iniciaba su gobierno de manera similar, si no con mayor seguridad y más consolidado. Con todo, el régimen de García Meza se prolongó sólo por un año y dieciocho días, y en el curso de los seis primeros meses ya estaba sumido en graves contradicciones, restringido y desestabilizado por el repudio externo, debilitado por la disidencia dentro de las fuerzas armadas e incapaz de eliminar la resistencia pasiva que comenzó a cobrar una forma más abierta a medida que el régimen se tambaleaba entre una crisis y la siguiente. Las tres administraciones efímeras que lo sucedieron corrieron la misma suerte, pues esencialmente intentaron mantener el proyecto de 1980 y posteriormente dirigir una retirada mesurada. Hacia mediados de 1982, el intento de imponer una dictadura orgánica y de erradicar todo vestigio del interludio democrático se había desintegrado totalmente.

Los fundamentos de la crisis que acabó con el potencial de este experimento militarista fueron los mismos que socavaron el constitucionalismo: una grave y ascendente crisis fiscal del Estado heredada de Banzer y empeorada por una caída de la producción y de los precios en las exportaciones esenciales

del país: una considerable división dentro del bloque dominante y una incapacidad para completar la derrota política de la izquierda con la total destrucción de sus bases sindicales. Sin embargo, la forma que adoptó la crisis política entre julio de 1980 y octubre de 1982 fue considerablemente distinta de aquella que le había precedido, reflejando sobre todo la debilidad y la falta de unidad dentro de las FF AA. Resultó imposible sustentar un régimen de derecha sobre la base de una política antinorteamericana por mucho tiempo; pero inclusive después de que estas actitudes fueron moderadas y posteriormente invertidas, los efectos de un boicot de quince meses impuesto por Washington signieron corroyendo la legitimidad, restringiendo la cooperación extranjera y estimulando la competencia interna. Lo mismo ocurrió con la agresión inicial y mal calculada al Pacto Andino, lo cual contribuyó a oscurecer el prestigio del régimen. Además, mientras los cobros por tráfico de cocaína eran substanciosos y facilitaban el financiamiento de un gran aparato informal de control, la compra de lealtad de la alta jerarquía militar y la acumulación de impresionantes fortunas personales no podían compensar el colapso de la economía legal, ni pagar la deuda externa o financiar totalmente las operaciones estatales por un período indeterminado. En su punto más alto, los ingresos por cocaína fueron quizás cuatro veces superiores a los de las exportaciones tradicionales, pero gran parte de aquellos no regresaban a Bolivia y los que sí lo hacían incentivaban actividades no productivas o de consumo conspicuo. En algunos casos –las zonas de plantación de La Paz y Cochabamba o los centros comerciales del Beni– hubo auges regionales de corta duración; pero debido a su origen ilegal, dicho comercio no pudo revivir la confianza general en el comercio. Si bien el capital de la cocaína no derivaba generalmente de un proceso primitivo de acumulación, las reglas competitivas de este sector no eran nada rígidas ni tampoco muy diferentes de aquellas del capitalismo primitivo, lo cual exageraba la tendencia histórica del Estado boliviano de ser un centro de pillaje.

El desarrollo de este proceso, unido a la excepcional violencia, capricho extremo y falta de toda estrategia seria o respaldo social por parte del gobierno de García Meza, determinó su caída. Durante los dos años del régimen militar se produjeron ni más ni menos que seis intentos abiertos de golpe de Estado y un número de huelgas aún mayor que a lo largo de los cinco años anteriores y hubieron cinco presidentes distintos. Después de que el propio García Meza fue privado del poder a principios de agosto de 1981, una junta de comandantes pudo mantenerse un mes en el poder en medio de constantes disputas. La resolución final a sus diferencias institucionales con el nombramiento del

comandante del Ejército, general Celso Torrelio Villa, como presidente, no resultó muy conveniente. Torrelio era una persona designada por García Meza, un testaferro incapaz de reunir las condiciones mínimas para ocupar un alto cargo gubernamental, salvo el hecho de que representaba al Ejército. Su propia debilidad garantizó la continuidad de la estructura de poder existente y la protección de aquellos sectores que prosperaron bajo García Meza y Arce Gómez, pero no constituía ninguna defensa contra los competidores de aquellas facciones, ni contra las corrientes más institucionalistas que se reagrupaban dentro de las FF AA. Reacio a presidir una apertura significativa e incapaz de detener los retos de oficiales como Faustino Rico Toro, quien era identificado tanto con el narcotráfico como con la extrema derecha, Torrelio simplemente se mantuvo en el puesto hasta que su presencia en palacio no tenía ya sentido útil para ninguna facción. Su reemplazo en julio de 1982 por el general Guido Vildoso Calderón señaló un viraje hacia una política más ágil y perspicaz de negociación por parte de una institución que seguía ejerciendo represión y persistía en vacíos y estentóreos derechos a un mandato de poder, pero que había sido fuertemente golpeada por la acción de la clase obrera, debilitada por agudas divisiones internas y que evidentemente buscaba asilo en los cuarteles. Así, en octubre de 1982, las FF AA entregaron nuevamente el poder al constitucionalismo y Hernán Siles Zuazo y la UDP recobraron el alto cargo que les había sido usurpado en agosto de 1980.

Esta retirada constituyó una victoria formal de la democracia frente a la dictadura, fue festejada amplia y entusiastamente como tal y evidentemente representó un cambio en el equilibrio de fuerzas y en la calidad de la vida cotidiana. Con todo, no marcó una nueva era en la suerte económica del país y pronto resultó claro que había impulsado escasas alteraciones en el comportamiento de la élite política civil. La crisis continuó en medio de un creciente descontento popular, de renovadas disputas acerca de la corrupción oficial y de una paralizante falta de políticas concretas y de dirigencia. Las considerables ventajas recogidas del agotamiento militar, de la benevolencia internacional y de una retirada regional de las fuerzas del autoritarismo sustentaron la administración de Siles por algunos meses, pero no pudieron acabar con los profundos conflictos dentro de la sociedad boliviana y mucho menos resolverlos. En tanto que el esfuerzo vandálico y provinciano de un nuevo pinochetazo se había venido abajo con absoluto descrédito, se cerraban ciertas opciones políticas, al menos por un tiempo, y se detenía un nuevo ciclo del proceso iniciado en 1952; pero era un ciclo secundario que ensayaba encuentros ya familiares inconclusamente. Treinta años después de la revolución de abril –un hecho del que un reserva

por ciento de la población boliviana de 1980 no había sido testigo– su legado seguía tan vigente como temeroso.

Gobierno de reconstrucción nacional

La velocidad con que las fuerzas paramilitares de la junta lograron tomar posesión de los centros urbanos y reducir la resistencia contrastó con la amplia y difícil campaña militar para poner a las minas bajo el control del gobierno. Esto tomó dos semanas enteras y aunque finalmente logró su objetivo con un despliegue de tropas sin precedentes y una brutalidad extrema, pronto se puso de manifiesto que su éxito fue sólo parcial en sentido de que el espíritu de los mineros no se había quebrantado y que pudieron reorganizarse sindicatos clandestinos, privando de todo apoyo a los relacionadores de sindicatos amarillos. Una vez que estuvo claro que ninguno de los principales campamentos habría de prestar atención a la invitación de Lechín de levantar la huelga, las guarniciones locales se prepararon para ocuparlas. Hubieron varios intentos de actividad paramilitar, pero tuvieron poco efecto, y el proletariado minero tuvo por lo menos la ventaja de enfrentarse a un enemigo con cuyos métodos estaba plenamente familiarizado.

En los campamentos de la zona sur del país, inicialmente al ejército se le impidió el paso con bloqueos de caminos organizados por los campesinos, quienes a diferencia de la población rural del resto del país, resultaron inflexibles en su oposición al golpe. La resistencia fue particularmente feroz en las minas circundantes a Potosí, especialmente en el campamento de Santa Ana, donde en dos ocasiones el ejército fue obligado a retirarse y cuando finalmente logró entrar, se encontró frente a una pared humana de mujeres y niños que custodiaban el edificio del sindicato, que a su vez resguardaba la emisora de radio. (puesto que las estaciones de radio fueron unidas en cadena desde la tarde del 17, había un alto grado de cooperación táctica que desbarató una serie de maniobras del ejército). Se produjeron escenas similares en Huanuni, se hizo retroceder a conscriptos jóvenes con rifles antiguos y estallidos de dinamita, habiendo sido necesario el empleo de la fuerza aérea para bombardear la estación de radio y reforzar el cerco del ejército. Estas batidas causaron muchísimo terror, pero tuvieron que suspenderse cuando se vio que ponían en peligro las costosas plantas. Huanuni se mantuvo firme durante cinco días, impidiendo el acceso a Siglo XX-Catavi y sembrando una considerable desmoralización en las tropas compuestas en gran parte por gente de la región; se dice que hubo

soldados que se negaron a abrir fuego y fueron muertos por sus oficiales. Esto también ocurrió en la mina norteña de Corocoro y en La Paz tres camiones llenos de conscriptos asesinaron a sus oficiales y desertaron. En Siglo XX, el conflicto cobró una forma más fluida, pues las escaramuzas fueron interrumpidas por intentos de tregua. La lucha tuvo lugar intermitentemente entre el anochecer del 18 y la noche del 23, cuando los campesinos se retiraron y muchos francotiradores proletarios pasaron a la clandestinidad o abandonaron el distrito. Ese día, el comandante local, coronel Arrázola, firmó un acuerdo con el sindicato prometiendo ciertas garantías para la seguridad laboral y la liberación de prisioneros. Sin embargo, el régimen consideró el acuerdo excesivamente generoso e inmediatamente lo rompió, prolongándose la huelga por otra semana, en la cual la falta de abastecimiento, la desaparición de militantes destacados y el efecto agregado de la represión obligó a los mineros a retornar al trabajo. Con todo, la resistencia activa no fue totalmente erradicada hasta el 4 de agosto cuando, en una violenta embestida final contra la prolongada defensa armada de los pequeños y alejados campamentos de Caracoles y Viloco, las tropas ebrias de los regimientos Max Toledo, Tarapacá y Camacho perpetraron una de las más terribles masacres de la trágica historia de las minas bolivianas. Mataron e hirieron a una cantidad tal de trabajadores que se tuvo que llevar fuerza laboral de reemplazo desde distritos lejanos. Según la carta enviada el 9 de agosto por las mujeres de Caracoles al arzobispo Maurique de La Paz, a un minero lo ejecutaron haciéndole explotar un cartucho de dinamita en la boca, mientras que muchísimos prisioneros y heridos fueron asesinados a bayonetazos, tres mujeres murieron después de ser violadas y los niños fueron obligados a ingerir pólvora, fueron azotados con cables y luego obligados a tenderse sobre vidrio molido para que los soldados marcharan sobre ellos. A novecientas personas se las dio por desaparecidas y aunque posteriormente se confirmó que en su mayoría estaban presas, el grado de consternación no tuvo precedentes.[1]

La crueldad del ataque de Caracoles garantizó el cese de la resistencia armada y permitió al régimen reanudar el funcionamiento de la COMIBOL

1 Esta carta figura en *La heroica resistencia de los mineros de Bolivia* (Lima, 1981), publicación que contiene una detallada descripción al igual que muchas fotografías ilustrativas de la defensa de las minas. Ver también PADI: *Comalagüe*, que reproduce los acontecimientos del régimen de García Meza, día por día, en más de quinientas páginas; *Los cien primeros días*, pp. 63–83; Del Granado: Antenio *Camargo*, pp. 333-371; Donato Torrico: *Crónica del aborrecimiento de la democracia*, La Paz, 1980.

bajo la supervisión de nuevos "relacionadores" que a través del Decreto 17545 (12 de agosto) fueron designados como los únicos representantes de la clase obrera; solamente el sindicato de los transportistas conservó su antigua estructura y personal pues era tradicionalmente banzerista y había sido expulsado de la COB.[1] De conformidad con el sistema corporativista que los asesores de la junta estaban preparando, los representantes designados oficialmente se plegaron a un "pacto social" establecido con el Decreto 17610 del 7 de septiembre, a través del cual existiría a partir de ese momento una armonía entre el capital y la fuerza de trabajo en los términos fijados por el régimen.[2] A mediados de octubre, unos mil relacionadores habían recibido sus credenciales; la mayoría eran o viejos "nacionalistas" o sumisos desconocidos (generalmente funcionarios) colocados en puestos que no ambicionaban demasiado, pero que tampoco se atrevían a rechazar. Una minoría muy pequeña estaba formada por miembros del PCB o del MIR cuya posición afirmaba que conservar cualquier cargo constituía un paso táctico (la mayoría de ellos fueron elegidos en "asambleas abiertas" patrocinadas por los militares) y el grupo mayoritario estaba estrechamente ligado a las cuadrillas paramilitares. Este último grupo fue útil para la imposición del toque de queda, para la búsqueda de militantes, para imponer fuertes multas por infracciones de trabajo y para supervisar los detalles de los castigos; muchos empleados subalternos hicieron un buen negocio vendiendo los ladrillos que trabajadores incumplidos fueron obligados a fabricar para compensar sus faltas en el cumplimiento de horario o la baja productividad y también por "delitos civiles", tales como circular después de las nueve de la noche o reunirse en grupos no autorizados de más de cinco personas. En ninguna fase, sin embargo, este régimen fue capaz de reducir el alto nivel de sabotaje y trabajo a desgano con que respondían los trabajadores; de la misma manera, la represión en exceso rigurosa –dado que las comunidades mineras son muy cerradas– conllevaba el peligro de un destierro social de por vida y posibles venganzas que sin gran dificultad podían encubrirse como accidentes de trabajo. Por lo tanto, la organización igualitaria de las minas bolivianas constituyó un antídoto de bajo nivel contra las toxinas que se le introducían. (Cuando visité Siglo XX durante la última semana del gobierno de García Meza, no era posible que un extranjero ingrese legalmente al campamento sin antes someterse a un prolongado y desagradable interrogatorio a cargo del jefe de la policía local y, en la práctica, era imposible permanecer allí por más de dos horas sin autorización escrita. Empero, a fuerza de cautelosas

2 *Presencia*, (La Paz), 22 de julio, 13 de agosto, 6 de septiembre de 1980.

medidas de seguridad y evasiones de menor importancia, pude asistir a una reunión del clandestino Comité de Bases, entonces dominado por el POR de Pie, donde el debate se concentró en la ruidera que debía adoptar la justicia proletaria contra el personal paramilitar, listas del cual habían confeccionado).

En el ámbito urbano, una oposición como ésa era bastante más experimental y por un lapso más bien largo estuvo restringida a fábricas grandes: SAID (La Paz) y Manaco (Cochabamba). En el campo fue aún más limitada, aunque se hizo mucho por mantener viva la organización campesina independiente gracias a Genaro Flores, quien siguió trabajando desde la clandestinidad y se convirtió en el primer campesino que encabezaba el movimiento nacional de trabajadores cuando pasó a ocupar la secretaría ejecutiva de facto dentro del país en virtud de su antigüedad en la COB, de la muerte, el apresamiento o exilio de otros líderes nacionales. Esta posición fue confirmada el 16 de noviembre, cuando Lechín y Reyes fueron enviados al exilio, después de la emisión de una entrevista televisiva conducida por Arce Gómez, en la cual se dirigía a Lechín solícitamente llamándolo "Don Juan" y disfrutando tangiblemente de la degradación pública que se infligía al secretario ejecutivo de la COB, quien tampoco se esforzaba por cuidar su prestigio y trataba a su verdugo con extraordinaria deferencia, mientras Simón Reyes mantenía un retraimiento silencioso.[3] Arce Gómez ya había demostrado hasta qué grado podía llevar su menosprecio al movimiento sindical cuando ordenó la demolición de las oficinas centrales de la COB. Varios días después, una delegación internacional de la ORIT que visitaba La Paz para entregar una donación a las familias de sindicalistas encarcelados y para pedir al gobierno que respete los derechos humanos fue detenida por el SES y posteriormente amenazada con violencia física, despojada de treinta mil dólares más efectos personales y luego expulsada del país.[4]

La COB experimentó graves dificultades organizativas, dividida en una rama interna y otra externa, la mayoría de sus miembros más maduros en el exterior o en la cárcel, haciendo recaer la autoridad fundamental en manos de sus dirigentes internos; como era de prever, la mayoría de los problemas se referían a considerables sumas de dinero recibidas a través de la solidaridad internacional. El propio Flores fue sometido a enormes presiones por seguir una línea proudepisfa, curso de acción que resistió irregularmente hasta que el

3 Los puntos salientes del programa están reproducidos en *El Diario*, (La Paz), 16 de noviembre de 1980.

4 *El Día*, (México), 29 de septiembre de 1980.

21 de junio de 1981 fue apresado por el SES y, cuando intentó fugar, le dispararon hiriéndolo gravemente. Sólo la insistente presión de Amnistía Internacional y del gobierno francés salvaron al líder campesino de las inevitables consecuencias de la ley de fuga; finalmente el régimen lo expulsó del país en muy malas condiciones físicas y ya demasiado tarde para la operación quirúrgica en un hospital parisino que le hubiera evitado ser un paralítico por el resto de su vida. Empero la incapacidad que lo confinó a una silla de ruedas no impidió a Flores reanudar su actividad sindical, lo cual contribuyó a aumentar su prestigio como líder comprometido y valiente.

Los partidos de izquierda sufrieron igual impacto que los sindicatos, aunque el PCB y los partidos trotskistas poseían organizaciones lo suficientemente disciplinadas como para emprender actividades clandestinas en un espacio de tiempo relativamente corto. El MIR, del cual sólo los niveles más altos estaban organizados en rigurosas células sobre la base de cuadros, fue golpeado con especial dureza como lo fue el PS-1, que sufrió horriblemente por la pérdida de Quiroga Santa Cruz. La resistencia política interna por parte de la UDP se centró en la declaración de Siles de un Gobierno de Unidad Nacional (GUN) establecido en la clandestinidad el 6 de agosto, fecha en que la UDP debía asumir el gobierno. El GUN emitió una serie de declaraciones combativas pero sus fundamentos resultaron estar mal calculados ya que no llegó a ser más que un órgano de propaganda y sin ninguna evidencia palpable de autoridad; su existencia sólo significaba el alcance de la derrota en lugar de ofrecer un punto de convergencia y empuje para la oposición.

Cuando esto se hizo evidente, Siles abandonó el país (en septiembre) y el proyecto fue tácticamente desahuciado, aunque tanto el MNRI como el MIR siguieron haciendo referencia ocasional al GUN durante cerca de un año.[5] Incapaces de causar impacto alguno en la resistencia interna que pasó en gran parte a los sindicatos clandestinos, los dirigentes de la UDP se entregaron a la tarea de recorrer las cancillerías del mundo y endurecer el bloqueo económico al gobierno.

Es difícil apreciar la naturaleza del régimen de García Meza sin reconocer que la forma de imponer su control político fue diferente incluso de aquella utilizada en la era banzerista y alcanzó una dimensión que conmocionó y desmoralizó a una población más familiarizada que muchas con las exigencias de vida bajo regímenes militares. Esto fue la principal contribución de los asesores

5 Los decretos originales del GUN están reproducidos en *Bolivia. Información y Análisis*, N° 1, noviembre de 1980.

argentinos de Arce Gómez, que según afirmó Le Monde, sobrepasaban los doscientos en el período inmediatamente posterior al golpe. El contingente estaba conducido por los tenientes coroneles Julio César Durán, Benjamín Cristoroforetti y Osvaldo Guarnaccia y en él se contaban figuras como los capitanes Miguel Angel Benazzi, Antonio Pernía ("la rata") y Schelling ("el pingüino"), provenientes de la ignominiosa Escuela Mecánica de la Armada argentina, conocido centro de torturas. Bajo la supervisión argentina, Arce Gómez montó un aparato para las operaciones de inteligencia y control político que funcionaba en forma paralela a la estructura policial vigente y que estaba centralizado en el SES, ligado al Ministerio del Interior y en el Comando de Operaciones Conjuntas (COC), encabezado por militares de línea dura como "Tinino" Rico Toro y Rodrigo Lea Plaza, quienes iniciaron la formación de sus propias cuadrillas paramilitares a menudo compitiendo directamente con Arce Gómez. Algunas estimaciones afirman que el número de personal paramilitar alcanzaba los once mil, pero lo más probable es que no pasaran de tres mil, siendo la mayoría miembros de las FF AA que emprendían operativos en traje civil. Una mayor cantidad de gente colaboraba con esta red recibiendo empleos en el servicio público, desde donde pasaban información sobre sus colegas.

Sin embargo, la atención se concentró en las extravagancias de algunos conocidos extranjeros de línea fascista y de trayectoria en actividades mercenarias, quienes habiendo percibido gratificantes oportunidades de trabajo en Bolivia o bien surgieron de aserraderos del interior del país o se trasladaron allí en muchos casos antes de que se produjera el golpe. El más destacado de ellos, sin lugar a dudas, fue Klaus Altmann-Barbie, exjefe de la Gestapo en Lyon, quien había llegado a Bolivia en 1951, mantenido contacto con la FSB, obtenido la ciudadanía boliviana en 1957 del gobierno de Siles y, por lo menos hasta 1971, en que fue localizado por Beate Klarsfeld, llevó una vida apacible. Barbie no anduvo con rodeos acerca de su participación en las operaciones de seguridad, siguió viviendo bastante abiertamente en su departamento del edificio Jazmín en la avenida 20 de Octubre de La Paz y estaba bien protegido por el alto mando de las solicitudes de extradición del gobierno francés. Brindaba ventajosos contactos con otros nazis como Hans Joachin Stellfeld, exempleado de la organización Kamaradenwerk que murió en misteriosas circunstancias a fines de 1980, al igual que con mercenarios extranjeros establecidos: el ignominiosamente célebre Jean "Black Jack" Schramme, que se distinguió en el Congo; Albert Van Ingelgom, principal exfuncionario del campo de concentración de Auschwitz; Roger Van Zande y su hijo, quien trabajó con

el SES y era conocido como "el Tigre" por su habilidad para arrancar información a través de la violencia física. Un grupo más joven incluía a hombres como Joachin Fielberkorn, Stefano delle Chiaie y Pier Luigi Pagliai, con antecedentes neofascistas y ligados a varios operativos terroristas en Europa (incluyendo la explosión de una bomba en la estación de ferrocarril de Bolonia), y mostraban un interés especial en el tráfico de cocaína. Tales sujetos se encontraban a gusto con espíritus que les eran afines como los Arce Gómez, Monroy, Daniel Salamanca, Guido Benavides, Carlos Mena, Freddy Quiroga y Rafael Loayza, dando lugar a la observación de que mientras los Estados del Cono Sur tenían "Chicago Boys" de la escuela de Milton Friedman, los de Bolivia pertenecían a la tradición Al Capone. Aunque Arce Gómez consideraba a todos los miembros de las cuadrillas paramilitares sus "camaradas... la protección avanzada del nacionalismo", él admitía libremente la presencia de muchos extranjeros entre sus filas: "Trabajan en inteligencia –los extranjeros son muy útiles para este trabajo porque se precisa controles en muchas fronteras y arrestan gente".[6]

La SES y el COC se ocupaban frecuentemente de allanamientos nocturnos durante los cuales desaparecía el contenido completo de algunas viviendas; también eran responsables de imponer el toque de queda a las 9 p.m. con inaudita rudeza (otras veces se obtenía copiosos botines de las coimas para liberar a los ofensores o, si carecían de dinero en efectivo, gran satisfacción en la administración de palizas o en mojarlos con mangueras mientras permanecían a la intemperie en la helada noche andina), al igual que de asesinatos selectivos e interrogatorios muy poco sofisticados. Hasta la caída misma del gobierno militar, su presencia se hacía notoria por la tendencia a estacionar sus furgones en las principales bocacalles o frente a instituciones públicas, rematándose con enorme amenaza y no menos juguetona manipulación de deslumbrantes ametralladoras Uzi.

Durante los primeros días del régimen, tales fuerzas eran empleadas en su mayoría para redadas masivas de "sospechosos", unas quinientas personas fueron detenidas en los vestuarios del estadio de fútbol de La Paz, donde fueron apiñadas por dos días, sin alimentos o agua y obligadas a dormir en el mismo lugar donde hacían sus necesidades. Las actividades posteriores fueron más selectivas pero afectaron a todos los sectores de la población. La Iglesia liberal, por ejemplo, fue hostigada con gran ahínco, muchos curas fueron encarcelados y las propiedades de la Iglesia frecuentemente allanadas. El padre Julio

6 *Presencia*, (La Paz), 23 de febrero de1981; BBC, Buenos Aires, 27 de octubre de 1980.

Tumiri, de 69 años de edad y presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tuvo que ser hospitalizado después del interrogatorio a que fue sometido por el SES. El arzobispo Manrique, septuagenario líder de la Iglesia en La Paz, que constantemente denunciaba los excesos del régimen, fue amenazado por Arce Gómez a través de la televisión con "sanciones" no especificadas; y cuando condenó ejecuciones sumarias fue acusado por García Meza de "colaborar con los extremistas". Un oficial de alto rango que había tomado las armas a nombre del "Cristianismo Occidental" sacó conclusiones más profundas de la protesta de este miembro de la Iglesia y lo denunció de "estar en complicidad con Satanás".[7]*

Cuando se describe la represión o la violación de los derechos humanos siempre se corre el riesgo de caer en la pormenorización fanfarrona que sólo contribuye a aumentar el sentido de indiferencia y de disociar al lector de lo que considera una actividad absolutamente censurable pero lamentablemente común. Empero, de la cantidad de testimonios disponibles se cita sólo uno con cierto detalle a fin de brindar al europeo o norteamericano –cuya vida ha estado felizmente libre del terror político– un sentido de lo que en realidad es casi una situación permanente en gran parte de la América Latina y por la misma razón un fenómeno esencial para comprender la vida cotidiana y la actividad política de ese continente. El autor de las líneas que se citarán es Filemón Escobar y se las ha escogido no porque haya sufrido un tratamiento particularmente duro –salió muy golpeado pero con vida y antes había pasado por similares experiencias– ni tampoco porque era (y es) un destacado activista político y sindical, sino porque describe el episodio con cierta perspicacia y va más allá de la mera descripción del agravio físico. Vale la pena señalar que los hechos ocurrieron no bajo el gobierno de García Meza y Arce Gómez, sino en febrero de 1982 cuando el régimen de Torrelio gozaba tanto del reconocimiento de EE UU como de Gran Bretaña y estaba preparándose para llamar a elecciones, de acuerdo con su declaración de haber asumido el poder "con la ley en nuestras manos".

> El aparato de seguridad está constituido por gente bestial, son seres anormales que encuentran un extraordinario placer torturando. Escuchar gemir a la gente de dolor hace que broten carcajadas de su boca. Manejan con precisión de cirujano la picana sobre el cuerpo desnudo de la víctima. Cada descarga eléctrica

7 En *Los cien primeros días* y en POR: *Testimonios de represión*, La Paz, 1980, se ofrecen detalles completos y muchos testimonios de la represión.

* Cita traducida porque no fue posible hallar la versión original. (N. de la T.)

es respondida por aullidos desesperados del prisionero. Para el torturador sólo habrá sido buena operación de cirujano de la que incluso habrá salido orgulloso. Si las declaraciones no les satisfacen, recurren a colgar desnudo al preso para golpearlo con palos torneados. Juegan con el cuerpo como si se tratara de un partido de béisbol. Golpes duros en las piernas, en los brazos y sobre todo en la zona de los riñones hasta que el prisionero mee sangre. Será después de esta serie de torturas cuando venga el interrogatorio. Los agentes creen entonces que la víctima ya está suficientemente ablandada. Todo intento de negar o engañar significa que la tortura se reeditará a un nivel más brutal.

Si el día 2 fui apresado, el 3 ya me encontraba en La Paz. Los Boeings 727 sirven para el transporte de los considerados "agitadores peligrosos". Uno viaja acompañado de dos agentes debidamente armados y esposado a uno de ellos. La escapatoria resulta una suposición irreal. En el aeropuerto espera una jauría de agentes. Conducen al prisionero a una ambulancia que en vez de llevar accidentados transporta presos políticos. Esta movilidad está dotada de radios, comunicadas a la central, que vigilan el trayecto. La precisión de los aparatos de seguridad, hasta acá, ha sido de relojería. Nada ha fallado. El preso ya siente que el terror le invade el cuerpo.

Sacar de la movilidad al preso supone todo un despliegue de agentes. Ocupan determinados lugares estratégicos, haciendo relucir sus armas. La puerta que oculta el laboratorio de torturas se abre automáticamente. Un tipo recibe al preso; la mirada es desafiante; ordena con el dedo que lo metan dentro. El preso traspasa la puerta de hierro. Da comienzo la primera fase de tortura física. A empujones y patadas lo conducen a una celda.

Suenan las cadenas y aprietan un candado de grandes dimensiones. Desde ese momento, el preso siente la proximidad de la muerte. Ha escuchado hablar del aparato de seguridad, pero nunca lo tomó en serio. Ahora él es el actor principal. Lo que a uno le puedan contar nunca es tan terrible como la realidad percibida por uno mismo. La experiencia que se está viviendo se traduce en sudor: el sudor del miedo. El temor no lo abandonará jamás. Será su compañero cada segundo mientras pueda vivir en la celda oscura. Afuera, en el patio de cemento, se repite la escena primera. Ingresan otros compañeros para recibir las mismas paradas y empujones, las puertas de las celdas se abren y cierran.

A los pocos minutos, antes de que el dolor del primer ultraje se amortigüe, ingresa un agente. Lo ponen a uno de espaldas. Le encajan una capucha que cubre todo el rostro. Para mayor seguridad se la amarran a la altura del cuello. Lo sacan. Lo conducen como a un ciego. Después de unos minutos de caminar a tientas, escucha una voz: "vas a declarar todo lo que sabes, mierda". Lo hacen sentar bruscamente. De repente uno gime de dolor porque fue golpeado en la boca del estómago. "No grites, carajo". Aumenten el volumen de la música, ordena el esbirro. Otro golpe en el estómago. Otro grito: "vas a confesar todo cabrón: o sales muerto de aquí". "Desnúdenlo". Es la tercera serie. "¡Maten la

pija de este hijo de puta!", vocifera uno de los esbirros. "Amárrenlo al catre". El cuerpo de la víctima es extendido en la misma forma que los españoles amarraron el cuerpo de Tupac Amaru a cuatro caballos para descoyunturarlo. "Ménenle picana a ese cabrón". Se da comienzo a la tortura. En la dentadura, tras las orejas, en el pecho, cerca del corazón. Imposible responder con el silencio. El dolor es infinito. Da la sensación de que un cirujano nos está cortando en carne viva. Nuevamente la voz del esbirro: "a la pija del cabrón". El dolor es estremecedor, uno siente perder el conocimiento. Los esbirros, mecánicamente, desamarran al prisionero, lo vuelven a sentar, por supuesto desnudo, para profundizar la humillación. Empieza el interrogatorio. El hombre torturado, humillado, responde mecánicamente a las preguntas. Es incapaz de responder reflexivamente. No sólo eso, se va más allá incluso: se intenta, instintivamente, complacer, satisfacer al interrogador. Los métodos de ablandamiento han dado resultado.

Después de más de tres horas de torturas e interrogatorios, el preso firma su declaración, con mano temblorosa dirigida por la mano del esbirro. La capucha es el mudo testigo de las muecas de dolor del prisionero. Es testigo también de quienes lo han torturado e interrogado. El preso sale de un mundo de terror, no superado por la ficción literaria. Lo conducen de nuevo a su celda. La tortura, emperó, continúa. A cada momento fuerzan el candado. Suenan las cadenas. El preso ruega a Dios que no abran. Su único deseo es que no lo vuelvan a sacar. A poco, otras puertas se abren y comienza el desfile a la tortura. La música, todas son canciones de protesta, no puede eclipsar los gemidos de dolor.[8]*

A las prácticas de este tipo se les daba amplia publicidad en el extranjero, especialmente en EE UU, siendo el gobierno de ese país el que habitualmente aprobaba e incluso ofrecía entrenamiento en tales técnicas de interrogatorio. Los embajadores de Bolivia en Washington, París, Quito, Caracas, Ciudad de México, Bruselas y Londres renunciaron a sus cargos y denunciaron al nuevo régimen; algunos recibieron amenazas de muerte como consecuencia de ello.

Los países del Pacto Andino, que en su totalidad estaban siendo gobernados por civiles, sostuvieron una rígida postura contra el golpe y, por lo menos en doce ocasiones durante los últimos seis meses de 1980, García Meza declaró o bien que Bolivia se había retirado de la organización o que se estaba "absteniendo". Significativamente, el presidente no fue invitado a la reunión de

8 Manuscrito inédito, septiembre de 1982. Escóbar fue detenido durante 22 días antes de ser exiliado a España. (Edemón Escóbar: *Testimonio de un militante obrero*, La Paz, 1986, pp. 92-94).

* La cita corresponde a la obra mencionada, publicada posteriormente. (N. de la T.)

jefes de Estado del Pacto Andino en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre, que se realizaba para conmemorar el segundo centenario del nacimiento de Bolívar, y García Meza se "negó a reconocer" convenientemente la reunión. Arce Gómez, que en algunas ocasiones estaba dispuesto a desempeñar el papel de canciller, al mismo tiempo que cumplía sus tareas internas, declaró que el Acuerdo de Cartagena no era "un pacto de caballeros, ni una trinchera o reducto para la recíproca defensa de parcialidades. Tampoco es una asociación de mutuas influencias para apuntalar ficticias democracias y gobiernos tambaleantes".[9] Si bien el consenso general entre los oficiales de alto rango era terminar con los artificiosos y estériles civiles que administraban el Pacto y concentrarse en la formación de una alianza con los regímenes militares del Cono Sur, ellos fueron disuadidos de tomar medidas precipitadas por la activa influencia de la CEPB, cuyos miembros más importantes dependían del mercado y cooperación del Pacto, y de COFADENA, que estaba arriesgando valiosos proyectos. Durante los últimos meses de 1980, la prensa paceña estaba atiborrada de artículos donde se elogiaban las bondades de la planificación regional y se advertía contra el aislacionismo aventurado. Igualmente, y a despecho de la decisión venezolana de recortar la ayuda bilateral en cuarenta millones de dólares, el propio Pacto intentó evitar una ruptura total como ocurrió con Chile varios años antes. Por lo tanto, después de este periodo, inicial de presión se reestablecieron las relaciones diplomáticas de una manera fría; los proyectos de colaboración vigentes se ratificaron y se abandonó la censura directa; sin embargo, se dio una calurosa acogida a los dirigentes exiliados de la UDP y a menudo se les proporcionó plataforma pública. En noviembre, las naciones del Pacto patrocinaron una moción en la OEA para solicitar una completa investigación acerca de la violación de los derechos humanos en Bolivia.

El tema de las relaciones con Washington fue muchísimo más problemático, en gran parte porque, debido al golpe, Bolivia había perdido alrededor de 135 millones de dólares de cooperación; al mismo tiempo, se había frustrado la posibilidad de cualquier negociación a corto plazo de la cuantiosa deuda externa. Sin embargo, por la proximidad de las elecciones presidenciales de EE UU, el régimen estaba dispuesto a soportar la crisis por un tiempo, convencido de que una vez que Reagan hubiera triunfado la situación cambiaría rápidamente. El 1° de diciembre, Arce Gómez afirmó con certeza que las conversaciones de Jaime Paz Zamora con el equipo de transición de

9 *Bolivia: Información y Análisis*, N° 2, diciembre de 1980, p. 2.

Reagan para continuar el boicot no obtendrían resultado: "...la situación existente entre los Estados Unidos y Bolivia cambiará a partir del 20 de enero próximo".[10] Pero el coronel no se daba cuenta de que, aun cuando el interés de Reagan en los derechos humanos era todavía más parcial que aquel de Carter, el tema del narcotráfico probablemente sería recibido de igual manera, pues resultaría repugnante al moralismo de la nueva derecha y no tendría mucho que ver con la guerra fría. Por lo tanto, cuando se hizo evidente que no se reanudarían automáticamente las relaciones diplomáticas, el régimen se precipitó en un intento nada sofisticado para ganarse el favor de Washington gastando 250 mil dólares en los servicios de un experto relacionador público (el caballero en cuestión acababa de terminar un refinado trabajo para el sha de Irán), enviando "misiones especiales" que a su arribo a EE UU causaron bastante confusión al declararse embajadores a pesar de no tener credenciales y suprimiendo de sus declaraciones públicas las denuncias de "bloqueos imperialistas" o promesas de "comer papas" durante una década en lugar de someterse a "chantajes colonialistas".[11]

Un mes después del golpe, el régimen había sido reconocido por sólo dieciséis países, pero entre éstos se contaban todos los regímenes militares de América Latina, algunos de los cuales colaboraron directamente en la rebelión de García Meza y le brindaron un apoyo inmediato y entusiasta. A causa del tema de la salida al mar, Chile mantuvo una postura reservada; y en el curso de una semana del golpe, el delegado brasileño ante la OEA se opuso tenazmente a la ampliación de sanciones contra el nuevo gobierno boliviano apelando al principio de no intervención.[12] El presidente argentino, Rafael Videla, resaltó sin rodeos las razones que tenía su gobierno para colaborar en el golpe: "Lo que ocurrió realmente con Bolivia es que entre las dos opciones que estaban por darse en el vecino país, la formalmente correcta era la asunción de un gobierno surgido de elecciones pero que presentaba para nosotros un alto riesgo en cuanto a la posibilidad de difusión de ideas contrarias a nuestro sistema de vida, y la existencia de un gobierno militar; hemos visto con más simpatía esta última opción, porque no queremos tener en Sudamérica lo que significa Cuba para Centroamérica".[13] Para corroborar tal disposición de ánimo, Videla ofreció un préstamo de doscientos millones de dólares, una

10 *Ibid.*, p. 11.
11 *Ibid.*, N° 4, febrero de 1981; Selser, *op. cit.*, p. 197.
12 Selser, *op. cit.*, p. 77.
13 *Clarín*, (Buenos Aires), 6 de agosto de 1980.

provisión de trigo y la promesa de adquirir gas natural a un precio generoso. No obstante, en el curso de pocos meses, el lamentable estado de la economía argentina, su preocupación por el permanente aislamiento del régimen boliviano y su exasperación ante las divisiones internas de las FF AA llevaron a un repliegue continuo del masivo patrocinio económico, a pesar de que se mantuvo la menos manifiesta y costosa asistencia militar. Buenos Aires siguió siendo el más importante aliado del régimen en todo sentido.

Las dificultades internacionales y el consejo de los argentinos para institucionalizar el gobierno estaban detrás de la intención del gobierno de proveerse de un cuerpo consultivo que pudiera compensar la falta de experiencia política del alto mando y que supervisara la elaboración de una política general y de un nuevo orden legal. La Comisión Nacional de Asesoramiento y Legislación (CONAL) establecida el 17 de septiembre de 1980 era crucial, pues García Meza carecía de apoyo formal de ningún partido político importante y precisaba de la experiencia administrativa y de los "conocimientos políticos"* de la derecha tradicional. La Comisión brindaba una vía aceptable para la colaboración de estos sectores sin comprometerlos a un respaldo formal y público. Este cuerpo estaba jefaturizado por el general Juan Lechín Suárez y compuesto por varios oficiales retirados y en servicio, pero también por figuras como Abel Ayaroa y por un apreciable número de importantes miembros de ADN –Raúl Boada Rodríguez, Carlos Calvo Galindo, Guillermo Fortún Sanjinés, Jorge Tamayo Ramos–, cuyo ingreso fue tácitamente aprobado por Banzer, y finalmente por representantes de la oligarquía cruceña (Fernando Bedoya) y de la Falange (Edgar Millares Reyes).[14] La Comisión supervisó la reconstrucción de las universidades (que permanecieron cerradas hasta principios de 1981) a cargo de una subcomisión conocida como CONRUE, proclamó la vigencia de la Constitución de 1967, como hiciera Banzer, e inició el debate para la preparación de una carta constitucional. Sin embargo, en virtud de sus términos de referencia y de sus propios afiliados, la Comisión pronto manifestó una serie de diferencias de estilo y de política respecto a los líderes del régimen. Junto con la CEPB, CONAL era partidaria de que Bolivia siguiera formando parte del Pacto Andino y se unió a la Iglesia para vetar el estatuto de seguridad propuesto por Arce Gómez que introducía la pena de muerte, medida que finalmente fue desechada el 19 de noviembre de 1980.

* En la versión inglesa: "*know how*". (N. de la T.)

14 *Bolivia: Información y Análisis*, N° 1, noviembre de 1980.

Éste fue el primer revés que sufrió el régimen como resultado de las divisiones prevalecientes dentro del bloque dominante. A medida que las divisiones se profundizaron, CONAL se transformaba en un importante portavoz de la élite civil, consternada por las acciones impulsivas e inmoderadas del gobierno; pero si bien podía expresar su descontento y aconsejar cautela, no poseía ninguna autoridad ejecutiva y, por lo tanto, no podía imponer una restricción significativa. Resulta revelador el que a la apenas velada campaña contra el estatuto de seguridad hayan seguido los primeros síntomas visibles de descontento dentro de las FF AA, las cuales dieron lugar a la destitución de los generales Echeverría y Vargas Salinas de sus poderosos puestos provinciales a comienzos de noviembre.

El rumor generalizado sobre la preparación de otro golpe por Natusch –quien aún no tenía designación formal y, se sabía, estaba furioso por los ultrajes recibidos de los hombres a quienes él responsabilizaba de la catástrofe de noviembre de 1979– fortaleció la convicción de que, aunque Banzer había permitido a la ADN participar en CONAL, exhortaba a sus partidarios dentro del Ejército a presionar al régimen y a preparar el terreno para una administración alternativa que heredara los beneficios de julio pero fuera aceptable para Washington e incorporara plenamente a la derecha civil. Mucho de este descontento estaba originado en las actividades descontroladas de Arce Gómez y en sus vociferantes proclamaciones; este personaje manejó el régimen prácticamente solo en sus primeros meses y sus fuerzas paramilitares independientes y alternativas discrepaban con muchos sectores del cuerpo de oficiales. Hay pocos casos en la historia militar boliviana en que se repudie a figuras que se proclaman "hombres duros, siempre en primera línea cuando hay peligro"; pero las excentricidades de Arce Gómez se volvieron contraproducentes desde un punto de vista institucional, cuando su único resultado fue el de profundizar la antipatía de Washington hacia el gobierno. Esto se puso patentemente de manifiesto después de la decisión que tomó el ministro del Interior de realizar un viaje por el extranjero entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre para reivindicar su honor y replicar las acusaciones que lo involucraban en el tráfico de cocaína. Acompañado por Mario Rolón Anaya, de la ADN, Arce Gómez visitó Washington a título personal para iniciar procesos judiciales por difamación contra diversos periódicos y muy especialmente contra Mike Wallace, el productor de *Sesenta minutos* de la CBS, serie documental que había señalado graves cargos contra el ministro y que portaba signos de haberse hecho con estrecha cooperación de la DEA. Arce Gómez también había previsto sostener conversaciones con el senador Jesse Helms y con la Legión Americana, así

como colocar una ofrenda en la tumba del Soldado Desconocido en el cementerio de Arlington. Con bastante publicidad desde el comienzo, el viaje no dio lugar a litigio alguno y tuvo un brusco fin cuando Arce Gómez, sin haber obtenido permiso oficial para visitar el cementerio de Arlington, de cualquier manera, eludiendo a los guardias de seguridad, ingresó allí para depositar su ofrenda floral, desde donde fue expulsado con escoltas y luego recibió formalmente una solicitud de abandonar el país inmediatamente. De allí se fue al Brasil para iniciar un proceso legal contra la revista Veja por haberlo acusado de estar relacionado con el narcotráfico; pero luego de las protestas del sindicato de periodistas, el gobierno vecino adoptó la misma actitud que su aliado del norte y Arce Gómez tuvo que terminar su gira rodeado de "verdaderos amigos" en el Paraguay. Este absurdo episodio contribuyó más que ningún otro incidente a reavivar el interés internacional en la conexión del régimen con el tráfico de cocaína y muy probablemente fue decisivo para que el equipo de transición de Reagan decidiera continuar con el boicot de Carter.

Coca y cocaína

Fuera de las fronteras de los países andinos, la gente está más acostumbrada a escuchar sobre la cocaína que sobre la coca, la planta de la cual proviene. Empero, el mundo de la fabricación, el transporte y la comercialización de la cocaína es bastante oscuro, cerrado, no permite intrusos y consecuentemente las descripciones del mismo tienen la propensión a emplear hipérboles provocadoras y las más grotescas teorías de conspiración. Es casi como si el éxtasis del consumo tuviera que transferirse a las condiciones de su producción.[15] Esta imagen no carece de cierto fundamento en la medida en que la ilegalidad misma de la cocaína ha dado lugar a términos extremadamente irregulares de competencia, los cuales han difundido el proceso de producción, impactando el cultivo de la hoja de coca en un grado apreciable. Con todo, no debemos perder

15 Esto podría ser una variante muy especial de aquella errada concepción general de la producción, que la concibe solamente en términos de apariencia: una equivocación que Marx se entregó a la tarea de rectificar en *El capital*, donde recomienda al lector que abandone momentáneamente esta ruidosa esfera donde todo ocurre en la superficie y a la vista de todos los hombres y a que siga al Sr. Billetera (poseedor de la fuerza de trabajo) a la escondida morada de la producción en cuyo umbral hay un letrero que nos dice "entrada permitida sólo para negocios". (Karl Marx. *Capital*, I, Londres, 1974, p. 172). Agradezco a Victoria Principal por llamar mi atención sobre esta referencia.

de vista el hecho de que el cultivo de la coca sigue siendo una forma legal y abierta de agricultura que se ha practicado en Bolivia durante muchos siglos. En ningún momento de su reciente auge, la cocaína ha sido simplemente preocupación de unos cuantos grupos reducidos de traficantes; se ha sentido su impacto en comunidades enteras, afectando directamente a unas doscientas mil personas, cuya subsistencia está ligada al cultivo de la coca. Por esta razón es absolutamente erróneo considerar el tráfico como una actividad delictiva aislada y determinada únicamente por las costumbres violentas y esotéricas de la mafia.

La importancia contemporánea de la industria –porque eso es lo que es– puede cuantificarse solamente en términos de estimaciones; sin embargo, éstas son impresionantes permanentemente. En 1980, el tráfico de narcóticos sólo en EE UU estaba valorado en cincuenta mil millones de dólares; de esa cifra, treinta mil millones correspondían al comercio de cocaína, sesenta por ciento del cual procedía de coca boliviana.[16] Según la DEA, nombre de la organización que precisamente hace lo contrario de endiosar la droga, unos diez millones de personas en EE UU consumen droga regularmente y otros cinco millones la han consumido alguna vez.[17] Podría ser una cifra inflada, pero no resulta demasiado exagerada, pues existe un vasto mercado tanto en Europa como en EE UU donde, en gran parte por la guerra de Vietnam, la cocaína ya no es una exclusividad de la élite sino un artículo de consumo muy popular a pesar de ser muy caro. Puesto que Bolivia es proveedora de por lo menos la mitad de la oferta mundial de coca, ha recibido un considerable impacto interno del surgimiento de este nuevo mercado metropolitano; las estimaciones de la producción de coca en 1980 alcanzan ochenta mil toneladas y las de sus ingresos en 1981 oscilan entre 1,3 mil millones y ocho mil millones de dólares. El valor de las exportaciones legales en 1980 estaba por debajo de los mil millones de dólares.[18] Dado que la cocaína es

16 *Narcotráfico y política*. Madrid, 1982, p. 13. Este texto fue publicado por IEPALA y no ha sido escrito por el Latin American Bureau con sede en Londres, como figura en la publicación; combina el trabajo de bolivianos y observadores extranjeros. Proporciona pocas fuentes de su información, pero al citarla he comprobado la confiabilidad de los datos, en la medida en que es posible hacerlo. En mi opinión, el libro, a pesar de ser bastante sensacionalista, es mayormente confiable. En la práctica es imposible brindar mucha información que provenga de fuentes verificables sobre este tema. Solamente los ingenuos o extremadamente tontos se abocarían a una tarea semejante

17 *Time*, 6 de julio de 1981.

18 René Bascopé Azpiazu: *La veta blanca, coca y cocaína en Bolivia*, La Paz, 1982, p. 109; Amado Canelas Orellana y Juan Carlos Canelas Zannier: *Bolivia, coca, cocaína*, Cochabamba, 1983, p 364; *New York Times*, 6 de agosto de 1982. Los libros de Bascopé, de Canelas y su hijo son los más inteligentes y sugestivos de los aparecidos hasta la fecha sobre el tema; aunque

la única mercancía vendida por un país latinoamericano cuyo precio se ha elevado en los últimos cuatro años, no es de extrañar que algunos comentaristas hablen de un "nuevo ciclo económico" que vendría a reemplazar al del estaño, o que aquellos que rechazan la forma que cobra este negocio también obtengan ventajas en los nuevos términos de comercio. Hay una resistencia aún más grande al moralismo unilateral de los gringos que quieren destruir los cocales y plantar café o frutos cítricos en su lugar, como si se tratara simplemente de un caso de roración de cultivos.

En los valles y faldas de la cordillera de los Andes se han cultivado diversos tipos de hoja de coca (*Erithroxylumcoca*) desde bastante antes de la conquista española. La evidencia sugiere que bajo el imperio de los incas, el consumo de coca era parte de muchos rituales religiosos y que probablemente estaba restringido a los niveles superiores de la sociedad. Era utilizada como tributo y se encargaba el cultivo de la hoja a comunidades específicas. El cronista Garcidiez, que escribió en 1567, alegaba que solamente la masticaban los sacerdotes indígenas; pero está claro que poco después de la conquista, el consumo de la hoja de coca se transformó en una parte integral de la vida de los mitayos, trabajadores reclutados en grupos para explotar las minas de plata. Inclusive algunos españoles adoptaron el hábito, pero el coqueo ha sido siempre una costumbre indígena fundamental no sólo para la fuerza laboral de las minas o del campo, sino para la vida comunitaria en general. La hoja de coca es frecuentemente intercambiada entre familias o grupos como parte de la minka o ayni (sistemas de trabajo o favores recíprocos) y todavía desempeña un papel importante en los ritos y actividades recreativas. Es utilizada mayormente como un estimulante para el trabajo; pero también posee cualidades afrodisíacas, aunque son menos marcadas que con la cocaína. La hoja de coca se mastica de manera continua, se mantiene en un bolo en uno de los carrillos y así libera sus propiedades químicas, cuando se le añade una pequeña cantidad de una substancia alcalina (*llipta* o *tocra*) generalmente de cenizas vegetales. Este proceso se conoce con el nombre de acullicu. En 1950, la ONU estimó que a través de dicha substancia se introduce entre 150 y treinta miligramos de

Barcopé puede a exagerar el grado hasta el cual el tráfico de cocaína surgió como una actividad conscientemente planificada, y el volumen de Canelas resulta demasiado generoso con los regímenes militares de la época, posiblemente porque los autores eran funcionarios de la CNUCN. Las estimaciones del FMI sobre beneficios de exportación para 1980 eran de 49 millones de dólares. *Hoy*, (La Paz), 2 de septiembre de1982.

cocaína en el organismo diariamente, frente a cincuenta y 150 miligramos en una sola inhalación de cocaína comercial.[19]

Amado Canelas escribe sin exagerar que: "...la coca es un factor esencial, imprescindible en la vida del campesino; ella se constituye como un elemento mediador con lo sobrenatural cotidiano, ayuda a calmar a los dioses y a predisponerlos a favor de uno".[20] Si bien existe una creciente evidencia de que hay una división generacional en la intensidad del consumo y que la urbanización hasta cierto grado ha reducido la práctica del coqueo, todavía está muy generalizado en el campo y la coca es considerada parte del salario en muchas minas. Sin embargo, la ONU ha persistido en afirmar basándose en los "descubrimientos científicos" de su investigación de 1949-50 que el acullicu es dañino para la salud (a pesar de que la coca no está clasificada como tóxica), que contribuye a la desnutrición y precipita "modificaciones desfavorables" de la naturaleza "intelectual y moral", así como una "reducción en la eficiencia" laboral.[21] Poca o ninguna evidencia estadística puede utilizarse para verificar tales afirmaciones que parecen derivar principalmente de las creencias de un estrato burocrático urbano que, como bien puede esperarse, es posible que ignore o desprecie las propiedades rituales de la hoja de coca y tilde de mentirosos a aquellos trabajadores que aleguen masticarla para ayudarse en el trabajo, pero que seguramente no consultaron a los propietarios de minas que proveen a su fuerza de trabajo con toneladas de hoja de coca. El debate médico en torno a la coca continúa, pero el dogma de la ONU ha desempeñado –y sin duda lo sigue haciendo– su papel en alentar la erradicación de las plantaciones como un medio para contener el tráfico de cocaína.

Durante la época colonial, la producción de coca prosperó paralelamente a los ciclos de auge y caída de la industria de la plata, pero probablemente nunca excedió las cuatro mil toneladas anuales, de las cuales por lo menos una tercera parte era consumida en Potosí. El cultivo para la región que ahora constituye Bolivia estaba centralizado en la región de los Yungas de La Paz, con su principal centro en las poblaciones de Coripata y Chulumani. Mientras Chulumani era una zona donde predominaban comunidades indígenas,

19 Para una exposición detallada de estas propiedades y sus consecuencias sociales ver William E. Carter ed.: *Ensayos científicos sobre la coca*, La Paz, 1983; Antonil: *Mama Coca*, Londres, 1978; William E. Carter, Mauricio Mamani, José V. Morales y Philip Parkerson. *Coca en Bolivia*. La Paz, 1980; W. Golden Mortimer: *The History of Coca*, San Francisco, 1974.

20 Canelas, *op. cit.*, p. 95.

21 Citado en *Narcotráfico y política*, pp. 28-29.

las tierras de Corpaya estaban en manos de hacendados. Hacia 1879 ya no quedaba ninguna comunidad en Corpaya y sus ochenta latifundios cuadrados de abundante coca estaban divididos entre 34 haciendas privadas. El auge del estaño dinamizó la economía local durante las primeras décadas del siglo XX y produjo la fortuna de José María Gamarra, "el rey de la coca", quien poseía siete haciendas en 1928 y era la fuerza propulsora de la Sociedad de Propietarios de Yungas, estrechamente ligada a la Rosca. Puesto que los subsuelos de coca de los empobrecidos valles de los Yungas tenían una vida natural de entre veinticinco y treinta años y podían ser cosechados tres veces al año, había una oferta tentable para el mercado inflexible de las minas.[22] La reforma agraria adquirieron parcelas muy fértiles pero al mismo tiempo muy pequeñas para despojo a los grandes terratenientes y los reemplazó con multitudinarias que permitir operaciones comerciales importantes. La producción evidentemente decayó y el comercio a menudo cobró la forma de trueque. Pero dado que aun al precio oficial (1982), una hectárea de tierra en Yungas daría 91.800 pesos bolivianos por coca al año, contra 81 mil pesos bolivianos por café y que, en una estimación moderada, el precio extraoficial de la coca es por lo menos tres veces mayor al pagado por el gobierno, se hace evidente el por qué la producción en Yungas ha sido mantenida y se ha ampliado gradualmente.[23]

Hasta principios de la década de 1970, Yungas estaba a la cabeza de la producción, pero en el transcurso de la década una nueva zona, el Chapare en la región oriental de Cochabamba, inicialmente le hizo competencia y luego lo sobrepasó. El Chapare había sido siempre un área extraordinariamente aislada, estancada en una agricultura de subsistencia de nivel inferior que no tenía mercado alguno ni siquiera en el mercado regional y que apenas se arreglába para mantener su población de 3.500 personas (1944) alimentada. Después de la reforma agraria, he una de las zonas designadas para la colonización y sus nuevos y pioneros pequeños terratenientes pronto comenzaron a experimentar con diferentes variedades de coca y lograron mayor éxito con la "coca truillo" (*Erithroxylum trujillense rusbyi*). Empero, la clientela local, acostumbrada a la hoja ynungueña, no aceptó fácilmente a esta hoja[24] ("coca de Cochabamba"), precipitando así la búsqueda de un mercado alternativo.

La inserción del Chapare en el mercado de la cocaína no fue iniciada por grandes rotaciones en 1981, el 51 por ciento de los once mil hacendados que trabajaban unas 13.250 hectáreas tenía parcelas de menos de una hectárea.[25] No obstante, la región poseía una serie de ventajas naturales sobre los Yungas desde el punto de vista del establecimiento de un mercado "informal". Lo más importante en términos de producción ha sido el rendimiento promedio de 2,6 toneladas por hectárea al año, debido a que el clima permite la cosecha cuatro veces al año. Esto complementaba la ventaja que significaba el precio vigente para la coca, el cual batía un mínimo cinco veces mayor que el del arroz y cerca de diez veces mayor que el del maíz, los otros dos cultivos importantes de la zona. Además, el Chapare es una región vasta e inaccesible, extremadamente difícil de controlar, en lugar de los Yungas tiene pocas salidas –el único camino asfaltado es fácilmente verificable por la aduana de Chulumani– y no tiene ningún terreno apropiado para el aterrizaje de aviones. Por lo tanto, el auge de la cocaína en la década de 1970 era sustentado por coca del Chapare, la cual a fines de 1982 se vendía a ochenta dólares el tamboc de 58 libras; este precio ocupaba a los campesinos de la región un ingreso anual de 7.040 dólares por hectárea, es decir, aproximadamente veinte veces el PIB per cápita de Bolivia.[26] Aunque las estadísticas en esta esfera son inherentemente poco fiables y varían no solamente de acuerdo a la institución que las provee sino también dentro de cada una de ellas, el cuadro 12 señala con bastante claridad el impacto del aumento de la demanda sobre la producción. Conviene tener en mente que durante los últimos quince años, la demanda interna legal de la hoja de coca se ha mantenido regularmente en alrededor de cuatro mil toneladas métricas; pero en 1981, cuando la producción global ciertamente excedió las setenta mil toneladas, tal demanda no podía cubrirse y había escasez de coca en las mercados.

El proceso de transformación de la hoja de coca en cocaína ($C_{17}H_{21}NO_4$) no es un enormemente sofisticado ni demasiado costoso. Las hojas mezcladas con ácido sulfúrico diluido se colocan en barriles y posteriormente son pisadas hasta convertirse en pasta. Luego se añade alcohol para hacer que los alcaloides suban a la superficie, ese jugo se sacado con sifón y puesto en reposo para que solidifique. Esta substancia es conocida como sulfato de cocaína, pasta o

tumbada a la hoja yungueña, no acogió fácilmente a esa hoja[24] ("coca de Cochabamba"), precipitando así la búsqueda de un mercado alternativo.

La inserción del Chapare en el mercado de la cocaína no fue iniciada por grandes rotaciones en 1981, el 51 por ciento de los once mil hacendados que trabajaban unas 13.250 hectáreas tenía parcelas de menos de una hectárea.[25] No obstante, la región poseía una serie de ventajas naturales sobre los Yungas desde el punto de vista del establecimiento de un mercado "informal". Lo más importante en términos de producción ha sido el rendimiento promedio de 2,6 toneladas por hectárea al año, debido a que el clima permite la cosecha cuatro veces al año. Esto complementaba la ventaja que significaba el precio vigente para la coca, el cual batía un mínimo cinco veces mayor que el del arroz y cerca de diez veces mayor que el del maíz, los otros dos cultivos importantes de la zona. Además, el Chapare es una región vasta e inaccesible, extremadamente difícil de controlar, en lugar de los Yungas tiene pocas salidas –el único camino asfaltado es fácilmente verificable por la aduana de Chulumani– y no tiene ningún terreno apropiado para el aterrizaje de aviones. Por lo tanto, el auge de la cocaína en la década de 1970 era sustentado por coca del Chapare, la cual a fines de 1982 se vendía a ochenta dólares el tamboc de 58 libras; este precio ocupaba a los campesinos de la región un ingreso anual de 7.040 dólares por hectárea, es decir, aproximadamente veinte veces el PIB per cápita de Bolivia.[26] Aunque las estadísticas en esta esfera son inherentemente poco fiables y varían no solamente de acuerdo a la institución que las provee sino también dentro de cada una de ellas, el cuadro 12 señala con bastante claridad el impacto del aumento de la demanda sobre la producción. Conviene tener en mente que durante los últimos quince años, la demanda interna legal de la hoja de coca se ha mantenido regularmente en alrededor de cuatro mil toneladas métricas; pero en 1981, cuando la producción global ciertamente excedió las setenta mil toneladas, tal demanda no podía cubrirse y había escasez de coca en las mercados.

El proceso de transformación de la hoja de coca en cocaína ($C_{17}H_{21}NO_4$) no es un enormemente sofisticado ni demasiado costoso. Las hojas mezcladas con ácido sulfúrico diluido se colocan en barriles y posteriormente son pisadas hasta convertirse en pasta. Luego se añade alcohol para hacer que los alcaloides suban a la superficie, ese jugo se sacado con sifón y puesto en reposo para que solidifique. Esta substancia es conocida como sulfato de cocaína, pasta o

22 Jose Agustín Arzabe, *Monografía de la provincia de Nor y Sur Yungas*, La Paz, 1928; Humberto Rossell, *Monografía de Nor y Sur Yungas*, La Paz, 1946; Xavier Albó, *El mundo de la coca en Corpaya*, Datos, La Paz, 1978.

23 Cárdenas, op. cit., p. 242. Estos cálculos sobre costos unitarios se computado por el hecho de que la coca es comercializada por tamboc (el cual pesa aproximadamente 25 kilos en La Paz y 29 kilos en Cochabamba), pero estas diferencias no deben ser tomadas en cuenta por los autores de *Narcotráfico y pobreza*.

24 PRODES, citado en Cárdenas, p. 226.

25 Ibid., p. 412

pasta básica y es en esa forma como se exporta la mayor parte de cocaína desde Bolivia. En la siguiente etapa del proceso, el sulfato de cocaína es lavado, algunas veces en éter pero generalmente en acetona, cuyo olor no es tan fuerte, y se le añade ácido hidroclórico para producir clorhidrato de cocaína ($C_{17}C_2NO_4HCl$).

Aproximadamente, 2,5 kilos de pasta producen, una vez procesada, un kilo de clorhidrato de cocaína que resultará, después del refinado, en ochocientos gramos de cocaína pura. Con todas las advertencias necesarias en torno a la responsabilidad de los datos, pero utilizando información proporcionada por la DEA, podemos decir que los doscientos kilos de hoja de coca que se requieren para producir un kilo de pasta básica costarían 350 dólares (1980), el ácido sulfúrico, el alcohol y la acetona ascenderían a otros cien dólares. El salario a los trabajadores por pisar la masa y el de los químicos aficionados no excedería de los quinientos dólares y el pago a los que transportan el sulfato podría ser de doscientos dólares, también por kilo. Sobre esta base, el costo de un kilo de cocaína en Bolivia sumaría unos 1.150 dólares.[26] Las fuentes coinciden en que el precio de venta –generalmente a traficantes de Colombia– es de aproximadamente cinco mil dólares por kilo. Una vez en Colombia, la pasta básica ha adquirido un valor de once mil dólares. Después de su refinamiento, la misma cantidad de clorhidrato de cocaína será vendida en sesenta mil dólares cuando se exporte a EE UU. Pero ni el proceso de producción ni el margen de ganancia acaban ahí, ya que el noventa por ciento de cristal puro no es comercializado nunca antes de ser alterado ya sea con anfetaminas, azúcar molida o talco. El grado de "recorte" de cocaína pura aumenta a medida que el producto desciende por la escalera de comercialización; es extremadamente raro encontrar cristal de más de doce por ciento de pureza al por menor. De esta forma, el kilo de noventa por ciento de pureza se convierte en ocho kilos de cocaína para venta al por menor, con un precio total de venta en la calle de quinientos mil dólares; un aumento considerable respecto a los 12.500 dólares necesarios para comprar los 2,5 kilos de sulfato boliviano que forma su base.[27] En reconocimiento a este hecho, los traficantes bolivianos han intentado concentrar más el proceso de producción bajo su control y en 1980 estaban sacando cantidades limitadas de clorhidrato de cocaína al igual que pasta básica. No puede haber una pauta confiable en cuanto al alcance de este hecho, pero quizás es sugestivo que el 28 por ciento de la cocaína confiscada y sometida a

26 Bascopé, *op.cit.*, p. 40.
27 *Ibid.*, pp. 40-41; *Narcotráfico y política*, p. 140; *Time*, (Nueva York), 4 de julio de 1981.

pruebas por las organizaciones de narcóticos de Bolivia entre 1975 y 1980 haya sido en forma de clorhidrato.[28] Esto podría explicar los períodos de malas relaciones con los colombianos, aunque es probable que las causas hayan sido la venta de sulfato de inferior calidad o los pillajes del mercado internacional.

Como hemos visto, el narcótico había aparecido de vez en cuando en la vida pública boliviana antes de la década de 1970, pero la producción de cocaína, tal y como se dio, era una actividad estrictamente periférica que no logró atraer el interés de empresarios locales en una escala significativa. Todo parece indicar que hubo una expansión muy gradual desde mediados de la década de 1950, si bien a principios de la década de 1960 la policía boliviana seguía enviando las substancias confiscadas a Londres para su análisis, sin sugerir preocupación por el tráfico. En 1963, la Comisión Permanente de Narcóticos de la ONU afirmó que la producción de coca había aumentado a doce mil toneladas, pero el gobierno boliviano sostenía que seguía en tres mil toneladas y que estaba descendiendo. A mediados de noviembre de 1970, un botín de 27 kilos de sulfato de cocaína fue confiscado por la policía de Oruro cuando estaba en tránsito para su procesamiento en Chile, único país vecino que no ha estado significativamente involucrado en el tráfico durante los años de auge.[29] Es difícil sacar conclusiones generales a partir de la dimensión de la mercancía o de su precio (once mil dólares por kilo), pero no es probable que se tratara de una transacción aislada. La tesis desarrollada por René Bascopé es que la expansión real no comenzó sino con el colapso del algodón en 1975-76 y fue resultado de una serie de estudios de exploración patrocinados por el régimen de Banzer, en estrecha relación con los miembros sobrefinanciados pero subproductivos de la Asociación de Productores de Algodón (ADEPA), con centro en Santa Cruz. Es inconcebible que cierto grado de planificación de alto nivel no hubiera tenido lugar, ya que por ejemplo el ácido sulfúrico se necesitaba en cantidades tales que precisaban de importantes operaciones comerciales y de alguna asistencia estatal. De igual manera, demasiados miembros de la élite agroindustrial cruceña, fuertemente ligados entre sí, han sido consecutivamente implicados en el narcotráfico para poder dar credibilidad a cualquier noción de que una serie de empresas aisladas sin ninguna coordinación entre sí repentinamente hubieran despegado después de julio de 1980. Además; las sumas de dinero involucradas y las exigencias para la obtención de créditos, organización de transporte, protección y contactos

28 Cárdenas, *op.cit.*, p. 358.
29 *El Diario*, (La Paz), 19 de noviembre de 1970.

de mercadeo fuera del país, excluyen las posibilidades de una absoluta ignorancia por parte de la policía y de los militares o de empresas agrícolas predominantemente pequeñas. Prácticamente todas las fuentes de información identifican al Banco Agrícola como un componente clave en el ascenso del comercio de cocaína. Con todo, no existe todavía ninguna evidencia sólida para probar una política concreta de respaldo incondicional del Estado y patrocinio bajo el régimen de Banzer, pero sí está claro que hubo una actitud benevolente, asistencia ocasional y participación directa en el caso de ciertos individuos.

Cuadro 12
Producción de coca

Año		Toneladas métricas	Fuente
1846		3.579	Dalence (a)
1930	Yungas	3.067	Morales (b)
1950		4.830	Censo Agropecuario
1952	Yungas	3.987	Aduana de La Paz
1958	Yungas	2.827	Aduana de La Paz
1965		5.515	INE (c)
1970		6.000	INE
1971	Chapare	2.666	UMSS (d)
1973		9.400	INE
1975		11.800	INE
1976		14.760	INE
1977		15.600	INE
	Yungas	5.691	SIC (e)
	Chapare	19.512	SIC
1978		18.860	INE
		15.410	PRODES (f)
		25.248	DNSP (g)
	Yungas	8.451	DCPFHC (h)
1979		22.000	INE
1980	Chapare	58.275	SEC (i)
1981	Chapare	64.275 estimado	SEC
1982	Chapare	82.000 estimado	SEC

Fuentes: (a) José María Dalence: *Bosquejo estadístico de Bolivia*, Chuquisaca, 1851
(b) José Agustín Morales: *El problema de los Yungas*, La Paz, 1936
(c) Instituto Nacional de Estadísticas
(d) Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, 1972
(e) Seminario Internacional sobre la Coca, Lima, 1980
(f) Proyecto de Desarrollo Chapare-Yungas, Cochabamba
(g) Dirección Nacional de Sustancias Peligrosas, La Paz
(h) Oficina de Control de la Producción y Fiscalización de la Hoja de Coca, La Paz
(i) Satellite Earth Corporation, Washington (1981)

Dicho esto, la identificación que hace Bascopé de tres ejes geográficos principales de producción que se superponen de diversas maneras pero que poseen una serie de características distintivas con relación al momento de su aparición y a la afiliación de su clan, parece tener peso. La primera estaría sólidamente basada en ADEPA, de carácter civil y centrada en las ricas tierras agrícolas del norte de Santa Cruz que se extienden desde San Javier a través de Portachuelo hasta Montero, población sede de la guarnición y cabeza de ferrocarril. Bascopé señala como miembros de este grupo a José Roberto Gasser, Willy Banzer Ojopi, José Paz y otros destacados terratenientes. Su líder indiscutible es Roberto Suárez Gómez, jefe de una familia tradicionalmente latifundista y propietario de extensas tierras en los alrededores de Santa Ana de Yacuma hasta el norte del Beni. Suárez es primo de Luis Arce Gómez y fue temporalmente apresado en 1976 por posesión de cocaína. Sin embargo, sería un error considerarlo una especie de pillo socialmente marginado, pues se trata de un patrón popularísimo en Santa Ana, generoso en la distribución de favores y en su contribución a las instituciones locales de beneficencia, y para muchos es el responsable de la reciente prosperidad de la ciudad. Caudillo regional de vieja escuela, Suárez es percibido como alguien que –si no del comercio estrictamente legal, al menos abiertamente – no ha causado a la región daño perceptible alguno gracias a los dólares yanquis. Esto explica por qué pudo haber permanecido en libertad por tanto tiempo y, aunque la red se cerraba en torno a él a mediados de 1983, aún poseía recursos suficientes para evitar ser arrestado por el régimen civil durante cerca de un año. Podría pensarse que no tiene sentido que Suárez, un hombre que posee tierras en Santa Cruz, pero que tiene su base en el Beni, pueda estar ligado al eje cruceño, pero no debe olvidarse que uno de los factores claves en el tráfico de cocaína es el transporte. La mercancía es permanentemente llevada en avionetas que son muy difíciles de rastrear y pueden aterrizar en pistas aisladas y cubiertas de hierba, pero no tienen la capacidad de volar ininterrumpidamente de Santa Cruz a Leticia, el pueblo sureño de Colombia que constituye el principal centro de distribución para ese comercio. Santa Cruz posee por lo menos quinientas pistas de aterrizaje, en tanto que el Beni, más aislado y sin vigilancia, tiene unas tres mil A-f, una vez que el sulfato de cocaína está listo en el este cochabambino o en Santa Cruz y es cargado por campesinos del lugar, los zapeadores, a una pista de aterrizaje local o a un pueblo, generalmente es llevado en avión primero al Beni y desde allí fuera del país normalmente a Colombia; aunque desde hace no mucho a Brasil, Venezuela, Panamá, Curaçao o la Martinica, antes de llegar a su destino –el estado de Florida, que posee una línea costera de más de 1.500 kilóme-

ros y más de 216 pistas privadas de aterrizaje–, lo es generalmente en el recorrido europeo donde se emplean "mensajeros" individuales para transportar la droga en vuelos comerciales y el aeropuerto Barajas de Madrid es un destino de los más apreciados. En tales casos, el método de transporte más usado consiste en que la persona deglute bolsas de plástico que contienen cocaína. Una estudiante colombiana de 19 años fue detenida en el aeropuerto de Bogotá en junio de 1982 en un estado de extremo nerviosismo y no tardó en confesar que llevaba cocaína en su estómago con destino a Frankfurt; la consiguiente evacuación reveló que llevaba unas 163 bolsas de droga con un peso de más de quinientos gramos. Por lo tanto, éste es un sistema nada eficaz y conlleva muchos riesgos. Han habido varios casos de muertes espantosas acaecidas en aviones debido a que los ácidos del estómago permean la bolsa de plástico y dejan escapar una dosis letal de cocaína dentro del organismo.

El segundo de los grupos de Bascopé está quizás más directamente relacionado con el transporte que con la producción, pues tiene su centro en el Beni. La afiliación del eje San Javier-Santa Ana-Paraparan es más oscura que aquella del primer clan, pero evidentemente se constituyó después e incorpora a un número mayor de personal militar porque uno de sus focos originales fue el gran rancho Paraparan de COFADENA. Si fue así, y existen versiones encontradas acerca del alcance y naturaleza de la participación militar, parece haber una estrecha correspondencia con la facción que Aníbal Aguilar identificó como la que domina el comercio en la zona de Yapacaní del Chapare bajo la dirección de los generales Echeverría y Bernal, junto con el coronel Meisés Chiriqui (comandante de la guarnición de Montero) y el capitán Rudy Landívar (jefe de la aduana de Santa Cruz).[30] Por último, Bascopé señala un grupo de terratenientes tradicionales como base en los alrededores de Vallegrande (frontera Cochabamba - Santa Cruz) y fuertemente ligados por parentesco. Por lo visto, este grupo se ocupa de la producción de pasta básica y carece de instalaciones para transporte a gran escala. Entre ellos, Bascopé identifica como líderes a Willy Sandoval Morón, que después de julio de 1980 empezó a trabajar con Arce Gómez como su asesor, y a las familias Eid y Franco.[31]

Muy probablemente, la dispersión geográfica del tráfico de cocaína dentro del país ha dado lugar a diferencias en la división de fuerza de trabajo y preferencias en la formación de alianzas. Sin embargo, sería equivocado concluir que cada eje constituye una mafia distinta o que no existe un elevado

30 Bascopé, *op. cit.*, p. 90; *Marka*, (Lima), 5 de marzo de 1981.
31 Bascopé, *op. cit.*, p. 93.

nivel de interacción y colaboración, al igual que de competencia directa. La relación más ambiciosa pero no tan confiable de narcotraficantes realizada por Aníbal Aguilar en febrero de 1981 también identifica tres grupos: la facción Banzer/Gasser en San Javier; el "grupo sirio-libanés" dirigido por los hermanos Razuk, Arce, Pereda y Ruby Salomón en el oriente cruceño, y el clan Echeverría/Chiriqui que opera fuera de Yapacaní en colaboración con Suárez. En cada uno de estos clanes hay miembros de ADEPA, los cuales, según Bascopé, pertenecían a la primera fase de expansión. Por lo tanto, se justifica un escepticismo respecto a cualquier compartimentalización precisa.

Si bien la ONU y Washington habían expresado desde la década de 1950 una constante preocupación por el nivel de producción de cocaína en Bolivia, no fue sino a mediados de la década de 1970 que se tomaron medidas de alto nivel para intentar detenerla. En 1976, Henry Kissinger visitó a Banzer en Santa Cruz para ofrecerle dos millones de dólares para el entrenamiento de la policía de narcóticos y hasta 45 millones destinados a cultivos alternativos. En cambio, la prensa local informó que al presidente se le había presentado una lista de cien traficantes conocidos y se lo invitó a mostrar la buena voluntad del régimen encarcelando por lo menos a diez de ellos.[32] Ninguno de los términos de la negociación fue cumplido; pero al año siguiente, Banzer puso su firma en un acuerdo de la ONU para restringir la cosecha de coca y detener el tráfico de drogas, compensando así parcialmente el hecho de que Bolivia no había ratificado los acuerdos similares de 1961 y 1971. No obstante, en marzo de 1979, la ONU declaró que el gobierno boliviano no había hecho nada por reducir el crecimiento de las plantaciones de coca y expresó serias dudas tanto sobre su voluntad como sobre su capacidad para contener el narcotráfico.[33]

Hubieron, sin embargo, signos más palpables de malestar en las altas esferas. En febrero de 1973, un equipo de agentes del DIN y de la Interpol fueron llamados a reunirse con el jefe de Policía –coronel Vázquez Sempértegui–, quien les ordenó parar la investigación de un caso iniciado con el decomiso de diez kilos de clorhidrato de cocaína porque habían encontrado que la carga estaba dirigida a Carlos Valverde, entonces ministro de Salud.[34] Dos años más tarde, Edwin Tapia Frontanilla, secretario privado de Banzer, fue arrestado en el aeropuerto de Montreal con un cargamento de cocaína. En el mismo operativo, a Luis "Chito" Valle, yerno de Banzer, cónsul de Bolivia en Montreal

32 Canelas, *op. cit.*, p. 130.
33 Latin America Political Report, 2 de marzo de 1979.
34 Bascopé, *op. cit.*, pp. 57-58.

y estudiante de la Universidad de McGill, se lo encontró en posesión de la droga y se le pidió discretamente que abandone el país; otros dos diplomáticos bolivianos fueron condenados a cinco años de cárcel.[35] El hecho de que la esposa de Banzer, Yolanda, hubiera viajado al Canadá en un jet de la fuerza aérea para visitar a su yerno no contribuyó a distanciar a la familia del presidente de tan deshonrosos hechos. Otro miembro de la familia, Guillermo "Willy" Banzer Abastoflor, sobrino de Hugo Banzer, fue posteriormente apresado en Florida por traficar cocaína. Cuando se lo devolvió y fue llevado al panóptico de La Paz, figuraba en el registro simplemente como Guillermo Abastoflor, pero pronto recuperó su libertad, luego de que se le diagnosticó un grave caso de hemorroides y que necesitaba tratamiento inmediato en una clínica externa, donde la seguridad era bastante más débil que el supuesto estado del ano de Willy.[36] En las últimas semanas de su gobierno, Banzer designó a su primo Guillermo Banzer Ojopi como cónsul en Miami, pero en el momento del nombramiento se filtró a través de la DEA la noticia de que Banzer Ojopi estaba involucrado en el tráfico de cocaína, originando una serie de informes de prensa. Esto obligó a que Banzer atribuyera a Pereda la nominación de su primo; pero tal pretensión de cambiar la culpabilidad fue rápidamente refutada con la presentación de relevantes documentos.

En los primeros meses de 1980, una serie de incidentes pusieron de relieve la creciente audacia de los narcotraficantes y su cada vez mayor invulnerabilidad a ser descubiertos o capturados. En enero, la división de narcóticos de la policía de Santa Cruz, bajo el comando del mayor Carlos Fernández Navarro, allanó una hacienda de la región de San Javier y confiscó una avioneta colombiana, cuyos frecuentes vuelos a la zona habían sido comunicados. Ante la resistencia ofrecida por varios hombres armados, la policía tuvo que retroceder para ir en busca de refuerzos. Cuando regresó, Fernández encontró una avioneta boliviana en lugar de la colombiana y junto a ella a un oficial de la escuela de entrenamiento local, quien ordenó a la Policía abandonar el lugar inmediatamente.[37] Fernández se rehusó y procedió a allanar la hacienda El Potrero, de Banzer, donde se descubrieron varias valijas que contenían trescientos kilos de sulfato de cocaína, además de un almacén de uniformes militares. Al día siguiente, el expresidente alegó que alguien estaba utilizando su

35 Monique Lecerf y Francois Pallareau: "Narcotráfico: origen y base de la dictadura boliviana", *Excelsior*, (México), 7 de abril de 1981; Selser, *op. cit.*, pp. 135-136.
36 *Isto Es*, Río de Janeiro, diciembre de 1981.
37 *Presencia*, (La Paz), 23 de septiembre de 1981.

hacienda con fines ilegales.[38] En mayo, un operativo de mayores proporciones organizado por la DEA estuvo a punto de decapitar la red de Suárez. Muy a principios de año, un agente secreto de la DEA, Mike Levine, se contactó en Buenos Aires con Marcelo Ibáñez, uno de los principales colaboradores de Suárez y lo convenció de que quería comprar una gran provisión de cocaína. Levine invitó tanto a Suárez como a Ibáñez a Florida a conocer sus instalaciones y a su "familia". Finalmente, sólo Ibáñez hizo el viaje; allí le mostró una mansión colonial en Fort Lauderdale, un falso laboratorio y tres maletas que contenían nueve millones de dólares sacados por la DEA del Federal Reserve Bank de Miami. El dinero fue llevado al Kendall Bank en presencia de Ibáñez. Posteriormente, el boliviano habló por radio con Suárez para decirle que los norteamericanos aceptarían quinientos kilos al precio de 16 mil dólares el kilo. Al día siguiente, 16 de mayo, Richard Fiano, funcionario de la DEA, y tres pilotos volaron rumbo a Bolivia y fueron recibidos por Roberto Suárez Levy, hijo del padrino, en una pista cercana al lago Roguaguado. Entre tanto, Alfredo "Cutuchi" Gutiérrez y Roberto Gasser Terrazas, dos antiguos miembros del clan Suárez, habían viajado a Miami; Gutiérrez llamó a Suárez por teléfono para decirle que estaban listos para embarcarse en la transacción. Finalmente, la tripulación de la DEA cargó solamente 854 kilos de cocaína en un avión Covair 440 porque pensaba que era peligroso cargar más. Cuando ya estaban en el aire, Fiano se comunicó por radio con Miami y Gutiérrez y Gasser se apresuraron al Kendall Bank, allí fueron conducidos a las bóvedas y luego arrestados. El botín de la DEA fue la confiscación más grande de cocaína que se haya hecho.[39] Sin embargo, los cargos contra Gasser no fueron mantenidos, en tanto que la fianza original de Gutiérrez de tres millones de dólares fue reducida a un millón por el juez Alcee Hastings, la misma que fue pagada en efectivo sin demora permitiendo al sospechoso, un reconocido piloto, escapar a Bolivia. En octubre de 1981, el régimen de Torrelio entregó nuevamente a Gutiérrez a las autoridades norteamericanas como parte de su campaña para recobrar el reconocimiento diplomático, pero se rehusó a entregar a Suárez con el argumento de que "no existe acusación formal contra él".[40]

38 *Marka*, (Lima), 28 de agosto de 1980; *Excelsior*, (México), 7 de abril de 1981; *Narcotráfico y política*, pp. 55-56.
39 *Miami Herald*, (Miami), 14 de octubre de 1980.
40 *Ibid.*, 16 de mayo de 1981; *Presencia*, (La Paz), 23 de enero de 1982

192/208

Hubieron otras figuras que atrajeron la atención. A principios de 1980, un avión de propiedad de Roby Salomón se estrelló en el Beni y se encontraron en su interior trescientos kilos de sulfato de cocaína; Salomón fue rápidamente enviado a Caracas como agregado militar.[41] El 3 de julio, dos semanas antes del golpe, un Paper Aztec se estrelló en Laja, no muy lejos de El Alto, matando a sus tres tripulantes y desparramando billetes de cien y de cincuenta dólares sobre el área circundante. El avión pertenecía a Salomón y a Arce Gómez, que se presentó inmediatamente en un helicóptero y ordenó a la policía que no toque los restos, rompiendo su informe.[42] Algunos de estos incidentes salieron a la luz en la prensa boliviana, pero durante el período inmediatamente anterior a las elecciones hubo un silencio casi sordo respecto del tema del tráfico de cocaína en los círculos políticos. Dado que la UDP había contratado los aviones de Arce Gómez, no está lejos del espectro de las probabilidades el que tal silencio se debiera, por lo menos en parte, a la ignorancia del alcance del comercio, pero los clanes lo interpretaron como un paso táctico previo a la iniciación de una estrecha colaboración con el gobierno de la UDP y de la DEA para un amplio operativo antidroga. Los acontecimientos que siguieron brindaron credibilidad a esta espectativa, la cual estaba detrás del sólido apoyo al golpe del 17 de julio por parte de los principales clanes de la cocaína.

Los términos del financiamiento de la rebelión de García Meza por parte del clan siguen siendo un tanto oscuros. La mayor parte de las fuentes secundarias afirman que una suma de alrededor de un millón de dólares fue entregada por Abraham Baptista, el por mucho tiempo oficial de inteligencia, contratado por el G-2 y conocido como un importante nexo con la mafia. Sin embargo, el semanario Aquí, entonces editado clandestinamente, un mes después del golpe informó que José Paz había entregado 800 mil dólares al general Hugo Echeverría y que una suma no revelada que había recibido García Meza de Pedro Blayer y José Roberto Gasser –cuya familia había financiado el alzamiento de Banzer en 1971– no formaba parte de esto.[43] Aquí se sugería una división inicial de interés que muy pronto se reflejaría en la competencia entre los dos oficiales-, siendo Echeverría el que perdió ante el apoyo de Arce Gómez a García Meza. Durante las primeras semanas después del golpe, indudablemente hubieron dificultades dentro del régimen y entre algunos de los

41 *Excelsior*, (México), 7 de abril de 1981.
42 *Veja*, (Sao Paulo), 8 de octubre de 1980.
43 *Aquí*, edición clandestina, N° 4, agosto de 1982.

productores. En un testimonio a la policía italiana de agosto de 1982, el mercenario Elio Ciolini informó que su grupo estaba dirigido en el inicio por Echeverría, y que Suárez le pagaba. Uno de los miembros más destacados de este grupo era Joaquín Fiebelkorn, empleado para intensificar la seguridad de Suárez. (Parece que éste logró su propósito ya que la instalación de emplazamientos de bazukas alrededor de las pistas de aterrizaje de Suárez redujo las prácticas fraudulentas por parte de traficantes colombianos). Con todo, poco después del golpe, las relaciones con Suárez se enfriaron bastante y los mercenarios importados fueron puestos bajo el mando directo de Arce Gómez.[44] El tremendamente activo Abraham Baptista pronto chocó con la nueva estructura de poder. A menos de quince días después del golpe, un grupo paramilitar bajo su mando recibió seis millones de dólares de ciertos colombianos que volaron a Santa Cruz y Baptista llevó este dinero directamente a García Meza. Según algunas fuentes, el presidente ordenó a Baptista depositar cuatro millones de dólares en la cuenta de su esposa Olma y entregar el resto a Arce Gómez. Empero, los colombianos creían que el trato era sólo con Arce Gómez, de modo que al conocer las actividades de Baptista le ofrecieron un millón de dólares para protegerse. Temiendo la formación de una red que escape a su control, Arce Gómez ordenó a Baptista abandonar La Paz y persuadió a García Meza de que se lo expulsara del ejército. El desagraciado personaje respondió amenazando con revelar la participación del régimen en el narcotráfico, un paso movido por la desesperación que con seguridad lo privaría de amigos y muy probablemente sería la causa de su asesinato en el exterior de una pizzería en el centro de Santa Cruz el 6 de octubre de ese año. Monique Lecerf y Francois Fallarcan sostienen que los asesinos fueron pagados por Echeverría, que no tenía mucho que ganar con las actividades de Baptista pese a que sus relaciones con Arce Gómez no eran muy buenas.[45] Las muertes de Carlos Roca, asesinado a tiros en su hacienda en Santa Cruz a fines de 1980; del coronel Emilio Arzabe, un supuesto miembro del grupo de Villegrande que falleció al explotar su avión en Santa Cruz cuando éste despegaba en 1981, y de "Mosca" Montoy, mano derecha de Arce Gómez, muerto también a tiros en Santa Cruz el 18 de junio de 1982, bien pueden atribuirse con bastante certeza a estas luchas internas que resultaron asimismo en el asesinato de mayor número de individuos menos importantes, al igual que de algunos colombianos. Aunque tales tensiones en algunas oportunidades fueron agudas, nunca llegaron a

44 *Panorama*, (Roma), 20 de septiembre, 27 de septiembre de 1982.
45 *Excelsior*, (México), 7 de abril de 1981; *Narcotráfico y política*, p. 72.

contiendas armadas de clanes y en general fueron resueltas a nivel institucional. Por lo menos en la primera fase del régimen de García Meza. Arce Gómez pudo introducir un sistema impositivo informal que, en combinación con los fondos del clan, dio lugar a la observación tan publicitaria de Peter Passage del Departamento de Estado: "...por primera vez la mafia se ha comprado a un gobierno".[46] Según el New York Times, el general Bernal recibió pagos de diez mil dólares semanales por hacer que el transporte de cocaína se haga sin interferencias; el Wall Street Journal sostenía que parte de esas sumas estaba destinada a la compra de aviones de combate.[47] Las fuentes bolivianas afirman que la tarifa que cobra un camión cargado con diez mil kilos de hoja de coca pagaba cinco mil dólares para Arce Gómez, 2.375 para García Meza y entre 1.250 y 650 para varios oficiales del Ministerio del Interior, la aduana y la policía. El impuesto total sobre esas mercancías se dice que llegó a ser de trescientos mil pesos bolivianos, suma que aún dejaba a aquellos que participaban en su transporte un apreciable margen de ganancia.[48] Muy probablemente, fueron éstos los medios, es decir cobrando por la no interferencia, a través de los que el régimen y ciertos sectores de los militares se involucraron en el tráfico. Esto no quiere decir que no acumularon fabulosas sumas de dinero tanto en efectivo como en especie. Cuando ya había caído en desgracia, los activos fijos registrados de Arce Gómez ascendían a tres mansiones palaciegas, cuatro departamentos lujosos en La Paz, Santa Cruz y Buenos Aires, cinco ranchos, una planta procesadora de leche y varios aviones.[49] A principios de 1981, se prestó mucha atención a un viaje a Zurich de la esposa de García Meza, que según Der Spiegel había depositado cuarenta millones de dólares en una cuenta de ese país.[50] La primera dama fue escoltada durante su viaje por Federico Nielsen Reyes, traductor del *Mein Kampf*, ex cónsul de Bolivia en Frankfurt, que vendió su puesto al propietario de una fábrica de zapatos para poder comprar un caballo y competir en los juegos olímpicos de 1972, fue promotor de los planes de migración de Banzer y uno de los tenientes de mayor confianza de García Meza.[51] Es posible que los dineros acarreados a Europa por Olma de García Meza incluyeran una parte de los cinco millones de dóla-

46 *El Heraldo*, (México), 14 de agosto de 1980.
47 *New York Times*, 31 de agosto de 1980; *Wall Street Journal*, 8 de mayo de 1981.
48 *Narcotráfico y política*, p. 71.
49 *Aquí*, (La Paz), 9 de abril de 1983.
50 *Der Spiegel*, 5 de febrero de 1981.
51 *Excelsior*, (México), 10 de abril de 1981.

res donados por el coronel Bo Hi Park, a nombre de la secta religiosa liderizada por Sun Myung Moon, quien junto con el gobierno de Taiwán era un leal defensor del régimen boliviano.[52]

Fuese cual fuese el grado de veracidad de tales informes, estaban tan generalizados que contribuyeron a empeorar la reputación ya extremadamente negativa del régimen. También es sugestivo el que muchas de estas historias provinieran de filtraciones de la DEA que seguía enfrascada en una campaña de gran dimensión contra el gobierno de Bolivia. Tuvo el efecto de enfriar las relaciones entre la administración de García Meza y los otros regímenes militares del Cono Sur. La continuidad de esa política sacudió al gobierno de La Paz e hizo que tomara conciencia de la necesidad de hacer un esfuerzo por limpiar su imagen. Dos semanas después del golpe, Arce Gómez había respondido a las acusaciones de Washington sobre su participación en el narcotráfico con un franco desafío que reflejaba la confianza del gobierno tanto en sus aliados regionales como en un futuro cambio de actitud por parte de EE UU: "...la responsabilidad íntegra del problema inherente al tráfico de estupefacientes y al incremento de la salida de drogas recaerá en el presidente Carter, ya que en estos momentos, al haber suprimido la ayuda, será el único autor del aumento de consumo de cocaína en los Estados Unidos".[53] En el mismo tono, Arce Gómez señaló públicamente que, de continuar el boicot norteamericano, quizás no hubiera más alternativa que legalizar la cocaína en Bolivia. Un año después, las circunstancias habían cambiado lo suficiente como para que éste declarara que el narcotráfico constituía "...un mal que crece día a día en detrimento de nuestro país".[54]

A principios de 1981, García Meza comenzó a responder a la demanda de establecer algún aparato formal de control. El 3 de abril impuso un monopolio estatal sobre la compra de hoja de coca de los productores (Decreto Supremo 16168) para otorgar mayor poder al Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (CNLCN), creado el mes anterior (Decreto Supremo 18121, 11 de marzo de 1981) para supervisar los operativos antidroga, especialmente aquellos conducidos por la Dirección Nacional de Sustancias Peligrosas (DNSP). Empero, el presidente ahora presionado tanto por los militares como por civiles involucrados en el tráfico, no podía decidir si serían las FF AA o la policía las encargadas de toda la operación. El 19 de mayo anunció que los militares

52 *Los Tiempos*, (Cochabamba), 4 de septiembre de 1981.
53 *Última Hora*, (La Paz), 30 de julio de 1980.
54 Seisez, *op. cit.*, p. 166.

renunciarían a toda participación, pero 48 horas más tarde dio marcha atrás en su decisión.[54] Una de las razones de tal vacilación fue el renovado conflicto entre los clanes, fruto de la designación del coronel Arturo Doria Medina como director del CNLCN. Doria Medina era un encarnizado opositor de Arce Gómez y desde que asumió su puesto comenzó a moverse en contra de los intereses de su rival. Además, cuando en mayo de 1981, la policía brasileña capturó a media docena de los mercenarios de Arce Gómez operando libremente en la frontera y engalanados con insignias nazis, armamento pesado y apreciable cantidad de cocaína, el coronel David Fernández, jefe de la DNSP, apoyó públicamente todos los cargos hechos contra quienes habían sido arrestados, mientras que el general Edén Castillo, ministro de Defensa, aseguró la inocencia y buena índole de algunos componentes de la heterogénea cuadrilla de italianos y alemanes que se denominaban "Los Novios de la Muerte". En el conflicto originado por esto, Castillo perdió su puesto, pero también la campaña del CNLCN fue restringida y a Doria Medina se le dio el cargo, menos poderoso pero igualmente remunerador, de jefe de la aduana.

Al CNLCN se lo tomó poco menos que como un total enigma, en parte porque el nombramiento de Doria Medina reflejaba si no una predisposición a controlar el tráfico, al menos la de cortarle las alas a Arce Gómez, y en parte porque había una manifiesta preocupación dentro del cuerpo de oficiales de que la situación había escapado completamente de control. Pero no existe mucha evidencia para sugerir que se hubiera hecho un progreso real. En primer lugar, los órganos de control estaban irremediablemente faltos de preparación en términos logísticos. No tenían tan siquiera un helicóptero de su propiedad y el único medio para rastrear el tráfico aéreo en el Chapare era un radar VHF con un alcance de apenas diez kilómetros. No había recursos para competir con el precio extraoficial de la hoja de coca, ni efectivos suficientes para cubrir las principales ciudades, ni qué decir del campo. Y, lo que es más importante aún, no había voluntad política para hacer un trabajo de campaña a fin de depurar una institución notoriamente corrupta y obligar a otros componentes del aparato estatal a colaborar. Por lo tanto, si bien el CNLCN editó una buena cantidad de propaganda, preparó estudios detallados e hizo batidas ocasionales en que capturó a pequeños productores, el tráfico seguía prácticamente como antes. A principios de abril de 1981, García Meza tuvo que admitir que de un embarque de 150 kilos habían "desaparecido misteriosamente" 140 kilos en una batida conjunta entre la policía y las FF AA antes de que

55 *Presencia*, (La Paz), 20 de mayo, 22 de mayo de 1981.

pudieran ser destruidos, pero el presidente negó la posibilidad de identificar a los culpables o que el caso fuera un signo de "infiltración dentro de las FF AA".[56] En junio, el prefecto de Santa Cruz protestó porque durante los quince meses anteriores, ninguna parte de la cocaína confiscada por la oficina local de narcóticos había sido enviada, como lo exigía la ley, al Banco Central de La Paz y el procurador de la ciudad anunció que varios cientos de personas habían sido acusadas, pero sólo 35 enviadas a juicio.[57] Unos días antes de esto, el prefecto designado por los militares había denunciado a la policía de narcóticos por "abusos, atropellos a la propiedad y personas, allanamientos ilegales, apropiación de dinero y otros bienes".[58] Si tal estilo parecía necesario frente a una oposición con grandes recursos y bien organizada, evidentemente no dio muy buenos resultados: entre septiembre de 1981 y enero de 1982, la DNSP se las arregló para confiscar apenas 132 kilos de cocaína y detener a treinta personas, ninguna de las cuales tenía una posición "directiva" dentro del proceso industrial.[59] Incluso en marzo de 1982, cuando el CNLCN cooperaba hasta cierto punto con la DEA, todavía fue posible que el coronel Ángel García Ricaldi continuara en su puesto, habiendo sido capturado con las manos en la masa, comandando un convoy de camiones que transportaban hoja de coca a la planta procesadora.[60]

El viraje hacia una cooperación formal con la DEA fue evidente en los últimos meses de 1981 y principios de 1982; fue prácticamente sellado en junio de 1982, cuando la embajada americana aprobó formalmente los planes del CNLCN de destruir las plantaciones de coca en el curso de seis meses. Esta realineación siguió a la caída de García Meza y Arce Gómez y correspondía a la necesidad del gobierno de Torrelio de lograr un *rapprochement* con Washington a fin de que contribuyera al estado de casi bancarrota en que estaba sumida la economía formal. Sin embargo, dentro de Bolivia resolvió pocos problemas. El 23 de abril de 1982, el operativo antidroga de mayores proporciones jamás emprendido en el país fue puesto en escena con unidades militares y policíacas conjuntas bajo la dirección del CNLCN, que organizó allanamientos a fábricas pequeñas entre Santa Cruz y Cochabamba, concentrándose especialmente en la región de Yapacaní, cerca del río Ichilo. Se cap-

56 Selser, *op. cit.*, p. 202.
57 *El Mundo*, (Santa Cruz), 24 de junio de 1981.
58 *Presencia*, (La Paz), 21 de junio de 1981.
59 Canelas, *op. cit.*, p. 164.
60 Bascopé, *op. cit.*, p. 102.

turó unas cuatro toneladas de sulfato de cocaína, el acostumbrado grupo de zapeadores, plantadores y ayudantes fue tomado preso y se destruyeron unas noventa hectáreas de cocales. Fue una operación destinada a impresionar y lo consiguió, pero no tanto porque significó un golpe para el "pez gordo" como porque dos tercios de la zona de coca habían sido destruidos con el empleo del poderoso herbicida 2-4-D bajo la dirección de un experto norteamericano, Frank Tachierley. Las afirmaciones del CNLCN de que estaba comprobado científicamente que el 2-4-D era inofensivo, no pudieron detener las protestas de que, como el Agente Naranja y el 2-4-5T, contenía ácido triclofenociaco y por lo tanto dioxina, un veneno extraordinariamente poderoso.[61] El empleo de esa substancia es ilegal de acuerdo a las leyes bolivianas, pero es muy posible que tanto el costo que supuso la destrucción con 2-4-D (aproximadamente dos mil dólares por hectárea) como las protestas públicas hayan evitado que se lo continúe usando. Este episodio revivió los temores sobre el marcado interés de la embajada americana en destruir las plantaciones y con ellos la subsistencia de miles de campesinos. La campaña de ambos extremos habría de escalar durante el siguiente año y se prolongaría más allá de la dictadura.

Atrincheramiento versus retirada

La descomposición del régimen de García Meza, que se aceleró a principios de 1981, estuvo apuntalada siempre y muchas veces provocada directamente por el problema de la cocaína, pero ciertamente también fue resultado de factores más familiares: la resistencia de la clase obrera, descontento regional, sentimiento antimilitarista generalizado y una espiral descendente de la economía que parecía no tener fin.

Habiendo instituido el aparato de control del movimiento obrero en su primera fase, a fines de 1980 el régimen comenzó a preparar el terreno para emprender una detallada negociación con el FMI, institución que continuaba observando la crisis económica y tratando de asegurar que los servicios básicos de la deuda sean cubiertos o refinanciados de una manera ordenada, pero que –aparte de consideraciones políticas más directas– requería claramente la evidencia de una extrema sobriedad fiscal para negociar nuevos créditos. Al mismo tiempo, el gobierno necesitaba urgentemente mayores ingresos, lo cual significaba reducir los subsidios a los precios y el gasto social. Éstos eran los

61 Canelas, *op. cit.*, pp. 273-278; *Narcotráfico y política*, pp. 155-157.

dos objetivos centrales del paquete económico del 9 de enero de 1981 del régimen, el cual no incluía la tan temida devaluación, pero congelaba todos los salarios, reducía subsidios a los precios de una amplia gama de productos y la participación estatal en el seguro social de un cincuenta a 33 por ciento, teniendo que ser cubierta la diferencia por los trabajadores y el empleador. Puesto que los diez decretos que componían este presupuesto aumentaban los precios del kerosene, gasolina, electricidad, pan, leche, azúcar y mantequilla, tuvieron un grave impacto inflacionario en el corazón mismo de la economía popular. La subida inmediata del costo de vida fue de más de 35 por ciento, pero pronto este porcentaje aumentó debido a la especulación y a las tarifas más elevadas de transporte. El Estado recuperó fondos por un valor de aproximadamente doscientos millones de dólares anuales y logró impulsar las tasas de interés a 32 por ciento, lo cual antagonizó enormemente con las empresas pequeñas al igual que con grupos poderosos como la ANMM, que anunció que los costos de producción en el sector minero privado aumentarían en catorce millones de dólares en un momento en que las pérdidas globales eran de 39 millones de dólares, el precio del estaño decaía y EE UU estaba a punto de vender más estaño de sus reservas.[62] Dado que la COMIBOL estaba controlada por garciamezistas, no hubo reclamo formal alguno por parte de la empresa privada, pero los síntomas de tensión eran manifiestos y el apoyo de este sector al régimen decayó rápidamente. La respuesta de la clase obrera fue lo suficientemente fuerte como para confirmar la aprehensión del gobierno con relación a una devaluación y para poner énfasis en el hecho de que la COB seguía operando y podía lograr amplio respaldo a una convocatoria de huelga, aún bajo las circunstancias más apremiantes. El día 11, el sector urbano, incluyendo a los transportistas progubernamentales, ingresó en un paro de 48 horas; al día siguiente, los mineros dejaron de trabajar por el mismo lapso. Aunque había bastante acoso localizado, el régimen desistió de infligir un nuevo golpe represivo y se contentó con declarar que la huelga era ilegal y subversiva, a sabiendas de que el movimiento obrero carecía de la fortaleza económica y los recursos políticos para una acción prolongada.

Fue para discutir los resultados de la huelga que la cúpula interna del MIR se reunió en la calle Harrington de La Paz la tarde del 15 de enero. Anoticiado de esto, Arce Gómez organizó un allanamiento a dicho departamento, muy similar a los operativos perpetrados en julio de 1980, en este allanamiento participaron unos doscientos agentes del SES. Posteriormente, el ministro de-

62 Para más detalles ver *Bolivia: Información y Análisis*, N° 3, enero de 1981.

cluró que ocho miembros del partido habían resultado muertos en un intercambio de fuego, pero pronto se supo que los miristas se entregaron sin resistencia, fueron cruelmente torturados in situ y luego asesinados; únicamente a la dupigada Gloria Ardaya se le perdonó la vida, pero fue obligada a presenciar la agonía de sus compañeros. De un golpe, el MIR perdió a algunos de sus dirigentes de más talento, incluyendo al líder de Siglo XX, Artemio Camargo, al economista Ramiro Velasco y al líder estudiantil Gonzalo Barrón. Otro que murió fue José Luis Suárez Guzmán, hijo de un destacado general en retiro, quien inmediatamente lanzó una campaña necesariamente suavizada pero extremadamente poderosa de protesta por los asesinatos. Ésta no tardó en obtener gran apoyo, ya que la muerte de los jóvenes políticos había producido un sentimiento de indignación en la clase media de la capital quizás no igualado desde 1944, cuando oficiales de RADEPA emprendieron parecida eliminación friamente calculada, también contra miembros de la élite política.[63] Arce Gómez siguió incólume pero había ido demasiado lejos; la ejecución de los dirigentes del MIR no podía justificarse en términos del estado de guerra que se alegó en el momento del golpe; para todos constituía un asesinato a sangre fría y no contribuyó en absoluto a disminuir la tensión con EE UU. Dos días más tarde, García Meza se reunió con Banzer y probablemente discutieron los excesos de Arce Gómez al negociar una posible alianza para reforzar al aislado régimen. No se llegó a ningún acuerdo.

Quince días después, Arce Gómez concentró su atención en el Comité Pro Santa Cruz, cuyo control había sido arrebatado de uno de sus designados en la pelea por evitar la construcción de un enorme ingenio azucarero en San Buenaventura, en el departamento de La Paz. Éste era un asunto que unía a la oligarquía cruceña cuyos ingenios ya estaban funcionando muy por debajo de su capacidad y que rechazaba la creación de un "nuevo polo de desarrollo" para la agroindustria fuera de la región; tal fue su oposición que incluso los líderes pro gubernamentales del Comité vacilaron al defender el proyecto, rindiéndose sin mayor enfrentamiento a la oposición mayoritariamente banzerista. En un paso administrativo insensato para corregir la situación, Arce Gómez anunció la creación de un Comité Cívico Nacional (CCN) que agruparía a todos los comités regionales, bajo la supervisión del gobierno central.[64] El

63 En *Cronología*, pp. 289-292, se puede encontrar el macabro apasionado de los muchos relatos sobre este incidente.

64 Para detalles del conflicto de Santa Cruz ver *Bolivia. Información y Análisis*, N° 2, diciembre de 1980; N° 3, enero de 1981, N° 4, febrero de 1981.

Comité Pro Santa Cruz declaró inmediatamente una huelga departamental en defensa de su autonomía y contra San Buenaventura. La medida obtuvo el apoyo generalizado y la aprobación tácita de la policía y la guarnición, la cual constituía una sólida advertencia para García Meza y un importante golpe para el prestigio y el poder de Arce Gómez. Al día siguiente, el gobierno abandonó el proyecto del CCN. Una semana más tarde, el 18 de febrero, el control de la DNSP fue transferido a las FF AA, y cayó en manos de los opositores de Arce Gómez. Bajo una considerable presión, tanto externa como interna, el día 24 García Meza finalmente destituyó a su ministro al igual que al coronel Ariel Coca, ministro de Educación, que también había sido públicamente involucrado en el tráfico de cocaína. Diversas fuentes coinciden en la versión de que cuatro días después de su destitución, Arce Gómez sostuvo una reunión con importantes traficantes en la casa de Sonia y Pachi Atalá, donde confirmó que aún gozaban del apoyo de García Meza, pero que debido a razones de Estado había sido necesario hacer algunos cambios formales y que por lo tanto, debían trasladar sus operaciones de Santa Cruz y Cochabamba al Beni, para brindarse más seguridad contra inevitables operativos anticocaína.[65] Arce Gómez todavía conservaba el control sobre el SES y seguía con el poder detrás del trono, pero su destitución del gobierno señaló el primer paso del régimen hacia su progresiva pérdida de autoridad. Ahora era Santa Cruz el principal núcleo de oposición, un hecho que se puso de manifiesto en la nominación de nada menos que once comandantes para su guarnición en el espacio de quince meses.

La salida de Arce Gómez del gobierno inició un período de rápida evolución política y extrema confusión dentro de la clase gobernante. En primera instancia, ésta se concentró en Banzer, quien días después del cambio de gabinete no se opuso a la aceptación de altos cargos gubernamentales por parte de miembros de ADN como Mario Rolón Anaya y Jorge Tamayo Ramos, en un aparente intento de destruir a Arce Gómez. Una semana después, un importante banzerista, Alberto Violand, reemplazó al progubernamental Marcelo Pérez en la presidencia de la CEPB. No obstante, Banzer desistió de brindar un apoyo franco y el 6 de marzo viajó a Washington para lo que se consideraba un decisivo intercambio de opiniones con la flamante administración de Reagan. Ese mismo día, Arce Gómez fue nombrado director del Colegio Militar. El 16, Banzer regresó para declarar que los militares deberían considerar la posibilidad de acometer reformas políticas para preparar el camino a las elecciones,

65 *Narcotráfico y política*, p. 80; *Excelsior*, (México), 12 de abril de 1981.

señalando con ello que era necesario hacer cambios para que Washington contemple la reapertura de relaciones y que el propio Banzer se mantendría distante del gobierno. Un día después, los cadetes del Colegio Militar tomaron la institución y se declararon en rebelión; su principal demanda era la destitución de Arce Gómez. Esta medida fue precipitada en parte por el daño causado al *amour propre* de los cadetes, con el uso que hacía Arce Gómez de la academia para entrenamiento de sus cuadrillas paramilitares; pero pronto se supo que la razón fundamental era la relación de este personaje con la cocaína, que se había vuelto tema candente dentro del cuerpo de oficiales como resultado de la distribución por todas las guarniciones del país de un número extraordinariamente grande de videocasetes del programa "Sesenta Minutos". Muchos oficiales obviamente no se conmovieron ante las acusaciones del coronel Salomón sobre la supuesta "inclusión de Mike Wallace en la planilla de pagos del bloque soviético y la izquierda internacional"; y debió ser particularmente exasperante para estos jóvenes, que estaban en la mitad del proceso de riguroso adoctrinamiento y faltos de experiencia en el mundo exterior, ver cómo su comandante era acusado ante todo el mundo de transgredir flagrantemente, con fines personales, el código sobre el cual ellos recibían tan estricta formación. Aunque una serie de oficiales expresaba su apoyo al levantamiento y Doria Medina sarcásticamente rechazó el pedido de Arce Gómez de lanzar al regimiento Tarapacá contra los cadetes, se puso de manifiesto que el lanzamiento no había sido planeado con cautela y que le faltaba una dimensión política lo suficientemente clara para difundirse. Aislados en el suburbio de Irpavi, los cadetes fueron obligados a ceder y se dio de baja a la promoción completa de brigadieres del último curso. El régimen de García Meza no se enfrentó con un riesgo muy grande, pero el panorama de toda una generación de futuros oficiales destituida por defender el honor de su academia no agradó a la institución en su conjunto, lo cual obligó a García Meza a destituir a Arce Gómez una vez más y enviarlo en un "viaje de estudio" a Taiwán hasta que los ánimos estuvieran menos caldeados.

A pesar de que la rebelión de los cadetes fue fundamentalmente una aventura institucional, el gobierno responsabilizó a Banzer y por primera vez fomentó ataques políticos de quienes lo apoyaban contra el expresidente. El 27 de marzo, ADN respondió retirando a sus miembros de CONAL y amenazando con una ruptura total. Como consecuencia de ello, García Meza viajó a Santa Cruz para negociar con Banzer nuevamente, pero sin éxito. El 13 de abril, ADN retiró formalmente todo su apoyo al régimen y rompió con Rolón Anaya y con Tamayo, quienes prefirieron quedarse cómodamente cobijados

en sus altos cargos. El 19, tanto Banzer como Natusch fueron puestos bajo arresto domiciliario a causa de un supuesto plan de golpe. El gobierno estaba ahora en desacuerdo, por una parte, con el líder reconocido del "nacionalismo" y, por otra, con un oficial que todavía gozaba de bastante respaldo y respeto dentro de las FF AA por su conducta de noviembre de 1979, la cual era considerada como un ejercicio viable y honroso que no prosperó por razones que escaparon a su control.

El siguiente reto al gobierno no tardó en producirse, pero provino de un grupo inesperado y cobró una forma un tanto extravagante. Temprano en la mañana del 2 de mayo, Carlos Valverde y los "guerrilleros" de la FSB ocuparon la refinería Tita en las afueras de Santa Cruz y amenazaron con hacerla volar si García Meza no renunciaba en el lapso de 48 horas, porque: "...sólo simula combatir el tráfico de drogas para esconder graves problemas económicos y políticos del país y lograr el reconocimiento norteamericano".[66] Pese a que la FSB había desempeñado un papel principal en el proceso de desestabilización que provocó el golpe de 1980, no se había granjeado gran popularidad desde entonces y, sin duda, estaba influenciada por el cambio en el equilibrio de fuerzas en Santa Cruz. Una semana después de que García Meza fracasó en su intento de alianza con Banzer, los falangistas habían interpretado la situación con la suficiente astucia como para demandar el establecimiento de una asamblea constituyente. Esto apenas sí era coherente con la trayectoria del partido y, considerando su "adopción de la lucha armada" menos de un mes después, era evidentemente sólo un reto ceremonial. Cuando Valverde, ataviado con guerrillerismo festivo, había logrado su principal objetivo, sobrevino una especie de ópera bufa con el prefecto de Santa Cruz. El viejo aliado de Valverde, Óscar Ramón Vaca, denunciaba la ocupación como un "...hecho cobarde protagonizado por un terrorista esquizofrénico, que sin duda cree que es Robin Hood". Por su parte, García Meza respondió a los cargos que se le hacían, afirmando que Valverde tenía financiamiento "...con dineros de dudosa procedencia que pueden pertenecer a cinco prófugos de la justicia ordinaria, sindicados de delito de narcotráfico".[67] El episodio tomó un rumbo menos gracioso cuando la Octava División recibió órdenes de retomar la refinería bajo el mando del coronel Gary Prado, quien había sido nombrado por García Meza en este puesto clave en un acto de desesperación, dada su conexión con los institucionalistas y con el objeto de apaciguar a la élite de la ciudad, de la cual

66 *El Mundo*, (Santa Cruz), 3 de mayo de 1981.
67 *Ibid.*

la familia Prado era miembro consolidado y porque una guarnición inexorable necesitaba de un prestigioso líder que la mantenga en línea. Las tropas de Prado retomaron la refinería Tita sin resistencia, pero mientras su comandante discutía con Valverde, uno de los subordinados del coronel dejó escapar "accidentalmente" un tiro, hiriendo gravemente a Prado en la espina dorsal.[68] Prado fue trasladado inmediatamente a un hospital de la ciudad, pero tanto su familia como la embajada americana, sospechando un juego sucio y temiendo otro atentado de ajuste de cuentas como en los casos de Selich, Zenteno y Torres, consiguieron que el reacio régimen entregue al oficial herido a la USAF (Fuerza Aérea de EE.UU), que tenía un avión esperando para llevarlo al hospital militar Walter Reed. Las cosas habían llegado a tal punto que la embajada tuvo que amenazar con mayores dilaciones en el restablecimiento de relaciones diplomáticas si no permitían salir libre al oficial inválido. La ausencia de Prado privaba a la escena política de un importante antagonista, pero éste se recuperó muy rápido, y aunque quedó paralítico al igual que su contraparte Genaro Flores, no dejó que su invalidez le impidiera realizar sus actividades y retornó a asumir su puesto después de la caída del gobierno militar como una especie de Millán Astray andino.

A mediados de julio, los alegatos de incompetencia, malversación y diversas prácticas ilegales contra la junta sobrepasaron bastante al problema de la cocaína y contribuyeron a la atmósfera general de corrupción en las altas esferas. En un extremo, el canciller Rolón Anaya fue implicado en un negocio a través del cual se sacaron 87 mil dólares del Banco Central a fin de comprar de Alemania Oriental una vaca de vidrio para la Universidad de Trinidad, la cual no había solicitado nunca tal ayuda pedagógica y seguramente tampoco había recibido parte de la jugosa "comisión" claramente incorporada en el precio.[69] Y lo que es más importante, los términos de la compra de trigo de la Argentina mostraron ser bastante menos generosos que aquellos publicados poco después del golpe. A fines de septiembre de 1980 se reveló que el precio de un pedido de 235 mil toneladas era de 275 dólares por tonelada, 55 dólares más caro que lo acordado originalmente y 107 dólares más cara la tonelada que el trigo boliviano (reconocidamente inferior). Además, el contrato otorgaba plenos derechos de transporte a una firma naviera argentina que letárgicamente llevaba la mercancía hasta el puerto chileno de Antofagasta donde Bolivia no poseía la suficiente capacidad de almacenamiento para tan enorme volumen. El resultado fue que, cuando finalmente arribó la carga a La Paz, se encontró que contenía millones de hongos y que era inservible en su mayor parte.[70] A principios de 1981, la junta autorizó otro contrato con una firma argentina (Nidera Handels Co., a través del decreto 18233) para la compra de 80 mil toneladas de trigo de baja calidad a un precio total de 26.817.000 dólares o 335 dólares por tonelada. Este precio era considerablemente más alto que el de 260 dólares por tonelada, tarifa de mercado de "Hard Winter -2", un grano superior que casi siempre es utilizado para consumo humano. Se dijo que la comisión por esta transacción fue de seis millones de dólares. No obstante, el escándalo político más nocivo fue originado por la revelación que hizo el 6 de agosto de 1981 el periódico El Deber, de Santa Cruz: el 8 de octubre de 1980, la junta había firmado un "documento privado" con una compañía conocida como "Rumy Ltda" para la explotación de piedras semipreciosas en la región de La Gaiba, en la frontera con Brasil.[71] Según las condiciones de este contrato confidencial, los tres miembros de la junta -García Meza, Bernal y Terrazas- recibirían el cincuenta por ciento de todas las ventas.[72] Tal trato era por supuesto ilegal en un sinnúmero de aspectos y enfureció de manera especial a elementos del cuerpo de oficiales, porque la tierra objeto de prospecciones pertenecía a COFADENA. Se emitió una serie de fríos desmentidos, pero la información de El Deber era demasiado precisa para que los generales se libraran de una reacción violenta; el incidente dio origen a una broma popular transformando el antiguo catecismo inca de "*Ama kella, Ama llulla, Ama sua*" (no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón) en "Ama coca, Ama tista, Ama iami".

El líder de la siguiente rebelión contra el régimen, teniente coronel Emilio Lanza, comandante del CITE, utilizó el tema de La Gaiba. Cinco días después de publicarse el contrato, Lanza estalló en cólera al salir de una reunión de oficiales mayores de la guarnición de Cochabamba, donde había demandado acciones contra García Meza, y dirigió sus tropas hacia la ciudad. Hubo una crisis momentánea, pero el absolutamente leal coronel Turdera, que estaba al mando de la Séptima División, pudo aplastar al CITE y obligar a Lanza a esconderse. Empero, en Santa Cruz las unidades de la Octava División impi-

68 El detallado relato de Velarde aparece en Crisol, N° 21, 18 de abril de 1983. En una entrevista anterior, Prado evitó hablar sobre el asunto y se refirió principalmente al papel del ejército en la consolidación de la democracia. Ibid., N° 19, 10 de marzo de 1983.
69 Seiser, *op. cit.*, pp. 257-258.

70 *Presencia*, (La Paz), 22 de septiembre de 1980, 24 de junio de 1981.
71 *Aquí*, julio de 1981.
72 *El Deber*, (Santa Cruz), 6 de mayo de 1981.

dieron al SES detener a Banzer y aunque Lanza había violado las reglas elementales del golpismo al proceder a la rebelión sin nada que se pareciera a una conspiración previa, estaba claro que las cosas estaban llegando a un punto crítico. Al día siguiente, Natusch fue arrestado y exiliado al Perú y Banzer se fue precipitadamente a Buenos Aires. Al mismo tiempo, el MIR, juzgando que el momento era propicio para una iniciativa política importante, rompió definitivamente con su viejo antimilitarismo al convocar a un movimiento de "convergencia nacional" que agrupara en su seno tanto a militares como civiles y se dedicara a la exclusiva tarea de derrotar a García Meza, con la grave insinuación de que se lo haría a través de un golpe de Estado.[73] Esta propuesta causó indignación entre la izquierda en general y la UDP en particular, y Siles se unió al PCB en expresar su incredulidad.[74] Con todo, Jaime Paz Zamora y sus colaboradores defendieron resueltamente su postura, arguyendo que lo que ocurría no era una lucha destructiva sin tregua entre gorilas sino una transformación completa de la mentalidad militar como resultado de las últimas experiencias y que dicha mentalidad proporcionaba las bases para una colaboración duradera con las fuerzas populares.[75]

La cúpula del MIR se había apartado muchísimo de sus creencias básicas de 1971 y esto habría de causar bastante descontento en sus bases, formadas por miembros demasiado jóvenes para apreciar los graves efectos que tendría una década de oposición en una generación de radicales de clase media altamente educada, que se consideraba el nuevo MNR y que estaba al borde de la desesperación porque se le cerraban oportunidades para demostrarlo. Si bien la propuesta del MIR representaba un viraje táctico significativo por parte de la corriente social demócrata, tuvo poca o ninguna influencia sobre la actividad de la esfera militar que ahora empezaba a avanzar absolutamente sin control. Exactamente quince días después de su abortado levantamiento, el exaltado Lanza, que había estado esquivando al SES y a la sección de inteligencia de su propia división, logró ingresar a los cuarteles del CITE y persuadir a sus colegas de intentar otro alzamiento. Una vez más, los soldados paracaidistas sitiaron la ciudad y nuevamente fueron reducidos en el curso de horas, pero en esta ocasión Lanza fue capturado y exiliado sin demora. La segunda insurrección evidentemente fue una acción lunática, pero obligó a García Meza a ce-

73 *Bolivia Libre*, N° 54, mayo de 1981.
74 *Compañero*, (La Paz), junio de 1981. *El Día*, 20 de junio de 1981.
75 La prolongada discusión entre Paz Zamora y un Gregorio Selser muy escéptico respecto a este tema fue publicada en *El Día*, 31 de mayo, 7 de junio, 14 de junio de 1981.

der terrenos decisivos a oficiales que no formaban parte de su camarilla: eran opositores de Arce Gómez y buscaban un cambio muy grande en la política interna y externa. Al día siguiente de la segunda rebelión de Lanza, el 26 de mayo, el general Humberto Cayoja Riart y el coronel Lucio Áñez Rivera, un partidario de Natusch y aliado de los "Kamchupampas", fueron posesionados como comandante y jefe de estado mayor del Ejército, respectivamente. Bernal, que ahora alimentaba sus propias ambiciones, y aprovechando la ausencia de Arce Gómez para distanciarse de García Meza, se las arregló para retener el control de la FAB; pero el 28 de mayo la naval demandó la destitución del presidente y el 29 hizo renunciar a Terrazas para reemplazarlo por el capitán Oscar Pammo.

La facción Cayoja-Áñez no contemplaba formalidades; en el mismo momento en que Banzer responsabilizaba únicamente a García Meza por La Garba, el nuevo alto mando realizaba un cónclave para discutir el tema de la presidencia, la cual requería formalmente ratificación institucional antes del Día de la Independencia, el 6 de agosto. El resultado de esta reunión, el 5 de junio, fue de catorce votos a favor de la renuncia de García Meza, dos en contra y dos abstenciones. Al presidente se le anunció formalmente que se retirase dejando que el alto mando sea quien designara a su sucesor.[76] Se había logrado una apertura importante, pero no era del todo irreversible ya que García Meza todavía tenía el apoyo de un poderoso grupo de jefes que no estaban en el alto mando, de los clanes de la cocaína y del aparato paramilitar. Las cosas se agravaron más cuando el FMI declaró, el 16 de junio, que no iniciaría negociaciones hasta que quede resuelto el tema de la sucesión; el Departamento de Estado adoptó la misma posición. El 21 de junio, Áñez y un grupo de oficiales de estado mayor hicieron una visita supuestamente rutinaria a Panamá por invitación de Torrijos, pero se anticipó que iban a comunicarse con el cuartel general del US Southern Command ubicado en la zona del Canal. Dado que por entonces Paz Zamora vivía en Ciudad de Panamá, se rumoreaba que la propuesta del MIR finalmente había atraído la atención de los militares y que las discusiones acerca de una alianza estaban en marcha. Esto fue enfáticamente negado por ambas partes y, puesto que Paz Zamora abandonó rápidamente el país, parece más probable que Áñez fuera ultimar detalles con el Pentágono. En cualquier caso, a su retorno a La Paz, el jefe de estado mayor confirmó que los militares presidirían "...un acuerdo nacional con la participación de trabajadores, empresarios y organizaciones políticas que no reciban

76 *Hoy*, (La Paz), 6 de junio de 1981.

financiamiento foráneo..." y también abogó por "...una democracia real... desechemos a los líderes que piensan como hace treinta años. Sigamos a aquellos que viven en la realidad de 1981 y piensan en el siglo que se avecina".[77] Dos días más tarde, el 27 de junio, Áñez y Cayoja intentaron adelantarse al contraataque que preparaba García Meza y se lanzaron en un golpe. Una vez que los tanques de Doria Medina habían ingresado a la ciudad, parecía que el golpe hubiera prosperado, pero al cabo de una hora de incertidumbre, la mayor parte de las unidades proponían la retirada y sus comandantes –Doria Medina, Alberto Gribowsky y Faustino Rico Toro– decidieron a último momento reconfirmar su respaldo al presidente. Esta excepcional marcha atrás, contraria a toda lógica política, se explicó posteriormente con la publicación de una carta escrita por García Meza al nuevo ministro del Interior, general Celso Torrelio, pidiéndole desembolsar 2.180.000 dólares para 26 oficiales como "gratificación por su lealtad". Doria Medina y Gribowsky recibirían cien mil dólares cada uno; al más peligroso, Rico Toro, se le asignaron doscientos mil dólares.[78] Inicialmente, Cayoja y Áñez iban a ser acusados de traición ante una corte marcial; pero ante las protestas de las guarniciones, los dos militares fueron enviados al exilio junto con sus cómplices del EMG, Mario Oxa, Rolando Saravia y Simón Sejas. Otra vez había fracasado el intento de sacar a García Meza, esta vez mediante una lluvia de dólares. La supervivencia del presidente conllevó la expulsión de casi todos los aliados más poderosos de Banzer y Natusch al igual que de los "Karachipampas"; y aunque tales figuras podían "detonar" contra el régimen

77 *Presencia*, (La Paz), 26 de junio de 1981.

78 Tengo en mi poder una fotocopia de este documento, pero la calidad de la misma es, lamentablemente, demasiado deficiente para reproducirla aquí. La carta tiene fecha del 1° de junio, tres semanas antes del levantamiento; pero es posible que el desembolso de tales fondos tomara algún tiempo y probablemente se haya hecho de una manera oportuna una vez que el golpe estaba en marcha. La carta menciona a un oficial –coronel Tito Justiniano– dos veces, lo que sugiere que no había pasado por los canales burocráticos normales de palacio. Además de Rico Toro y Rodrigo Lea Plaza que habrían de recibir doscientos mil dólares, los nombres de los oficiales que habrían de recibir cien mil dólares cada uno son: general Carlos Tardieu; coroneles Tito Justiniano, Alberto Grybowski, Arturo Doria Medina, Jorge Moreira, Luis Cordeiro, Rómulo Mercado, Luis Kramnoto, José Quirós, Rolando Arrabe, José Miguel Padilla, Óscar Angulo, Guido Vildoso, y capitán Luis Cossío. Por otra parte, los coroneles Arnoldo Pinto, Raúl González, Yamil Tapia, Walter Selame, Moisés Chinqui y Javier Rodríguez habrían de recibir cincuenta mil dólares cada uno, junto con treinta mil para el capitán Roberto Nielsen Reyes. Posteriormente, algunos oficiales han negado haber recibido dinero alguno.

y sus colegas renegados del exilio, el comando de las FF AA ahora era controlado por hombres que no tenían más alternativa clara que quedarse con García Meza hasta el final.

El 10 de julio, el fortificado presidente intentaba consolidar su posición celebrando una concentración de masas en La Paz. Éste era un acontecimiento típico al que asistían unos diez mil empleados públicos "invitados" por sus superiores para aparecer durante las horas de trabajo, grupos de campesinos "nacionalistas" y un grupo lumpen marginal formado por los agentes del SES, que habiendo escuchado que ésta era una oportunidad de prórroga tanto para ellos como para García Meza, dirigió consignas como "Quédate", "Ahora o nunca" y "Decídete". Algunos campesinos incluso amenazaron con bloquear caminos hasta que el presidente sea ratificado. Pasivo y sonriente, García Meza desistió de dar un discurso largo, declarando: "Bueno, como ustedes ya lo han decidido, me quedaré nomás".[79] Esta atractiva pieza de repertorio interpretada por tal "cocodrilo" no engañó a nadie. El propio García Meza anunció que el país estaba en "estado de guerra civil", enfrentó otras 24 horas de huelga en Santa Cruz, otra en Huanuni pidiendo la restitución de los derechos sindicales y CONAL le advirtió que no tenía poderes para reformar la Constitución ni establecer las bases de una nueva, y que por lo tanto se declaraba redundante. Habiendo ya utilizado sus poderes con la reforma agraria para regalar a su esposa 6.592 hectáreas de tierra de primera clase en Santa Cruz, el presidente tomó la conocida medida de firmar un decreto inédito por el cual se incrementaba la pensión de los expresidentes a cincuenta mil pesos bolivianos (dos mil dólares mensuales) de por vida.[80]

Al amanecer del 27 de julio, la población paceña despertó con el estrépito de un escuadrón del GAC que subía ruidosamente del valle de Calacoto y Obrajes hacia la ciudad ametrallando los cuarteles y la residencia presidencial de San Jorge. Todo parecía indicar que ésta sería la acción final realizada en serio. Pero se trataba todavía de una fanfarronada más, las municiones estaban vacías y la intención era intimidar y confundir. Posteriormente, el alto mando de la fuerza aérea declaró que se trataba de un ejercicio rutinario, aunque tales maniobras siempre son anunciadas con anterioridad. Como si aún hubiese sido posible, la tensión y confusión aumentaron aun más. Era como si Bolivia hu-

79 *Presencia*, (La Paz), 11 de julio de 1981.

80 Resolución Suprema 195154, 14 de mayo de 1981, *Presencia*, (La Paz), 15 de septiembre de 1981.

biera perdido toda apariencia de gobierno; el aparato real del Estado se reducía al SES que patrullaba las calles, en tanto que la economía paulatinamente se iba deteniendo y las FF AA se partían en pedazos.

La guerra de nervios finalmente estalló el 3 de agosto, cuando los Rangers y la Octava División tomaron el control de la ciudad de Santa Cruz sin resistencia, de manera que sugería una cuidadosa planificación con un repugnante apoyo local. A las siete y media de la mañana, las emisoras de la ciudad anunciaron que los generales Natusch y Áñez eran los líderes del "Movimiento de Dignidad Nacional", el mismo que demandaba la destitución inmediata de García Meza, la restitución de los derechos democráticos y una auténtica campaña en contra del tráfico de cocaína, la reincorporación de todos los oficiales expulsados desde julio de 1980 y la elección por los militares de un nuevo presidente, en espera de nuevas elecciones generales. En el curso de horas, la insurrección recibió el apoyo de las principales guarniciones de los departamentos del oriente, al igual que de las de Potosí y Tarija. La base naval en Tiquina también respaldó el alzamiento, en tanto que una unidad de la fuerza naval desconectó temporalmente la central eléctrica de la fiel Cochabamba. Los expresidentes Luis Adolfo Siles y Hugo Banzer salieron al aire para apoyar a los rebeldes, el MIR también brindó su respaldo, pero fue menos abierto y también negado por los dirigentes rebeldes. Un ministro de la cúpula de la COB, Gonzalo Guzmán, emitió una convocatoria a huelga que implícitamente apoyaba el golpe; empero, ésta fue reemplazada en breve espacio de tiempo por un nuevo documento respaldado por todos los dirigentes sindicales, en el que se dejaba claro que la convocatoria a una huelga general era independiente de toda facción militar y estaba destinada a lograr las libertades fundamentales; la huelga habría de ser indefinida. El día culminó con la clarificación de las líneas de batalla. El 4, las principales minas dejaron de trabajar y las fábricas más importantes siguieron su ejemplo. Se envió una delegación de oficiales de rango a Santa Cruz para negociar, pero no se llegó a ningún acuerdo. Más tarde, se ordenó que varios aviones llenos de tropas realizaran ataques sorpresivos contra los rebeldes, pero éstos simplemente cambiaron de lado al aterrizar. Al mediodía se informó a García Meza que seis de las nueve principales guarniciones del país exigían su renuncia; a las siete de la tarde se entregó el poder a una junta, ahora integrada por Bernal, Pammo y Torrelio, el nuevo comandante del Ejército. Las últimas palabras de García Meza fueron: "...el general García Meza no es cobarde y eso lo saben todos; pero por encima del orgullo, por encima de la vanidad está la Patria; es por esas circunstancias que he decidido entregar la presidencia a la junta de comandantes...".[81]

El desalojo final de García Meza fue un logro importante pero no dejó satisfechos a los rebeldes. Querían una alineación completamente nueva en los altos rangos y estaban reuniendo una poderosa fuerza de unos cuatro mil hombres para imponerla. Por otra parte, la destitución del presidente aplacaba a muchos comandantes de unidad neutrales que estaban profundamente concentrados en la preparación de un conflicto directo, que estaba más avanzado que en ningún otro momento desde 1952. Áñez y Natusch, más preparados que antes, se mantuvieron implacables, mientras que el SES y los militares de línea dura se negaron a permitir que los vacilantes comandantes retrocedieran. Durante los días siguientes, la huelga general prosperó, se cortó el abastecimiento de carburantes a La Paz y los productos alimenticios de los mercados y tiendas de la ciudad se acabaron. Las FF AA bolivianas se habían lanzado hacia un punto muerto, dos ejércitos se enfrentaron entre sí, cada uno con su propia línea de mando, exigencias de poder y fuentes de apoyo político. El movimiento era mínimo y un silencio espectral ocupaba las calles de La Paz; no había insurrección popular alguna en perspectiva, pero las masas estaban a la espera.

El impasse había sido quebrado no por la fuerza de las armas, sino por los buenos oficios de la Iglesia, antes aliada de los militares y única institución nacional, excluyendo a la COB, que pudo mantener cierto grado de unidad y organización durante el año anterior. El 6, monseñor Genaro Pratta se empeñó en la tarea de persuadir a ambos frentes de actuar fraternalmente. Sin embargo, el colapso que sobrevino finalmente de la rebelión del 5 no se debió tanto a la diplomacia eclesiástica como al hecho de que, una vez que Natusch aceptó participar en conversaciones en La Paz, éste abandonó su causa casi de inmediato y sin otra razón aparente que la decisión de la junta de incorporar a todos aquellos que previamente habían perdido sus cargos. Abundaron rumores sobre otra oferta lucrativa; Áñez denunció a su colega y rehusó ratificar el acuerdo, pero el anuncio de Natusch de que se había restablecido la "cadena natural de comando" privó a los rebeldes de viento para sus veleros y después de nueve días cedieron reacientemente. El rebelde tránsfuga declaró que se había retirado del Ejército y replegado a su hacienda; la fuerza cruceña se desmanteló en espera de nuevos nombramientos y se confirmó a la junta en el gobierno; el torpe

81. *Presencia*, (La Paz), 5 de agosto de 1981.

general Torrelio se tropezó y cayó al suelo al ingresar en la catedral para participar del tedéum celebratorio.

La designación de la junta no resolvió nada. Ni Washington ni el FMI la reconocerían con el argumento de que no representaba ningún cambio con relación al anterior régimen y que no estaba en condiciones de conformar un gobierno estable. García Meza no salió de la casa presidencial afirmando que no podría encontrar un alojamiento alternativo adecuado. Arce Gómez y Rico Toro amenazaron a los comandantes de la derecha, los rebeldes cruceños sugirieron instigando por un cambio y Banzer se negaba a cooperar. El asesinato de un dirigente sindical del PCB en Siglo XX por el SES provocó una huelga de cinco días que pudo continuar su curso y contribuyó a aumentar la confianza del movimiento obrero. El único acto gubernamental palpable que realizaron los miembros de la junta fue su declaración de que cada uno de ellos era presidente tanto individual como colectivamente; una proclamación que parecía tener más relación con los planes de una reconsiderada jubilación que con cualquier dictado constitucional refinado. El haber pagado la retirada de Natusch trajo poco alivio. El 29 de agosto, tres semanas después de que la junta asumiera el poder, la mayor parte de los miembros militares de CONAL emitieron una declaración pidiendo un solo presidente y luego renunciaron a sus cargos. Esta demanda fue reiterada por las guarniciones que ahora comprendían que el reconocimiento de EE UU era esencial para resolver la prolongada crisis. Una vez más debía enfrentarse el tema de la presidencia, pero después de los traumas de principios de mes hubo un visible esfuerzo por actuar con celeridad. En esta ocasión, la rivalidad se manifestó en exigencias de servicios; Bernal, que hacía grandes esfuerzos por la FAB y por el mismo, luego, cuando tal opción fue vetada por el ejército, propuso al ya retirado Julio Sanjinés Goitia por ser una figura respetable con fuertes vínculos con EE UU. Empero, el clan de García Meza puso todo su peso a favor de Torrelio, el menos capaz del trío que gobernaba el país; pero, a diferencia de sus colegas, éste no estaba conectado con ningún escándalo importante y habiendo sido promocionado dos veces en el espacio de un año, era el más obligado con el viejo régimen por su recientemente creada situación.

El gobierno de Torrelio no fue muy diferente de su personalidad; quiso ser una cosa pero constantemente se vio obligado a ser otra. A lo largo de sus diez meses de existencia, las principales figuras de la administración provenían abrumadoramente del grupo de partidarios de García Meza, aunque cuando Banzer ofreció un mesurado apoyo, la calidad –si no la política– de su personal de rango mejoró un poco. En cierto sentido, el régimen era la menor injuria

que los autores del golpe de 1980 podían infligir para proteger a sus flancos en retirada, pero aun así era resueltamente continuista. García Meza y Arce Gómez procuraron pasar desapercibidos, siendo reemplazados por Rico Toro y Leo Plaza, de quienes se decía que con el nuevo ministro del Interior, coronel Rómulo Mercado, eran los líderes de una oscura logia militar conocida como "Los Águilas Negras". El SES fue formalmente abolido, pero en la práctica sólo cambió de nombre transformándose en la Dirección de Inteligencia del Estado (DIE). Como hemos visto por la experiencia de Filemón Escóbar, no hubo un refinamiento notable en sus actividades. Es más, dado que el conflicto militar abierto ya había llegado tan lejos como era posible, sin contemplar la ruptura total de la institución, el papel de la DIE en el control de la corriente institucionalista cobró mayor importancia. En octubre secuestró a la hija de Áñez, arrestó a Oxa y atentó contra la vida del general Águila Terán; en febrero de 1982, los domicilios de Áñez y Padilla –quienes habían asumido el papel de portavoces de los militares de rango que pedían un retorno a la sobriedad y a los cuarteles– sufrieron graves daños por explosiones y bombas; y todavía en marzo, cuando el gobierno ya había declarado que se celebrarían elecciones y luego las adelantó de 1984 a 1983, redadas de los agentes de la DIE obligaron a los generales Terrazas y Padilla a esconderse. Tales actividades constituían una permanente advertencia de que, independientemente de lo buenas que fueran las intenciones del gobierno, el aparato de Arce Gómez seguía intacto.

La administración de Torrelio, a pesar de haber sido lo menos injuriante que los partidarios de García Meza pudieron, se hizo profundamente repugnante para la vasta mayoría de la población. No obstante, era políticamente imposible para el nuevo gobierno evitar cierto gesto hacia una apertura. Mientras sus líderes militares se mostraban profundamente suspicaces con esto y se aferraban más y más al atrincheramiento, los miembros de ADN y del MNR que participaban en el gabinete, percibiendo que la debilidad del régimen yacía en su inmovilidad, instaron a una acelerada tregua con Washington. Por lo tanto, el gobierno encontró aceptable describirse a sí mismo como transicional. Aclarado esto, tanto EE UU como los principales Estados europeos, conscientes de que prolongar el aislamiento sería sumamente peligroso, le otorgaron finalmente su reconocimiento. Un nuevo embajador británico presentó sus credenciales a principios de octubre, seguido un mes después por Edwin Corr, un especialista en operativos de control de drogas sacado de la embajada de Lima. Esto brindó al régimen un mínimo de estabilidad, pero también posibilitó que grupos como el de la COB expresaran más abiertamente sus demandas de desmilitarización.

En cada fase, el gobierno de Torrelio tuvo que ceder terreno. Su negativa a la reforma y a otorgar aunque sea sólo una amnistía limitada, el mantenimiento de tropas en las minas y la estricta regulación del toque de queda inicialmente se consideraban fuera del campo de la negociación. El efecto de esto fue un desplazamiento del eje del conflicto fuera de la esfera militar, nuevamente a enfrentamientos más comunes con la clase obrera, la cual entre noviembre de 1981 y febrero de 1982 fracturó la política laboral introducida en julio de 1980 con una serie de huelgas y movilizaciones desiguales pero exitosas. Huanuni tuvo el papel de vanguardia de estos movimientos al ingresar en huelga el 12 de noviembre demandando el derecho a sindicatos independientes, el aumento de salarios y la amnistía. Después de varios días de incertidumbre, el régimen decidió adoptar la línea dura y ordenó la ocupación del campamento el 18 de ese mes. Con esto sólo provocó paros de solidaridad en las otras minas, así como una huelga de hambre de mujeres en La Paz. Confrontado con un escenario muy similar al que había llevado a la caída de Banzer, el 24, el gobierno optó por negociar. Empero, aun así no pudo superar sus instintos básicos y hasta el 12 de diciembre no se había logrado ningún acuerdo en ninguno de los puntos de discusión. El 17, Huanuni retornó a la huelga y ésta se extendió nuevamente a todo el sector fabril. A esas alturas ya habían más de mil personas en huelga de hambre. Dos días más tarde, Torrelio cedió, aceptando reconocer los sindicatos independientes de planta en el término de tres meses y prometiendo legalizar la COB en el curso de un año. A estas concesiones se opusieron enérgicamente los militares de línea dura, pero al haber logrado vetar la amnistía, dejaron a Torrelio en el mando por más tiempo.

El pensativo general también tuvo que hacer frente a la crisis económica, ya que él mismo había fijado un plazo de dos años a su gobierno y evidentemente algo debía hacerse. Después de dieciocho meses de boicot del FMI, de incontrolado despilfarro militar y de una administración financiera corrupta e incompetente, la crisis de la deuda externa había alcanzado unas proporciones sin precedente. A fines de 1981, el Banco Central tenía apenas un millón de dólares de reservas disponibles en sus bóvedas. Además, durante el año anterior, el precio del estaño había bajado en más de dieciocho por ciento y el déficit de la COMIBOL se mantuvo en 313,5 millones de dólares. Técnicamente, la economía boliviana estaba en bancarrota y en la práctica su cuenta corriente se mantenía marginalmente a flote por los ingresos de la cocaína; pero la economía legal había pasado de su anterior situación ya peligrosa a un proceso de contracción. En 1980, el crecimiento global fue de 0,9 por ciento comparado al de 1979, que fue de 2,0 por ciento; esta cifra representaba una reducción del ingreso per cápita del PIB de 1,8 por ciento.[82] Atemorizado por las huelgas prenavideñas, el régimen decidió hacer las cosas gradualmente, reduciendo primero los subsidios y reajustando precios e impuestos (5 de febrero), para después proceder a liberar el tipo de cambio fijo del dólar (23 de marzo) de 44 pesos bolivianos por dólar, estableciendo un sistema de flotación que, creía, permitiría llegar a su "nivel natural".[83] No hubo un simultáneo congelamiento de salarios; pero esto resultó teórico, pues una vez autorizado oficialmente el libre mercado (ya había un "mercado paralelo" centralizado en la avenida Camacho de La Paz), la inflación se elevó desmesuradamente. En seis meses, el dólar llegó a cotizarse en cuatrocientos pesos bolivianos, la especulación era común, los artículos de primera necesidad escasos y, según los bancos más importantes, la inflación estaba bastante por encima del trescientos por ciento. En ambas etapas de este trastorno de la economía, la COB lanzó huelgas de 48 horas que recibieron amplio respaldo nacional. Ninguna tuvo impacto en la política gubernamental, pero las dos confirmaban y alentaban una reorganización sindical, al mismo tiempo que expresaban la fuerte reacción popular ante el estado de la economía.

A fines de marzo, en Cochabamba seis manifestantes sindicalistas fueron muertos a tiros, en una dura advertencia de los riesgos que tal actitud conllevaba; pero el régimen tuvo que permitir una marcha el 1° de mayo, a la cual asistieron cuarenta mil personas; esto constituyó una importante señal de la recuperación de la postura de la COB, aunque los militares no pudieron llegar a reconocerlo. Los líderes sindicales y políticos comenzaron a regresar al país, pero realizaban sus actividades con cautela. Se restauró la autonomía en las universidades después de una mordaz lucha estudiantil, pero nuevamente los grupos paramilitares se mostraron vigilantes y muchas veces intervenían en los asuntos universitarios. Ya en mayo, Torrelio fracasó en su intento de lograr autonización del alto mando para decretar una amnistía; pero en el curso del mes siguiente aumentó la presión de abajo, a tal extremo que tuvo que concederse. La renuncia del director del Banco Central –debido a que estaba siendo obligado a pagar a García Meza cincuenta mil dólares, al cambio de 25 pesos bolivianos por dólar por gastos de un viaje a Taiwán , el continuo apremio de Washington, molestos incidentes –como la aparición de un aviso en Presencia de la compañía, hasta entonces desconocida, "Para mí Ltda." con la lista

82 *Bolivia. Información y Análisis*. N° 8, junio de 1981; N° 9, julio de 1981.
83 Para detalles ver Marcelo Calderón Saravia ed., *El paquete económico del gobierno Torrelio*.

de 163 "deudores" que debían desembolsar las sumas adeudadas en su oficina central de Buenos Aires– lograron convencer al alto mando de que tendría que acelerar el paso mientras aún poseyera algún control sobre él.

Esto provocó la confrontación final y decisiva con el bloque garciamezista. A mediados de julio, Rico Toro hizo una abierta tentativa de reemplazar a Torrelio, declarando que el presidente ya no gozaba de la confianza de las FF AA, en tanto que él sí. Esta jugada de último recurso fue hecha con extraordinaria osadía y desencadenó otra crisis aguda entre los militares; pero llegó demasiado tarde para la derecha delincuente y para el demasiado ambicioso Rico Toro. Los generales, de acuerdo con que evidentemente Torrelio no tenía más que ofrecer, decidieron reemplazarlo y, al mismo tiempo, marginar a Rico Toro. Eligieron al que era jefe de operaciones en el momento del golpe, general Guido Vildoso. Aunque no mucho más desligado del régimen anterior que Torrelio, Vildoso era un oficial afable y sonriente que no necesitaba mostrar sus credenciales conservadoras –como se evidenció en el hecho de que la primera visita que recibió en el Palacio Quemado fue de Klaus Barbie– pero tenía la capacidad y temperamento para supervisar la conclusión de la apertura.

Su proyecto al asumir el poder era el de dirigir el proceso de retirada hasta las elecciones de mediados de 1983, pero tal objetivo se hizo insostenible ante una renovada fase de la movilización popular que ahora cobraba la forma de una lucha por la inmediata restitución del gobierno democrático. Todos los partidos políticos, desde la FSB hasta el PS-1, estaban de acuerdo en la necesidad de retornar al parlamentarismo, pero existían graves diferencias de opinión en torno al ritmo y a la forma que este proceso debía tomar. La derecha, percibiendo la necesidad de aceptar la administración de la UDP así como las ventajas de su mayoría congresal y de una rápida solución, argüía a favor de la simple asunción al poder de la legislatura elegida en junio de 1980. El MIR también apoyaba esta propuesta y declaró que la celeridad era esencial y que la UDP no podía menos que asumir el mandato. Sin embargo, el resto de la UDP seguía siendo suspicaz tanto de las maquinaciones de la derecha como de la buena voluntad del régimen de Vildoso y optó por respaldar la realización de nuevos comicios para más adelante en 1982, en los que esperaba que al frente obtuviera una clara mayoría parlamentaria, así como el poder presidencial. Ésta fue también la política de la COB, derivada en gran parte de las discusiones del XIX Congreso de la FSTMB realizado en Huanuni, donde el PCB hizo ostentación de su tradicional destreza organizativa, pero una vez más antagonizó con los delegados independientes por su comportamiento dominante; sin embargo, se abstuvo de seguir una línea resueltamente proudepista, en parte debido a la experiencia de Telamayu y en parte porque la propia UDP estaba dividida en cuanto a la táctica que debía adoptar.

Finalmente, la impaciencia popular definió el problema a favor de una inmediata entrega del poder al Congreso de 1980. Siles manejó esta situación con gran habilidad táctica. Rodeado de su gente de confianza y con base en Lima, emitía frecuentes comunicados denunciando la falta de buena fe del régimen y persistentemente rechazaba las súplicas que el MIR le hacía para que regrese a La Paz, primero sobre la base de que no contaba con garantías para su seguridad personal y luego, cuando se las ofrecieron, arguyendo que el régimen no podía controlar a las fuerzas paramilitares que no perderían oportunidad de asesinarlo. Este compás de espera pronto pasó a primera plana de las noticias políticas, relegando las frecuentes reuniones del alto mando para decidir el curso de acción que tomaría. Combinada con la gravedad de la situación económica que provocó una cadena de huelgas de transporte y paros no autorizados prácticamente en todos los sectores, la presión por una retirada inmediata de los militares se hizo incontenible. Durante la primera semana de septiembre, los estudiantes bloquearon las calles de la ciudad de La Paz día tras día; miembros aislados de las cuadrillas paramilitares fueron atacados –en una ocasión se estuvo a punto de linchar a uno como a Villarroel–, la policía antidisturbios fue atemorizada para dejar ingresar a un grupo de manifestantes a la plaza Murillo, donde se lanzaron insultos contra las FF AA y se confiscaron y quemaron vehículos militares. El 7 de septiembre, el MIR realizó su propia "marcha contra el hambre", la cual atrajo a una multitud de decenas de miles, algunos de cuyos participantes llegaron incluso a atacar edificios públicos. Una semana después, la COB, ahora persuadida de que la reinstalación del Congreso de 1980 era el único cambio viable, convocó a una marcha masiva para el 17, a la que seguiría una huelga general hasta que el ejército entregara el poder. La marcha fue impresionante, aun considerando la capacidad de movilización de masas de la COB: congregó a cien mil personas en vigorosas protestas que retumbaron en las paredes de la sede de gobierno durante seis horas; expulsó a las cuadrillas paramilitares de las calles y combinó una efusión de ira, reprimida por más de dos años, con clamorosas demandas por un cambio social global. Aduciendo enfermedad, Lechín no habló, y el mayor aplauso fue para Genaro Flores y para Filemón Escóbar, quien era simplemente delegado por Siglo XX pero que, coherente con su postura de que la UDP debía ser gobierno a toda costa para que sus contradicciones salieran a la luz, había presionado más que ningún líder del propio frente por su ingreso al gobierno.

Si alguna duda persistía en las mentes de los generales, la COB y el llamado a la huelga ayudaron a despejarla. Horas más tarde de ese mismo día, se convocó formalmente al Congreso para el 5 de octubre. A las 8:25 de la noche del 5, el Parlamento dispuso la transmisión de mando con fuerza legal, votando abrumadoramente porque Siles y Paz Zamora sean posesionados como presidente y vicepresidente respectivamente. La posesión tuvo lugar el 10 en presencia de una diversidad de dignatarios extranjeros y de la multitud agolpada en la plaza Murillo, que mantenía una barra permanente, profiriendo insultos contra las tropas participantes de la ceremonia; Siles tuvo que implorarles que "sean buenos" con Vildoso quien había conducido el traspaso con desacostumbrada finura, mientras que sus colegas se apresuraban a vaciar sus escritorios –en algunos casos completamente y con buenas razones– y se marchaban a casa. Otro ciclo del proceso iniciado treinta años antes se había cumplido: el hombre que se dirigía a la multitud desde el Palacio Quemado en la tarde del 10 de octubre era el mismo que lo había hecho en la mañana del 11 de abril de 1952. Esto otorgó al acontecimiento una fuerte atmósfera histórica que sus participantes celebraron plenamente; pero la historia ni es rectilínea ni simétrica y su apariencia es tan engañosa como falaz. La democracia había triunfado pero se sabía que tenía pies de arcilla; las FF AA se habían retirado pero seguían intactas; los narcotraficantes, difamados por todos, aunque de manera algo diferente, continuaron realizando su comercio sin trabas; el pueblo celebró la recuperación de sus derechos y libertades, pero ahora necesitaba usarlos para superar su pobreza; EE UU prometió apoyo e incentivo pero estaba ocupado en una campaña general y escalonada en contra de la Unión Soviética en particular y en contra de la izquierda en general, lo cual no permitiría desviación alguna del capitalismo o de una trayectoria al capitalismo rigurosamente administrada. Las celebraciones del final de una era fueron realmente festejos que marcaron el inicio de una nueva fase, de una contienda familiar cuyos términos se hicieron todavía más críticos.

Epílogo

Los primeros seis meses de la administración de Siles trajeron pocas sorpresas. Éstas, en su mayor parte, consistían en limpiar la escoria que se había instalado en el país durante los años anteriores atrayendo mucha atención de Europa, lugar de donde provenían los elementos delincuentes. El día de la transmisión del poder, agentes de la CIA/DEA y la policía secreta italiana dispararon contra un mercenario empleado por Arce Gómez y buscado por delitos de terrorismo en Italia, Pier Luigi Pagliai, y lo hirieron gravemente después de la gran confusión que provocó el arribo de un avión DC-10 de Alitalia, que supuestamente sufrió desperfectos en un motor en su viaje entre La Paz y Santa Cruz. Edwin Corr se plantó en El Alto con los once mil dólares exigidos por las autoridades del aeropuerto para autorizar al avión y a su pasajero mortalmente herido a que abandonaran el país. Unas semanas después, el ministro del Interior, Mario Roncal, puso en escena su propio operativo de seguridad que consistía en arrestar a Barbie por un cargo secundario de deuda y luego, cuando el asunto parecía resuelto, procedió a cumplir con la solicitud de extradición del gobierno de Mitterrand, sacando clandestinamente de Bolivia al prisionero en un vuelo especial del TAM a Cayena, en la Guayana francesa, a donde el antiguo jefe de la Gestapo volaba para ser expuesto a la luz pública. El asunto ocasionó cierta atención periférica para la difícil situación del país, puesto que el interés de los medios de comunicación se concentró en las víctimas originales de Barbie (innegablemente más numerosas) y en su colaboración después de la guerra con el servicio secreto de EE UU. La visita subsiguiente de Siles a París fue ocasión de muchas congratulaciones mutuas,

pero no consiguió gran ayuda económica; una buena proporción de lo que se recibió fue destinada de antemano a completar el hospital militar.

El comando de las FF AA fue asumido por el corpulento Simón Sejas, quien, asesorado por Áñez, Prado, Arsenio González y otros institucionalistas, tomó medidas restringidas pero enérgicas contra la anterior camarilla. García Meza, Arce Gómez y Freddy Quiroga se escurrieron por la frontera hacia la Argentina, donde recibieron asilo político, aunque se les pidió mantenerse fuera de la luz pública. Esto, sin embargo, no evitó que Arce Gómez participara en conferencias de prensa con su habitual candor. Objeto de un atentado, pronto resultó ser una grave vergüenza para sus anfitriones, quienes recibieron tanto de Bolivia como de EE UU el pedido de entregarlo para que enfrentara una multitud de cargos criminales y civiles. Otras figuras –Lea Plaza, Ricó Toro, Salomón– trataron de iniciar cierto tipo de defensa legal, pero fueron rápidamente destituidas, junto con otros treinta oficiales implicados en el tráfico de cocaína. Por otra parte, los operativos anticocaína se debilitaron como antes, pues el gobierno civil no contaba con los recursos financieros ni con la voluntad política para llevar su aguerrido discurso a la acción. Confrontando con la oposición popular a los planes norteamericanos para la eliminación de los cocales, el gobierno le dió muchos rodeos al asunto y no encontró ninguna alternativa.

En el terreno económico, el pedido de la UDP de cien días de sacrificio devengó pocos resultados positivos, aparte de la cancelación de *Dallas*, el costoso melodrama televisivo americano. La administración de Siles confió demasiado en la buena voluntad popular para desperdiciarlo todo con una precipitada devaluación. El MIR, que había heredado el Ministerio clave de finanzas, se apoyó en la habilidad de los talentosos economistas que lo rodeaban para emprender una "desdolarización" de la economía y recuperar las tarifas fijas de cambio. Esto introducía un elemento de orden en la crisis, pero resultaba bastante insuficiente como base de una recuperación duradera; el mercado paralelo del dólar siguió prosperando, la inflación sobrepasó el quinientos por ciento y la especulación y la escasez ritual volvieron a los mercados. Las negociaciones con el FMI fueron dilatadas y nada gratificantes. El estado de la economía del país era peor que en 1956, pero no se podía aplicar los mismos remedios sin el riesgo de destruir todo el experimento democrático.

Las tensiones dentro de la UDP, visibles desde un principio, salieron a la luz en el curso de doce semanas; el MIR dejó el gobierno en enero porque, según apelaba, no se perseguía lo suficientemente a los paramilitares y un "grupo palaciego" del MNRI era el que controlaba a Siles. Otros respondieron que el partido simplemente estaba buscando incrementar el número de sus ministerios,

muchos de los cuales estaban ahora ocupados por independientes que sirvieron en el régimen de Torres. La estrepitosa y poco pensada salida del MIR le hizo perder bastante respaldo público y dejó a Jaime Paz Zamora en la anómala posición de ser vicepresidente de un gobierno que su partido ya no apoyaba y que se ponía del lado de la derecha en el Congreso para impugnar a varios ministros del MNRI. Este mismo partido se dividió en por lo menos tres fracciones identificables, debilitando gravemente la presidencia y privándola de toda posibilidad de pasar su confuso programa a través del Congreso. Asimismo, la posición del PCB, tercer miembro de la UDP, corrió grave peligro cuando en abril de 1983 una huelga del personal administrativo de la COMIBOL empujó a la FSTMB a tomar el control directo del sector minero nacionalizado en contra de los deseos de los ministerios de Minas y del Trabajo, controlados por el PCB. En la prolongada pelea que siguió, el partido se encontró sumamente dividido y muchos militantes sindicales como Simón Reyes tuvieron que tomar posiciones como directores obreros de COMIBOL, nombrados por el sindicato. Esto llevó el tema del control obrero al primer plano del debate político; la COB demandaba que fuese implementado con plenos poderes de veto, en tanto que Siles, también reviviendo las discusiones de la década de 1950, insistía en la paridad entre obreros y la administración. El MIR era reacio a pronunciarse sobre el tema, el MNRI estaba dividido en torno a esto, el PCB estaba teóricamente a favor, pero prácticamente en contra y los militares mantenían silencio. Finalmente, la FSTMB ganó una mayoría en el consejo de la COMIBOL, pero en el momento de escribirlo no estaba tan claro si con ello se proporcionaban las bases para un auténtico control obrero o si simplemente representaba una variedad de cooptación *in extremis*. Paz y Banzer empezaron a intervenir desde las líneas laterales de una manera perturbadoramente conocida. El Congreso y los partidos políticos que en él participaban eran objeto de un creciente escarnio popular y sus excentricidades atraían peligrosamente poco interés desde el punto de vista de mantener el sistema parlamentario. Fuera de las minas, el tema del control obrero gozaba de un amplio apoyo, pero no de un respaldo entusiasta, pese a que la COB ahora demandaba su adopción en toda la economía; la movilización política se mantuvo limitada por la lucha por la supervivencia económica.

Esta lucha fue más dura en el campo, donde los efectos del fenómeno climático conocido como la corriente de "El Niño" acarrearon tormentas e inundaciones muy dañinas en Santa Cruz y una sequía, como no se había experimentado desde hacía un siglo, en el altiplano. Potosí sufrió más las consecuencias de la sequía, pues el agua debía ser transportada en tren y miles de campesinos migraron a La Paz a mendigar; de todos modos, el impacto para la

agricultura de altura fue calamitoso. No sólo se trataba de la destrucción de una cosecha, sino que muchas tierras resultarían incapacitadas de producir por muchos años. Este desastre natural fue un golpe especialmente cruel, tanto para la población como para los proyectos de democracia parlamentaria; pero el estado de sus víctimas y la forma en que el gobierno manejó su difícil situación señaló el hecho de que algunas cosas no habían cambiado en absoluto en treinta años, sea cual fuera la procedencia institucional o la composición política de sus gobernantes.

En el presente trabajo se ha intentado, fundamentalmente, brindar una descripción narrativa de estos treinta años; pero si alguna característica del relato merece una consideración más amplia, no sería tanto el que la revolución de 1952 fue comprensivamente emboscada (primero por el MNR y luego por los militares, condenando al país a un permanente atraso en un proceso de desarrollo combinado y desigual) como que, de todas las revoluciones producidas después de la segunda guerra mundial que no lograron abolir el capitalismo, la de Bolivia mostraba el mayor grado de politización proletaria, dentro de un amplio estilo leninista, y el resurgimiento más consecuente de la movilización de masas. El país sigue siendo el eslabón más débil en la tirante cadena capitalista internacional, tanto por la abyecta pobreza de su pueblo como por las extremas dificultades para contener las reacciones ante esto. Es por esta razón que Bolivia se ha convertido, para ciertos círculos, en prototipo para una fina anarquía política; por lo mismo, para otros, es lugar de enormes expectativas. Nuestro argumento de que ni la administración de la UDP ni ningún gobierno reformista puede resistir la tensión por mucho tiempo, es menos que aventurado, considerando la trayectoria política arriba desarrollada. El temor de que esto conduciría únicamente a la reimposición de un mandato militar brutal no puede descartarse claramente. Pero lo cierto es que otra alternativa –un masivo movimiento político por el socialismo– ha echado raíces excepcionalmente fuertes y sigue siendo una posibilidad vital. En ninguna otra parte de América Latina, quizás del mundo, puede uno percibir tan fácilmente el surgir de ese resultado a partir del proceso de liberación nacional. La segunda revolución boliviana ya ha recibido un poderoso legado de la primera; pero si, al igual que su predecesora, comienza como una lucha solitaria y librada en las alturas del mundo, no quedará ignorada por mucho tiempo.